

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POST-GRADO

**Regulación de la Letra de Cambio en la nueva ley de
Títulos Valores: Innovaciones Destacables**

TESIS

Para optar el Grado de Magíster en Derecho, con Mención en Derecho
Civil y Comercial

AUTOR

Ricardo Arturo Beaumont Callirgos

Lima – Perú

2003

Dedicatoria:

A la Unidad de Post Grado de Derecho de la UNMSM,
Alma Mater de la juridicidad en el Perú,
y a los Doctores
Rolando Castellares Aguilar,
Juan Manuel Echevarría Arellano,
Pedro Flores Polo,
Gonzalo García-Calderón Moreyra,
Hernando Montoya Alberti,
Alonso Morales Acosta,
Oscar Pomar Fonseca,
Jorge Ramírez Díaz, y
Oscar Zegarra Guzmán,
distinguidos Miembros de la
Comisión Redactora de la Ley de Títulos Valores,
quienes me acompañaron con dedicación, esmero y
talento, en esa importante tarea.

Lima, Setiembre del 2003

ESQUEMA GENERAL

Capítulo I Antecedentes Generales

- 1.1 El Código de Comercio de 1902
- 1.2 La Ley 16587
- 1.3 Los usos y costumbres
- 1.4 La Doctrina y la Jurisprudencia
- 1.5 La Ley 27287 y su proceso de elaboración:
 - 1.5.1 La Resolución Ministerial del Sector Justicia con la que se conforma la Comisión Redactora;
 - 1.5.2 El trabajo de la Comisión Redactora: las sub Comisiones de ponencias;
 - 1.5.3 Las tres publicaciones del proyecto en el Diario Oficial “El Peruano”: Los aportes;
 - 1.5.4 El trabajo de la Comisión Revisora del Congreso de la República; y
 - 1.5.5 La aprobación por parte de la Comisión Permanente.

Capítulo II El Sector Formal y el Informal

- 2.1 El denominado sector formal
- 2.2 El sector informal y el Derecho
- 2.3 El Derecho de los informales

Capítulo III La Letra de Cambio

- 3.1 Evolución histórica
- 3.2 Principios jurídicos
- 3.3 Requisitos Formales Esenciales de la LC
- 3.4 Formas de vencimiento de la LC
 - 3.4.1. A la vista;
 - 3.4.2. A cierto plazo desde la aceptación; y
 - 3.4.3. A fecha fija y a cierto plazo desde su giro.

3.5 Formas de giro de la LC

- 3.5.1 A la orden del propio girador;
- 3.5.2 A la orden de un tercero;
- 3.5.3 A cargo de tercera persona;
- 3.5.4 A cargo del propio girador; y
- 3.5.5 Por cuenta de un tercero

3.6 La Aceptación en la Letra de Cambio

3.7 El Pago en las Letras de Cambio

- 3.7.1 Fecha de pago;
- 3.7.2 Pago parcial; y
- 3.7.3 Lugar de pago;

3.8 Libertad formal en cuanto a orden, lugar y modo de anotar los requisitos en la LC.

3.9 Caso de alteración en la LC

3.10 LC emitida en forma incompleta o “en blanco”

3.11 Responsabilidad solidaria en la LC

3.12 Causales de contradicción en las acciones cambiarias

3.13 Enriquecimiento sin causa

3.14 Nulidad del título valor por intereses usurarios

3.15 LC “en garantía”

3.16 El endoso en la LC:

- 3.16.1 Requisitos;
- 3.16.2 Incondicionalidad y endoso parcial;
- 3.16.3 Endoso en blanco y al portador;
- 3.16.4 Cláusula No Negociable;
- 3.16.5 Endoso posterior al vencimiento;
- 3.16.6 Legitimidad en la tenencia y obligación de quien paga.

3.17 Clases de Endoso:

- 3.17.1 Endoso en propiedad;
- 3.17.2 Endoso en fideicomiso;
- 3.17.3 Endoso en procuración o cobranza; y
- 3.17.4 Endoso en garantía

- 3.18 Cláusulas especiales en la LC:
 - 3.18.1 Cláusula de prórroga automática
 - 3.18.2 Cláusula de pago en moneda extranjera
 - 3.18.3 Cláusula sobre pago de intereses y reajustes
 - 3.18.4 Cláusula de liberación del protesto
 - 3.18.5 Cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria
 - 3.18.6 Cláusula de venta extrajudicial
 - 3.18.7 Cláusula de sometimiento a leyes y tribunales
- 3.19 Garantías personales (Aval y Fianza) y Garantías Reales en la LC
- 3.20 El protesto en la LC
- 3.21 La Aceptación y el Pago por intervención en la LC
- 3.22 Las acciones cambiaria en la LC

Capítulo IV La prácticamente única forma de giro utilizada en la letra de cambio: *a la orden del propio girador y a cargo de tercera persona*: art. 122 incs. a) y b) de la Ley 27287.

Conclusiones

Bibliografía

Índice

MARCO JURÍDICO

- El Código de Comercio de 1902
- La Ley 16587 de Junio de 1967
- La Nueva Ley de Títulos Valores 27287
- La Ley del Notariado
- La Ley de Bancos 26702
- Directivas de la SBS
- Las Cámaras de Comercio Provinciales: Estatutos y Reglamento
- La Cámara de Comercio de Lima y su Registro Nacional de Protestos y Moras: Estatutos y Reglamentos
- Doctrina Nacional en Derecho Cambiario
- Jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia
- Doctrina del Derecho Comparado: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méjico y España
- La Escuela Alemana
- La Escuela Italiana

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES

1.1. EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1902

Es por todos conocido que nuestro vetusto y aun vigente Código de Comercio de 1902 fue verdadera copia del Código de Comercio Español de 1885, excepto en dos cosas, una, en lo tocante a la Letra de Cambio que remedó del código italiano pues traía una regulación más moderna, la de la escuela germana, apartada del *cambio trayecticio* y del giro de letras de cambio de una plaza comercial a otra plaza comercial; y, dos, en lo referente al Contrato de Cuenta Corriente Mercantil y a la temática de los Rematadores y Martilleros, que aprovechó para copiarle al Código Argentino.

Cuando el 15 de Febrero de 1902 se promulga el Código de Comercio, aun en nuestra patria no existían leyes numeradas, lo que viene a ocurrir recién el 20 de Octubre de 1904 cuando el Presidente don José Pardo promulga la ley N° 1 disponiendo que a partir de entonces todas las leyes que se dicten y pongan en vigor deben llevar, secuencialmente, un orden numérico cronológico. En nuestra historia del S XX, a pesar de los nada infrecuentes cambios políticos entre regímenes más o menos democráticos y golpes militares de estado, el respeto a la “numeración” secuencial de leyes se ha producido, con una sola excepción, la ocurrida en el golpe de estado civil de don Augusto B. Leguía, 1919, justamente contra el segundo gobierno de don José Pardo, quien había sido elegido en 1916 para gobernar nuestra patria hasta 1920. Don Augusto B. Leguía asumió el mandato con la ley 3085 y el número de la ley promulgada por la Asamblea Constituyente que lo designa en el cargo como Presidente de la Nación lleva la numeración 4000. No tenemos leyes numeradas de 3086 a 3999. Narra la historia que el presidente Leguía no quiso ser proclamado con Ley 3086; pidió el número 4000 para iniciar

políticamente su historia. En los gobiernos militares, naturalmente, las normas dictadas se han denominado Decretos Leyes, pero han respetado la continuidad numérica.

Nuestro Código de Comercio sufrió un pronto desgajamiento de sus instituciones. Así la ley 2411 denominada de hipoteca naval dispuso la posibilidad de afectar con hipoteca un buque o nave marítima; la ley 2763 creó los almacenes generales de depósito, entidades autorizadas por el Estado para almacenar productos y mercancías en locales especialmente contruidos y dotados de la infraestructura necesaria al efecto, facultadas a expedir certificados de depósito y warrants, título valor este último cuyo endoso produce los efectos jurídicos de prenda, tan importante en el comercio y vida mercantil de nuestros días. La Ley 7159 derogó el régimen bancario del Código y mantuvo su vigor hasta los albores de 1970. La Ley 7566 denominada Procesal de Quiebras modificó el Libro IV del Código de 1902, encargado de la regulación de las Quiebras y de la Suspensión o Cesación de Pagos. La Ley 16123 modificó el régimen de las sociedades mercantiles. Y así, sucesivamente.

En efecto, nuestro vetusto Código de 1902, aun vigente, consta de Cuatro Libros. Hagamos un pequeño comentario.

El Libro Primero, bajo el título De los Comerciantes y del Comercio en General, del cual, apenas, si quedan sus dos o tres primeros artículos en vigor, pues todo lo demás ha sido expresa o tácitamente derogado, caso uno y otro, de las Casas de Comercio, Martilleros, Libros de Contabilidad, el régimen del comercio en la mujer casada, y otros.

El Libro Segundo, de los Contratos Especiales de Comercio, de los cuales sólo quedan cinco, a saber, Contrato de Comisión Mercantil, Transporte, Seguros, Cuenta Corriente Mercantil y Prenda. El 13 de Mayo de este año 2003 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias que de promulgarse, derogaría el Contrato de Prenda. La derogatoria de los otros cuatro fue propuesta por la Comisión Especial encargada de la Reforma del Código de Comercio, entre los años 1997-1998, cuando se presentó el

Proyecto de Ley Marco del Empresariado, lo que jamás prosperó. En Abril del 2002 el Congresista doctor Daniel Estrada Pérez asumió con la Comisión Redactora del Proyecto y con la Cámara de Comercio de Lima, el compromiso de liderar la gestión y el debate para, efectuando los ajustes necesarios, lograr su pronta promulgación. El sensible fallecimiento de este correcto y muy distinguido congresista dejó frustradas las creadas esperanzas de ver una pronta derogación del Código de Comercio de 1902. Tendremos que aguardar otra mejor ocasión política. Conste que si no se deseara la promulgación de una Ley Marco del Empresariado nada obstaría para agregar un solo artículo al Contrato de Mandato que se regula en el art. 1790 del Código Civil, por ejemplo art. 1790-A, precisando cuándo de trata de éste y cuándo de Comisión Mercantil, cuya semejanza jurídica es evidente y cuya diferencia es casi inadvertible. En efecto, citar en el Código de Comercio de 1902 que, para que exista Comisión Mercantil tiene que darse uno de estos dos supuestos: (1) que cuando menos el Comisionista sea comerciante; y (2) que el encargo esté referido a un acto u operación de comercio, resulta ahora en el 2003, cuando menos, absolutamente desfasado. De los Contratos de Transporte terrestre de mercaderías o efectos de comercio y de Seguros se prepararon sendos proyectos a los que habría que efectuar pequeños ajustes y promulgar leyes especiales sobre la materia. Finalmente, en lo relativo al Contrato de Cuenta Corriente Mercantil puede pasar, aprovechando en modernizarlo, al Código Civil, máxime si tomamos en cuenta que la misma compra-venta, permuta, mutuo, depósito y fianza de naturaleza mercantil, se regulan por el mismo Código Civil, nos preguntamos, qué de impropio, extraño o raro será que se agregue cuenta corriente mercantil. Me ha parecido conveniente enviar una propuesta¹ de ajustes al Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias, instrumento que en general lo encuentro satisfactorio.

Encontrándose prácticamente en imprenta la Tesis que ahora se presenta, recibí un oficio de la Cámara de Comercio de

¹ En los Anexos, al final de esta tesis, se adjunta fotocopia de lo siguiente: (1) Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias; (2) Oficio con sugerencias dirigido al Ministro de Economía y Finanzas; y, (3) Artículo aparecido en el Diario Oficial "El Peruano".

Lima suscrito por su presidente, el señor Javier Aída Susuki, y por su Director Institucional, mi dilecto amigo el doctor Pedro Flores Polo, quienes me daban la buena noticia de que el actual presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, señor Alcides Chamorro, había tomado la decisión de liderar al grupo de todos aquellos que abogamos por la pronta derogatoria del vetusto Código de Comercio de 1902 y para tal propósito, estaba acometiendo las siguientes tareas:

- Realizar lo necesario para la puesta en vigor del Proyecto de Ley Marco del Empresariado;
- Lograr, en paralelo, se dicten las tres leyes necesarias, (1) la del Contrato de Seguros, (2) la del Contrato de Transporte de mercaderías por tierra y (3) la de Navegación Marítima. Respecto a esta última, que reemplazaría al Libro III del Código, sobre Comercio Marítimo, también la Comisión Especial de reforma del Código de Comercio alcanzó un muy bien preparado proyecto que trabajó un grupo de profesionales dirigidos por el aun joven profesional Dr. **Humberto PEJOVÉS** bajo la supervisión de dos maestros en la materia, los **Drs. Ricardo VIGIL TOLEDO y Percy URDAY**. No recuerdo si también participó un tercero de igual talla intelectual, el doctor Manuel Quiroga.
- Conseguir que se reacomode en el Código Civil los Contratos de Cuenta Corriente Mercantil y Comisión Mercantil; y
- Ejecutar lo necesario para que se dicte una ley especial sobre Garantías Mobiliarias que termine por derogar el Contrato de Prenda Mercantil. Punto.

El Libro Tercero trata Del Comercio Marítimo. Ya se ha informado, en el acápite anterior, que la Comisión Especial presentó un Proyecto de Ley General de Navegación Marítima. La sola transcripción de sus artículos 635, 636, 674 y 701, nos relevan de mayores comentarios:

“Art. 635.- Si estando de viaje llegare a noticia del capitán que habían aparecido *corsarios* o buques de guerra contra su

pabellón, estará obligado a arribar al puerto neutral mas inmediato (...)"

"Art. 636.- Si se viere atacado por algún *corsario* y después de haber procurado evitar el encuentro y de haber resistido (...)"

Art. 674.- Tampoco devengarán flete las mercaderías que se hubieren perdido por naufragio o varada, ni las que fueren presa de *piratas* o enemigos (...)"

Art. 701.- A petición del fletador podrá rescindirse el contrato de fletamento: 4) Si salido el buque a la mar, arribare al puerto de salida, por riesgo de *piratas*, enemigos o tiempo contrario y .. (...)"

No cabe duda que ahora, cuando las naves que surcan los mares del mundo, cuentan con ayudas de tecnología de última generación, computadoras de alerta para enfrentar los riesgos marítimos, bodegas, carga, estiba, acoderamiento, zarpe, ingreso a bahía y otros, eso de mantener regulación sobre piratas y corsarios, nos da la imagen de un total desajuste entre realidad y norma. En la práctica, el comercio marítimo se regula por Tratados Internacionales, disposiciones de las Conferencias Marítimas y regulaciones de la Organización Mundial del Comercio Marítimo. Se tiene presentado, desde hace cinco o seis años y con los documentos arriba citados, un Proyecto de Ley de Navegación Marítima. Naturalmente, en poco más de cinco años, tienen que haberse producido cambios de distinto orden. Habrá que revisarlo rápidamente para ponerlo a diciembre del 2003 o principios del 2004. Solo falta voluntad política.

El Libro Cuarto, De la Cesación de Pagos y de las Quiebras, fue sustituido inicialmente por la Ley 7566, de la década de los años 30. Recién en los años 90, la Ley 26116 de diciembre de 1992, denominada Ley de Reestructuración Empresarial le modificó totalmente el esquema, acogiendo las nuevas corrientes europeas, en especial de Bélgica, Italia, Inglaterra y Francia. En 1996 se expide el D. Leg. 845 el cual bajo la denominación Ley de Reestructuración Patrimonial no

sólo incorpora como sujeto susceptible de la insolvencia a la persona natural, no considerada por la ley 26116, sino que crea un Procedimiento Preventivo a tal situación. Después de varias normas creadas y promulgadas con fines cuyunturales, en Octubre del 2002 se dicta la Ley 27809 bajo el título Ley General del Sistema Concursal con vocación de mayor permanencia y recogidas las enseñanzas de los prácticamente diez años de vigor desde el cambio, en 1992.

1.2. LA LEY 16587

En Junio de 1967 se promulga la Ley 16587 fruto del esfuerzo de varios distinguidos maestros liderados por el Dr. **Ulises MONTROYA MANFREDI**, a la sazón, también autor de la Ley 16123, Ley de Sociedades Mercantiles, promulgada el año anterior, en mayo de 1966.

Esta importante obra, que cumplió su propósito a satisfacción por tres décadas, las de los 70, 80 y 90, sólo reguló cuatro títulos valores, la Letra de Cambio, el Pagaré, el Vale a la Orden y el Cheque. De estos cuatro, el profesor de la Universidad de San Agustín de Arequipa, **Remigio PINO CARPIO**, sostiene que en realidad no son tales, pues la normatividad del Pagaré es la misma que la del Vale a la Orden; en otras palabras, que se trata de un mismo título valor bajo dos denominaciones Pagaré o Vale a la Orden, y así procura demostrarlo en sus interesantes Comentarios. En todo caso, el debate resulta sólo académico pues en la práctica el Vale a la Orden no existía en el mercado, no se usaba por los Bancos, las Financieras, los comerciantes y los empresarios. Definitivamente, en la Ley 27287 no aparece para nada. Si tuviéramos que señalar algunos defectos en la 16587, que a decir verdad, para su época, era una buena ley, tendríamos que decir cosas como éstas:

- a. No haber previsto la consecuencia de ineficacia del endoso realizado por el primero que utiliza la hoja adherida, en el marco del principio de literalidad, habiendo indicado no obstante, que dicho sujeto debe

- cuidar que su firma comprenda el título original y la citada hoja adherida o apéndice;
- b. No haber posibilitado y validado la inserción de cuando menos, alguna (o algunas) cláusula (s) especial (es);
 - c. Haber regulado el aval dentro del capítulo de Letra de Cambio, como que este instituto fuere especial y exclusivo para el paradigma de los títulos valores, repetimos, la letra de cambio, cuando en honor a la verdad, el aval es instituto típico de todo título valor;
 - d. Haber expresado para el pagaré, que éste puede incluir la garantía con que se *afianza* la obligación, art. 130 inc. 2), con lo cual creó la costumbre de “aval” para letra de cambio y “fianza” para el pagaré, cuando este contrato, el de fianza, se hallaba regulado en el art. 1775 del CC de 1936 y ahora en el art. 1868 del CC de 1984, y nada tiene que ver con títulos valores, costumbre tan arraigada que ahora la ley 27287 ha debido adoptarla como instituto cambiario, en sus arts. 61 y 62;
 - e. Haber exigido la presentación por dos días consecutivos del cheque para que recién en esta segunda ocasión se deba insertar, a solicitud del tenedor, el sello o registro de “No Pagado por Falta de Fondos” siendo del caso que el propio art. 165 de la 16587 preveía que “para girar un cheque el emisor debe tener fondos disponibles en su cuenta, o haber sido especialmente autorizado para sobregirar la cuenta”, con lo cual, no tenía porque, el legislador, ser magnánimo y perdonavidas de los malos cuenta correntistas; y, por último,
 - f. Haber dispuesto en el art. 208 que los nuevos títulos valores que se creen en el futuro deban ser creados por ley, cerrando las puertas a otras opciones más pragmáticas.

La experiencia de poco más de 30 años trabajando con estos papeles comerciales, como les llaman los suizos, aconsejaba distintos cambios y ajustes; y otros tantos, eran recomendados y en su caso exigidos por la modernidad, la economía social de mercado, el fenómeno empresarial en

general y el bancario en especial, la tecnología y la computación, tal el caso, del pago de letras de cambio y pagarés mediante el débito en cuenta bancaria, la firma electrónica, el título valor incompleto, las cláusulas especiales, el protesto y la formalidad sustitutoria al mismo, el sello o registro de no pagado por falta de fondos en primera presentación, el endoso en fideicomiso y otros, que veremos en el capítulo central.

Los pronunciamientos de nuestros tribunales en materia cambiaria se habían dictado, en general, de manera uniforme, demostrando haber andado por el camino correcto, aunque demás esta decir que en ocasiones, se vieron casos absolutamente increíbles, de interpretación totalmente antojadiza y arbitraria. Había pues urgencia de poner en blanco y negro, en una ley, todo lo bueno, lo acertado, y rechazar todo aquello negativo, inaudito, insustentable.

1.3. LOS USOS Y COSTUMBRES

En el Derecho Comercial los usos y costumbres constituyen una fuente importantísima, vital. No olvidemos que esta rama del derecho se gesta y desarrolla a consecuencia del nacimiento, en el medioevo, de una clase social denominada de *“los comerciantes”* quienes a su vez deben su formación a ciertos sucesos de orden político-social y económicos correspondientes a su época. Me refiero, en primer lugar, al crecimiento demográfico; en segundo término, al sobrestockeamiento de mercaderías; y en tercer lugar, al mejoramiento de las labores de producción y de productividad. Producto del tipo de vida desarrollado, las familias vivían en el campo y fundamentalmente de la agricultura. Estoy haciendo referencia a los siglos VIII, IX y X en Europa Central. Donde nacían, vivían, y donde vivían morían. Las opciones de desplazamiento eran reducidas y las poblaciones reunidas en torno al castillo del señor feudal se dedicaban a las labores agrícolas y de ganadería. A cambio del correspondiente tributo, el señor feudal cuidaba a la región de las invasiones de los bárbaros. Les brindaba seguridad. Esto trajo consigo la elevación del número de personas que integraba la familia y ello, consigo, el crecimiento demográfico. Pero a la par, los padres

venían enseñando a sus hijos, por décadas y por generaciones, las tareas de siembra, cultivo, riego y recolección, los fenómenos atmosféricos, la necesidad de su noticia y su aprovechamiento para la optimización de los resultados, lo que generó incremento de la producción y mejoramiento de la productividad, lo que produjo el sobreabarroamiento o sobrestockeamiento de la producción. Este excedente de mercaderías, frutas, hortalizas, carnes, pieles, granos y otros, producido a pesar del incremento poblacional, debía colocarse en algún lugar, en otros centros poblados, para evitar su pérdida, y como también había excedente de personal, excedente de mano de obra, por el mismo crecimiento demográfico, tuvo que ser éste el que se ocupara de transportarlo a los otros lugares, para canjearlo o efectuar trueque con los excedentes habidos en dichos otros lugares. La moneda como medio de pago, que ya había nacido hacía algún tiempo, se fue afianzando y extendiendo su uso en toda Europa Central. “La moneda se convirtió durante mucho tiempo, en el mecanismo óptimo para los intercambios de productos y no fue sino hasta la Edad Media, con el incremento de la actividad comercial y la consolidación de los mercaderes, en que surgen los primeros Títulos Valores para satisfacer los nuevos requerimientos económicos. El aumento del Comercio dio prosperidad a las ciudades, en donde siempre había una zona destinada para los mercaderes, siendo los mas reconocidos los genoveses por ser quienes conocían enteramente las rutas del Mediterráneo y de acceso a las Indias Orientales”². E incluso en el S XII la letra de cambio como medio de transportar dinero de una plaza a otra, sin llevarlo consigo, dando una orden a otro comerciante de otro lugar. Cuenta el destacado jurista español Joaquín Garrigues, en su obra, “Curso de Derecho Mercantil”, que el primer documento de esta clase se encuentra en el protocolo o registro del notario genovés Johannes Scriba, cuyas inscripciones comienzan en el año 1155”³

² Meseguer Guich, Diego. Estudio Caballero Bustamante. Manual de Casos Prácticos e Ilustrado de la Ley de Títulos Valores. Pág. 14. Editorial Tinco S.A. Lima. 2003.

³ Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil”. Tomo III. Ed. Temis. 7ma. Edición. Bogotá 1987. Pág. 131.

Los “comerciantes” de los siglos XI y XII consiguen ciertos logros que los obtienen en base a sus luchas contra el poder político reinante de la época, tales como, uno, que les concedan territorios autónomos para llevar a cabo sus reuniones e intercambiar experiencias, lugares que aprovechan también para conspirar; dos, implementar jurisdicciones propias que se encarguen de administrar justicia en el ámbito comercial; y, tres, redactar y aprobar sus estatutos corporativos, normatividad supranacional de normas atinentes a sus tareas de intermediación mercantil, entrega de mercancías, transporte, almacenes, pagos, intereses, representación para la ejecución de cobranzas, y disposiciones afines.

Toda esta historia que es extensa e interesante para comprender al comerciante y al derecho comercial, se llega a través de usos y costumbres mercantiles, cuya importancia es básica, y cuyas características, conocemos. El Derecho Comercial es un derecho consuetudinario; surge a cada paso y es pragmático por excelencia, pues aparece siempre para realizar una función de utilidad; además, tiene una admirable facultad de adaptación a las nuevas situaciones, lo que no es precisamente característico del Derecho Civil, según lo afirma **José VALLE TEJADA**. Por ello, **GRECO**, apuesto a la unificación, al estudiar las notas de la dogmática comercialística sostuvo que es inductiva, y que “surge de los hechos y está pronta a modificarse con los hechos, por lo cual los institutos se reconstruyen según su función económica, las lagunas se colman y las leyes se interpretan a la luz de los hechos y de las uniformidades de la vida, los principios se elaboran en razón de los fines a los cuales las situaciones económicas tienden.

1.4. LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA

CABANELLAS define a la Doctrina como⁴ “Teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de Derecho... (sic); Opinión de uno o mas autores en

⁴ Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II C-D Pág. 767

una materia o acerca de un punto”, e informa de su importancia cuando refiere en *Doctrina Legal* que “En términos amplios, tanto como *jurisprudencia*. Más concretamente, la del tribunal Supremo. Si bien el art. 5 del Cód. Civ. esp., que estuvo en vigor durante mas de ocho décadas, y el artículo inicial de la codificación civil, tras la reforma de 1973, sólo menciona como fuentes del Derecho la ley, la costumbre y los principios generales jurídicos, aquella alta Corte judicial, aquí juez y parte, entiende subsistente, en toda su amplitud, el art. 1692 de la Ley de Enj. Civi., que admite el recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal que para el mencionado tribunal posee la naturaleza misma de la jurisprudencia; pues la doctrina legal no es sino la manera de haber aplicado los jueces, en ocasión anterior, la ley existente –clara o dudosa- o de haber suplido sus lagunas”. A su turno, la **Enciclopedia OMEBA** hace cita a la jurisprudencia como fuente del Derecho, en los siguientes términos: “El vocablo tiene tres acepciones usuales en Derecho: La primera de ellas, que es la clásica, deriva del latín *juris* (Derecho) *prudentia* (sabiduría) y es usada para denominar en modo muy amplio y general a la ciencia del Derecho. La segunda acepción alude al conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por órganos judiciales y administrativos. Estos pronunciamientos constituyen el llamado *Derecho Judicial* en cuanto comprende a los fallos y sentencias emanados de los jueces y tribunales judiciales o bien el denominado *Derecho Jurisprudencial Administrativo*, en cuanto involucra a las resoluciones finales de los tribunales administrativos. La tercera acepción dice referencias al conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. La coincidencia de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales permite hablar, en estos casos, de *jurisprudencia uniforme* lo cual a su vez traduce la unidad de criterio con que en la práctica son resueltos los casos análogos por los tribunales judiciales o administrativos. En tanto constituye una serie de actos creadores de normas jurídicas, la jurisprudencia es fuente del Derecho. Pero en cuanto a la obligatoriedad jurídica que tienen para determinados órganos las normas jurisprudenciales, es posible distinguir dos diversos sistemas: a) *El de la obligatoriedad instituida*: determina que los precedentes jurisprudenciales emanados de órganos de

jerarquía superior son obligatorios para los órganos inferiores (...). b) *El de la unidad científica*: se funda en la conveniencia de uniformar las decisiones a fin de mantener, dentro de lineamientos generales, un orden interpretativo, propósito éste que tiende, en definitiva a la concreción de un fundamental valor jurídico”.

En lo tocante al Derecho Comercial, en general, y al Derecho de Títulos Valores, en particular, el Perú se ha visto fortalecido grandemente, en lo que respecta a doctrina, en los últimos años. En efecto, con la ley 16587 destacaban en forma nítida los Drs. **Ulises MONTOYA MANFREDI, Jorge Eugenio CASTAÑEDA y Remigio PINO CARPIO**, precisando que el segundo, fundamentalmente, era profesor de materia civil. En la década de los 90 y en particular con ocasión de la 27287 de Junio del 2000, los hijos del maestro primeramente citado, me refiero a los Drs. **Ulises y Hernando MONTOYA ALBERTI**, han continuado la obra de su padre, escribiendo doctrina en todas las materias que engloba el Derecho Mercantil, llámese Sociedades, Títulos Valores, Contratos Mercantiles y Mercado de Valores. El autor de esta tesis en colaboración con el Dr. **Rolando CASTELLARES AGUILAR** también hemos escrito unos Comentarios a la Nueva Ley. Han escrito obras sobre el tema los Drs. **Hernando MONTOYA ALBERTI, Oscar ZEGARRA GUZMÁN, Pedro FLORES POLO**; y numerosos artículos de significativa importancia, los Drs. **Jorge RAMÍREZ DÍAZ, Gonzalo GARCÍA CALDERÓN MOREYRA, Juan Manuel ECHEVARRÍA ARELLANO, Alonso MORALES ACOSTA, Oscar POMAR FONSECA y Elvito RODRÍGUEZ**, entre otros.

La jurisprudencia ha sido enriquecedora y podemos clasificarla atendiendo a estos criterios:

- a. Principios jurídicos que sustentan a los títulos valores.
 1. Incorporación;
 2. Literalidad;
 3. Autonomía;
 4. Legitimación; y

5. Buena fe.

- b. Requisitos formales esenciales genéricos.
- c. Formas de vencimiento.
- d. Protesto.
- e. Pago con títulos valores.
- f. Relación causal y relación cambiaria.
- g. Otros.

A guisa de ejemplo se transcriben algunos –que serán comentados más adelante- que por su significación merecieron tomarse muy en cuenta al momento de la redacción del proyecto de la nueva ley:

- I. Ausencia de indicación de lugar de emisión;
- II. Falta de indicación de nombre de quién o a la orden de quien debe hacerse el pago (tomador);
- III. Ausencia de indicación de vencimiento (sólo dice “a su vencimiento”. En la parte superior hay un recuadro con tres espacios, llenados con dos dígitos cada uno, recuadro no previsto en la ley);
- IV. Título Valor incompleto al emitirse;
- V. Presentación del título valor original para exigir la prestación contenida en él y devolución del mismo al momento de su pago;
- VI. Opciones procesales para el ejercicio de la acción cambiaria;
- VII. Protesto defectuoso y extemporáneo;
- VIII. Protesto por falta de aceptación y protesto por falta de pago;
- IX. Defensas que se derivan de las relaciones personales o causales no pueden ser opuestas a tercero, endosatario de buena fe;
- X. Enriquecimiento sin causa;
- XI. Nulidad de Título Valor por intereses usurarios;
- XII. Oposición o contradicción contra endosatario en procuración;
- XIII. Oposición o contradicción contra endosatario en garantía;
- XIV. Derecho subrogatorio del avalista que paga;

- XV. Negación de firma del obligado;
- XVI. Reconocimiento de contenido y firma para recuperar acción cambiaria (Ojo, Corte Suprema dijo: solamente basta reconocimiento de firma);
- XVII. Deterioro, destrucción, extravío y robo de título valor;
- XVIII. Formas de giro de la Letra de Cambio;
- XIX. Letra de Cambio a la vista girada por una ESFN por sobregiro de cuenta corriente, previo envío de carta notarial, no observada, en el lapso de ley;
- XX. Forma de sustentar la “observación” a que se refiere la Ley de Bancos, con ocasión de la emisión de letras de cambio por sobregiros no cubiertos, en cuenta corriente;
- XXI. Pago de la letra de cambio: capital e intereses;
- XXII. Aceptación y Pago por intervención;
- XXIII. Otras, de carácter similar.

1.5. LA LEY 27287 Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN:

- 1.5.1. La Resolución Ministerial del Sector Justicia con la que se conforma la Comisión Redactora;
 - 1.5.2. El trabajo de la Comisión Redactora: las sub Comisiones de ponencias;
 - 1.5.3. Las tres publicaciones del proyecto en el Diario Oficial “El Peruano”: Los aportes;
 - 1.5.4. El trabajo de la Comisión Revisora del Congreso de la República; y
 - 1.5.5. La aprobación por parte de la Comisión Permanente.
- 1.5.1. La Resolución Ministerial del Sector Justicia con la que se conforma la Comisión Redactora.

Cuando era Ministro de Justicia el doctor Carlos Hermoza Moya, se publica en el diario Oficial “El Peruano” la R.M. N° 068-97-JUS que designa una Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Títulos Valores integrada por ocho (8) miembros, bajo la presidencia del autor de esta tesis, a la que se concede el plazo de un año para tal objeto.

Mediante la RM N° 110-97-JUS se acepta la renuncia del doctor **Oswaldo HUNDOSKOPF EXEBIO** designándose en su reemplazo al doctor **Oscar ZEGARRA GUZMÁN**. Se incorpora, además, a los doctores **Pedro FLORES POLO y Gonzalo GARCÍA CALDERÓN MOREYRA**, con lo cual, la Comisión quedó integrada con diez (10) miembros.

Finalmente, con RM N° 161-97-JUS se prorroga el plazo concedido, por tres meses más.

1.5.2. El trabajo de la Comisión Redactora: las sub Comisiones de ponencias.

Instalada la Comisión en la Sala de Sesiones del Ministerio de Justicia, por el señor Ministro doctor Carlos Hermoza Moya, el presidente de la Comisión citó a los miembros a la primera reunión de trabajo, evento en el cual debían dilucidarse aspectos tales como:

1. Filosofía del trabajo. Qué tipo de ley se quería dictar. Dimensión, horizonte y alcance del proyecto por elaborar;
2. Reparto de ponencias;
3. Programa de presentación y sustentación de ponencias;
4. Designación de Secretaría Técnica;
5. Días y horario de trabajo de las sesiones de la Comisión; y
6. Varios.

Reunida la Comisión en el Estudio del Dr. Ricardo Beaumont, ubicado en el Jr. Sevilla 190 Miraflores, se procedió a debatir el tema (1) conviniéndose en que, lo que realmente se debía redactar, era un Proyecto de Ley de Valores Negociables, los mismos que podrían representarse en título, certificado o papel, es decir, como títulos valores, como también, alternativamente, por medios electrónicos, llamados en este caso Anotaciones en Cuenta y Registro, según lo había ya dispuesto el art. 4 del D. Leg. 861 Ley del Mercado de Valores. En este orden de ideas se discutió si valdría la pena solicitar al Supremo Gobierno la corrección de la norma que creaba una Comisión Redactora para hacer un Proyecto de Ley de

Títulos Valores, modificándola por una Comisión que redacte un proyecto de Ley de Valores Negociables. Se convino que este asunto debiera verse más adelante, cuando se tuviere el trabajo algo avanzado y se advirtiera la necesidad del cambio propuesto. Al final, el proyecto, que tenía regulación legal tanto de valores materializados (en título) como de valores desmaterializados (electrónicos) fueron llevados bajo la denominación de Títulos Valores, cuando es obvio que estos últimos (los valores electrónicos) exceden o rebasan al llamado título valor.

Los miembros de la Comisión formularon sus propuestas para la preparación de sus respectivas ponencias en el siguiente orden:

El Dr. Rolando Castellares pidió Cheque y Título de Crédito Hipotecario Negociable; el Dr. Hernando Montoya, Letra de Cambio; el Dr. Jorge Ramírez Díaz, Pagaré; el Dr. Oscar Pomar Fonseca, todo lo concerniente a los aspectos procesales y de ejecución; el Dr. Oscar Zegarra, Acciones Cambiarias; el Dr. Juan Manuel Echevarría, Warrant, Conocimiento de Embarque y Carta de Porte; el Dr. Gonzalo García Calderón, Normas de Derecho Internaciones Privado referente a Títulos Valores; El Dr. Pedro Flores Polo, la Temática del Protesto y la Publicidad del Incumplimiento; el Dr. Alonso Morales Acosta, Valores Mobiliarios; y el Dr. Ricardo Beaumont, Las Reglas Generales aplicables a todos los Títulos Valores, el Endoso, las Garantías y las Cláusulas Especiales.

1.5.3. Las tres publicaciones del proyecto en el Diario Oficial “El Peruano”: Los aportes.

1.5.3.1. Primer Proyecto, publicado en Separata Especial el lunes 08 de febrero de 1999.

1.5.3.2. Segundo Proyecto, publicado en Separata Especial el jueves 17 de junio de 1999.

1.5.3.3. Tercer Proyecto, publicado en Separata Especial el miércoles 03 de Noviembre de 1999.

Producida la primera publicación, los aportes y sugerencias no se hicieron esperar. Colegas, profesores universitarios, CONASEV, SBS, institutos de investigación, y decenas y decenas de aportes y sugerencias. Tuvimos que repartirnos el trabajo, por áreas. Y como en todo tipo de colaboración hubo desde muy buenas ideas, que la Comisión no había reparado, hasta cosas absolutamente banales y de poca significación. Naturalmente el reparto no se produjo por volumen sino en razón de las diferentes áreas temáticas o de especialización, asignadas. Y dimos cuenta en reunión exprofesamente convocada al efecto, de dichos aportes, y debatimos la conveniencia o no de su inserción, ajuste, cambio o sustitución, de forma y de fondo. Y se adoptaron las decisiones, invariablemente, por consenso. No recuerdo ningún caso en que se haya producido distanciamiento de pareceres y con ello necesidad de votación individual y adopción de acuerdo por mayoría o cosa que se le parezca. Si alguna que otra situación singular merece destacarse tal vez sean las cinco que siguen:

- (1) Cuando debatíamos sobre Prescripción y Caducidad tanto de la Relación Causal como de la Cambiaria y como hubo distintas opiniones, se nos encomendó a Rolando Castellares y a mí, visitar al Dr. **Fernando VIDAL RAMÍREZ** quien había producido recientemente una obra sobre la materia. En efecto, este distinguido profesional y amigo nos brindó el asesoramiento necesario del que dimos cuenta en la siguiente sesión, y punto;
- (2) Cuando tratamos el tema del Conocimiento de Embarque y Carta de Porte, en que solicitamos asesoría de especialistas en Derecho Marítimo y por ello nos dirigimos a **Percy URDAY** y a **Manuel QUIROGA**, quienes nos proporcionaron la información adecuada, e incluso tuvieron la gentileza, en su momento, de acompañarnos al Congreso de la

República para sustentar cualquier duda ante la Comisión Revisora;

- (3) Cuando tratamos el tema de Normas de Derecho Internacional Privado aplicable a Títulos Valores, en que pedimos el valioso apoyo del distinguido profesor universitario y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Dr. **José LEÓN BARANDIARÁN HART**, cuya irreparable pérdida sufrimos el año pasado. También “Pepe” estuvo con nosotros en el Congreso de la República;
- (4) Cuando tratamos el tema del Certificado de Depósito y Warrant, en que recibimos la visita de funcionarios de la Asociación de Cías. de Almacenes Generales de Depósito, y que luego, a su turno, fueron también recibidos por la Comisión Revisora, y a quienes se les escuchó y atendió en aquello que a nuestro juicio, y principalmente al de la Comisión Revisora, pareció pertinente; y
- (5) Cuando tratamos el tema del “Protesto” en que fuimos invitados a una reunión de trabajo con varios miembros de la Junta Directiva del Colegio de Notarios, a quienes escuchamos, y quienes, de igual manera, fueron recibidos y escuchados por la Comisión Revisora del Congreso de la República, y naturalmente, atendidos en lo que pareció pertinente.

Como es sencillo comprender, después de la segunda y tercera publicación, recibimos, de igual manera, una tanda impresionante de sugerencias. Algunas, que hacían nuevos aportes y otros que insistían en sus pareceres o advertían que el ajuste producido no había sido total, sino sólo parcial, y abogaban acerca de la importancia de la modificación o sustitución total. Seguimos la misma metodología. Repartimos el trabajo y dimos cuenta. Se aprobó lo que nos pareció adecuado, dentro de un espíritu, en general y sinceramente, amplio e innovador.

1.5.4. El trabajo de la Comisión Revisora del Congreso de la República.

Como es de público conocimiento, la Sub Comisión Revisora del proyecto de la Ley de Títulos Valores estuvo presidida por el congresista Ricardo Marcenaro Frers e integrada por los congresistas de la República, Javier Alva Orlandini, Daniel Espichán Tumay, Ántero Flores-Araoz Esparza y Oscar Medelius Rodríguez. Los miembros de la Comisión Redactora del Anteproyecto fueron designados miembros de la Comisión Asesora de la Sub Comisión Revisora del Proyecto de Ley de Títulos Valores.

El trabajo se desarrolló a razón de dos sesiones semanales y tuvo una demora de aproximadamente diez meses. Hubo necesidad pues de explicar la sustentación de cada una de las normas y contrastarla con los aportes de los diferentes organismos, instituciones y gremios profesionales, tal el caso de la SBS, CONASEV, INDECOPI, ASBANC, CONFIEP, Bolsa de Valores de Lima, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Economistas, distintas universidades del país, institutos jurídicos, Bolsa de Valores, organizaciones empresariales de distinto tipo, y otros.

Quede constancia que el trabajo fue sumamente ordenado y la dirección del mismo a cargo del Dr. Ricardo Marcenaro Frers, impecable. Que yo recuerde, jamás se suspendió o canceló alguna jornada y apréciase que se hacía un trabajo sin notoriedad política. Esto es lo interesante que hay que subrayar, porque que los congresistas estén en la “comidilla” de la foto y del periodismo, es lo obvio y hasta natural, en nuestro país. Pero que se den el “trabajito” varias tardes a la semana en discusiones técnico-jurídicas, es lo que resulta meritorio y por supuesto, destacable. La colaboración de los miembros fue interesante. Quien participaba más activamente, dando muestras de haber leído y revisado el trabajo, fue invariablemente, don Javier Alva Orlandini.

1.5.5. La aprobación por parte de la Comisión Permanente.

En el mes de mayo del año 2000, la Comisión Redactora fue citada al Congreso de la República. El Dr. Marcenaro le

advirtió al Dr. Beaumont que si se lograba conseguir la aprobación de 50 artículos, en esa primera jornada, lo considerase gestión exitosa. Presidía la Comisión Permanente la Dra. Martha Hildebrant y en la Directiva se hallaban las Dras. Martha Chávez, Luz Salgado y otros personajes del entorno del presidente Fujimori. Cuando se abordó el tema del proyecto de la Ley de Títulos Valores hubo varias intervenciones que hacían referencia a que se trataba de un documento elaborado muy técnicamente y que carecía de sentido ir al debate menudo, artículo por artículo. La presidenta de la Comisión tomó el toro por las astas e hizo la consulta de rigor: “Los señores congresistas que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto de la ley de títulos valores cuya comisión Revisora ha estado a cargo de los Dres. Ricardo Marcenaro, Daniel Espichán, Oscar Medelius, Javier Alva Orlandini y Antero Flores Araoz, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. Grande fue nuestra sorpresa cuando levantaron la mano 24 congresistas de los 25 miembros que componían la Comisión Permanente; la presidenta consultó, quiénes están en contra: ninguna mano se levantó. La presidenta consultó, abstenciones: una mano se levantó, la del Dr. Javier Diez Canseco. A continuación la presidenta dijo, ha sido aprobado el proyecto de Ley de Títulos Valores por amplia mayoría. Ningún voto en contra, una sola abstención. Se levanta la sesión.

Los miembros de la Comisión Redactora no podíamos creer lo que habíamos visto. Nuestro trabajo de más de dos años y medio había producido el resultado exitoso deseado. Algunos miembros de la Comisión Permanente se acercaban a felicitarnos. Uno de nosotros, el Dr. Pedro Flores Polo, era nada menos que Ministro de Trabajo y Promoción Social. Lo siguiente entonces era esperar que el Presidente Fujimori no observe la Ley y después de promulgarla, la mande publicar. El 19 de junio del año 2000 salió publicado en el diario oficial El Peruano el texto de la nueva Ley de Títulos Valores bajo el número 27287.

CAPÍTULO II

EL SECTOR INFORMAL Y EL DERECHO

2.1. El denominado sector informal.

Cuando se habla de economía informal se piensa inmediatamente en un problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes, ¿No son, acaso, competidores desleales de las empresas y tiendas que operan en la legalidad, pagando puntualmente sus impuestos? ¿Al evadir sus obligaciones tributarias no privan al Estado de recursos necesarios para atender a las necesidades sociales y realizar urgentes obras de infraestructura?⁵

Hernando de Soto sostiene que esa manera de encarar el asunto es totalmente errónea, porque en países como el Perú el problema no es la economía informal sino el Estado. Aquella es, más bien, una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres. Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. Este es el origen del nacimiento de la economía informal, que Hernando de Soto documenta con pruebas incontrovertibles.⁶

La economía informal –sociedad paralela y, en muchos sentidos, más auténtica, trabajadora y creativa que la que usurpa el título de país legal- aparece en sus páginas como una puerta de salida del subdesarrollo que han comenzado ya a franquear resueltamente muchas de sus víctimas, en un proceso que está revolucionando desde su raíz la economía de la nación, sin que, curiosamente,

⁵ De Soto Hernando. El Otro sendero. La Revolución Informal. Editorial El Barranco. 1986. Pág. XVIII.

⁶ De Soto Hernando. Op. Cit. Pág. XIX

parezcan advertirlo la gran mayoría de quienes escriben y teorizan sobre el atraso y las iniquidades sociales del tercer mundo.

La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de *apartheid* económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien, a la legalidad. Y salieron a las calles a vender lo que podían, montaron sus talleres de fortuna y armaron sus viviendas en los cerros y arenas. Como no había trabajo, lo inventaron, aprendiendo sobre la marcha lo mucho que no sabían, y, haciendo del defecto virtud, administraron con sabiduría su ignorancia.

De migrantes a informarles. Así fue. Fue de esta manera que, para subsistir, los migrantes se convirtieron en informales. Para vivir, comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir, los nuevos habitantes de la ciudad tuvieron que recurrir al expediente de hacerlo ilegalmente. Pero no a través de una ilegalidad con fines antisociales, como en el caso del narcotráfico, el robo o el secuestro, sino utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos esencialmente legales, como construir una casa, prestar un servicio o desarrollar una industria. Podríamos decir que la informalidad se produce cuando el derecho impune reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. A medida que los informales han avanzado, el Estado peruano se ha ido replegando, considerando cada concesión como temporal, “hasta salir de la crisis”, cuando en realidad no es otra cosa que adoptar de mala gana una estrategia de retirada permanente. Retirada que, paso a paso, socava su vigencia social.

Fue precisamente el mercantilismo – y no el feudalismo ni la economía de mercado– el sistema económico y social que ha regido nuestro país desde la llegada de los españoles. Desde esta perspectiva, el surgimiento de una informalidad creciente y vigorosa

representa una suerte de insurrección contra el mercantilismo y está provocando su decadencia definitiva.

2.2 El sector Informal y el Derecho.

Los contratos que utilizan los informales son difícilmente exigibles ante un tribunal, ya sea por falta de elementos probatorios – entre otras cosas porque generalmente son orales – o por la cohibición que produce entre las partes trabajar en actividades relativamente ilegales.

Los contratos perfecta y legalmente exigibles dan credibilidad a las promesas hechas por las personas, y hasta pueden incluir una cláusula penal que condene a la parte que incumple a pagar una compensación determinada. Por tanto, el sólo hecho de que los contratos puedan ser exigibles estimula a que las partes hagan compromisos razonables que estén en condiciones de cumplir y desalienta las promesas poco realistas que puedan hacerse con el fin de animar a la otra parte a comprometerse. Así pues, un sistema legal que permite a todos los ciudadanos un acceso fácil a tribunales eficientes a probado ser una manera conveniente para facilitar las transacciones entre las personas.

Otra ventaja de los contratos legalmente exigibles es que permiten a las partes hacer compromisos beneficiosos a largo plazo. Así, si un empresario tiene la seguridad contractual de que su cliente le comprará una cantidad determinada de productos a través del tiempo, podrá invertir en la adquisición de maquinaria y equipo que le permita cumplir con la producción acordada y, a la vez, amortizar los pagos de las deudas contraídas para financiar dicha maquinaria.

El empresario informal, en cambio, por temor a ser detectado o por haber celebrado un contrato difícilmente exigible, si hace una inversión en maquinaria, tendrá que asumir un riesgo mucho más alto. El cliente, por su parte, tampoco puede asegurarse de que el empresario informal cumpla con los precios de la negociación inicial, porque puede ocurrir que éste al ver que el cliente no tiene una alternativa de suministro, el día mismo en el que se ha comprometido a la entrega de la producción aumenta el precio originalmente pactado. Como el cliente teme que esto ocurra, sólo asume los

riesgos que conlleva tal compromiso si es que sus márgenes de rentabilidad son los suficientemente altos. Se ha observado también que los costos de no tener contratos perfectamente exigibles aumentan para las empresas que intentan trabajar a gran escala.

El método coercitivo informal tiene marcadas limitaciones. En primer lugar, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo para crear una reputación o relación interpersonal sostenida y, además, esta se restringe a las partes que desean contratar. En el caso de los que recién se establecen en un mercado, da lugar a que, en principio, los proveedores o compradores no confíen en ellos, precisamente por su falta de reputación. Solamente después de que los nuevos comerciantes han realizado un número apreciable de transacciones, la posibilidad de una relación a largo plazo se convierte en un aliciente eficaz.

Suele ocurrir que aun después de establecida una buena relación comercial, una de las partes pierde confianza en la otra. Así pues, antes de que una relación termine, existen muchas posibilidades de que una de las partes actúe de mala fe.

Otra de las alternativas usadas por los informales para estimular la posibilidad de que los contratos se cumplan, consiste en invertir mucho tiempo en investigar o supervisar a la contraparte. Otra alternativa usada para disminuir las posibilidades de incumplimiento de los contratos es la gran preferencia de los informales por contratar o emplear a familiares o paisanos. Así, el empleador que ha sido víctima de un incumplimiento acude a su familia, vecindario u otros amigos con la expectativa justificable de que el grupo para mantener limpia su reputación presione al responsable a fin de que compense el agravio cometido.

Se ha notado también una tendencia generalizada a incorporar a los amigos a la familia para dar mayor seguridad a las relaciones. En ese sentido, es frecuente que se le llame “tío” a una persona mayor con la que se establece un vínculo cercano, pero respetuosamente; y “primo” a un amigo cercano de la misma generación. Indudablemente, establecer y cultivar con asiduidad estas redes amplias de amigos, compadres, tíos y primos, exige bastante tiempo y recursos, y obstaculiza el desarrollo de mercados amplios y eficientes. De ese

modo, los mercados de producción, trabajo y capital tienden, en muchos casos, a consentir a pequeños grupos de recomendados.

Otra alternativa par incrementar las posibilidades de que los contratos entre informales se cumplan es organizar entidades colectivas – como la organización vecinal, la asociación de ambulantes o el comité de microbuses- a fin de poner en ejecución acuerdos o contratos entre los miembros, supliendo así las instituciones legales y el poder coercitivo del Estado para asegurar que los acuerdos sean ejecutados tal como se convinieron.

Ocurre, empero, que su capacidad de coerción es siempre menos efectiva que la de un buen sistema de justicia. Asimismo, resulta evidentemente caro y difícil establecer mecanismos paralelos a los del Poder Judicial que permitan al a colectividad procesar y determinar la validez de una denuncia.

Además, esta suerte de tribunales privados no puede obligar a testigos o partes que no sean miembros de su colectividad a prestar testimonio y, en consecuencia, serán menos competentes para establecer los hechos y resolver una disputa o dirimir problemas entre personas de diferentes agrupaciones. Estas organizaciones tienen que cubrir también los costos de desarrollar sus propias reglas y difundirlas entre los miembros de la colectividad.

No obstante, las inconveniencias de los sistemas informales no significan que la reputación no sea una fuente importante de hacer cumplir contratos, inclusive entre los formales. Es obvio que éstos se encuentran llanos a hacer negocios o dar créditos a personas con las que no sólo tienen vínculos exclusivamente económicos, así como es obvio que los compradores formales también investigan y supervisan la calidad del os materiales comprados a sus proveedores. Por lo tanto, la diferencia entre lo formal y lo informal es de grado: la reputación es más importante y la incertidumbre contractual es significativamente mayor donde está limitado el acceso a tribunales eficientes.

Finalmente, la última alternativa utilizada por los informales para hacer cumplir los contratos es la amenaza y el uso ocasional de la violencia. En el caso del confeccionista, por ejemplo, si suponemos

que se ha instalado recientemente y que puede hacer muy poco por arruinar la reputación de un manufacturero de cierres bien establecido en el mercado que ha incumplido un compromiso con él, es probable que no tenga otra alternativa que la de mandarle matones para golpearlo.

2.3 El Derecho de los Informales.

En un mercado informal donde hay mucho movimiento existe una demanda bastante alta de coerción contra los que no cumplen contratos. Esto, por supuesto, tiene también otras consecuencias sociales adversas, como la de ejercer la violencia para objetivos diferentes. Así, en lugar de pagar a un grupo de matones para lograr el cumplimiento de un contrato, - lo cual ya es indeseable - el empresario se encuentra muchas veces pagándoles para que la violencia no sea utilizada en su contra. Y como no hay razón para que esta violencia no se vuelva contra los empresarios formalmente establecidos, resulta que también se imponen costos a la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, la condición de informalidad impide que se aprovechen los beneficios que resultan de conformar organizaciones empresariales legalmente a través de contratos de sociedad. De esta manera, los informales pierden una importante vía para combinar recursos e incrementar su valor económico. De hecho, en estas dos funciones reside la trascendencia económica de las organizaciones empresariales legalmente constituidas, sean sociedades anónimas, comerciales de responsabilidad limitada o cooperativas.

La creación de valor económico consiste en transformar insumos en productos; así, por ejemplo, el zapatero toma su trabajo (horas-hombre), su dinero (capital financiero), sus instrumentos de trabajo y el cuero (capital físico) y los transforma en calzado. Pero lo que pueda hacer una persona sola es relativamente poco, de manera que resulta muy importante el trabajo coordinado entre varias, ya que en muchos casos dos o más pueden hacer un trabajo considerablemente más eficiente que el que se obtendría sumando el trabajo de cada una de ellas. Por eso, en la creación del valor, el problema central siempre radica en unir trabajo, capital e ideas, en forma eficiente y duradera. Un ejemplo puede ser útil para comprender la importancia de esto.

La dificultad de acceso a las formas legales de organizar insumos y distribuir riesgos, dividir responsabilidades y poder realizar también actividades económicas de larga maduración es, pues, lamentablemente característica de la actividad informal, y limita tremendamente su potencial, porque obliga a que su producción se dé en muy pequeña escala, sea de alcance disminuido y escasa tecnificación. Además, de hecho los informales no pueden reunir la propiedad de varias personas, administrarla colectivamente y lograr que, a pesar de la muerte o retiro de uno de los socios, o del gerente, su negocio continúe. Como consecuencia de todo esto, no debe sorprender que el ILD en sus trabajos de campo no haya podido encontrar empresas informales grandes, bien capitalizadas y tecnificadas.

Entre las numerosas ventajas que otorgan las organizaciones empresariales hay que destacar la responsabilidad limitada, el sistema de acciones y el capital accionario. A continuación veremos someramente lo que significa para los informales estar excluidos de esos beneficios.

En virtud de los contratos de sociedad el empresario formal puede circunscribir los riesgos de sus operaciones comerciales a una empresa cuya responsabilidad está limitada a un monto de capital determinado.

El empresario informal, en cambio, no puede circunscribir los riesgos de sus operaciones a una persona jurídica distinta a él mismo y, en consecuencia, no puede limitar tampoco su responsabilidad al monto de su participación en la propiedad de la empresa. No está, por lo tanto, protegido para evitar que algún negocio infructuoso repercuta en su economía personal.

A diferencia, por gozar de tales beneficios, el empresario formal puede asignar recursos con mayor facilidad, establecer campos de acción definidos y separar sus negocios en organizaciones empresariales distintas, cuyos posibles fracasos no repercuten de una empresa a otra.

Por otra parte, tener responsabilidad limitada facilita el trato de un interlocutor comercial, financiero o industrial, porque permite

establecer claramente el ámbito del negocio y los límites de las garantías reales disponibles, sin necesidad de inspeccionar todas las relaciones que pueden tener su dueño, ya que basta examinar los libros y las cuentas de la empresa con la que está tratando.

Consiguientemente, los financista son, por lo general, renuentes a tratar con informales, salvo a tasas de interés muy altas y en contadas ocasiones, porque no tienen cómo limitar el espectro de su relación a un ámbito financiero legalmente definido que les ahorre la necesidad de inspeccionar todos los haberes y deudas que podría tener el informal que les solicita la financiación.

El empresario informal no puede tampoco utilizar el sistema de acciones; al no disponer de acciones, no puede transferir la propiedad de la empresa mediante la sola venta de títulos representativos del capital. Esto implica que tampoco puede utilizar este sistema para repartir los riesgos de la empresa entre diferentes socios.

Finalmente, el empresario informal no se beneficia con derechos inherentes al accionariado. Por ejemplo, no se puede otorgar las acciones en prenda como respaldo de una obligación personal del socio; no hay posibilidad de gravar con un usufructo la acción, cediendo la percepción de los frutos a un tercero pero conservando la propiedad; no se protegen los derechos de los socios minoritarios; no hay derecho a impugnar ante el Poder Judicial las decisiones de la administración social que se reputen violatorias de los intereses individuales, entre otros.

Asimismo, el empresario informal no puede acrecentar su capital en base a nuevos socios porque no dispone de un medio abstracto para repartir la propiedad como la acción. Al no existir este sistema entre los informales, lo que sucede es que no se pueden comprar partes de un negocio, sino máquinas y elementos individuales del mismo.

De la misma manera, el empresario informal no puede convertir sus deudas en acciones, perdiéndose una importante posibilidad de superar malos momentos renunciando a parte de la empresa y no a la empresa completa. En cambio, la ley facilita esta posibilidad a las empresas establecidas formalmente.

Por último, resulta evidente que, por no estar legalmente constituidas, las empresas informales ven disminuidas sus posibilidades de recabar pólizas de seguros que atenúen sus riesgos.

Si bien es cierto que un informal, como cualquier ciudadano, puede recabar a título personal una póliza, en el caso de las empresas se exigen usualmente requisitos adicionales, como llevar contabilidad oficial, tener inventario y estar debidamente registrada. Asimismo, existen exigencias que las empresas de seguro llaman “éticas”, por las cuales es menester cumplir adecuadamente con las leyes vigentes.

Cuando un microbusero estrella y arruina su vehículo, cuando a un informal se le incendia la fábrica o se le cae la casa, la pérdida es irremediable. De estar favorecidos con la cobertura de los seguros, a fin de repartir el riesgo de sus actividades entre una vasta capa de la población, los empresarios actualmente informales podrían extender sus actividades.

Existe un conocido ejemplo sobre un lago que contiene una cuantiosa reserva de peces, que puede servir para ilustrar esta idea: si nadie es propietario del lago, sólo se aprovechará su valor de proveedor de comida y no el de criadero de peces, porque a los eventuales pescadores sólo les sería provechoso limitarse en su pesca si es que pudieran estar seguros de que lo que dejan de pescar en ese momento no será pescado por otros, y que, a largo plazo, una vez que los peces se hayan reproducido, ellos mismos podrán beneficiarse en compensación por su sacrificio.

De otro lado, al reseñar la historia de los contratos, Douglass North y Robert Paul Thomas señalan acertadamente que el surgimiento industrial en Europa fue posible gracias a que los Estados mejoraron sustancialmente el cumplimiento de los contratos y redujeron de manera notable sus costos privados de ejecución. Sin embargo, el sistema de contratos no fue creado por el Estado; lo que ocurrió fue sencillamente que las autoridades, a través del tiempo, fueron gradualmente reconociendo el arraigo y la eficiencia de las prácticas comerciales consuetudinarias del sector privado –muchas de ellas informales- y les dieron fuerza de ley, de manera tal que

cualquier violación de las condiciones de un contrato podía ser sometida a los tribunales y sancionada.⁷

Por ser la innovación la inversión que mayor riesgo conlleva, si un gobierno no puede proveer a sus ciudadanos derechos de propiedad seguros y medios eficientes para organizarlos y transferirlos – es decir, contratos – estará negándoles uno de los incentivos más importantes para modernizarse y desarrollarse. Esto es precisamente lo que ocurre con los informales.

Tampoco los mercados de capitales de los países desarrollados hubiesen podido funcionar con la eficiencia que hoy se les reconoce, si el Estado no hubiese dispuesto exigir ante la ley el cumplimiento de los documentos utilizados para otorgar créditos. Así pues, con el tiempo, los tribunales comenzaron a reconocer las letras de cambio, los pagarés y las cartas de crédito. Cuando la ley aceptó que dichos instrumentos pudieran estar al portador y no necesariamente a nombre de una persona determinada, se dio una innovación que agilizó las operaciones financieras, porque gracias a eso un prestamista o acreedor podía ceder su cuenta a nombre de un tercero y darle así a los agentes económicos un mecanismo más para hacer pagos y otorgar créditos.

Es decir, la modernización de los países de economías de mercado –que exigía que la producción y el trabajo se volvieran más especializados y las transacciones más sofisticadas- fue posible porque el Derecho permitió reducir los costos de transacción.

Pero especialmente a los costos que resultan de acceder, permanecer o quedar fuera de la legalidad.

Esta situación provoca un enorme derroche de recursos que sólo podrá corregirse en la medida en que el Derecho comience a abaratar las transacciones eficazmente.

En el fondo, lo que se logra con el derecho de propiedad, los contratos y la responsabilidad extracontractual es reducir la incertidumbre de las personas que desean invertir su trabajo o capital

⁷ De Soto Hernando. Op. Cit. Pág. 297

para desarrollar los recursos existentes. Es difícil pensar en algo que desaliente la inversión tanto como la incertidumbre.

Quizás la incertidumbre que resulta de carecer de instrumentos facilitados del Derecho bien definidos pueda ser mejor comprendida si la relacionamos con la función de los seguros.

Supongamos que cada año hay una posibilidad en mil de que un automóvil valorado en cuarenta mil intis sea robado. Esto significa que el costo anual de que se produzca un robo, en términos puramente probalísticos, es de cuarenta intis o, dicho en otras palabras, una milésima parte de los cuarenta mil.

La compra generalizada de seguros en todo el mundo demuestra que a las personas les disgusta la incertidumbre y que están dispuestas a pagar altos costos para evitarla. La incertidumbre que la ley no se encarga de despejar tiene a la larga el mismo efecto: desalienta el esfuerzo y estimula a la gente a encontrar maneras alternativas de reducir los riesgos.

Los formales reducen sus riesgos de diferentes modos, como la repartición de acciones y responsabilidades entre los socios; la diversificación de su cartera comercial; el establecimiento de límites precisos a su responsabilidad; la compra de pólizas de seguro. En ciertos casos, pueden también reducir los riesgos a través de la connivencia y la utilización constante de “contactos” para exigir al Estado que los proteja contra lo inesperado.

En general, ninguno de estos métodos para reducir la incertidumbre es asequible a los informales con la excepción de la diversificación en pequeña escala y cierta capacidad de negociación política obtenida por algunos de sus gremios. Por ello tratan de reducirla, más bien, a través de otros mecanismos. Entre ellos, hemos visto el pago continuo de coimas, la minimización de sus inversiones de capital, la excesiva inversión en bienes raíces, la diversificación o descentralización del proceso productivo, o el hecho de que sus interlocutores comerciales y laborales sean mayormente familiares, paisanos conocidos o compadres. Recordemos, en especial, que el pago de coimas, que llegan a equivaler entre el 10 y 15% de los

ingresos brutos de los informales entrevistados, es una medida indicativa del temor que engendra la incertidumbre.

Al otorgárseles derechos de propiedad, asegurárseles la exigibilidad de los contratos y aplicarse con eficiencia la responsabilidad extracontractual se reduciría esa incertidumbre y el valor de la actividad económica aumentaría sistemáticamente porque se habría inducido un incremento en el valor de la inversión de trabajo y capital de la economía nacional.

De hecho, los peruanos en general y los informales en particular, tienen preferencias, capacidades y modos de comportamiento característicos que podrían ser considerados factores sociales, culturales o étnicos decisivos para la existencia de informalidad.

Para una persona proveniente de una sociedad rural, por ejemplo, puede resultar más complicado –y, por lo tanto, más costoso– cumplir con determinados requisitos legales, que para una persona acostumbrada a desenvolverse en una sociedad urbana.

Entonces, si bien nadie niega la importancia relativa de los factores sociales, culturales o étnicos, sucede sencillamente que no hemos encontrado ninguna evidencia que sustente la hipótesis de que ellos pudieran ser la causa por la que un grueso sector de la población prefiere desenvolverse fuera de la ley.

El derecho resulta ser hasta el momento la mejor explicación de la existencia de la informalidad.

Inclusive, toda la evidencia recogida parece sugerir que el Derecho podría tenerse como la principal explicación de la diferencia de desarrollo que existe entre los países industrializados y los que, como el nuestro, no lo son.

¿Cuánta inversión habrían podido realizar los norteamericanos o europeos occidentales sin tener derechos de propiedad bien definidos y seguros, así como un sistema de responsabilidad civil extracontractual y una administración de justicia que proteja sus bienes?, ¿Cuántas innovaciones habrían hecho si no hubieran creado patentes o regalías?, ¿Cuántos bienes y proyectos de largo plazo e

incentivos en capital habrían logrado si no hubieran tenido contratos confiables?, ¿Cuántos riesgos habrían corrido si no hubieran tenido sistemas de responsabilidad limitada y pólizas de seguro?, ¿Cuánto capital habrían acumulado si no hubieran tenido garantías ejecutables?, ¿Cuántos recursos habrían podido combinar si no hubieran tenido organizaciones empresariales legalmente reconocidas?, ¿Cuántas veces habrían quebrado y vuelto a empezar si no hubieran podido convertir sus deudas en acciones?, ¿Cuántos negocios e instituciones privadas habrían sobrevivido por generaciones si no hubieran contado con sistemas de sucesión hereditaria?, ¿Habrían podido industrializarse acaso sin utilizar economías de escala?, Sinceramente no creemos que el desarrollo sea posible sin instituciones legales eficientes al alcance de todos los ciudadanos. Esta convicción es tanto más dramática por cuanto, a pesar de su pujanza y sacrificio, la informalidad se caracteriza esencialmente por esa carencia.

Lo que estas cifras demuestran es que el progreso no resulta exclusivamente de la acción del Estado. Esta es una de las conclusiones centrales de este libro, que tal vez resulte un tanto sorprendente por cuanto reta la difundida pretensión de que nuestros gobernantes están en capacidad de conocer y hacer lo todo. Se trata de una típica consecuencia del voluntarismo centralista que hace difícil comprender cómo pueden suceder cosas que resultan de voluntades humanas distintas a la de quien detenta el poder político.

Los gobernantes mismos no producen riqueza; se sientan detrás de un escritorio, pronuncian discursos, redactan resoluciones y decretos supremos, tramitan papeles, inspeccionan, vigilan y cobran; pero no producen. El que produce es el pueblo.

Es por eso que las buenas leyes son importantes. Con instituciones legales eficientes, los gobernantes pueden lograr grandes beneficios a través de pequeñas acciones. Para eso hay que abandonar las malas leyes del mercantilismo con las que se pretende gobernar cada cosa, cada transacción, cada propiedad; y sustituirlas, mas bien, por instituciones legales eficientes que incentiven los fines deseados. Sólo por medio de buenas leyes se puede reducir la realidad a una dimensión abarcable y manejable. Sólo a través de instituciones legales de comprobada efectividad puede disminuirse la

inmensa desproporción que existe entre la simplicidad de la mente de un gobernante y la enorme complejidad de la sociedad peruana.

Para comenzar se debería integrar a los formales e informales en un sistema económico-legal único y que no permita discriminaciones para que la totalidad de la población pueda usar plenamente sus energías creativas.

Cuando se habla de integración formal-informal, algunos entienden “informalizar” a los formales para desencadenarlos de las restricciones legales, y otros, “formalizar” a los informales para disminuir las consecuencias negativas de la informalidad. En verdad, tal integración significaría hacer ambas cosas: quitarle las restricciones improductivas al sistema legal e incorporar a todos bajo una nueva formalidad.

Además, si la informalidad resulta de una falta de comunicación entre gobernantes y gobernados, es obvio que las cosas deberían mejorar si una mayor cantidad de decisiones se adopta a nivel de las jurisdicciones locales, donde existe mayor cercanía entre los interesados, que desde un lejano ministerio. Por añadidura, muchos de los problemas que implica una informalidad de dimensiones considerables se originan en cosas tan disímiles que, aparte de concebir lineamientos y políticas generales a nivel nacional, es imposible darles una solución global.

En las ciudades los migrantes encontraron un mundo hostil. Pronto comprendieron que si bien los ciudadanos tenían una imagen romántica incluso tierna de los agricultores, y rápidamente concebían que todos los ciudadanos del país tenían derecho a la felicidad, preferían que los buenos agricultores buscaran la felicidad en casa. A los hombres de campo no les correspondía venir a buscar la modernidad. Por eso virtualmente todo país en vías de desarrollo o que salía del comunismo mantenía programas de desarrollo para llevar la modernidad al campo⁸.

La mayor hostilidad hacía los migrantes procedía del sistema legal. Al principio el sistema podía fácilmente absolverlos o ignorarlos

⁸ De Soto, Hernando. El Misterio del Capital. Empresa Editora El Comercio S.A. 2000. Página 111.

porque era improbable que los pequeños grupos de recién llegados perturbaran el statu quo. Pero cuando su número aumentó al grado de ya no poder ser ignorados, los recién llegados se vieron impedidos de acceder a las actividades sociales y económicas legalmente establecidas. Les resultaba tremendamente difícil acceder a la vivienda, entrar a un negocio formal o encontrar un empleo legal.

Es así como los dueños de activos extralegales ven negado su acceso al crédito que les permitiría expandir operaciones, paso esencial para poner en marcha o desarrollar una empresa en los países avanzados. En los Estados Unidos, por ejemplo, 70% del crédito concedido a nuevas empresas lo es sobre la base de titulación formal como garantía para las hipotecas. La extralegalidad también significa la ausencia de aquellos incentivos a la inversión que nacen de la seguridad jurídica. Al ser forzados a vivir aislados del sistema legal, los migrantes no tenían más garantía de prosperidad que sus propias manos. No sólo tuvieron que competir con otras personas sino también contra el sistema. Si los ordenamientos legales de sus propios países no los iban a acoger, no les quedaba otra opción que establecer sus propios sistemas extralegales los cuales, en mi opinión, constituye la rebelión más importante contra el statu quo en la historia de los países del tercer mundo desde su independencia y en los países de la ex Unión Soviética desde el colapso del comunismo⁹.

⁹ De Soto, Hernando. Op.cit. Página 113.

CAPÍTULO III

LA LETRA DE CAMBIO

Para el correspondiente análisis que la presente tesis se propone realizar en relación a la letra de cambio, y a los diferentes ítems o sub temas que se han descrito en este capítulo, me permito transcribir cada uno de los artículos de las materias a ocuparnos para desentrañar de ellos, su sentido, su espíritu, el deseo y la voluntad del legislador, su conexión con los usos y costumbres peruanas, la doctrina nacional y extranjera, y la jurisprudencia de nuestros tribunales.

Veamos a continuación los artículos 119 a 157 y sus correspondientes concordancias, por ejemplo,

- el artículo 10 sobre título valor incompleto;
- el 19 sobre causales de contradicción;
- el 20 sobre enriquecimiento sin causa;
- el 21 sobre nulidad del Título Valor por contener o representar préstamos con intereses usurarios;
- el 34 y siguientes sobre endoso y sus formas;
- el 48 y siguientes sobre cláusulas especiales;
- el 56 y siguientes sobre garantías en los títulos valores, es decir, el aval y la fianza;
- el 64 y siguientes sobre el pago;
- el 70 y siguientes sobre el protesto y sus variables; y
- el 101 y siguientes sobre el deterioro notable, destrucción, deterioro total, extravío y sustracción de título valor, en nuestro caso, de letra de cambio.
- Al final, formulamos las conclusiones del trabajo e investigación realizados.

Artículo 119°.- Contenido de la Letra de Cambio

119.1 La Letra de Cambio debe contener:

- a) *La denominación de Letra de Cambio;*
- b) *La indicación del lugar y fecha de giro;*
- c) *La orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinable de éste, conforme a los sistemas de actualización o reajuste de capital legalmente admitidos;*
- d) *El nombre y el número del documento oficial de identidad de la persona a cuyo cargo se gira;*
- e) *El nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago;*
- f) *El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma de la persona que gira la Letra de Cambio;*
- g) *La indicación del vencimiento; y*
- h) *La indicación del lugar de pago y/o, en lo casos previstos por el Artículo 53°, la forma como ha de efectuarse éste.*

119.2 Los requisitos señalados en el párrafo anterior podrán constar en el orden, lugar, forma, modo y/o recuadros especiales que libremente determine el girador o, en su caso, los obligados que intervengan.

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

No hay certeza en la doctrina acerca de la fecha u oportunidad en que nació la letra de cambio; debe haber ocurrido en la Edad Media, hacia fines del Siglo XI y principios del XII. Hurgar en Roma es un juego de ficción o procurar encontrar propiamente una aguja en un pajar. La letra de cambio ha evolucionado, desde un documento que permitía la transferencia de fondos de una plaza a otra, hasta su uso como un típico o prototipo de documento crediticio que hoy tiene. El documento precursor de la letra de cambio era un documento notarial, según el cual una persona (girador) declaraba recibir en cierto lugar y fecha una suma de dinero con el compromiso de pagar a través de su corresponsal (girado) en otra plaza, la elegida por el beneficiario (a la orden de), en oportunidad que éste presentase a la vista de dicho girado, tal documento. Esto posteriormente deviene en una carta (lettera) privada que un banquero dirigía a su corresponsal, ordenándole el pago al beneficiario señalado. Así, originalmente se trató de un instrumento que hizo posible la traslación de fondos a plaza extranjera, posibilitando no sólo el pago a distancia o de plaza a

plaza, sino en moneda propia de la plaza de destino, generando un cambio; salvando además y principalmente los riesgos de portar dinero en efectivo en una época en la que la seguridad de los caminos era totalmente precaria. Así junto al cambio manual de monedas (*hoy compraventa de moneda extranjera o money exchange*), surge con la letra de cambio el llamado cambio trayecticio, esto es, recibo de dinero con asunción de compromiso o promesa de pago en plaza distinta. Según señala el maestro GARRIGUES¹⁰, el primer documento de esta clase se encuentra en el protocolo de registro del notario genovés Johannes Scriba, cuyas inscripciones comienzan en el año 1155. Esta práctica original, que para muchos más bien se parece al actual pagaré, por contener la cláusula “recibí” (*valuta*) y debido a que el beneficiario actúa como representante del remitente de dicha carta; y, además, porque no constituye una orden de pago sino una promesa de pago; hizo que se generalice desde el S. XII (1248) un documento que contenía un mandato de pago dirigido al corresponsal o agente del banquero ordenante de tal pago, lo que unido a la cláusula de valor o “recibí”, hizo que el librador se mantenga como obligado, si el librado no atendía la orden de pago a favor del titular. Sin embargo, en relación a este origen de la letra de cambio, los autores no coinciden totalmente; pues hay quienes señalan que fue inicialmente utilizada, en la forma como la conocemos actualmente, sólo por los gibelinos quienes al haber sido expulsado de Italia por los güelfos, lograron retirar de Florencia sus capitales, usando este medio; lo que sin embargo a nuestro juicio más bien demostraría que los florentinos sólo usaron este medio pero no son los inventores¹¹. Otros señalan que más bien fueron los judíos, expulsados de Francia por Dagoberto en el año 640 y por Felipe Augusto en el año 1180, quienes recurrieron a este medio para expatriar sus capitales, aseveración que igualmente adolece de la misma falta de solidez en cuanto a la invención mas no en cuanto a su utilización.

La cambial aparece con el desarrollo de la actividad comercial, cuando los cambistas (*campsores, de cambiére*), se solían instalar en los centros de comercio y ferias para facilitarles la transferencia de fondos donde contaban con corresponsales, utilizando intensamente

¹⁰ Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa S.A., 7ma Edición, México 1984, pág. 765.

¹¹ Castellares Aguilar, Rolando. Op. Cit. Pág. 511.

la letra de cambio para ello, llegándose inclusive a crear ferias de letras de cambio ante su uso difundido (ferias cambiarias), caracterizadas por la severidad de su práctica y exigencias mercantiles, como por ejemplo el mérito ejecutivo que tiene su origen en dichas prácticas nacidas en estas ferias, el procedimiento sumarísimo, severidad que llevó a concebir inclusive la mora como delito que merecía pena de prisión, por muy largo tiempo, hasta que en nuestro caso, las Constituciones del siglo pasado, 1920, 1933, 1979 y 1993, se encargaron de recordarnos que no debe considerarse la mora como delito: no hay prisión por deuda, art. 2.24.c, Constitución Política del Perú de 1993; art. 2.20. c), Constitución de 1979; art. 58, Constitución de 1933; y art. 25 de la Constitución de 1920.

La orden de pago y la promesa de pago explican la existencia de dos títulos valores como la letra de cambio y el pagaré modernos, pues como señala Ferri¹² *“La cambiale é un documento contenente una dichiarazione (la cosiddetta dichiarazione cambiaria) che si concreta in un ordine o in una promessa di pagamento. Nel primo caso si parla di cambiale in senso proprio o di tratta e traente si denomina colui che crea la cambiale, nel secondo caso si parla di vaglia cambiario o di pagherò cambiario, e colui che crea la cambiale assume il nome di emittente”*. Su empleo como lo hacemos actualmente, recién es reconocida sólo en el siglo pasado, luego del Código de Comercio francés de 1807 que sirvió de base a las regulaciones cambiarias europeas y latinoamericanas.

En cuanto a los antecedentes históricos de la letra de cambio, tenemos diversas aseveraciones sustentadas en prácticas y referencias de la antigüedad. Tal es el caso de la carta que Cicerón dirigió a su amigo Aticus, preguntando si el dinero que necesitaba su hijo en Atenas, debía llevarlo consigo o podía hacerlo por cambio mediante la carta respectiva. O, las tablillas de arcilla encontradas por Lenormand en ruinas babilónicas, cuyas inscripciones señalan que Ardu, vecino de Ur, manda a Marduk-bal-af-irib, residente en la ciudad de Orcol, que pague a Bel-abad-iddim por cuenta de aquél cuatro minas y quince ciclos de plata; esto, durante el reinado del último rey de Babilonia (556-538 años a.c.). Pasando por las referencias ya

¹² Ferri, Guiseppe. Manuale di Diritto Commerciale, 4ta Edizione, UTET, Milano 1976, pág. 636.

hechas a los judíos expulsados de Francia que se ubican en Lombardía y de los gibelinos expulsados por los güelfos de Florencia que se retiran a las plazas de Lyon y Amsterdam; hasta los instrumentos usados por Juan sin tierra, hijo de Ricardo Corazón de León, en su lucha contra la aristocracia inglesa, con letras italianas pagaderas en Londres, esto en 1199. A los que se suma la referencia de Segovia de la existencia de una letra de cambio del año 1292 extendida en Mallorca contra la plaza de Barcelona; y, las de Colmeiro que en sus estudios sobre la historia de la economía política de España señala que en las ferias de Medina del Campo “a la riqueza de los pagos seguía la gran feria de las letras de cambio.”

El maestro **MONTOYA MANFREDI**¹³ refiere que “La primera norma reguladora de la letra de cambio fue la ordenanza francesa de 1673, que estableció que la aceptación debía insertarse en la misma letra y declaró, respecto al protesto, que ningún acto podía sustituirlo.” (...) “Las disposiciones de la Ordenanza fueron recogidas por el Código de Comercio francés de 1807, introduciendo ampliaciones y mejoras, pero se mantuvo el mismo concepto de ser expresión; o sea, de transporte de dinero de un lugar a otro. “A partir de entonces y sobre esa base legislativa fue perfeccionándose el tratamiento legislativo, tomando distancia y otorgando personalidad propia al pagaré y al cheque, habiendo tenido especial importancia la ordenanza cambiaria alemana de 1848, el Código italiano de 1883, la Ley Uniforme de Ginebra de 1930, entre otras disposiciones del mundo occidental, hasta llegar en nuestro caso al Código de Comercio de 1902 y a la Ley N° 16587, como antecedentes legislativos inmediatos a la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores – del año 2000.

A la letra de cambio, se la regula en primer lugar en este Libro Segundo de la Ley. Justifica este primer lugar también, el hecho que muchas de las disposiciones aplicables a la letra de cambio lo son para otros títulos valores, aún de naturaleza distinta como el Pagaré, la Factura Conformada, el Cheque o el Título de Crédito Hipotecario Negociable, por ejemplo. Véase sobre el particular los arts. 162, 171, 216 y 245.1.

¹³ Montoya Manfredi, Ulises. Comentarios a la Ley de Títulos Valores, 5ta Edición, Editorial San Marcos, 1997, pág. 219,

Siguiendo la misma técnica legislativa de la norma fuente, no se define este título valor, ni a los demás que siguen, limitándose este artículo a enumerar los requisitos formales que debe tener un documento para ser considerado letra de cambio. En la legislación comparada, hay muy pocas que definen a estos títulos valores. Como sabemos, sólo algunos documentos comerciales tienen la calidad de título valor. Tales características propias de esta categoría de documentos lo señala el art. 1 de la ley: (i) representar o contener derechos patrimoniales, (ii) tener vocación, aptitud, carácter o destino circulatorio y (iii) reunir "...los requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, les corresponda según su naturaleza." Justamente es con esta última exigencia con la que tiene relación el presente artículo que comentamos. Así para que un documento tenga la calidad legal de letra de cambio, por lo menos debe contener la información a que se refiere este numeral, en la medida que se traten de formalidades esenciales, esto es, infaltables.

El concepto del título valor, propio del tecnicismo alemán en el que se denomina *Wertpapiere*, es el resultado de una elaboración científica que tuvo en cuenta las características que la doctrina ha atribuido a dichos documentos. Asimismo, la doctrina italiana fue también la que marcó el camino hacia la definición del título valor.

Cesare VIVANTE, en el año de 1895, en su monografía sobre los títulos-valores, fue el primero quizás en darle una definición a este concepto, al decir: "Es todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que de él resulta".

Para **Francesco MESSINEO**¹⁴ el título valor es un documento, consistente en un escrito, que enuncia una determinada obligación, y por ese motivo un derecho subjetivo; ahora bien, entre el derecho subjetivo y el documento que lo menciona pasa un cierto ligamen, nota característica y exclusiva porque no para todos los derechos subjetivos el documento cumple la misma función.

Por su parte, **Celestino ARAYA**¹⁵ apunta que el título de crédito es un negocio jurídico que consiste en una declaración unilateral de

¹⁴ Citado por ARAYA, Celestino R. *Títulos Circulatorios*. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, Página 36.

¹⁵ ARAYA, Celestino R. Op. cit., Páginas 37 y 38.

voluntad, constitutiva de una promesa, que si bien originariamente puede estar dirigida a persona determinada, es de orden vinculante, dado el carácter circulatorio del título, es decir, se formula ante el público en general, ante personas indeterminadas y, es además, incondicional e irrevocable. Las personas indeterminadas ejercerán el derecho al ser determinadas a nivel de la posesión regular del documento, es decir de su tenencia según la ley de circulación. El derecho externo, elemento real, continente, como documento es constitutivo, dispositivo y probatorio. El derecho interno, contenido, obligación y derecho correlativo, es literal y autónomo. La unidad funcional, resultado final de una conexión íntima, estrecha y permanente entre ambos derechos, confiere legitimación que es activa y pasiva.

Para la doctrina alemana, título-valor, es todo documento que representa o cartulariza un derecho privado de forma tal, que para el ejercicio del derecho es necesaria la tenencia del documento. Este concepto está diseñado sobre la noción genérica de títulos directos o conocidos también como Nominativos. En virtud de la tenencia de un título directo sólo se puede exigir el cumplimiento de la prestación y el deudor sólo se obliga a realizarla contra la entrega del documento, es decir, se exige la presentación o exhibición del documento, reduciendo así la eficacia legitimadora.

Al respecto, están también las definiciones de **COHEN, RENAULT y BRUNER**. Los primeros definen a los *effets de commerce* (efectos de comercio), como documentos que adoptando formas diversas comprueban una obligación de pagar una suma de dinero transmisible por endoso o por tradición manual que sirven de instrumento de pago, supliendo así a la moneda. **BRUNER**, a su vez, define los papeles y títulos-valores como la documentación de un derecho privado, cuyo ejercicio está subordinado a la posesión del documento.

Sin embargo, para Lisandro **PEÑA NOSSA**¹⁶, las definiciones de **COHEN, RENAULT y BRUNER** resultan incompletas, pues la primera

¹⁶ PEÑA NOSSA, Lisandro. *Curso de Títulos-Valores*. Cuarta edición, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, 1992, Página 7.

olvida que hay otros títulos-valores que precisamente no se refieren a obligaciones de pagar sumas de dinero, como son los casos del certificado de depósito, la carta de porte y el conocimiento de embarque. En cuanto a la segunda, el autor olvidó incluir requisitos esenciales de los títulos-valores, tan importantes como la literalidad y la autonomía.

Sobre estas bases es que las legislaciones del sistema romanista han dado tratamiento legal a los títulos-valores. En Colombia, por ejemplo, el Código de Comercio los define como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pudiendo ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías.

De algún modo, la definición que recoge ese cuerpo legal, se circunscribe sólo al ámbito documental, base de la teoría general de los denominados títulos circulantes, en los que el papel es medio esencial de transmisión del derecho. Dicho sector constituido por los títulos representativos de créditos, dinerarios o relativos al rescate de mercancías transportadas o depositadas, así como de participación en sociedades anónimas, coincide con lo que sirve de sustento a la categoría italiana de título valor la que resulta equivalente a la noción alemana de título valor de fe pública.

El derecho argentino e italiano coinciden en que los títulos-valores son objetos corporales y como tales pueden ser materia de derechos reales de posesión, tenencia, dominio, condominio, usufructo y prenda; así como también pueden ser materia de contratos de compraventa, cesión, permuta, donación y locación. El Código Civil Peruano de 1984, en su artículo 886, inciso 5, coincide con esta consideración pues señala que los títulos valores son bienes muebles. El fundamento para que el legislador haya incluido en la clasificación de bienes muebles a los títulos valores radica en su vocación circulatoria destinados a pasar del dominio de un sujeto a otro.

En la doctrina nacional resulta significativa la precisión hecha por **Ulises MONTOYA MANFREDI**¹⁷, para quien los títulos valores son un conjunto de documentos típicos que contribuyen a promover la actividad económica, agilizando y dando fluidez al tráfico patrimonial. La palabra “título” –continúa **MONTOYA MANFREDI**– alude al documento acreditativo de un derecho y unida a la palabra “valor”, significa que ese derecho, que puede no ser únicamente crediticio, está contenido en el documento, como transfundido en él, resultando una unidad indisoluble, de modo que resulta el elemento indispensable para ejercer los derechos que incorpora. De otro lado –finaliza **MONTOYA MANFREDI**–, estos documentos tienen el destino común de la circulación, lo que explica que se les haya denominado también “títulos circulatorios”.

Jorge SOLIS ESPINOZA¹⁸ anota, en cuanto a la terminología del título valor, que éste expresa con precisión la amplia variedad de títulos que forman parte de esa categoría jurídica. En efecto, la mencionada acepción no solamente comprende a los títulos representativos de crédito, sino también a los de mercaderías, e incluso tanto más al título representativo de participación; en cambio, la expresión literal de “título de crédito” contiene un significado limitado solamente a los títulos representativos, de un derecho de crédito, de modo que esta terminología es inadecuada y aparece insuficiente para definirla.

Por su parte, **Fernando VIDAL RAMIREZ**¹⁹ sostiene que el *nomen juris* de “títulos valores”, genéricamente denomina a todo documento al que se le incorporan derechos, con los cuales constituye una sola entidad jurídica, convirtiéndose en un bien corporal susceptible de tráfico jurídico. Los títulos valores sólo pueden dar contenido a derechos patrimoniales, sean de carácter real, creditorio o participatorio, dentro de la clasificación de los derechos subjetivos que tenemos establecida.

¹⁷ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Derecho Comercial*. Tomo II, Novena edición aumentada y actualizada, Editora y Distribuidora Jurídica GRIJLEY, Lima, 1998, Páginas 3 y 4.

¹⁸ SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. *Temas sobre Derecho Cartular. Doctrina y Legislación*. IDEMSA, Arequipa, 1995, Página 13.

¹⁹ VIDAL RAMIREZ, Fernando. *La Bolsa de Valores. Un Ensayo de Derecho Bursátil*. Cultural Cuzco S.A., Editores, Lima, 1988, Páginas 145 y 146.

3.2. PRINCIPIOS JURIDICOS

Debemos recordar, en lo tocante al tema en referencia, lo dispuesto por el art. 4.1 de esta Ley, que expresa:

4.1. El texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título valor o, en su caso, en hoja adherida a él.

Al respecto, entre la relación del contenido formal y literal que debe tener una letra de cambio a que se refiere este artículo, apreciamos sólo algunos requisitos esenciales cuya falta o defecto invalidaría el documento en su calidad de título valor, mientras que otros requisitos no tienen tal exigencia o calidad de esencial, por lo que su falta o defecto, o es subsanable o prescindible, en los términos que fija la misma ley. Puede además agregarse en el texto de la letra de cambio, otras informaciones de distinto orden y alcance a los señalados en ese artículo, sin que ello afecte la calidad del título valor, en la medida que por lo menos tenga todas las formalidades exigidas como esenciales o infaltables. Al respecto, debemos señalar que el hecho que la letra de cambio sea un título valor abstracto, no significa que exista prohibición para incorporar en su texto referencias al negocio jurídico que le dio origen. Bien podría hacerse referencia a tales causas, como ocurre por ejemplo en el caso de las letras de cambio que se emiten en representación de saldos deudores en las que por mandato de la misma ley es obligatorio señalar tal origen o causa de su emisión. Así, el hecho de ser abstracto y no causal, significa que en la letra de cambio no es necesario ni obligación legal indicarlo, siendo suficiente que el título valor tenga las informaciones que señala este artículo para tener la calidad legal de letra de cambio, salvo que por ley expresa o acto voluntario de las partes se incorporen mayores informaciones, lo cual no afecta su validez como tal.

José Antonio SILVA VALLEJO nos refiere en su interesante artículo escrito en el Libro Homenaje al maestro Ulises Montoya Manfredi que **Hans LIEBE** en 1843 expuso el principio de formalidad que caracteriza al Derecho Cambiario, así como los fundamentales principios de literalidad y abstracción que caracterizan a la obligación cambiaria y que la escuela alemana desarrolló cuidadosamente. En efecto, la característica fundamental de la escuela alemana es el alto

grado de abstracción, de racionalismo y de especulación teórica en el Derecho Cambiario, de tal suerte que la Teoría General y los fundamentos del Derecho Cambiario son de neta inspiración germánica. Cuál era la naturaleza jurídica del Derecho Cambiario antes? Los comercialistas del derecho común, **Benvenuto STRACCA** y sobretudo el genovés **Rafael DE TURRI** consideraron que el fundamento de la obligación cambiaria era de naturaleza consensual atribuyéndose al título una función meramente probatoria de un contrato literal de cambio trayecticio, surgido y generado de un “pactum de cambiando”. Queda sentado que la historia del derecho cambiario surge en la Italia medieval y que el origen de la letra de cambio, así como del contrato de cambio trayecticio que explica su naturaleza jurídica, están referidos a un surgimiento y desarrollo autónomo de las otras figuras contractuales del Derecho Privado. El fundamento contractual de la letra de cambio, la institución más típica del derecho cambiario, se mantuvo incólume a lo largo de los siglos, hasta la irrupción de ese gran “best seller” que fue el libro “El Derecho Cambiario y las necesidades del negocio de cambio en el siglo XIV, de Karl **EINERT**, profesor de la universidad de Leipzig, 1839. En dicha obra, este planteó y proclamó su doctrina según la cual la cambial es el papel – moneda del comerciante. En ella, el suscriptor emite una promesa dirigida al público, de pagar de conformidad con las cláusulas insertas en el título. Y para que en el público surja la confianza de que la promesa será mantenida es necesario asegurar al poseedor un derecho autónomo, aquello que no puede hacerse en donde la relación entre el suscriptor y el primer tomador sea concebido como un contrato, debiéndose en consecuencia, sostener que el primero de los poseedores trasmite a los siguientes un derecho en todo y por todo igual al suyo. Para asegurar al poseedor un derecho autónomo no se debe hablar de contrato, y la promesa debe concebirse como acto unilateral.

Según **DE SEMO**, este aporte fue decisivo: el concepto de unilateralidad ha demolido radicalmente las teorías contractuales. Según el profesor **Oswaldo GOMEZ LEO** de las universidades de La Plata y Buenos Aires, la teoría de **EINERT** puede reducirse a cuatro principios fundamentales:

1. La letra de cambio es el papel moneda de los comerciantes;

2. El título no es un simple documento probatorio. Es un documento constitutivo;
3. La letra de cambio es independiente y autónoma del negocio causal que origina su emisión; y
4. La letra de cambio constituye una promesa abstracta y unilateral de pago dirigida al público y que no es producto de un contrato con una persona determinada. En todo caso, se trata de un negocio unilateral realizado “cum incertam persona” como ya lo había entrevisto **SAVIGNY**.

La vida económica moderna, decía **Tulio ASCARELLI** sería incomprensible sin la densa red de títulos de crédito. Gracias a ellos el mundo moderno puede movilizar sus propias riquezas y el derecho consigue vencer tiempo y espacio.

Pero no basta que el título llegue a manos de un tercero legitimado para acreditar la transferencia del derecho endosado: se precisa que este tercero haya adquirido la posesión de buena fe. Este es el aporte de **Samuel GRÜNHUT**, profesor de la universidad de Viena.

El profesor **José Antonio SILVA VALLEJO** refiere “Hemos desarrollado este principio en la jurisprudencia cambiaria nacional en sendos fallos. Recuerdo un caso en el que intervine como Vocal Dirimente en la Cuarta Sala Civil en 1981 a raíz de una disidencia, posteriormente concordada entre los señores Ortiz Acha, Roncalla y Castillo. La Corte Suprema por ejecutoria del 21 de junio de 1982 declaró no haber nulidad en la sentencia de vista que confirmando la apelada, declaró infundadas las demandas acumuladas sobre pago de dólares en los seguidos por el Banco de Crédito Industrial de España con Manufacturas Pyma S.A. Se trataba de contraponer el principio de la buena fe en los títulos valores contra la abstracción cambiaria, la autonomía y la literalidad que rigen la relación cartular. La Corte Suprema en la citada ejecutoria sostuvo lo siguiente “Y CONSIDERANDO: que las circunstancias inherentes a la emisión de la cambial de fojas 13 estuvo rodeada de hechos ilícitos que motivaron, incluso, el proceso penal a que se refiere el cuaderno acompañado seguido en Madrid; que es evidente que el Banco de Crédito Industrial de España adquirió la cambial a sabiendas en daño del aceptante; que siendo así no resulta exigible la obligación puesta a

cobro, DECLARARON.... etc”. Se trataba de establecer la ineficacia de la obligación cambiaria cuando esta surgía dentro de un iter criminis defraudatorio, plenamente probado por el mérito de una sentencia ejecutoriada por la Corte de Casación española que condenó a los principales sujetos de la relación cambiaria como autores del delito de estafa. Por tanto, en la aplicación del principio “fraus omnia corrumpit” y de la teoría de la buena fe nuestra Corte Suprema ya ha sentado doctrina jurisprudencial en tal sentido.

En cuanto a los fundamentos del derecho cambiario italiano, estos fueron expuestos por **León BOLAFFIO** en su famosa y conocida “Parte general, Tomo I” quien sostiene: “El título cambiario incorpora el crédito de la suma debida en dinero, indicada en el mismo. Destinado a circular, con la creación de relaciones autónomas (los endosos) separadas entre sí y de la relación fundamental (la causal de la deuda), es necesario y es suficiente que la obligación de pagar, en su expresión literal, sea incondicionada. Las cláusulas de la relación que ha dado lugar a ella pueden constituir materia de excepción, si son oponibles, pero no quitan a la letra de cambio el carácter de crédito incondicionado, y como tal válido y ejecutivo. Todo poseedor, por ser de presunta buena fe, es legítimo; y la letra de cambio es suya porque incorpora, y no simplemente documenta, el derecho patrimonial que en ella se realiza.

Dice la célebre definición de **VIVANTE** que “el título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Se dice que el derecho expresado en el título es literal porque su existencia se regula a tenor del documento; se dice que el derecho es autónomo, porque el poseedor de buena fe ejercita un derecho propio, que no puede ser restringido o destruido en virtud de las relaciones existentes entre los anteriores poseedores y el deudor; y se dice, por último, que el título es el documento necesario para ejercitar el derecho, porque, en tanto el título existe, el acreedor debe exhibirlo para ejercitar cualquier derecho, tanto principal como accesorio de los que en él se contiene, no pudiendo realizarse ninguna modificación en los efectos del título sin hacerla constar en el mismo.

Alfredo ROCCO plantea la necesidad de una construcción jurídica de la cambial en blanco impuesta no sólo por exigencias

teóricas, sino también, por razones prácticas de la más alta importancia. Y añadía: “Para nosotros el problema fundamental, todavía no resuelto, es el de la justificación legal de la validez cambiaria de un título emitido en blanco y completado después de su emisión. La unanimidad con que la jurisprudencia ha acogido y reconocido este instituto no dispensa a la ciencia de investigar su fundamentación jurídica. La jurisprudencia continúa sosteniendo el efecto de un mandato conferido por el suscriptor del módulo en blanco al tomador.

Según **Lorenzo MOSSA** “Los títulos de crédito son papeles o documentos que llevan en si un valor económico y jurídico, porque el papel contiene un derecho real o de participación social, o expresa una obligación o promesa formal y rigurosa. El valor no existe sin el documento. El valor no existe sino en cuanto el papel concentra en si el derecho”.

He aquí algunas pinceladas del pensamiento de **MESSINEO**. El título de crédito es documento constitutivo; que el derecho de crédito está contenido en el título, para indicar el fenómeno de la denominada incorporación de derecho en el título; esto es, el derecho es identificado o compenetrado en el documento hasta el punto de formar cuerpo con él, con las consecuencias siguientes:

1. Que se adquiere el derecho nacido del documento;
2. Que con la transferencia del documento, se transfiere necesariamente el derecho cartular;
3. Que sin la presentación del documento, no puede obtenerse el cumplimiento de la prestación;
4. Que la destrucción de documento puede importar pérdida del derecho cartular; y
5. Ulterior consecuencia de la incorporación es que la prenda, el secuestro, el embargo y cualquier otro vínculo sobre el crédito no tiene efecto, sino afecta también al título.

Según **DE SEMO**, el título de crédito, “aparte de ser un documento especial es también un documento formal que obedece a los requisitos de forma prescritos por la ley bajo conminación de la invalidez del título como tal. No basta, por tanto, la escritura, sino que son necesarias todas las indicaciones que la ley requiere para que el

título de crédito asuma un determinado tipo y pueda considerarse regular y, por lo tanto, despliegue la eficacia que le es propia.

El principio de literalidad está consagrado en el art. 521 del proyecto de Código de Comercio italiano; en los arts. 2 y 3 de la ley 16587 y en el art. 4 de la ley 27287, según los cuales “El texto de documento determina el alcance y modalidades de los derecho y obligaciones indicados en el título valor. Según **DE SEMO** “la literalidad del título significa que este contiene una obligación y un correspondiente derecho conforme al tenor del documento”.

El derecho conferido por el título de crédito al poseedor legítimo es también autónomo, es decir, inmune a las excepciones oponibles por el deudor a los precedente poseedores.

La conferencia de Ginebra se encontró en materia de cambial en blanco, frente a sistemas legislativos enteramente diferentes, algunos de los cuales admitían explícitamente el instituto, así la ley inglesa, la norteamericana, la húngara y la austriaca; otras, en fin, con su total silencio, lo repudiaban sustancialmente. Correspondió a la delegación italiana el mérito de haber inducido a la conferencia a mediar sobre la cuestión.

Podemos definir a la cambial en blanco como la letra de cambio, privada, en el acto de su puesta en circulación, de uno o más requisitos esenciales no integrables por presunción de la ley, pero que lleva la firma de por lo menos un obligado cambiario, y ser susceptible de ser completada por el tomador o por otro tenedor antes de la presentación para el pago. El fenómeno del documento en blanco no sólo tiene aplicación en materia cambiaria; el llenado de cualquier documento firmado en blanco deberá hacerse respetando las relaciones que ligan al suscriptor, basándose en lo que se denomina “la convención de llenado” a la que el tomador del documento debe atenerse, pudiendo esta convención ser también cedida a un tercero. En este caso el cesionario deberá, al efectuar el llenado, tener en cuenta esta convención.

¿Cuál es la opinión del profesor **FERRI** sobre la cambial en blanco? “Se dijo que la letra de cambio en blanco no es una verdadera letra de cambio mientras no haya sido debidamente llenada y por lo

tanto, la circulación de la letra de cambio en blanco no es más que circulación por efecto de cesión, del negocio subyacente. Se sostuvo que la letra de cambio en blanco, de otra parte, es una letra de cambio incompleta, y por lo tanto, si bien surge una obligación cambiaria desde la creación, sin embargo, no se verifica el efecto de la autonomía de la posición de cada uno de los poseedores hasta que la letra de cambio esté completa. Finalmente se afirmó que la letra de cambio en blanco es una verdadera letra de cambio, aunque incompleta, y como tal, productora de todos los efectos típicos aun en el ámbito de la circulación, con relación a los elementos de los cuales está provista desde su inicio y que, por lo tanto, sólo con relación a la parte de la declaración en blanco el portador no estaría apoyado por los principios de los títulos de crédito y sus tutela se daría en los límites de los acuerdos de completamiento.

Antonio PAVONE LA ROSA sostiene que “La declaración cambiaria puede ser formada en vía sucesiva, aunque esta formación debe conectarse con la existencia de un poder de llenado atribuido por el emisor al tomador del título. Y en todo caso el título debe contener algunos requisitos mínimos, sin los cuales no se tendría una declaración cambiaria en formación, sino un documento no susceptible de generar una obligación cambiaria. La cambial, para ser susceptible de completarse, debe contener por lo menos la suscripción del creador, emisor o girador, y la promesa o la orden de pago con la mención del carácter cambiario de la declaración.

3.3. REQUISITOS FORMALES DE LA LETRA DE CAMBIO

(1) Denominación.

Dentro de la relación de requisitos que debe contener la letra de cambio, tenemos en primer lugar, la indicación de su denominación, la misma que no puede ser otra que la de “letra de cambio”. Así, en el caso de este título valor, se exige como requisito esencial señalar su denominación, requisito que en algunos títulos valores como el cheque por ejemplo no es necesario. Por otro lado, no se admite otra denominación que no sea la de “letra de cambio”. La ley anterior admitía usar “otra equivalente”, habiéndose generalizado en nuestro medio el uso de denominaciones como “Unica de Cambio”, “Letra”,

“Cambial”, “Cambiaria”, etc. Ello explicable además, desde que según la derogada Ley N° 16587 era posible emitir varios ejemplares de una misma letra de cambio, por lo que cuando se emitía un solo ejemplar se utilizaba la mención de “Unica”. Al respecto, ya desde 1998 y a raíz de la expedición de la Ley N° 26852 no fue más posible tal emisión plural, por lo que desde entonces ya existía la obligación de señalar la denominación de este valor solamente utilizando la mención de “letra de cambio”, como requisito esencial.

(2) Lugar y fecha de giro.

Se precisa como segundo requisito la indicación del lugar y fecha de giro. Se tratan de dos informaciones que ayudan a ubicarnos en el espacio y en el tiempo respecto a la letra de cambio, lo que es importante para determinar la ley aplicable en su creación y emisión, así como definir su vencimiento o determinación de plazos en caso de tratarse de una letra de cambio a la vista, o a días fecha, o de una cambial pendiente de ser aceptada a cierto plazo desde su giro; o, de una cambial determinar la validez del acto de la emisión, sea por la vigencia de poderes de quienes la suscriben. Se trata pues de dos informaciones importantes. Sin embargo, la primera referencia (lugar de giro) es un requisito subsanable. En efecto, en el caso que no se hubiere indicado el lugar de giro, se entenderá como tal, como lugar, el lugar del domicilio del girador, como se señala en el siguiente artículo. En cuanto al requisito de la fecha de giro, éste es imprescindible y debe constar en el documento, sea en forma completa o abreviada, o en recuadros. Así, serían formas válidas de señalar esta fecha: 1 de enero de 2003; 1.Enero.2003; 1.1.03; 2003.01.01 u otras formas que indiquen de modo inequívoco la fecha de que se trate.

(3) Orden de pago.

El requisito tercero se refiere a la indicación del derecho crediticio que debe contener, consistente, exclusivamente en verificar un pago en dinero, mediante orden de pago dada por el girador al girado, quien debe atender dicha orden en forma incondicional, esto es, sin que la persona que exige tal pago esté sujeto al cumplimiento de algún requisito o condición. Como tal orden de pago sólo puede consistir en pago de dinero, no cabe utilizar la letra de cambio para

representar obligaciones de pago distinto. Lo que si se admite es que la suma a pagar no consista necesariamente en una suma determinada de dinero, sino en un monto que pueda ser susceptible de determinación con arreglo a sistemas de actualización o reajuste de capital previstos por la ley. Esto es, según esta disposición, es válido utilizar la letra de cambio bajo el sistema nominalista o valorista que prevé nuestra legislación. Esta posibilidad, como sabemos, en el Perú fue introducida legislativamente desde 1982, fecha desde la que se modificó la ley anterior (Ley N° 16587), mediante la Ley N° 23327 haciendo posible que el importe de la letra de cambio pueda ser objeto de reajuste de capital legalmente admitido. La referencia a sistemas legalmente admitidos se explica, por el hecho que no siempre o no en todos los casos es posible reajustar este importe, como ocurrió con la antes citada Ley N° 23327 que reservó esta posibilidad sólo para las obligaciones cuyo plazo de vencimiento no era menor a un año. La Ley General del Sistema Financiero, Ley N° 26702, en su art. 240, limita por ejemplo el uso de sistemas de reajuste de deudas bajo el sustento del art. 1235 del Código Civil, respecto a sus pasivos, sólo cuando se traten de obligaciones de plazo no menor a 90 días. Al no contener este numeral comentado restricción alguna respecto al plazo que deben tener las letras de cambio sujetas a sistemas de reajuste, debemos entender que tal posibilidad de señalar una “cantidad determinable” de dinero no tiene restricción, salvo casos excepcionales como el señalado para las empresas del sistema financiero.

Con relación pues a la orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, pudiera ocurrir que el importe señalado en cifras o dígitos difiera de la expresada en palabras y también que una exprese un signo monetario mientras que la otra haga cita de una distinta, por cuyas razones debiéramos remitirnos a lo que dispone el art. 5.2 y 5.3 de esta ley. Veamos.

En efecto, el propio art. 5 de la NLTV, enfatiza que la indicación del importe en el título valor, constituye un requisito formal esencial del mismo; de lo que se desprende que su omisión acarrea que el documento carezca de dicho carácter y no surta los efectos que le son propios.

Comparando la norma actual con la del art. 3 de la Ley 16587, encontramos las siguientes diferencias: La ALTV refería que en caso de diferencia entre el importe expresado en palabras y en cifras, prevalecía la suma escrita en palabras. La primera interpretación que se hacía era que el importe podía ser expresado tanto en palabras como en cifras, y sólo en caso de diferencia entre ambas sería preferido el monto expresado en palabras. Asimismo, establecía que si la cantidad estaba indicada varias veces pero solamente en palabras o sólo en cifras, el valor del documento era el señalado por la suma menor.

Creemos que la NLTV establece con mayor claridad y precisión las reglas que deben aplicarse en caso de diferencias entre los importes expresados en el título valor. El importe podrá expresarse en letras, en números o mediante codificación; y en caso de diferencias al respecto, entre todas ellas se tomará en cuenta y prevalecerá siempre, la suma menor; a diferencia de la Ley anterior - como se aprecia líneas arriba- que hacía prevalecer la suma escrita en palabras o letras y si ésta era indicada varias veces sólo en palabras o solamente en cifras, recién se tomaba en cuenta o se hacía prevalecer el monto menor.

Asimismo, la NLTV introduce las siguientes precisiones:

- a) Si en el título valor se consignara alguna referencia a unidades monetarias y existiera discrepancia o diferencia entre ellas, se entenderá que el importe corresponde a la moneda de curso legal en nuestro país, obvio, si uno de los importes estuviere expresado en dicha moneda. De lo contrario, el título valor no surtirá efectos cambiarios, es decir, si por ejemplo, hubiere indicaciones de libras esterlinas y marcos alemanes.
- b) Si los importes consignados en el título valor no indican la unidad monetaria, se entenderá que corresponden a la moneda nacional.
- c) En todos los casos, se faculta al interesado a hacer valer sus mayores derechos o expectativas, accionando por la vía causal el reconocimiento y pago de tales importes.

- d) Puede quedar alguna duda acerca de la situación relativa a si el importe expresado en la moneda de curso legal en nuestro país indicara una cantidad mayor a la señalada en moneda extranjera, v. gr. que en dígitos o cifras se halla anotado S/. 18,000.00 y en letras o palabras "Un mil ochocientos y 00/100 dólares americanos", qué debería prevalecer, si la cantidad señalada en nuevos soles o la indicada en dólares americanos, tomada noticia que la primera es muy superior a la segunda y que según las reglas del importe debiera ser la cantidad menor. Pues bien, la respuesta es que, formalmente, se trataría de dos reglas distintas y que, por tanto, debe diferenciárselas. En efecto, (1) si el signo monetario es el mismo, se elige la cantidad menor; sin perjuicio que el interesado para hacer valer sus mayores derechos frente al obligado por la vía causal; pero, (2) si el signo monetario es diferente y uno es el de curso legal de nuestro país, se prefiere éste con prescindencia de cuál sea la cantidad, pudiendo ser pues mayor o menor, y en este último caso coincidir con la otra regla, pero esto último habría sido totalmente casual. Ahora bien, el autor de esta tesis de Magíster para la UNMSM debe expresar en honor a la verdad que de las conversaciones y debates en la Comisión Redactora del Proyecto, nuestra idea era, en efecto, hacer prevalecer el importe consignado en la moneda de curso legal de nuestro país, *siempre y cuando su importe fuere menor*; en ningún caso intentamos formular una regla nacionalista o chauvinista a ultranza. Se trató entonces de un error tipográfico en no agregar el extremo escrito en cursivas después de la 4ta. línea del art. 5.3.

No es infrecuente que esta NLTV enfrente y resuelva problemas cotidianos en el manejo de estos papeles comerciales, tal el caso previsto en el art. 121.3 y estimamos, que también solucionado, de cuando en una letra de cambio se utilizan más de una de las formas de vencimiento, de las previstas en la ley, y existe diferencia entre ellas al momento de hacer el cómputo o cálculo para fijar dicho vencimiento, es decir, no coincide el día preciso que debe cumplirse la obligación, pero una de las formas indicadas es "fecha fija", la ley

prevé y decide, sin más, que ésta prevalece. Se resuelven conflictos de esta magnitud y se evita la judicialización de ellos, no es verdad?

El Art. 6 de la Ley Argentina sobre Letra de Cambio y Pagaré indica que "La letra de cambio que lleve escrita la suma a pagarse, en letras y cifras, vale, en caso de diferencias, por la suma indicada en letras. Si la suma a pagarse hubiese sido escrita más de una vez, en letras o en cifras, la letra vale, en caso de diferencias, por la suma menor". Así era nuestro régimen legal con la Ley 16587, artículo 3, promulgada en 1967, el mismo que ha sido modificado por el artículo 5.2 comentado en este párrafo.

(4) Nombre y D.O.I., del girado.

Se debe señalar, de otra parte, el nombre y documento oficial de identidad de la persona a cuyo cargo se gira la letra de cambio, según reza el cuarto requisito formal esencial. Esta información es importante, porque permite determinar e identificar con plena certeza a la persona designada para encargarse del pago de la letra de cambio. Como se señala en el glosario de esta ley, por "nombre" debe entenderse, en el caso de las personas naturales, los nombres y apellidos y, en el caso de las personas jurídicas, la razón social o la denominación que corresponda, según sea la forma societaria o modalidad de la persona jurídica, de derecho privado o público, caso por ejemplo de una Asociación, Fundación o nombre de una institución pública. También podría ir un nombre comercial, caso de Peluquería Aurora o Ferretería "El Ñato", pero debería ir acompañada del nombre de la persona natural o jurídica titular de dicho nombre comercial, porque éste, en si mismo, no indica al sujeto de derecho responsable del pago. La novedad en este requisito es que existe la obligación de señalar el documento de identidad "oficial", es decir, aquél que legal u oficialmente sirva para identificarse, por lo que en el caso de personas naturales domiciliadas en el Perú será el DNI (carné de identidad de policías y militares); si son extranjeros no domiciliados será su pasaporte u otro documento oficial; y, en el caso de las personas jurídicas nacionales, será el RUC, conforme lo señala la Ley N° 26935; y, desde el año 2001 debió ser el NIT según lo disponía la Res. SUNAT N° 141-99/SUNAT que fuera modificada por la Res. SUNAT N° 091-2000/SUNAT manteniéndose el RUC de once dígitos como documento de identificación de las personas jurídicas. Esto ha

quedado pendiente. De otro lado, el legislador no se puso en el caso de alguna sucursal de sociedad extranjera no domiciliada en Perú, que deseara realizar alguna actividad económica suscribiendo títulos valores, en el caso específico, letras de cambio, porque no tendría Documento Oficial de Identidad, y su carencia le impediría negociar con títulos valores. Considero que el legislador debió prever casos excepcionales como el señalado, autorizando la validez del documento aun y a pesar de carecer de este dato. Debemos precisar, finalmente, que si bien este requisito no es prescindible, por lo que es necesario señalar la referencia a este documento de identidad, el error en su consignación no conllevará la nulidad del título; esto, debido a que la facilidad con la que puede incurrirse en error al consignar una numeración, podría originar nulidades del documento en caso que se exigiera la numeración exacta como requisito formal esencial, lo que debe evitarse, como lo señala el art. 6 y lo reitera el art. 120.2 de esta ley.

(5) Nombre del tomador.

El quinto requisito formal se refiere a la designación del primer beneficiario de la letra de cambio, tomador, orden o tenedor, en cuyo favor se gira la letra de cambio. Este es un requisito esencial por lo que siempre debe consignarse el nombre de dicho beneficiario. No es posible girar este título al portador. Debe designarse siempre a una persona determinada como titular del derecho que contiene la cambial. Lo que puede dejar de designarse es el nombre del endosatario o persona en cuyo favor se transmite el título, esto es, del último tenedor; pero no el nombre del primer beneficiario o tomador. Este primer beneficiario puede ser la misma persona que gira la cambial, en cuyo caso puede optar por señalar tal hecho, sea consignando su nombre, o la cláusula “mi mismo” o “nosotros mismos”, sin que en ese caso sea necesario consignar el nombre del beneficiario en modo expreso. Igual que el comentario hecho anteriormente, no sería dable anotar un nombre comercial porque éste no es referencia a un sujeto de derecho; lo que quiero decir es que un nombre comercial no podría presentarse ante un juez, porque el nombre comercial es sólo la denominación de un establecimiento, negocio o tienda, para que se haga conocido en un medio determinado, para fines publicitarios, de mercadeo o marketing, tales como las discotecas Teatriz en Larcomar o Trafic en la Av. Larco, de

Miraflores, pero falta indicar quién es la persona natural o jurídica titular de dicho nombre comercial, que para seguridad y protección jurídica se inscribe en la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI; sí se podría poner, en cambio, Sonia Palacios Valle, “Peluquería La Aurora”. Del texto de este requisito, podemos apreciar que la letra de cambio es un título valor que puede emitirse sólo como valor a la orden; entendiéndose como tal, tenga o no la cláusula “a la orden”. Así lo dispone la Ley.

Las normas que regulan a los títulos valores en general y a la letra de cambio, en particular, deben estar orientadas a brindar seguridad, eficacia, certeza y confiabilidad. Como de conformidad con lo dispuesto en el art. 46, el que paga el título valor a su vencimiento no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de la firma de los endosantes anteriores a la persona con quien se entiende el pago, ni en su caso, de la suficiencia de las facultades y poderes con las que intervienen, tenemos que colegir que el título valor conserva eficacia aun y a pesar de que en su vida de circulación hayan participado personas incapaces,

El Artículo 7 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré indica que "Si la letra de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra o con el nombre de las cuales ha sido firmada, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas". Forma un tanto redundante o ampulosa de expresión, respecto a lo señalado por nosotros en nuestra Ley 27287, pero ciertamente con el mismo sentido y finalidad.

La expresión “a la orden” se origina y desarrolla para dar oportunidad al tomador y titular del derecho cambiario a transferirlo con efectos de “endoso”, es decir, para que el “endosatario” reciba un derecho autónomo y desvinculado de la causa primigenia de la obligación. Según apunta la doctrina, el término endoso es de origen francés y deriva del uso comercial de escribir las sucesivas órdenes de transmisión del título en el dorso (en dorso; endoso) del mismo. Este uso comercial se reguló por primera vez en la Ordenanza francesa de 1683 como mero instrumento o modo de circulación de la

letra de cambio; y posteriormente, lo reguló la Ordenanza de Bilbao de 1737. He ahí su origen.

El endoso es una institución jurídica cuya evolución ha facilitado enormemente la transmisión de los títulos valores a la orden. Su desarrollo se dio sobre la base de la protección del tercero adquirente de buena fe, que el ordenamiento jurídico entiende que debe ser amparado, no como un mero cesionario de unos derechos, sino como el adquirente de un bien mueble con el fin de proteger la circulación del título valor con una rapidez y una seguridad que la simple cesión del derecho no puede otorgar. La adquisición de buena fe del título, cumplidas las formalidades que se han de recoger en él, va a significar para el tercero poseedor de buena fe, la tutela propia del adquirente de las cosas muebles de modo tal que obtiene un derecho sobre el documento, aun en el caso de adquisición de una persona que no sea el verdadero titular.

El endoso es una declaración de voluntad unilateral, abstracta, autónoma, típica y formal por cual el endosante ordena al deudor que cumpla con la prestación a favor del endosatario, permitiendo de esta forma la circulación del título.

Es *unilateral* porque para perfeccionarse no necesita la aceptación del deudor ni de los anteriores endosantes. Es *abstracto* en la medida que es independiente de la causa que genera la transmisión del título. Es *autónoma* por cuanto se adquiere el título en vía originaria, es decir, que el endosatario es inmune a las excepciones personales que podría oponerle el deudor al endosante. Es *típica* porque es el único mecanismo caracterizante de la transmisión de los títulos valores a la orden que produce efectos cartulares y es *formal* porque debe cumplir con ciertos requisitos que la ley impone²⁰.

Como afirma **Lisandro PEÑA NOSSA**²¹, el endoso es un escrito accesorio e inseparable del título valor, por medio del cual el acreedor cambiario transfiere el dominio del mismo a un tercero, lo entrega para su cobro o lo da en garantía de una obligación. Por medio del endoso

²⁰ SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Op. cit., Página 88.

²¹ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 47 y 48.

—continúa **PEÑA NOSSA**—, se sustituye al acreedor cambiario por un tercero, siendo que en estos casos, éste se convierte en propietario del título (endoso en propiedad) o adquiere, entre otras, la facultad para el cobro (endoso en procuración) o, las facultades propias del acreedor prendario (endoso en garantía).

(6) Nombre, D.O.I., y firma del girador.

En sexto lugar tenemos la indicación del nombre, documento de identidad y firma de quien gira la letra de cambio. Así, en realidad, tenemos tres requisitos, todos esenciales, que sirven para identificar a la persona que pone en circulación la letra de cambio y asume responsabilidad insoslayable por su aceptación y pago. Estas informaciones no son posibles de ser sustituidas por otras referencias ni cláusulas sustitutorias; salvo en cuanto concierne a la indicación del documento de identidad, cuyo error de consignación no invalidará el documento. La falta de indicación de estos requisitos afectará la validez de la cambial como tal. El girador, librador o emitente es la persona que crea o pone en circulación este título valor, pudiendo hacerlo a su propio beneficio u orden, conforme ya hemos señalado antes; o, haciéndolo a su propio cargo, esto es, asumiendo la calidad de obligado a pagar la letra de cambio; o bien podrá hacerlo también a la orden y a cargo de terceras personas distintas a él, conforme lo veremos más adelante.

Adviértase que la única firma que se precisa en la letra de cambio, para su validez y puesta en circulación, es la del girador. Así lo señala este inciso f) como sexto requisito. El presupuesto es de que en la letra de cambio irán a intervenir tres sujetos, personas distintas. El que ordena el pago, el que va a pagar y el beneficiario de dicho pago. Vayamos a la firma y a la concordancia de este inciso f) con los arts. 6.1 y 6.2 de la Ley. Esta norma resalta la importancia de la firma del obligado principal en el título valor.

El primer inciso del artículo en comentario, amplía la norma contenida en el numeral 4 de la ALTV. Este último establecía que tanto las personas naturales como jurídicas podían, además de su firma, usar medios mecánicos o electrónicos de seguridad para la *emisión, aceptación o circulación* de los títulos valores. Pues bien, el actual artículo 6, señala que los medios gráficos, mecánicos o

electrónicos de seguridad, además de la firma autógrafa, podrán utilizarse no sólo en la emisión, aceptación y transferencia de los títulos valores, *sino además en la “garantía”*, (aval, en la Ley anterior 16587; aval y fianza en la 27287) omisión de la ALTV.

La emisión de un título valor – conforme viéramos al estudiar el art. 3- es el acto por el cual el girador (librador) le otorga aptitud para circular, una vez cumplidos o cubiertos los requisitos formales esenciales establecidos en la ley. La aceptación, es el acto jurídico a través del cual el girado admite el título valor dirigido contra él por el girador, obligándose en forma principal y directa. El término garantía, nos refiere a la fianza o al aval; y transferencia, al endoso o a la cesión.

El inciso segundo de este artículo, plantea una novedad sustancial con relación a su predecesora. Se prevé la posibilidad de sustitución de la firma autógrafa por una impresa, mecánica o electrónica; siempre y cuando se presenten los siguientes presupuestos:

- Que exista acuerdo previo, expreso y en ese sentido, entre el obligado principal y/o las partes intervinientes.
- Que se haya pactado dicha sustitución como condición de la emisión del título valor.

Las razones que motivaron al legislador a regular la posibilidad de sustituir la firma autógrafa en un título valor, no son otras que la de propiciar la celeridad del tráfico mercantil acorde con el avance tecnológico. Vivimos una época en la que el tiempo es cada vez más valioso; por tanto, mientras más rápidas sean las transacciones o negociaciones, más tiempo se podrá dedicar a otras tareas también provechosas. Así por ejemplo, en el caso que los eventuales giradores fueran gerentes de empresas, la adopción de esta medida les ahorraría tiempo y esfuerzo, pues bastará la existencia de un acuerdo expreso con las otras partes intervinientes en el título valor, para que se sustituya la firma autógrafa por cualquier otro medio gráfico, mecánico o electrónico.

Producto del desarrollo informático, surgen diversos métodos de protección de datos, y uno de ellos es la firma electrónica. Esta

permite al receptor de los datos transmitidos electrónicamente, verificar el origen o autenticación de los mismos y comprobar que son completos y no han sufrido alteración. Firmas electrónicas, son tanto las firmas “escaneadas” como las firmas “digitalizadas”. La diferencia entre ambas radica en que, las primeras, precisan de la firma manuscrita en un documento, la cual se somete al procedimiento de escaneo, para luego insertarla en un procesador de texto. Las digitales involucran la utilización de un sistema de criptografía²² de clave pública.

La utilización de firmas digitales tiene aplicaciones, en principio, en ambientes cerrados como la red local de una empresa o un sistema bancario. Evidentemente, en ambos casos, las ventajas son enormes, pues la seguridad en la identificación ya no radica sólo en la comparación visual de una firma ológrafa con una impresa o escaneada, sino en la coincidencia de los algoritmos o claves criptográficas diseñadas en función al sistema binario utilizado por las computadoras.

La implantación de este moderno sistema, trae consigo la creación de entidades que prestan los servicios de certificación (como se les denomina en Europa a aquellos organismos autorizados a emitir certificados de clave pública). Los certificados emitidos por éstos, pueden utilizarse con fines muy diversos y contener diferentes datos. Puede tratarse de identificadores clásicos, como el nombre, la dirección, el número del documento de identidad, el número de seguridad social, el número del registro de contribuyente; o atributos específicos del firmante, por ejemplo, que permiten establecer si está facultado para actuar en nombre de una empresa, si es solvente, si tiene garantes o si es titular de permisos o de licencias particulares.

En el Perú, este avanzado sistema ha sido puesto en práctica mediante la novísima Ley N° 27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales), la misma que tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que

²² Criptografía, según el Diccionario de la Lengua Española, significa “Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. Criptograma, es una “especie de crucigrama en el que, propuesto por una serie de conceptos, se han de sustituir por palabras que los signifiquen, cuyas letras, trasladadas a un casillero, componen una frase”. (*Diccionario de la Lengua Española*. Tomo II, Décimo novena edición, Madrid, 1970, Página 38.

el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. La firma electrónica es un sonido o proceso electrónico adjuntado o asociado con un documento con el objeto de cumplir las funciones de la firma manuscrita. Es también un concepto mas amplio que el de firma digital, pues incluye, entre otros, a las imágenes digitalizadas de firmas manuscritas, anotaciones escritas y otras informaciones que puedan surgir del mensaje electrónico, como aquella contenida en el campo "De:" del correo. La firma digital, dentro del género de las firmas electrónicas, consiste en la transformación de un mensaje utilizando un sistema de criptografía asimétrica, de tal forma que la persona que lo reciba y posea la clave pública del signatario pueda determinar de una manera fiable que dicha transformación ha sido realizada utilizando la clave privada del signatario y, si el mensaje ha sido alterado, desde el momento de la transformación.

La firma digital se caracteriza porque (1) está vinculada al signatario de manera única; (2) permite identificar al signatario; (3) es creada por medios que el signatario puede mantener bajo su control y (4) está vinculada con los datos relacionados, de modo que se detecte cualquier modificación ulterior de los mismos. La criptografía es aquel sistema mediante el cual se transforma cualquier clase de datos para que se obtenga un resultado ininteligible (aunque sea temporalmente), a fin de que más tarde pueda ser recuperado en su forma original. Mediante este sistema sólo las personas que tienen las claves o decodificadores aplicables podrán tener acceso a la versión original del mensaje. La criptografía simétrica, por un lado, es aquel sistema de criptografía mediante el cual los procesos de codificación y decodificación se realizan con una sola clave. La asimétrica, por el contrario, utiliza dos claves en la misma operación: una pública y una privada, de manera que los mensajes codificados con una de ellas sólo pueden ser decodificados con la otra. Por ejemplo, el PKI que es el sistema de criptografía asimétrica más común, actualmente requiere la participación de entidades certificadoras que otorguen certeza respecto al titular de ambas claves. En este sistema la clave privada es aquella que crea una firma digital y la clave pública es la utilizada para verificarla. Sin embargo, si se desea otorgar confidencialidad al mensaje, de modo que sólo sea leído por el destinatario designado, la clave pública se utilizará para codificar el mensaje y la clave privada para decodificarlo. La clave privada sólo es

conocida por el signatario y no puede ser entregada a terceros ni por el signatario ni por la entidad autorizada; mientras que la clave pública es conocida por dicha entidad y debe ser proporcionada a quienes reciban mensajes del signatario, conjuntamente con una constancia que permita identificar al signatario. Una vez comprobada una firma digital, el destinatario sabrá con certeza que el mensaje fue firmado con la clave privada del emisor, por lo que no habrá duda respecto a la identidad del signatario, que el mensaje de datos no ha sido alterado ni manipulado durante el envío, dado que cualquier alteración sería notoria al destinatario y que contamos con una evidencia incontestable que evitará el rechazo del origen o recepción del mensaje o la integridad de su contenido.

La citada ley entiende por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Asimismo, regula los temas referentes a la firma digital, los certificados digitales y las entidades de certificación y de registro.

Ahora bien, podría ocurrir el caso de que quien firme por el girador sea (1) su representante lea y válido; (2) que sea un falso representante; o (3) que exceda en sus facultades de representación. Veamos qué dicen sobre el particular las normas de esta ley, tales como sus arts. 7 y 8, y las disposiciones del Código Civil. Esta norma regula la situación que se presenta cuando quienes asumiendo una representación que no tienen o excediéndose de la que cuentan, obligan al supuesto representado con la suscripción de un título valor. **Ulises MONTOYA MANFREDI**²³ señala que es importante determinar si en este caso, se está en presencia de un poder de representación suficiente o de un *falsus procurator*. Plantea esta diferenciación porque aun cuando el representante ejerciere o presentare poder suficiente, éste no lo faculta a suscribir o firmar títulos valores, pues para obligar al representado se requiere de poder especial. El caso

²³ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Cuarta edición, corregida y aumentada, Editorial Desarrollo S.A. Lima, 1987, Página 36.

del *falsus procurator*, es aquél que queda obligado frente a tercero en virtud de la confianza depositada en él.

La norma en estudio, plantea dos situaciones:

- La de aquella persona que por cualquier concepto, como representante y sin estar autorizado para ello, firma un título valor.
- La situación particular del representante, al que sí se le han otorgado poderes, pero que excede las facultades conferidas en virtud de éstos.

Asimismo, la doctrina nacional destaca que la disposición comprende tanto el caso del representante legal, tutor, curador, gerente de sociedad, como el del mandatario.

Para todos los casos, la ley precisa que este representante o seudo-representante se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio; la obligación resulta, pues, ineficaz para el seudo-representado, salvo los eventuales efectos a su cargo. Así dispone nuestro cuerpo sustantivo en su numeral 161 que a la letra dice: “El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye”.

Sin embargo, dichos actos de representación directa sin poder, resultan susceptibles de ratificación por el representado observando la forma prescrita para su celebración. Dicha ratificación tendrá efecto retroactivo, quedando a salvo los derechos de tercero. Así los dispone el art. 162 del C.C., agregando que el tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda. Dicha facultad de ratificar se trasmite a los herederos.

El caso de la representación directa sin poder, por quien no tiene la que se atribuye, sería uno propio de responsabilidad extracontractual. Si por la actuación se causó daño al seudo-

representado, ello apareja la obligación de indemnización, correspondiéndole al autor el descargo por falta de dolo o culpa; en ese sentido prescribe el art. 1969 del C.C.

(7) Indicación del vencimiento.

La indicación del vencimiento ocupa el sétimo lugar, que viene a ser un requisito prescindible o no esencial, desde que la ley admite que ante la falta de dicha indicación se debe considerar que es una letra de cambio pagadera a la vista. Lo que si es importante precisar es que si se señala en modo expreso esta información del vencimiento, debe hacerse solamente del modo o formas que la ley prevé para ese efecto. No existe pues libertad en la forma de señalar el vencimiento de la letra de cambio. Lo que se admite es que no se haga indicación alguna, subsanándose sólo en ese caso al considerarla como pagadera a la vista.

(8) Indicación del lugar de pago.

El lugar de pago constituye el octavo y último dato, requisito que no es esencial a pesar de su importancia; pues en caso de no haberse señalado en forma expresa dicho lugar en el documento, opera la presunción legal de que es pagadero en el lugar señalado junto al nombre del girado. De este modo, tal presunción sólo operará en la medida que exista un domicilio señalado junto al nombre del girado; pues en caso contrario, el pago será exigible en el domicilio real del obligado principal. La determinación de este lugar tiene singular importancia, dado que es en dicho lugar donde debe ser cumplida la obligación que contiene el título y debe ser en dicho lugar donde se realicen las diligencias y trámites para el protesto, en su caso; ejecución y declaratoria de ineficacia; de ahí que, si no se señala en modo especial y expreso ese lugar de pago en el mismo documento, por lo menos debe indicarse un domicilio junto al nombre del girado. Sólo ante la falta de ello, opera a modo de solución del problema, la posibilidad de exigir el pago en el domicilio real del obligado principal, que no necesariamente es el girado. También para la cobranza judicial, el juez competente es el del domicilio del girado-aceptante, del deudor.

Antes de comentar con mayor amplitud la temática “lugar de pago” con arreglo al art. 64 y sgts. de esta ley, que es lo pertinente, por su estrecha concordancia con este art. 119 inc. h), que contiene el octavo dato o requisito de la letra de cambio, se transcriben y formulan breves atingencias a algunas jurisprudencias vinculadas a los requisitos y formalidades de la letra de cambio, en general:

(1) Exp. N° 389-94 Lima. La acción ejecutiva es eminentemente formal, por lo que se requiere del título original en el que se apoya.

Lima, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.- VISTOS; con el acompañado, y CONSIDERANDO: que la acción ejecutiva es eminentemente formal, por lo que requiere del título original en el que se apoya; que en el presente caso dicho título ha sido sustraído y el ejecutado viene negando su firma agregando que ante la sustracción del referido título que jamás aceptó se ha visto obligado a denunciar los hechos, lo que se acredita con el oficio de fojas cuarenticinco; que, por lo expuesto, para resolver, el Juez debió disponer una pericia grafotécnica de la firma puesta en la letra de cambio cuya copia obra a fojas cuarentidós con las firmas del demandado que corren en autos y demás documentos preconstituidos, que al efecto deberán aportar los interesados; que igualmente deberá tenerse a la vista la instrucción que se menciona a fojas cuarenticinco, si estuviese fenecida; declararon NULA la sentencia de vista de fojas noventa y nueve, su fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y tres e INSUBSISTENTE la apelada de fojas ochenta y cuatro, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres; MANDARON que el a-quo expida nuevo fallo actuando previamente las pruebas señaladas en la parte considerativa de esta resolución.

(2) Exp. N° 18662-96. Lima. La letra de cambio que no consigne el nombre del girador, no cumple con los requisitos de ley. El nombre que debe constar es el que usa el girador en todos sus actos y la firma que debe estampar es la que acostumbra en los documentos ordinarios y corrientes.

Lima, diez de junio de mil novecientos noventa y seis.- AUTOS y VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que la Ley de Títulos Valores 16587, establece en su artículo primero, que el documento que represente o contenga derechos patrimoniales tendrá la calidad y

los efectos de título valor cuando esté destinado a la circulación y reúna los requisitos formales esenciales que por imperio de la ley le correspondan, según su naturaleza; SEGUNDO: a que, la letra de cambio es un título eminentemente formal; el artículo 61 de la Ley antes mencionada dispone que la letra de cambio debe contener los datos y las indicaciones contenidos en los ocho incisos estableciéndose éstos como los requisitos que la ley le ha señalado, sin los cuales no tendrá ninguna validez; TERCERO: a que, la letra de cambio debe de contener el nombre y la firma de quien la emite. El nombre que debe hacerse constar es el que usa y acostumbra el girador en todos sus actos, y la firma que debe estampar es la que formalmente acostumbra en todos los documentos ordinarios y corrientes; siendo que este requisito lo establece el inciso octavo del artículo 61 de la Ley 16587; CUARTO: que, de la letra anexada a la demanda se advierte que en ella no se ha dado cumplimiento al requisito antes mencionado, esto es que no tiene consignado el nombre del girador; por cuyas razones, estando a lo glosado y a lo dispuesto por el artículo 699 del Código Procesal Civil: SE DENIEGA la ejecución promovida.

Esta ejecutoria tiene que ver con el arts. 1 y 61 inc. 8 de la ley 16587 y 1.1 y 119.1 f) de esta NLTV 27287 y se incluye acá pues está referida a los requisitos formales esenciales que debe insertar cada título valor. El art. 1 de la anterior ley, segundo párrafo, decía que si al título le faltaba alguno de los requisitos formales, perdía su carácter de tal. Nosotros nos preguntamos, que iría a "perder" si nunca llegó a ser título valor con arreglo a ley. Se ha expresado mejor el concepto ahora cuando se indica que "el documento no tiene carácter de título valor" y punto.

(3) Exp. N° 1049-96. Lima. La letra de cambio que no contenga el nombre de quien emite el título valor, carece de mérito ejecutivo por la falta de un requisito esencial.

Lima, doce de agosto de mil novecientos noventa y seis.- AUTOS y VISTOS; estando a lo que se expone: téngase presente; y VERIFICÁNDOSE haberse incurrido en causal de nulidad al momento de calificar la demanda, la que se realizó como si se tratara de un proceso ejecutivo, habiéndose interpuesto la misma en la vía procedimental abreviada, siendo ello así, de conformidad con el

artículo 174º del Código Procesal Civil; se DECLARA nula la resolución número uno; y ATENDIENDO: proveyendo con arreglo a ley la demanda presentada; con el Arancel Judicial, Letra de Cambio y documentos que se anexan; PRIMERO: que, de conformidad con el artículo 17º de la Ley N° 16587 sobre Títulos Valores, el título valor apareja ejecución si reúne los requisitos exigidos por la presente ley, sin embargo el tenedor podrá optar por el ejercicio de su acción en la vía de conocimiento o abreviado, según sea el caso, debiendo estarse a lo dispuesto para la calificación de las acciones en la Tercera Disposición Complementaria del Código Procesal Civil; SEGUNDO: que, siendo ello así, se establece que para el ejercicio de la acción cambiaria, aunque no sea la ejecutiva, el título valor debe reunir los requisitos exigidos por la ley, ya que los derechos que se ejercitan son los que emanan del mismo, por lo que los requisitos para la acción cambiaria son los mismos que para la acción ejecutiva, debiendo el tenedor en caso de haberse perdido el mérito ejecutivo del título presentado interponer la acción causal correspondiente; TERCERO: que, es de observar que la letra de cambio que se anexa, al no contener el nombre de quien emite el título – valor, carece de requisito esencial previsto en el inciso 8 del artículo 61º de la Ley de Títulos Valores, en consecuencia carece de mérito ejecutivo, no pudiendo al accionante hacer uso de la acción cambiaria directa en la vía de proceso abreviado; siendo ello así, de conformidad con el inciso 6 del artículo 427º del Código Procesal Civil; se declara IMPROCEDENTE la demanda incoada, dejándose a salvo el derecho del actor para hacerlo valer con arreglo a ley, devolviéndose los recaudos bajo constancia en autos.

Nos remitimos al comentario de la ejecutoria anterior.

(4) Exp. N° Cas. 1527-96/Piura. “... Por el principio de incorporación, el título valor es un documento probatorio, constitutivo y dispositivo que contiene una declaración de voluntad de la que deriva una obligación a cargo del que suscribe el título...”

Lima, veintitrés de abril de mil novecientos noventiocho. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en la audiencia pública el veintidós de abril del año en curso, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la Dirección Ejecutora

de Coopop Piura contra la resolución de vista de fojas sesenticuatro, su fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada, contenida en la audiencia única de fojas treintisiete, su fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, declara fundada la demanda de fojas siete formulada por el Banco Regional del Norte, con lo demás que contiene, así como integrando dicha sentencia a fojas sesenta y ocho, confirmaron el auto apelado en la misma audiencia única, que declara infundada la excepción de representación insuficiente del demandado. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete ha declarado procedente dicho recurso por la causal relativa a la interpretación errónea de los Artículos dieciocho, treintinueve y cuarenta del Decreto Supremo número cero veintidós guión noventa y tres PRES ya que se atribuye indebidamente a los Directores Ejecutores de Cooperación Popular Piura una representación legal que de conformidad con el Artículo dieciocho del Decreto aludido, sólo le corresponde al Gerente General. 3. CONSIDERANDO: Primero.- que las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitución, la ley o el respectivo estatuto tal como dispone el Artículo sesenticuatro del Código Procesal Civil. Segundo.- que de conformidad con el Artículo cinco del Decreto Supremo número cero veintidós guión noventa y tres PRES la Oficina Nacional de Cooperación Popular, también identificada como Coopop, es una persona jurídica de derecho público interno que integra el sector del Ministerio de la Presidencia como Institución Pública Descentralizada de carácter Multisectorial y funciona con autonomía técnica, económica y administrativa y para efectos operativos constituye un pliego presupuestal. Tercero.- que a tenor del Artículo dieciocho del mismo dispositivo legal señalado en el considerando anterior, el Gerente General es el representante legal de la Oficina Nacional de Coopop. Cuarto.- que por otro lado las Unidades Ejecutoras, entre las que se encuentra la Dirección Ejecutora Coopop Piura, son órganos desconcentrados dependientes de la alta dirección encargadas de coordinar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de la institución en sus respectivas zonas; los que, de conformidad con el Artículo treintinueve última parte del citado Decreto Supremo número cero veintidós guión noventa y tres PRES, están a cargo de funcionarios con nivel subgerentes; que en el caso de autos, dichos funcionarios son el Director Ejecutor y el Administrador de la Dirección Ejecutora

de Piura, los mismos que suscriben el pagaré materia de ejecución. Quinto.- que conforme al argumento esgrimido, es pertinente considerar que a tenor del título valor subjudice y al vigor del principio de incorporación y literalidad cambiaria, la relación sustantiva de dicho documento cartular está integrada por el ejecutante Banco Regional del Norte y como ejecutada la Dirección Ejecutora de Cooperativa Popular Piura; por consiguiente, las facultades de representación procesal recaen en quienes asumen las direcciones en las entidades involucradas, que para el caso de la Dirección Ejecutora de Coopop Piura recae en su Director y Administrador. Sexto.- que por el principio de incorporación, el título valores un documento probatorio, constitutivo y dispositivo que contiene una declaración de voluntad de la que deriva una obligación a cargo del que suscribe el título, que en este caso es la mencionada Dirección Ejecutora, siendo así sólo ella puede ser emplazada y por tanto representada por los funcionarios que están a cargo de ella. Séptimo.- que con lo expuesto en el Dictamen Fiscal y conforme con lo previsto por el Artículo trescientos noventisiete (del C.P.C.) cabe desestimar el recurso. 4. SENTENCIA: Que estando a las consideraciones que preceden: declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Dirección Ejecutora Coopop Piura; en consecuencia NO CASAR la resolución de fojas sesenticuatro, su fecha veinticuatro de julio de mil noventa y seis.

3.4. FORMAS DE VENCIMIENTO DE LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 121°.- Formas de señalar el vencimiento

121.1 La Letra de Cambio, para tener validez como tal, puede ser girada solamente:

- a) A fecha fija;*
- b) A la vista;*
- c) A cierto plazo desde la aceptación; o*
- d) A cierto plazo desde su giro.*

121.2 La Letra e Cambio girada y pagadera dentro de la República que indique vencimiento distinto a los señalados en el párrafo anterior o vencimientos sucesivos no produce efectos cambiarios.

121.3 En caso de designarse el vencimiento utilizando más de una de las formas indicadas en el primer párrafo del presente artículo,

siendo una de ellas fecha fija, y hubiera diferencia entre ellas, prevalece la fecha fija que se haya consignado.

121.4 La indicación de la fecha de vencimiento puede constar ya sea en recuadros, en forma completa o abreviada. La indicación de cláusulas como "a la fecha antes indicada", "al vencimiento" u otras equivalentes, que se limiten a reiterar la fecha de vencimiento consignada en el título valor, no lo invalida.

121.5 A falta de indicación del vencimiento, se considera pagadera a la vista.

En la letra de cambio y otros títulos valores u obligaciones, la fecha de vencimiento, en general, es la fecha en la que debe cumplirse con la obligación asumida. La fecha de vencimiento de las obligaciones, en general, puede señalarse del modo que mejor les parezca a las partes interesadas. En el caso de la letra de cambio, dicha fecha de vencimiento solamente puede señalarse de una cualquiera de las cuatro formas señaladas por este artículo. No cabe por tanto señalar como fecha de vencimiento de la letra de cambio, aun cuando resulte una fecha determinable, una como la siguiente: "a los 90 días desde la fecha de embarque"; "al día siguiente de la próxima navidad" u otras similares. La ley dispone que el vencimiento puede y debe señalarse solamente de una cualquiera de las cuatro formas indicadas en este numeral: (a) a fecha fija, (b) a la vista, (c) a cierto plazo desde la aceptación y (d) a cierto plazo desde su giro. No existe pues posibilidad de utilizar otra fórmula para señalar el vencimiento de una letra de cambio, sancionándose con invalidez cambiaria el uso distinto de indicar el vencimiento de cambial girada y pagadera dentro de la República.

A lo que la Ley le presta solución y le concede salida, es a la situación de no haber indicado, en la letra de cambio, ninguna forma de vencimiento, o de haber indicado más de una. Esto es, que haya omisión total en la indicación de su vencimiento, lo que no significa que se esté haciendo uso de una quinta forma. En este caso no se usa ninguna, hay vacío total. En este supuesto, como señala expresamente el párrafo final de este artículo, opera una presunción legal, considerándose la letra de cambio como una que vence a la vista. Y es que este requisito es uno -no esencial-, desde que puede prescindirse. En la hipótesis de haber utilizado más de una fórmula, siendo por lo menos una de ellas *la de fecha fija*; se deberán ignorar

las otras y validar ésta, debiéndose considerar la cambial como pagadera en la fecha fija indicada. De no haberse empleado la fecha fija será difícil determinar su vencimiento si las demás resultan discrepantes entre sí, en cuyo caso dicha letra de cambio no surtirá efecto cambiario al no ser posible aplicar las presunciones legales previstas, dejando a salvo, por supuesto, la obligación nacida de la relación causal.

En relación a las formas previstas por la ley anterior, apreciamos algunos cambios. Así, en lugar de señalar como forma de indicar el vencimiento "a cierto plazo desde la vista", el actual texto legal señala con más propiedad "a cierto plazo desde la aceptación". La fórmula anterior llevaba a una grave confusión, al identificar "vista" con "aceptación". Ambos actos para la ley derogada parecían ser sinónimos. A partir de tal confusión, se han expedido resoluciones judiciales de las más curiosas, confundiendo la "vista" con la "aceptación" y, por asimilación, aplicándose inclusive a la emisión del pagaré, llegando con esa lógica a concluir que así como la letra de cambio girada a la vista vence en la fecha de su aceptación, lo propio debe considerarse en el caso del pagaré a la Vista que debe considerar que no era posible la emisión de un pagaré a la vista. Al respecto, el actual texto legal hace una clara distinción entre el vencimiento (i) a la vista y la (ii) aceptación, que resultan ser actos e instituciones jurídicas totalmente distintas una de la otra. Un título valor con vencimiento a la vista, significa que puede ser presentado para su pago en la oportunidad que su tenedor así lo decida, dentro de los plazos que las partes o la ley fija para ese efecto; por lo que nada impide que una letra de cambio ya aceptada o girada a cargo del mismo girador sea pagadera "a la vista"; o, que se trate de una cambial pendiente de aceptación que tenga tal indicación de vencimiento.

En el supuesto de utilizarse esta fórmula, a cierto plazo desde la aceptación, será necesario indicar la fecha en la que se realizó tal aceptación; pues a partir de esa fecha se hará el cómputo del plazo de su vencimiento. En los casos de letras de cambio giradas fuera de la República, aun cuando fuesen pagaderas dentro del país, podrán usarse modos de señalar la fecha de su vencimiento en forma distinta a las previstas en este artículo, formas éstas que son aplicables

obligatoriamente sólo a las letras de cambio giradas dentro de la República y conforme a la presente ley.

En la letra de cambio, no se admite señalar varios plazos de vencimiento y vencimientos sucesivos, por cuanto ella representa el pago de una (no de varias) suma de dinero. A diferencia de títulos valores como la letra de cambio que contiene la obligación de pagar una sola suma de dinero, otros títulos pueden admitir y usarse para representar el pago de varias sumas de dinero, consistentes en cuotas, pagos periódicos o en capital e intereses. Así, tenemos el pagaré, la factura conformada, o el título de crédito hipotecario negociable, o los bonos, que admiten y representan pagos de diversas sumas de dinero. La letra de cambio, no.

Hay libertad para usar la forma que el girador estime más conveniente para señalar el vencimiento. Los criterios de la autoridad judicial han sido diversos y contradictorios sobre este punto. Tenemos resoluciones judiciales que señalan que el vencimiento señalado al inicio de la letra de cambio y en recuadros para indicar el día, mes y año, no forman parte del texto de la cambial, declarando bajo ese criterio que carecen de validez como título valor. Si bien es cierto que el derecho cambiario se caracteriza por la formalidad, no menos cierto es que las relaciones comerciales no pueden concebirse como actos rígidos que linden con la irracionalidad de la norma o que se haga un culto a la formalidad sacrificando la racionalidad. A fin de evitar interpretaciones extremas, se señala que el vencimiento de la letra de cambio puede estar consignado en recuadros, sea en forma completa o abreviada, concediéndose una libertad plena para utilizar el modo más conveniente a los intereses de los intervinientes, sin que ello afecte la validez del documento como título valor. Del mismo modo, se admite que se haga referencia a la fecha de vencimiento en forma reiterada, con cláusulas como "al vencimiento", "a la fecha antes indicada" o similares, lo que en modo alguno invalida o debe invalidar el documento.

3.4.1. A LA VISTA

Artículo 141.- Vencimiento a la vista

141.1 La Letra de Cambio a la vista vence el día de su presentación al girado para su pago.

141.2 La Letra de Cambio pagadera a la vista, antes de su presentación al pago, puede o no estar aceptada.

141.3 Si no cuenta con aceptación, la aceptación y el pago se harán simultáneamente o exigirse su aceptación antes de su presentación al pago. De no estar aceptada, en su caso, procederá su protesto por falta de aceptación total o parcial; salvo que por ley especial no sea necesaria su aceptación.

141.4 El pago de la Letra de Cambio a la vista aceptada podrá exigirse inclusive desde la fecha de su aceptación. La Letra de Cambio a la vista aceptada en oportunidad de su giro o en fecha posterior, que no fuese atendida en su pago el día de su presentación para ese fin, será protestada por falta de pago, salvo disposición distinta de la Ley.

141.5 La presentación al pago de la Letra de Cambio a la vista podrá hacerse en cualquier momento, a libre decisión de su tenedor, desde el día mismo de su giro inclusive, y durante el plazo que al efecto se hubiere señalado en el documento. A falta de dicha indicación, la presentación para su pago deberá hacerse dentro de un plazo no mayor a un año, desde la fecha de su giro.

141.6 Si en la Letra de Cambio a la vista se hubiera señalado la prohibición de ser presentada a cobro antes de una fecha determinada, el plazo para su presentación al pago se contará desde dicha fecha determinada

La presente ley, a diferencia de la anterior, hace un claro deslinde ente “vencimiento a la vista” y el acto de “aceptación”. Un título valor pagadero a “la vista”, significa que su tenedor puede presentarlo a cobro en la oportunidad que él así lo determine libremente, dentro de los plazos eventualmente señalados en el

mismo documento o a falta de tal indicación, dentro de cualquiera de los días del año, computado desde su emisión. Así, una letra de cambio a la vista vence el día en que su tenedor lo presente para su pago al girado (aceptante o no). Esta modalidad de vencimiento, ya se ha venido observando tal como la presente ley lo concibe con el cheque, que es un típico valor pagadero “a la vista” o a su presentación al cobro. La misma naturaleza y régimen tendrán los demás títulos pagaderos a la vista. Deben atenderse en su pago, en la fecha que su tenedor lo presente para ese fin.

Bajo esta nueva concepción y total distinción entre vencimiento a la vista y acto de aceptación, una letra de cambio a la vista puede estar o no aceptada. La ley anterior (art. 89, párrafo final), al identificar indebidamente ambas instituciones jurídicas (vencimiento a la vista y aceptación), concluía que una letra de cambio emitida a la vista vencía en el acto de ser aceptada, a pesar de que simultáneamente disponía que dicha cambial podía ser presentada para su pago dentro de un año desde la fecha de su giro. Así, según el anterior régimen, en la práctica esas cambiales nunca podían ser protestadas por falta de pago; pues o eran aceptadas y pagadas simultáneamente o no eran pagadas, en cuyo caso carecía de sentido para el girado aceptar y no pagar, por lo que en la práctica sólo podían ser protestadas por falta de aceptación.

Lo grave es que asimilando este régimen inadecuado, las resoluciones judiciales concibieron que en el caso del pagaré a la vista, su vencimiento se producía en el acto de su emisión. Esto es, vencía en la misma fecha de su creación, careciendo de todo sentido la norma que disponía que podía ser presentado para su pago en el curso de un año o fecha al efecto señalada en el mismo documento. Y es que por mera analogía mal aplicada, se asimiló la aceptación de la letra de cambio a la vista con el emisión del pagaré a la Vista. En la presente ley, quedan finalmente modificados esos criterios y se hace clara diferencia entre vencimiento a la vista y acto de aceptación de la letra de cambio.

Las letras de cambio con vencimiento a la vista ya aceptadas, pueden presentarse para su pago en cualquier momento que decida su tenedor, dentro del plazo mayor o menor a una año que pueda haberse señalado en el mismo documento o en el curso del año de su

giro si no existe tal indicación para su cobro. Las letras de cambio con vencimiento a la vista no aceptadas, pueden presentarse a cobro igualmente en las mismas oportunidades antes señaladas, en cuyo caso la aceptación y pago se harán en forma simultánea. Puede alternatively en estos casos presentarse dicha cambial sólo para su aceptación, postergando su presentación al pago ya con la seguridad que cuenta con un obligado principal.

Sólo si la aceptación, o la aceptación y pago simultáneo solicitados fuesen rechazados, procederá el protesto por falta de aceptación. Aun cuando resulta sumamente teórico que una cambial con esta modalidad de vencimiento fuese solamente aceptada y no pagada a pesar que el pago haya sido exigido en forma simultánea, cabe tal posibilidad remota, en cuyo caso se procederá a protestarla por falta de pago, como cualquier cambial que ya contara con dicha aceptación.

En modo excepcional y como un caso único en la legislación peruana, se permite que una letra de cambio no aceptada sea protestada por falta de pago y tenga pleno mérito ejecutivo, norma que contiene el C. de Co. desde 1902 y actualmente lo contiene también la Ley N° 26702 o Ley General del Sistema Financiero (art. 228), cuando se tratan de cambiales que representan saldos deudores de cuenta corrientes; cambiales a las cuales se refiere justamente la parte final del párrafo 140.3.

En cuanto concierne a las cambiales con vencimiento a la vista, giradas a cargo del mismo girador, o ya aceptadas al ponerse en circulación, o que hubieren sido aceptadas antes de haber sido presentadas para su pago, es obvio que no procedería que protesten por falta de aceptación, sino sólo por falta de pago. Ello no será necesario si, por ejemplo, tiene la cláusula que libera del protesto.

La oportunidad o fecha de pago de una letra de cambio a la vista, como de cualquier otro título valor con ese vencimiento, se produce el día en que sea presentada al girado para su pago. Tal fecha será libremente elegida por el tenedor. Podría entonces exigirse su pago desde le día mismo de su giro, hasta la fecha límite convencionalmente establecido y que debe estar señalado en el mismo documento, la misma que puede ser mayor o menor a un año

desde su giro; o, a falta de esa indicación expresa de fecha límite, dentro del plazo legal que es de un año desde su giro. Un típico título valor pagadero siempre a la vista es el cheque común, el que debe ser pagado en el acto o fecha de su presentación al girado para ese efecto. La letra de cambio a la vista, tiene el mismo régimen. No tiene por qué ser diferente en cuanto ambos títulos señalan la misma modalidad de vencimiento, distinguiéndose en todo caso en el lapso durante el cual puede ser presentado a cobro, teniendo en cuenta que en el caso de la letra de cambio tal plazo puede ser menor o mayor a un año, plazo éste que se aplica sólo ante la falta de indicación expresa de otro.

Se admite la posibilidad que en lugar o además de señalar un límite para su presentación al pago, se fije una fecha determinada antes de la que no debe presentarse al pago. Ello significa que durante ese lapso en modo alguno puede vencer el plazo de esa cambial al no ser posible su presentación con ese fin por lo que el plazo convencional o legal de presentación para su pago debe computarse desde esa fecha, antes de la que no puede presentarse para su pago y no desde la fecha de giro de la cambial. Tal sería el caso de una letra de cambio girada el 30.Octubre.2000 que tenga la cláusula "Presentar para su pago a partir del 1.Enero.2001" o la cláusula "Presentar para su pago a partir del 1.Enero.2001 y dentro de 180 días siguientes". En el primer caso, se podrá presentar para su pago hasta el 1.enero.2002; mientras que en el segundo caso sólo durante los primeros 180 días del año 2001. En ambos casos, el cómputo se debe hacer desde la fecha posible de presentarse a cobro y no desde la fecha de su giro. En cambio si la cambial no tuviera esta cláusulas, el plazo de su presentación para su pago debe computarse desde la fecha de su giro. En el caso del ejemplo, hasta el 30 de octubre del 2001. Guardando las distancias, este régimen de suspender el derecho de presentación del título valor a la vista al pago por el lapso fijado en el mismo documento, se aplicará también ahora al cheque de pago diferido, que es un cheque especial que se introduce con esta Ley.

3.4.2. A CIERTO PLAZO DESDE LA ACEPTACION

Artículo 142.- Vencimiento a cierto plazo desde la aceptación

142.1 El vencimiento de una Letra de Cambio a cierto plazo desde la aceptación se determina por la fecha de su aceptación o, en defecto de aceptación total, por la fecha del respectivo protesto por falta de aceptación, aplicándose en este caso lo dispuesto por el Artículo 147.

142.2 La aceptación sin fecha se considera otorgada el último día del plazo establecido para presentarla a la aceptación.

142.3 Esta forma de señalar el vencimiento podrá constar con la cláusula “a cierto plazo desde la aceptación” u otras equivalentes. La cláusula “a cierto plazo vista”, se entenderá que se refiere al vencimiento de que trata el presente artículo.

Constituye toda una innovación esta forma más clara de señalar el vencimiento de una letra de cambio con cómputo desde la fecha de su aceptación. La norma anterior, identificando la “vista” con la “aceptación” señalaba “a cierto plazo desde la vista”; como si “vista” fuese “aceptación”; lo que llevaba a confundir el vencimiento a la vista con la aceptación, llegando indebidamente a establecer que una letra de cambio con vencimiento a la vista, vencía en el acto mismo de su aceptación, (art. 89, último párrafo, Ley N° 16587) generando ello serios problemas que se evitarán en adelante.

Esta forma de vencimiento es propia exclusivamente de las letras de cambio; pues la aceptación sólo se realiza en estos títulos valores desde que el obligado principal designado en el documento (girado) usualmente es persona distinta al creador (girador) del documento, por lo que es menester que aquél exprese en modo explícito y con su intervención mediante su firma en el título valor en cuyo libramiento no ha intervenido y, sin embargo; debe asumir la calidad de obligado principal.

Esta forma de señalar su vencimiento no sería procedente en el caso que el girador libere la cambial a cargo de él mismo. Esto es,

que girador y girado sean la misma persona, en cuyo caso carecería de objeto que el obligado principal exprese su voluntad y compromiso de pago mediante la aceptación, cuando ya lo hizo señalando él mismo como girador que asumirá la obligación de su pago, siendo innecesaria su nueva intervención; pudiendo sin embargo reiterar tal calidad aceptándola.

El vencimiento de una cambial con esta fórmula, se determina computando el plazo señalado, desde la fecha del acto de aceptación, por lo que resulta muy importante señalar y dejar constancia en el mismo acto y documento tal fecha de aceptación, a partir de la que se inicia el cómputo del plazo de vencimiento.

Si la aceptación no tuviera fecha, no sería posible determinar la fecha de vencimiento. Por ello, a modo de solución de esta vacío, la ley prevé varias fórmulas de solución. Así según el art. 128.2, el tenedor puede completar tal vacío y señalar en el documento la fecha en que logró obtener la aceptación. Si el tenedor no pudiese hacerlo por desconocerlo por ejemplo, en ese caso opera la presunción que la aceptación fue realizada el último día que se hubiere establecido para obtenerla. Así, la falta de indicación de la fecha de aceptación constituye un requisito subsanable.

En el caso de letra de cambio no aceptada, su fecha de vencimiento se computará –a falta del plazo inicial por carencia del acto que debía señalar el plazo inicial- desde la fecha en que se logre su protesto por falta de aceptación, fecha ésta cierta y determinada. En ese caso, la letra de cambio no debe ser más presentada al girado para su pago, convirtiéndose el girador en el obligado principal, pudiendo exigirse a éste de inmediato su pago, sin requerir de protesto por falta de pago. Más si la aceptación fue parcial, el vencimiento del plazo por la parte aceptada ocurrirá según cómputo que se haga desde la fecha de dicho protesto.

Como quiera que en el mercado se ha venido utilizando la cláusula “a días vista”, existe la posibilidad que algún agente siga usándola, por lo que se dispone que en tal caso debe entenderse que es “a cierto plazo desde la aceptación”.

3.4.3. A FECHA FIJA Y A CIERTO PLAZO DESDE SU GIRO

Artículo 143.- Vencimiento a fecha fija y a cierto plazo desde su giro.

143.1 La Letra de Cambio a fecha fija vence el día señalado.

143.2 La Letra de Cambio a cierto plazo desde su giro vence al cumplirse dicho plazo.

Se trata de la forma más precisa de señalar el vencimiento de una letra de cambio, señalando una fecha determinada del calendario, que evita toda duda y cómputo. Es un esa fecha cuando debe ser pagado su importe y es a esa fecha hasta cuando deben realizarse los ajustes de su importe, en los casos en los que se hubiere acordado el reajuste de su monto.

Esta fecha determinada servirá también de fecha inicial de cómputo para los fines de otros plazos relacionados con la letra de cambio, como es el plazo para su protesto, plazos de extinción de las acciones cambiarias de generación de intereses moratorios, etc.

Este plazo fijo de vencimiento, puede consignarse con total libertad, en el lugar que desee el girador y aun en forma abreviada y/o en recuadros, como se estila en la práctica comercial y lo permite el art. 121.4; o, de los modos señalados en el siguiente artículo; lo que tiene plena validez en la medida que sea posible determinar la fecha de su pago en forma indubitable. De este modo no tendremos más inexplicables decisiones judiciales que señalan que la indicación del vencimiento en recuadros no forma parte de la cambial.

La indicación del vencimiento, indicando un plazo desde la fecha de giro, es otra alternativa de fecha cierta y fija; pues en ese caso requiere hacerse un cómputo en días, meses o años o lapso indicado al efecto en el título, partiendo de la fecha de giro, teniendo en cuenta que si dicho lapso está señalado en días, no debe comprenderse el día inicial, como dispone el art. 183.4. C.C.

Artículo 144.- Vencimiento a meses o años

144.1 El cómputo de los plazos de vencimiento fijados en meses, años u otras formas permitidas por la ley se determinará según las normas del derecho común.

144.2 Las expresiones “ocho días” o “quince días” equivalen al plazo de ocho o de quince días y no de una semana o dos semanas. La expresión “medio mes” indica un plazo de 15 (quince) días. Si al indicarse el día del vencimiento se ha omitido el año, se entiende que en el mismo año de la emisión de la Letra de Cambio o, de corresponderle, el año siguiente. Si se indica como fecha de vencimiento una que no existe en el calendario, se entiende que la fecha vence el último día correspondiente al mes de vencimiento.

144.3 En los plazos legales o convencionales, no se comprenderá el día que les sirva de punto de partida, salvo expresa disposición en contrario de la ley.

144..4 En el cómputo de los días no se excluyen los días inhábiles, pero si el día del vencimiento para su aceptación o pago lo fuera, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente. Sin embargo, el plazo para su protesto se computa a partir del día de vencimiento señalado en el documento o en el que según su texto resulte exigible.

En las diversas formas que existen para señalar el vencimiento de la letra de cambio, puede recurrirse al uso de menciones e períodos semanales, quincenales, mensuales, semestrales o anuales. Así, por ejemplo, bien puede señalarse en una letra de cambio pagadera a la vista que debe ser presentada a cobro, dentro de los tres semestres siguientes a su fecha de giro; en una cambial a cierto plazo desde su aceptación, señalar que es pagadera a un mes desde su aceptación.

En estos casos, el cómputo se hará conforme al Código Civil, en cuyo art. 183 encontramos los alcances que el período anual y mensual tienen.

Se precisa que las formas de señalar el vencimiento usando referencias como quince días u ocho días, no deben entenderse como períodos quincenales o semanales. En cambio plazos fijados con expresiones como “medio mes”, debe entenderse como 15 días calendario. Aun cuando no son usuales estas formas de indicar el término del plazo, se ha preferido mantener estas disposiciones que ya contenía la ley anterior.

La ley admite que al señalar el vencimiento de la letra de cambio no se indique el año. Por ejemplo, si en una cambial girada el 5 de enero del 2001 se señala como vencimiento 30 de setiembre, sin señalar el año, debe entenderse que es pagadera el 30 de setiembre de 2001; y si el giro fue hecho el 30 de setiembre de 2001, señalando como fecha de vencimiento 5 de enero, debe entenderse que es cambial vence el 5 de enero del 2002.

Puede también ocurrir que se haya consignado como fecha de vencimiento una fecha inexistente en el calendario, como sería por ejemplo el 30 de febrero o 31 de noviembre; casos en los cuales debe entenderse que vencen el último día del mes de febrero o noviembre; esto es el 28 ó 29 de febrero y 30 de noviembre.

Siguiendo las mismas pautas que el Código Civil contiene para el cómputo de los plazos fijados en días, se precisa que los plazos fijados en días por ley o por convenio entre partes, no comprenden el día inicial. Pero se salva a modo de excepción que en los casos en los que por ley se determine incluir el día inicial en el cómputo, podrá hacerse. Esta norma en realidad no resultará aplicable a la letra de cambio, pero como quiera que sus disposiciones son también aplicables a otros títulos valores, se aprovecha en salvar en este numeral dichos casos de excepción, como sería por ejemplo el caso del cómputo del plazo para presentar al pago un cheque, en cuyo caso el día inicial del plazo legal debe incluirse en el cómputo.

Del mismo modo, siguiendo las pautas que contiene el art. 183 del Código Civil, se precisa que la fecha de vencimiento ocurrida en día inhábil se considera acaecida el día hábil inmediatamente siguiente; con la precisión de que el plazo para el protesto de una cambial con vencimiento en día inhábil, debe hacerse dentro del plazo de ley, computado desde la fecha de su vencimiento facial, esto es,

desde la fecha consignada en el documento o desde aquélla que según el documento sea la fecha en que puede exigirse su pago. En realidad, no es que el vencimiento ocurrido en día inhábil sea sustituido para todos sus efectos por el siguiente día hábil, sino que es en este día hábil siguiente en el que corresponde exigir su pago sin que el deudor ni el acreedor incurran en mora. Para todo lo demás, debe considerarse como fecha de vencimiento, el que conste literalmente en el documento, esto es, el día inhábil.

En relación a este tema de días hábiles, inhábiles y laborales, existe en la legislación peruana una gran confusión; pues las normas dictadas con criterio laboral han dado alcances distintos al día hábil, inhábil y laborable. En efecto, el D.Leg. N° 713 que regula los períodos de descanso de los trabajadores dependientes, señala que éstos tienen derecho a descanso remunerado durante los días feriados. En seguida enumera los únicos días feriados nacionales: Año Nuevo (1 de enero), jueves y viernes santo (movibles), Día del Trabajo (1 de mayo), San Pedro y San Pablo (29 de junio), Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Combate de Angamos (8 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Navidad del Señor (25 de diciembre). Los aquí mencionados que suman doce, sólo son los días feriado a nivel nacional; pues además existen feriados gremiales, sectoriales, regionales y locales, los que se hacen efectivo el día lunes siguiente. De este modo, podemos concluir que “día feriado” resulta ser un antónimo de “día laborable”, por lo que durante los días distintos a los antes mencionados, trabajadores y empleadores pueden establecer sus jornadas y horarios de trabajo, previendo la ley laboral un descanso mínimo de 24 horas continuas por semana, preferentemente el día domingo. Por su parte, el Código Civil hace la distinción entre “día hábil” y “día inhábil”, estimándose que es inhábil el que es feriado. Así, dentro de este régimen bien podría llegarse a la conclusión de que con excepción de los doce días feriados antes indicados (más los días feriados especiales y regionales que existan), los demás días son “hábiles”; y, como el día domingo no está legalmente declarado como feriado, podría resultar considerándose como “hábil” (?) que no es lo mismo que laborable. Problema aparte genera el día sábado, del que la ley no señala que es feriado o es inhábil, pero por el hecho de que no es laborable en muchos sectores públicos y privados, algunos lo consideran como

“inhábil”, no existiendo para nosotros sustento alguno para ello. Tema aparte son los días hábiles, no hábiles y habilitados con fines procesales, según las respectivas disposiciones de proceso civil, administrativo o penal, constituyendo para este último días hábiles todos los días del año.

Este verdadero caos legal que existe en relación al régimen y determinación de días hábiles e inhábiles, viene generando serios problemas en el mercado que urge solucionar. En materia de protesto, que debe verificarse sólo en día hábil, la ley (art. 75) ha dado una solución a esta situación, disponiendo que se llevará a cabo sólo de lunes a viernes, siempre que no sea feriado, solución que evitará todo conflicto que se generaba con los protestos logrados el día sábado o aquellos realizados en día hábil posterior al sábado que correspondió al octavo día.

3.5. FORMAS DE GIRO EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 122º.- Formas de girar la Letra de Cambio

La Letra de Cambio puede ser girada:

- a) A la orden del propio girador o de un tercero. En el primer caso, podrá indicarse el nombre o utilizarse la cláusula a la que se refiere el inciso e) del artículo 120º;*
- b) A cargo de tercera persona;*
- c) A cargo del propio girador, en cuyo caso no es necesario que vuelva a firmarla como aceptante, y entonces el plazo para su vencimiento, si ha sido girada a cierto plazo desde la aceptación, se computa desde la fecha del giro; y, si ha sido girada a la vista, se podrá presentar a cobro en cualquier momento, dentro del plazo señalado por el artículo 141º; y*
- d) Por cuenta de un tercero.*

Como sabemos, es el girador quien pone en circulación la letra de cambio. Dicho girador puede hacerlo de varias formas. Así, puede hacerlo a su propia orden, situación en la cual, bien podría sustituir su nombre con la cláusula "mi mismo" u otra equivalente. No es pues indispensable que señale nuevamente su nombre como beneficiario de la cambial que gira. Se termina así con las contradictorias

resoluciones judiciales que venían expidiéndose en relación al uso de esta cláusula; pues existían resoluciones judiciales que señalaban que "mi mismo" no era nombre de una persona, cuando resultaba por demás evidente que se trataba del mismo girador, por ser él quien lo giraba. Es verdad que el art. 61 inc. 6 de la 16587 preveía como requisito de la letra de cambio la indicación del *nombre de la persona* a quien o a la orden de quien debía hacerse el pago. Si la ley me decía "el nombre de la persona", un juez se preguntaba, cómo puedo salirme del mandato expreso de la ley utilizando una interpretación razonable pero no aceptada por el legislador, máxime cuando en los títulos valores la formalidad de sus requisitos era tradicional y reconocidamente exigente.

Puede girarse también la letra de cambio a la orden de un tercero y más bien es lo natural o deseable que así sea. De este modo, el girador y el tomador, orden o beneficiario, serían personas distintas una de la otra. En sus orígenes, la forma de girar la letra de cambio era ésta y más bien como consecuencia del uso de la cambial en las transacciones crediticias con la sola intervención de un acreedor y un deudor, sólo dos sujetos en vez de tres, es que el girador y el tomador o beneficiario, o el girador y el girado (esto último en muchísima menor proporción), son la misma persona, reduciendo a dos las tres partes (girador, girado y tomador o beneficiario) para las que fue originalmente utilizada y diseñada la letra de cambio.

A cargo de tercero, es otra forma de giro de la letra de cambio, es decir, que el girador y girado sean personas distintas entre sí que, como ya hemos referido antes, es la forma propia de giro de este título valor. Sin embargo, cabe también que el girador y el girado sean la misma persona, en cuyo caso el librador emite la letra de cambio a su propio cargo. En este caso, dada la naturaleza de la cambial, que es puesta en circulación por el girador, quien lo hace a cargo de él mismo, resulta innecesario que el girado la firme como aceptante. En efecto, si como girador de la misma ya manifestó su voluntad de pagarla mediante la firma que puso al librar la cambial, ver art. 123, resulta inútil o irrelevante su firma como aceptante. Sin embargo, si la vuelve a firmar como aceptante, dicha segunda firma no invalida el documento para nada. El título valor mantiene todo su vigor. En estos casos de letras de cambio giradas a cargo del mismo girador, en las que no es necesaria su aceptación al quedar sustituida tal acto y firma

de aceptación con la firma como librador, el vencimiento que se hubiere señalado bajo la modalidad de "a cierto plazo desde la aceptación", se computa desde la fecha de giro, por lo que tampoco será necesario señalar en forma expresa la fecha de la aceptación. Estas letras de cambio giradas a cargo del mismo girador, podrían girarse también como pagaderos a la vista. En tal caso, no es que deban considerarse como vencidos en la misma fecha y en el mismo acto de su emisión, como algunos consideraban según la ley anterior, sino que dichas letras que no requieren de aceptación, podrán ser presentadas a cobro en cualquier momento, a libre decisión del tenedor, considerándose como fecha de vencimiento el día en el que el tenedor lo presente a cobro, presentación que debe ser hecha dentro de un año desde la fecha de su giro o dentro del plazo (mayor o menor a un año de su giro) que se hubiere señalado en el mismo documento, conforme se precisa en el art. 141.

La letra de cambio puede ser girada, finalmente, por cuenta de un tercero, en cuyo caso quien firma lo hace no como responsable por su pago y aceptación, sino por encargo o representación de tercero señalado en el documento, quien debe asumir las responsabilidades de girador. Es obvio que en este caso quien gira la cambial, debe contar con la autorización o representación del tercero por cuya cuenta lo hace, instrumentadas en el correspondiente "poder", pues en caso contrario, las obligaciones de girador corresponderán se asumidas personalmente, por aquél, como si hubiese obrado en nombre propio.

Artículo 123º.- Responsabilidad del girador

El girador responde por la aceptación y el pago. Toda cláusula liberatoria de dichas responsabilidades se considera no puesta.

El girador, o librador, o emitente de la letra de cambio, es la persona que redacta, crea y pone en circulación este título valor. Como tal, es la parte responsable por la aceptación de la misma si ya no lo estuviera por él mismo en caso de haberla girado a su propio cargo. Del mismo modo, asume también responsabilidad por el pago que el girado debe hacer, según la orden que ha dado mediante este documento; pues se trata de una instrucción de pago que dicho girador imparte al girado, quien puede o no aceptar obligarse a

pagarla en las condiciones y términos que contiene el documento. El mero hecho de haberse designado a una persona como girado, en modo alguno convierte a éste en obligado a aceptarla y pagarla. Sólo si voluntariamente lo acepta, quedará obligado a su pago, en calidad de obligado principal.

Ahora bien, cuando una persona gira un título valor a cargo de determinada persona, lo hace previa coordinación, acuerdo de voluntades y sustentada en alguno de estos motivos: (1) el girado es deudor dinerario del girador; (2) el girado ha comprado bienes a crédito, que le han sido entregados o no, ofreciendo pagarlos mediante letras de cambio; o (3) el girado está concediendo una facilidad, crédito o préstamo al girador para que éste pueda pagar un adeudo al tomador o conseguir un financiamiento vía el descuento bancario de dicho título valor, inclusive como letra de cambio de favor. Nadie, en su sano juicio, gira una letra de cambio a cargo de un girado para que éste la acepte, si no existe razón o justificación evidente que la sustente.

El girador, como persona que crea y emite este título no puede quedar desligado de él. Distinta es la situación de las personas que intervienen como endosantes y garantes –avales o fiadores- de la cambial, quienes según la calidad de su intervención pueden liberarse de las obligaciones derivadas de este título valor o limitar sus responsabilidades. El creador de la letra de cambio está impedido de incluir cláusulas exoneratorias o liberatorias de las responsabilidades de (i) que la letra de cambio sea aceptada y (ii) aceptada o no la cambial, que ésta sea pagada. En el supuesto que se hubiere incluido alguna cláusula exoneratoria, parcial o total, ésta se considerará no puesta, por lo que carecerá de toda validez y afecto legal toda liberación de responsabilidad por la aceptación y el pago, que como responsabilidad, siempre corresponde ser asumida por el girador.

Artículo 124.- Cláusula documentaria

La inserción de la cláusula “documento contra aceptación”, “documentos contra pago” u otra equivalente, cuando se acompañan documentos a la Letra de Cambio, obliga al tenedor a no entregar los documentos sino cuando se produzca la aceptación o el pago de la Letra de Cambio, según el caso.

Rolando CASTELLARES AGUILAR afirma que “En el comercio nacional y principalmente internacional, es usual que se transen sobre la base de documentos que representan las mercaderías que son objeto de negociación entre las partes. Es frecuente también que estas transacciones se hagan con pago diferido de sus precios. En estos casos, resulta muy práctico que el transportista o los agentes intermediarios entre las partes contratantes o los bancos que facilitan los pagos entre ambas partes que se encuentran físicamente distantes, se encarguen de hacer entrega de los documentos representativos de las mercaderías y bienes objeto de negociación al crédito, bajo condición que el adquirente de dichos bienes entregue a dichos intermediarios que actúan por encargo o representación del vendedor, letra o letras de cambio que han sido giradas a cargo de quien recibe los documentos representativos de las mercaderías, por los montos y fechas de vencimiento al efecto acordadas entre las partes involucradas en estas operaciones comerciales”.

En la letra de cambio, entonces, es posible incluir cláusulas como las señaladas en este artículo, acompañando a la cambial los documentos representativos o relativos a dichas transacciones, documentos que sólo serán entregados al girado, si éste acepta o paga la letra de cambio que se acompaña. Esta modalidad lo podemos apreciar con toda claridad en el caso de envío de documentos de embarque que realiza un exportador o vendedor de mercaderías a su comprador, supeditando la entrega de dichos documentos a que el comprador o importador a quien están destinados, cumpla con pagar o aceptar la letra de cambio ajunta o anexa que se acompaña a dichos documentos. El comprador recibe los documentos de embarque, sólo si paga o acepta la letra de cambio. El agente que intermedia en esta entrega, que puede ser un transportista, un representante del vendedor, o un banco, entregará los documentos de embarque al comprador (importador) sólo si éste paga o acepta la letra de cambio girada por el vendedor (exportador), que acompaña a los documentos de embarque o representativos o relativos a las mercaderías vendidas. Si se trata de una letra de cambio que debe ser pagada contra entrega de los documentos, es obvio que se tratará de una girada a la vista. Cancelada dicha letra de cambio, el girado se quedará con la cambial debidamente cancelada. Si se trata de una letra de cambio que tenga la cláusula “documentos contra aceptación”, quien recibe los documentos sólo estará obligado

a aceptar la letra de cambio, quedándose la misma en poder de quien le hace entrega de dichos documentos; pues es obvio que se trata de una cambial que tiene un plazo para su pago y de una operación pactada al crédito. La letra de cambio así aceptada, se entregará a su girador, a su representante o la persona a cuya orden se hubiere girado.

Si las letras de cambio con algunas de las cláusulas de que trata este artículo no fuesen, según sea el caso, aceptadas o pagadas en el acto de entrega de los documentos con los que va acompañada, quien cumple el encargo de hacer entrega de los documentos, retendrá los mismos; pues la entrega de dichos documentos está supeditada al pago o aceptación previa de la letra de cambio. Como se podrá colegir, la entrega de los documentos adjuntos sin la aceptación o pago encomendada o encargada cambiariamente, hace incurrir en grave responsabilidad a su autor. El presupuesto de la inserción de la cláusula y el respeto a su fiel cumplimiento se sustenta en la confianza que se merecen recíprocamente las personas y las instituciones involucradas.

3.6. LA ACEPTACIÓN EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 127.- La aceptación

127.1 Por la aceptación, el girado se obliga a pagar la Letra de Cambio al vencimiento, asumiendo la calidad de obligado principal.

127.2 El girado que acepta la Letra de Cambio queda obligado aunque ignore el estado de insolvencia, quiebra, liquidación, disolución o muerte del girador.

127.3 A falta de pago, el tenedor, aun cuando sea el girador, tiene contra el aceptante acción cambiaria directa por todo lo que puede exigirse conforme a lo dispuesto en el Artículo 92º.

El girado suele ser persona distinta al girador de la letra de cambio, por lo que es necesario que dicha persona designada para pagarla manifieste expresamente su voluntad de hacerlo. No basta que figure su nombre en la cambial. Para comprometerlo como obligada a pagar la letra de cambio, se requiere una manifestación expresa de su voluntad y compromiso de pagarla. Tal acto se

denomina “aceptación”. Aceptación de pagar la cambial que debe firmarla como señal de ello, en las condiciones, monto, fecha y lugar que indique literalmente el documento. Se trata pues del modo cómo el girado queda obligado al pago de la cambial y, de admitirlo (aceptarlo), se convierte en el obligado principal. El girado no está obligado a aceptar la letra de cambio por el mero hecho que en ella figura su nombre. Si no la acepta, no tendrá la calidad de obligado. En ese caso, el tenedor de la cambial que lo presenta para su aceptación rechazada por el girado, deberá dejar constancia de ello a través de su protesto por esa causa: falta de aceptación. En tal supuesto, es el girador y los demás obligados solidarios quienes asumirán la responsabilidad de su pago, no correspondiendo al girado obligación cambiaria alguna, salvo las que puedan corresponder a sus relaciones personales y extra cambiarios con el girador, cuyo mandato no ha sido atendido.

No debemos olvidar, sobre el particular, lo dispuesto por el art. 6.3 y 147 de la presente Ley 27287. El inciso tercero de este art. 6 recoge también la exoneración que estuvo presente en el numeral 7 de la ALTV, y según la cual las acciones derivadas del título valor no podrán ser ejercitadas contra quien no haya firmado el título (en cualquiera de las formas ahora contempladas: autógrafa, gráfica, mecánica o electrónica), aun cuando su nombre aparezca escrito en él.

La novedad al respecto está dada en cuanto a (1) la precisión hecha de que esta excepción no opera en los casos expresamente previstos por la ley; (2) la correcta mención a la representación, abandonando la referencia al mandato, cuyas categorías jurídicas eran confundidas por el Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el Código Civil de 1936 y aclaradas por el Código Civil de 1984 en sus arts. 145 y 1790; y (3) por último, el cambio de vocablo “inscrito” por “escrito”: la ley anterior, art. 7 decía, "aun cuando su nombre aparezca inscrito en él" y ahora indicamos "aun cuando su nombre aparezca escrito (anotado, inserto) en él".

Sobre este particular, es decir, en torno a la necesidad de la firma para quedarse obligado cambiariamente, veamos que dice una ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia:

Exp. N° 2739-87 Lima. No se puede ejercitar la acción cambiaria si los títulos valores no aparecen aceptados por la presunta obligada.

Lima, diez de octubre de mil novecientos noventa.- VISTOS; y CONSIDERANDO: que las letras de fojas once a diecisiete, no aparecen aceptadas por la presunta obligada María Jesús Rivas Zárate de Echenique, a pesar de haber sido giradas con vencimiento a fecha fija, por lo que a tenor de lo dispuesto por el artículo sétimo de la Ley de Títulos Valores número dieciséis mil quinientos ochentisiete, no hay acción cambiaria contra la misma; que además, basándose en parte la oposición deducida a fojas treintitrés en la inexistencia de las diligencias de protesto de las referidas letras, la parte ejecutante ha debido presentar los testimonios de protesto respectivos; que las letras de fojas cincuentiocho y cincuentinueve, giradas con vencimiento a fecha fija tampoco están aceptadas por la demandada, no pudiendo ejercitarse ninguna acción derivada de dichos títulos en aplicación del referido artículo sétimo de la Ley mencionada; que, por ello la acción ejecutiva de fojas dieciocho, ampliada a fojas sesenta, por resolución de fojas sesentiuno, resulta improcedente por falta de requisito de los títulos valores anotados y fundada en parte la oposición en relación a la falta de requisitos de los títulos ejecutivos, siendo improcedente la oposición en los demás que contiene, puesto que la falta de pago de cualquier saldo del precio de venta del inmueble de su referencia (instrumentos privados de fojas veintidós a veinticinco) o el exceso en el pago de dicho precio deben hacerlo valer las partes, si fuere el caso, en la forma y vía legal correspondientes; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas doscientos noventidós, su fecha diez de agosto de mil novecientos ochentisiete, que confirmando la de primera instancia de fojas doscientos setentiocho, fechada el cinco de marzo del mismo año, declara fundada la demanda de fojas dieciocho, ampliada a fojas sesentiuno; con lo demás que contiene; reformando la de vista y revocando la apelada: declararon IMPROCEDENTE la demanda de fojas dieciocho ampliada a fojas sesentiuno; fundada en parte la oposición deducida a fojas treintitrés en cuanto a la falta de requisitos de los títulos ejecutivos e improcedente la oposición en lo demás que contiene.

En las letras de cambio giradas a cargo del mismo girador (girador y girado son la misma persona), la aceptación carece de

objeto. Se tratan de letras de cambio que no requieren de aceptación. Si lo hiciera el girador, no sería más que un exceso que no afecta la validez de la cambial como título valor.

Excepcionalmente y por mandato legal expreso, puede prescindirse de la aceptación, obligando al pago de la cambial a la persona que figura como girado aun cuando éste no hubiera manifestado su voluntad de aceptarla. Esto ocurre con las letras de cambio que giran las empresas del sistema financiero, en representación de los saldos deudores de las cuentas corrientes del girado, a quien se le hubiere requerido su pago mediante documento de fecha cierta y dicho cuentacorrentista no hubiera cumplido con pagar a pesar de haber transcurrido el plazo que fija la ley desde tal requerimiento formal. Se trata pues de letras de cambio que se giran sólo luego de ser agotadas dichas formalidades que señala la Ley de Bancos, el Código de Comercio y las disposiciones reglamentarias de la SBS.

Una vez que mediante la aceptación el girado haya manifestado su voluntad de hacerse cargo del pago de la letra de cambio librada a su cargo, queda constituido en obligado principal firme de esa cambial. El hecho que el girador no cumpla con los compromisos que hubiere asumido en su favor a cambio de su aceptación, o fallezca, o incurra en insolvencia, o quiebra, no lo liberarán de su calidad de obligado principal del pago, aunque demostrase que en el acto de la aceptación ignoraba tales hechos.

Dada su calidad de obligado principal, las acciones de cobro que se dirijan contra el girado-aceptante, son acciones directas, aun cuando quien ejercite dicha acción fuese el girador. Por tanto, el tenedor de la cambial tendrá los plazos que la ley prevé para ejercitar la acción directa cuando se trate del girado-aceptante (3 años desde el vencimiento de la letra de cambio) y exigir los conceptos que contiene el art. 92 (capital, intereses, gastos).

Artículo 128.- Formalidad de la aceptación

128.1 Con excepción del giro previsto en el Artículo 122 inciso c), la aceptación debe constar en el anverso de la Letra de Cambio,

expresada con la cláusula “aceptada”, y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de éste importa su aceptación.

128.2 Cuando la Letra de Cambio sea pagadera a cierto plazo desde la aceptación o cuando, en virtud de cláusulas especiales deba presentarse a la aceptación en un plazo determinado, la aceptación debe llevar la fecha del acto; y, si el aceptante la omite, puede insertarla el tenedor.

Este artículo señala las formalidades o modo de dejar constancia de la aceptación. En las cambiales giradas a cargo del propio girador, no existe ninguna formalidad para ello, desde que no es necesaria la aceptación. Será suficiente como toda formalidad que los nombres señalados como girador y girado correspondan a la misma persona.

En los casos en que el girador y el girado sean personas distintas, la aceptación debe constar en el anverso de la letra de cambio. No cabe por tanto aceptar la letra de cambio en el reverso. Tal manifestación de voluntad debe constar junto al texto mismo de las condiciones de la cambial para darle plena seguridad de los alcances del compromiso que asume el girado al admitir cumplir la obligación de pago dinerario que contiene la cambial, en las condiciones de su tenor facial. Estimamos que bien puede constar en un apéndice, pero siempre en la parte del anverso del documento.

La literalidad es uno de los principios que rige a los títulos valores permitiendo delimitar el contenido, extensión y modalidad del derecho que se incorpora en el título valor.

“De la expresión literal se deriva el alcance del derecho y de la obligación consignados, de tal manera que las partes originarias o futuras que intervengan en la relación cambiaria, ya sea para adquirir o transferir el título saben a qué atenerse, conocen perfectamente el derecho o la obligación a que se someten, pues la literalidad les da certeza y seguridad en sus transacciones y al deudor le permite oponer al titular de la acción cambiaria las excepciones que surjan de este elemento.”²⁴.

²⁴ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 15.

Destaca la doctrina que en virtud de esta característica, se define al título valor como el documento necesario para el ejercicio del derecho literal que en él se consigna. Tanto el tenedor como el acreedor legitimado han de atenerse al texto literal del título.

En suma, la literalidad supone conformidad plena con el texto. “El derecho derivado del título es literal en el sentido de que, en cuanto al contenido, a la extensión y a las modalidades de ese derecho es decisivo exclusivamente al tenor del título. La explicación de la literalidad está en la autonomía de la declaración consignada en el mismo título (declaración cartular) y en la función constitutiva que, respecto de la declaración cartular y de cualesquiera de sus modalidades ejerce la redacción del título; esa declaración está sujeta exclusivamente a la disciplina que proviene de las cláusulas del propio título”²⁵.

En el mismo sentido expuesto en el art. 2º de la ALTV, el art. 4 precisa la posibilidad de plasmar el texto del documento y por ende percibir la literalidad de éste, mediante hoja adherida a él; y quien primero utilice esta hoja adherida deberá consignar su firma abarcando a ésta y al documento al que se adhiere.

La novedad al respecto, es la precisión hecha en torno a que si no se sigue ese procedimiento en la hoja adherida, no procederá el ejercicio de las acciones derivadas del título valor por quienes hayan intervenido en dicha hoja adherida, quedando a salvo sus derechos causales.

En efecto, ya la anterior ley aludía a la necesidad y obligación de estampar la firma de modo tal que ella comprenda el título original o documento y el apéndice u hoja adherida, pero lo que no decía era qué ocurría si no se cumplía con esta disposición, es decir, cuál era su consecuencia. La nueva Ley 27287 cubre el vacío de la anterior estableciendo que si no se cumple con tal obligación, quienes intervengan por la hoja adherida no pueden ejecutar las acciones cambiarias contra quienes hayan intervenido en el documento o título original, dejando a salvo sus derechos causales. Apréciase que

²⁵ ASCARELLI citado por ASTUDILLO URSUA, Pedro. *Los Títulos de Crédito. Parte General*. Tercera edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1992, Página 21.

siendo ésta una ley que regula los títulos de cambio y las acciones cambiarias, la norma suele ser muy respetuosa de dejar a salvo, en toda ocasión, el derecho y el ejercicio de los derechos causales, tal como el caso de los arts. 1.2., 5.3., 100 y otros, relativos, el primero, a que si en el título valor falta algún requisito formal esencial éste no tiene tal carácter, dejando a salvo los efectos del acto jurídico al que hubiere dado origen su emisión o transferencia; el segundo, a que en caso de diferencia del importe del título valor expresado sea en letras o en números, prevalece la suma menor, sin perjuicio que el interesado pueda hacer valer sus mayores derechos frente al obligado, por la vía causal; y el tercero, a que la caducidad y prescripción de las acciones causales correspondientes a los actos jurídicos que dieron lugar a la emisión, aceptación, garantía o transferencia de los títulos valores operan en los plazos que les corresponda según la naturaleza de las relaciones jurídicas de las que ellas deriven, conforme a la ley de la materia.

El profesor **Ignacio A. ESCUTI** (h.)²⁶ dice "la literalidad se refiere al contenido del título valor e indica que la significación del derecho incorporado se delimita exclusivamente por el tenor escrito del documento, cuya significación literal, especialmente en el momento de su configuración, prevalece respecto de cualquier otra declaración o documentación emitida previamente". En dicho orden de ideas **PAVONE LA ROSA** expresa "Hallándose el contenido y las modalidades de la obligación cambiaria exclusivamente determinados por el tenor del documento: el acreedor que se vale de la acción cambiaria no puede invocar ninguna circunstancia que no resulte del título, ni el deudor puede oponer - al poseedor con quien no lo liga una relación inmediata o de particular convención - límites o modificaciones al contenido de la obligación cartular que no resulten del título mismo. Por su parte, **GÓMEZ LEO** dice: "toda disminución, alteración, modificación, extinción (parcial o total) del derecho cartular se debe fundar, para tener validez en el ámbito de las relaciones cartáceas, en la expresión textual del documento, siendo irrelevantes los posibles elementos extracartulares que pudieran surgir de negocio o relaciones ajenas al título de crédito. Constituye una doble garantía, pues el sujeto activo nada puede pretender que no se halle escrito en el título y el sujeto pasivo, además de no poder enervar la pretensión

²⁶ ESCUTI, Ignacio A. Op. cit.; Páginas 8 a 14.

jurídico-económica del acreedor con instrumentos extraños al título, tiene la seguridad de que cumpliendo el requerimiento en los términos textuales, queda liberado".

La inserción literal del derecho en el documento con el alcance señalado, permite que se hable del fenómeno de la incorporación. La legitimación viene dada, en primer término, por la posesión del documento: esta es requisito indispensable para ejercer los derechos incorporados al título. Fundamentalmente, la legitimación activa es la habilitación para ejercer el derecho incorporado en el documento y exigir al deudor la prestación de vida. Desde el lado pasivo, la legitimación es la habilitación del deudor para liberarse cumpliendo la prestación de vida al legitimado activo. Ha dicho **Giusseppe FERRI** que "legitimación y titularidad, si bien normalmente coexisten, no son concepto coincidentes. Se trata de situaciones jurídicas diversas, basadas en diversos presupuestos jurídicos. El primero concierne a la potestad para ejercer el derecho emergente del título. El segundo, a la pertenencia del mismo: la legitimación compete a quien tiene la investidura formal del título, aunque el derecho no le pertenezca". Por último, en razón de la autonomía, para el tercero de buena fe es jurídicamente irrelevante si la obligación incorporada literalmente al documento, tuvo su origen en el precio de una compra-venta, resuelta o viciada: el documento en manos del tercero adquirente constituye el título idóneo para exigir el cumplimiento de la prestación prometida, con prescindencia de los derechos u obligaciones que los anteriores poseedores del documento hubiesen tenido en favor o en contra del deudor. La autonomía comienza a funcionar en favor de los terceros que hayan adquirido el título de buena fe. En virtud del título, el tenedor de buena fe es titular activo de un derecho propio, que no es el de su antecesor o antecesores; esta situación lo pone a cubierto de todo riesgo con respecto a la legitimidad del derecho de quien le transmite el título; de tal modo que si éste no era un tenedor legítimo, por ejemplo, porque había hurtado el documento, tal situación no influye en la adquisición que aquél haga de buena fe y su derecho, precisamente porque es autónomo, es invulnerable a la reivindicación que pudiera iniciar el propietario despojado.

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO**, profesor full time de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, señala que los títulos de crédito "están informados por el

carácter necesario del documento, que es constitutivo - dispositivo, y por el carácter literal y autónomo del derecho que en él se ha representado; y específicamente, en tanto papeles de comercio, son abstractos, formales y completos. *Abstractos*, en cuanto se han desvinculado jurídicamente de la causa o relación fundamental que motivó su libramiento o transmisión, sin que sea posible que tal relación extracambiaria sirva como fundamento de defensas o excepciones ante el portador del título, tercero de buena fe. *Formales*, en razón de que la falta de cualquiera de los requisitos extrínsecos que exige la ley cambiaria al tiempo de su presentación produce la inexistencia del papel de comercio como tal. *Completo*s, en cuanto deben bastarse a si mismos, sin posibilidad de que en su texto esencial se haga remisión a documentos o actos externos al título, y en caso de que se efectúe tal remisión es irrelevante cambiariamente; de ahí que la situación jurídica de cada uno de los sujetos que han firmado el título, como la de su portador legitimado, es regulada exclusiva y excluyentemente por lo expresado en el documento".

Es conveniente acá hacer referencias a teorías alemanas e italianas respecto a la naturaleza jurídica del título valor. Si bien ellas aluden más bien a la letra de cambio, no es menos cierto que prácticamente, todos los títulos valores del Libro Segundo tienen como norma supletoria a este título valor, que viene a constituirse en el modelo o patrón de referencia de todos los valores. Así podemos referirnos, respecto al pagaré, al artículo 162; respecto a la factura conformada, al artículo 171 y respecto al cheque, al artículo 216. Es evidente, que de un modo u otro, aunque esta ley no lo diga, la jurisprudencia y la doctrina son uniformes al considerar siempre, como modelo o patrón de los títulos valores, a la letra de cambio, y en cuanto no resulten incompatibles con su naturaleza, siempre le serán de aplicación las disposiciones referidas a dicho título valor.

Para ese efecto puede hacerse o no uso de la cláusula "aceptada". Esto es, la mención de dicha cláusula no es imprescindible sino opcional, dado que la sola firma del girado en el anverso de la cambial constituye plena evidencia de que éste la ha aceptado.

Así, es la firma del girado el elemento o requisito esencial e imprescindible para considerar que una cambial ha sido o no

aceptada. Estimamos que se refiere a la firma gráfica manuscrita u ológrafa. Sin embargo, esta forma de firmar puede ser sustituida previo pacto, con firma impresa, electrónica u otra que permita la tecnología conforme señala el art. 6. Al respecto no existe en nuestra legislación la definición de “firma” como si lo hay en otras legislaciones. Sobre este particular, hay quienes señalan que la firma es el nombre, apellidos más la rúbrica. Otros estiman que puede consistir sólo en la rúbrica, en la medida que pueda identificarse al firmante. Nosotros consideramos que la firma es cualquier forma de identificar a la persona que practica un acto jurídico, por lo que puede tratarse de signos, grafías, huellas dactilares o características personales, códigos secretos o cualquier otro elemento que sirva para probar fehacientemente que una persona intervino en un acto o negocio jurídico. Así la firma puede ser gráfica (ológrafa, manuscrita) o digital, o electrónica o mediante otros medios. Recordemos al respecto que la Ley N° 27291 que incorpora el art. 141-A al Código Civil, señala que, cuando la ley establezca la obligación de firmar, “... ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo”. En el Perú, se admite pues, indistintamente cualquiera de estos elementos o formas de identificación personal de la realización de un acto, conforme lo establecen la Ley N° 27262 o ley de firma digital y Ley N° 27291 sobre manifestación de voluntad.

Pero, ¿qué es la firma?. **Lisandro PEÑA NOSSA**²⁷, la define como la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que lo integran, o de un signo o símbolo que utiliza para identificarse personalmente. Es tan importante, señala el autor, que si ésta faltara aun cuando el título valor cumpla con los demás requisitos, es como si éste no existiera, no pudiendo, por tanto, surtir efectos.

Tal importancia otorgada a la firma radica en la presunción de autenticidad de que ésta goza.

Doctrinariamente se conocen las siguientes clases de firmas:

- 1) Firmas por medios mecánicos.

²⁷ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 25.

Cuando la firma del suscriptor es sustituida por un signo o contraseña impuesta por medios mecánicos, es decir, se puede reemplazar por un sello de caucho o un sello metálico, o cualquier otra forma de identificación, pero claro está en este caso bajo la responsabilidad del suscriptor del mismo documento.

La firma impuesta por medios mecánicos no será suficiente sino en aquellos casos en que la costumbre o la ley lo autorice, lo que significa que si por los medios mercantiles o comerciales se ha venido introduciendo la costumbre de utilizar medios mecánicos, entonces se puede perfectamente aceptar.

2) Firma por representante o mandatario.

Cuando los títulos valores son firmados por representantes y mandatarios o personas con calidades similares. El representante es la persona facultada para celebrar en nombre de un tercero, uno o varios actos o negocios jurídicos y el mandatario es aquella parte facultada para celebrar en nombre de otra uno o varios actos mercantiles o comerciales.

Asimismo, cualquier otra persona que tenga una calidad similar, fuera del representante o mandatario puede celebrar actos o negocios jurídicos en nombre de un tercero. En este caso está el agente oficioso, o sea aquel individuo que administra bienes a nombre de un tercero sin tener un mandato previo, y también el representante legal de las personas naturales, ya sea el padre o la madre de los menores de 18 años o el curador, que perfectamente pueden suscribir un título valor a nombre de los incapaces.

En el momento de suscribir un título valor en nombre de un tercero se debe acreditar dicha calidad. Si se trata de representante le corresponde exhibir el poder especial o general con que actúa, y tratándose de mandatario, el contrato del cual surgen sus obligaciones y facultades.

3) Firma sin autorización.

Quien firma a nombre de un tercero sin tener poder para ello, se obliga personalmente, a menos que el tercero ratifique su gestión; caso en el cual las obligaciones adquiridas por el primero se transfieren al segundo desde la fecha de su creación.

4) Firma en procuración o al cobro.

Es la estampada por una persona en el título valor y mediante la cual no transfiere la propiedad del mismo, sino simplemente la facultad para cobrarlo y una serie de facultades estipuladas por la ley. Esto significa que el endosatario para el cobro adquiere las calidades inherentes a todo representante legal o judicial.

5) Firma a ruego.

Aquella que estampa una persona en un acto o contrato a solicitud de otra que no sabe o no puede firmar. Pero la sola firma del rogado no es suficiente para que el instrumento produzca efectos, pues por lo general la doctrina comercial exige dos requisitos: que la firma del rogado sea estampada en presencia de dos testigos y que el emitente o aceptante del título valor implante su huella digital, de serle posible. Alternativamente, la firma a ruego puede prescindir de los testigos y realizarse mas bien en presencia y bajo fe notarial o de juez de paz.

6) Firma de los ciegos.

Constituye esto una excepción a la presunción de autenticidad de las firmas puestas en los títulos valores, pues en este caso se exige la autenticación por notario o juez, de tal modo que en un título valor firmado por un ciego, cuando esta firma no ha sido autenticada por notario o juez, se puede oponer la excepción de falta de requisitos en el título valor para ser demandado en forma ejecutiva.

En la letra de cambio girada para ser aceptada en una fecha posterior determinada o dentro de un plazo computado desde su giro o que tenga como vencimiento una fecha que debe computarse desde el acto de su aceptación, resulta importante señalar la fecha en la que ocurre tal aceptación; pues los intervinientes tienen interés en conocer que se hayan cumplido dichos plazos, dado que su inobservancia podría ser invocada por quien puso esa exigencia de plazo para la presentación a la aceptación, como señala el art. 130; o, inclusive, eventualmente perjudicar el documento en su calidad de título valor. Al respecto, el art. 1233 del C.C. sanciona al acreedor negligente, liberando de la obligación que se hubiere asumido en su favor, si perjudica un título valor que haya recibido como pago.

Sin embargo, tal omisión de consignar la fecha en la que se produce la aceptación en el mismo documento, puede ser subsanada por el tenedor consignándola él en el documento. Así, se trata de un requisito subsanable; pero si no se realiza tal subsanación, devendrá en ineficaz, como ocurriría con una letra de cambio, pagadera a los 15 días desde la fecha de su aceptación y no tiene consignada por el aceptante o por su tenedor la fecha en la que se produjo tal aceptación, lo que imposibilitaría determinar su fecha de vencimiento. Este documento, no subsanado, no surtirá efectos cambiarios y habrá quedado perjudicado, por no ser posible determinar la fecha de su vencimiento. Siempre que aludimos a letra de cambio perjudicada o título valor perjudicado, nos estamos refiriendo a la pérdida de la opción o pretensión cambiaria, dejando a salvo y subsistente, la relación causal, primaria, fundamental, básica o subyacente, denominaciones usadas con frecuencia por la doctrina del Derecho de Títulos Valores.

Artículo 129.- Incondicionalidad de la aceptación

129.1 La aceptación es pura y simple; pero el girado puede limitarla a una parte de la cantidad, en cuyo caso procede el protesto respectivo por falta de aceptación, dentro del plazo previsto al efecto y la acción de regreso por la suma no aceptada, conforme al Artículo 148.

129.2 Cualquier otra modificación o condición en la aceptación equivale a su negativa y da lugar al respectivo protesto y a la acción cambiaria que corresponda.

La aceptación no puede estar sujeta a condición alguna. Así, no cabe aceptar una cambial sujetando el pago a que el beneficiario designado cumpla con la entrega de mercaderías adquiridas según Factura N° 000111222. Teniendo pues destino circulatorio, resulta inadmisibles incorporar condiciones para cumplir con la obligación que genera la aceptación, por lo que quien acepta una cambial queda incondicionalmente obligado a pagarla, e imposibilitado de oponer excepciones personales frente a tenedores distintos a quien se encuentre vinculado por la vía causal. La norma es clara y contundente: la aceptación es pura y simple.

Lo que se admite es que el girado acepte pagar la cambial sólo en parte. Que rechace el pago total y admita pagar una parte del importe de la cambial. En ese caso de aceptación parcial, el girador quedará también parcialmente liberado de su responsabilidad por la aceptación que es total y el tenedor deberá lograr el protesto por falta de aceptación parcial. Tal protesto o constancia de la falta de aceptación total, deberá lograrse dentro del plazo que se haya señalado en el documento para lograr la aceptación o antes de su vencimiento, como señala el artículo siguiente.

Ante la evidencia que la cambial no ha sido aceptada en su totalidad, lo que se logra con el protesto por falta de aceptación (total), del que no puede prescindirse y debe practicarse aun cuando se hubiere pactado en el mismo documento que se trata de una cambial no sujeta a protesto o "Sin Protesto", cláusula que no surte efecto para los fines del protesto por falta de aceptación, bien puede ya darse inicio a las acciones de cobranza por la parte no aceptada, contra los obligados que asumieron responsabilidad por su aceptación y pago, sin tener que esperar la fecha de vencimiento señalada en el documento, conforme dispone el art. 148.

Los condicionamientos que pueda incluir el girador en el acto de su aceptación o cualquier modificación que no se limite al monto de la cambial, significan que la aceptación no es pura y simple; por tanto, el girado no ha cumplido con aceptarla, lo que conlleva el derecho del

tenedor de proceder a su protesto por falta de aceptación (pura y simple) y a ejercitar sus derechos de cobranza en forma inmediata contra los obligados en los términos faciales de la letra de cambio. Una cambial no aceptada, salvo disposición expresa distinta de la Ley, no surte efectos cambiarios frente al girado-no aceptante. La excepción a la que nos referimos se da en el caso de la letra de cambio a la vista, emitida a cargo del cuentacorrentista que mantiene saldo deudor impago, la misma que no requiere de aceptación.

Artículo 130.- Presentación para la aceptación

130.1 Cuando la Letra de Cambio deba ser aceptada, la presentación para su aceptación se hará en el lugar señalado en el título y, si no se indica, en el lugar que corresponde a su pago.

130.2 El girador puede estipular en la Letra de Cambio que ésta se presente para su aceptación, fijando un plazo o sin esta modalidad. Puede, asimismo, estipular que la presentación a la aceptación no se efectúe antes de determinada fecha.

130.3 Todo endosante puede estipular que la Letra de Cambio se presente a la aceptación, fijando o no un plazo para ello.

130.4 La inobservancia del plazo para la presentación a la aceptación puede ser invocada sólo por el girador o endosante que la consignó o personas que hayan intervenido después de quien lo consignó.

130.5 Si no se consignó plazo para su presentación a la aceptación, será obligatoria su presentación para ese efecto, antes de su vencimiento.

Siguiendo el principio de literalidad, la cambial debe ser presentada para su aceptación en el lugar señalado para tal fin en el título. En su defecto, se aplica la regla del lugar de cumplimiento de las obligaciones, esto es, la aceptación debe lograrse en el lugar designado para su pago. Para ese efecto, al haberse establecido en el art. 119.h) que en la cambial debe constar dicho lugar, será muy fácil para cualquier tenedor saber dónde dirigirse para obtener la

aceptación de una letra de cambio. En caso de no haberse consignado tal lugar de pago, opera otra regla, que señala que debe entenderse que tal lugar de pago es el que figura junto al nombre del girado (art. 120.a), por lo que debe ser en dicho lugar donde debe presentarse la letra de cambio para su aceptación. Si no se hubiere consignado domicilio alguno junto al nombre del girado, conforme al art. 120 b) bien podrá presentarse en el domicilio del obligado principal que, en el caso de una letra de cambio no aceptada, viene a ser el girador. Trata pues la ley de proporcionar todas las alternativas de solución, en lugar de optar por la solución fácil y perjudicial para los agentes del mercado de sancionar con nulidades o ineficacias de documentos que pueden lograr su aptitud cambiaria con alternativas válidas de solución como ésta. Estas remisiones y a veces elaboradas aplicaciones de las presunciones legales, sin duda, se evitarán con el uso de formatos estandarizados de título valores, aprobados por las autoridades pertinentes, que evitarán estas complejas alternativas que pueden generarse por la falta de algunas informaciones.

En cuanto al plazo dentro del que debe lograrse la aceptación, debe observarse el contenido literal del documento; pues podrá haberse (i) fijado un plazo para ese efecto indicando, una fecha fija o un plazo dentro del cual debe lograrse la aceptación; o (ii) que se presentación no se haga antes de una fecha determinada; o (iii) que no se haya fijado plazo alguno para ese fin.

En el primer caso, deberá observarse tal plazo y presentarse la cambial para su aceptación dentro de ese término o en la fecha fijada para ese efecto, resultando toda inobservancia al respecto una negligencia del tenedor que puede perjudicar el título valor. En el segundo caso, deberá observarse la prohibición señalada de presentarlo antes de la fecha indicada, debiendo hacerlos después de transcurrido el período fijado. En el tercer caso, si no se consigna en la misma letra de cambio un plazo para la presentación a su aceptación, podrá obtenerse la misma en cualquier momento, hasta antes de su vencimiento.

Estas estipulaciones sobre plazos para lograr la aceptación, pueden ser consignadas (i) por el girador o (ii) por cualquiera de los endosantes que, como obligados de la cambial, tienen especial interés en conocer si el girado aceptará asumir o no la obligación de su pago,

por lo que aun cuando el girador no hubiere señalado plazo para este fin, cualquier endosante puede hacerlo.

La inobservancia en la presentación a la aceptación en el plazo consignado por un endosante, sin embargo, sólo puede ser invocada por el endosante que haya consignado tal plazo y/o personas que hayan intervenido con posterioridad a él, por lo que la cambial aceptada en fecha distinta surtirá efectos cambiarios plenos frente a personas distintas al endosante que puso tal plazo y personas que hubieren intervenido después que él. Distinta es la consecuencia de la inobservancia del plazo para presentarla a su aceptación señalado por el girador, como puede apreciarse del artículo siguiente.

Artículo 131.- Efectos de la falta de presentación a la aceptación

131.1 El tenedor pierde la acción cambiaria contra todos los obligados cuando, siendo necesario presentar la Letra de Cambio para su aceptación, no lo hiciere en el plazo legal o en el señalado en el título por el girador.

131.2 También pierde el tenedor la acción cambiaria contra el endosante o garante que hizo la indicación del plazo para su presentación a la aceptación y contra los que posteriormente suscribieron la Letra de Cambio, si ésta no es presentada en el plazo señalado por cualquiera de los endosantes o garantes.

El artículo anterior permite que el girador o el endosante de una letra de cambio consignen en el documento una fecha para su presentación a la aceptación. En el caso que un endosante haya consignado dicho plazo, es obvio que la inobservancia de tal estipulación no puede ser invocada sino por él o por las personas que hubieren intervenido posteriormente, al haber participado en un documento que ya señalaba esa estipulación. En cambio, si hubiese sido el girador quien consignara dicha estipulación, la cambial tendría desde su origen esa condición, por lo que su inobservancia podrá ser invocada tanto por el girador como por cualquiera de los endosantes y garantes que intervinieron en una cambial que tenía esa estipulación desde un inicio.

Lo propio ocurrirá si el tenedor de una letra de cambio, sin indicación de una fecha para su presentación a la aceptación, no la presentara para ese fin antes de su vencimiento. En ambos casos, dicho tenedor perderá la acción cambiaria al haber perjudicado la cambial.

La perderá igualmente, frente a quien puso dicha estipulación, que bien puede ser un endosante o un garante de alguno de éstos, así como frente a las personas que hubieran intervenido en la cambial en fecha posterior a la parte que puso tal fecha para presentar la letra de cambio a su aceptación, dado que al intervenir éstos ya constaba en el documento esa obligación. En cambio, quienes intervinieron cuando no constaba esa estipulación, no podrían invocar una obligación inexistente en oportunidad en que intervinieron, lo que resulta y responde a la lógica del derecho cambiario.

Artículo 132.- Pluralidad de girados

132.1 Cuando sean varios los girados, el tenedor presentará la Letra de Cambio en el orden que considere conveniente. En el caso de indicación alternativa, la presentará a quien dicho tenedor elija, y en el caso de indicación sucesiva, la presentará en el orden enunciado en la Letra de Cambio.

132.2 Si la Letra de Cambio fuese aceptada por montos parciales por más de un girado, cada cual responderá por su pago por el monto parcial aceptado, debiendo anotarse en el mismo título los pagos que realicen, sin que sea necesaria la devolución a la que se refiere el Artículo 17, sin perjuicio de la obligación del tenedor de expedirles las constancias de pago correspondientes.

Con la finalidad de asegurar la aceptación de la letra de cambio en su monto total, bien puede el girador designar a más de un girado responsable de su pago. Tal designación plural de personas que se encarguen de su pago puede hacerse del modo más variado y alternativas diversas posibles. Así, pueden designarse a varias personas para que sea el tenedor quien elija al girado que debe hacerse cargo de su pago, en el orden que él decida libremente. Lo

propio ocurrirá si el girador dio alternativas para ese efecto, por ejemplo, mediante cláusulas como “o” o “y/o”. También el girador puede haber señalado un orden de presentación, en modo tal que la letra de cambio sea presentada para su aceptación a uno de los designados, sólo si el anterior a él hubiera rechazado, total o parcialmente.

Esta forma de giro a cargo de varios girados, puede hacer que una misma letra de cambio sea parcialmente aceptada por varios de ellos, existiendo varios responsables por su pago total, en forma proporcional al monto hasta por el cual la aceptaron

Es importante prever las consecuencias que tendría una letra de cambio con varios girados que fuese aceptada parcialmente por más de uno de ellos. Aun cuando esta situación no sea usual o frecuente, ante la posibilidad legal prevista en este artículo de varios girados y la facultad de éstos de aceptarla parcialmente, podría ocurrir y de hecho que ocurrirá, que una misma letra de cambio resulte ser pagadera en varios lugares en proporción al monto aceptado por cada uno de los girados. Ello podría originar una imposibilidad material de presentar la cambial a todos los girados aceptantes parciales para su pago el día de su vencimiento, ante la eventualidad que ellos hubieren señalado distintas ciudades y lugares de pago de la parte aceptada por cada quien. Del mismo modo, si la cambial deba ser protestada, el trámite deberá tener que cumplirse en cada lugar y dentro del plazo previsto por la ley para ese efecto. Al respecto, el actual régimen previsto para el protesto permite holgadamente realizar dicho trámite que hoy ha sido liberado de formalidades excesivas e innecesarias que señalaba la anterior ley. Del mismo modo, esta situación que puede crearse, bien puede ser superada utilizando como forma de pago el cargo en cuentas bancarias que mantengan cada uno de los girados; eliminando así las dificultades operativas que esta clase de cambiales pueden generar en la realidad.

Por otro lado, ante la exigencia de cada uno de los aceptantes de que se les entregue en devolución la cambial que pagan, podría generarse también un problema material al no poder hacerlo. Por tanto, quien verifica el pago parcial de esta letra de cambio hasta por el monto que aceptó, debe cuidar que dicho pago conste en recibo parte y además se anote literalmente en el mismo documento,

anotación que lo liberará como obligado principal por dicha porción. Si el pago hecho por uno de los girados es parcial o alguno de ellos no cumple con el pago que le respecta por la parte que aceptó, procederá el protesto por esa causa contra cada uno de dichos obligados y por los respectivos importes de su responsabilidad.

Artículo 133.- Segunda presentación para aceptación

El girado puede pedir que la Letra de Cambio sea presentada por segunda vez para su aceptación, al día hábil siguiente de la primera presentación. De esta petición, de ser el caso, debe dejarse constancia ante el fedatario encargado de su protesto. De aceptarse la Letra de Cambio a su segunda presentación, el protesto quedará sin efecto.

El girado tiene derecho a exigir que se le presente por segunda vez la cambial girada a su cargo para su aceptación. No está pues obligado a aceptarla en la primera oportunidad de su presentación. Ello, debido a que la cambial presentada puede tener un texto y contenido distinto a lo acordado con el girador o que se requiera hacer consultas y confirmaciones previas.

Podría ocurrir que la presentación a la aceptación se haya realizado el último día para hacerlo. Esperar un día adicional podría perjudicar al tenedor, ante su incumplimiento en lograr su protesto, por lo que ello queda subsanado dejando constancia ante el fedatario encargado de su protesto por falta de aceptación, de la petición hecha por el girado de que la cambial le sea presentada nuevamente al día hábil siguiente.

De ser aceptada la letra de cambio a su segunda presentación, el protesto por falta de aceptación que se hubiere adelantado quedará sin efecto. Si no fuese aceptada, se protestará el documento o el protesto ya adelantado quedará firme.

Artículo 134.- Aceptación de la Letra de Cambio con Vencimiento a cierto plazo desde la aceptación

134.1 Para que la Letra de Cambio a cierto plazo desde la aceptación sea exigible, debe ser presentada al girado para su aceptación, dentro del plazo de un año desde que fue girada.

134.2 El girador puede reducir este plazo o fijar uno mayor, debiendo en ese caso dejarse constancia en el mismo título.

Siendo la letra de cambio un documento comercial típicamente de corto plazo, sin que ello signifique que no pueda usarse también válidamente para representar obligaciones crediticias en el mediano y largo plazo, ante la falta de indicación en el mismo documento de la fecha o plazo dentro del que deba ser presentada para su aceptación, se opta por fijar el plazo de un año contado desde su giro para ese efecto. Así, esta regla y plazo legal para la presentación de la cambial para su aceptación, debido a que su vencimiento se computará desde esa fecha en la que ocurra tal aceptación, sólo rige cuando no se hubiera señalado plazo convencional para ese propósito.

El girador tiene pues la facultad de consignar en el mismo título un plazo mayor o menor a un año, para que el tenedor presente la letra de cambio al girado para su aceptación. No hay límite mínimo ni máximo para ello.

Las letras de cambio con vencimiento “a cierto plazo desde la aceptación”, son cambiales que siempre están giradas a cargo de un tercero. Por ello, requieren de un acto complementario que debe ser cumplido sea por el beneficiario (que puede ser el mismo girador o tercero) o cualquier otro tenedor.

Artículo 135.- Aceptación de Letra de Cambio a fecha fija o a la vista o a cierto plazo desde su giro

La Letra de Cambio con vencimiento a fecha fija, o a la vista, o a cierto plazo desde su giro puede ser presentada por el tenedor para la aceptación, aunque el girador no haya insertado estipulación al respecto. La presentación para la aceptación podrá ser hecha antes del vencimiento si la Letra de Cambio es a fecha fija o a cierto plazo desde su giro, y dentro del plazo de un año desde su giro si es a la vista, salvo que en su caso se haya fijado fecha distinta para su aceptación.

Una letra de cambio con vencimiento a la vista o a fecha fija, puede estar pendiente de ser aceptada o contar ya con esa formalidad.

Si se trata de una cambial con fecha fija de vencimiento y no aceptada, la presentación para la aceptación debe hacerse hasta antes de esa fecha de su vencimiento, conforme también lo señala el art. 130.

Si se trata de una letra de cambio con vencimiento a la vista, puede presentarse para su aceptación si aún no lo tuviera, en el curso de un año desde su giro. Ante la posibilidad de que en una cambial con vencimiento a la vista se pueda fijar un plazo distinto a un año para su presentación a la aceptación o pago, se dispone que en tal caso, debe observarse el plazo previsto para ese fin en el mismo documento que prima sobre la regla general de presentación en el curso de un año de su giro, regla ésta que opera sólo ante la falta de cláusula expresa o plazo contractual distinto que conste en la misma cambial.

Cabe precisar que, habiéndose hecho una clara distinción entre vencimiento a la vista y acto de aceptación, cabe que la letra de cambio con vencimiento a la vista ya esté aceptada en oportunidad de su presentación a cobro. Si ya cuenta con aceptación, su vencimiento se producirá en el momento que su tenedor decida hacerla efectiva, dentro del plazo al efecto consignando en la misma cambial o ante la falta de tal indicación, dentro del año de su giro. Si se trata de una cambial no aceptada, el tenedor puede optar entre (i) presentar la letra de cambio ante el girado para su aceptación y pago, simultáneamente. Si no la paga, entonces tampoco la aceptará. En ese caso, procederá su protesto por falta de aceptación y no por falta de pago; (ii) presentarla en primer lugar para su aceptación; pues el tenedor puede tener interés en conocer con certeza de que se trata de una cambial que tiene un obligado principal que haya manifestado su voluntad de asumir su pago. Y sólo posteriormente presentarla para su pago. En esta segunda alternativa se tendrá la certeza de su rechazo de aceptación (con el protesto pertinente) o la certeza de que se cuenta con un obligado principal, a quien se presentará la cambial que ya cuenta con aceptación, para su pago. De no atenderse tal pago, se protestará por tal causal; salvo pacto que lo libere.

Artículo 136.- Obligación del Girado

El girado a quien se le presente la Letra de Cambio para su aceptación está obligado a aceptar o rechazar su aceptación. Toda demora faculta al tenedor a solicitar su protesto.

La obligación de aceptar o rechazar la aceptación de una letra de cambio por parte del girado debe ser cumplida sin trámites ni dilaciones y de inmediato. Y es que el tenedor como los demás intervinientes tienen especial interés en conocer si dicho girado va a asumir o no la calidad de obligado principal de dicha cambial, conforme está señalado en el documento.

La excepción a esta regla es el plazo de un día que puede solicitar dicho girado para manifestar tal negativa o su aceptación, conforme señala el art. 133, sin afectar en ese caso el trámite del protesto.

Cualquier demora en la manifestación de dicha voluntad, faculta al tenedor a solicitar su protesto por esa causal y a ejercitar en ese caso sus derechos sin tener que esperar el vencimiento de la cambial, conforme señala el art. 147.

Artículo 137.- Aceptación Rehusada o Testada

137.1 Se considera rehusada la aceptación si el girado la testa antes de restituir el título. Salvo prueba en contrario, se considera que la aceptación fue testada antes de la restitución del título.

137.2 Sin embargo, si el girado ha hecho conocer su aceptación por escrito o documento de fecha cierta al tenedor o a un firmante cualquiera, queda obligado respecto de ellos en los términos de su aceptación testada.

El acto de la aceptación debe ser un acto libre y voluntario del girado, quien de ese modo se convierte en el obligado principal de pagar la cambial. Se tiene por hecha la aceptación, sólo en la medida que el girado luego de enterado de su contenido manifieste su voluntad de asumir la obligación de pagarla, consignando su firma en el anverso del mismo documento.

Pese a haber admitido en primera instancia asumir la obligación de pagar la letra de cambio que le fue presentada para su aceptación, puede modificar tal decisión antes de restituirla al tenedor, siendo para ello suficiente que teste o tache la constancia de su aceptación. En ese caso, se considerará rehusada la aceptación. De no haber prueba fehaciente que la aceptación fue testada después de haberla restituido al tenedor, se presumirá que fue hecha antes de su restitución. Al respecto, ha habido casos en los que la aceptación fue testada ya en las oficinas de los juzgados, por aceptantes inescrupulosos que han aprovechado el descuido de los secretarios que les confían los expedientes en los que se encontraba la cambial. En estos casos, por ejemplo, será muy fácil demostrar que se testó después de haber sido restituida la cambial al tenedor, cometándose inclusive un acto delictivo.

Tampoco surtirá efecto la anulación de la aceptación, si aun cuando hubiere sido antes de restituir la cambial al tenedor, el girado hubiere hecho conocer su voluntad de hacerse cargo del pago de dicha cambial mediante cualquier documento de fecha cierta o por medio escrito, dirigido a cualquier interviniente de la cambial. En ese caso, la aceptación testada no resulta oponible al destinatario de dicha comunicación. Se trata pues de un caso excepcional en el que una obligación que consta en documento aparte al título valor, surtirá pleno efecto respecto a la persona a quien hubiere sido dirigida dicha comunicación.

Artículo 138.- Cambio de lugar de pago en la aceptación

138.1 Cuando el girador hubiere indicado en la Letra de Cambio un lugar para el pago diferente del domicilio del girado, éste puede señalar ese domicilio u otro distinto en el momento de la aceptación y/o consignar la cláusula a que se refiere el Artículo 53.

138.2 A falta de esta indicación, se entiende que el aceptante se ha obligado a pagarla en el lugar designado para el pago, según el documento.

Cuando el domicilio del girado no coincida con el lugar de pago de la letra de cambio consignado por el girador, cabe que en el

momento de aceptar, aquél (girado) modifique dicho lugar de pago con el que corresponda. Sólo en este supuesto de falta de coincidencia entre el domicilio del deudor y el lugar de pago, cabe que el girado consigne otro lugar como el lugar correcto en el que debe ser exigida la obligación; pues en caso contrario, conforme señala el art. 120 se presumirá que el lugar señalado junto al nombre del girado, además de considerarse como su domicilio, será el lugar de pago.

El girado igualmente, haya o no coincidencia entre el lugar de pago y su domicilio, puede sustituir el lugar indicado para el pago en la cambial por el mandato de pago mediante cargo en alguna cuenta que tenga en cualquier empresa del sistema financiero nacional.

Así, sólo luego de aceptada la letra de cambio, podrá conocerse con certeza el lugar de pago de ésta; pues en el caso de no coincidir con el domicilio del girado o en caso que éste opte por pagarlo en lugar distinto, o elija hacerlo mediante cargo en su cuenta, puede ser modificado en el momento de la aceptación el que conste en el documento como lugar de pago.

Si en dicha oportunidad, el girado no realiza variación alguna al respecto, debe entenderse que el aceptante queda obligado a pagarla en el lugar señalado en el documento.

Artículo 139.- Reaceptación de la Letra de Cambio

139.1 La reaceptación importa la renovación de la obligación en los términos de la aceptación precedente, en cuanto al monto, plazo y lugar de pago, salvo cláusula en contrario.

139.2 La reaceptación constará en el anverso del título o en hoja adherida a él.

139.3 Por el hecho de la reaceptación quedan cambiariamente liberados los anteriores firmantes de la Letra de Cambio, salvo que vuelvan a intervenir.

139.4 La reaceptación no será necesaria si el obligado otorgó su consentimiento escrito por anticipado para su prórroga,

conforme al artículo 49, no siendo de aplicación en ese caso lo dispuesto en el párrafo anterior.

Al vencer al plazo de una letra de cambio, puede ocurrir que ella se pague o no. Cuando no se pague, puede ser que el incumplimiento sea total o parcial. Igualmente en este caso de falta de pago total o parcial, puede contarse con anuencia del tenedor en postergar el pago a una fecha futura o no contarse con tal aprobación. Sólo en el último de estos casos, procederá que el tenedor inicie el ejercicio de sus derechos de cobro contra los obligados al pago. En cambio, si conviene en conceder al obligado principal un plazo adicional para ese fin, tal acuerdo puede constar en el mismo documento, en cuyo caso el obligado principal debe volver a aceptar la letra de cambio, firmando nuevamente y renovando su compromiso de pagarla en las condiciones que haya acordado con el tenedor. Este acto denominado “reaceptación” que tiene las mismas formalidades que la aceptación, constituye una novación y la obligación contenida según el texto original de la letra de cambio mantiene independencia y se entiende cumplida respecto al texto que tenga la cambial luego de la reaceptación.

Es por eso que, quienes hubieren intervenido en la letra de cambio antes de la reaceptación, distintos al reaceptante, quedan definitivamente liberados de toda responsabilidad frente al tenedor, salvo que intervengan nuevamente después de la reaceptación.

En principio, para esta renovación o nueva vigencia dada a la letra de cambio, basta que el girado firme (reacepte) nuevamente la cambial. En ese caso, se entenderá que la renovación se hace en las mismas condiciones del texto original que tiene la cambial, en cuanto al monto, lugar del pago y vencimiento. Es obvio que habrá que precisar el nuevo vencimiento, en el caso de letra de cambio con vencimiento a fecha fija. Si es a la vista, el plazo para presentar a cobro la cambial reaceptada correrá desde la fecha de su reaceptación. Si se trata de una cambial con vencimiento a determinado plazo para su aceptación, tal plazo se computará también desde la fecha de re-aceptación.

Cabe, sin embargo, modificar las condiciones originales de la cambial. Así, la re-aceptación podría ser por monto menor al original

al haberse verificado algún pago parcial, o por monto mayor que puede corresponder a intereses y/o gastos que se capitalizan, por ejemplo. No hay pues rigidez al respecto y la ley permite realizar pactos y cambios respecto al texto original.

Así, una letra de cambio re-aceptada equivale a una nueva cambial, por lo que muchos prefieren optar por el giro de un nuevo documento, cancelando el anterior. La ventaja de utilizar el mismo documento radica en que las sucesivas renovaciones constan en el mismo documento, facilitando así apreciar la historia o antecedentes de la operación, lo que puede fácilmente perderse al usar en cada oportunidad nuevas cambiales que tienen autonomía o independencia respecto a las anteriores.

El acto de la reaceptación, como puede apreciarse fácilmente, genera pues cierta dificultad en su obtención o formalización, al requerir que el obligado principal vuelva a intervenir en el documento, observando las mismas exigencias y formalidades que en la fase de la primera aceptación, es decir, que conste en el anverso de la letra de cambio o en hoja adherida a ella. También tiene el inconveniente para el tenedor, que los intervinientes distintos al girado reaceptante, quedan liberados definitivamente de toda obligación respecto a esa cambial, salvo que vuelvan a intervenir. Tal sería, por ejemplo, el caso de los endosantes que intervinieron antes de la reaceptación o los garantes, que quedarían totalmente separados y excluidos de responsabilidad respecto a la misma cambial, luego que ésta hubiere sido reaceptada, salvo que vuelven a intervenir como endosantes o como garantes del título valor, volviendo a suscribirla como tales, luego de su reaceptación. Por ello, resulta más ventajoso para el tenedor, el uso de la cláusula a que se refiere el art. 49, que le permite acordar con el obligado principal prórrogas del plazo de la cambial, siendo en ese caso suficiente que el mismo tenedor los señale en el documento, sin que sea necesaria la intervención del girado, ni de los demás obligados solidarios, quienes al haber intervenido en una cambial que puede ser prorrogada, eran conscientes y admitieron en la procedencia de tales prórrogas, quedando por tanto obligados del mismo modo que según su texto original aún cuando la cambial fuese prorrogada sucesivamente.

Así, para esta ley, existe una diferencia entre la “renovación” o “reaceptación” por un lado y la “prórroga” por otro lado, lo que con suma claridad se explica en el Glosario. No son pues más términos sinónimos.

Así, actualmente se cuenta con dos sistemas para los fines de la refinanciación o ampliación del plazo de una letra de cambio. Pactarlo desde un inicio y optar por el régimen de la prórroga de que trata el art. 49, en cuyo caso sin generar novación y mediante simple anotación que ponga el tenedor en el mismo documento, éste puede ser prorrogado en su plazo, sin que los participantes anteriores a la fecha de la prórroga queden liberados de las obligaciones cambiarias respecto a la letra de cambio prorrogada; o, ante la falta de ese acuerdo, mediante la reaceptación, que produce novación y requiere de necesaria y obligatoria intervención del aceptante, quien debe dejar nuevamente constancia de su voluntad de comprometerse respecto a la cambial según su texto a la fecha de tal reaceptación, quedan liberados todos aquellos que hubieren participado antes de dicha renovación.

Artículo 140.- Condición para la reaceptación

La reaceptación procederá sólo antes de la prescripción de la acción cambiaria directa, siempre que el título no hubiere sido protestado u obtenido la formalidad sustitutoria.

La posibilidad de ampliar la vigencia de una letra de cambio, sólo es posible en tanto los derechos que ella represente no hubieren prescrito; es decir, antes de que haya transcurrido más un año desde la fecha de su vencimiento (respecto a los obligados solidarios) y de tres años (respecto al obligado principal).

Prescritas las acciones derivadas de la cambial, aún cuando con ella puedan ejercitarse las acciones causales o de enriquecimiento sin causa, ante su invalidez como título valor, no cabe revivirla; por lo que no surtirán efectos cambiarios la re-aceptación o la prórroga que se hiciera de ella una vez prescrita la acción cambiaria.

Tampoco surtirán efecto tales formas de ampliar el plazo de vencimiento de la cambial, si aun cuando no hubieren transcurrido los

plazos de prescripción, la cambial ya hubiere sido protestada u obtenido la formalidad sustitutoria del protesto. En ese caso, habiendo optado el tenedor con el protesto por la ejecución de sus derechos, no cabe que se desista de ello y modifique su decisión ampliando la vigencia de la cambial ya protestada que, de incurrirse en nuevo incumplimiento, tendría un doble o pluralidad de protestos, con los consiguientes inconvenientes y complicaciones que ello generaría en el ejercicio de las acciones respecto a los participantes anteriores y posteriores a cada protesto. Esta norma resulta coincidente con reiterada jurisprudencia que señala que, realizado el protesto de un título valor, sólo resta acciones por ejecutar. También es coincidente con la regla que contiene el art. 49.1 c) para la prórroga, la que tampoco cabe si el título hubiera sido ya protestado u obtenido la formalidad sustitutoria. Consideramos así que la reaceptación puede darse en el curso de tres años desde el vencimiento de la cambial, y aún cuando se trate de una sujeta al protesto, en la medida que su tenedor haya optado por no protestarla.

3.7. EL PAGO EN LAS LETRAS DE CAMBIO

Artículo 145.- Pago de la Letra de Cambio

145.1 Toda Letra de Cambio es pagadera en el domicilio señalado en ella o con cargo en la cuenta señalada conforme al artículo 53.

145.2 Cualquier endosante u obligado distinto al principal que pague la Letra de Cambio puede testar su endoso o firma y los posteriores.

Una de las informaciones que contiene la letra de cambio es el lugar de pago, que puede consistir en el señalamiento de un lugar o domicilio determinado; o, señalando una cuenta y empresa del sistema financiero que se encargará de hacerlo, de haberse así señalado conforme al art. 53 de esta ley. Por tanto, en estos casos, el tenedor debe requerir su pago en dicho lugar o domicilio, en la forma consignada en el mismo documento.

En el mundo moderno caracterizado por las ventajas que nos ofrece la tecnología y la telemática en general, a pesar de haberse señalado un lugar especial para los fines de su pago, bien puede el

obligado utilizar dichas ventajas tecnológicas para cumplir con el pago, utilizando por ejemplo la red de las empresas del sistema financiero que le permiten cumplir con la obligación en y desde cualquier lugar del planeta. De no contarse con esta intermediación en el pago que prestan las empresas del sistema financiero, en la práctica no será posible optar por modalidades distintas al pago que el lugar físico consignado para ese efecto en la cambial.

Ya hemos visto que en los casos en los que no se hubiera señalado un lugar especial para el pago, se presumirá que debe hacerse en el domicilio del girado, entendiéndose como tal el que figure junto a su nombre; y, a falta de tal indicación, la cambial es exigible en el domicilio real del girado-aceptante. La ley proporciona pues alternativas de solución en lugar de optar por declarar la invalidez del documento.

Si quien hace el pago es un obligado distinto al principal, tiene la facultad de testar o borrar su endoso y firma, así como los de los posteriores a él. Es obvio que este derecho sólo lo tendrá en la medida que realice un pago total de la cambial; pues en los casos que realice un pago parcial sólo podrá dejarse constancia de ello en el mismo documento, sin que proceda testar su endoso o distinta intervención como obligado respecto a la cambial.

Artículo 146.- Pacto de intereses en Letras de Cambio

En la Letra de Cambio no procede acordar intereses para el período anterior al de su vencimiento. Sólo a falta de pago y a partir del día siguiente a su vencimiento, generará los intereses compensatorios y moratorios que se hubieren acordado conforme al Artículo 51 o, en su defecto, el interés legal, hasta el día de su pago.

Por la similitud existente entre la letra de cambio y el cheque, de ser giros u órdenes de pago impartidos a un tercero, no es propio a su naturaleza y antecedentes que su importe genere intereses. Se admite sí que pueda ser objeto de reajuste, pacto que tiene por finalidad mantener su monto a valor constante, y tiene una naturaleza jurídica distinta a los intereses, teniendo su origen en la teoría valorista del dinero.

Esta prohibición, sin embargo, sólo alcanza al período comprendido entre la fecha de su giro y la fecha de su vencimiento. Similar régimen se aplica al cheque por tratarse de un título de pago inmediato y sustituto de dinero. Así, el monto o importe determinado de la letra de cambio a pagarse el día de su vencimiento, no puede ser incrementado con intereses, por lo que en la práctica dicho costo financiero deberá agregarse desde un inicio en su importe.

Documentos como la letra de cambio, que no generan intereses hasta su vencimiento, cuando son negociados en el mercado secundario por su valor a la fecha de dicha negociación, conllevan ser descontados; esto es, debe calcularse el costo financiero entre la fecha de la transferencia y la fecha de su vencimiento, determinado lo cual se descuenta del importe de la cambial. En este aspecto, se asemeja a los “bonos cupón cero” que se limitan a representar el pago de una suma determinada en la fecha establecida, sin que quepa agregar intereses.

Una vez vencido el plazo y llegado el día en que deba ser pagada, de ocurrir una mora total o parcial, es posible y además lógico que genere intereses, los que se devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento, por el período que dure la mora y hasta la fecha en la que se verifique su pago total.

Dichos intereses aplicables durante el lapso de mora, pueden ser los compensatorios pactados (si se acordó sólo éstos), o los compensatorios más moratorios pactados (si se hubiere acordado ambos intereses); y, en defecto de pacto de intereses, generará sólo el interés legal. Esto es, siempre generará intereses por la parte no pagada de su importe, por el lapso que dure tal mora; pues las obligaciones de pagar sumas de dinero generan intereses salvo pacto en contrario, conforme a los arts. 1324 y 1663 del C.C.

Después de haber comentado los arts. 145 y 146 sobre el pago y el pacto de intereses en las letras de cambio, respectivamente, corresponde tratar la institución del “protesto” regulado en esta Ley 27287 en el art. 70 y sgts., y sus variables, tales como el pacto de no protesto, la invalidez de la cláusula sin protesto, la formalidad sustitutoria al protesto y el protesto facultativo, para retornar luego, al

art. 147 y al indispensable protesto por falta de aceptación cuando se presenta tal situación. Veamos las novedades del protesto.

3.7.1., 3.7.2., y 3.7.3. Fecha de pago; Pago parcial y Lugar de pago.

Con relación al tema “lugar de pago”, y tal como lo dijéramos antes de la transcripción de estas cuatro ejecutorias, debemos comentar lo que dispone la Ley en su Libro Primero, Reglas Generales, en cuanto a la fecha de pago, pago parcial y lugar de pago. Empecemos por Fecha de Pago. En efecto, el art. 64 de la Ley tiene el siguiente tenor:

Artículo 64º.- Fecha de pago

64.1. Las prestaciones contenidas en un título valor deben ser cumplidas el día señalado para ese efecto. El tenedor no puede ser compelido a recibir en fecha anterior.

64.2. Quien cumple la prestación que le corresponde antes de la fecha establecida en el título, lo hace por su cuenta y riesgo, y responde por la validez del pago.

64.3. Quien paga a su vencimiento o en la fecha prevista para ese efecto, queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con dolo o culpa inexcusable.

64.4. El obligado contra el cual se ejercite o pueda ejercitarse las acciones derivadas del título valor, está facultado para exigir, contra el pago que realice, la entrega del título valor cancelado; y, de ser el caso, la constancia del protesto o de la formalidad sustitutoria, más la cuenta de gastos cancelada, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 17º.

El pago es “la realización de la prestación que le proporciona al acreedor el objeto debido para la satisfacción de su interés, al tiempo que extingue el vínculo y libera al deudor”²⁸.

Se afirma que el pago es al mismo tiempo fin y medio. El medio es la realización o ejecución de la prestación por el deudor y el fin puede ser variado, ya que aquella prestación tiende a satisfacer al

²⁸ WAYAR, Ernesto. *Derecho Civil, Obligaciones*. Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, Página 224.

acreedor proporcionándole el objeto debido, extinguiendo el vínculo y liberando al deudor.

El pago es una de las formas generales de extinción de las obligaciones. El pago es, por decirlo así, la forma natural o por excelencia de extinción de las obligaciones.

Al mismo tiempo, **WAYAR**²⁹ opina que el pago es un acto de conservación y transformación del patrimonio. Conservación para el deudor, pues el eventual incumplimiento le pondría en peligro de ser ejecutado; de allí la importancia del pago para él. Respecto del acreedor, el pago implica la transformación de su patrimonio, el cual se verá incrementado.

Este art. 64 se ocupa de la fecha u oportunidad en que debe efectuarse el pago de las prestaciones contenidas en un título valor.

Este cumplimiento, señala el inciso primero, debe llevarse a cabo en el día señalado para ese efecto.

La norma fuente de esta disposición es el art. 94 de la ley anterior, el cual establecía la oportunidad en la que la letra de cambio debe ser pagada: “el día de su vencimiento”.

Asimismo, se señala que el tenedor no puede ser compelido a recibir el pago en fecha anterior al vencimiento de la obligación, regla tomada del art. 95 de la ALTV que decía: “El tenedor de la letra de cambio no puede ser obligado a recibir su importe antes del vencimiento”. En este caso, quien paga el título valor antes de su vencimiento, asume el riesgo que dicho accionar implica, pues podría ocurrir que quien aparece como tenedor del título no fuera su legítimo titular y el pago anticipado impediría salvaguardar los derechos del acreedor.

De ahí que el segundo inciso enfatiza que quien cumple la prestación que le corresponde antes de la fecha establecida en el título, lo hace por su cuenta y riesgo, y responde por la validez del pago. De ello se infiere que la existencia del pago anticipado, sólo

²⁹ WAYAR, Ernesto. Op. cit., Página 227.

puede darse de común acuerdo entre el tenedor del título y el obligado que paga, pues éste no puede exigirle a aquél, y viceversa, que el pago se haga antes del vencimiento, sino que debe existir un convenio previo, y aun así, adoptando ciertas previsiones y seguridades.

En efecto, cuando la ley señala que el deudor será responsable por la validez del pago anticipado que efectúe, se coloca en el supuesto de que se presenten situaciones anormales o peligrosas como aquéllas en la cual el obligado pague a un tenedor de mala fe. Al respecto, opina **Lisandro PEÑA NOSSA**³⁰ que el deudor se vería obligado a pagar dos veces, de tal modo que si en la práctica se presenta un pago de esa naturaleza lo aconsejable sería que el deudor exija el endoso por parte de la persona que le presenta el título valor.

Es norma de ordenado comerciante efectuar el cumplimiento de sus obligaciones con oportunidad; no antes, no después. El comerciante conduce y administra su actividad empresarial con un flujo de caja, el cual registra sus operaciones, sus ventas y sus cobranzas, sus ingresos y sus egresos. Conoce y calcula sus cuentas por cobrar; conoce en forma indubitable sus cuentas por pagar. Establece o señala un porcentaje de su activo circulante para afrontar contingencias o conoce que puede conseguir el importe necesario vía su pasivo circulante. En este orden de ideas, no cabe afrontar por adelantado obligaciones de vencimiento diferido: no guarda lógica ni coherencia. Se han conocido casos, lamentablemente no infrecuentes, en que acreedores próximos a ser declarados y decretados procesalmente insolventes, convocan a sus deudores de obligaciones a prudente tiempo fecha, a quienes convencen y persuaden la cancelación inmediata de las mismas consiguiendo a cambio impresionantes rebajas, y ofreciéndoles incluso, la devolución de los títulos valores representativos de aquellas, debidamente cancelados, con la cual, creen, extinguen la obligación cartácea y obvio, con ella, la causal. Al poco tiempo de cerrada esta desaconsejable operación, se produce la insolvencia y eventualmente la quiebra fraudulenta: no hay sistemas ni registros contables, ni declaraciones tributarias, ni provisiones para beneficios sociales, ni la

³⁰ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 122.

descripción de las causas que han motivado el descalabro del deudor quebrado. La preocupación de aquél o aquellos que pagaron obligaciones anticipadas y consiguieron la cancelación adelantada de los bienes muebles, inmuebles, derechos, bienes incorporables y otros intangibles, debe ser mayúscula. La posibilidad de ser incluidos en procesos penales como cómplices, coautores o encubridores de quiebras fraudulentas, y aun culposas, es evidente, y se estará, naturalmente, a la situación particular de cada caso. No debemos olvidar que la ley dispone la nulidad de los actos y contratos celebrados o concertados por los quebrados o insolventes, dentro de los seis meses anteriores a producida ésta. La defensa sustentada en la buena fe del acreedor que anticipó el pago de obligaciones de fecha diferida y futura, será difícil, toda vez que las disposiciones mercantiles en general, y cambiarias en particular, precisan que las obligaciones deben ser cumplidas el día señalado para el efecto.

Con relación al pago anticipado que venimos comentando, existen dos reglas generales: la primera es que el tenedor no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento; la segunda es que el girado o aceptante que paga la letra de cambio antes del vencimiento lo hace a su riesgo y peligro, comenta **GOMEZ LEO**. La fundamentación de esta segunda regla es abordada, prevalecientemente, desde el punto de vista jurídico. En efecto: el pago anticipado, puesto que es anormal, siempre puede ser calificado como sospechoso, tanto en materia cambiaria como en materia concursal. Veamos los matices y consecuencias que presenta en materia cambiaria. Si el portador de la letra no es el verdadero dueño del título ni titular del derecho cartáceo incorporado en él, por tratarse de una letra robada o perdida, sin que se haya operado la adquisición *a vero domino* (en otras palabras, porque se a operado la adquisición *a non domino*, es decir *de quien no es el dueño*), cuando se presente el verdadero dueño, el deudor que pagó anticipadamente deberá pagar nuevamente, pues pago mal la vez anterior. Lo propio ocurre en el caso de que al pagar, el deudor no exija la entrega de la letra, o recibéndola, y no habiendo literalizado el pago, la pierda y ella vuelva irregularmente a la circulación. Al adquirirla *a non domino* un tercero de buena fe, cuando se produzca el vencimiento, el deudor deberá volver a pagarla, pues el pago anticipado no lo liberó.

Respecto del derecho concursal acotamos que el pago anticipado, en caso de que se lo realice en el período de sospecha, es un pago que resulta ineficaz de pleno derecho respecto de los acreedores del fallido, aún cuando el portador del título sea de buena fe.

El inciso tercero, enfatiza que quien paga al vencimiento o en la fecha prevista para ese efecto, queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con dolo o culpa inexcusable (tercer párrafo del art. 95 ALTV). Esta previsión resulta lógica, dado que no puede tener efecto liberatorio el pago realizado, por quien sabe que lo está haciendo a quien no tiene derecho a percibirlo, es decir, a quien no es el titular del derecho pero que está legitimado por la tenencia del documento y aparente secuencia no interrumpida de endosos, procediendo a sabiendas y de este modo, dolosamente. La legitimación viene dada en primer término por la posesión del documento: esta es requisito indispensable para ejercer los derechos incorporados al título. Ha dicho **FERRI** que "legitimación y titularidad, si bien normalmente coexisten, no son conceptos coincidentes. Se tratan de situaciones jurídicas diversas, basadas en diversos presupuestos jurídicos. El primero concierne a la potestad para ejercer el derecho emergente del título; el segundo, a la pertenencia del mismo: la legitimación compete a quien tiene la investidura formal del título, aunque el derecho no le pertenezca. En definitiva, el título tiene por función atribuir la legitimación, pero no su titularidad, de la que la circulación prescinde. Así, puede haber circulación de la legitimación sin circulación del derecho y viceversa: frente al deudor solamente tiene eficacia la circulación de la legitimación y de ahí que el legitimado pueda exigir aunque no sea titular, y el no legitimado no pueda exigir aunque sea titular. Todo el sistema cartular gira en torno de esta dualidad de conceptos y su relativa independencia: la relevancia de la legitimación y la irrelevancia de la titularidad.

Al respecto, el CC precisa que quien procede con dolo, no ejecuta la obligación de modo deliberado (art. 1318) y que incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación (art. 1319).

El último inciso –concordante con el art. 17- faculta al deudor que pagó el título valor, a exigir la entrega del documento cancelado; y

de ser el caso, la constancia de protesto o de la formalidad sustitutoria, más la cuenta de gastos cancelada; sin perjuicio de que las partes pudieran acordar su destrucción prescindiendo de su devolución física.

Veamos a continuación la legislación y doctrina de Argentina y Chile. El segundo y tercer párrafo del artículo 43 de la ley argentina señala, "el girado que paga antes del vencimiento lo hace a su riesgo y peligro. El que paga la letra de cambio a su vencimiento queda validamente liberado, a menos que haya procedido con dolo o culpa grave; él está obligado a verificar la regular continuidad en los endosos, pero no a constatar la autenticidad de las firmas de los endosantes". El artículo 56 de la ley chilena indica que "el librado que paga antes del vencimiento queda responsable de la validez del pago. El que paga la letra a su vencimiento queda validamente liberado, a menos que lo haya hecho a sabiendas para consumir un fraude". El artículo 64 de la ley peruana guarda concordancias con los artículos 16, 17 y 46 de la misma. **Ignacio A. ESCUTI** (h.) nos dice, refiriéndose a la legitimación activa, que "no se interrumpe la serie de endosos por el hecho de que existan endosos cancelados, pues se los tiene por no escritos. Pero, excepcionalmente, puede ocurrir que el documento haya sido transmitido por cesión, en cuyo caso el tenedor debe justificar su derecho con la cadena de endosos que pudiera existir y el instrumento de cesión". **Héctor CAMARA**, refiriéndose a la legitimación pasiva, nos dice lo siguiente "en ese sentido hay que recordar que basta la investidura formal del requirente de conformidad con la apariencia emergente del título. El tenedor del documento no necesita acreditar la legitimidad de la propiedad del mismo, ni de los endosatarios anteriores a él. Por otra parte, quien abona el título no debe indagar la autenticidad de los endosos ya que esto sería prácticamente imposible en el breve lapso que tiene para cumplir".

Para el profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO**, en el derecho común, el pago es el medio natural de cumplimiento de la prestación que atañe al objeto de la obligación. Junto a él aparecen regulados otros modos de extinción de las obligaciones, v.gr. novación, confusión, renuncia o remisión, etc.

El principio de autonomía de independencia que presenta el derecho cambiario, resulta el sustrato material para que en

oportunidad de su transmisión por vía de endoso, cada uno de los firmantes comprendidos entre los dos extremos de esa cadena, presenten el doble carácter de acreedores y responsables eventuales; acreedores, cada uno, con respecto a los firmantes anteriores y responsables, cada uno, frente a los firmantes que les sucedieran en el nexos cambiario. Tal matiz lleva a diferenciar los distintos efectos que produce el pago, o cualquier medio extintivo, según que lo realice el aceptante de la letra u otro obligado cambiario, pues en el primer caso, el pago extingue por completo el vínculo cambiario, en tanto que el pago efectuado por cualquiera de los otros obligados sólo extingue su obligación y la de los firmantes posteriores a quien él garantiza, incluyendo el pago que efectúe el avalista del aceptante pues en tal caso tiene la posibilidad de reembolso cambiario respecto de su avalado el cual, al pagar, entonces si extinguirá todos los efectos cambiarios derivados del título valor.

En las obligaciones comunes, es el deudor quien debe concurrir al acreedor para cumplir la prestación debida, en tanto que en las relaciones cambiarias, atento al carácter de promesa dirigida al público que tiene la documentada en el título valor, es el acreedor, técnicamente designado "tenedor legitimado" quien tiene la carga sustancial de ubicar el domicilio del deudor principal y requerirle el pago.

Tanto el pago como los otros modos de extinción de las obligaciones, deben materializarse o mejor, literalizarse en el documento; caso contrario, ello no tendría relevancia cambiaria ante el portador legitimado, tercero de buena fe. El sistema cambiario, además, prevee una regulación progresiva de cargas sustanciales; la doctrina actual considera que el acto de presentación es una carga sustancial impuesta al tenedor del título por el sistema cambiario, en tanto imperativo de su propio interés.

Ahora bien, forma parte de estos comentarios, lo que respecta a la posibilidad de efectuar un pago parcial, y si ello es posible, y cómo regula la ley esa hipótesis. Veamos sobre el particular lo que dispone el art. 65 de la Ley.

Artículo 65º.- Pago parcial

65.1. El tenedor no puede rehusar un pago parcial.

65.2. En los casos de verificarse pago parcial, quien paga puede exigir que el tenedor del título le otorgue el recibo correspondiente, además de la anotación que deberá hacerse en el mismo título valor.

65.3. En los casos señalados en el párrafo anterior, en el registro del protesto deberá hacerse la misma anotación señalada en el párrafo anterior si tal pago se efectúa en el acto del protesto o durante el lapso que el título se encuentre en poder del fedatario.

65.4. En los casos de cumplimiento parcial, el tenedor debe además hacer entrega a quien hizo tal pago parcial y a costa de éste, de la copia certificada notarial del título valor con la constancia de haber sido parcialmente pagado; en cuyo mérito podrá, quien hizo tal pago parcial, ejercitar las acciones cambiarias que le correspondan. La copia certificada antes indicada, tiene mérito ejecutivo.

En materia civil, el principio se centra en la “integridad o indivisibilidad del pago”, de ahí que el art. 1220 del CC dispone que se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación; y el art. 1221, del mismo cuerpo legal, lo reitera al precisar que no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación. Sin embargo, este principio plantea las siguientes excepciones:

- A menos que la ley o el contrato autoricen la divisibilidad del pago.
- Cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se liquide la segunda.

En materia cambiaria, la regla se invierte, pues el tenedor no puede rehusar un pago parcial. Así lo dispone el primer inciso de este art. 65.

Al respecto, **MONTOYA MANFREDI**³¹ señala que el fundamento de esta disposición radica en que las obligaciones cambiarias son de ejecución rigurosa y por ello es de interés del comercio que se facilite, en la mayor medida posible, la liberación de tales obligaciones. De

³¹ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 346.

otro lado, el rechazo del pago parcial perjudica a los demás obligados cambiarios que habrían sido liberados hasta la concurrencia de la suma pagada. No debe, pues, dejarse librado al arbitrio del poseedor aumentar o disminuir la responsabilidad de los otros coobligados.

El derecho al pago parcial corresponde al deudor. Como el pago parcial no extingue totalmente la obligación, el tenedor tiene derecho a protestar la letra por la cantidad impaga. En esta forma podrá ejercitar las acciones cambiarias, de conformidad con lo dispuesto por la ley. La ley protege de esta manera a los demás obligados cambiarios, pues en el caso de ser demandados deberán pagar sólo el saldo impago.

Afirma la doctrina civilista, tomando distancia de la materia mercantil, que el pago parcial confiere al acreedor la facultad de aceptar el pago en consideración a su conveniencia particular, lo que no implica que extinga la obligación cambiaria y menos aún la caducidad de las acciones cambiarias por el saldo, pues el tenedor del título puede iniciar todas las acciones por falta de pago en caso de incumplimiento del deudor en la cancelación del saldo de la obligación.

Quien paga en forma parcial puede exigir que el tenedor del título le otorgue el recibo correspondiente, además de la anotación que deberá hacerse en el mismo título valor. Lo que no puede pretender aquel deudor es que se le entregue el documento, pues el tenedor necesita que permanezca en su poder para exigir la diferencia. El artículo 16 de la ALTV precisaba que: "el tenedor de un título valor queda obligado a devolverlo a quien cumpla la prestación contenida en él. En su caso, entregará también el testimonio de protesto y la cuenta de gasto. Si el cumplimiento es parcial tal hecho deberá anotarse en el mismo título sin perjuicio del protesto a que hubiera lugar".

El art. 1230 del CC contiene una regla aplicable al pago de títulos valores. La norma sustantiva prescribe que el deudor puede retener el pago mientras no le sea otorgado el recibo correspondiente. Tratándose de deudas cuyo recibo sea la devolución del título, perdido éste, quien se encuentre en aptitud de verificar el pago puede

retenerlo y exigir del acreedor la declaración judicial que inutilice el título extraviado.

El recibo es el instrumento escrito emanado del acreedor, en el cual consta la declaración de la recepción del pago. Como se dijo, el deudor tiene derecho a exigir que el acreedor le entregue el recibo correspondiente al pago que efectúa. En este sentido, el recibo provoca el efecto liberatorio absoluto del deudor, toda vez que constituye la prueba del pago.

Además de la entrega del recibo que constituya constancia del pago efectuado, el tenedor deberá anotar en el título valor el pago parcial.

El inciso tercero establece la obligación de registrar el pago parcial en el Registro de Protestos, si tal pago se efectúa en el acto del protesto o durante el lapso que el título se encuentre en poder del fedatario.

Al respecto el art. 85 de la presente ley, señala las reglas que se aplican a los títulos valores protestados, tales como las relativas a la publicidad del incumplimiento derivado de títulos valores sujetos a protesto o a formalidades sustitutorias.

Es obligación de los fedatarios remitir bajo responsabilidad, a la Cámara de Comercio del lugar del protesto, la información que contenga la relación de todos los protestos realizados en un mes para su anotación en el Registro Nacional de Protestos y Moras que ella mantendrá.

Asimismo, el tenedor debe hacer entrega a quien hizo tal pago parcial y a costa de éste, la copia certificada notarial o judicial del título valor con la constancia de haber sido parcialmente pagado. En virtud de dicha constancia - que tiene mérito ejecutivo- quien hizo el pago parcial, podrá ejercitar las acciones cambiarias que le correspondan.

Si se tratara de títulos valores perjudicados, sólo le quedará al acreedor la posibilidad de ejercitar la acción derivada de la obligación primitiva, art. 1233 del CC, toda vez que de acuerdo al art. 94.3

“Subsiste la acción causal correspondiente a la relación jurídica que dio origen a la emisión y/o transmisión del título valor no pagado a su vencimiento, a menos que se pruebe que hubo novación”.

El Art. 65 bajo comentario que tiene su fuente más cercana en el Art. 96 de la ALTV, halla su fuente remota en el Art. 39 de la ley uniforme de Ginebra instituyendo pues el pago parcial como derecho del deudor, al cual el portador legitimado no se puede negar. El apuntado principio es excepcional y tiene su fundamento en la posibilidad de librar al deudor del rigor cambiario, aunque su pago sea parcial, por la parte que paga. La facultad de pago parcial queda limitada, en el caso de la letra de cambio, al aceptante, al girador y a sus respectivos avalistas, y al girado, aunque no haya aceptado. Si el girado aceptó parcialmente también podrá, en su caso pagar sólo una parte de la suma aceptada.

Se presenta a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia. Veamos:

(1) Exp. N° 371-96 Lima. “...Los títulos valores son documentos enteramente formales y como tales, para hacer valer la obligación que representan, están sometidos a formalidades exigentes...”

Lima, quince de mayo de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Umpire Nogales; Que, de la lectura y análisis de las piezas procesales que conforman el expediente; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el Título valor, letra de cambio de fojas dos al ser examinada por el A-quo cumple con los requisitos previstos en el artículo sesentiuno de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete, lo que motivó la expedición del mandato ejecutivo de fojas ocho; SEGUNDO: Que, los títulos valores son documentos enteramente formales y como tales, para hacer valer la obligación que representan, están sometidos a formalidades exigentes, como en el caso del proceso ejecutivo; TERCERO: Que, la letra de cambio como título valor está sujeta al cumplimiento de los principios jurídicos de literalidad, incorporación del derecho subjetivo al documento, a la legitimación activa y pasiva y a la buena fe del tenedor como condición de legitimación; CUARTO: Que, algunas de las características de la letra de cambio, entre otras, son la autonomía del derecho cartular y la abstracción, en tanto representan

obligaciones autónomas que valen de por sí, mientras no sean perjudiciales y en ningún momento puedan ser atribuidas a la relación causal o fundamental que motivaron su emisión; QUINTO: Que, cada letra de cambio, representa obligaciones patrimoniales, distinta a la que pudiera generarse en otra letra de cambio, significando que existen tantas obligaciones independientes unas de otras en tanto existan letras de cambio; SEXTO: Que, siendo la letra de cambio, enteramente formal, todo gravamen o pago a cuenta debe quedar anotado en el propio documento o referido en documento aparte que visualiza que el pago se está haciendo a favor de dicha obligación cambiaria, todo ello en aplicación del principio de literalidad, por lo que REVOCARON la sentencia venida en grado obrante a fojas ciento veinticuatro a ciento veintiocho, de fecha dos de noviembre de mil novecientos noventicinco, que declara infundadas las observaciones formuladas por la parte demandante, a la pericia de fojas cien en la audiencia de fojas ciento veintidós, Fundada en parte la contradicción de la ejecución formulada por el demandado a fojas sesentiséis y en consecuencia fundada en parte la demanda de fojas tres interpuesta por don Daniel Rodríguez Morán, en consecuencia ordena que la demandada Asesoría y Construcciones Sociedad Anónima pague al actor la suma de nueve mil sesentinueve dólares americanos con cuarentinueve centavos de dólar; REFORMÁNDOLA declararon fundada las observaciones formuladas por la parte demandante a la pericia de fojas cien en la audiencia de fojas ciento veintidós; infundada en parte la contradicción a la ejecución formulada por el demandado a fojas sesentiséis, en consecuencia DECLARARON fundada la demanda de fojas tres; y MANDARON que el demandado cumpla con pagar el monto de cincuentiocho mil treintidós dólares americanos importe de la letra de cambio de fojas dos, o su importe en moneda nacional, más intereses legales, costas y costos, debiendo llevarse a cabo la ejecución del mandato ejecutivo de fojas ocho.

(2) Exp. N° 697-98 LA LIBERTAD. “... En el derecho común el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales en atención al principio de integridad del pago, sin embargo, en materia cambiaria se establece una importante excepción al citado principio, regulado en el Artículo noventiséis de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 16587), que prescribe que le tenedor no puede rehusar un pago parcial...”

Lima, veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa vista en audiencia pública el veinticuatro de noviembre del año en curso emite la siguiente sentencia; con el acompañado. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Beatriz Figueroa Osorio contra la sentencia de vista de fojas doscientos veinticuatro, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando en parte la sentencia apelada de fojas ciento sesenta y ocho, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en cuanto declara fundada la demanda, la revoca en el extremo que ordena llevar adelante la ejecución hasta por la suma de un millón ochenta y siete mil ochocientos dólares americanos con noventa y cinco centavos de dólar, y reformando dicho extremo ordena que la ejecución se lleve adelante hasta por la suma de quinientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y cinco dólares americanos con dieciocho centavos de dólar, la confirmaron con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho ha estimado procedente el recurso por la causal relativa a la inaplicación de los Artículos dieciséis y noventa y seis de la Ley de Títulos Valores; que se sustenta en que cuando el cumplimiento de la obligación es parcial tal hecho deberá anotarse en el mismo título, y el tenedor no puede rehusar un pago parcial y en tal caso el que paga puede exigir que se le otorgue el recibo correspondiente; que en el presente caso, los presuntos pagos parciales consistentes en bolsas de azúcar no pueden servir de fundamento para disminuir la obligación, toda vez que no se trata de un proceso de conocimiento. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que el pago es el modo normal de extinguir la obligación mediante el cumplimiento de la prestación objeto de la misma, que a diferencia del derecho común, en materia cambiaria, presenta algunas particularidades propias que lo distingue. Segundo.- Que en efecto en el derecho común el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales en atención al principio de integridad del pago, sin embargo, en materia cambiaria se establece una importante excepción al citado principio, regulado en el Artículo noventa y seis de la Ley de Títulos Valores, que prescribe que el tenedor no puede rehusar un pago parcial. El apuntado principio, señala Gómez Leo, tiene su fundamento en la posibilidad de librar al deudor del rigor cambiario, aunque su pago sea parcial, por la parte que paga

(Manuel de Derecho Cambiario, página doscientos treintinueve). Tercero.- Que asimismo, conforme a lo regulado en la norma citada, en concordancia con la segunda parte del artículo dieciséis de la misma ley, se instituye el pago parcial como un derecho que corresponde al deudor, al cual el tenedor legítimo no se puede negar, por lo que, aquél tiene derecho también a que se literalice en el documento cartular el pago efectuado y que además se le extienda el recibo correspondiente. Cuarto.- Que, el derecho del deudor sobre la literalización del pago parcial en la letra de cambio obedece a la aptitud constitutiva y completa respecto del derecho de crédito que en ella se ha documentado, a fin de que produzca los efectos cambiarios pertinentes, de otro modo, si no se deja esa constancia documental, el tercero tenedor de buena fe de la cambial podría exigir la totalidad del importe. Quinto.- Que, sin embargo, sobre la base de los hechos probados, la relación cambiaria materia de autos es homogénea, ya que las calidades de tenedor y obligado principal de las cambiales corresponden respectivamente al acreedor y al deudor de la relación causal de la que derivó las letras de cambio materia de la presente acción, por consiguiente, la demanda puede acreditar el pago parcial con los medios probatorios que cuenta para contradecir la ejecución, de conformidad con el Artículo setecientos del Código Procesal Civil. Sexto.- Que, la recurrida ha considerado al existencia del pago parcial de la obligación mediante una prestación distinta a la que debió cumplirse, configurándose una típica dación en pago, forma especial de extinción de la obligación válidamente aplicable en materia cartular. Sétimo.- Que, por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo trescientos ochentisiete del citado Código Adjetivo cabe desestimar el recurso. 4. SENTENCIA: Estando a los considerandos que preceden, declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Beatriz Figueroa Osorio; en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos veinticuatro, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como a las costas y costos originados en la tramitación del recurso.

(3) Exp. CAS N° 391-97/Cono Norte. Lima. "... El deudor está facultado pero no obligado a exigir cuando ha efectuado un pago parcial, que se le otorgue el recibo correspondiente, sin perjuicio de la respectiva anotación en el título, pero ello no impide que por cualquier

otro medio probatorio pueda acreditarse el pago parcial, siempre que conste expresamente que está referido al título valor materia de la obligación....”

Lima, once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Vista la Causa número trescientos noventa y siete: en la Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Pedro Cierzo Cabrera, mediante escrito de fojas doscientos sesenta y ocho, contra la resolución de vista de fojas doscientos cincuenta y uno su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, emitida por la Primera Sala Mixta del Cono Norte de Lima, que confirmó la apelada de fojas ciento cincuenta y siete fechada el diecisiete de mayo del año pasado, declaró fundada la demanda de fojas seis, ordenando que se lleve adelante la ejecución hasta que el ejecutado don Pedro Cierzo Cabrera pague al ejecutante, don David Jesús Zagastizabal Aibar, la suma de veinte mil dólares americanos, con lo demás que contiene: FUNDAMENTOS DEL RECURSO: la casación se fundó en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, pero sólo se declaró procedente respecto del inciso primero, que se sustentó en la interpretación errónea del Artículo noventa y seis de la Ley número dieciséis mil quinientos ochenta y siete, Ley de Títulos Valores, porque cuando se hacen pagos parciales el deudor puede exigir (la norma no dice debe) que se le otorgue el recibo correspondiente así como la anotación de la amortización en el título y que éste no es requisito sine qua non para su deducción porque nada impide que sólo exista un recibo, una boleta de depósito bancario o la declaración de parte del ejecutante para acreditar el pago parcial; CONSIDERANDO: Primero.- que, el Recurso de Casación fue concedido a fojas doscientos setenta y tres y fue declarado procedente por resolución del primero de setiembre del presente año, sólo por la causal del inciso primero del Artículo trescientos ochenta y seis de la Norma Adjetiva; Segundo.- que, el Artículo noventa y seis de la Ley de Títulos Valores dispone que al tenedor no puede rehusar un pago parcial y que en tal caso el que paga puede exigir que se le otorgue el recibo correspondiente, sin perjuicio de la respectiva anotación del título; TERCERO.- que, efectivamente este dispositivo legal concede una facultad al deudor, al

expresarse en el artículo que puede exigir y no dice debe, que implicaría una obligación; Cuarto.- que, además cualquier medio probatorio puede servir para acreditar un pago parcial, siempre que se indique en el recibo o documento o se pruebe debidamente que está referido al título valor materia de la obligación; Quinto.- que, resulta así que la interpretación correcta del Artículo noventa y seis de la Ley de Títulos Valores, es que el deudor está facultado pero no obligado a exigir cuando a efectuado un pago parcial, que se le otorgue el recibo correspondiente, sin perjuicio de la respectiva anotación en el título, pero ello no impide por cualquier medio probatorio pueda acreditarse el pago parcial, siempre que conste expresamente que está referido al título valor materia de la obligación; Sexto.- que, pese a ello, el recurso no puede declararse fundado, porque para resolver la controversia, la Sala de Casación tendría que examinar los hechos establecidos en las sentencias inferiores y la casación a diferencia de los recursos ordinarios, sólo versa sobre cuestiones de derecho de iure, con expresa exclusión de los de hecho y sobre apreciación de la prueba; Séptimo.- que, por las razones expuestas y aplicando el artículo trescientos noventa y ocho del Código Procesal Civil, Declararon INFUNDADO el Recurso de Casación de fojas doscientos sesenta y ocho interpuesto por don Pedro Cierro Cabrera contra la resolución de vista de fojas doscientos cincuenta y uno su fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos del recurso así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal.

Y ahora acerquémonos al tema del precitado inciso h) de este art. 119.1 concordante de modo especial con el art. 66 de la Ley cuyo texto es el siguiente:

Artículo 66º.- Lugar de pago

66.1. El título valor debe ser presentado para su pago en el lugar designado al efecto en el documento, aun cuando el obligado hubiere cambiado de domicilio, salvo que éste haya comunicado notarialmente al último tenedor su variación, antes del vencimiento o fecha prevista para su pago y siempre dentro de la misma ciudad o lugar de pago.

66.2. Si se hubiere señalado que el pago se hará mediante cargo en una cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional conforme al Artículo 53º, el título debe

presentarse ante la respectiva empresa señalada en el documento, la que rechazará o atenderá su pago con los fondos que hubiere en la cuenta designada en el título valor, hasta donde alcancen, o, con las concesiones crediticias que pueda conferir al titular de dicha cuenta

66.3. A falta de indicación expresa del lugar de pago, el título valor se entiende pagadero en:

- a) el domicilio que figure junto al nombre de quien resulte ser el obligado principal del título; o, en su defecto, en el domicilio real del obligado principal; y*
- b) el domicilio del indicado para el pago por intervención.*

66.4. El pago de los valores con representación por anotación en cuenta se verificará a través de la respectiva Institución de Compensación y Liquidación de Valores o en la forma señalada en el registro, conforme a la ley de la materia.

En virtud del principio de localización, para que el cumplimiento de la prestación del deudor constituya un verdadero pago, éste debe realizarse en un lugar determinado³².

Lugar de pago, es aquel donde el deudor ejecuta la prestación, es también el lugar donde el acreedor obtiene la satisfacción de su crédito. La mayoría de las veces, coinciden el lugar de realización de la prestación y el lugar donde el acreedor obtiene el resultado, lo cual evita cualquier confusión. Así, si el deudor debe cumplir con la obligación en su propio domicilio, ése es el lugar del pago, pues allí debe concurrir el acreedor a recibirlo. Pero hay ciertas obligaciones en las cuales el lugar de ejecución de la prestación no coincide con el lugar donde se obtiene el resultado; por ejemplo, en una compraventa a distancia.

En suma, será lugar de pago aquel donde el acreedor obtenga la satisfacción de su interés. En aquellas obligaciones en las cuales el deudor debe enviar mercadería o remitir dinero, asumiendo los riesgos del transporte y tomando a su cargo los gastos, lugar de pago es el de destino, porque es allí donde el pago se consuma, salvo que la ley, los usos mercantiles o un pacto expreso dispongan otra cosa.

³² WAYAR, Ernesto. Op. cit., Página 404.

La determinación del lugar del pago tiene importancia por varias razones. En primer lugar, es en ese lugar y no en otro, donde el pago debe ser concretado, lo cual implica que sea allí donde las partes tienen que prestar sus deberes de cooperación. Si el pago hay que hacerlo en el domicilio del deudor, el acreedor debe concurrir a ese domicilio a recibirlo; en cambio, si el pago se hace en el domicilio del acreedor, es el deudor el que debe trasladarse hasta allí. Como consecuencia de lo anterior, la parte que no concorra o no esté presente en el lugar de pago tiene que asumir las consecuencias de la frustración del cumplimiento.

Los requerimientos u ofrecimientos de pago deben ser hechos en el lugar señalado para tal fin; no se le puede exigir al deudor que cumpla en un lugar distinto, y si así sucede, aquél está autorizado a rechazar esa exigencia.

Al respecto, nuestro cuerpo sustantivo prevé que el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, salvo estipulación en contrario, o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso. Designados varios lugares para el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Esta regla se aplica respecto al deudor, cuando el pago deba efectuarse en el domicilio del acreedor (art. 1238 del CC).

En materia cambiaria, el primer inciso de este art. 66 establece la regla de que el lugar del pago del título valor será el designado al efecto en el documento, aun cuando el obligado hubiere cambiado de domicilio.

Sobre el particular, la ALTV, art. 97, prescribía que “la letra debe ser presentada para el pago en el lugar o en la dirección indicados en ella, aunque el deudor hubiere cambiado de residencia”.

Como se aprecia, la norma bajo comentario perfecciona el art. 97 de la ALTV, pues si bien mantiene la indicación de que el lugar de pago será el señalado en el documento, aún cuando el obligado hubiere cambiado de domicilio, advierte que podrá ser uno distinto si es que hubiese habido comunicación previa de carácter notarial.

El CC establece que si el deudor cambia de domicilio, habiendo sido designado éste como lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio o en el nuevo. Igual regla es de aplicación, respecto al deudor, cuando el pago deba verificarse en el domicilio del acreedor (Art. 1239).

La ley de títulos valores, a pesar de inspirarse en los principios del derecho común, en lo referente al cambio del lugar de pago introduce una excepción o salvedad, que es la comunicación notarial al último tenedor de la variación domiciliaria antes del vencimiento o fecha prevista para el pago y siempre dentro de la misma ciudad o lugar de pago.

El segundo inciso se refiere al pago que se realiza con cargo en una cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional. De convenirse que el pago se realice con cargo en una cuenta, deberá presentarse el título valor ante la respectiva empresa financiera señalada en el documento, la cual podrá rechazarlo o atenderlo con los fondos hasta donde alcancen, o con las concesiones crediticias que pueda conferir al titular de dicha cuenta.

El tercer inciso se coloca en el supuesto de que no se haya indicado el lugar de pago en forma expresa, en este caso debe entenderse que el título valor debe pagarse en:

- El domicilio que figure junto al nombre de quien resulte ser el obligado principal del título; o en su defecto, en el domicilio real del obligado principal.
- El domicilio del indicado para el pago por intervención.

La norma se ocupa también, del pago de valores representados por anotaciones en cuenta. En este caso, el pago se realizará a través de la ICLV o en la forma señalada en el registro, conforme a la LMV.

El art. 215 de la LMV establece que el emisor que, de buena fe y sin culpa, realice la prestación a favor de quien figure con derecho en el registro contable, queda liberado de su obligación, aun en el caso de que el receptor no sea el titular del valor. Norma similar a esta se halla en el art. 16.1 de esta NLTV y en forma no tan cabal o completa, en el art. 16 de la ALTV.

El principio general respecto del lugar de pago del título valor es que él debe ser presentado, a esos efectos, en el lugar que literalmente aparece en el documento. La norma presupone que se ha designado un lugar de pago en sentido geográfico y, además, como ocurre regularmente en la práctica, que se indica la dirección (calle y número) donde hay que presentar al pago la cambial, sea que esté consignada especialmente, sea que surja como consecuencia de haber hecho constar el domicilio del girado a lado de su nombre (Art. 119.1 H y 120 b) y c)). La expresión "dirección" que incluye la norma, en rigor, carece de significación jurídica, aunque debe asimilársela a "domicilio", no en el sentido atribuido por el Código Civil, es decir, como el lugar donde se tiene establecido el asiento principal de la residencia y de los negocios, que puede o no coincidir con el domicilio establecido por el deudor en la letra para atender su pago, explica **GOMEZ LEO**. Los Arts. 33 y 39 de nuestro Código Civil de 1984 establecen que "el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar" y "el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar", respectivamente. El Art. 99 de la ley italiana, aplicable al pago, dice "a los efectos de la presente ley, se entiende por domicilio el lugar de residencia, y por lugar de pago, el territorio entero del municipio". Es decir, la disposición no debe ser entendida en el sentido estricto en que la ley civil determina el domicilio de una persona, pues el domicilio de pago es preciso y específico, en tanto que la residencia es el lugar donde la persona tiene su morada habitual, y el primero puede no coincidir con la segunda. Por último si las personas mencionadas se hubieran mudado del domicilio designado, el portador cumplirá idóneamente con la carga de presentación realizándola en el último domicilio, siempre que éste corresponda a la misma localidad en que la letra debe ser pagada, comenta **GOMEZ LEO**. El Art. 40 de nuestro Código Civil de 1984 dispone que "el cambio de domicilio no puede oponerse a los acreedores si no ha sido puesto en su conocimiento mediante comunicación indubitable". Los Arts. 66.1 y 66.3 reúnen ordenadamente los principios rectores de la doctrina y del derecho común proponiéndolos con acierto, eficacia y certidumbre, al derecho cambiario. Cabe recordar finalmente, que el Art. 97 de la ALTV prescribía que la letra debía ser presentada para el pago en el lugar o en la dirección indicados en ella, aunque el deudor hubiere cambiado de residencia. A falta de tal dirección la letra debía presentarse para el pago en el domicilio del girado, en el domicilio del aceptante por

intervención o en el domicilio del indicado por el pago por intervención. Como se observa, había confusión entre dirección y domicilio, cosa que ahora ya no ocurre, pues en todo momento se alude al domicilio y la regulación legislativa cubre ahora todas las opciones que la experiencia estaba aconsejando.

Transcribimos en seguida algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia formulando a continuación nuestra opinión al respecto. Veamos:

(1) Exp. N° 159-96 Lima. “...En las letras de cambio que se adjuntan en el requisito referido a consignar el nombre del girado o librado se registra el domicilio que se reputa como lugar de pago que sólo puede ser variado conforme lo establece el artículo cuarenta del Código Civil (previa comunicación indubitable a los acreedores)...”

Lima, cinco de junio de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Umpire Nogales; de la lectura y análisis de las piezas procesales que conforman el expediente, escuchado el informe oral, por sus propios fundamentos y CONSIDERANDO además, a que, PRIMERO: Las letras de cambio son títulos valores enteramente formales y consecuentemente deben cumplir, al tiempo de ser emitidos o ser ejecutados, con los requisitos previstos en el artículo sesentiuono y sustitutoriamente el artículo sesentidós de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete; SEGUNDO: Los principios jurídicos de los títulos valores consagrados por la ley de la materia, de literalidad, legitimación: activa y pasiva y la buena fe del tenedor como condición de legitimación, no han sido transgredidos en los títulos valores en que se apareja la demanda; TERCERO: Las características jurídicas, entre otras, la autonomía de la relación cartular, la abstracción de la obligación cambiaria, determina que quien suscribe el título valor se halla engarzado en la relación cartular o documental, sin que pueda hacerse valer la relación causal o fundamental por lo menos en la vía procedimental elegida por el tenedor en el presente caso, proceso de ejecución –Proceso Ejecutivo- conforme lo establece el artículo seiscientos noventa y tres y siguientes del Código Procesal Civil; CUARTO: En las letras de cambio que se adjuntan en requisito referido a consignar el nombre del girado o librado se registra el domicilio que se reputa como lugar de pago que sólo puede ser variado conforme lo establece el artículo

cuarenta del Código Civil, situación que no se da en el presente caso, por lo que CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento siete y ciento ocho de fecha seis de setiembre de mil novecientos noventicinco, que ordena llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado don Walter Nongrados La Torre pague al ejecutante EB Representaciones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada la suma de diez mil setecientos setenta dólares americanos, más intereses legales, gastos, costas y costos.

En relación a este lugar de pago, la ley trae una novedad. Y es que puede optarse por señalar alternativamente una cuenta de cualquier empresa del sistema financiero con cargo a la cual se pague la cambial. Para ello será necesario que tal forma de pago haya sido consignada por el girado-aceptante en el mismo documento, conforme a la cláusula prevista en el art. 53 de esta ley. En su caso, podrá señalarse el número o código de la cuenta a cargar, la misma que puede ser una cuenta corriente, a plazo, de ahorros, cuenta tarjeta de crédito, u otras; la denominación social de la empresa del sistema financiero designada, con la que el obligado al pago debe haber acordado previamente al pago las condiciones bajo las cuales atenderá sus instrucciones de pago contenidas en la letra de cambio, para facilitar, lo cual se ha previsto, que dichas empresas puedan proporcionar talonarios de letras de cambio a sus clientes, con las medidas de protección técnicas del caso, para asegurarse de que se tratan de verdaderas órdenes de pago impartidas por el titular de la cuenta, en forma similar a lo que ocurre con los talonarios de cheques. Esta forma de pago mediante cargos en cuenta, con seguridad, fomentará la formalización de nuestra economía, al tener que recurrir los agentes de mercado al sistema financiero para lograr una más ventajosa y fácil forma de cobrar y pagar sus obligaciones contenidas en una letra de cambio y otros títulos valores similares; así como se logrará disminuir los costos de tales cobranzas, al utilizarse medios electrónicos en lugar de procesos manuales y físicos engorrosos que actualmente tenemos con riesgos de pérdida de los valores en dichos procesos arcaicos de cobranza que serán sustituidos por esta cómoda, rápida y menos onerosa forma de cobranza.

A modo de mera información, es importante hacer notar que a lo largo el texto de esta ley, se ha tratado de utilizar en lo posible un solo

término para hacer referencia a las instituciones jurídicas propias de estos documentos y que en la doctrina tienen diversas denominaciones. Así, se utiliza, por ejemplo, el término “emitir” o “emisión” y sus derivados para hacer referencia al acto de libramiento o giro de los títulos valores. En el caso de la letra de cambio, se rompe esta norma y se emplea más bien el término “girar”, “giro” y sus variantes, por adecuarse y ser más propia en el caso particular de este título valor este último término antes que el primero. Se prescinde del uso de términos similares o sinónimos que se utilizaban en la ley anterior, como librar, libramiento, librador y otros que son igualmente afines a la letra de cambio. La unidad de términos ayudará a una mejor claridad y evitará el uso indiscriminado de expresiones que a veces ha conducido a innecesarios conflictos.

3.8. LIBERTAD FORMAL EN CUANTO A ORDEN, LUGAR Y MODO DE ANOTAR LOS REQUISITOS EN LA LETRA DE CAMBIO.

A juicio del autor de esta Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial, en la UNMSM, el art. 119.2 constituye una de las normas que caracteriza a toda la ley: “la flexibilización de la normativa cambiaria con relación a anteriores textos legales, respetando un mínimo decoroso de formalidad y formalismo, pero sin esquemas exagerados que terminen sacrificando la razonabilidad del derecho invocado”. Haber anotado que “Los requisitos señalados en el art. 119.1 analizado, podrán constar en el orden, lugar, forma, modo y/o recuadros especiales que libremente determine el girador o, en su caso, los obligados que intervengan”, tiene la significación de la libertad contractual, de la autonomía de la voluntad, de la prevalencia de la razón y de lo sustantivo sobre la forma y el formalismo. Con tal que los requisitos se encuentren en el título valor, no tiene importancia donde se coloquen, el orden, la forma ni el modo de anotarlo, o si se utilizan abreviaturas o recuadros. Quede claro, entonces, que el formato estandarizado aprobado por la SBS y que se ha puesto al alcance de los comerciantes y ciudadanía en general, es sólo eso, una propuesta: que no existe obligación legal de usarlo y que cada empresario puede diseñar el que mejor se ajuste a su realidad. La rigidez de la normativa anterior y la interpretación rigurosa o *add litteram* de nuestros tribunales de justicia terminaron por asfixiar la buena intención de los autores del proyecto y legisladores de entonces. Bienvenida la libertad

de formas y bienvenido el mantenimiento de formalismos mínimos indispensables.

Hemos estado desarrollando antes la temática de los requisitos formales esenciales y de la necesidad de su estricto cumplimiento, en todos los títulos valores, para que pueda intentarse con eficacia una pretensión judicial cambiaria. Sin embargo, conviene aquí destacar que en la legislación peruana, los arts. 247.2 y 252.2 relativos al Conocimiento de Embarque y Carta de Porte, respectivamente, constituyen excepción a la regla precitada, pues precisan: “La omisión de una o varias de las informaciones que contiene el presente artículo no afecta la validez jurídica del Conocimiento de Embarque (Carta de Porte) ni la nulidad de alguna estipulación conlleva la nulidad del título, el que mantendrá los derechos y obligaciones que según su contenido tenga”.

3.9. CASO DE ALTERACIÓN EN LA LETRA DE CAMBIO.

Otro asunto que puede presentarse con ocasión de la emisión y circulación de una letra de cambio es el concerniente a la alteración del documento. La ley regula el tema en el Libro Primero, específicamente en su art. 9 y estos son nuestros comentarios y los de la doctrina más autorizada. Empecemos por transcribir el art. 9° de la Ley:

Artículo 9.- Alteración del título valor

9.1. En caso de alteración de un título valor, los firmantes posteriores a este hecho, se obligan según los términos del texto alterado y los anteriores conforme al texto original.

9.2. A falta de prueba en contrario, se presume que una firma ha sido puesta antes de la alteración.

Alterar es cambiar la esencia o forma de algo. Tiene como sinónimos a: perturbar, trastornar, estropear, descomponer, cambio, mudanza, modificación, adulteración; entre otros.

La **Enciclopedia Jurídica OMEBA**³³, indica que la alteración de un título valor ocurre cuando éste es modificado. Dicha modificación puede consistir en la omisión o adición de palabras, letras, etc.; de modo que el documento exprese información diferente de la que contenía en su estado primitivo.

“Las alteraciones pueden verificarse sobre cambio de fecha del cumplimiento de la obligación o del lugar donde esta deba ejecutarse o llevarse a cabo, o adicionarle un lugar de cumplimiento cuando en el instrumento no aparece, o también cuando el monto de la obligación cambia de especie de moneda nacional a moneda extranjera, o se aumenta o se disminuye la cantidad.”³⁴

En suma, la alteración implica la modificación total o parcial del contexto originario del documento cambiario. Dicha modificación puede ser de naturaleza involuntaria o culposa. Por ejemplo, si el importe consignado en una letra de cambio es un mil nuevos soles, se considerará alterado el título valor, si sobre el importe expresado en números se adiciona un cero, simulando un importe por diez mil nuevos soles.

Ahora bien, ¿podría sostenerse que la alteración tiene, además, a la falsificación, como sinónimo?

Veamos. Falsificar es adulterar, falsear, corromper, desnaturalizar, distorsionar, viciar, tergiversar; consiste en el hecho de que una cosa pierde su firmeza.

La falsificación de un título valor³⁵, viene a ser la creación de un documento falso con la finalidad y clara intención de darle al contenido o a la firma que la integra, caracteres de genuinidad. Como ejemplo se cita el caso en el que el aceptante de una letra de cambio no la haya firmado; y a pesar de ello, aparezca una firma autógrafa que no es la suya y que ha sido imitada por el girador del título.

³³ OMEBA, Enciclopedia Jurídica. Tomo XI, Editorial Driskill, Buenos Aires, 1987, Página 860.

³⁴ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 35.

³⁵ OMEBA, Enciclopedia Jurídica. Op. cit., Tomo XI, Página 860.

En consideración a las precisiones conceptuales efectuadas, presentamos el siguiente cuadro comparativo:

ALTERACIÓN	FALSIFICACION
Modificación que puede consistir en la adición o supresión de palabras, letras, números, etc. Modificación total o parcial del documento originario.	Consiste en la creación de un documento falso con la intención de darle caracteres de genuinidad.
Generalmente es un acto involuntario y/o de naturaleza culposa.	Es un delito, siendo por ello, de naturaleza dolosa y de comisión voluntaria.

La cuestión central que se regula en el artículo 9° es la determinación del valor de la firma del título y de la consiguiente obligación alterada; resolviéndose en el sentido de que las firmas posteriores a la alteración, importan responsabilidad en los términos del texto alterado; mientras que las firmas anteriores a la alteración, importan responsabilidad en los términos del texto originario, o sea, el auténtico. Existe pues una presunción *iuris tantum* de que la firma sea anterior a la alteración. Sin embargo, podemos afirmar que dicha presunción no opera si el obligado ha obrado con mala fe.

El efecto principal, según **MESSINEO**³⁶, es la no oponibilidad al suscriptor posterior a la alteración, la excepción de alteración; mientras que ésta sí es oponible por el suscriptor anterior a la alteración.

El artículo 88 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré señala que "en caso de alteración del texto de la letra de cambio, los que hubiesen firmado después de la alteración quedan obligados en los términos del texto alterado. Los firmantes anteriores responden en los términos del texto originario. Si no resultase del título o no se demostrase que la firma fue puesta antes o

³⁶ Citado por MONTOYA MANFREDI, Ulises. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. Op. cit., Páginas 37 y 38.

después de la alteración, se presume que ha sido puesta antes". Guarda con nuestro artículo 9, en comento, particular similitud.

Debe quedar claramente entendido que este artículo 9 hace referencia a una "alteración" inadvertible o imperceptible a la vista ordinaria pero diligente de los sujetos que han intervenido en la relación cambiaria. En efecto, no estamos hablando acá de adulteraciones, tachaduras, enmiendas, borrones o falsificaciones evidentes o notorias. Para unos casos, la Ley ha previsto un régimen especial que se regula en el artículo 101 y siguientes de esta ley; para otros, la jurisprudencia ha sido uniforme al señalar que el título valor ha quedado perjudicado, dejando subsistente, obvio, la relación causal; y, finalmente, por ejemplo para el caso de cheque, la ley dispone en el artículo 212.1.B) que el Banco no debe pagar los cheques girados a su cargo cuando esté "a simple vista" raspado, adulterado, borrado o falsificado, en cuanto a su numeración, fecha, cantidad, nombre del beneficiario, firma del emitente, líneas de cruzamiento, cláusulas especiales o de cualquier otro dato esencial. Sobre el particular, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Argentina, sostuvo que "las enmiendas a los pagarés advertibles a simple vista por el Tribunal constituyen alteraciones sustanciales del documento, que al no haber sido salvadas como lo exige la ley, afectan la validez y privan al actor de su derecho a exigir su pago, siendo pues, procedente la excepción de inhabilidad del título opuesta por la demandada.

Ignacio A. ESCUTTI (h.)³⁷ nos dice que "la alteración consiste en una modificación material del título valor, que cambia la manifestación literal hecha en él por alguno de sus firmantes. La alteración se da cuando el tenor literal del título o de alguna obligación cartular es modificado mediante adiciones, sustituciones o supresiones (de palabras, sellos o signos, etc.); no hay alteración cuando un título firmado en blanco (en el Perú, diríamos, "incompleto") se llena en forma contraria a lo pactado".

Continúa **Ignacio A. ESCUTTI** (h.) refiriendo "de ahí se puede colegir que si el título valor presenta huellas visibles de alteración, es decir, si a simple vista puede advertírsela, corresponde al tenedor

³⁷ ESCUTTI, Ignacio A. Op. Cit., Páginas 75 a 78.

demostrar que fueron efectuadas con anterioridad a la suscripción por parte de la persona demandada. Si, por el contrario, el título es formalmente impecable, el tenedor se encuentra amparado por la presunción de regularidad del documento, y compete al demandado probar que se ha producido una alteración posterior a la inserción de su firma". **VON FANTI y GARRONE** manifiestan "la doctrina considera también, para precisar el instituto, que la alteración debe revelarse exclusivamente del examen del título quedando, por tanto, fuera de la cuestión cualquier elemento que no se encontrase en el propio título. De tal modo, si por circunstancias técnicas especiales, se realiza la alteración pero sin dejar rastros de la misma, no puede considerarse el caso involucrado dentro de este artículo 9. Lo contrario sería prácticamente destruir el principio de literalidad debido a que cada tenedor estaría expuesto a correr el riesgo de la prueba de que el contenido de la obligación cambiaria es diferente al que aparece. Un tribunal argentino resolvió que si el demandado reconoció la autenticidad de la firma de los documentos, pero alegó la alteración de la fecha de vencimiento (del contenido), le corresponde la carga de la prueba de ese hecho, puesto que, según el artículo 1028 del Código Civil, el reconocimiento de la firma importa la del cuerpo del documento". Sobre el particular me remito al artículo 91 Comentario II, y la reciente casación de la Corte Suprema que ha sido transcrita.

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** explica que la alteración es una modificación o adulteración material del texto de la cambial o de alguna declaración cambiaria que ella contenga, la cual resulta así transformada por tachaduras, borraduras, enmiendas, mutilaciones, sustituciones, supresiones parciales, adiciones, realizadas por cualquier medio utilizado con ese fin, v.gr. grafías, sellos, signos, productos químicos, lavado, ácidos, etc. Hay que distinguir entre las alteraciones lícitas y las ilícitas. Entre las primeras podemos citar el caso en el cual quien produce la declaración cambiaria, antes de desprenderse de la letra, al descubrir alguna equivocación corrige su texto, lo testa o modifica alguna parte de ella, sin intención de perjudicar a terceros, como ocurre con la cancelación de la aceptación contemplada en el Art. 137.1 de nuestra NLTV; o aquél en que se tacha el endoso en procuración, si la representación otorgada por medio de ella se ha frustrado por alguna razón y el endosante-representado desea recuperar la legitimación en forma personal, o para otorgar una nueva representación por vía de un nuevo endoso en

procuración, pues a esos efectos al endoso tachado se lo tiene por no escrito (ver Arts. 41.3 y 41.1); o el supuesto del Art. 90.3 y 45.2 de nuestra NLTV que autoriza a cualquier endosante que haya pagado la cambial a cancelar su endoso y los que le siguen en la cadena.

La alteración será ilícita cuando se trate de la adulteración fraudulenta o falsificación de alguno de los requisitos extrínsecos de la cambial, sea al tiempo de la creación o durante su circulación, así como de alguna de la declaraciones cambiarias que se haya ido integrando al título, v. gr. aceptación, endoso o aval.

De la regla general a que se refiere el presente Art. 9, que es *iuris tantum*, pues admite prueba en contrario, podemos llegar, en conformidad con lo expuesto por el profesor **GOMEZ LEO**, a las siguientes conclusiones:

1. No se distingue si la alteración fue efectuada por un obligado cambiario, un tercero ajeno al título o el portador de éste. Sin embargo, en este último caso, si la alteración es ilícita dicho sujeto, por ser de mala fe, no gozará de la legitimación cambiaria activa.
2. La alteración, en principio, no invalida la letra de cambio, salvo que se trate de la alteración grave de un elemento esencial, como ocurre cuando la firma del librador de una cambial es seguida de una palabra enmendada de modo que no se pueda determinar si se trata de la expresión "acepto" o "aval" sin que se pueda establecer si el firmante asumió la calidad de librador, aceptante o avalista, y
3. La alteración debe surgir del propio título. Una vez detectada no es necesario reconstruir el texto originario alterado; basta la evidencia de una declaración cambiaria distinta y preexistente. Debido a ello, quedan excluidas de la regla de este Art. 9, las alteraciones o adulteraciones realizadas por medios tan perfectos que no permitan descubrirlas mediante procedimientos comunes y normales, es decir, sin echar mano de medios técnicos de alta precisión.

Veamos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia, las que tienen conexión con la temática de la alteración y cuyos contenidos por si solos se explican:

Exp. N° 490-91 Lima. Encontrándose visiblemente adulterada la fecha de vencimiento de la letra, no puede determinarse con exactitud la fecha del protesto.

Lima, trece de setiembre de mil novecientos noventiuno.- VISTOS; y CONSIDERANDO: que la letra de fojas tres se encuentra visiblemente adulterada en cuanto a su fecha de vencimiento, por lo que no puede determinarse con exactitud la fecha del protesto; que por lo expuesto y estando al artículo trece del Decreto Ley número veinte mil doscientos treintiséis, la demanda deviene improcedente: declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas treinticuatro, su fecha primero de marzo de mil novecientos noventiuno, en cuanto confirmando la apelada de fojas veintiocho, fechada el dieciséis de enero del mismo año, manda adelantar la ejecución para el pago de la suma de diez mil seiscientos cuarenticuatro dólares americanos; reformando la de vista y revocando la apelada en ese extremo: declararon IMPROCEDENTE la acción ejecutiva; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

3.10. LETRA DE CAMBIO EMITIDA EN FORMA INCOMPLETA O “EN BLANCO”

Otro tema fundamental acá es el de que al momento de la emisión, la letra de cambio halla sido girada como título valor incompleto, lo cual, por lo demás, en nuestra realidad, no es absolutamente improbable. Debemos entonces remitirnos, para su análisis, al art. 10 de esta ley 27287. Veamos. El texto del art. 10 es el siguiente:

Artículo 10º.- Título Valor emitido incompleto

10.1. Para ejercitar cualquier derecho o acción derivada de un título valor emitido o aceptado en forma incompleta, éste deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados. En caso contrario, el obligado podrá contradecir conforme al Artículo 19º inciso e).

10.2. Quien emite o acepta un título valor incompleto, tiene derecho a obtener una copia del mismo y no puede ser impedido de agregar en el documento, cláusula que limite su transferencia. En tal

caso, salvo que se trate del Cheque, su transferencia surtirá los efectos de la cesión de derechos

10.3. Si un título valor, incompleto al emitirse, hubiere sido completado contraviniendo los acuerdos adoptados por los intervinientes, la inobservancia de esos acuerdos no puede ser opuesta a terceros de buena fe que no hayan participado o conocido de dichos acuerdos.

10.4. Las menciones y requisitos del título valor o de los derechos que en él deben consignarse para su eficacia deben ser completados hasta antes de su presentación para su pago o cumplimiento.

El título valor incompleto, también denominado empezado o incoado³⁸, es aquel en el que el suscriptor solo ha plasmado su firma, dejando en forma deliberada, total o parcialmente, espacios en blanco para ser llenados por el tenedor legítimo, de acuerdo con instrucciones dadas a este último. La legislación y doctrina colombiana, se refiere al tenedor legítimo como aquella persona que según la ley puede ejercer los derechos incorporados en el título y, por consiguiente, le está autorizado a llenar los espacios en blanco; lo que no sucede con el tenedor ilegítimo, o sea quien hurtó el documento para llenarlo, contra el cual el deudor puede perfectamente oponer la excepción de mala fe, que también se hace extensiva al tenedor legítimo, cuando éste ha desatendido las instrucciones del suscriptor del título en el momento de llenarlo.

Podría ocurrir también que las partes intervinientes en el título valor omitan rellenar, incluir o insertar algún o algunos datos finales que las partes ignoran o que prefieren agregar o incluir después. Por ejemplo, en un contrato de compraventa internacional, se puede demorar el envío de las mercaderías que son transportadas en un buque cuyo destino es el puerto del comprador o quizás puede diferirse también, la fecha de embarque de las mercaderías e incluso la oportunidad en que la fábrica pueda tener completa la producción que se importa e incluso puede desconocerse también la fecha de zarpe del puerto de origen. En estos casos el título valor puede carecer de fecha de vencimiento, dato que será rellenado o incluido cuando las partes lo conozcan con exactitud.

³⁸ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 37.

Como se observa en todos los casos planteados, se trata del desconocimiento de algún o algunos datos muy puntuales para que el título valor se encuentre con todos sus requisitos formales esenciales debidamente completados. “La emisión de un título valor incompleto implica que le falta alguno de los requisitos que señala la ley, permitiendo ésta que el título pueda ser completado posteriormente”³⁹.

De otro lado, es necesario diferenciar a los títulos valores incompletos, de los títulos valores en blanco. Estos últimos, se caracterizan por la ausencia de los requisitos formales esenciales que debe contener todo título valor para ser considerado tal.

Por ejemplo, en el caso de la letra de cambio en blanco, observamos que su vocación es completamente distinta a la de aquellos títulos incompletos. Generalmente suele ser utilizada por los usureros para extorsionar a sus deudores con ejecuciones por sumas muy superiores a las que fueron materia del ilícito préstamo. Por ello, la ley no regula ni legitima el título valor en blanco, es más el art. 21 de este nuevo texto cambiario, establece que puede deducirse la nulidad del título valor obtenido por el tenedor en representación o en pago de préstamos con intereses usurarios o prohibidos por la ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar, según la ley de la materia.

Al respecto, **CARNELUTTI**⁴⁰ indica que el documento está en blanco cuando quien lo firma remite a un momento posterior la indicación de algunos de los elementos de hecho que el documento está destinado a representar. La tesis de la completud (sic) en cambio, se inclina a realizar la voluntad negocial en coherencia al orden de intereses que objetivamente el acto está destinado a realizar.

El art. 10 de la NLTV supera la redacción de su antecesor, el art. 9 de la ALTV.

La posibilidad de emitirse o aceptarse un título valor incompleto, se mantiene con la nueva legislación cambiaria, la novedad se

³⁹ MONTTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 41.

⁴⁰ Citado por PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 37.

encuentra en la precisión de los efectos y/o consecuencias de tal emisión o aceptación.

En efecto, la premisa o requisito para dicha emisión o aceptación incompleta es que el título valor debe completarse antes de la presentación para ejercer el derecho incorporado y conforme a los acuerdos adoptados.

Adicionalmente, el art. 19 literal e) –al que nos remite el primer inciso del art. 10-, señala que si el título valor incompleto al emitirse, haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, el obligado podrá contradecir la acción fundándose en esta causal, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten los acuerdos transgredidos por el demandante.

El segundo inciso del artículo en estudio, regula el derecho del emitente o aceptante a obtener una copia del título valor incompleto, no pudiendo impedírsele agregar en el documento, cláusula que limite su transferencia, por ejemplo "No Negociable" o "Intransferible". Pero si aún así se transfiriera, dicha transmisión surtirá los efectos de una cesión de derechos, salvo que se trate del cheque pues el art. 109 en su primer párrafo, establece que un cheque intransferible puede ser endosado sólo a favor de bancos y únicamente para el efecto de su cobro.

El tema del título valor incompleto tuvo algunas demoras en la Comisión Revisora del Congreso. Se buscaba diseñar algunos mecanismos de seguridad para protección de clientes, usuarios y consumidores en general, a quienes con frecuencia los establecimientos comerciales solicitan dejar firmada una letra de cambio incompleta (le denominan "en blanco") cuando realizan una venta a plazos o al crédito. El solicitar y obtener una copia del documento ofrece la oportunidad de mostrarle al magistrado, con oportunidad, como evidencia de que cuando se suscribió, estaba incompleto. Habrá que conservar los documentos representativos de la relación causal pues si se completa el título valor contraviniendo los acuerdos adoptados, el ejecutado podrá contradecir la ejecución mostrando el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante, art. 19 e). La gran ventaja que ofrece insertar una cláusula de "No Negociable" consiste en evitar el

endoso del título valor, pues en este caso y como sabemos, sólo surtirá los efectos de la cesión de derechos y como también hemos repetido, en este último caso el deudor puede oponer al tenedor y demandante los mismos medios de defensa que podía oponer al transfiriente o con más propiedad, al cedente de éste.

Para las empresas del sistema financiero nacional la Superintendencia de Banca y Seguros dictó una Circular, la N° 1664-83 EFC/97-10 del 07 de Febrero de 1983 la cual en su parte pertinente, disponía: que "... la emisión incompleta de títulos valores, en garantía de operaciones que las empresas del sistema financiero nacional celebren con sus clientes, debe constar en los contratos respectivos, junto a las demás condiciones que puedan dar lugar a su ejecución..... Incluso, citaba que "la presente circular se sustenta en las disposiciones de los artículos 9° y 18° de la ley de títulos valores". Probablemente, ahora no sería recomendable citar a ".....títulos valores, en garantía de operaciones....." pues está muy claro para la doctrina y jurisprudencia nacional que los títulos valores, en especial letras de cambio y pagarés, no son documentos que se aceptan o emiten "en garantía" sino que, y muy por el contrario, son obligaciones unilaterales de tipo cambiario que respectan a operaciones ciertas y definidas, con relación a vencimientos previstos y a órdenes o promesas de pagar o hacer pagar cantidades determinadas o determinables de dinero.

Se ha indicado que el acto de completar o llenar el título valor debe realizarse conforme a los acuerdos adoptados a ese respecto. Así, el efecto principal de esa inobservancia es la inoponibilidad de éstos a terceros de buena fe que no hayan participado o conocido tales acuerdos.

Los acuerdos sobre cómo y cuándo completar el título valor que alude la ley son aquellos que vinculan tanto al girador como al primer tomador de una letra de cambio, por ejemplo. En este caso, como señala **Luis MUÑOZ**⁴¹, tales acuerdos sólo pueden hacerse valer entre aquellos que los adoptaron quedando, por tanto, excluidos los terceros de conocer su contenido. Sin embargo, si quien conoce el

⁴¹ MUÑOZ, Luis. Op. cit., Página 276.

pacto abusa de él, al completar la letra podrá el girador oponer la defensa por ese abuso, e inclusive ejercitar una acción penal.

El cuarto inciso agrega, también, que los datos que faltan incluirse en el título valor, pueden completarse hasta antes de la presentación para su pago o cumplimiento. Conviene señalar, que tratándose del cheque, la ley expresa en su art. 175 que no se podrá emitir si le falta alguno de los requisitos formales esenciales señalados en el art. 174 (como por ejemplo, el número o código de identificación que le corresponde; indicación del lugar y la fecha de emisión; orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero; nombre del beneficiario o de la persona a cuya orden se emite, o la indicación que se hace al portador; nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite el cheque; indicación del lugar de pago; y, nombre y firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal) por tanto, como no puede emitirse incompleto, la norma bajo comento no podrá aplicársele.

La Ley 27311 de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor publicada en El Peruano el 18 de julio del 2000 que modifica los Decretos Legislativos 716 y 807 expresan en sus arts. 13 inc. c) y 2º respectivamente, lo que sigue: "De manera enunciativa, mas no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no podrán: c) Completar los títulos valores emitidos incompletos por el consumidor de manera distinta a la que fuera expresa o implícitamente acordada al momento de su suscripción". Títulos valores emitidos incompletos: En las operaciones comerciales en las que un consumidor suscriba títulos valores emitidos incompletos, el proveedor deberá brindar información adecuada acerca de cómo serán completados los títulos valores en caso de resultar necesaria su ejecución. De no brindarse esta información, los títulos valores serán completados atendiendo a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodearon la celebración del contrato que motivó la suscripción de los valores cambiarios y a otros elementos que se considere relevantes, según las expectativas que tendrá el consumidor que se desenvuelve en el mercado con una diligencia razonable; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 10 de la ley 27287".

El primer párrafo del artículo 11 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré dispone que "si una letra de cambio incompleta al tiempo de la creación hubiese sido completada en forma contraria a los acuerdos que la determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos que éste la hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirla hubiese incurrido en culpa grave". Nuestro régimen del artículo 9 de la Ley 16587 era prácticamente igual; nosotros ahora hemos dado, estimamos, un paso adelante en la protección del derecho del firmante de un título valor incompleto, tanto por la NLTV que comentamos como por la misma ley 27311 citada en el parágrafo VII.

La diferencia del artículo 11 de Ley Chilena respecto al artículo 11 de la Ley Argentina y 9 y 10, respectivamente, de la Ley Peruana (leyes 16587 y 27287) radica en que la primera tiene un brevísimo párrafo final que dice lo siguiente "Todo lo anterior no obsta al ejercicio de las acciones penales que fueren procedentes", lo cual a nuestro modo de ver puede producir opinión divergente: (1) conveniente su inserción porque protege al deudor que en ocasiones se ve compelido a suscribir títulos valores incompletos o en blanco, que son puestos en dolosa circulación por el tenedor original; y (2) inconveniente su inserción porque motiva y da lugar a la proliferación de acciones penales denunciadas premeditadamente, obstaculizando ejecuciones civiles, desprotegiendo al tenedor de buena fe y socavando tanto la opción de uso frecuente de título valor incompleto al emitirse, como al principio de completividad.

La doctrina argentina explica que letra de cambio en blanco o incompleta es aquella que se libra y puede circular sin alguno de los requisitos formales o extrínsecos exigidos por la ley, siempre que sea completada antes de que se opere la caducidad de la potestad de integración que tiene el portador. El profesor **GOMEZ LEO**, entiende que "la letra de cambio en blanco y la incompleta, *jurídicamente*, significan la misma cosa, pues no surgen de la ley elementos que permitan distinguirlas. La cambial en blanco debe ser completada oportunamente según el pacto o acuerdo que le dio origen. Ello atañe a la relación interna entre el librador y su contratante inmediato; empero, este último o quien recibió la letra que circuló en blanco, puede proceder al completamiento del título, pues tal potestad para satisfacer la carga de integración se transmite con la letra, por tratarse

de un derecho inherente al título, que resulta del título y circula con el título, transfiriéndose del primer tenedor a los sucesivos. Hay que tener presente que estos últimos son extraños al pacto de integración que surge de la relación fundamental por la cual se libró la letra en blanco, por su condición natural de terceros. Y si no han procedido de mala fe al adquirir el título, la integración de la letra, que ha tenido lugar por obra de otro o aún del tenedor de aquélla, en disconformidad con el pacto de llenado, es inoponible a ellos, y el deudor debe pagar la cambial como reza el tenor de su texto, sin poder invocar el abuso en la forma de llenar el título. La carga de probar la eventual mala fe (o culpa grave) recae sobre el deudor llamado a pagar.

Para explicar el fundamento jurídico en que se basa la obligación cambiaria del librador de la cambial en blanco, así como la razón por la cual quien la recibe sin completar tiene la potestad de llenar y ejercer todos los derechos resultantes de la letra ya completada, se ha expuesto diversas teorías, entre las cuales figuran:

1. Teorías contractualistas (teoría del contrato preliminar, teoría del mandato y teoría del pacto de llenado);
2. Teoría del negocio cambiario condicionado;
3. Teoría del hecho ilícito;
4. Teoría del portador de buena fe de una cosa mueble; y
5. Teoría de la declaración unilateral de voluntad

Veamos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales, recomendando particularmente se ponga atención en los fundamentos del voto del destacado profesor universitario doctor **José Antonio SILVA VALLEJO** ex Decano de la Facultad de Derecho y CC. PP. de la UNMSM en este expediente N° 1454-91 que a continuación se transcribe:

(1) Exp. N° 1454-91 Lima. Aun cuando se cuestione la ejecución de las cámbiales por no reflejar el monto real de la deuda, debe advertirse de lo expresado un tácito reconocimiento de la obligación.

Lima, dos de marzo de mil novecientos noventidós.- VISTOS; y CONSIDERANDO: que los ejecutados no niegan sino que por el contrario reconocen haber suscrito los pagarés de fojas dos y quinientos noventicinco que sirven de sustento a las demandas

ejecutivas de estos procesos acumulados; que asimismo, si bien han formulado oposición, del segundo otrosí de fojas sesentiocho se infiere que dicha oposición lo es por cuanto estiman que el importe de los montos reclamados "no refleja en absoluto la realidad de la deuda que Granmar Mancora Talara Sociedad Anónima mantiene con el demandante" debiéndose advertir de lo expresado un tácito reconocimiento de la obligación; que el informe pericial contable de fojas mil cincuentiocho, concluye admitiendo saldos deudores de inferior cantidad al importe de los pagarés hasta el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochentidós, pero resulta que la deudora principal con fecha posterior a esta última, en sendas comunicaciones que obran a fojas cuatrocientos setenticuatro, cuatrocientos setentiséis, quinientos sesentiuno quinientos sesentitrés y quinientos sesenticinco está reconociendo la existencia de la obligación, pidiendo una refinanciación de sus deudas pendientes y aceptando pagarés; que en consecuencia, estando a la naturaleza formal de la acción promovida, como al mérito ejecutivo de los títulos recaudados; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas mil doscientos catorce, su fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventiuno; que confirmando la apelada de fojas quinientos setentiséis, fechada el seis de julio de mil novecientos noventa, declara infundadas las demandas de fojas seis y la acumulada de fojas quinientos veintinueve y ordena el pago de la plus petición a favor de la ejecutada en el doble de la cantidad indebidamente reclamada; reformando la de vista y revocando la apelada; declararon FUNDADAS las demandas mencionadas y la acumulada de fojas quinientos noventinueve, INFUNDADAS la oposición y la plus petición; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del recurso. EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA QUE SUSCRIBE CERTIFICA: que los fundamentos del voto del señor vocal doctor Silva Vallejo es como sigue: CONSIDERANDO: que los ejecutados han fundado su oposición a la ejecución fundamentalmente en el hecho que los pagarés de fojas dos y quinientos noventicinco fueron suscritos en blanco, que la obligación cambiaria nace por una serie continua de actos unilaterales, a saber; la emisión, la aceptación, el aval, el endoso, y el protesto, a que, en tal virtud, el tenedor del título tiene, implícitamente la facultad de llenar el contenido de un título cambiario, aun cuando esté emitido en blanco, en razón de que se trata de obligaciones provenientes de la voluntad unilateral exigibles

en virtud de una promesa abstracta y unilateral de pago; que no es preciso que la letra de cambio o el pagaré hayan sido dotados de todos sus requisitos esenciales desde el primer momento en que fueron suscritos por el emisor o librador, porque, la ley no exige que todos sus requisitos sean simultáneos, pues basta con que estén completos cuando se interpone la demanda, pudiendo subsanarse, rellenarse o integrarse sus omisiones; que el texto de la letra de cambio puede formarse en momentos sucesivos y por distintas personas, tantas como las que intervienen en la relación cambiaria, siempre y cuando sean tenedores de buena fe; que, ésta es la doctrina que surge de la interpretación jurisprudencial del artículo noveno de la Ley de Títulos Valores; que, la carga de la prueba de los hechos alegados en la oposición a la ejecución corresponde al ejecutado, no teniendo el ejecutante carga alguna de probar su pretensión ejecutiva ya que ella se fundamenta en el título ejecutivo; que, al reunir todos los requisitos formales y sustanciales constituye condición necesaria y suficiente para promover y proseguir la ejecución; que, el peritaje caligráfico del pagaré de fojas dos, corriente a fojas mil cuarentisiete se limita a establecer que la firma de los emitentes fueron suscrita con anterioridad al llenado, sin que sea posible determinar la fecha en que se firmó y la fecha en que se llenó el pagaré; que, ello no es suficiente para determinar que el pagaré se entregó a la ejecutante en blanco, y aún cuando fuera así debe tenerse en cuenta que según la doctrina del artículo noveno de la Ley de Título Valores no es preciso que los títulos valores hayan sido dotados de todos los requisitos esenciales desde el primer momento en que fueron suscritos por el emisor, porque la ley no exige que todos los requisitos sean simultáneos, pues basta que estén completos cuando se presentan para el pago, pudiendo subsanarse, rellenarse o integrarse sus omisiones, por lo cual un título valor puede ser llenado en sus elementos faltantes por el tenedor legítimo de los mismos, surtiendo todos los efectos cambiarios a ellos inherentes; que, por otro lado, no se ha probado fehacientemente que el monto indicado en los pagarés no responde a las deudas reales entre las partes, siendo insuficiente la pericia contable a fojas mil cincuentiocho, máxime si ella se contradice con las instrumentales corrientes a fojas cuatrocientos setenticuatro, cuatrocientos setentiséis, quinientos sesentiuno, quinientos sesentitrés y quinientos sesenticinco, que reflejan la existencia de obligaciones pendientes entre las partes, por lo que la misma debe apreciarse con el criterio de la sana crítica; que,

en consecuencia, los extremos en que los ejecutados basan su oposición a las ejecuciones no han sido probadas fehacientemente, por lo cual, los títulos ejecutivos consistentes en los pagarés de fojas dos y quinientos noventicinco mantienen su eficacia ejecutiva.

(2) Exp. N° 518-98 Lima. "... El artículo noveno de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 16587), reconoce la licitud del título valor incompleto, disciplinando el acuerdo de completar, respecto a las modalidades y al contenido de lo que se ha de llenar, vale decir, su integración en la oportunidad correspondiente con los elementos que le faltan..."

Lima, dieciséis de abril de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; interviniendo como vocal ponente la doctora Cabello Arce; por sus fundamentos; y, CONSIDERANDO ADEMÁS: PRIMERO: que el propio ejecutado apelante al contestar la demanda a fojas ochenticinco señala expresamente que ostenta un saldo deudor del pagaré puesto a cobro superior a la suma que se ha ordenado pagar por sentencia; SEGUNDO: que el artículo noveno de la Ley de Títulos Valores, reconoce la licitud del título valor incompleto, disciplinando el acuerdo de completar, respecto a las modalidades y al contenido de lo que se ha de llenar, vale decir, su integración en la oportunidad correspondiente con los elementos que le faltan lo que implica que los medios probatorios del demandado deben estar destinados a acreditar que el título valor fue completado en forma diferente a lo originalmente pactado, circunstancia que el apelante no ha probado en estos autos, TERCERO: que respecto a la apelación de la resolución número diecisiete, se sustenta en que teniendo los co-ejecutados esposos Sánchez-Guzmán el mismo domicilio real, es de suponer que al notificarse a uno de ellos, el otro cónyuge; y en tanto lo que se pretende al ordenar la notificación por exhorto es salvaguardar el derecho de defensa de la cónyuge, por lo que el mandato debió cumplirse de inmediato y no esperar ser sancionado para recién acatarlo: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento ochentitrés a ciento ochenticuatro su fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis que declara fundada en parte la demanda de fojas dieciocho a veinte y en consecuencia ordena se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados Denis Sánchez Grandez, María Eugenia Corali Guzmán Flores de Sánchez, Luis Alberto Galindo Giannoni y Nelly Gabriela Gómez Sánchez Valdivia paguen en forma solidaria a la ejecutante la suma adeuda de ocho mil

trescientos treinta dólares americanos; con lo demás que contiene; y CONFIRMARON el auto apelado de fojas ciento noventa y nueve su fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete que impone una multa a la parte ejecutante; lo REVOCARON en cuanto al monto REFORMÁNDOLO lo fijaron en Una Unidad de Referencia Procesal.

(3) Exp. N° 584-95/Lima. "... De la revisión de la sentencia cuestionada se desprende que al interpretar el Artículo noveno de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, dice que la letra al ser emitida debe contener al menos sus elementos esenciales, como la indicación del vencimiento, y que debe entenderse que los datos a completarse están referidos a elementos accesorios, como la dirección de cobranza. (...) Que, sin embargo, el referido Artículo nueve de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, faculta emitir un Título Valor incompleto y completarlo posteriormente conforme a los acuerdos adoptados, sin que en dicha norma se refiera a `elementos esenciales` y `elementos accesorios`, constituyendo por lo tanto una interpretación errónea de dicha norma de derecho material".

Lima, doce de agosto de mil novecientos noventa y siete. La Sala Civil de Casación de la Corte Suprema, en la causa vista en Audiencia Pública el once de setiembre de mil novecientos noventa y seis, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Julio Fernando Alzamora Miranda, mediante escrito de fojas ciento veintiuno, contra la sentencia de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco; expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; que revocando la apelada de fojas ochentitres, fechada el catorce de febrero del mismo año, declara improcedente la demanda y fundada la contradicción. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El Recurso de Casación invocada la causal prevista en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, acusando la interpretación errónea del Artículo noveno de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, en concordancia del Artículo primero de la misma Ley, fundamento legal en que se basa la Sala para revocar la apelada y declarar fundada la contradicción, al considerar que sólo puede completar en un título-valor, los elementos que no son esenciales para

su circulación. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, en efecto, de la revisión de la sentencia cuestionada se desprende que al interpretar al Artículo noveno de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, dice que la letra al ser emitida debe contener al menos sus elementos esenciales, como la indicación del vencimiento, y que debe entenderse que los datos a completarse están referidos a elementos accesorios, como la dirección de cobranza. Segundo.- Que, sin embargo, el referido Artículo nueve de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, faculta emitir un Título Valor incompleto y completarlo posteriormente conforme a los acuerdos adoptados, sin que en dicha norma se refiera a “elementos esenciales” y “elementos accesorios”, constituyendo por lo tanto una interpretación errónea de dicha norma de derecho material. 4. SENTENCIA: Estando a las conclusiones que anteceden, declararon FUNDADO el Recurso de Casación de fojas ciento veintiuno, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la apelada de fojas ochentitrés, fechada el catorce de febrero del mismo año que declara infundada la contradicción y fundada la demanda; con lo demás que contiene.

(4) Exp. Nº 515-95 Lima. “... La Pericia Grafotécnica (...) determina que la letra de cambio (...) ha sido aceptada ‘antes del llenado mecanográfico’; (...) por consiguiente, no se trata de un título valor realmente incompleto al emitirse, sino del que ha sido totalmente formulado, prescindiendo de todo acuerdo...”

Lima, tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Vega Maguiña; por los fundamentos pertinentes de la recurrida; y CONSIDERANDO, además: Primero: Que la Pericia Grafotécnica de fojas cuarentiséis determina que la letra de cambio de fojas dos que recauda la ejecución promovida a fojas cinco, ha sido aceptada “antes del llenado mecanográfico”; Segundo: Que, por consiguiente, no se trata de un título valor realmente incompleto al emitirse, sino del que ha sido totalmente formulado prescindiendo de todo acuerdo, de manera que en tal situación no opera la previsión del artículo noveno de la Ley de la materia número dieciséis mil quinientos ochentisiete; y Tercero: Que la Carta Notarial que en copia obra a fojas doce lleva al convencimiento de que no era el girador accionante sino don Edgar

Albornoz, quien tenía relaciones de negocios con el ejecutado y de que el monto de la operación no es real ya que se le hace variar a capricho; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas setenta y setentiuno, su fecha veintiséis de diciembre del año próximo pasado, que declara fundada la contradicción planteada a fojas diecinueve por don Rodrigo Rojas Flores, e improcedente la ejecución incoada a fojas cinco por don Rafael Guillermo Chaján Blas, como endosatario por procuración de don Hugo Guillermo Gamarra Salazar; con lo demás que contiene y los devolvieron.

(5) Exp. N° 2494-97 Lima. "... Es preciso destacar que el deudor al aceptar una letra de cambio en blanco o una incompleta, asume un compromiso con el texto completo de aquéllas, admitiendo por anticipado las añadiduras que se le hagan para integrarla siempre y cuando se efectúen de acuerdo a lo convenido".

Lima, veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Vista la Causa número dos mil cuatrocientos noventicuatro-noventisiete; en la Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación de fojas doscientos cincuentiocho interpuesto de fojas doscientos cincuentiocho, interpuesto por don Juan Vicente Delgado Olivares contra la resolución de vista de foja doscientos cuarentisiete, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, que confirmando la apelada de fojas doscientos siete, fechada el dos de julio del mismo año, declara fundada la contradicción e infundada la demanda de fojas veinte; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurrente sustenta su recurso en la causal prevista en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, basada en la inaplicación del Artículo nueve de la Ley de Títulos Valores; CONSIDERANDO: Primero.- que, concedido el Recurso de Casación a fojas doscientos sesenticuatro mediante resolución de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventisiete, y habiéndose declarado la procedencia del mismo por resolución de fecha veintitrés de enero del presente año, es necesario examinar los fundamentos del referido medio impugnatorio. Segundo.- que, se ha declarado procedente el Recurso

de Casación por la causal contenida en el inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo, afirmando que se ha inaplicado el Artículo noveno de la Ley de Títulos Valores, dieciséis mil quinientos ochentisiete, que permite completa los títulos valores que han sido emitidos de manera incompleta. Tercero.- que, las instancias inferiores apreciando la pericia de fojas setenticinco a noventa, han establecido que la letra de cambio de fojas tres en las que aparecen las firmas del aceptante y del aval, fue suscrita en blanco. Cuarto.- que, el Artículo noveno de la citada Ley de títulos Valores, establece que si un título valor incompleto al emitirse hubiere sido completado contrariamente a los acuerdos adoptados, la inobservancia en estos convenios no puede ser opuesta al poseedor, a menos que éste hubiera adquirido el documento de mala fe; y, en el caso de autos no se ha establecido un actuar doloso por parte del recurrente, más aún, si los ejecutados en ningún momento han demostrado que la citada letra de cambio haya sido completada en condiciones distintas o contrarias a los acuerdos adoptados. Quinto.- que, es preciso destacar que el deudor al aceptar una letra de cambio en blanco o una incompleta, asume un compromiso con el texto completo de aquéllas, admitiendo por anticipado las añadiduras que se le hagan para integrarla siempre y cuando se efectúen de acuerdo a lo convenido. Sexto.- que, por lo tanto, al expedirse la recurrida se ha inobservado la norma de derecho material antes citada; declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas doscientos cincuentiocho por don Juan Vicente Delgado Olivares; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos cuarentisiete, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventisiete; y Actuando en Sede de Instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos siete, fechada el dos de julio del mismo año, que declara fundada la contradicción de fojas treintitrés e infundada la demanda de fojas veinte; reformándola declararon INFUNDADA la contradicción de fojas treintitrés y FUNDADA la demanda de fojas veinte; en consecuencia, ordena que la empresa El Rocío sociedad de Responsabilidad Limitada y doña Elfa Chacón de Cachay cumpla con pagar a don Juan Vicente Delgado Olivares, la suma de veinticuatro mil setecientos ocho dólares americanos con siete centavos de dólar o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de la fecha de pago, más intereses, costas y costos del proceso.

(6) Exp. N° 62800-97 Lima. “... El obligado al aceptar una letra en blanco o incompleta, de antemano se declara conforme con el texto completo de la cambial, admitiendo anticipadamente las demás menciones que hayan de añadirse al título para integrarlo...”

Lima, quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el señor Díaz Vallejos; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO ADEMÁS: Primero.- Que las letras de cambio aceptadas en blanco equivalen a las letras incompletas, exigiendo la ley, en ambos casos, que el texto de la cambial haya sido completado conforme al artículo noveno de la ley dieciséis mil quinientos ochentisiete para adquirir efectos cambiarios; Segundo.- Que el obligado al aceptar una letra en blanco o incompleta, de antemano se declara conforme con el texto completo de la cambial, admitiendo anticipadamente las demás menciones que hayan de añadirse al título para integrarlo; Tercero.- Que el ejecutado no ha demostrado que la letra de cambio materia de ejecución haya sido completado contrariamente a los acuerdos adoptados; Cuarto.- Que la obligación contenida en la cambial puesta a cobro resulta cierta, expresa y exigible, concurriendo los requisitos del artículo seiscientos ochentinueve del Código Procesal Civil; Quinto.- Que los argumentos que contiene el recurso de apelación no enervan los fundamentos de la recurrida; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento quince y ciento dieciséis su fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, que declara infundada la contradicción formulada por el ejecutado mediante escrito de fojas noventa y ocho a noventa y nueve, FUNDADA la demanda de fojas cinco a seis y ordena se lleve adelante la ejecución hasta que el ejecutado Pedro Roque Vera Ponce pague al ejecutante Pablo Lázaro Ñahuis Malpartida la suma de seis mil dólares americanos; más intereses legales; con lo demás que contiene.

(7) Exp. N° 52136-97 Lima. “... No ha probado (el ejecutado) que el documento fue llenado en contravención de los acuerdos previos, por lo que no se necesita la liquidación, dado el carácter autónomo del título y al hecho de haberse reconocido la deuda y el protesto ha sido realizado conforme a ley...”

Lima, doce de junio de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; Causa en discordia; Interviniendo como Vocal ponente el Señor Ferreira

Vildoza; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO Además: Primero.- Que tratándose de la ejecución de este tipo de títulos valores denominados pagarés a la vista, en donde por la práctica y usos del sistema financiero los clientes suscriben en blanco el documento para ser completado por el banco en el monto, fecha de emisión, cuando hay mora en el cumplimiento de las obligaciones que lo sustentan, es de aplicación el artículo noveno de la Ley de Títulos Valores, por lo que los fundamentos del agravio que sustentan la apelación del ejecutado no tienen asidero legal; Segundo.- Que, en efecto, no ha probado que el documento fue llenado en contravención de los acuerdos previos, por lo que no se necesite la liquidación, dado el carácter autónomo del título y al hecho de haberse reconocido la deuda y el protesto ha sido realizado conforme a ley: CONFIRMARON la sentencia de fojas cincuenta y ocho a cincuentinueve, su fecha veintiséis de enero del año en curso, que declara fundada la demanda de fojas once a catorce y, en consecuencia ordenaron que lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados Julián Donato Cruz Mamani y Francisco Condori Jahuirra cumpla con cancelar la suma de diecinueve mil setecientos veinte nuevos soles con setentisiete céntimos; con lo demás que contiene. EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR MANSILLA NOVELLA ES COMO SIGUE: PRIMERO: que, a diferencia de las letras de cambio que importan un mandato de pago, los pagarés o vales a la orden son tan sólo una promesa de pago para dentro de un determinado tiempo, diferenciándose asimismo de las letras de cambio, que en ningún caso requiere ser aceptado; SEGUNDO: que, en tal sentido, puede definirse el pagaré o vale a la orden como una promesa escrita de pago por cantidad determinada y a cierto tiempo, establecido a favor de una persona que debe ser nominada o a la orden de quien debe hacerse el pago; TERCERO: que el artículo ciento veintinueve de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, determina cuáles son los requisitos indispensables que para su validez deben contener el pagaré o el vale a la orden; CUARTO: que, el inciso quinto del citado artículo ciento veintinueve, señala como uno de los requisitos “la indicación del vencimiento y del lugar en que ha de efectuarse el pago”; QUINTO: que, la indicación del vencimiento en todo título cambiario, es esencial en éste; pues sin tal indicación no habría la posibilidad de presentársele al cobro; exceptuándose desde luego, el instrumento cambiario girado a la vista, que por no tener plazo para el pago, puede presentársele con este objeto desde el día siguiente de su giro;

SEXTO: que, sin embargo, debemos referir, que si bien es cierto el artículo ciento treintitrés de la Ley de Títulos-Valores señala que son aplicables al pagaré y al vale a la orden, en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones referentes a la letra de cambio; también lo es, que se desnaturaliza este tipo de título-valor (el pagaré) cuando se admite su vencimiento a la vista; SÉPTIMO: que, al respecto, la Ley de Títulos Valores establece dos formas de protesto: el que corre por falta de pago y el que se produce por falta de aceptación; OCTAVO: que, teniendo en cuenta que la aceptación es una figura propia de la letra de cambio, no es posible pensar en la segunda forma del protesto para el caso de los pagarés; por lo que, asumiendo que el vencimiento a la vista fuera posible para estos casos, sólo se protestan por falta de pago; NOVENO: que el protesto por falta de pago deber realizarse dentro de los ocho días de vencido el título-valor, e intentando aplicar este esquema al pagaré a la vista, nos encontramos que en el documento sólo aparece una fecha que es la de emisión, por lo que se nos presenta el problema de poder determinar si el protesto se realizó dentro del plazo señalado por no tener la fecha inicial para el cómputo; DECIMO: que, este asunto no es problema en el caso de las letras de cambio, ya que si dicha letra fuera aceptada, el vencimiento se produce en dicha oportunidad (a partir de ese momento se computan los ocho días), mientras que si no lo fuera, el protesto –esta vez por falta de aceptación- se puede realizar dentro del plazo de un año contado desde la fecha de emisión; DECIMO PRIMERO: que, en el caso de autos, el pagaré puesto a cobro corriente a fojas ocho ha sido protestado transcurrido ocho días contados desde su emisión; lo cual nos lleva a pensar que se ha considerado como fecha de presentación al pago (y con ella la de vencimiento) la misma fecha de su emisión; DECIMO SEGUNDO: que, de ser cierta esta interpretación, podríamos enfrentarnos a dos problemas: a) a partir de la literalidad del pagaré, no existe como afirmar que ambas fechas coinciden, es más, tal como se menciona en el considerando noveno, no existe referencia alguna a la fecha de presentación del pago; y b) si la fecha de presentación necesariamente coincide con la de emisión, nos vamos a encontrar con que el pagaré a la vista vence necesariamente en esta última fecha; DECIMO TERCERO: que, este hecho (la fecha de vencimiento) sería contradictorio con la modalidad de vencimiento adoptada en el pagaré sub-litis; por un lado se establece su vencimiento a la vista, mientras que en la práctica su vencimiento es a

fecha fija(el día de su emisión); DECIMO CUARTO: que el problema señalado en los considerandos anteriores nos lleva a afirmar que el vencimiento a la vista desnaturaliza el pagaré; dado que, en la letra de cambio el obligado principal normalmente es el aceptante, quien se compromete mediante firma(aceptación) al pago de la misma, mientras que en el caso del pagaré el personaje equivalente es quien emite el título-valor, obligándose de la misma forma; DECIMO QUINTO: que, en el caso de la letra de cambio, la aceptación produce el efecto de vencimiento por haberse girado a la vista; mientras que en el pagaré, nos encontramos que el compromiso (firma) del emitente, se produce en el mismo momento de la emisión necesariamente; DECIMO SEXTO: que, siendo esto así, se determina el nacimiento de una obligación exigible ya vencida y a fecha fija: la de emisión del pagaré; razón por la cual, a nuestro criterio se está desnaturalizando o contradiciendo el vencimiento de los mismos; y DECIMO SÉPTIMO: que, estando a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo preceptuado por los artículos ciento veintiocho, ciento setentuno y seiscientos noventinueve del Código Procesal Civil: MI VOTO es porque se declare NULA la sentencia de fojas cincuenta y ocho y cincuentinueve, de fecha veintiséis de enero último; insubsistente todo lo actuado; e IMPROCEDENTE la demanda de fojas once a catorce.

(8) Exp. 727-95 Huánuco. "... En el caso de autos se ha acreditado que la letra de cambio ha sido suscrita en forma incompleta, pues no se había consignado el monto del adeudo, requisito indispensable para que el título valor tenga validez, el cual no puede ser llenado después de suscrita la letra de cambio..."

Lima, primero de octubre de mil novecientos noventa y seis. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista el veinte de setiembre del año en curso, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Panificadora Alfonso Ugarte, mediante escrito de fojas doscientos ochentitrés, contra la resolución de fojas doscientos setenta, su fecha tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirmando la apelada de fojas doscientos diecisiete, su fecha veintiuno de abril del año próximo pasado, declara fundada la contradicción e infundada la demanda de fojas diez, interpuesta por Panificadora Alfonso Ugarte

Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de dinero.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El demandado sustenta su recurso en la causal establecida en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, señalando que se ha interpretado erróneamente la norma de derecho material contenida en los Artículos Primero, Noveno y Sesenta y uno de la Ley de Títulos Valores, número dieciséis mil quinientos ochentisiete.

CONSIDERANDO: Primero.- Que, concedido el Recurso de Casación a fojas doscientos noventiuno, mediante resolución de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventicinco, y habiéndose declarado la procedencia del mismo por resolución de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y seis, es necesario examinar los fundamentos del Recurso de Casación. Segundo.- Que, se ha declarado procedente el Recurso de Casación por la causal contenida en el inciso primero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo, afirmando que se ha interpretado erróneamente los Artículos Primero, Noveno y Sesenta y uno de la Ley de Títulos Valores, al afirmar que la letra de cambio no reunía los requisitos formales esenciales y por lo tanto no tiene validez como título valor, incurriéndose en un vicio de razonamiento. Tercero.- Que, el Artículo Primero de la Ley de Títulos Valores establece que el documento que contenga derechos patrimoniales, tendrá la calidad y efectos del título valor, sólo cuando esté destinado a la circulación y cuando reúna los requisitos formales esenciales, que por imperio de la ley le corresponda; y en caso faltare algún requisito dicho título valor perderá su carácter de tal, que en el caso de autos conforme se desprende de la pericia grafotécnica de fojas ciento noventa y ocho, se concluye que el contenido de la letra de cambio, fue suscrito aprovechando que la letra de cambio había sido firmada en blanco. Cuarto.- Que, el Artículo sesentiuno establece cuáles son los requisitos para la emisión de la letra de cambio, dentro de las que tenemos que dicho título debe contener la orden incondicional de pagar una cantidad de dinero determinada o determinable en los casos de reajuste de capital legalmente admitido, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, ya que conforme se desprende de la pericia grafotécnica de fojas ciento noventa y ocho y de la carta notarial cursada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que el monto consignado en la letra de cambio corresponde al monto adeudado más intereses legales a la fecha en que se suscribió la referida carta, cantidad que asciende a la suma de veintiséis mil doscientos noventa y cinco, de lo que se

desprende que el título valor puesto a cobro, no contenía una cantidad determinada al momento en que se firmó el título valor. Quinto.- Que, en cuanto al Artículo noveno de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, establece que si un título valor incompleto al emitirse hubiere sido completado contrariamente a los acuerdos adoptados, la inobservancia de estos convenios no puede ser opuesta al poseedor, a menos que éste hubiera adquirido el documento de mala fe, y en el caso de autos se ha acreditado que la letra de cambio ha sido suscrita en forma incompleta, pues no se había consignado el monto del adeudo, requisito indispensable para que el título valor tenga validez, el cual no puede ser llenado después de suscrita la letra de cambio. Sexto.- Que, en consecuencia habiéndose acreditado en autos que la letra de cambio ha sido emitida sin cumplir con los requisitos ochentisiete, la obligación resulta inexigible. Séptimo.- Que, por lo tanto, al expedirse la recurrida se han interpretado correctamente las normas de derecho objetivo antes citadas. RESOLVIERON: Estando a las conclusiones que anteceden se declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Panificadora Alfonso Ugarte, y en consecuencia NO CASAR la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco, de fojas doscientos setenta, su fecha tres de julio de mil novecientos noventicinco, que confirmando la apelada de fojas doscientos diecisiete, su fecha veintiuno de abril del año próximo pasado, declara fundada la contradicción e infundada la demanda de fojas diez, interpuesta por Panificadora Alfonso Ugarte Sociedad Anónima; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos unidades de referencia procesal y al pago de las costas y costos originados en la tramitación de todo el proceso.

Los temas finales con relación a la Letra de Cambio que es imprescindible tocar acá son:

- Responsabilidad Solidaria, art. 11;
- Causales de contradicción, art. 19;
- Enriquecimiento sin causa, art. 20; y,
- Nulidad de Título Valor por intereses usurarios (art. 21).
- Letra de Cambio “en Garantía”.

3.11. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 11º.- Responsabilidad solidaria

11.1. *Los que emitan, giren, acepten, endosen o garanticen títulos valores, quedan obligados solidariamente frente al tenedor, salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario. Éste puede accionar contra dichos obligados, individual o conjuntamente, sin tener que observar el orden en el que hubieren intervenido.*

11.2. *El mismo derecho corresponde a todo obligado de un título valor que lo haya pagado, contra los obligados anteriores a él.*

11.3. *La acción promovida contra uno de los obligados, no impide accionar contra los otros, aún cuando sean posteriores al demandado en primer lugar.*

11.4. *El tenedor puede ejercitar acumulativamente las acciones directa y de regreso; y, de darse el caso, la de ulterior regreso.*

11.5. *La firma puesta en un título valor al portador, como constancia de su cobro o del ejercicio de derechos representados por dicho título, no origina para el firmante ninguna obligación cambiaria derivada de dicho título valor.*

Tanto la doctrina nacional y extranjera, coinciden en calificar a la solidaridad cambiaria, como la vinculación jurídica entre el tenedor y dos o más personas que suscriban un título valor; unión que se da en un mismo grado y es equivalente a la existente en el marco de la solidaridad pasiva civil entre el acreedor y sus codeudores.

Así por ejemplo, tenemos a **Lisandro PEÑA NOSSA** que anota: “El pago hecho por uno de los signatarios solidarios no confiere a quien paga, respecto de los demás coobligados, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra estos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras partes... Se establece una solidaridad respecto de los obligados en un título valor (solidaridad pasiva).”⁴².

Por su parte, **Pedro ASTUDILLO URSUA**⁴³ refiere que están obligados al pago de un título de crédito, en primer término, el girador

⁴² PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 35.

⁴³ ASTUDILLO URSUA, Pedro. Op. cit., Páginas 100 y 101.

en las letras de cambio no aceptadas y el aceptante en las ya aceptadas; el librador de un cheque y en general, el suscriptor original de un título de crédito, y en segundo lugar los demás signatarios. En materia cambiaria, las obligaciones que cada uno de los suscriptores adquiere es una obligación diversa, propia e independiente de la obligación de quien le transmitió el título, lo cual quiere decir que hay tantas obligaciones como obligados hay en el título, porque opera la independencia de causa de transmisión o sea la autonomía, la que por otra parte permite que cada una de las obligaciones tenga existencia jurídica independiente y que la invalidez de alguna o algunas no afecte a las demás. Hay solidaridad cambiaria cuando dos o más personas suscriben el mismo acto cambiario. Si una de ellas paga, tiene dos acciones: una civil derivada de la solidaridad misma y la otra, en la vía que corresponda, según el carácter con que haya suscrito el título de crédito o sea su posición en el título.

“La declaración de solidaridad es de significación cardinal en relación a la calidad jurídica de la obligación que contiene la cambial, pues la solidaridad pasiva entre todos los obligados opera aunque cada uno de ellos haya tomado una posición autónoma en cuanto a la asunción de su obligación. Era necesario, entonces, formular una declaración que, asegurando en el aspecto económico las posibilidades de la ejecución de letra por el tenedor, resultase nota inherente a la naturaleza de aquella.”⁴⁴

¿La solidaridad cambiaria tiene las mismas características y efectos que la solidaridad civil?. Veamos.

La solidaridad civil parte del supuesto de la concurrencia de una pluralidad de sujetos, cada uno de los varios deudores, está obligado a la totalidad de la prestación con respecto al acreedor común o cada uno de los deudores está obligado a la totalidad de la prestación con respecto al acreedor común o a cada uno de los varios acreedores; y a su vez, cada uno de los varios acreedores puede exigir del deudor común o de cada uno de los varios deudores, la totalidad de la prestación; pero de tal forma que ésta sólo tiene que realizarse una vez⁴⁵.

⁴⁴ MONTROYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 44.

⁴⁵ HERNANDEZ GIL, Antonio. *Derecho de Obligaciones*. Tomo III, Espasa Calpe, Madrid, 1988, Página 364.

En el tratamiento que otorga nuestro Código Civil a las obligaciones solidarias, no existe norma que nos defina la figura; sin embargo, **Felipe OSTERLING PARODI** (Ponente del Libro VI – Las Obligaciones del Código Civil de 1984) y **Mario CASTILLO FREYRE**, nos presentan la siguiente definición: “Aquella obligación de sujeto plural, en la cual, por la voluntad o por mandato de la ley, y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto, a cualquiera de los deudores puede serle exigido y cualquiera de los acreedores puede exigir el cumplimiento total de la prestación. El primer caso sería uno de solidaridad pasiva y el segundo, de solidaridad activa.”⁴⁶.

La citada definición deriva de las siguientes disposiciones sustantivas:

- A. “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa” (Art. 1183 del C.C.).
- B. “El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado sólo por alguno” (Art. 1185 del C.C.)
- C) “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo” (Art. 1186 del C.C.).

Los efectos del pago efectuado por uno de los deudores al acreedor, se hace extensivo a los demás, liberándolos de la obligación o extinguiendo el crédito. Por ejemplo, A y B compran solidariamente una cosa. El precio es uno y sólo debe pagarse una vez; pero cada uno de los compradores lo debe y responde de él *in solidum*, por entero. El vendedor puede exigírselo a cualquiera; no necesita exigírselo a los dos ni a cada uno la mitad.

La solidaridad cambiaria, por su parte, supone la presencia de diversas declaraciones independientes que tienen por causa un

⁴⁶ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Tomo III, Página 37.

negocio jurídico diferente. Es establecida por ley, no es convencional. Para exigir el cumplimiento a otros responsables solidarios que no sea el obligado principal, implica el cumplimiento de determinados presupuestos.

“En virtud de la solidaridad se faculta al tenedor del documento a accionar contra quienes giren, acepten, endosen o avalen, individual o conjuntamente, sin tener que observar el orden en que se hubiesen obligado. El giro, aceptación, endoso y avalamiento importan actos de enajenación; y cada uno de los que practican estos actos responden de la obligación contenida en estos títulos dinerarios.”⁴⁷

SOLIDARIDAD CIVIL	SOLIDARIDAD CAMBIARIA
Tiene como fuentes a la ley y al convenio o pacto.	Surge por mandato de legal, vale decir, es de naturaleza legal.
No se presume, ésta debe pactarse o imponerla la ley; opera la presunción a favor de la mancomunidad de las obligaciones.	La solidaridad cambiaria se presume, salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario.
Supone una unidad de causa jurídica, un solo negocio.	Proviene de diversas declaraciones independientes que tienen por causa un negocio jurídico diferente.
El acreedor puede dirigirse contra el deudor principal o todos los deudores solidarios, bastando para ello, que la obligación sea exigible.	El tenedor puede accionar contra el que emita, gire, acepte, endose o garantice los títulos, en forma individual o conjunta, previo cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de cada acción cambiaria.

⁴⁷ BASURTO A., Rolando. *Manual del funcionario de crédito*. Muruhuay, Lima, 1982, Página 166.

El profesor argentino **GOMEZ LEO** nos dice que "en perfecta armonía con el rigor formal, el sistema cambiario establece las pautas sustanciales a tenor de las cuales existe y se puede ejercer el derecho subjetivo cambiario que emana de un papel de comercio. El rigor cambiario sustancial tiene, como primera manifestación, la pluralidad de vínculos que otorga la autonomía e independencia de cada una de las garantías cambiarias documentadas, dispensando al portador legitimado el *ius electioni* y el *ius variandi*, matiz exclusivo de la solidaridad cambiaria. Ello le permite al portador legitimado exigir la obligación a todos y cada uno de los firmantes, conjunta, alternativa o separadamente, sin observar el orden en que se fueron obligando cuando el título valor circuló".

La NLTV mantiene el criterio de la ALTV, en el sentido que mediante la solidaridad cambiaria se otorgue a los títulos valores las mayores seguridades para obtener el pago, superándose el criterio de que el tenedor debe justificar la insolvencia del demandado en primer término para poder dirigirse contra los demás obligados.

El primer inciso del art. 11 de la presente ley, considera responsables solidarios a los que emitan, giren, acepten, endosen o garanticen títulos valores.

La primera distinción respecto a la ALTV es el hecho de que la nueva ley, abarca con la solidaridad a todos los participantes de un título valor, ya sea como emitentes, giradores, aceptantes, endosantes o garantes. Nótese que la norma se refiere a "título valor", abandonando la restricción que hacía el primer párrafo del art. 10 de la ALTV: "Tratándose de las letras de cambio, pagarés, vales a la orden y cheques...". Asimismo, se cambia el término "avalen" por "garanticen", toda vez que la anterior ley sólo contemplaba el uso del aval como instituto de garantía solidaria. En cambio ahora, en los arts. 56 a 63 se tratan los temas de las garantías: personales, aval y fianza; reales, derechos reales de garantía.

Hay quienes opinan que la enumeración contenida en este primer inciso es incompleta, puesto que no comprende a otros obligados cambiarios como el *falsus procurator*. A juicio nuestro, el aceptante por intervención es un obligado solidario porque no deja de ser aquel que acepte un título valor; pudiendo recaer tal calidad en el

mismo girado, el girador o cualquier otra persona ya obligada en virtud de la letra de cambio, con excepción del aceptante.

Asimismo, se encuentra la referencia a “quien emite” y “a quien gire”. Aparentemente se trata de una misma figura. Sin embargo, en la práctica mercantil se suele diferenciar al emitente de un pagaré y al girador de una letra de cambio, aun cuando ambos cumplen la misma función cual es la de librar el título valor. Así lo encontramos por ejemplo, en los artículos 158 literal b) y 161, referentes al pagaré; y los arts. 119 literales b) y f), 120 y 123, sobre letra de cambio.

La última parte del primer párrafo del inciso 11.1, es también una novedad, la misma que deviene de lo ya anotado como rasgo distintivo de la solidaridad cambiaria: ésta se presume, salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario.

Finalmente, se plantea la siguiente distinción: la nueva ley cambiaria dispone que el tenedor puede iniciar la acción correspondiente contra los obligados, sin tener que observar el orden en que “intervinieron”. A diferencia de la ALTV que se refería al orden en que éstos se hubieren “obligado”.

El segundo y tercer inciso resumen otros aspectos relacionados a los efectos de la solidaridad cambiaria.

En primer lugar, es el tenedor quien puede ejercitar la acción cambiaria, individual o conjuntamente, contra los obligados, sin importar el orden en el que intervinieron.

El mismo derecho lo tiene el obligado que haya pagado el título valor, contra los otros obligados anteriores a él. El art. 10 de la ALTV se refería a que ese derecho también lo tenía “todo firmante de un documento que lo haya pagado, contra los que lo hubieren suscrito antes que él.”

Asimismo, en virtud de la solidaridad cambiaria, el tenedor puede accionar contra quienes no hubieren sido demandados en la primera ejecución y puede elegir a los demandados sin atenerse al orden en que hubieren intervenido; esta acción procede ante la falta de pago del obligado principal, puede promover una acción conjunta

contra el obligado principal y otro u otros responsables solidarios. En el mismo criterio se apreciaba en el tercer párrafo del derogado art. 10.

El cuarto inciso, mantiene la posibilidad de acumular las acciones directa y de regreso; y de darse el caso, la de ulterior regreso. En este sentido, se puede acumular la acción iniciada contra el obligado principal y/o sus garantes, y la promovida contra los endosantes, garantes de éstos y demás obligados en vía de regreso (por ejemplo, el girador y sus garantes). Asimismo, resulta factible acumular la acción de ulterior regreso, ejercitada por quien efectuó el pago del título contra los demás obligados que hayan intervenido en él en forma anterior.

El quinto inciso, refiere que la firma puesta en un título valor al portador como constancia de cobro o del ejercicio de derechos representados por el título, no origina para el firmante ninguna obligación cambiaria derivada de dicho título valor. Esto era muy importante precisarlo porque si lo tradicional fue o debió ser que el portador podía exigir la prestación con sólo mostrar o presentar el título valor, toda vez que con ello acreditaba su calidad de tal (de portador), podía quedar la preocupación por parte de dicho portador en el sentido de que su firma colocada en el reverso o dorso del título, por ejemplo, en el caso de un cheque que se cobra a un banco, o su firma colocada en el anverso como señal o indicación de haber recibido el importe correspondiente o haber sido satisfecho con el cumplimiento de la prestación, podrían tener alguna significación jurídica en tanto endosante, aceptante, coaceptante o avalista, respectivamente, según dicha firma hubiere sido puesta en el dorso o anverso. Para evitar la negativa del portador a firmar el documento en cancelación o cumplimiento de la prestación, sea en el dorso o en el anverso, en tanto se le podría estimar como corresponsable solidario, si el título continuara circulando, se hizo esta expresa precisión en el sentido de que su firma no originaba para ello obligación cambiaria de tipo alguno.

Se presenta a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia relativas a la solidaridad cambiaria. Veamos:

(1) Exp. N° 1480-95. Lima. "...La solidaridad cambiaria (...) se aplica en el orden exclusivo de los que giren (girador o librador), acepten (aceptante o co-aceptante), endosen (endosado-endosante) o avalen (avalista o co-avalista)..." Lima, veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis.-VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Umpire Nogales; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, del estudio formal de cada una de las letras de cambio que obran en el expediente se tiene que la letra de fojas dos no consigna el nombre del girador sólo aparece su firma (letra perjudicada), la letra de cambio de fojas treintiocho, fueron canceladas (obligación extinguida), la letra de cambio de fojas treintinueve, tiene fecha de vencimiento en veinticinco de junio de mil novecientos noventa y cuatro no ha sido protestada y tampoco tiene el nombre del girador (letra de cambio perjudicada), la segunda letra de cambio de fojas treintinueve, fue cancelada (obligación extinguida), la letra de fojas cuarentiuno, tiene fecha de vencimiento el veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro no ha sido protestada y falta el nombre del girador (letra perjudicada); SEGUNDO: Por lo que se concluye que las letras de cambio de fojas dos, tres, primera letra de cambio de fojas treintinueve y la letra de fojas cuarentiuno tienen defecto formal insalvable lo que determina que han sido perjudicadas, en atención a que conforme se establece en la Ley dieciséis mil quinientos ochenta y siete, Ley de Títulos Valores, no se cumple con los requisitos establecidos en el inciso octavo del artículo sesentiuno y lo normado en los artículos setentiuno, dos setentiseis de la precitada Ley especial; TERCERO: En consecuencia sólo se reconoce validez formal a la letra de cambio de fojas cuatro, cinco y seis, siendo que la co-demandada doña Rosa Cárdenas Ramírez viuda de Quiróz suscribió como aceptante en representación de la persona jurídica Consorcio Peruano de Vivencia Sociedad Anónima, quien precisamente le otorga poder amplio y general, según el Testimonio de Escritura Pública de fecha veintidós de julio de mil novecientos setenta y siete obrante de fojas veintinueve a treinticuatro; CUARTO: Por lo tanto la principal obligada, como aceptante es la persona jurídica "Consorcio Peruano de Vivienda Sociedad Anónima" y no su representante doña Rosa Cárdenas Ramírez viuda de Quiróz, asimismo la solidaridad cambiaria normada en artículo diez se aplica en el orden exclusivo de los que giren (girador o librador), acepten (aceptante o co-aceptante), endosen (endosado - endosante) o avalen (avalista o co-avalista) y la calidad que ostenta la co-demandada Rosa

de Quirós no está inmersa dentro de la enumeración precedente, es decir, no es aceptante, ni co-aceptante, ni menos avalista, por lo que DECLARARON NULA la sentencia apelada corriente a fojas cincuentiocho a sesentiuno de fechas dieciséis de junio de mil novecientos noventicinco, dejando a salvo el derecho de la demandante en la vía que corresponde, si fuere el caso; LLAMARON la atención al A-quo a efecto de que ponga mayor celo en el desempeño de sus funciones.

3.12. CAUSALES DE CONTRADICCIÓN EN LAS ACCIONES CAMBIARIAS

Artículo 19°.- Causales de contradicción.

19.1. Cualquiera que fuere la vía en la que se ejerciten las acciones derivadas del título valor, el demandado puede contradecir fundándose en:

- a) el contenido literal del título valor o en los defectos de forma legal de éste;*
- b) la falsedad de la firma que se le atribuye;*
- c) la falta de capacidad o representación del propio demandado en el momento que se firmó el título valor;*
- d) la falta del protesto, o el protesto defectuoso, o de la formalidad sustitutoria, en los casos de títulos valores sujetos a ello;*
- e) que el título valor incompleto al emitirse, haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante;*
- f) la falta de cumplimiento de algún requisito señalado por la ley para el ejercicio de la acción cambiaria.*

19.2. El deudor también puede contradecir al tenedor del título valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes, según la ley procesal.

19.3. El demandado no puede ejercer los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con los otros obligados del título valor, ni contra quienes no mantenga relación causal vinculada

al título valor, a menos que al adquirirlo, el demandante hubiese obrado a sabiendas del daño de aquél.

La presente norma regula los mecanismos de defensa con los que cuenta el demandado en una acción emergente de un título valor, denominados “causales de contradicción” a que se refiere el art. 700 del CPC y esta NLTV; mientras que la ALTV se refería mas bien a las “causales de oposición”.

La disciplina de las excepciones cambiarias *–lato sensu–* constituye, sin duda alguna, un punto central de la teoría cambiaria.

“En la clasificación de las excepciones cambiarias se pone de relieve la totalidad de la disciplina cambiaria y de las declaraciones cambiarias en su momento procesal, o sea, considerada bajo el aspecto de la posibilidad del deudor de rechazar, con oportunos medios de defensa, la acción enderezada en su contra por el portador del título.”⁴⁸.

Las novedades introducidas al respecto se refieren a la contradicción basada en la falta de la formalidad sustitutoria, en los títulos valores sujetos a ello; y el hecho de que un título valor incompleto al emitirse, se haya completado en forma contraria a los acuerdos adoptados por los intervinientes. Para ello, deberá presentarse el documento donde conste tales acuerdos y precisar en qué ha consistido o cómo se manifiesta la trasgresión.

Las denominadas causales de oposición a que se refiere el art. 20 de la ALTV han sido subsumidas o arregladas en este art. 19, bajo la denominación de “causales de contradicción”. Tal como se ha anotado y en términos generales podemos afirmar que su diferencia sólo radica en el inc. d) in fine (formalidad sustitutoria al protesto) y el e) acerca del título valor que incompleto al emitirse hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, pero se debe acompañar, necesariamente, el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos.

⁴⁸ PAVONE, citado por BERGEL, Salvador D. y PAOLANTONIO, Martín E. *Acciones y Excepciones Cambiarias*. Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992, Página 213.

Cuando la norma establece que se puede contradecir al tenedor, proponiendo las defensas que deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes según la ley procesal; significa que puede interponer las excepciones señaladas en el artículo 446 del Código Procesal Civil, a saber:

- Incompetencia
- Incapacidad del demandante o de su representante
- Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado
- Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda
- Falta de agotamiento de la vía administrativa
- Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado
- Litispendencia
- Cosa Juzgada
- Desistimiento de la pretensión
- Conclusión del proceso por conciliación o transacción
- Caducidad
- Prescripción extintiva
- Convenio Arbitral

La doctrina italiana identifica dos clases de excepciones: aquellas llamadas procesales o de rito, que dependen de la falta de condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; y las sustanciales, que a su vez se clasifican en absolutas y relativas, según sean oponibles a cualquier legitimado activo u oponibles solamente a un legitimado activo. Son también objetivas y subjetivas, según sean oponibles por cualquier deudor cartular o solamente por un determinado deudor cartular.

Las excepciones o causales de contradicción reguladas en el art. 19 sólo aluden a la formalidad y/o literalidad con que debe emitirse un título valor. Sin embargo, coincidimos con **MONTOYA MANFREDI**⁴⁹, cuando considera que el inciso f) que exige el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para el inicio de la acción cambiaria, alude a las excepciones procesales o de rito.

⁴⁹ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 73.

Se repiten los supuestos en los cuales el demandado no puede ejercer los medios de defensa:

- Cuando se fundan en sus relaciones personales con otros obligados del título valor.
- Cuando se fundan contra quien no mantenga relación causal vinculada al título valor, a menos que al adquirirlo, hubiese obrado a sabiendas del daño de aquél.

Transcribimos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales por considerarlas de sumo interés para el mejor análisis de este artículo 19. Veamos:

(1) Exp. N° 840-98. Lima. “...Resulta evidente que el propio demandante ha aceptado que las cambiales se giraron a consecuencia de un contrato de compra venta que no llegó a realizarse, por lo que se hace evidente que el demandado no le adeuda precio alguno que pudiera estar respaldado en las cambiales y por tanto no puede obligársele a pagar una deuda que no existe desde que no se puede condenar a una persona al pago de una suma de dinero representada en una letra de cambio por el mero hecho de que es un título valor, sin observar que este mandato puede llevar a ocasionar una injusticia al conminar a una persona a pagar lo que no debe; pues el solo hecho de poseer un título valor no da mérito a alguien a cobrar aquello a lo que no tiene derecho...”

Lima, veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; interviniendo como vocal ponente la doctora Cabello Arce; CONSIDERANDO: PRIMERO: que si bien es cierto las letras de cambio tienen una independencia de la acción causal, no es menos cierto que recauda los títulos-valores, no han circulado, esto es cuando las calidades de tenedor y obligado principal del título valor corresponden al acreedor y deudor de la relación causal de la que se deriva la emisión de dicho documento sin que éste se hubiere endosado a tercera persona, las partes pueden oponer las excepciones personales, de acuerdo a los artículos dieciocho y veinte de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete; excepciones que no son de contenido procesal, sino como de fechas de fondo originadas en la relación jurídica sustantiva que las partes pudieran tener; SEGUNDO: que uno de los argumentos de defensa del ejecutado es la alegación de la no existencia de deuda alguna entre el ejecutante y

él, ya que las letras puestas a cobro correspondían a deuda entre el padre del demandante y el demandado; TERCERO: que conforme se puede constatar del acta de fojas sesenticinco a sesentisiete al ser requerido el demandante para que exhiba algún documento del cual consta el acto o negocio que dio lugar a la emisión de las letras de cambio, manifestó textualmente que tales letras de cambio fueron emitidas a raíz de un negocio de venta de un inmueble al ejecutado, negocio que no se llegó a concretizar; CUARTO: que siendo ello así, resulta evidente que el propio demandante ha aceptado que las cambiales se giraron a consecuencia de un contrato de compra venta que no llegó a realizarse por lo que se hace evidente que el demandado no le adeuda precio alguno que pudiera estar respaldado en las cambiales y por tanto no puede obligársele a pagar una deuda que no existe desde que no se puede condenar a una persona al pago de una suma de dinero representada en una letra de cambio por el mero hecho que es un título valor, sin observar que este mandato puede llevar a ocasionar una injusticia al conminar a una persona a pagar lo que no debe; pues el sólo hecho de poseer un título valor no da mérito a alguien a cobrar aquello a lo que no tiene derecho; QUINTO: que estando a lo expuesto, y a que por la manifestación vertida por el propio demandante se arriba a la conclusión que los títulos valores de fojas tres y cuatro carecen de causa legítima que los ampare, la obligación puesta a cobro no resulta cierta. Por tales consideraciones en aplicación de las normas legales precitadas y artículo ciento ochentidós y ciento noventisiete del Código Procesal Civil: REVOCARON la sentencia de fojas ciento cuarentinueve su fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho que declara Infundada la contradicción y Fundada la demanda REFORMÁNDOLA declararon fundada la contradicción e Improcedente la demanda con costas y costos.

(2) Exp. N° CAS 1569-98/Lima. "... Habiéndose establecido una excepción derivada de relaciones personales, entre tenedor y aceptante, ya no son aplicables los principios de incorporación, literalidad, abstracción y autonomía..."

Lima, veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia:
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Ricardo Felipe Bajak Miranda, contra la sentencia

de vista de fojas ciento ochentidós, su fecha veinticinco de mayo del presente año, que revocando la apelada de fojas ciento cuarentinueve, de fecha treinta de enero del mismo año, que declara fundada la contradicción e improcedente la demanda; con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución de esta Sala Suprema, del veintitrés de julio del presente año, se ha declarado procedente el recurso por las causales contenidas en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es, la aplicación indebida de los Artículos dieciocho y veinte de la Ley de Títulos Valores, desde que las cambiales cumplen con los presupuestos legales pese a lo cual sostiene la Sala de instancia que carecen de mérito ejecutivo, fundándose en que al coincidir el girado y aceptante con el acreedor y deudor, debe existir la causal obligacional; y la inaplicación de los Artículos primero, segundo, sesentiuno, sesentitrés, noventicuatro y ciento veintidós de la Ley de Títulos Valores, que determina la naturaleza, requisitos y afectos del título valor que son la autonomía, abstracción cambiaria, incorporación y literalidad. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que la sentencia de vista ha establecido como cuestión fáctica que las letras de cambio puestas al cobro se giraron a consecuencia de un contrato de compraventa que no llegó a concretarse, por lo que el demandado no adeuda precio alguno que pudiera representarse en cambiales y no puede obligársele a pagar una deuda que no existe, y siendo que el tenedor y aceptante de las letras son el acreedor y deudor de la relación causal, de la que se derivó la emisión de dicho documento, en virtud de los principios contenidos en los Artículos sétimo del título Preliminar del Código Procesal Civil y sétimo del Título Preliminar del Código Civil, ha aplicado los Artículos dieciocho y veinte de la Ley de Títulos Valores, para declarar que los títulos valores de fojas tres y cuatro carecen de causa legítima. Segundo.- Que en casación no se puede revaluar la prueba; ni modificar la cuestión fáctica establecida en el proceso, por lo que la declaración de impertinencia de dichos dispositivos no puede ser amparada. Tercero.- Consecuentemente, habiéndose establecido una excepción derivada de relaciones personales, entre tenedor y aceptante, ya no son aplicables los principios de incorporación, literalidad, abstracción y autonomía, previstos en los Artículos primero, segundo, sesentiuno, sesentitrés, setentiuno, noventicuatro y ciento veintidós de la Ley de Títulos Valores, y carece de sustento la denuncia de su inaplicación. 4. SENTENCIA: Por las consideraciones

anteriores; declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Ricardo Felipe Bajak Miranda, y en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas ciento ochentidós, su fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventiocho, CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso. EL VOTO EN DISCREPANCIA DEL SEÑOR CASTILLO LA ROSA; es como sigue: CONSIDERANDO: 1º) Que, habiéndose invocado las causales de aplicación indebida y la inaplicación de normas de derecho material, es atendible hacer previamente un examen de las normas cuya inaplicación se denuncia; 2º) Que, los títulos valores se rigen por el principio de la abstracción cambiaria, en virtud del cual queda establecido que las letras, entre otros títulos valores, son instrumentos carentes de historia y para su cobranza en acción cambiaria no depende de la causa que haya dado origen a su emisión 3º) Que, en el presente caso, se ha entablado la acción cambiaria directa en la vía del proceso ejecutivo y son aplicables al caso de autos las normas que contienen los principios jurídicos de incorporación, literalidad, abstracción y autónoma cambiaria de los títulos valores, regulados en los Artículos primero y segundo de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentiséis así como los Artículos sesentiuno, sesentitrés, setentiuno, noventicuatro y ciento veintidós de la ley acotada, referidos a las formalidades de la letra de cambio y ejercicio de acciones cambiarias; 4º) Que, a mayor abundamiento, cabe indicarse que la causa del giro de las letras es la devolución de la suma dada en parte de precio de un bien, cuya venta no se realizó; 5º) Que, la Sala de mérito se aparta del carácter y efectos legales de las letras recaudadas con la demanda, aplica indebidamente los Artículos dieciocho y veinte de la Ley de Títulos Valores para rechazar la acción cambiaria materia de autos, y deja de aplicar los otros artículos indicados sobre la naturaleza y efectos del título valor; 6º) Que, por tanto se ha dado las causales de casación previstas en los incisos primero y segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sobre aplicación indebida e inaplicación de normas materiales; correspondiéndole a la Sala Civil Suprema pronunciarse de conformidad con el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; por las consideraciones precedentes MI VOTO es porque se declare FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Ricardo Felipe Bajak Miranda; en

consecuencia NULA, la sentencia de vista de foja ciento ochentidós, su fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho y actuando como sede la instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento cuarentinueve, su fecha treinta de enero del mismo año, que declara INFUNDADA la contradicción y FUNDADA la demanda; en consecuencia prosígase la ejecución forzada hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de quince mil seiscientos ochenta dólares o su equivalente en moneda nacional; con lo demás que contiene.

3.13. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Artículo 20°.- Enriquecimiento sin causa.

Extinguidas las acciones derivadas de los títulos valores, sin tener acción causal contra el emisor o los otros obligados, el tenedor podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa en detrimento suyo, por la vía procesal respectiva.

Dentro de las acciones extracambiarias, extracartáceas o extracartulares, la doctrina ubica a la acción causal y a la acción de enriquecimiento sin causa.

Según se desprende de la doctrina consultada, la acción de enriquecimiento sin causa, se articula de forma tal que podría calificarse como “residual”, pues tiene como presupuesto, tanto que el tenedor haya perdido la acción cambiaria contra todos los obligados, por ejemplo por haber ocurrido la prescripción y/o la caducidad; como que no pueda ejercitar las acciones causales contra ellos porque no tuvo ni tiene relaciones jurídicas de esa naturaleza en las que pueda ampararse.

Si se producen estos presupuestos el tenedor del título valor podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa y en detrimento suyo. En esta circunstancia el tenedor podrá dirigir su acción en la vía procesal respectiva contra el librador, el aceptante o un endosante exigiéndoles el pago de la cantidad con que se hubieran enriquecido injustamente en su perjuicio, como consecuencia de la extinción de la acción cambiaria.

Imaginemos dos hipótesis para explicar esta norma. De una parte la posibilidad de que una letra de cambio hubiese entrado en circulación y de que su penúltimo tenedor y titular del derecho, un endosatario, una sociedad anónima, endose a un tenedor este documento. Transferencia y endoso perfectamente legítimos. Sin embargo, este último tenedor, después de protestar el título valor por su falta de pago, ya que en efecto no fue pagado, no inicia ni ejecuta la acción cambiaria contra ninguno de los obligados anteriores, ni tampoco la pretensión causal contra su inmediato endosante. Este, la sociedad anónima, acuerda su disolución, concluye su proceso liquidatorio y se extingue, inscribiendo este acto y transcurren tres años dos meses a contar desde el vencimiento de aquella letra de cambio. Este es el caso. El tenedor perdió la acción cambiaria pues ésta se extinguió por prescripción y no tiene relación ni por tanto acción o pretensión causal contra los anteriores obligados, girador, aceptante, tomador y antepuestos endosantes. Lo mismo podría acontecer para el caso que el tenedor se hubiera adjudicado en un remate judicial un paquete o lote de títulos valores y por supuesto transcurren más de tres años desde el vencimiento de éstos. Ni conoce al girador, ni al aceptante, ni al tomador ni a los precedentes endosantes y al último titular y tenedor de los documentos le fueron endosados los títulos valores por el juez, ya que se trató de un remate judicial. Se ha extinguido la acción cambiaria y no se tiene relación causal con los anteriores obligados: ese es el presupuesto de la ley. Para éstos y por el lapso de dos años a contar desde el vencimiento de las acciones cambiarias, existe la posibilidad de demandar quienes se hubieren enriquecido indebidamente, en agravio del actor. En el caso de una letra de cambio que ha seguido una secuencia ordinaria de obligaciones y cancelaciones cartulares, salvo que se pruebe algo distinto, quien se ha enriquecido indebidamente ha sido el aceptante, a quien se le ha entregado un bien o ha "cancelado" una obligación con el título valor, que finalmente no fue pagado por nadie.

El enriquecimiento sin causa está regulado, en primer término, dentro del Libro VII del Código Civil, Fuentes de las Obligaciones, en una sección independiente, por constituir una fuente autónoma de obligaciones.

El art. 1954 del C.C. hace expresa referencia a los elementos o requisitos del enriquecimiento sin causa, a saber: la ventaja y el

detrimento patrimoniales correlativos; la falta de justificación y la consecuencia o mandato legal de indemnización.

En la legislación colombiana, por ejemplo, la acción de enriquecimiento sin causa debe observar los siguientes requisitos: que exista un enriquecimiento, que haya un empobrecimiento correlativo, que el empobrecimiento sea injusto porque el desequilibrio entre los patrimonios del enriquecido y del empobrecido se haya producido sin causa jurídica, que el empobrecido carezca de cualquiera otra acción, que la acción *in rem verso* no pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley. Si no se cumplen esos requisitos, el acreedor cambiario de los títulos prescritos no podrá iniciar acción de enriquecimiento sin causa.

“El enriquecimiento debe ser indebido, lo que significa que no se trata sólo de un enriquecimiento a expensas de otro sino, además sin justificación.

El enriquecimiento es injusto cuando carece de una relación patrimonial que lo sustente y respalde, o aunque ésta haya existido, el perjudicado renuncie lícitamente y conscientemente a su derecho. Hay, pues, ausencia de causa en sentido de falta de título o razón de ser del enriquecimiento del enriquecido y del correlativo empobrecimiento del empobrecido.”⁵⁰

Finalmente, cabe agregar que la pretensión de enriquecimiento sin causa, extracartular, se tramita vía el proceso de conocimiento o el abreviado.

El artículo 62 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré establece que "si el portador hubiese perdido la acción cambiaria contra todos los obligados y no tuviese contra ellos acción causal, puede accionar contra el librador o el aceptante o el endosante por la suma en que hubiesen enriquecido injustamente en su perjuicio". Casi invariablemente, el legislador argentino alude a "el portador" mientras que nosotros hemos preferido "el tenedor". Consideramos que la expresión "portador" puede prestarse a

⁵⁰ REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. *Exposición de Motivos y Comentarios al Código Civil Peruano de 1984*. Tomo VI, OKURA Editores, Lima, 1985, Página 776.

confusión pues técnicamente está referida, más bien, a los títulos valores que se transmiten por *traditio* o entrega; en cambio el "tenedor" puede ser un portador, un endosatario, un cesionario, un adjudicatario en remate judicial, etc. En los artículos 21 y 206 de Ley 16587, a este instituto se le denominó enriquecimiento indebido y enriquecimiento sin causa; ahora, en los artículos 20 y 99 sólo se hace cita de "enriquecimiento sin causa" para evitar, obvio, eventuales confusiones; obsérvese que el legislador argentino le denomina enriquecimiento injusto; el legislador argentino formula la precisión de que la acción deba dirigirse contra el librador, o el aceptante, o el endosante; nosotros hemos preferido dejar que sea el juez quien finalmente determine la conexión jurídica dejando el derecho al tenedor para "accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa en detrimento suyo". Obsérvese por último, que el legislador argentino no permite, en sentido estricto, la acción contra avalistas ni contra co-libradores o co-aceptantes, pues ha sido cuidadoso en referir, como ya se ha dicho, solamente, al librador o al aceptante o al endosante.

El Art. 96 in fine de la ley argentina establece que "la acción de enriquecimiento se prescribe al año, contado desde el día en que se perdió la acción cambiaria".

3.14. NULIDAD DEL TÍTULO VALOR POR INTERESES USURARIOS

Artículo 21º.- Nulidad del título valor por intereses ilegales

21.1. Podrá deducirse la nulidad del título valor obtenido por el tenedor en representación o en pago de préstamos con intereses usurarios o prohibidos por la ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar, según la ley de la materia.

21.2. En caso que el título valor que contenga tales intereses hubiera sido transferido, la nulidad señalada que no surja de su texto, no podrá invocarse contra el tenedor de buena fe que lo haya adquirido observando las normas que rigen su circulación.

El primer inciso recoge la disposición del art. 22 de la ALTV, sancionando con nulidad los títulos valores obtenidos en

representación o en pago de préstamos con intereses usurarios o prohibidos por ley. Además, la ley deja expedita la acción penal para exigir la sanción a esa conducta.

En suma, está prohibido utilizar los títulos valores como instrumentos de usura.

Al respecto, el art. 214 del C.P. sanciona con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y veinte a treinta días multa, a aquél que con el fin de obtener una ventaja patrimonial para sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley.

La usura es el interés excesivo obtenido por un préstamo, por lo general ordinario, esto es, el uso del dinero como mercancía para conseguir más, merced a intereses desproporcionados y abusivos cobrados a cambio. Al respecto, la doctrina penal peruana destaca que el bien jurídico protegido al sancionar este delito, es el sistema económico crediticio, al afectar al normal funcionamiento de éste; el abuso de una situación privilegiada que pueda obligar a los participantes en aquél a aceptar condiciones crediticias por encima de los límites legalmente establecidos.

Al sancionar con nulidad el título valor obtenido en representación o pago de préstamo con intereses usurarios, la ley deja en claro que no ampara de ningún modo conductas delincuenciales o atentatorias contra el ordenamiento en su conjunto.

Según Ejecutoria Suprema del 30 de enero de 1998, la incriminación de la usura se encuentra más en el ámbito social y ético, que en un auténtico desvalor de la acción, sobre todo, si se tiene en cuenta que en este tipo de supuestos media siempre o casi siempre, el consentimiento de la víctima.

Asimismo, el artículo plantea otro supuesto: la transferencia del título valor que contiene los intereses usuarios. En este caso será nulo el título valor si en él se expresa dicha nulidad y se transfiere así; pero no lo será o no podrá invocarse la nulidad contra el tenedor de buena fe que lo adquirió de acuerdo a las normas que rigen la circulación de

ese título valor. En esta hipótesis lo que el legislador protege es tanto la seguridad jurídica en la circulación del título valor como la subsiguiente buena fe del tercero adquirente; de otro lado hay que tener presente la apariencia de validez que reviste el título valor como el negocio jurídico celebrado por éste.

Se presenta a continuación algunas ejecutorias supremas respecto al tema de este artículo:

(1) Exp. N° 227-95 La nulidad de un título valor no puede hacerse valer vía acción, pues, en todo caso, en el cobro que se haga de su importe puede el obligado hacer uso de los mecanismos procesales que por Ley se establecen.

Lima, veintidós de setiembre de mil novecientos noventicinco.- VISTOS; por los fundamentos de la sentencia apelada de fojas doscientos sesentitrés; y CONSIDERANDO: además; que la nulidad de un título valor no puede hacerse valer en vía de acción, pues, en todo caso, en el cobro que se haga de su importe puede el obligado hacer uso de los mecanismos procesales que el Código de Procedimientos Civiles y las normas especiales establecen; que, por lo demás, examinado el pagaré de fojas cincuenticinco, se llega a la conclusión inequívoca que al consignar como fecha de emisión treinta de noviembre de mil novecientos noventiuno se ha incurrido en error material, cuando por lógica la fecha de emisión corresponde al treinta de noviembre de mil novecientos noventa, error que no puede generar la invalidez del título valor; que esta conclusión se refuerza con el mérito del contrato privado de fianza de fojas ciento cincuenticuatro, que tiene como fecha el treinta de noviembre de mil novecientos noventa, en el que figura como fiador el demandante don Luis Valdez Villacorta, contrato que indudablemente tiene relación con el pagaré de fojas cincuenticinco; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos cincuentinueve su fecha tres de enero de mil novecientos noventicinco, que revocando la apelada de fojas doscientos sesentitrés, su fecha dieciocho de mayo de mil novecientos noventicuatro, declara FUNDADA la demanda de fojas tres y, en consecuencia, nulo y sin efecto legal el pagaré de fojas cincuenticinco y ampara lo demás extremos demandados; reformando la primera, confirmaron la sentencia de primera instancia de fojas

doscientos sesentitrés que declara INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; con lo demás que contiene y es materia de grado.

(2) Exp. N° 1693-96 LAMBAYEQUE. “...Conforme al Artículo setecientos del Código Procesal Civil la contradicción por causal de nulidad del título, sólo puede referirse al aspecto formal, de tal manera que el Artículo veintidós de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 16587), que autoriza la nulidad del título valor obtenido en pago de préstamos con intereses usurarios, debe hacerse valer en vía de acción...”

Lima, cinco de mayo de mil novecientos noventaiocho.- La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública el cuatro de mayo del año en curso, emite la siguiente sentencia; con el acompañado: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Capote Limitada, contra la sentencia de vista de fojas doscientos sesentitrés, su fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventaíis, que, confirmando la apelada de fojas ciento noventiuno, su fecha primero de abril del mismo año, declara infundada la contradicción formulada por la ejecutada y fundada la demanda sobre obligación de dar suma de dinero, con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurso se fundamenta en la inaplicación del Artículo mil doscientos cuarentitrés y mil doscientos cuarentinueve del Código Civil, aduciendo que se trata de una obligación inexigible por ilícita, ya que han demostrado el origen contractual de la letra, la que contiene interés por encima de la tasa máxima permitida en moneda nacional, que fija el Banco Central de Reserva para personas ajenas al Sistema Financiero, contiene una ilegal capitalización de interés y se ha dolarizado, por lo que esos acuerdos y la letra son nulos; y que al haber ellos deducido la nulidad formal de la letra de cambio, también se ha inaplicado el Artículo veintidós de la Ley de Títulos Valores; concedido el recurso a fojas doscientos ochentiséis, por Resolución de la Corte del diez de julio de mil novecientos noventaiocho se ha declarado procedente. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, como resulta del acompañado, el demandante fue procesado por el delito de usura en agravio de la Cooperativa demandada, ante el noveno Juzgado Penal del Chiclayo, secretario Tafur, en razón de los contratos de mutuo celebrados entre ellos, y a fojas ciento cincuenticuatro, con fecha quince de marzo de mil novecientos

noventicinco se expidió auto de archivamiento definitivo, que quedó consentido y que por tanto constituye cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el Artículo ciento treintinueve inciso trece de la Constitución Política del Estado. Segundo.- Que de las copias de fojas treinticinco a cuarentiocho, se advierte que la Cooperativa demandó ante el Tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, el quince de noviembre de mil novecientos noventicinco, la nulidad de los contratos de préstamos celebrados con el demandante, por contener intereses excesivos, y su capitalización. Tercero.- Que en consecuencia, la contradicción a la ejecución es una reiteración de los fundamentos de la denuncia penal y del proceso civil antes mencionado. Cuarto.- Que en el proceso penal primeramente aludido se ha establecido que no hay usura, por lo que el Artículo mil doscientos cuarentitrés del Código Civil es inaplicable. Quinto.- No habiéndose pactado la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación en forma original, resulta impertinente el Artículo mil doscientos cuarentinueve del mismo Código. Sexto.- Que conforme al Artículo setecientos del Código Procesal Civil la contradicción por causal de nulidad del título, sólo puede referirse al aspecto formal, de tal manera que el Artículo veintidós de la Ley de Títulos Valores, que autoriza deducir la nulidad del título valor obtenido en pago de préstamos con intereses usurarios, debe hacerse valer en vía de acción, por lo que tampoco se ha dado la inaplicación denunciada. 4. SENTENCIA: Estando a las conclusiones que anteceden, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Capote Limitada, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos setentitrés, su fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso.

3.15. LETRA DE CAMBIO “EN GARANTÍA”

Supongo que para algunos, éste es un tema polémico donde se pueden encontrar argumentos atendibles, de una parte, para admitir su perfecta validez como de otra, para negarle eficacia de tipo alguno.

El autor de esta tesis tiene la cabeza muy clara sobre el particular. En mi opinión, ni la Ley ni la Jurisprudencia pueden conferirle validez a una letra de cambio expedida, desde el inicio, desde su creación, desde el momento de su emisión o giro, para garantizar otra obligación. En efecto, recordemos la definición de Letra de Cambio en términos o expresión del autor de esta Tesis: Orden de pago que da un sujeto a otro para que éste pague a un tercero una determinada o determinable cantidad de dinero en una fecha u oportunidad definida en el mismo título. Cuando el tomador o beneficiario es el mismo girador, entonces ya no hay “orden de pago” ni por supuesto tres sujetos, ya que dos de ellos están confundidos en uno solo, me refiero al girador-tomador; acá sólo hay, cuando el girado acepta, una promesa de pago. La letra de cambio ha mutado su naturaleza jurídica, se comporta como pagaré, con sólo dos sujetos, nomás que el emitente o girador en tanto y en cuanto tomador, es el acreedor y el otro, el girado-aceptante, el deudor. El art. 123 de la Ley 27287 que establece que el girador responde siempre por la aceptación y el pago y que cualquier cláusula liberatoria de dichas responsabilidades se tiene por no puesta pierde total significación; resulta hasta incomprensible.

Si es orden de pago, es decir, si la letra de cambio se expresa y manifiesta en la forma de ley, doctrina y jurisprudencia uniforme, imposible, a mi juicio, conferirle validez a una letra de cambio “en garantía”. Pero del mismo modo, si muta su esencia y se comporta como promesa de pago, de toda forma sigue siendo una promesa incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero en fecha determinada y no veo cómo puede estar condicionado su pago a que la obligación garantizada no haya sido cumplida para darle eficacia a aquella y dejarla sin ejecutar si la obligación “garantizada” es satisfecha en la forma y el modo pactados.

En mi opinión la letra de cambio “en garantía” es un modo prostituido de uso de la letra de cambio. Es una forma coercitiva que utiliza el mercado para tener más apretado al deudor, al deudor incumplido, al deudor falto de seriedad, al deudor incorrecto o también puede ser al deudor que cae en desgracia. Es la conocida décimo tercera letra de cambio en un crédito a doce meses; o la séptima en un crédito a seis meses, y normalmente como título valor incompleto o como la denomina la doctrina, letra de cambio en blanco. Que puede

funcionar y funciona, y continuará funcionando, no me cabe la menor duda. Que se completa y se ejecuta, por cierto. Que en ocasiones se completa y para romper el cordón umbilical se endosa a tercero que aparece como “legitimado” y “de buena fe”, cierto. Lo que me temo es que si el girado aceptante anotara en la cambial “letra de cambio en garantía”, yo, juzgador, no la admitiría a trámite en demanda sustentada en relación cambiaria, sustentando la improcedencia en que la ley no regula este título valor del modo que se presenta y que por definición, tratándose de que la letra de cambio es ante todo una orden de pago incondicional para ser cancelada en oportunidad prevista en el documento, no aparece razonable admitir a trámite una cambial si además se ignora por el título valor mismo y en adición, si la obligación garantizada ha sido o no cancelada, siendo del caso que el proceso ejecutivo solamente procede por título que acredita una obligación líquida y exigible en forma objetiva y fehaciente.

Ahora bien, sustentemos la posición contraria. En efecto, si la doctrina uniforme admite la Letra de Cambio en “blanco” o incompleta, por qué no validar la letra de cambio cuyo importe no ha sido anotado y bajo la teoría del “mandato”, el aceptante ha encargado al tomador (que es girador –normalmente, o al último tenedor) que la complete o la llene del modo pactado, es decir, por la cantidad adeudada, es decir, si es que dicho aceptante no ha cumplido con pagar una o más de las otras doce u otras seis, en el ejemplo puesto en párrafo anterior. Claro que sí. Bajo este enfoque si encuentra asidero. En realidad, el aforisma jurídico que dice “el que puede lo más puede lo menos”, le sirve de sustento. Si puede llenar, en cumplimiento del pacto o de los acuerdos adoptados, el vencimiento, el nombre del tomador, el número de la cuenta bancaria para que vaya con débito o cargo a la misma, lugar y fecha de giro, etc. etc., por qué no puede usarla como “garantía” de otra obligación impaga. La posición es defendible, pero considero que si en la letra de cambio se anota “en garantía”, nuestros jueces no le darían cabida. Estaremos atentos a los pronunciamientos jurisprudenciales.

Artículo 120°.- Requisitos no esenciales

No tendrá validez como Letra de Cambio el documento que carezca de alguno de los requisitos indicados en el Artículo 119°, salvo en los siguientes casos y en los demás señalados en la ley:

- a) a falta de mención expresa, se considera girada la Letra de Cambio en el domicilio del girador;*
- b) A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del girado se considera como lugar de pago y al mismo tiempo como domicilio del girado; y, si no hubiera lugar designado junto al nombre del girado, será pagadera en el domicilio real del obligado principal;*
- c) Si en la Letra de Cambio se hubiera indicado más de un lugar para el pago, el tenedor puede presentarla en cualquiera de ellos, sea para su aceptación o pago;*
- d) En los casos de Letras de Cambio pagaderas conforme al Artículo 53°, no será necesario señalar lugar especial de pago; y*
- e) En los casos de Letras de Cambio giradas a la orden del mismo girador, el nombre de la persona a quien o a la orden quien de debe hacerse el pago, puede sustituirse por la cláusula “de mi mismo” u otra equivalente*

Salvo los casos especiales y de excepción que se señalan en este numeral, los mismos que constituyen los requisitos no-esenciales de la letra de cambio, acá se dispone que un documento que no incluya los requisitos formales que contiene el artículo anterior para la letra de cambio, carecerá de tal calidad, Entre éstos y a los cuales ya nos hemos referido de alguna forma al comentar el artículo anterior, tenemos los siguientes:

Puede prescindirse de señalar el “lugar” de giro de la letra de cambio; pues en ese caso, se presumirá que ella fue girada en el domicilio del girador. Al respecto, entre los requisitos formales, no se exige que dicha información, la del domicilio del girador conste en el documento, pero no hay prohibición alguna a que ello pueda ser anotado; por lo que la subsanación se logrará sólo conociendo el lugar del domicilio de aquel que haya podido ser señalado en el título-valor; no me parece idóneo a la materia cambiaria que el lugar del domicilio del girador pueda evidenciarse a través de la exhibición de su documento de identidad u otros medios de prueba que consten en documentos distintos a la cambial. Soy de opinión que el “formalismo” de los títulos valores y el principio de “literalidad” se conjugan para aconsejar lo antes dicho. El lugar de giro, es pues sin duda, un requisito no-esencial.

Ahora bien, siendo el girado la parte que ha sido designada por el girador como la persona que debe realizar el pago de la letra de cambio, resulta importante determinar el lugar en el que cumplirá con dicha obligación y también resulta vital establecer formas excepcionales de interpretar la improbable, pero siempre posible, ausencia de indicación de lugar de pago y también, ausencia de indicación de lugar junto al nombre del girado. De acuerdo a la doctrina generalizada y a nuestra legislación común y comercial, la regla es que las obligaciones se cumplen en el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario o que ello resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias del caso (ver art. 1239 C.C.). Así, en el caso de la letra de cambio, podrá señalarse en modo especial el lugar donde se verificará el pago, el mismo que puede ser inclusive en el domicilio del acreedor, como está también permitido hacerlo según nuestra legislación civil. Pero en el caso que no se hubiera señalado dicho lugar de pago en forma especial, opera la presunción legal sustentada en las reglas antes mencionadas, esto es, que la cambial será pagadera en el lugar que figura en el documento, junto al nombre del girado, que simultáneamente se considera como tal y como domicilio de éste. La ley se pone en el supuesto que en la letra de cambio no se consigne domicilio alguno como lugar de pago, ni figure domicilio alguno junto al nombre del girado; es decir, que según el texto del documento no sea posible determinar el lugar dónde debe ser pagada, proponiendo una solución, a mi modo de ver, absolutamente excepcional aun en ese supuesto, indicando que será pagadera en el domicilio real del obligado principal (del aceptante o del girador si es una cambial no aceptada), como una medida que evite que la cambial se perjudique por esa falta de información, y porque como es obvio, no puede pues faltar el lugar de pago, porque sin la indicación de él, no podríamos siquiera conocer qué juez sería el competente para conocer una acción procesal de cobro o de obligación de dar suma de dinero, constituyendo pues este requisito, uno no-esencial. En tal caso, dicho lugar de pago deberá ser determinado a través del documento de identidad del girado y otros medios de prueba y documentos distintos al título valor. Debe recordarse que la norma contenida en el D.S. N° 022-99-PCM, el que indicaba que para los fines de dirigir acciones legales a una persona natural cuyo domicilio no conste en el contrato o en el título valor, era válido hacerlo al domicilio registrado como

suyo en el RENIEC, según certificado que este organismo expida, ha sido derogado expresamente por la ley dictada en mayo del año 2000.

Por otro lado, cabe señalar varios lugares para fines del pago de una letra de cambio. Ello no invalida ni vicia el valor. En tal supuesto el tenedor tiene la potestad de presentar la letra de cambio, para su pago, en cualquiera de dichos lugares. Este mismo lugar para el pago, servirá también como lugar para su presentación a la aceptación, en la medida que no se hubiere designado lugar especial para ese fin, conforme lo veremos más adelante, al tratar la institución de la aceptación.

A modo de precisión, se señala que en el caso de letras de cambio que tengan la cláusula a que se refiere el art. 53, esto es, que su pago se hará mediante cargo en una cuenta en una empresa del sistema financiero nacional, bancaria o no, determinada al afecto en el mismo documento, la indicación del lugar de pago no es necesaria, por lo que las reglas que contiene la Ley al respecto ya no resultan aplicables a dichas cambiales. Ello no significa que haya alguna prohibición o impedimento para consignar el domicilio del girado; pues por el contrario, ello resulta recomendable para los casos en los que haya que dirigir requerimientos y acciones legales contra dicho deudor. En su caso, será juez competente el del lugar donde se ubique la Matriz, Sucursal, Oficina o Agencia indicada por el deudor, donde abrió y mantiene su cuenta en una ESN, bancaria o no.

A fin de dejar precisado que la indicación del nombre del beneficiario o persona “a quien” o “a la orden de quien” debe hacerse el pago es un requisito que es sustituible, se señala que tal mención puede ser reemplazada –pero no prescindirse– mediante el uso de cláusulas como de “mí mismo”, de “nosotros mismos”, del “propio girador”, u otras equivalentes. Esta precisión se explica por existir jurisprudencia que hace una interpretación extremadamente literal de este requisito, no admitiendo la validez de una cambial que en lugar del nombre del beneficiario señale algunas de las cláusulas antes sugeridas, a pesar de que resulta por demás evidente que la única persona que puede ser el beneficiario en cualquiera de esos casos es el propio girador, que es la parte que redacta, libra o pone en circulación este título valor; siendo además una práctica generalizada en nuestro medio recurrir al uso de dichas cláusulas para evitar

mentar nuevamente a la misma persona. Se busca pues con esta precisión una mayor flexibilidad de las disposiciones cambiarias, evitando exigencias extremas y lejanas a la realidad y a la práctica comercial en nuestro país.

3.16. EL ENDOSO EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 125.- Endoso de la Letra de Cambio

125.1 Toda Letra de Cambio, aunque no esté expresamente girada a la orden, es transmisible por endoso.

125.2 El endoso puede hacerse inclusive en favor del girado, haya aceptado o no la Letra de Cambio; o del girador; o de cualquier otra persona obligada. Todas estas personas, a su vez, pueden hacer nuevos endosos.

En la evolución de la letra de cambio, los estudiosos coinciden en que el “endoso” (en dorso) es el acontecimiento más importante, dado que hasta el s. XVII era nominativa y se giraba en favor de una determinada persona sin que ésta pueda transferirla a tercero por acto unilateral. Gracias al endoso fue posible emplear la letra de cambio como un instrumento de pago y lograr circular o transferir el valor representado por ella. Al inicio, constaba en el anverso y la transferencia sólo surtía los efectos de una cesión o mandato, hasta que logra su independencia y personalidad propia, constituyendo una transferencia pura y simple, con abstracción a las relaciones causales originarias, dejando constancia de ello en el reverso o dorso (en dorso) de lo que toma su actual denominación. Para salvar las limitaciones del endoso restringido sólo a una persona o exigencia de hacerlo cada vez y en cada ocasión, bajo fe notarial, se ideó el endoso en blanco; hasta que se logró el endoso ilimitado y validez escritural sin necesidad de fe notarial del acto de transferencia.

El endoso es la típica y ordinaria forma de transmisión de los títulos valores a la orden, así como la simple entrega o simple tradición lo es de los valores al portador y la cesión de créditos o de derechos el modo de transferir los valores nominativos, regla que sin embargo en ocasiones admite excepciones o formas de transferencias distintas.

A diferencia de otros títulos valores, la letra de cambio no puede ser girada sino A la Orden. No es admisible girarla al portador o en forma nominativa. Al respecto, como será comentado en su oportunidad, la Ley del Mercado de Valores peruana, al haber permitido el uso de letras de cambio y pagarés como valores mobiliarios, lo que en nuestro concepto es errado al desnaturalizar estos títulos valores en su concepción de valores individuales y no masivos, no tuvo otra solución que señalar que "... de estar representados por anotaciones en cuenta, deberán transferirse del modo previsto para los títulos nominativos...", es decir, no pudo optar por la solución de que sean emitidos como valores nominativos sino que mantuvo la naturaleza de valor A la Orden y dispuso que pese a ello, se transfieren "del modo previsto para los títulos nominativos". Esta disposición que contenía la referida Ley del Mercado de Valores, D.Leg. N° 861, en su art. 98, tercer párrafo, ha sido modificada por esta ley 27287 en la Segunda Disposición Modificatoria y dentro de las Disposiciones Complementarias.

Podemos concluir entonces, que toda letra de cambio sólo puede estar girada A la Orden. Por tanto, no es necesario que expresamente conste tal cláusula en el documento, como la Ley 16587 sí exigía con carácter de requisito esencial, por ejemplo, para el Vale A la Orden. Si este valor no tenía la cláusula A la Orden, carecía de validez como título valor. En el caso de la letra de cambio, tenga o no dicha cláusula A la Orden, debe considerarse como tal. Concluimos también que, en principio, la única forma de transferir la letra de cambio es mediante su endoso. Decimos en principio, porque es esa la forma natural y propia; pero podrían darse situaciones muy excepcionales de transmisión por simple entrega, como si se tratase de un valor al portador, cuando hubiera sido endosado en blanco, situación excepcional que comentaremos más adelante.

La posibilidad de transmitir la letra de cambio no tiene límite. Bien puede ser endosada a terceros ajenos al documento o, inclusive, a personas que hubieran intervenido anteriormente en ella, como el girador, el girado aceptante o no. En este último caso (girado no aceptante), su responsabilidad o derecho será como endosante o endosatario, respectivamente, desde que no expresó su voluntad de aceptar hacerse cargo de su pago. Así, los intervinientes de una letra de cambio, pueden volver a intervenir en calidad de endosantes y

endosatarios, asumiendo en cada oportunidad y según la sucesión de endosos y la calidad de su intervención, las responsabilidades y derechos que les corresponda. Así, un girador de una letra de cambio en la que hubieren participado varias personas, bien podría ejecutarla y exigir su pago en su calidad de último tenedor o endosatario a cualquiera de las personas que haya intervenido antes que él. Pero estas mismas personas podrían a su vez dirigir su acción de ulterior regreso contra dicho girador ejecutante, en su calidad no de endosatario, sino de girador y estar ubicado antes que el endosante que pagó en vía de regreso. Tal girador endosatario, tendrá pues simultáneamente los derechos como último endosatario y las obligaciones de girador de la cambial, y a su turno, sólo podrá exigir el cumplimiento de la obligación, finalmente, al aceptante y a sus garantes, avales o fiadores.

Definitivamente, es en el Libro Primero, arts. 34 a 47 que se estudia y revisa todo lo concerniente al endoso del título valor, ergo, todas las opciones de transferencias y endosos de la letra de cambio. Veamos sus aspectos destacables, remitiéndonos a su articulado. Empecemos por el art. 34 propiamente dicho:

Al igual que lo hemos hecho con temas anteriores, en esta ocasión haremos algunas reflexiones respecto a los arts. 34 a 47, del Libro Primero de esta Ley 27287, toda vez que allí se hallan las normas de detalle respecto al Endoso de los Títulos Valores, sus clases y cláusulas que se admiten. Veamos.

3.16.1 REQUISITOS

Artículo 34º :- El endoso

34.1. El endoso es la forma de transmisión de los títulos valores a la orden y debe constar en el reverso del título respectivo o en hoja adherida a él y reunir los siguientes requisitos:

- a) Nombre del endosatario;*
- b) Clase del endoso;*
- c) Fecha del endoso; y*
- d) Nombre, el número del documento oficial de identidad y firma del endosante.*

34.2. Si se omite el requisito señalado en el inciso a), se entenderá que se trata de un endoso en blanco.

34.3. Si se omite el requisito señalado en el inciso b), salvo disposición legal en contrario, se presumirá que el título valor ha sido transmitido en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe.

34.4. La omisión de la fecha del endoso, hace presumir que ha sido efectuado con posterioridad a la fecha que tuviera el endoso anterior.

34.5. El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del endosante, son requisitos esenciales del endoso, por lo que su inobservancia conlleva la ineficacia del endoso. El error en la consignación del documento oficial de identidad, no afectará la validez del endoso.

Según apunta la doctrina, el término endoso es de origen francés y deriva del uso comercial de escribir las sucesivas órdenes de transmisión del título en el dorso del mismo. Este uso comercial se reguló por primera vez en la Ordenanza francesa de 1683 como mero instrumento o modo de circulación de la letra de cambio; y posteriormente, lo reguló la Ordenanza de Bilbao de 1737. He ahí su origen.

El endoso es una institución jurídica cuya evolución ha facilitado enormemente la transmisión de los títulos valores a la orden. Su desarrollo se dio sobre la base de la protección del tercero adquirente de buena fe, que el ordenamiento jurídico entiende que debe ser amparado, no como un mero cesionario de unos derechos, sino como el adquirente de un bien mueble con el fin de proteger la circulación del título valor con una rapidez y una seguridad que la simple cesión del derecho no puede otorgar. La adquisición de buena fe del título, cumplidas las formalidades que se han de recoger en él, va a significar para el tercero poseedor de buena fe, la tutela propia del adquirente de las cosas muebles de modo tal que obtiene un derecho sobre el documento, aun en el caso de adquisición de una persona que no sea el verdadero titular.

El endoso es una declaración de voluntad unilateral, abstracta, autónoma, típica y formal por cual el endosante ordena al deudor que

cumpla con la prestación a favor del endosatario, permitiendo de esta forma la circulación del título.

Es unilateral porque para perfeccionarse no necesita la aceptación del deudor ni de los anteriores endosantes. Es abstracto en la medida que es independiente de la causa que genera la transmisión del título. Es autónoma por cuanto se adquiere el título en vía originaria, es decir, que el endosatario es inmune a las excepciones personales que podría oponerle el deudor al endosante. Es típica porque es el único mecanismo caracterizante de la transmisión de los títulos valores a la orden que produce efectos cartulares y es formal porque debe cumplir con ciertos requisitos que la ley impone⁵¹.

Como afirma **Lisandro PEÑA NOSSA**⁵², el endoso es un escrito accesorio e inseparable del título valor, por medio del cual el acreedor cambiario transfiere el dominio del mismo a un tercero, lo entrega para su cobro o lo da en garantía de una obligación. Por medio del endoso –continúa **PEÑA NOSSA**–, se sustituye al acreedor cambiario por un tercero, siendo que en estos casos, éste se convierte en propietario del título (endoso en propiedad) o adquiere, entre otras, la facultad para el cobro (endoso en procuración) o, las facultades propias del acreedor prendario (endoso en garantía).

Doctrinariamente se conocen las siguientes clases de endosos:

1) Endoso en blanco.

En esta modalidad, el endosante estampa únicamente su firma. La sola firma del endosante es elemento suficiente como signo de legitimación plena. El lugar del endoso en blanco y su indicación de endoso deben estar plenamente determinados, pues se corre el riesgo de ser confundida la firma de endoso en blanco con una firma de avalista. Este tipo de endoso hace circular al título “como si fuese al portador”, pero ello no significa que se trata de un título con tal ley de circulación, pues en el momento de ejercer

⁵¹ SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Op. cit., Página 88.

⁵² PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 47 y 48.

los derechos respectivos el tenedor deberá completar el título anotando su nombre. Su ventaja es que los tenedores intermedios se liberan de cualquier vínculo, solidario o no, con el último tenedor, debiendo este sólo perseguir a los obligados anteriores cuyos nombres y firmas obren en el cuerpo del título.

2) Endoso al portador.

En este caso, no solamente va la firma del endosante, sino también la expresión “al portador”, pero este endoso produce los mismos efectos de un endoso en blanco.

3) Endoso impropio.

Es aquel que se produce posteriormente al vencimiento del título valor, pero por antinomia si se hace antes del vencimiento el endoso es propio. Pero ¿cuál es el efecto o la importancia de hacerlo antes o después del vencimiento del título, antes o después del protesto o de la formalidad sustitutoria, y cuál es el caso en la hipótesis de título valor con cláusula sin protesto?. Estriba no tanto en la existencia, sino en los efectos, pues el endoso posterior a la fecha del vencimiento del título produce los mismos efectos que un endoso anterior; pero realizado después del protesto o forma sustitutoria no produce otros efectos que el de la cesión de derechos, siendo la principal consecuencia que cualquier obligado cambiario puede oponer al endosatario impropio las excepciones personales que hubiera podido oponerle el endosante impropio, lo cual no ocurre si el endoso se hace antes del vencimiento.

4) Endoso judicial o remedio.

Es aquel que se produce cuando una persona por medio de un proceso civil justifica que se le ha transferido un título a la orden por medio diverso del endoso y el juez deja constancia de la referida transferencia en hoja adherida al

título. La constancia puesta por el juez en el título se tiene, entonces, como endoso.

5) Endoso sin responsabilidad.

Se predica cuando una persona (endosante) transfiere un título a la orden, mediante endoso, con una cláusula especial que diga “sin responsabilidad”, o cualquier otra equivalente, con el fin de liberarse de la obligación cambiaria respecto de tenedores futuros.

6) Endoso en retorno.

Existe cuando el título valor a la orden vuelve a uno de los endosantes anteriores. Si el endosatario en retorno coincide con el girador, aceptante u otorgante, según el caso, la obligación cambiaria se extingue de pleno derecho presentando una figura similar a la consolidación a que se refiere el art. 1300 del C.C..

7) Endoso bancario.

Se distinguen dos formas: el que se hace de un banco a otro y por el que se faculta a éstos a realizar endosos únicamente con su sello, sin necesitar la firma del representante del mismo; el otro caso simplemente es el reconocimiento que hace la ley de los que en los usos mercantiles se conoce con el nombre de sello en canje, que es una facultad legal que se da a los bancos en caso de que un cuentacorrentista suyo le entreguen títulos valores para ser abonados en su cuenta.

8) Endoso en propiedad o endoso pleno.

Aquel en el cual el endosante transfiere todos los derechos inherentes al título, es decir, no solamente los principales sino también los accesorios y, además, la facultad para que el endosatario ejerza dichos derechos.

9) Endoso en procuración.

Mediante cláusula especial expresa, el endosante transfiere al endosatario facultades específicas determinadas por la ley. La cláusula expresa quiere decir que al pie de la firma del endosante debe ir el enunciado de una fórmula como “en procuración”, “al cobro” o cualquiera otra similar. Según el concepto, se transfieren al endosatario facultades especiales de características legales, tales como son las posibilidades por parte de este último de presentar el título valor para la aceptación, cobrarlo judicial o extrajudicialmente; endosarlo en procuración y protestarlo. Pero a diferencia de la anterior forma de endoso, no puede disponer del mismo, ni tampoco puede endosar en garantía o entregarlo en prenda.

10) Endoso en garantía.

Es aplicable cuando mediante cláusula expresa se constituye un derecho de prenda sobre el título valor en favor de un tercero. La cláusula expresa debe llevar algún enunciado, como puede ser “en garantía”, “en prenda” o cualquier otro equivalente.

A diferencia del art. 33 de la ALTV, fuente del actual art. 34, la norma puntualiza que el endoso es la forma de transmisión de los títulos valores a la orden.

Los cambios introducidos en cuanto a sus requisitos, son los siguientes:

- La ALTV decía que el endoso debía constar en el título respectivo o en hoja adherida, lo cual podría inducir a error, pues al no existir precisión bien podía formalizarse en el anverso del título valor. Ahora, en cambio, se anota que debe constar “en el reverso” del título respectivo o en hoja adherida.
- Se mantiene como requisito el que deben consignarse los siguientes datos: nombre del endosatario, clase de endoso,

nombre y firma del endosante. La nueva ley agrega: Fecha del endoso y número del documento oficial de identidad del endosante. Apréciase que el art. 33 de la Ley N° 16587 no citaba a la fecha como requisito del endoso, sin embargo, su art. 44 *in fine* decía: “salvo prueba en contrario, el endoso sin fecha se considera hecho antes que venza el plazo para el protesto. Incoherente no?.

- La NLTV acota que la omisión del nombre del endosatario, produce los efectos de un endoso en blanco.
- Se mantiene la disposición y/o presunción legal de que si no se indica la clase de endoso, se considera hecha la transmisión en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. Sin embargo, el art. 169 de la LdeB establece una excepción al disponer que cuando un título valor u otro susceptible de negociación por endoso, excepto el cheque, se encuentre en poder de una empresa del sistema financiero, el endoso puesto en él se presume hecho “en garantía”, a menos que medie estipulación en contrario.
- Al introducirse la fecha como requisito que debe consignarse en el endoso, si ésta faltare, se presumirá que ha sido efectuado con posterioridad a la fecha que tuviera el endoso anterior.
- Del mismo modo como se consideró en la ALTV, la firma del endosante es un requisito esencial en el endoso. Sin embargo, la nueva ley –como se anotó- considera no sólo a la firma del endosante, sino también a su nombre y su número de documento oficial de identidad; si faltaren éstos, acarrearía la ineficacia del endoso. Aun más, se recalca que el error en la consignación del número del documento oficial de identidad no afectará la validez del endoso.

Dentro de ese orden de ideas, los efectos del endoso pleno, están dirigidos a transferir la propiedad del título; es decir, produce una función legitimadora. El endosatario que posee el título se considera como poseedor legítimo del documento cuando justifique su

derecho por una serie no interrumpida de endosos, aun cuando el último endoso esté en blanco. Mediante la comprobación de esta cadena no interrumpida de endosos, se ofrece una seguridad tanto a favor del acreedor como del deudor de que nos hallamos ante el tenedor legítimo de un título valor.

Otro de los efectos del endoso pleno, es que produce la transmisión de todos los derechos resultantes del título valor, lo que significa que el endosatario adquiere, no sólo el derecho cambiario principal dirigido al cobro, si no los derechos accesorios vinculados a él, como pueden ser las garantías personales o reales que resulten del título.

El endoso produce además, un efecto de garantía. El endosante responde en vía de regreso frente a los tenedores posteriores por la aceptación y el pago. Dicha consecuencia, viene impuesta por la ley en cuanto a que el endoso tiene la naturaleza de una declaración constitutiva de una obligación cambiaria a cargo del endosante.

De otro lado, conviene en este punto establecer algunas precisiones distintivas entre el endoso y la cesión de derechos.

Conforme vimos al comentar el art. 27 de esta ley, la cesión de derechos es un acto de disposición a través del cual el cedente transfiere al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor que se ha obligado a transferir por un título distinto.

“Por la cesión se transmite al cesionario el crédito inalterablemente; es decir, con reserva de las excepciones personales que podría oponer el deudor al cedente; de modo que, se cumple el principio *nemo plus in alium transfere potest quam ipse habet*. Este principio es ajeno a la materia cartular, porque en una letra de cambio, por ejemplo, el endosatario es inmune a las excepciones personales que tuviera el aceptante con respecto al primer tenedor de la cambial. Si el deudor, que no tiene conocimiento de la cesión, paga al cedente, se liberará de su obligación, salvo que el cesionario demuestre que él sabía de la prestación de derecho. En el ámbito de los títulos valores, el deudor que paga a cualquiera de los intervinientes en la relación cartular, sin que tenga el título, no se liberará de la obligación de cumplir con la prestación, puesto que sólo debe cumplir con su deuda

al que le presenta el título valor y no a los anteriores transferentes del mismo.⁵³

“Cuando se cede un crédito, le son oponibles al acreedor cesionario todas las excepciones que el deudor cedido tenga contra el acreedor cedente; y si el crédito ha sido objeto de varias cesiones el deudor cedido puede oponer al último acreedor, cualesquiera o todas las excepciones anteriores. Esto no acontece en los títulos valores cambiarios. Al nuevo acreedor que lo es por virtud de un endoso en propiedad, no puede oponérsele las excepciones personales que tuviere contra los que le antecedieron en la titularidad del crédito. Sólo se pueden deducir contra el acreedor que exige el pago, las excepciones que tuvieron el carácter de comunes o reales y las que le fueren personales al demandante y al demandado.

Con el endoso pleno se mejora la condición jurídica del nuevo acreedor, a quien se le ha transmitido un crédito libre de excepciones personales como por ejemplo, la excepción que deriva de la causa, o razón de ser de la creación del título valor.

El endoso es la forma peculiar de transmisión de los títulos valores cambiarios, por el cual todos los derechos pasan al endosatario. Importa enajenación, venta del derecho de propiedad del título.

En la cesión de créditos se transfiere una prestación activa de un acreedor a otro acreedor; y sólo se transfiere la prestación misma, importando poco si ella habrá o no de ser pagada, salvo que se hubiere pactado que el acreedor cedente responde de la solvencia del deudor cedido. Además, si fuere cesión, al cesionario le son oponibles por el deudor, todas las excepciones y medios de defensa que pudiese haberle opuesto al cedente.

El endoso no es una cesión. El endosatario no es un sucesor, un causahabiente del endosante, sino que se constituye en un acreedor originario, directo e inmediato. Las excepciones que pueden ser deducidas contra el endosante, no son susceptibles de serle opuestas al endosatario, a no ser que se trate de excepciones reales y objetivas, o que existiere dolo en la transmisión del título valor, por ejemplo, si el endosatario tuvo el propósito de privar al deudor de medios de defensa válidos contra el endosante, pero ineficaces contra el endosatario, porque esos medios importaban excepciones

⁵³ SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Op. cit., Páginas 74 a 76.

personales y no excepciones reales o comunes. No basta que el endosatario al adquirir la letra conociera la existencia de determinadas excepciones personales susceptibles de ser invocadas por el deudor. Es necesario que el endosatario al adquirir la letra de cambio proceda dolosamente.

El endoso tiene también como efecto que el endosante no sólo garantiza la obligación al endosatario, sino que se transforma en codeudor solidario, junto con los que le preceden, y no sólo frente al endosatario, sino a favor de todo ulterior propietario de la letra de cambio, siempre que el endoso sea extendido en tiempo hábil.

El endoso puede ser al portador o en blanco, pero la letra misma no puede girarse al portador.

El endoso pleno confiere el derecho de propiedad del título valor cambiario, siempre que la cadena de endosos no presente una o más soluciones de continuidad.

Si el endoso es en propiedad, basta para que se rechace la reivindicación, exhibir el título que acredite su tenencia, a no ser que se le pruebe que era de mala fe al tiempo de adquirir la letra; no después. No enervaría tampoco el derecho de propiedad sobre la letra del endosatario, que se probara que procedió con culpa grave o inexcusable, pese a que en derecho civil la culpa inexcusable se equipara al dolo.⁵⁴

Por nuestra parte, destacamos las siguientes distinciones y/o similitudes:

- El endoso es un acto jurídico unilateral; la cesión es un contrato que implica un acto de disposición.
- El endoso es un acto formal que debe constar en el título o en hoja adherida a él, perfeccionándose con la entrega del mismo; la cesión también es un acto formal, debe constar por escrito bajo sanción de nulidad.
- Por el endoso se transfiere el título que incorpora un derecho patrimonial. Además que por él, puede conferirse una

⁵⁴ CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. *Cualquier acreedor cambiario puede testar los endosos en los títulos valores*. En: Revista del foro, Año LXVIII, Número 2, Colegio de Abogados de Lima, Julio-Diciembre de 1981, Páginas 51 a 56.

representación o constituirse una garantía. Por la cesión, el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de un deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto.

- El endoso es irrevocable, sólo puede ser testado en casos excepcionales. La cesión puede ser rescindida o resuelta, en su caso, conforme a las normas del derecho común.
- El endoso es incondicional, es decir, puro y simple y comprende la totalidad del título de crédito ya que el endoso parcial no surte efectos jurídicos. La cesión puede ser condicional y parcial.

El artículo 14 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré establece que "el endoso debe escribirse en la misma letra o en una hoja de papel debidamente unida a la letra (prolongación) y debe ser firmado por el endosante. Puede el endosante omitir la designación del beneficiario o limitarse a poner su firma (endoso en blanco); en este último caso el endoso sólo será válido si hubiese sido puesto al dorso de la letra o sobre su prolongación".

Al referirnos a la función de legitimación de los títulos valores, se ha señalado que cada uno de ellos tiene su propia ley de circulación, que es la que regula la transmisión cartular del derecho incorporado. En modo alguno, ello impide que el documento se transfiera de acuerdo con las normas del derecho común, tales como la sucesión universal, la cesión de créditos, etc.

Es importante tener en cuenta que cualquiera que la forma de transmisión del título, cartular o derecho común, el documento como tal no deja de tener su imprescindible función de legitimación; aún en los casos en que el documento circule por aplicación de las reglas civiles, es indispensable contar con él para el ejercicio de los derechos derivados de la cesión del título en razón de la naturaleza constitutiva del instrumento, señala el profesor **Ignacio A. ESCUTI** (h.). Señala **FERRI** que el documento es necesario tanto para la demostración de la investidura formal del que transmitió el derecho mediante las formas del derecho común, como para el ejercicio de los

derechos emergentes de la cesión de crédito: El título es necesario como documento de legitimación. **PAVONE LA ROSA**, con todo acierto, expresa que el título valor transmitido mediante una cesión de créditos conserva su función como medio insustituible de legitimación y que en consecuencia, el cesionario no puede exigir el pago del documento si no está en condiciones de exhibirlo.

Entre la transmisión cartular y la materializada mediante la cesión de créditos, existen diferencias importantes que se manifiestan en cuanto a los requisitos a cumplir, por ejemplo, en la necesidad de notificar al deudor cedido, pero lo esencial radica en la posición que asume el adquirente del documento a quien se le pueden oponer las defensas que se tenían contra el transmitente, es decir que en tal hipótesis no juega la autonomía; pero en ambos casos, el documento cumple una función de legitimación insoslayable: tanto el endosatario como el cesionario necesitan del documento para hacer valer sus derechos emergentes. **PAVONE LA ROSA** explica que en la notificación el deudor cedido es superflua a los fines de resolver el conflicto entre varios adquirentes, pues cuando el título valor es entregado a uno de los cesionarios, éste tiene la certeza de que no puede ser cobrado por ningún otro. También señala que si el documento no lo entrega el cedente al cesionario, de nada vale la notificación de la cesión, porque la misma no hace oponible la adquisición contra la persona a la que se le hubiere transferido con posterioridad. Quede constancia, que la entrega del documento, como deber jurídico del cedente, no transforma el contrato de cesión de crédito que es consensual, en real. El contrato de cesión se perfecciona por el solo consentimiento entre el cedente y el cesionario. Como enseña **ESCUTI**, la entrega del título no hace al perfeccionamiento del contrato de cesión de crédito, sino que constituye la prestación debida en la etapa de cumplimiento del contrato. Hay que recordar que el cesionario pasa a ocupar la posición que tenía el cedente; en efecto, les son oponibles a aquél las defensas que se tenían con el cedente, salvo la de compensación. Ciertamente el cesionario recibe un derecho al cual les son oponibles los medios de defensa que podía haber planteado el deudor cedido al cedente, pero sin duda, si éste le tenía un adeudo a dicho precitado deudor cedido y al plantearle la demanda éste podía deducirle la excepción de compensación, esta defensa no puede alcanzarle

respecto de un tercero adquirente de un crédito y quien ciertamente no es deudor del “deudor cedido”.

Enseña **ESCUTI** que el endoso es un acto escrito, unilateral e incondicional, formalmente accesorio, que tiene por objeto la transmisión del título valor y la legitimación de su poseedor para el ejercicio de los derechos cartulares. El endoso requiere además, la tradición real y efectiva del título al endosatario. El derecho común señala que hay tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra voluntariamente la recibiese.

Conocemos que el endoso cumple tres funciones: función de transmisión; función de legitimación y función de garantía. En virtud al endoso, el endosatario adquiere los derechos emergentes del título, con la característica de “autonomía”, es decir, como derecho originario. La legitimación surge directamente de su mención en el texto del documento. Para la jurisprudencia peruana, si bien el endoso en blanco es una figura perfectamente válida para transmitir el título, el adquirente por endoso en blanco tiene que legitimarse anotando su nombre, para demandar ejecutivamente y por la relación cambiaria, a todos los firmantes del documento. Quede constancia que los endosos falsos o puestos por incapaces o con el nombre de personas inexistentes, carecen de efecto interruptivo respecto a la legitimación del tenedor; para ello basta que se mantenga la apariencia de regularidad.

Para la ley y jurisprudencia argentina, si una persona, por pérdida, extravío o robo hubiera perdido la posesión del título, el nuevo portador que justifique su derecho mediante una serie ininterrumpida de endosos, no está obligado a desprenderse del documento, sino cuando lo hubiera adquirido de mala fe o hubiera incurrido en culpa grave: se considera mala fe, cuando al recibirlo conoce la desposesión sufrida por el propietario del documento; la culpa grave se produce cuando el tenedor, al momento de adquirir el título no actúa con cierta diligencia para determinar si su endosante es el titular del derecho cambiario. La mala fe del poseedor no constituye ningún impedimento para que el deudor, al vencimiento, realice el pago, siempre que ignore que el presentante del título es poseedor de mala fe, explica el profesor **Oswaldo GOMEZ LEO**; solamente debe verificar la continuidad regular de los endosos. Como forma de facilitar

y asegurar la circulación de los títulos valores, los usos comerciales y después la leyes, impusieron la responsabilidad personal de cada endosante, y esta es la función de garantía. Quien recibe un título cambiario, normalmente lo hace en consideración a la responsabilidad y solvencia de quién se lo transmite, que transfiere un documento que contiene la promesa de pago efectuada por un tercero a quien el adquirente, por lo común, no conoce.

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** explica varios supuestos de firmas supuestas o falsas en un título valor, subrayando el caso de los endosos. Así por ejemplo explica que si la firma falsa es la que debería corresponder al girado, el portador legitimado tendrá que presentar la letra a quien está indicado como girado en el título, y si, como es natural, por no corresponderle la firma, no le paga la letra, deberá levantar protesto, único modo de hacer efectivas las acciones regresivas contra los demás firmantes del título, en esta NLTV, ver Arts. 72.1 a) y 91.1 a). Los casos de firmas supuestas o falsas en los endosos son los más comunes, pues generalmente ocurren cuando el portador legitimado pierde la letra y quien la encuentra, con un proceder ilícito, registra un endoso *falso* pues lo extiende como si fuera el endosatario perdidoso, con el fin de transmitirla a él mismo o a un tercero.

También puede, además, para dificultar una eventual y ulterior investigación del hecho, extender un nuevo endoso, en este caso *supuesto*, que irá generalmente en blanco, para poder transmitir el documento con la simple entrega manual, sin dejar rastros documentales de su intervención en la circulación del título. De este modo, quien recibe la letra, cumpliendo regular, extrínseca y aparentemente con la ley de circulación del título a la orden, sin saber si es robada o perdida, la adquiere *a non domino*, pues queda investido de la legitimación activa a que se refiere el Art. 16 de esta NLTV. En tanto que la firma falsa o supuesta del avalado no invalida la obligación de garantía asumida por el avalista, la firma o falsa o supuesta de éste lo deja fuera del nexo cambiario, sin que se le puede asignar responsabilidad alguna.

El distinguido profesor argentino que hemos señalado en el punto anterior distingue los endosos con efectos plenos de los endosos con efectos restringidos y los explica diciendo que los

primeros "son los que habilitan a quien recibe el título, en virtud de ese acto cambiario, a ejercer todos los derechos resultantes del documento (efecto legitimante). Transmiten la propiedad del documento, y con ella, la titularidad del derecho cartáseo que en él se documenta (efecto traslativo) y constituyen al endosante en garante de la aceptación y el pago (efecto vinculante). Tales endosos pueden ser subclasificados, según los requisitos formales bajo los cuales se los otorgue, en: endoso nominal; endoso al portador; y, endoso en blanco.

Los endosos con efectos restringidos son aquellos que incluyen algunas de la cláusulas previstas y permitidas por la ley que limitan o, en su caso, suprimen los efectos plenos a los cuales nos hemos referido. Tales cláusulas son: (1) sin garantía (Art. 39.2 de nuestra NLTV); (2) prohibido el endoso (Art. 43.1 de nuestra NLTV); (3) en procuración (Art. 41 de nuestra NLTV); y (4) en prenda (Art. 42 de nuestra NLTV)".

A continuación transcribimos algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia para su respectivo análisis. Presentamos luego nuestra opinión sobre el particular. Veamos:

(1) Exp. CAS N° 469-99 Lima. "... En los títulos valores susceptibles de negociación por endoso, que se encuentren en poder de una empresa del Sistema Financiero, se presume que el endoso puesto en él fue hecho en garantía..."

Lima, veintiuno de abril de mil novecientos noventinueve. VISTOS: a que de lo actuado aparece que don Humberto Leguía Puente ha cumplido con todos los requisitos formales para la admisión del Recurso de Casación; y, ATENDIENDO: 1) Que en el escrito de fojas sesenta y ocho se denuncia la inaplicación de los Artículos treintitrés, treintisiete y cuarenticinco de la Ley de Títulos Valores, ya que dichas normas deben tenerse en cuenta para establecer la validez de los títulos valores, cuando éstos han entrado en circulación, que es el caso de la cambial materia de autos, ya que ésta fue endosada en blanco por la ejecutante al Banco Internacional del Perú –Interbank-, entidad financiera a cuya petición fue protestada la referida letra de cambio, y posteriormente el mismo Banco consignó en su reverso la frase "devuelto a nuestro endosante sin responsabilidad para este

Banco”, lo cual no constituye un endoso válido de acuerdo a lo establecido por las normas acotadas, ya que en él no consta ni el nombre del endosatario ni la clase de endoso, no pudiéndose presumir que se trate de un endoso en propiedad debido al tenor mismo de la referida anotación que implica una devolución mas no un endoso en propiedad, además, debe tenerse en cuenta que el Artículo ciento sesentinueve de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros establece que en los títulos valores susceptibles de negociación por endoso, que se encuentren en poder de una empresa del Sistema Financiero, se presume que el endoso puesto en él fue hecho en garantía, de lo que se deduce que la accionante endosó en garantía la cambial materia de autos, a favor del aludido Banco, en consecuencia, dicha entidad financiera no la podía endosar en propiedad a favor de la actora, apreciándose que resulta evidente que las instancias de mérito también han inaplicado la última norma mencionada. Por lo tanto no se ha justificado el derecho de la demandante con una serie ininterrumpida de endosos, lo que implicaba que la demanda debió ser declarada improcedente; 2) Que, el mencionado cargo no fue denunciado por el ejecutado al plantear la contradicción contra el mandato ejecutivo, por lo tanto ha precluido su posibilidad de denunciarlo a través del Recurso de Casación; 3) Que, no habiéndose cumplido con lo establecido por el numeral dos punto dos del inciso segundo del Artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil y trescientos noventidós del acotado: declararon IMPROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto por don Humberto Leguía Puente; en los seguidos por la Empresa Fábrica de Aguas Gaseosas Santa Teresa Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de dinero; CONDENARON al recurrente al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso.

3.16.2. INCONDICIONALIDAD Y ENDOSO PARCIAL

Artículo 35º.- Incondicionalidad del endoso

35.1. El endoso no puede sujetarse a modalidad alguna. Todo plazo, condición y modo se consideran no puestos, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 131º.

35.2. El endoso parcial se tiene por no hecho y no surte efectos jurídicos.

El endoso es una declaración que no debe sujetarse ni a plazo o condición alguna, debe ser pura y simple. En tal sentido, si se pone alguna condición, no se anula la declaración cambiaria, sino que la condición se considera como no escrita.

“La incondicionalidad del título debe ser entendido como la incompatibilidad con toda condición que altere su vigencia plena y su eventual revocación al cumplimiento de las prestaciones originarias establecidas, por cuanto la relación cartular es inmutable, caracterizado por su certeza y seguridad jurídica garantizando la circulación del derecho incorporado en el título valor, cumpliendo con las exigencias del mercado.”⁵⁵

El carácter incondicional del endoso se mantiene también con la nueva ley cambiaria.

La ALTV simplemente decía que el endoso debe ser puro y simple y que toda condición se consideraba no puesta.

Ahora, de modo más explícito, la ley señala que el endoso no puede sujetarse a modalidad alguna; y las enumera: “Todo plazo, condición y modo se considerarán no puestos.” Sin embargo, se plantea una excepción: el tenedor perderá la acción cambiaria contra el endosante o garante que hizo la indicación del plazo para su presentación a la aceptación y contra los que posteriormente suscribieron la letra de cambio, si ésta no es presentada en el plazo señalado por cualquiera de los endosantes o garantes (art. 131.2).

Asimismo, la figura del endoso parcial, en el sentido de estar limitado a una parte del importe del documento o título valor, se considera ineficaz.

Ello es una consecuencia de que el documento constituye una unidad indivisible. Los derechos emergentes del título valor son inseparables de este documento y sus sucesivas transferencias se realizan únicamente mediante el traspaso del documento⁵⁶.

⁵⁵ SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Op. cit., Páginas 92 y 93.

⁵⁶ MONTOYA MANFREDI, citado por SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Op. cit., Página 93.

Sobre el particular, **León POSSE ARBOLEDA**⁵⁷ anota que es evidente que si el título valor se convirtió, por virtud de la ficción del legislador, en una cosa mueble, sería ilógico pensar que es susceptible de transferencia parcial.

A diferencia de la ALTV que señalaba que el endoso parcial no surtía efectos jurídicos, la actual dispone –además– que éste se tiene por no hecho.

Osvaldo R. GOMEZ LEO explica que "el endoso es un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, formalmente accesorio y sustancialmente autónomo del libramiento de la letra, que se comporta como negocio abstracto, mediante el cual se transmite la propiedad del documento y, con ello, la titularidad del derecho emergente de él, habilitando al endosatario para ejercer todos los derechos resultantes del título, a la vez que el endosante asume la obligación de garantía, de aceptación y de pago de la letra".

Los principios dogmáticos que informan al endoso como acto cambiario, han sido expresamente adoptados por esta NLTV 27287 al disponer lo siguiente:

1. El endoso es puro y simple y toda condición a la cual se lo pretenda someter se consideran no puestos (Art. 35.1 de nuestra NLTV);
2. Con la firma del endosante, el endoso produce el efecto vinculante de garantía solidaria (Art. 39.1 de nuestra NLTV). Sin embargo, teniendo en cuenta la condición de cosa mueble del título, en endoso debe ser seguido de la tradición o entrega del título (Art. 26.1 de esta NLTV). Es decir, la transmisión por vía de endoso es un acto único, compuesto lógicamente y cronológicamente por dos estadios: a) la declaración cartásea del *tradens* que se documenta en el título. Y b) el acto real de entrega del título al *assipiens*, que por natural implicancia importa la desposesión del *tradens*
3. El endoso es irrevocable, pues en la normativa cambiaria no hay medio jurídico previsto para suprimir o revocar, en

⁵⁷ POSEE ARBOLEDA, León. Op. cit., Páginas 70 y 71.

sentido propio, los efectos del endoso una vez que el título ha salido de manos del endosante.

4. Es un acto unitario, integral, total o completo. Si el endosante quisiera transmitir sólo una parte del derecho cambiario incorporado al título e introdujera una cláusula en ese sentido, ésta se tendría por no hecha y no surtiría efectos jurídicos, a tenor de lo dispuesto en el Art. 35.2 bajo comentario. Quede claro que en esta situación el endoso debe reputarse total, pleno y completo; es el endoso parcial, el que se tiene por no hecho y el que no surte efectos jurídicos; por tanto, en este caso, al endosatario debe refutársele titular del derecho cartaseo íntegro, con todas las características de un endosatario pleno.

El endoso es formalmente accesorio y sustancialmente autónomo del acto de emisión del título valor, puesto que diferencia claramente de los modos de transmisión del derecho común, dado que, desde el punto de vista pasivo, es independiente de los demás actos cambiarios documentos en el título y desde el punto de vista activo, le otorga un derecho originario (autónomo), no derivado, al *assipiens*. En cuanto a su accesoriedad formal, significa que sólo se puede extender un endoso en un título valor ya creado, presuponiendo la existencia de un título valor a la orden.

Una parte de la doctrina italiana suele asimilar el endoso a un nuevo giro cambiario, pero hay que insistir en que no puede ni debe identificárselo con éste, aunque pueda producir efectos análogos. Veamos: a) la emisión de un título valor es fundante y primigenio en tanto que el endoso es dependiente y conexo; y, b) desde el punto de vista sustancial, si bien ambos actos cambiarios son autónomos e independientes, la emisión es garantía esencial de la cual el girador nunca puede liberarse (Art. 123) y si pretendiera hacerlo, la cláusula inserta en ese sentido se consideraría no puesta; el endoso es sólo una garantía natural, pues el endosante puede liberarse de su condición de obligado cambiario solidario del pago del título valor, mediante la respectiva cláusula exonerativa prevista especialmente en el Art. 39.2.

3.16.3. ENDOSO EN BLANCO Y AL PORTADOR

Artículo 36º.- Endoso en blanco y al portador

36.1. En el endoso en blanco, cualquier tenedor podrá llenarlo con su nombre o con el de un tercero, o transmitir el título valor por tradición sin llenar el endoso.

36.2. El endosatario que ejercite los derechos derivados el título valor endosado en blanco deberá consignar, además de su nombre, el número de su documento oficial de identidad.

36.3. El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco.

El presente artículo regula lo concerniente al endoso en blanco, el endoso al portador y los efectos que de éstos se derivan. Ante todo, resulta pertinente diferenciar ambas figuras.

En un endoso en blanco, se omite señalar el nombre del endosatario, sólo lleva la firma del endosante; como afirma PEÑA NOSSA⁵⁸, ésta es el elemento suficiente como signo de legitimación plena.

El inciso primero de este art. 36 señala que en el endoso en blanco, cualquier tenedor podrá llenarlo con su nombre o con el de un tercero, o transmitir el título por tradición sin llenar el endoso.

Esta forma de endoso, dice **César VIVANTE**⁵⁹ no sólo permite al portador que transmite el título la posibilidad de permanecer fuera de la operación cambiaria, sino que le ofrece muchas otras ventajas como darlo en prenda y recobrarlo antes del vencimiento sin que de ello quede ninguna huella; presentar el título o enviarlo como remesa en cuenta corriente cuando todavía no se sabe si será admitido; que el tenedor legítimo libere a algunos de los endosantes borrando o testando su firma sin perder la legitimidad en su adquisición, puesto que él podrá figurar como endosatario en el último endoso en blanco no testado. En suma, permite a la persona que tiene el título, cuyo

⁵⁸ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 49.

⁵⁹ Citado por ASTUDILLO URSUA, Pedro. Op. cit., Página 154.

nombre queda en blanco, transmitir el documento sin asumir ninguna responsabilidad para su pago.

Por su parte, el endoso al portador es el que contiene la cláusula al portador.

Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de una y otra figura?

A diferencia de la anterior ley, que regulaba de modo separado a ambas figuras (arts. 35 y 36), la actual las reúne en una sola norma; aunque reiterando los efectos.

Sobre el particular, **Luis MUÑOZ**⁶⁰, destaca que el endoso en blanco produce los mismos efectos del endoso pleno, mas no individualiza al endosatario, pudiendo faltarle además, otras menciones que suele contener o no el endoso pleno, como las palabras “páguese a la orden de” o la fecha y lugar del endoso. Uno de los efectos de esta clase de endoso es que legitima al endosatario siendo que la tenencia del título valor permite hacer efectiva su circulación, como si se tratara de un título al portador. El endoso en blanco permite al endosante exonerarse de responsabilidad sin consignar la cláusula liberatoria que desprestigia al título; promueve las negociaciones eludiendo controversias sobre los requisitos del endoso completo; reduce los gastos del protesto, etc.

La ley actual exige que tratándose de un endoso en blanco, el endosatario que pretenda exigir los derechos derivados del título valor, debe consignar su nombre y el número de su documento oficial de identidad; exigencia que no requería la ALTV.

En cuanto al endoso al portador, éste produce los mismos efectos del endoso en blanco.

El profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO** explica que quien recibe la cambial endosada en blanco, es decir, con la sola firma del transmitente, tiene las siguientes posibilidades:

⁶⁰ MUÑOZ, Luis. Op. cit. Página 325.

1. "Puede quedarse con la letra hasta su vencimiento, y en su condición de portador legitimado, por la serie ininterrumpida de endosos, que ella tiene como documentación de sus sucesivas transmisiones, presentarla al cobro. El endoso en blanco, en tal caso, produce efectos plenos". Para nosotros, en el Perú, la jurisprudencia se había manifestado uniforme en el sentido de que para ejercitar los derechos cambiarios derivados de un endoso en blanco, era imprescindible legitimarse vía la anotación del nombre del titular en el documento, con lo cual se respetaba también, el principio de literalidad. Recogiendo la uniforme jurisprudencia que la Comisión Redactora compartía plenamente, se incluyó el Art. 36.2 seguido al endoso en blanco, refiriendo que el endosatario que en este caso, ejerce los derechos derivados del título valor, deberá consignar, además de su nombre, el número de su documento oficial de identidad. Para nosotros, en el Perú, el endoso en blanco, es un modo absolutamente legítimo de circulación del título valor, es decir, para recibirlo y transmitirlo, pero quien exija el derecho en la oportunidad correspondiente, es decir, quien lo presente a cobro, quien solicite su protesto o lo ejecute extrajudicial o judicialmente, deberá legitimarse en la forma explicada líneas arriba.
2. "Puede llenar el endoso en blanco con su propio nombre y transformarlo, de este modo, en un endoso nominal en su favor. En tal caso, si desea volver a transmitir el título, necesariamente tendrá que endosarlo en cualquiera de las tres formas, nominal, en blanco o al portador, quedando obligado solidariamente al pago de la letra". En el Perú, sólo existen dos formas de endoso: nominal y en blanco. Está claro que con arreglo al Art. 36.3, el endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco; por tanto, el endosatario al portador deberá seguir las mismas reglas a que se refieren los Arts. 36.1 y 36.2
3. "Puede llenar el endoso en blanco con el nombre de otra persona. En este caso, la transmisión del título queda legalizada con su sola entrega a la persona en cuyo favor se ha llenado el endoso, quedando el *tradens* al margen del

nexo cambiario, pues no ha firmado la letra. Es decir, que en la serie de endosos documentada en el título se encadenan, sin solución de continuidad, quien endosó en blanco y el endosatario, con cuyo nombre se llenó ese endoso, que es a partir de allí el portador legitimado, y que podrá cobrar la letra de cambio o volverla a endosar".

4. "Quien recibe la cambial con un endoso puede también endosarle nuevamente en blanco o a nombre de otra persona, siendo en este caso, garante solidario".
5. "Puede, finalmente, transmitir la letra, que recibió con un endoso en blanco, sin llenar éste y sin endosarla nuevamente, quedando al margen del nexo cambiario, pues al no firmar la letra no queda obligado cambiariamente".

Transcribimos a continuación algunas ejecutorias de nuestras tribunales y presentamos nuestra opinión sobre el particular. Veamos:

(1) Exp. Nº CAS 1057-98 Lima. "... Un título valor con un endoso en blanco tiene efectos de título al portador cuando se trata de su circulación, mas no cuando se trata de su cobro en cuyo caso tienen (sic) los efectos de un título a la orden, por ello es que es necesario la identificación del endosatario que pretende ejecutarlo".

Lima, veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La Sala Civil de la Corte Suprema de la República, en la causa vista en audiencia pública de fecha veintitrés de noviembre del presente año, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por la Central de Cooperativas Té Huyro Limitada número cuarentitrés contra la sentencia de vista de fojas ciento sesentisiete, su fecha quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada de fojas ciento cuarenta, su fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y siete, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y ocho ha estimado procedente el recurso sólo por las siguientes causales: a) interpretación errónea del Artículo treinticinco de la Ley de Títulos Valores, por cuanto los

juzgadores han considerado equivocadamente que el requisito de llenar al dorso de la cambial el nombre y consignar la firma del endosatario es una potestad y no una obligación, cuando tales requisitos resultan esenciales para la validez de una letra de cambio con endoso en blanco; y b) inaplicación del numeral siete punto dos del Artículo veintisiete del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas, que establece que es competencia de la Asamblea General Extraordinaria la aprobación de la emisión de obligaciones, lo que no ha ocurrido en el caso de autos respecto a la cambial materia de autos. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el Artículo treinticinco de la Ley de Títulos Valores posibilita que el endoso puede realizarse en blanco, con la sola firma del endosante, al presentarse este supuesto el endosatario tiene cuatro posibilidades: llenar con su nombre el endoso, llenarlo con el nombre de un tercero, proceder a endosar nuevamente el título valor o transmitirlo físicamente a otra persona sin llenar el endoso y sin poner nuevo endoso. Segundo.- Que, en el caso que el endosatario en blanco decida ejecutar o cobrar, en este caso, una letra de cambio, debe justificar su derecho a través de endosos con tracto sucesivo que termine con la designación e individualización del que pretende ejecutarla, siendo del mismo parecer el tratadista nacional Ulises Montoya Manfredi cuando señala que deberá llenarse con el nombre del endosatario el espacio en blanco para poder exigir el pago. Un título valor con una endoso en blanco tiene efectos de título al portador cuando se trata de su circulación, mas no cuando se trata de su cobro en cuyo caso tienen los efectos de un título a la orden, por ello es que es necesario la identificación del endosatario que pretende ejecutarlo. Tercero.- Que, en el caso de autos, las instancias de mérito han concluido en que la cambial puesta a cobro reúne todos los requisitos esenciales para su validez y consecuente ejecución, sin embargo, en la cambial obrante a fojas uno se aprecia que el girador y tomador en la empresa Inversiones Bienes y Servicios Sociedad Anónima “IBYSSA” y el girado es la Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Limitada número cuarentitrés, dicho título a su vencimiento fue debidamente protestado y posteriormente endosado en blanco por la empresa giradora, sucediendo que el demandante don Angel Tenorio Dávila demanda la ejecución de dicho documento cartular, sin embargo, acciona sin haber consignado su nombre y firma en el referido documento, es decir, sin justificar su derecho, lo que implica que la Sala al no exigir tal requisito ha interpretado en forma errónea el

Artículo treinticinco de la Ley de Títulos Valores, resultando de aplicación lo dispuesto en los Artículos seiscientos noventa y seiscientos noventa y siete del Código Adjetivo. Cuarto.- Que, el numeral siete punto dos del Artículo veintisiete del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas establece que compete a la Asamblea General de la Cooperativa autorizar a propuesta del Consejo de Administración la emisión de obligaciones; la recurrente sostiene que por normativa interna de la Cooperativa la aceptación de una letra de cambio requería de la firma mancomunada del Gerente General y de un Administrador, sin embargo, el señor Claudet, quien firma la cambial como gerente general de la recurrente, ya no ostentaba tal cargo en el momento que sufragó dicho título valor y además no existió acuerdo de asamblea para aceptar la obligación contenida en el título valor materia de autos; de lo que se aprecia que el presente agravio no es de naturaleza sustantiva por cuanto no requiere del control de legalidad y jurisdiccional sobre una norma de derecho material, sino que es un agravio relacionado a materia probatoria, que no es objeto de la causal invocada, y que además, el análisis de los medios probatorios actuados excede las facultades de la Sala Casatoria, por lo que esta denuncia no resulta amparable. 4. SENTENCIA: Que por lo expuesto y en aplicación de lo dispuesto por el inciso primero del Artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Central de Cooperativas Agrarias Té Huyro Limitada número cuarentitrés, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento sesentisiete, su fecha quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, y ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA: REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento cuarenta, su fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y siete y REFORMÁNDOLA declararon IMPROCEDENTE la demanda de fojas tres.

3.16.4 CLAUSULA NO NEGOCIABLE

Artículo 43º.- Cláusula No Negociable

43.1. El emisor o cualquier tenedor puede insertar en el título valor a la orden, la cláusula "no negociable", "intransferible", "no a la orden" u otra equivalente, la misma que surtirá efectos desde la fecha de su anotación en el título.

43.2. Salvo disposición en contrario de la ley, el título valor que contenga la cláusula señalada en el párrafo anterior sólo es transmisible en la forma y con los efectos de la cesión de derechos.

La doctrina italiana coincide en afirmar que la inclusión en el título valor de la cláusula “no a la orden” u otra equivalente, permite que el documento sólo sea transferible en la forma y con los efectos de la cesión.

En similares términos, opina **GARRIGUES**, para quien la cláusula a la orden negativa impide la transmisión por endoso.

En el derecho español, esta cláusula es innecesaria porque basta que la letra no esté expedida a la orden o, por analogía, que el endoso no sea a la orden, para que la letra no pueda endosarse. Si a pesar de la prohibición legal la letra se endosa, el efecto de este endoso es el de simple cesión y, en consecuencia, los endosatarios posteriores, en su calidad de cesionarios, estarán expuestos a las excepciones oponibles al primer endosante. En suma, este endoso obliga cambiariamente al endosante sólo frente a su endosatario.

El art. 43 de la actual ley regula la posibilidad de inclusión de la cláusula intransferible o no negociable en un título valor a la orden, así como los efectos que ésta conlleva. La inclusión no acarrea la intransferibilidad del título valor. Significa mas bien que quien la estampó no contrae la obligación cartular que deriva del título valor, no hay responsabilidad cartular; quedando limitados los efectos de la transmisión a los de la cesión de derechos en cuanto a dicha persona se refiere.

Cualquier título valor, puede llevar inserto la cláusula intransferible o no negociable y a pesar de ello, ser susceptibles de transmitirse vía cesión de derechos. En cambio, en el caso de los cheques intransferibles, la inserción de dicha cláusula imposibilita en forma total y absoluta su transmisión.

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** explica como formas anómalas del endoso o circulación impropia, aquellas estudiadas en doctrina que evidentemente no producen pues los efectos propios del endoso o en su caso, no son realmente endosos. Ellas son:

1. Endoso condicional.- Si el endoso debe ser puro y simple, no se lo puede someter a condición alguna". Así lo sostiene nuestro Art. 35.1 de esta NLTV; e igualmente ocurriría con el endoso parcial el cual se tiene por no hecho y no surte efectos jurídicos, según el Art. 35.2.
2. Endoso falso.- Es un típico caso de suposición (caso del Art. 8.1 de esta NLTV) pues quien firma los hace falsamente, en reemplazo del sujeto que debería firmar, sea el tomador o beneficiario en el primer endoso o el endosatario de éste en los sucesivos. Rige, sin embargo, el principio de la autonomía e independencia de los actos cambiarios, pues los demás extendidos en la letra no quedan invalidados por ello.
3. Endoso fiduciario.- Es un endoso normal para los terceros de buena fe que reciben la letra, pues a su respecto no se diferencia en las consecuencias cambiarias. Se los suele utilizar cuando un sujeto, por diversas razones, no desea aparecer cobrando o ejecutando la cambial; en tal caso, se endosa ésta en favor de determinada persona, con efectos plenos, estableciendo en un contra documento los verdaderos alcances del endoso dado en la letra. En tal caso, el endosatario viene a ser un mandatario encubierto del endosante, que sólo endosó la letra a los efectos de que aquél la cobre o ejecute.
4. Endoso fraudulento.- En este tipo de endoso se produce, no ya una falsedad material, sino ideológica, por parte de quien dolosamente, sin facultades para hacerlo endosa una letra, como ocurre en el caso de quien recibe una cambial con un endoso en blanco para gestionar su cobro y abusando de su aparente calidad de dueño, transmite la letra a terceros sin ninguna limitación. En tal caso, si quien recibe la letra es de buena fe, su derecho es indiscutible, pues no lo perjudica el fraude o simulación pergeñado por su endosante, ya que en el ámbito del sistema cambiario la apariencia prevalece sobre la realidad y la forma sobre el contenido, en aras de tutelar suficientemente los valores de certeza, rapidez y seguridad en la adquisición, transmisión y realización del crédito.
5. Endoso por instrumento por separado.- Por definición, el endoso como tal, es un acto cambiario que sólo puede ser extendido en el título valor; toda transmisión que se haga en instrumento por separado sólo tendrá los efectos de una

cesión de derechos. El Art. 34.1 de esta NLTV prescribe que el endoso es la forma de transmisión de los títulos valores a la orden "y debe constar en el reverso del título respectivo o en hoja adherida a él" y reunir los requisitos citados en los literales a), b), c) y d) del mismo artículo.

6. Endoso simulado.- La simulación supone, entre las partes contratantes, un acuerdo que contradice la naturaleza unilateral del acto cambiario del endoso. La simulación es inoponible al tercero de buena fe que recibe el título valor del beneficiario del endoso, intrínsecamente simulado, pues a su respecto el endoso producirá sus efectos normales. Aunque el endoso simulado y el endoso fiduciario deben ser distinguidos, porque entre ellos media la misma diferencia que hay entre la simulación y la confianza (**MESSINEO**), ambos tienen en común el hecho de que presentan sólo la apariencia de endoso, porque intrínsecamente responden a otra finalidad, aunque tal acuerdo, sólo tiene relevancia entre las partes.
7. Endoso tachado.- Al endoso borrado, tachado (testado) o cancelado se lo considera no escrito (como no hecho). Ello significa que la regularidad de la serie ininterrumpida, relativa a la legitimación activa del poseedor de una letra de cambio que ha circulado, no se ve alterada por la existencia de algunos de esos supuestos, siempre que formal y extrínsecamente se sucedan las firmas, apareciendo cada endosante como el endosatario del endoso anterior. En otras palabras: si con la cancelación o tachado (testado) de un endoso el endosatario del endoso anterior a ese endoso cancelado no aparece como si fuera el endosante del siguiente, la cadena se interrumpe, porque tal circunstancia formal denota una irregularidad extrínseca, a la cual la norma del Art. 45 de nuestra NLTV, así como también a del Art. 46 in fine, no le prestan su amparo. Es decir, el tenedor del título no es reputado portador legitimado por el sistema cambiario.

3.16.5. ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO

Artículo 44º.- Endoso posterior al vencimiento

44.1. El endoso posterior al vencimiento y antes de su protesto o formalidad sustitutoria produce los mismos efectos que un endoso anterior al vencimiento.

44.2. El endoso hecho después del protesto o formalidad sustitutoria, o del plazo para hacerlo, no produce otros efectos que los de la cesión de derechos, sin perjudicar la acción cambiaria del título valor, si éste reúne los requisitos para ello.

44.3. Salvo prueba en contrario, el endoso sin fecha se considera que ha sido hecho antes de su protesto o formalidad sustitutoria, o del plazo para hacerlo.

44.4. En los casos de títulos valores no sujetos a protesto o a formalidad sustitutoria, el endoso posterior a su vencimiento no produce otros efectos que los de la cesión de derechos, sin perjudicar la acción cambiaria del título valor. El endoso sin fecha de estos títulos, se considera hecho antes de su vencimiento, salvo prueba en contrario.

El endoso posterior al vencimiento del título, produce los mismos efectos que un endoso anterior. El endoso sin fecha, según señala **MUÑOZ**⁶¹, ya sea completo o en blanco, se presume efectuado o celebrado antes de expirar el plazo del protesto, salvo prueba en contrario. Esta presunción *iuris tantum*, infringe otra presunción, la de que en la duda debe estarse a lo favorable al deudor. Como el endoso después del vencimiento constituye un hecho anormal (porque dicho acto debe efectuarse durante la vida del título), corresponde probar a quien lo afirma que el endoso ha sido posterior al vencimiento.

El título valor que se endosa después del vencimiento, ya sea antes de que expire el plazo para llevar a cabo el protesto, o después de vencido el plazo para protestarla; produce los efectos de la cesión de derechos, de manera que el endosatario adquiere los derechos derivados y no originarios, y en consecuencia le son oponibles por el deudor las excepciones que tuviera contra el cedente.

⁶¹ MUÑOZ, Luis. Op. cit., Página 346.

En el caso de títulos valores no sujetos a protesto o a formalidad sustitutoria, el efecto es el mismo en caso de endoso. En ambos casos, no se perjudica la acción cambiaria del título valor.

Transcribimos a continuación algunas ejecutorias y presentamos nuestra opinión al respecto:

(1) Exp. N° 1034-98. Lima. “.. No resultan atendibles las alegaciones del obligado en el sentido que el endoso (posterior al protesto) no ha surtido efectos respecto de él, toda vez que no ha aceptado la cesión, ni se le ha comunicado la misma desde que no puede confundirse `efectos de la cesión con exigencias para su formalización´...”

Lima, ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; Interviniendo como Vocal Ponente la señora Hidalgo Morán; sin compartir los fundamentos esgrimidos en las resoluciones impugnadas y CONSIDERANDO: Primero.- Que son objeto de impugnación la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y la sentencia; Segundo.- Que en cuanto a la primera, se tiene que la legitimidad para obrar del demandante se halla plenamente acreditada con el endoso en propiedad que reúne los requisitos previstos en el artículo treintitrés de la Ley de Títulos Valores; Tercero.- Que respecto de la sentencia se tiene que constituye el argumento central para resolver la controversia lo dispuesto en el artículo cuarenticuatro de la Ley de Títulos Valores, en el sentido que dispone que el endoso posterior al protesto, no produce otros efectos que los de la cesión de crédito; Cuarto.- Que careciendo de fecha el endoso resulta aplicable la presunción, como fluye de las instrumentales consistentes en el acta de protesto de fojas treintiuno y la carta notarial de fojas treinticinco sustentadas además con lo expuesto por el representante de la demandante al absolver la contradicción; Sexto.- Que en consecuencia, estimándose al endoso como una cesión, el deudor puede oponer al endosatario todas las excepciones derivadas de sus relaciones personales con el endosante-cedente y además las propias que tenga con él, en razón de que como cesionario el demandante carga con todas las obligaciones de su cedente; Séptimo.- Que por ende, no resultan atendibles las alegaciones del obligado en el sentido que en endoso no ha surtido efectos respecto de él, toda vez que no ha aceptado la cesión, ni se le ha comunicado la misma desde que no puede

confundirse “efectos de la cesión con exigencias para su formalización”; Octavo.- Que el demandado no aporta elemento alguno que acredite que el monto de su adeudo se limite a menos de quinientos nuevos soles como argumenta; por lo que CONFIRMARON la resolución dictada en la Audiencia Unica obrante en el acta de fojas cuarenticuatro a cuarentiséis, su fecha veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y siete, que declara Infundada la excepción; con lo demás que contiene y CONFIRMARON la sentencia de fojas sesenticuatro a sesenticinco, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que declara Infundada la contradicción de fojas veintitrés y Fundada la demanda de fojas ocho a trece y Ordena la ejecución hasta que don Abadías Walter Velásquez Padilla y don Ricardo Soria Péndola paguen solidariamente a la Caja de Pensiones Policial Militar la suma de doce mil seiscientos nuevos soles, más intereses pactado costas y costos.

(2) CAS 520-97/Lima. “... El endoso póstumo no constituye una cesión de créditos, sino que solamente produce los efectos de ésta, y que se traduce en permitir al girador oponerse al cumplimiento de la obligación contenida en el cheque, en base no sólo de las excepciones personales, sino también invocando las excepciones referidas a los anteriores tenedores del título valor en mención, lo que no implica que el endosatario pierda el derecho de accionar ejecutivamente el cumplimiento de su crédito”.

Lima, siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Club Universitario de Deportes contra la sentencia de vista de fojas cien, su fecha catorce de febrero ochenta, su fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y seis, declaró fundada la demanda sobre pago de dólares, con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y siete ha estimado procedente el recurso por la causal relativa a la inaplicación de los Artículos cuarenticuatro y ciento sesenticinco de la Ley de Títulos Valores por cuanto al haberse efectuado el endoso del cheque materia de autos un año después de haberse girado y protestado, sus efectos se han limitado a la cesión de créditos, consecuentemente el ejecutado puede oponer al ejecutante las acciones y excepciones personales correspondientes al endosante del

referido título valor, debiéndose aclarar que por error material se consignó en la precitada Ejecutoria como norma aludida la contenida en el Artículo cuarentidós de la Ley de Títulos Valores, cuando la norma invocada por el recurrente es la que respecta al Artículo cuarenticuatro de la acotada ley, error que no invalida la Ejecutoria de calificación. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la comprobación de no pago por falta de fondos en el cheque materia de autos se efectuó el día veintidós de diciembre de mil novecientos noventicuatro y del propio tenor del escrito de demanda y de la carta legalizada consularmente de fojas treintiocho vuelta, se aprecia que el tenedor del mismo, esto es don Jorge Amado Nunes Isfrán, endosó dicho título valor al accionante con posterioridad a la citada diligencia. Segundo.- Que, los Artículos cuarenticuatro y ciento sesentitrés de la Ley de Títulos Valores específicamente establecen que le endoso posterior realizado con posterioridad a la diligencia de protesto o a la comprobación equivalente, sólo produce los efectos de la cesión de créditos. Tercero.- Que, el endoso póstumo no constituye una cesión de créditos, sino que solamente produce los efectos de ésta, y que se traduce en permitir al girador oponerse al cumplimiento de la obligación contenida en el cheque, en base no sólo de las excepciones personales, sino también invocando las excepciones referidas a los anteriores tenedores del título valor en mención, lo que no implica que el endosatario pierda el derecho de accionar ejecutivamente el cumplimiento de su crédito. Cuarto.- Que, de lo expuesto en el considerando precedente es evidente que el Club Universitario de Deportes sí podía oponer al ejecutante la afirmación de haber cancelado la obligación a favor de don Jorge Amado Nunes Isfrán, quien fue la persona que endosó el cheque materia de autos al accionante y quien tuvo la relación causal con el club ejecutado, que dio origen a la obligación contenida en el título valor materia de autos. Quinto.- Que los juzgadores de las instancias inferiores al haber inaplicado la norma en mención, no sólo han dejado de merituar los medios probatorios aportados por el club demandado sino que además han declarado erróneamente fundada la tacha planteada por el accionante contra dichos instrumentos. Sexto.- Que siendo pertinente la aplicación de las normas aludidas por el recurrente, corresponde a la instancia superior evaluar los referidos documentos, por no ser ésta una función que competa a la Sala Casatoria. 4. SENTENCIA: Por tales consideraciones y, con lo previsto por el Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, se declara

FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el Club Universitario de Deportes y, en consecuencia CASAR la sentencia de vista de fojas cien, su fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete; ORDENARON que la Quinta Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, expida nuevo fallo con arreglo a los considerando de la presente resolución.

3.16.6. LEGITIMIDAD EN LA TENENCIA Y OBLIGACION DE QUIEN PAGA

Artículo 45º.- Legitimidad en la tenencia

45.1. El poseedor de un título valor transmisible por endoso es considerado como tenedor legítimo, si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos.

45.2. Los endosos testados se consideran como no hechos.

45.3. Cuando un endoso en blanco es seguido por otro endoso, se considera que el firmante de este último ha adquirido el título valor por efecto del endoso en blanco.

45.4. El tenedor que justifica su derecho en la forma indicada en el párrafo anterior no puede ser privado del título valor, sino cuando se demuestre que lo hubiere adquirido de mala fe.

El art. 45 legitima al tenedor de un título valor transmisible por endoso, si justifica o prueba su derecho con una serie continua de endosos. La doctrina entiende por serie continua de endosos, aquella que a partir del primer endosante, los endosos se continúan de manera que cada endosatario sea el endosante posterior hasta el presentador, que debe ser el último endosatario.

Si en la serie continua de endosos hay alguno en blanco o si todos están en blanco, cualquiera puede llenar, con el nombre que desee, cada endoso; por consiguiente, está en facultad de indicar como endosatario a aquel que figura en la serie como posterior endosante.

La norma actual, cambia el término “portador legítimo” por “tenedor legítimo”. La forma como se clasifican los títulos valores según su modo de circulación, como sabemos, es la de “a la orden”, “nominativos” y “al portador”. Los primeros circulan típicamente por

endoso; los segundos, por cesión; y los últimos por entrega o traditio. En este orden de ideas, el legislador ha preferido, al aprobar este texto legal, utilizar invariablemente la expresión “tenedor” para referirse a aquella persona que recibe el título valor por endoso o por cesión, para no confundirlo con el “portador” que más bien es el sujeto que recibe y entrega voluntariamente un documento cartular pero de un título circulatorio que ordinariamente lleva la cláusula al portador y/o que por mandamiento de la ley tiene esa naturaleza jurídica la misma que no puede ser variada aún se le agregue el nombre de una persona determinada aparentando titularidad. También se ha juzgado conveniente retirar del primer párrafo del artículo 45 de la ALTV, la expresión final que decía “..., aún cuando el último endoso sea en blanco”, pues confundía y daba lugar a considerar que con base a este último texto, se podía acudir al Poder Judicial a interponer una demanda en tanto endosatario en blanco. La jurisprudencia ha sido uniforme al precisar que si bien el endoso en blanco a que se refiere el artículo 35 es una forma perfectamente válida para recibir y transmitir un título valor a la orden, llegado el caso del vencimiento del título valor, la solicitud de protesto y la iniciación de la acción judicial, el poseedor del documento y titular del derecho debe cumplir con anotar su nombre en el precitado endoso en blanco, para legitimarse y cumplir con el principio de literalidad. Es por esta razón entonces que intencionalmente se ha retirado la expresión final del primer párrafo del artículo 45 pues colisionaba este texto, en su interpretación literal, con el sentido acertado de la jurisprudencia de nuestro país. Apréciase, por lo demás, que el resto del párrafo se mantiene prácticamente intacto, excepto que en la ALTV se dice que al tenedor se le considera portador legítimo; en cambio en la NLTV se dice que al poseedor se le considera un tenedor legítimo. Como se ha explicado antes, el legislador ha buscado unicidad y coherencia en el uso del lenguajes cambiario de modo tal que al tenedor (el que tiene el título) no sea considerado portador legítimo sino que y más bien, retiremos toda cita de portador y más bien se exprese que al poseedor (el que lo tiene bajo su posesión) se le considere tenedor legítimo

El segundo inciso establece que los endosos testados se consideran como no hechos. La anterior ley decía “no escritos”. Los endosos testados son los rehusados, de ahí que la justificación de esta disposición radica en que es el único camino a seguir por aquél a quien se le remitiese un título valor endosado a su nombre y no lo

quisiera recibir; pues en este caso, tendrá que testar el endoso y devolver el título.

Sin duda, mejor expresión que “no escritos” es que se consideren como “no hechos”; pero en todo caso, más allá del vocablo utilizado, lo principal es mantener el principio y el respeto a la opción de testar un endoso de modo tal que un endosatario que rehuse serlo no se vea obligado a devolver el título, con nuevo endoso, que sería la forma exigida por la ley, pero que terminaría comprometiendo solidariamente a aquél. Quede claro entonces, que se mantiene vigente y con todos sus efectos jurídicos válidos la opción de testar los endosos y en el orden legal previsto ello se reputará como no hechos.

Cuando un endoso en blanco seguido de otro, el cual no necesariamente es en blanco, nuestra ley considera que el firmante del último endoso ha adquirido el título valor por efecto del endoso en blanco. Igual disposición se contemplaba en la derogada ley.

La serie de endosos no puede verse interrumpida porque en el título figuren uno o más endosos en blanco, que pueden ser llenados por el tenedor, pero siempre que el nombre del firmante del endoso en blanco sea el mismo que está indicado como endosatario en el documento endosado.

Finalmente, la ley indica que el tenedor que justifique su derecho con la serie ininterrumpida de endosos, no puede ser privado del título valor, a menos que se demuestre que su adquisición fue efectuada de mala fe.

El caso de adquisición de mala fe se presenta cuando el endosatario fuese conocedor de que el endosante no era legítimo tenedor del título a la orden, puesto que éste, sustraído a un anterior legítimo tenedor o extraviado por él, había sido puesto de nuevo en circulación por quien lo había encontrado, o por el ladrón, o por persona conocedora del extravío o del hurto; y que, para ponerlo de nuevo en circulación, no podía hacer otra cosa que estampar en él un endoso falso. Es indiferente, frente al conocimiento del endosatario, que el falso endoso haya sido puesto por un anterior poseedor (endosante remoto) o por el endosante directo.

V. Transcribimos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia, para su correspondiente análisis. Veamos:

(1) Exp. N° 53254-97. Lima. "...El tenedor de un título-valor transferible por endoso, es considerado como portador legítimo, no pudiendo ser privado del mismo sino cuando lo hubiese adquirido de mal fe..."

Lima, quince de mayo de mil novecientos noventiocho .- VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; por los propio fundamentos de la resolución recurrida; y CONSIDERANDO además; PRIMERO: que, el artículo diecisiete de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, determina que el título-valor apareja ejecución si reúne los requisitos exigidos por dicha ley y el Código Adjetivo; SEGUNDO: que, en el caso de autos, la letra de cambio corriente a fojas dos, reúne todos los requisitos que para su validez previenen los artículos sesentiuno y sesentitrés del propio texto legal; TERCERO: que, de otro lado, el tenedor de un título-valor transferible por endoso, es considerado como portador legítimo, no pudiendo ser privado del mismo sino cuando lo hubiere adquirido de mala fe; CUARTO: que, a mayor abundamiento, el ejecutado no puede deducir las excepciones fundadas en sus relaciones personales con los otros obligados anteriormente firmantes del título a menos que el ejecutante, al adquirirlo, hubiere obrado a sabiendas en daño de aquél; y QUINTO: que, estando a lo dispuesto por los artículos veinte y cuarenticinco de la Ley de Títulos-Valores; y artículos seiscientos ochentinueve, seiscientos noventa, seiscientos noventitrés, inciso primero, y setecientos dos del Código Procesal Civil; CONFIRMARON la sentencia apelada corriente de fojas cincuentitrés a cincuentiséis, de fecha catorce de enero último, que declara infundada la contradicción corriente de fojas quince a diecisiete, subsanada a fojas veinte; y fundada la demanda de fojas tres a ocho; y, en consecuencia, ordena llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado COFEMAR de Daniel Márquez Moscoso cumpla con pagar al ejecutante Mario Velásquez Figueroa la suma de seis mil novecientos diez dólares americanos con setenta centavos, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha y lugar de pago; más intereses demandados, con costas y costos del proceso.

(2.) Exp. N° 595-98 Lima. “... Quien debió efectuar el endoso al demandante es don (...) como persona natural, empero quien lo ha hecho es la empresa (...), representada por su Gerente, lo que determina que el endoso de esta letra de cambio adolezca de nulidad pues ha sido hecho por quien no estaba facultada legalmente para hacerlo, desde que la persona jurídica tiene existencia distinta a la de sus miembros...”

Lima, treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; interviniendo como vocal ponente al doctora Cabello Arce; por sus fundamentos pertinentes; y, CONSIDERANDO ADEMÁS: PRIMERO: que la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante fue resuelta en la audiencia única cuya acta aparece a fojas cincuentidós, oportunidad en la que debió ser impugnada tal resolución si alguna de las partes no la encontraba ajustada a ley, conforme a lo dispuesto por el artículo trescientos setentiséis concordado con el artículo trescientos setentisiete del Código Procesal Civil, por lo que toda alegación referente a ella y no hecha valer en su oportunidad resulta extemporánea; SEGUNDO: que en cuanto al endoso de la letra de cambio de fojas dos, éste aparece realizado por Ramón Morales Vásquez en su calidad de Titular-Gerente de la empresa Representaciones Comerciales E.I.R.L., siendo que dicha cambial se encuentra girada para ser pagada a la orden de don Ramón Morales Vásquez pero como persona natural, a diferencia de las otras dos letras de cambio puestas a cobro en las que el tomador es precisamente dicha empresa; TERCERO: en virtud a ello, y a que esta clase de acciones es eminentemente formal, quien debió efectuar el endoso al demandante es don Ramón Morales Vásquez como persona natural, empero quien lo ha hecho es la empresa Representaciones Comerciales E.I.R.L. representada por su Gerente, lo que determina que el endoso de esta letra de cambio adolezca de nulidad pues ha sido hecho por quien no estaba facultada legalmente para hacerlo, desde que la persona jurídica tiene existencia distinta a la de sus miembros; CUARTO: que en cuanto a las otras cambiales de fojas tres a cuatro, se aprecia de sus textos que reúnen los requisitos establecidos por el artículo sesentiuero y sesentidós de la ley dieciséis mil quinientos ochentisiete, por lo que en aplicación de lo dispuesto por los artículos diecisiete y cuarenticinco de la misma ley; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas cincuentiocho su fecha cuatro de noviembre de mil novecientos

noventisiete en cuanto declara infundada la contradicción y fundada la demanda respecto a las letras de cambio de fojas tres y cuatro REVOCARON la misma resolución en cuanto se refiera a la letra de cambio de fojas dos, extremo que declararon Improcedente, en consecuencia se ORDENA que la demandada (representada por su junta liquidadora) cumpla con pagar a la demandante la suma de cuarentitrés mil doscientos treinta nuevos soles con dieciséis centavos de nuevo sol más intereses legales, costas y costos, dejando a salvo el derecho del demandante respecto a la letra de fojas dos para que lo haga valer con arreglo a ley.

(3) Exp. N° 526-98 Lima. "... Si bien el artículo veinte de la ley de títulos valores dieciséis mil quinientos ochentisiete permite al ejecutado oponer al tenedor del título, las excepciones que deriven de sus relaciones personales con éste; sin embargo, habiendo entrado en circulación la cambial puesta a cobro el emplazado no puede deducir tales excepciones, a menos que el ejecutante al adquirir el título hubiere obrado a sabiendas en daño de aquél..."

Lima, dieciséis de abril de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; Interviniendo como Vocal Ponente el señor Díaz Vallejos; por sus fundamentos pertinentes, y CONSIDERANDO ADEMÁS: Primero.- Que la letra de cambio es un documento autónomo, independiente de la relación jurídica que la haya podido originar, siendo esencialmente formal que no sólo presenta un crédito sino que constituye el título y el derecho mismo, por lo que se le puede efectivizar sin más que a su presentación; Segundo.- Que si bien el artículo veinte de la ley de títulos valores dieciséis mil quinientos ochentisiete permite al ejecutado oponer al tenedor del título, las excepciones que deriven de sus relaciones personales con éste; sin embargo habiendo entrado en circulación la cambial puesta a cobro el emplazado no puede deducir tales excepciones, a menos que el ejecutante al adquirir el título hubiere obrado a sabiendas en daño de aquél, supuesto que no se da en el caso de autos; Tercero.- Que de otro lado, aparece de la letra de cambio que obra a fojas dos que ésta ha sido protestada dentro del plazo de ley, y con las formalidades exigidas por el artículo cincuenta y cinco de la ley de títulos-valores tal como fluye del acta de protesto de fojas ciento cuarentidós repetida a fojas ciento cincuentiuno; Cuarto.- Que los argumentos que sustentan el recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos de la recurrida: CONFIRMARON la

sentencia apelada de fojas ciento sesentinueve y ciento setenta su fecha dieciséis de julio de mi novecientos noventa y siete, que declara Infundada el escrito de contradicción a la ejecución formulado por el ejecutado César Vílchez Vivanco Cahuas Bonino de fojas sesentisiete a ochentidós y FUNDADA la demanda de fojas ocho a diez y ordena que el ejecutado César Vílchez Vivanco Cahuas Bonino cumpla con abonar al Banco Wiese Limitado la suma de sesentinueve mil dólares americanos o su importe en moneda nacional al día de realizarse el pago, más intereses devengados y por devengarse, costos y costas.

Artículo 46º.- Obligación de quien paga

El que paga el título valor a su vencimiento, no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de las firmas de los endosantes anteriores a la persona con quien se entiende el pago ni, en su caso, de la suficiencia de las facultades y poderes con las que intervienen; pero debe verificar el nombre, documento oficial de identidad y firma de quien le presenta el título como último tenedor, así como la continuidad ininterrumpida de los endosos.

El artículo bajo comento se inicia eximiendo a aquél que paga un título valor, de la verificación de la autenticidad de las firmas de los endosantes anteriores a la persona con quien se entiende el pago, así como de la verificación de la suficiencia de poderes y facultades de aquellos que intervienen.

Tal disposición implica que aquél que paga el título valor a su vencimiento no tiene por qué verificar si las firmas de los anteriores endosantes son falsas, si el que intervino no gozaba de poder de representación o si era un incapaz; pues lo que importa es la firma y la identificación del último tenedor, de tal modo que si se presentara cualquiera de estas situaciones sería de aplicación lo dispuesto en los arts. 7 y 8 de la presente ley, a cuyos comentarios nos remitimos.

De la misma norma podría inferirse *contrario sensu* que si el título valor no se paga a su vencimiento, sino que lo fue hecho antes, aquél que lo paga sí queda obligado a cerciorarse de la autenticidad de las firmas de los endosantes anteriores a la persona a quien le pagará y/o la vigencia de los poderes de aquellos que hubieren intervenido. Se supone que el que paga antes del vencimiento del

título se ha preocupado de informarse adecuadamente, toda vez que el art. 64.2 establece que quien cumple la prestación ante de la fecha establecida en el vínculo lo hace por cuanta y riesgo y responde por la validez del pago.

Mientras en el campo del derecho civil se presume que el deudor tiene tiempo para averiguar si aquél que presenta el título es capaz o incapaz para recibir el pago, ver art. 1227 del C.C.; tratándose de títulos valores no ocurre lo mismo. En virtud del endoso, el título valor circula rápidamente de un sujeto a otro, careciendo de oportunidad u ocasión como para, antes de cada transferencia, verificar información sobre los anteriores endosantes.

Se establece que el que paga, puede comprobar la identidad personal del tenedor del título, por medio de documentos de identificación, así como la coincidencia entre quien tiene el título y aquél que se identifica como endosatario. Para ello se exige la verificación del nombre, del documento oficial de identidad y firma del que presenta el título, así como también, la continuidad ininterrumpida de endosos.

El artículo 43 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré dispone que "el portador de la letra de cambio no está obligado a recibir el pago antes del vencimiento. El girado que paga antes del vencimiento lo hace a su riesgo y peligro. El que paga la letra de cambio a su vencimiento queda válidamente liberado, a menos que haya procedido con dolo o culpa grave; él está obligado a verificar la regular continuidad en los endosos, pero no a constatar la autenticidad de las firmas de los endosantes".

Como hemos comentado en ocasión anterior, las obligaciones mercantiles se cancelan con oportunidad: ni en forma prematura ni en forma extemporánea o con morosidad. Los comerciantes y los empresarios deben actuar, con arreglo a ley, con diligencia profesional y ello supone el registro de sus operaciones en un sistema contable y un flujo de caja que le permita conocer con cierto grado de exactitud, las sumas que tiene por cobrar y las obligaciones que tiene por pagar en el corto, mediano y largo plazo. Sin duda alguna, el cumplimiento de una obligación cartular antes del vencimiento constituye un riesgo y un peligro para aquél que efectúa el abono.

Con relación al tema contenido en este Art. 46 el que se vincula de un modo u otro con los Arts. 11.5; 16.1; 25; 210.2 y 212.1 F, el profesor **GOMEZ LEO** lo comenta del modo que sigue "es decir, en el supuesto de uno o varios endosos falsos y de cuya falsedad tiene conocimiento el poseedor, aquellos no obstan a su legitimación, con tal que de dicha falsedad no tenga conocimiento el deudor. Así pues, la mala fe del poseedor no constituye, por si misma, ningún impedimento para que el deudor verifique el pago, a condición de que el deudor ignore que el presentante es poseedor de mala fe. Insistimos, entonces, en que el deudor requerido, si tiene la posibilidad de probar objetivamente la mala fe del poseedor del título, puede negarse legítimamente a pagar, pues si efectúa el pago, éste no tendrá efectos liberatorios. Y cabe agregar que ulteriormente, en oportunidad de presentarse el verdadero y legítimo acreedor, el requerido de pago deberá pagar de nuevo, ya que en la oportunidad anterior pagó mal, pues conociendo la mala fe del presentante, y estando en condiciones de probarla, pagó lo mismo y, por tanto, su pago no tuvo efectos liberatorios respecto de él".

Se presenta a continuación algunas ejecutorias vinculadas al tema de este artículo 46:

Exp. 2203-87 Lima. El ejecutante debe acreditar su derecho mediante una serie ininterrumpida de endosos.

Lima, treintiuno de agosto de mil novecientos noventa.- VISTOS; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: que conforme al artículo cuarenticinco de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete el ejecutante debe acreditar su derecho mediante una serie ininterrumpida de endosos; que aparece de la cambial de fojas dos que el legítimo tenedor es el Banco Francés de Comercio Exterior quien no aparece haber endosado el título valor al girador Ate Chimio; quien sin legitimidad la endosa en procuración a la compañía ejecutante; que además debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo cuarentisiete de la Ley de Títulos Valores; que, siendo así, la acción ejecutiva deviene en improcedente; declararon: HABER NULIDAD en la resolución de fojas cincuentiocho, su fecha veinticinco de junio de mil novecientos ochentisiete; que revocando la apelada de fojas cuarenticuatro, fechada el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochentiséis; declara FUNDADA la demanda; con lo

demás que contiene; reformando la de vista y confirmando la apelada; declararon: IMPROCEDENTE la demanda y FUNDADA la oposición de fojas veinticinco; sin costas.

Artículo 126.- Responsabilidad del endosante

126.1 Salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario, el endosante responde de la aceptación y el pago.

126.2 El endosante puede prohibir un nuevo endoso, de acuerdo al artículo 43.

El que interviene en un título valor, queda obligado en forma solidaria con el obligado principal y los demás obligados del título frente al último tenedor del mismo. Sobre el particular, **Rolando CASTELLARES AGUILAR** afirma que “desde que existe la responsabilidad del girador por la aceptación y pago; y, la obligación de pago del aceptante; quien endosa una cambial asume responsabilidad solidaria con ellos por ambas obligaciones. Y es que siendo la letra de cambio un valor negociable y en el curso de su negociación no todos los participantes mantienen relación causal, esta disposición opera como un mecanismo de seguridad y garantía, al hacerlos responsables a cada una de las personas que intervienen en la cambial, como si fuesen garantes y coobligados de la persona de quien hayan recibido el documento (su endosante), lográndose una cadena de responsables sucesivos, en modo tal que, a mayor número de participantes se logra mayor seguridad de su pago, al haber más personas que asumen responsabilidad por su pago y aceptación. Sin embargo, esta regla admite excepciones, desde que es posible liberarse de tal responsabilidad solidaria, sea por acuerdo entre las partes involucradas en la transmisión o por disposición legal expresa. En ambos casos debe existir una razón que justifique tal liberación de responsabilidad del endosante; pues de lo contrario, es improbable que el tomador de la cambial admita esta transferencia sin asunción de responsabilidad. Así, un endosatario en procuración o en garantía de una letra de cambio, podrá incorporar cláusula liberatoria de responsabilidad cuando a su vez endose la misma en devolución a su endosante. Un endosante de una letra de cambio en calidad de factoring, quien según el contrato de factoring asume el riesgo crediticio de dicho documento, podrá válidamente incluir en el acto del

endoso cláusula que lo libere de esta responsabilidad. En ocasiones, la ley libera de esta responsabilidad al endosante, cuando busca fomentar el mercado secundario de estos valores endosables y facilitar su negociación sin mayor reservas ni asunción de riesgos crediticios para los partícipes de dicho mercado. Así, el segundo párrafo del art. 98 del D.Leg. N° 861 contenía esta liberación de responsabilidad del endosante de letra de cambio emitida como instrumento de corto plazo. Lo propio ocurre con el endoso de la letra hipotecaria de que trata el art. 236.2 de la ley de bancos; así como con el endoso de un certificado bancario de moneda extranjera a la orden a que se refiere el art. 222 de esta ley, que también libera de esta responsabilidad de pago al endosante”.

La letra de cambio y los demás valores en título o con anotación en cuenta tienen como característica que corresponde a su propia naturaleza, ser susceptibles de negociación, circular, transmitirse de unos a otros, por lo que se ha señalado en el artículo primero de esta ley que están “destinadas a la circulación”, o como señalara el profesor **Jorge RAMIREZ DIAZ** que tienen “vocación circulatoria”, bien puede su creador o el tenedor que lo transfiere, disponer que no sea más transmisible, lo que en modo alguno afecta su calidad de título valor. Se trata de una decisión de dicho girador, emitente o endosante en prohibir que circule, justamente porque si no lo señala circulará sin ninguna restricción. Pueden haber y con frecuencia ocurre ello, que existan razones que justifiquen dejar en suspenso tal característica de este título valor a la orden. Por ejemplo, tener la seguridad de que quien ejercita el derecho que contiene es una determinada persona y no una tercera a quien éste pudo haber transferido. También tener interés en seguir manteniendo la relación causal y cambiaria entre transfiriente y adquiriente del título valor, por lo que la única forma de lograrlo es prohibiendo su circulación. La ley pues no puede proporcionarnos un documento destinado a circular que no pueda ser posible detenerlo. Sería una suerte de un automóvil sin freno. Tomando este ejemplo, podemos decir que así como el automóvil es un vehículo que sirve para circular, pero que a voluntad del conductor puede ser detenido y parqueado, por lo que no deja de ser automóvil, igualmente un título valor está destinado a la circulación, pero con posibilidad de detener tal aptitud, siendo para ello suficiente señalar en el documento la cláusula “no endosable” o cualquier otra equivalente; lo que no lo descalifica como título valor.

Las transferencias que se hagan a pesar de esta prohibición de endosar, en el caso de la letra de cambio, no se sanciona con la nulidad de tal negociación prohibida, como ocurre por ejemplo en el caso del cheque. El endoso de la letra de cambio no negociable, no surte efectos cambiarios sino sólo tiene los efectos de una cesión de derechos como reza el art. 43; es decir, no afecta cambiariamente al endosante que incluyó dicha cláusula que impedía su negociación; y, el adquirente de tal cambial (que no tiene la calidad de endosatario sino de cesionario), sólo logra sustituir a la persona que hizo la transferencia de la cambial en su favor, subrogándose en todos los derechos y obligaciones de éste relativas a la relación causal que existe entre el endosante que incluyó esta prohibición y la persona que a pesar de ello le cedió el título. Debido a ello, para el endosante, el tenedor quien quiera que fuere, sigue teniendo los mismos derechos y obligaciones (causales y cambiarias) que respecto a él tenía su endosatario o persona que cedió la letra de cambio.

3.17. CLASES DE ENDOSO

Artículo 37º.- Clases de endosos

El endoso puede hacerse en propiedad, en fideicomiso, en procuración o en garantía.

La norma que ahora nos ocupa, enumera las clases o formas de endoso. A las tradicionalmente conocidas: endoso en propiedad, en procuración y en garantía; se incorpora una nueva, el endoso en fideicomiso, tema que trataremos al comentar el art. 40.

3.17.1. ENDOSO EN PROPIEDAD

Artículo 38º.- Endoso en propiedad

El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título valor y todos los derechos inherentes a él, en forma absoluta.

El endoso en propiedad es aquel en el cual el endosante transfiere todos los derechos inherentes al título, derechos que pueden ser de dominio, propiedad, posesión o la simple tenencia. Con

él, transfiere los derechos principales y los accesorios, así como la facultad para que el endosatario ejerza otros derechos.

MONTOYA MANFREDI⁶² señala que en virtud del endoso en propiedad el endosante pierde la propiedad del título, el cual es adquirido por el endosatario, pero con la calidad de titular del derecho de crédito originario, como derecho *propter rem*, ligado a la posesión de la cosa, o sea al título.

El endoso origina una apariencia de titularidad del derecho a favor del último endosatario, que es suficiente para liberar al deudor que paga a quien le presente el título y figure en él como único o como último endosatario. De ahí la denominación que recibe de la doctrina denomina como endoso pleno, porque transmite todos los derechos incorporados en el título.

Debemos entender por derechos inherentes al título valor⁶³, no sólo a los accesorios, sino a los relacionados con la posibilidad de transferirlos, poder de legitimación, de obtener la legitimación activa, el aval, excepciones cambiarias, garantías, etc.

Si bien por regla general contenida en el art. 34 se presume que a falta de indicación de la clase de endoso, el título valor ha sido transmitido en propiedad, con las consecuencias que de ello deriven. Conforme lo anotáramos al comentar el art. 34, esta presunción no sería aplicable en aquellas transacciones en que participen bancos o empresas del sistema financiero, pues el art. 169 de la Ley 26702, establece una presunción de garantía, cuando un título valor u otro susceptible de negociación por endoso, excepto el cheque, se encuentre en poder de una empresa del sistema financiero, a menos que medie estipulación en contrario.

Algunas ejecutorias supremas y otros pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia respecto al endoso en propiedad, nos ayudarán a clarificar y delimitar el tema. Veamos.

⁶² MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. Cit. Página 122.
⁶³ MUÑOZ, Luis. Op. cit. Página 324.

Exp. N° 319-93. Lima. Si se omite consignar la clase de endoso en el título, se presume que el mismo ha sido transmitido en propiedad. Habiéndose endosado el título en favor de Sociedad Inmobiliaria Santa Mercedes de Lima Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada carece de legitimidad para accionar Santa Mercedes Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

Lima, dos de diciembre de mil novecientos noventitrés.- VISTOS; con el acompañado; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: además; que el proceso ejecutivo previsto por el Decreto Ley número veinte mil doscientos treintiséis es formal por excelencia; que la acción ejecutiva, conforme al artículo primero del indicado Decreto Ley compete al acreedor que presenta título que apareja ejecución; que de conformidad con los numerales treintitrés y treintisiete de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete el endoso puede hacerse en propiedad y, si se omite consignar la clase de endoso en el título, se presume que el mismo ha sido transmitido en propiedad; que, en el caso de autos, la letra de cambio de fojas tres inicialmente ha sido endosada por su tomador don Benjamín Monteblando Clement en favor de Industrial Vidrio Neutro Sociedad Anónima, entidad que a su vez ha endosado en favor de Sociedad Inmobiliaria Santa Mercedes de Lima Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; que, consecuente con lo anterior, se llega a la evidencia de que el acreedor con legitimidad para accionar ejecutivamente es Sociedad Inmobiliaria Santa Mercedes de Lima Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada; que, no obstante ello, como aparece de la demanda de fojas doce, quien interpone la acción es San Mercedes Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, representado por don Pedro Gutiérrez Montoya; que el testimonio de escritura pública de fojas cuatro a fojas once se refiere a la entidad "Santa Mercedes" Sociedad de Responsabilidad Limitada y no a "Santa Mercedes" Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada; que Sociedad Inmobiliaria Santa Mercedes de Lima Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada es totalmente diferente a Santa Mercedes Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; que, por consiguiente, habiendo sido interpuesta la acción ejecutiva materia de autos por una entidad que carece de legitimidad para accionar en base a la letra de cambio analizada, la demanda debe desestimarse por improcedente: declararon NO HABER NILIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento dieciocho, su fecha catorce de

julio de mil novecientos noventidós, que confirmando la apelada de fojas noventa y siete, su fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, declara IMPROCEDENTE la acción ejecutiva propuesta a fojas doce, con lo demás que contiene y es materia de la alzada; sin costas; condenaron en las costas del recurso y multa de ley a la parte que lo interpuso.

Artículo 39º.- Responsabilidad del endosante en propiedad

39.1. Salvo cláusula o disposición legal en contrario, el endoso en propiedad obliga a quien lo hace solidariamente con los obligados anteriores.

39.2. El endosante puede liberarse de esa obligación mediante la cláusula "sin responsabilidad" u otra equivalente.

El artículo destaca el principal efecto del endoso en propiedad: la responsabilidad solidaria, distintiva de las relaciones cambiarias. Responsabilidad que alcanza al endosante con los obligados anteriores.

El mismo efecto y/o característica se prescribió en la derogada ley. Sin embargo, la ALTV restringía la referida responsabilidad sólo si se trataba de letras de cambio, pagarés, vales a la orden y cheques. La actual ley no hace tal distinción limitativa.

Es en virtud de la presunción de solidaridad cambiaria que el tenedor del título valor que se sienta insatisfecho con el pago podrá accionar contra los obligados anteriores, en forma individual o conjunta exigiéndoles la satisfacción de su derecho.

En opinión de **MONTOYA MANFREDI**⁶⁴ no estaríamos frente a un caso de responsabilidad sucesiva, que impida demandar conjuntamente a los obligados, salvo que se tratase de co-obligados en relación con una determinada obligación cambiaria. La solidaridad sucesiva impide demandar a otros obligados hasta que no se haya comprobado la insolvencia del elegido en primer lugar.

⁶⁴ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. Cit. Página 123.

En virtud del principio de solidaridad cambiaria, la pluralidad de endosos y de firmas en general puestas en el título, garantizan el cumplimiento de la obligación, pues vinculan a su autor y a los que le precedieron.

Del mismo modo, se mantiene la posibilidad de pactar contra dicha solidaridad mediante la cláusula “sin responsabilidad” u otra equivalente; quedando las partes sometidas al régimen de la mancomunidad de las obligaciones.

La cláusula “sin responsabilidad” no tiene por efecto evitar endosos sucesivos sino simplemente excluir al endosante de la responsabilidad solidaria, de tal modo, que si el tenedor del título no ve satisfecho el pago de la obligación puede ir contra los endosantes anteriores al que hizo uso de dicha cláusula. En otras palabras, el efecto principal de dicha cláusula es recortar la función de garantía que brinda el endoso por cuanto el endosante excluido no responde ante los nuevos acreedores.

3.17.2. ENDOSO EN FIDEICOMISO

Artículo 40º.- Endoso en Fideicomiso

40.1. El endoso en fideicomiso transfiere el dominio fiduciario del título valor en favor del fiduciario a quien corresponde ejercitar todos los derechos derivados de éste que correspondían al fideicomitente endosante.

40.2. El endosatario en fideicomiso sólo puede ser una persona autorizada por la ley de la materia para actuar como fiduciario.

40.3. La responsabilidad del fiduciario endosante que no haya incluido la cláusula señalada en el segundo párrafo del Artículo 39º es similar al del endosante en propiedad, con el límite del patrimonio fideicometido que mantenga en fideicomiso.

40.4. El obligado no puede oponer al endosatario en fideicomiso los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con el fideicomitente, a menos que el fiduciario, al recibir el título, hubiera actuado intencionalmente en daño del obligado.

Conforme lo anotáramos, el endoso en fideicomiso constituye una innovación de la actual LTV.

El fideicomiso es un contrato en virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una persona, con el encargo de que los administre o enajene y que con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente, a favor o en beneficio de un tercero. Así, intervienen tres sujetos:

- El fideicomitente, quien constituye el fideicomiso, transfiere la propiedad de sus bienes, establece las condiciones y objetivos que han de cumplirse con los bienes transferidos y designa al fiduciario.
- El fiduciario, quien adquiere la titularidad de los bienes fideicometidos sólo para los fines que se determinan en el acto constitutivo. Generalmente⁶⁵, los fiduciarios son instituciones bancarias y/o financieras o sociedades fiduciarias autorizadas o constituidas para ello.
- El fideicomisario, que puede ser un tercero o el mismo fideicomitente, aquél en cuyo beneficio se estableció el fideicomiso y en quien redundará todo el provecho que se obtenga con la administración del bien objeto del mismo.

El art. 241 de la LdB, define al fideicomiso como la *relación jurídica* por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario.

El endoso en fideicomiso es una figura jurídica a través de la cual el fideicomitente (endosante) transfiere al fiduciario (endosatario) el título valor. De este modo, el fiduciario-endosatario puede ejercer todos los derechos derivados del título valor endosado.

⁶⁵ DE LA FLOR MATOS, Manuel. *Fideicomiso*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999, Páginas 75.

La propia LdeB, en el art. 242, autoriza a desempeñarse como fiduciarias a COFIDE, las empresas de operaciones múltiples: Empresas Bancarias; Empresas Financieras; Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; Cajas Municipales de Crédito Popular; Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME); Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público; Cajas Rurales de ahorro y crédito; las empresas de servicios fiduciarios y las empresas de seguros y reaseguros.

El inciso tercero, prevé la responsabilidad que asume el fiduciario, la cual es similar a la del endosante en propiedad, siempre y cuando no inserte la cláusula "sin responsabilidad". El límite de esta responsabilidad es el patrimonio fideicometido.

Finalmente, se establece que el obligado al cumplimiento del título valor no puede oponer al endosatario en fideicomiso los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con el fideicomitente, a menos que el fiduciario, al recibir el título, hubiera actuado intencionalmente en daño del obligado.

3.17.3. ENDOSO EN PROCURACION O COBRANZA

Artículo 41º.- Endoso en procuración o cobranza

41.1. El endoso que contenga la cláusula "en procuración", "en cobranza", "en canje" u otra equivalente, no transfiere la propiedad del título valor; pero faculta al endosatario para actuar en nombre de su endosante, estando autorizado a presentar el título valor a su aceptación, solicitar su reconocimiento, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, endosarlo sólo en procuración y protestarlo u obtener la constancia de su incumplimiento, de ser el caso.

41.2. El endosatario conforme a las cláusulas señaladas en el párrafo anterior, por el solo mérito del endoso, goza de todos los derechos y obligaciones que corresponden a su endosante, incluso de las facultades generales y especiales de orden procesal, sin que se requiera señalarlo ni cumplir con las formalidades de ley para designar representante.

41.3. El endoso antes señalado no se extingue por incapacidad sobreviniente del endosante o por muerte de éste, ni su revocación surte efectos respecto a terceros, sino desde que el endoso se

cancela. La cancelación de este endoso, puede solicitarse en proceso sumarísimo; y, se entiende hecha si se devuelve testado o mediante endoso del endosatario en procuración a su respectivo endosante.

41.4. El obligado puede oponer al endosatario en procuración, sólo los medios de defensa que proceden contra el endosante en procuración.

Según sostiene la doctrina consultada, el endoso en procuración, importa el otorgamiento de un mandato al portador del título para que realice las gestiones propias de su cobro. El endosante que no puede o no quiere ocuparse de las diligencias de aceptación y cobro o protesto del título, lo entrega a un tercero con la referencia “valor al cobro” o “al cobro”, para que de este modo quien recibe el título actúe en su nombre y representación.

Luis MUÑOZ⁶⁶, afirma que este endoso transfiere los derechos en el título, dado su carácter literal; pero no el dominio, sino la mera tenencia, limitándose los poderes del endosatario que puede ejercitar por poder todos los derivados del título como el de la legitimación, el aval, las acciones cambiarias y también las garantías, menos el de endosar, ya que si endosa sólo vale el endoso a título de mandato.

Por su parte, **Lisandro PEÑA NOSSA**⁶⁷, señala que el endosante transfiere al endosatario facultades específicas determinadas por la ley, tales como las posibilidades por parte de este último de presentar el título valor para la aceptación, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, endosarlo en procuración y protestarlo.

Concordante con las apreciaciones doctrinarias, el inciso primero de este art. 41, señala que el endoso que lleve la cláusula “en procuración”, “en cobranza”, “en canje”, u otra equivalente; no transfiere la propiedad del título valor, pero faculta al endosatario para:

- Actuar en nombre de su endosante
- Presentar el título valor a su aceptación
- Solicitar su reconocimiento
- Cobrarlo judicial o extrajudicialmente

⁶⁶ MUÑOZ, Luis. Op. cit., Página 337.

⁶⁷ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 53.

- Endosarlo sólo en procuración
- Protestarlo
- Obtener la constancia de su incumplimiento de ser el caso.

Veamos las distinciones de estas características y facultades, con relación al tratamiento que tuvo en la ALTV.

Art. 41 de la ALTV	Art. 41.1 de la NLTV
<ul style="list-style-type: none"> - Endoso con cláusula “en procuración”, “al cobro”, “en cobranza”, “por poder” u otra equivalente que indique un simple mandato. - No transfiere la propiedad del título. - Faculta al endosatario para: presentar el documento a la aceptación, solicitar su reconocimiento, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, endosarlo sólo en procuración y protestarlo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Endoso con cláusula “en procuración”, “en cobranza”, “en canje” u otra equivalente. - Igual precisión. - Iguales potestades, pero agrega que además, faculta al endosatario a obtener la constancia de su incumplimiento de ser el caso.

El segundo inciso del artículo bajo comentario confiere al endosatario, por el solo mérito del endoso y conforme a las cláusulas para la procuración, el ejercicio de todos los derechos y obligaciones que corresponden a su endosante; incluso las facultades generales y especiales de orden procesal.

Las facultades generales de orden procesal, son las que se refiere el numeral 74 del CPC al representante, facultándolo a solicitar la ejecución de la sentencia, a cobrar costas y costos, legitimándolo para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo; salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.

Las facultades especiales son aquellas que posibilitan al representante a realizar actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y recon convenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

La distinción en cuanto a la ALTV, es que ésta refería que el endosatario por procuración gozaba de todos los derechos y obligaciones de un “mandatario”, es decir, equiparaba a esta institución con el contrato de mandato; referencia ahora desterrada. Asimismo, la actual ley apunta que dichas facultades generales y especiales de orden procesal las goza el endosatario, sin que sea necesario señalarlas ni cumplir con las formalidades de ley para designar representante.

La extinción de este endoso sólo se produce por cancelación del mismo y no cuando el endosante sobreviene en incapaz o fallezca. En similares términos, prescribía el segundo párrafo del art. 41 de la ALTV.

Establece la norma bajo comento, que el obligado puede oponer al endosatario en procuración, sólo los medios de defensa que proceden contra el endosante. Como el endosatario no ejerce un derecho propio, sino representa al endosante, el obligado no puede oponerle excepciones que personalmente le atañen, sino las que procederían contra el endosante. La ALTV aludía a “excepciones”, en cambio, ahora se habla de “medios de defensa”.

Todavía hay comentarios en la doctrina argentina acerca de que el endoso en procuración es un acto cambiario por el cual el endosante otorga mandato al endosatario para que éste ejerza los derechos cambiarios correspondientes al primero. Para la legislación y jurisprudencia peruanas, el endoso en procuración implica más bien el otorgamiento de una representación y no la celebración de un contrato de mandato; estamos más bien en el artículo 145 del Código Civil y no en el artículo 1790 del mismo, pues a éste lo regulamos como una forma de locación de servicios, admitiendo en los artículos 1806 y

1809 que dicho mandato puede ampliarse con representación o sin ella, respectivamente.

Es verdad que el endosatario en procuración o cobranza, no puede realizar determinados actos: no puede transigir ni acordar prórrogas o esperas ni aún desistirse de la acción cambiaria promovida, a menos, obvio, que estuviere expresamente facultado; no podrá entablar la acción causal ni la de enriquecimiento sin causa pues ambas escapan o se exceden al derecho cartular.

Veamos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia:

Exp. N° CAS 1629-98/Lima. "... Los endosos que contienen cláusulas 'en procuración', 'al cobro', 'en cobranza', 'por poder', u otros (sic) equivalentes, se les denomina títulos irregulares o impropios, por que no transmiten la propiedad del título valor, ya que el endosatario es un simple representante del endosante quien mantiene su condición de acreedor, y la relación entre endosatario y endosante se regula de acuerdo al tipo de acto jurídico que le dio origen".

Lima, veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Julio Revilla Calvo contra la resolución de vista de fojas ochentiséis, su fecha primero de junio de mil novecientos noventa y ocho, que revocando el auto pelado de fojas cincuentitrés, su fecha diez de marzo del mismo año, declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar propuesta por la emplazada y en consecuencia insubsistente lo actuado e improcedente la demanda. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho ha estimado procedente el recurso por las siguientes causales: a) la aplicación indebida de los Artículos cuarenticinco y treintitrés de la Ley de Títulos Valores, ya que en autos está acreditado que las letras de cambio fueron ingresadas al Banco de Crédito en cobranza, consiguientemente dicha entidad financiera al no lograr su cometido las devolvió a su endosante sin necesidad de firmar el selle de

devolución; y b) la interpretación errónea del Artículo ciento setentinueve (en realidad es el Art. 169) de la Ley de Bancos ya que las cambiales fueron entregadas al citado banco para su cobranza, destruyendo la presunción contenida en dicho dispositivo legal. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que de las cambiales materia de autos se aprecia que éstas tienen como girador y tomador a la empresa Licores San Francisco Sociedad Anónima y como girado o librado a la empresa Electroneumática Sociedad Anónima, demandada en la presente causa. Segundo.- Que las letras de cambio en mención fueron endosadas por Licores San Francisco al Banco de Crédito del Perú, consignándose la frase “páguese a la orden de”, lo que significa que fue un endoso impropio o irregular, es decir que se trató de un mandato por el que la primera encargaba a la segunda el cobro de los citados títulos valores, lo que se corrobora con los dietarios de cobranza dirigido por la referida institución financiera a la empresa Licores San Francisco Sociedad Anónima, donde constan los costos de protesto y comisiones respectivas de cobranza. Tercero.- Que los endosos que contienen cláusulas “en procuración”, “al cobro”, “en cobranza”, “por poder”, u otros equivalentes, se les denomina títulos irregulares o impropios, porque no transmiten la propiedad del título valor, ya que el endosatario es un simple representante del endosante quien mantiene su condición de acreedor, y la relación entre endosatario y endosante se regula de acuerdo al tipo de acto jurídico que le dio origen. Cuarto.- Que el Banco endosatario al no poder cumplir con su mandato procedió a devolver las letras de cambio a licorería San Francisco Sociedad Anónima, hecho que implica una simple renuncia al mandato de cobranza y no una transferencia de propiedad, porque la citada empresa nunca perdió su condición de acreedora cartular, es decir siempre mantuvo su calidad de giradora y tomadora, en consecuencia al no haber habido transmisión de propiedad de los cambiales, el derecho de la citada empresa no tiene por qué justificarse en un tracto sucesivo de endosos, siendo también irrelevante que la devolución de las letras de cambio por parte del Banco de Crédito sólo estén representadas por un sello sin la firma del respectivo funcionario; consecuentemente ha existido una aplicación indebida de los Artículo treintitrés y cuarenticinco de la Ley de Título Valores, resultando correcto el posterior endoso en procuración que realiza licorería San Francisco Sociedad Anónima al accionante Julio Revilla Calvo, quien es uso de sus atribuciones legales ha iniciado el presente proceso, teniendo plena legitimidad

para obrar, por cuanto quien le endosó los títulos valores tenía capacidad para hacerlo. Quinto.- Que el Artículo ciento sesentinueve de la Ley número veintiséis mil setecientos dos establece que cuando un título valor, susceptible de negociación por endoso, a excepción del cheque, se encuentra en poder de una empresa del sistema financiero, el endoso puesto en él se presume hecho en garantía a menos que medie estipulación en contrario, y justamente, del endoso puesto en las cambiales materia de autos y de lo dietarios ya reseñados se aprecia que en el caso de autos ha existido estipulación en contrario ya que el endoso fue hecho en cobranza. 4. SENTENCIA: Que estando a las conclusiones a las que se arriba y en aplicación de lo dispuesto por el inciso primero del Artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Julio Revilla Calvo, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ochentis y seis, su fecha primero de junio de mil novecientos noventa y ocho; y ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA, CONFIRMARON la resolución apelada número cuatro, que obra a fojas cincuenta y tres, dictada en la audiencia única de fecha diez de marzo del mismo año, que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante deducida por la emplazada; debiendo la Sala Superior pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida. EL VOTO DEL S. CASTILLO LA ROSA SÁNCHEZ; ES COMO SIGUE; CONSIDERANDO: 1º) Que el título valor es un instrumento eminentemente formal, su valor y efectos jurídicos surgen exclusivamente de su texto, por esto es literal y abstracto; 2º) Que el endoso es parte del texto y literalidad de las letras y apareciendo un endoso puro y llano en el reverso de ellas a favor del Banco de Crédito del Perú, la titularidad de su cobro pasa a favor del Banco sea en propiedad o garantía, como ocurrió con el endoso que hizo Licores San Francisco Sociedad Anónima con la firma de su representante; 3º) Que siendo esto así, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos treinta y tres, treinta y cinco de la Ley de Títulos Valores dieciséis mil quinientos ochenta y siete para que recobre la titularidad la endosante empresa indicada, ha debido volverlas a endosar el Banco, lo que se acostumbra hacer con el sello que dice “devuelto sin responsabilidad” pero tiene que tener la firma del representante del Banco; 4º) Que tales firmas no existen en las letras, materia de cobranza judicial, luego se da la secuencia de endosos ininterrumpidos a que se refiere el Artículo cuarenta y cinco de la misma

ley. Por estas razones MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el Recurso de Casación.

3.17.4. ENDOSO EN GARANTIA

Artículo 42º.- Endoso en garantía

42.1. Si el endoso contiene la cláusula "en garantía" u otra equivalente, el endosatario puede ejercitar todos los derechos inherentes al título valor y a su calidad de acreedor garantizado; pero el endoso que a su vez hiciere éste sólo vale como endoso en procuración, aun cuando no se señalara tal condición.

42.2. El obligado no puede oponer al endosatario en garantía, los medios de defensa fundadas en sus relaciones personales con el endosante, a menos que el endosatario, al recibir el título, hubiera actuado intencionalmente en daño del obligado.

42.3. En caso que proceda la realización del título valor afectado en garantía, el titular del mismo o, en su defecto, el Juez o el agente mediador efectuará el endoso en propiedad, en favor del adquirente del título valor. Si el acuerdo para su realización extrajudicial consta en el mismo documento, dicho endoso en propiedad podrá ser realizado por el acreedor garantizado.

Coincide la doctrina en señalar que el endoso que lleve la cláusula "en garantía", "en caución", "valor en garantía", u otra equivalente; significa que el portador o endosatario que recibe el título lo hace como acreedor prendario, por prenda común. A través de este endoso, el endosante queda habilitado para cobrar el título y ejercer todos los derechos del caso.

El endoso en garantía o para garantía, permite que el documento sea entregado en prenda, de forma que el tenedor adquiera un derecho real sobre el crédito cambiario y no la titularidad plena. Sin embargo, el acreedor prendario, endosatario del documento cambiario, tiene sobre éste un derecho propio y lo ejercita en nombre e interés propio; no en los del endosante. Si llega el momento del vencimiento del crédito garantizado, el tenedor podrá cobrarse con el importe del documento y entregar la diferencia al deudor.

“Mediante el endoso en garantía, el endosatario puede ejercitar todos los derechos inherentes al título valor y a su calidad de acreedor garantizado; pero el endoso que a su vez éste hiciere sólo vale como endoso en procuración, aun cuando no se señalara tal condición.”⁶⁸

La norma actual ya no hace referencia a la cláusula “en prenda” a que se refería el art. 42 de la anterior ley, sólo dice que el endoso en garantía es aquel que contiene la cláusula “en garantía” u otra equivalente.

Asimismo, la antigua ley utilizaba el término “afianzamiento”; la actual no lo hace.

Por el contrario, la nueva ley enfatiza que el endoso que a su vez hiciere el endosatario, sólo vale como endoso en procuración, “aún cuando no se señalara tal condición”. Esta última precisión de la ley en el art. 42.1, estimamos que es muy importante.

El endosatario en prenda tiene una posición autónoma con relación a su endosante, ya que las personas obligadas no podrán invocar contra él las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el endosante que la transmitió en garantía, a menos que el tenedor hubiera actuado en perjuicio del deudor. Las relaciones personales a que se aluden, son las del endosante con el obligado y no las del endosante con el endosatario. El mismo criterio se establecía en el segundo párrafo del art. 42 de la ALTV.

En cuanto a la realización judicial del título valor afectado en garantía, no encontramos cambio en su parte inicial, pero sí uno sustantivo, en su segunda opción: el titular del mismo o, en su defecto, el Juez o el agente mediador efectuará el endoso en propiedad a favor del adquirente del título valor. El Código Civil de 1984 otorga la posibilidad de que el acreedor puede proceder a la venta de bien en la forma pactada al constituirse la obligación, si vencido el plazo no se hubiere cumplido con ella, según puede verse de su art. 1069. Tomando como referencia esta norma, este art. 42 agrega que “Si el acuerdo para su realización extrajudicial consta en

⁶⁸ MONTROYA ALBERTI, Hernando. Op. cit., Página 282.

el mismo documento, dicho endoso en propiedad podrá ser realizado por el acreedor garantizado”.

Entre los sujetos del endoso en garantía se dan las relaciones normales existentes entre deudor y acreedor prendario, pero dada la naturaleza de los que se entrega en prenda, existen algunas particularidades: el endosatario o acreedor prendario debe ejercer todos los derechos cambiarios y rendir cuentas al endosante, deudor prendario, aunque puede ir cambiariamente en contra de él.

En endosatario en garantía goza de un derecho cartular propio y autónomo, por lo cual no se le pueden oponer las excepciones fundadas en las relaciones personales con su endosante. El endosatario en garantía puede ir en contra de su endosante y de quienes están obligados con éste. Si el endosatario cobra el importe del título valor a su vencimiento o anticipadamente lo debe retener como depósito o prenda irregular, hasta la extinción de la obligación garantizada y debe rendir cuentas, salvo estipulación contraria. La ley limita la posibilidad de nuevos endosos del título, posteriores al efectuado en prenda, que en caso de efectuarlos valen sólo como procuración.

No es infrecuente la confusión que suele presentar el endoso en garantía, figura perfectamente regulada por la ley, con la aceptación de letras de cambio en garantía del fiel cumplimiento de obligaciones asumidas por el aceptante; incluso, ordinariamente, a éste se le exige dicha aceptación de una letra de cambio “en blanco”. En primer lugar, ni la ley 16587 en sus artículos 61 y 62 ni esta NLTV 27287 en sus artículos 119 y 120, posibilitan ni permiten el uso o utilización de letras de cambio “en garantía”. Este título valor debe contener la obligación de pagar o hacer pagar una determinada o determinable cantidad de dinero en un vencimiento predeterminado. No existe, legislativa ni jurisprudencialmente, la denominada letra de cambio en garantía aunque lamentablemente su uso es frecuente en el mercado peruano. Una sana recomendación para aquél deudor que es exigido o compelido en suscribir una letra de cambio en garantía, será que procure anotar en el mismo título la referida cláusula “en garantía” con lo cual y prácticamente, invalidará el documento. En segundo lugar, y como lo hemos visto al comentar el artículo 11, tampoco existe en la ley peruana la letra de cambio “en blanco”; sí existe regulación

perfectamente clara respecto al título valor incompleto, respecto del cual esta nueva ley concede al deudor el derecho de anotar en dicho documento la cláusula “intransferible” o “no negociable”.

Se transcribe a continuación algunas jurisprudencias de nuestros tribunales de justicia respecto de las cuales presentamos nuestra opinión. Veamos.

(1) Exp. 1381-95 Lima. “... El obligado no puede oponer al endosatario en garantía las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el endosante...”

Lima, cinco de diciembre de mil novecientos noventicinco.- VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el Señor Braithwaite Gonzáles; por sus fundamentos; y, CONSIDERANDO: además: PRIMERO: que, las letras con que se recauda la demanda han sido endosadas “en garantía” al Banco ejecutante, por lo que es de aplicación el artículo cuarentidós de la Ley de Título Valores, Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete; SEGUNDO: que, por lo tanto según lo estatuido por el segundo párrafo del artículo pernotado, el obligado no puede oponer al endosatario en garantía las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el endosante; TERCERO: que, siendo esto así, la argumentación esgrimida por la ejecutada en su escrito de contradicción respecto a la inexigibilidad de la obligación contenida en el Título ejecutivo debe desestimarse, resultando irrelevante con tal propósito la alusión a la carta de fojas diecinueve, desde que dichos demandado no aprobado que el endosatario, al recibir el título hubiera actuado intencionalmente en daño del obligado; CUARTO: que, respecto a las nulidades deducidas en el recurso de apelación no pueden ampararse toda vez que la notificación con la resolución que contiene la fecha y hora para la audiencia única se ha efectuado en el domicilio señalado por la aceptante (demandada) en las cartulares materia de la ejecución como se evidencia de la cédula número B setecientos cincuenticinco mil seiscientos treintinueve C.A.L. obrante a fojas treinticuatro; QUINTO: que, no habiendo sido enervado el valor per-se de las aludidas cambiales, debe ampararse la demanda; DECLARARON INFUNDADA las nulidades deducidas por la demandada en su recurso de apelación de fojas cuarentidós a cuarenticinco; y CONFIRMARON la sentencia apelada, expedida en la Audiencia Unica, de fecha cinco de julio pasado, obrante a fojas

treintisiete a treintinueve, que declara infundada la contradicción formulada a fojas veintidós y fundada la demanda de fojas diez a trece ordenando que la firma ejecutada Pegaso Sociedad de Responsabilidad Limitada cumpla con abonar al Banco Baños Sociedad Anónima, la suma de nueve mil dólares americanos, con los demás que contiene.

3.18. LAS CLAUSULAS ESPECIALES EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 48º.- Cláusulas Especiales

48.1. En los títulos valores, cualquiera que fuere la forma de su circulación, podrán incluirse las cláusulas especiales que se señalan en la presente Sección, sin perjuicio de otras contenidas en esta ley y demás disposiciones legales.

48.2. Las cláusulas especiales deberán constar expresamente en cualquier lugar del documento o en hoja adherida a él, para surtir efecto frente a los obligados respectivos. En el caso de los valores con representación por anotación en cuenta, los pactos y cláusulas especiales deberán constar en el registro respectivo.

48.3. Además de las cláusulas que contiene la presente Sección, podrán acordarse otras que no impida la ley, debiendo constar en el mismo título o respectivo registro, para surtir efectos cambiarios.

48.4. Las cláusulas a las que se refieren los Títulos Primero al Séptimo de la presente Sección Tercera que se incorporen en un título valor, para tener validez, deben estar impresas en el documento o refrendadas especialmente con firma del obligado que las admite en el caso de haber sido incorporadas en forma manuscrita, con sellos o cualquier otro medio distinto. El tenedor no requiere firmarlas.

No existe antecedente respecto a esta norma en la ALTV. Si bien se regulaba, de modo disperso, ciertas cláusulas especiales; no había una Sección, Título o Capítulo que abordara el tema de modo orgánico, coherente y ordenado.

El art. 1 del D.L. N° 26131, que esta NLTV está derogando, posibilitaba la inserción de ciertas cláusulas en los títulos valores, siempre que éstas versaran sobre:

- A. Pago de título valor expresado en moneda extranjera, el mismo que necesariamente debía pagarse en dicha moneda; conforme lo autoriza el art. 1237 del C.C. El pago de título valor en moneda extranjera cuando sea girada por una persona no domiciliada en el país, o cuando sea cancelable en el exterior, se efectuaría en la misma moneda, salvo pacto en contrario;
- B. La tasa de interés compensatorio y moratorio, así como las comisiones en los casos permitidos por la ley;
- C. El sometimiento expreso a las leyes y tribunales de otro país, cuando la ley lo permita; y
- D. Otras cláusulas autorizadas por ley.

Apréciase que esta norma, en vez de coadyuvar al criterio de la plena validez en la inserción de otras cláusulas libremente admitidas por las partes, negaba y cerraba las puertas a tal opción, al referir que se podían incluir otras cláusulas siempre y cuando fueren "autorizadas por ley". Esto último era lo negativo. Ahora, con esta NLTV 27287, el criterio del legislador ha sido substancialmente modificado: existe la posibilidad de insertar todo tipo de cláusulas que signifiquen pactos entre los intervinientes, de tipo cambiario o causal, sin más limitación que las expresamente prohibidas por la ley. Y señalamos que dichos pactos pueden ser cambiarios o estar referidos a la relación causal porque ejemplos en el caso de estos últimos podrían ser tanto los del art. 124 de esta Ley 27287, cláusula documentaria, como el vinculado al art. 1233 del Código Civil, en cuanto a pactar la no extinción de la obligación primitiva aunque el título valor se perjudique por culpa del acreedor. Respecto a este último tema, nos remitimos al comentario que realizamos al art. 94.3. Evidentemente, que quede claro, las cláusulas son cambiarias y van insertas en un título de cambio. Lo que queremos puntualizar es que dentro de dicho criterio de clasificación, pueden hallarse las referidas a la misma relación, propiamente cambiaria, caso de las que se citan, por ejemplo, en los arts. 49, 50, 51 y 52, como a las que tienen conexión con la relación causal o básica, y por supuesto, en ambas situaciones, con la misma y plena validez.

El primer inciso establece como regla que cualquier título valor, sea éste al portador, a la orden o nominativo, puede incluir cláusulas especiales, como por ejemplo: cláusula de prórroga, de pago en moneda extranjera, de pago de intereses y reajustes, de liberación del protesto, de pago con cargo en cuenta bancaria, de venta extrajudicial y de sometimiento a leyes y tribunales.

Tales cláusulas deberán constar en forma expresa en el título valor. Podrán incluirse en cualquier lugar del documento o en hoja adherida a él, si estamos frente al caso de un valor materializado. Tratándose de valores desmaterializados, el modo de expresión de las cláusulas especiales se hará a través de su inscripción en el registro contable de la ICLV.

Asimismo, se abre la posibilidad de incluir en el título valor otras cláusulas especiales que si bien no están previstas y reguladas en esta ley, no se hallen prohibidas por ésta ni en general, por la ley.

De otro lado, se dispone que para que tengan validez las cláusulas especiales, éstas deben estar impresas en el documento o refrendadas especialmente con la firma del obligado que las admite en el caso de haber sido incorporadas en forma manuscrita, con sellos o cualquier otro medio distinto.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid 1992, página 1242 define Refrendar como "autorizar un despacho u otro documento por medio de la firma de persona hábil para ello; corroborar una cosa afirmándola; volver a ejecutar o repetir la acción que se había hecho". Entendemos entonces, que es correcta la expresión utilizada porque el obligado deberá volver a ejecutar o repetir su firma que antes la había hecho al aceptar o al emitir el título valor.

La firma del obligado que las admite, debe constar en el documento, pero el problema se presenta en el caso de los valores desmaterializados. En este caso en particular, no podemos hablar de firma refrendada cuando la cláusula no se incorpora en forma manuscrita, con sello u otro medio; pues el título valor ya está registrado contablemente y ha sido desmaterializado. Aquí, lo que se debe hacer es anotar la cláusula especial en el registro contable de la

ICLV para que pueda surtir efectos sobre el valor representado por anotación en cuenta y registro. Evidentemente, la autorización para la inserción de la cláusula debe haber sido concedida u otorgada de acuerdo a ley y constar de modo indubitable.

El tema de las cláusulas especiales constituía una preocupación y un clamor frecuente y habitual por parte de consumidores y usuarios, empresarios, comerciantes, banqueros, magistrados y público en general. En efecto, unos y otros discutían acerca de su vigor y eficacia. Naturalmente, había quienes le negaban validez por cuanto no había ley que las autorizara, mientras que otros replicaban que tampoco existía ley que las prohibiera y sustentaban la vigencia de su inserción basados en la autonomía de la voluntad. (Nos estamos refiriendo con esta última afirmación a la respuesta dada antes de la Ley 26131). Frente a ello se respondía manifestando de qué fuerza y valor podrían tener si tales cláusulas podían ser agregadas con medios manuales, mecánicos o electrónicos por el tenedor sin haber sido siquiera consultadas y eventualmente aprobadas por el deudor. En este contexto se hacía preciso entonces, ordenar un conjunto de cláusulas especiales "tipo", o más o menos frecuentes, entre los usos y costumbres mercantiles, financieros y bancarios, dejando en completa libertad a los contratantes para agregar todas aquellas que su libre e irrestricto albedrío aconseje o recomiende y acuerden, con la sola limitación de aquellas que expresamente estuvieran prohibidas en esta misma ley o en cualesquiera otra norma legal pertinente o aplicable al caso. Toda condición era que si en el documento venía ya impresa la cláusula, era de suponer que al girarse, emitirse, aceptarse, avalarse o transferirse, dicha cláusula tenía que haber sido vista y aprobada expresamente por el o los intervinientes, pero, si ella se agregaba en forma manuscrita, con sellos o cualquier otro medio distinto, debía estar refrendada con firma del obligado. Así fue que se propuso en el proyecto, se recibieron numerosas sugerencias y se terminó aprobando en la Comisión Permanente.

En la legislación y doctrina argentina se hace referencia y se controvierten, respectivamente, las denominadas cláusulas de mención facultativa, tales como las siguientes: cláusula "no a la orden" (debate doctrinario muy interesante producido por **Héctor CAMARA, MOSSA, GOMEZ LEO, GUALTIERI y WINIZKY, Giuseppe FERRI y**

PAVONE LA ROSA). Cláusula "no aceptable"; cláusula de "pago en moneda extranjera"; cláusula de "intereses" y cláusula "sin protesto".

El artículo 13 de la Ley Chilena refiere que además de las menciones indicadas en la Ley como requisitos formales que debe contener la letra de cambio, ésta puede incluir las siguientes estipulaciones: "cláusula de ser reajutable la cantidad librada"; "cláusula de intereses"; "cláusula sin obligación de protesto"; y "otras menciones que no alteren la esencia de la letra".

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** explica más bien que se ha efectuado, en doctrina, diversas clasificaciones de las cláusulas que se puede agregar tanto en la declaración cartásea de creación de la cambial como en los diversos actos cambiarios que se documenta en ésta, tal el caso de la aceptación, el endoso y el aval. Siguiendo al profesor **J. GARRIGUES**, alude a cláusulas enunciativas y facultativas. Dentro de las primeras a aquellas tales como "según aviso" que persigue dar cuenta al girado de que debe aceptar o pagar la letra de cambio conforme a la comunicación que el librador le efectúe; y "valor recibido", la cual denota que el librador ha descontado la letra de cambio ante un cambista y éste, que figura como tomador del título, le ha adelantado el dinero.

Dentro de las segundas, se dividen en (1) previstas y permitidas; (2) previstas y no permitidas; (3) no previstas y permitidas; y (4) no previstas y no permitidas. Dentro de las primeras, las cláusulas "a la orden", sobre "intereses compensatorios" y en el caso de esta ley 27287, todas las previstas entre los Arts. 49 a 55 más los casos del plazo para la presentación a la aceptación a que se refieren los Arts. 128.2, 130.1, 103.2, 130.3, 131.1, 134.2 y 135; dentro de las segundas, se podrían señalar, por ejemplo las que anulan la letra de cambio como tal o se tienen por no escritas como tal el caso de una letra de cambio "al portador"; condicionamiento de la promesa de pago que efectúa el librador; promesa de pago en especie; fechas de pagos escalonadas en una letra de cambio o las de "sin garantía de pago", puesta por el girador (transgrede Art. 123 de esta NLTV) o "condicionamiento del endoso" (transgrede Art. 35.1 de esta NLTV). Dentro de las terceras, la cláusula de intereses moratorios, que ahora está prevista en el Art. 51 de esta NLTV; y la cláusula por la cual se expresa el importe de la cambial en letras y números, lo cual no es

exigido por la ley, pero que es relativamente frecuente. Dentro de las cuartas, ellas se originan en prácticas incompatibles con el sistema cartáseo, razón por la cual, en caso de que se las incluya en la letra de cambio, no producirán efectos cambiarios, por ejemplo, si se otorga un aval de una obligación cambiaria, pero sometiéndolo a una condición y para el caso de Perú, nosotros diríamos, también el caso de un aval que aparezca en documento separado, lo cual para nosotros, no tiene eficacia alguna, cambiariamente, toda vez que el Art. 58.1 señala que "el aval debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor avalado o en hoja adherida a él, observando en este último caso las formalidades que la presente ley establece"; en cambio, el Art. 33 de la ley argentina prescribe que "el aval puede constar en la misma letra o su prolongación, o en documento separado, debiendo en este caso indicar el lugar donde ha sido otorgado".

Revisemos a continuación algunas ejecutorias supremas y otros pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia, respecto a cláusulas especiales, dejando constancia que la primera que transcribimos bien podría incluirse al comentar el art. 119.2 de esta misma ley. Veamos:

Exp. Nº 1155-91 Lambayeque. Si la cambial no indica ninguna de las formas de giro que prevé el Art. 63 de la Ley 16587, pero en la parte superior de ésta contiene la indicación precisa de la fecha de vencimiento, debe entenderse como una letra de cambio girada a fecha fija.

Lima, veinte de enero de mil novecientos noventidós.- VISTOS; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO: que si bien en la cambial de fojas tres sólo se indica a treinta días y ello, no importa ninguna de las formas de giro de una letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el artículo sesentitrés de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete, sin embargo en el presente caso dicha cambial contiene en su parte superior la indicación precisa de su fecha de vencimiento por lo que en rigor se trata de una letra girada a fecha fija, la misma que ha sido protestada oportunamente; declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas veinte, su fecha quince de julio de mil novecientos noventiuno; que confirmando la apelada de fojas trece, fechada el seis de junio del mismo año, declara fundada la demanda

de fojas cuatro, y en consecuencia se adelante ejecución por la suma de tres mil dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de pago, con lo demás que contiene; condenaron en las costas del recurso y en la multa de ley a la parte que lo interpuso.

3.18.1. CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA

Artículo 49º .- Prórroga sin intervención del obligado

49.1. El plazo de vencimiento de los títulos valores puede prorrogarse en la fecha de su vencimiento o aún después de él, siempre que:

- a) el obligado que admitió tal prórroga haya otorgado su consentimiento expreso en el mismo título valor;*
- b) no se haya extinguido el plazo para ejercitar la acción derivada del título valor a la fecha en que se realice la prórroga; y,*
- c) el título valor no haya sido protestado o no se haya obtenido la formalidad sustitutoria, de ser el caso.*

49.2. Las prórrogas surtirán plenos efectos, por el sólo mérito de la consignación del nuevo plazo de vencimiento que deje el tenedor en el mismo título, firmando dicha prórroga o prórrogas que conceda.

49.3. El cómputo del plazo de prescripción de la acción cambiaria se reinicia a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las prórrogas.

49.4. La cláusula de prórroga acordada con el obligado principal en oportunidad de la emisión o aceptación del título, surte sus efectos inclusive frente a los obligados solidarios o garantes que hubieren intervenido en el título que consigne dicha cláusula, así como frente a quienes intervengan en el título valor luego de las prórrogas.

49.5. Procederá la revocatoria de esta cláusula, siempre que el obligado principal o el obligado solidario o sus garantes dirijan una carta notarial al tenedor, señalándole que no conceda más prórrogas, desde la fecha de recepción de dicha comunicación notarial, en cuyo caso el tenedor deberá comunicarle la fecha de vencimiento que tenga el título valor, quedando impedido de prorrogarlo. La inobservancia de esta obligación por parte del tenedor, no afecta los

derechos de tercero de buena fe, encontrándose en ese caso el obligado que dirigió la comunicación notarial facultado a realizar el pago antes de la fecha de vencimiento consignado en el título.

49.6. Además de observar los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo, el tenedor sólo podrá prorrogar a fecha fija y por el mismo importe original del título valor o monto menor, más reajustes, intereses y comisiones pertinentes según las condiciones que consten en el mismo documento. Efectuada la prórroga queda facultado a comunicar el nuevo vencimiento al obligado principal, obligados solidarios y garantes que hubieren; y, a requerimiento de éstos, deberá informarles de las prórrogas que conceda.

El antecedente de la presente figura, lo encontramos en el art. 202 de la Ley 16587. Si bien, constituye ésta la principal fuente, difiere de la redacción y concepto mismo expresado en el actual art. 49.

En virtud del citado art. 202, procedía la renovación de la letra de cambio, el pagaré y el vale a la orden, si se insertaba en el mismo título la cláusula de renovación. En efecto, el art. 202 expresaba: "Si la letra de cambio, el pagaré, el vale a la orden, fueren renovados en virtud de cláusula suscrita en el respectivo título, después de vencido y antes de haber prescrito el plazo de prescripción volverá a ser computado desde la fecha del nuevo vencimiento". Esta redacción trajo problemas pues numerosas veces las prórrogas o renovaciones se hacían el mismo día del vencimiento de la obligación original y la ley era muy precisa al referir que la renovación podía hacerse después de vencido el título lo que trajo como consecuencia, obvio, interpretaciones ad litteram por parte del poder judicial y declaraciones de títulos valores perjudicados, ergo, extinguidas las relaciones cambiarias. La Ley 26702 corrigió esta situación a través de su art. 168 el cual señala: "RENOVACION DE TITULOS VALORES EN PODER DE EMPRESAS DEL SISTEMA. Los títulos valores en poder de una empresa del sistema financiero, que representan obligaciones en su favor, pueden ser renovados por ellas a su vencimiento y después de él, siempre que el obligado haya otorgado su consentimiento escrito por anticipado y no hayan prescrito las acciones cartulares. En tal caso el cómputo del plazo de prescripción se reinicia a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las renovaciones. Para el caso de prórroga y renovación de warrants

sobre productos perecibles se debe contar con la aprobación expresa de los almacenes generales de depósito, emisores del título".

BONFANTE y GARRONE nos dicen que "La cláusula de renovación sirve para que la nueva letra (cuando se renueva una anterior) tenga los mismo efectos de la precedente. Estos efectos sólo son efectivos en las relaciones cambiarias de obligados inmediatos. Cambiariamente la nueva letra no podrá mantener vigente o hacer renacer obligaciones de quienes, supuestamente, ya no figuren en el documento (endosantes, avalistas, etc.)"⁶⁹.

El art. 49 que ahora nos ocupa, no menciona a la renovación, sino más bien hace referencia a la prórroga. Ambos términos poseen significados diferentes y, surten efectos, también diferentes.

Guillermo CABANELLAS⁷⁰ define a la prórroga como el aplazamiento del acto o hecho, para un tiempo ulterior o como el alargamiento de un plazo.

A modo de ejemplo, podemos citar el caso contemplado por el art. 1700 del C.C., el mismo que refiere que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Del tenor de la norma se puede apreciar que el legislador diferencia a la renovación, de la simple continuación o prórroga del contrato.

La renovación es el arreglo o cambio que deja algo como nuevo. Es también sinónimo de sustitución, reemplazo o reiteración de algo⁷¹.

Al respecto, antes se ha transcrito el art. 168 de la LdB.

La prórroga, a diferencia de la renovación, no implica la formación de una nueva relación jurídica patrimonial entre las partes, sino más bien la extensión de la vigencia de las obligaciones

⁶⁹ BONFANTI, Mario Alberto y GARRONE, José Alberto. Op. cit., Páginas 213 y 214.

⁷⁰ CABANELLAS, Guillermo. Op. cit., Tomo VI, Página 480.

⁷¹ CABANELLAS, Guillermo. Op. cit., Tomo VII, Página 134.

adquiridas en virtud de aquélla. Contrariamente, la renovación si permite el nacimiento de una nueva relación jurídica entre las partes, pues, la primera u originaria se extinguió, siendo sustituida por otra vinculación de la misma naturaleza.

Si ambos institutos jurídicos son diferentes, resulta lógico que sus efectos también lo sean. Sin embargo, cuando se trata de computar el plazo de prescripción de las acciones derivadas del título valor, encontramos que en ambos casos éste se reinicia a partir de la o las fechas de vencimiento de las prórrogas o desde la fecha de vencimiento de la renovación.

El legislador ha establecido que la cláusula de prórroga podrá insertarse en la fecha de vencimiento del título o después de él, siempre que:

- El obligado que admitió tal prórroga, haya otorgado su consentimiento expreso en el mismo título valor;
- No se haya extinguido el plazo para ejercitar la acción derivada del título valor a la fecha en que se realice la prórroga; (se refiere a los plazos de prescripción de las acciones cambiarias regulados en el art. 96 de la presente ley)
- El título valor no haya sido protestado o no se haya obtenido la formalidad sustitutoria, de ser el caso (v.gr. cheque, factura conformada, etc)

La prórroga surtirá efecto desde el momento en que se consigna el nuevo plazo de vencimiento de la obligación, el cual deberá ser firmado por el tenedor.

El cómputo del plazo de la acción cambiaria se reinicia a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las prórrogas.

En cuanto a los efectos de la inclusión de la cláusula de prórroga, se establece que si ésta es acordada con el obligado principal en oportunidad de la emisión (en este caso, se le denomina girado) o aceptación del título (en el momento de la aceptación, se convierte en aceptante) surte sus efectos inclusive frente a los obligados solidarios o garantes que hubieren intervenido en el título,

así como frente a quienes intervengan en el título luego de las prórrogas.

Se precisa, de otra parte, la posibilidad de revocación de la cláusula de prórroga. Esta procederá, si el obligado principal o el obligado solidario o sus garantes, dirigen una carta notarial al tenedor, señalándole que no conceda más prórrogas, desde la fecha de recepción de dicha comunicación notarial.

En este caso, el tenedor deberá comunicar la fecha de vencimiento del título valor, quedando impedido de prorrogarlo.

Aunque cuando el tenedor incumpliera esta obligación, los terceros de buena fe no ven afectados sus derechos; quedando obligado en este caso, el obligado principal o solidario o sus garantes a efectuar el pago antes de la fecha de vencimiento consignada en el título.

Finalmente, se dispone que la prórroga sólo podrá ser a fecha fija y por el mismo importe señalado en el título valor o monto menor, más reajustes, intereses y comisiones pendientes según las condiciones del documento.

Transcribimos a continuación algunas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyos criterios tienen estrecha conexión con la temática de la prórroga. Veamos.

(1) Exp. N° 1532-89 Lima. La renovación de un pagaré es posible hacerla después del vencimiento y antes que transcurra el plazo de prescripción, mas no cuando ha sido protestado, porque entonces ya no hay plazo que prorrogar sino acciones que ejercitar y para cuya conservación, precisamente se ha formalizado el protesto.

Lima, veintinueve de noviembre de mil novecientos noventiuno.- VISTOS; y CONSIDERANDO: que en la demanda de fojas cinco, incoada en la vía ordinaria, se pretende el pago solidario de la suma de treintiún mil trescientos treinta dólares con cincuentiun, centavos, importe del pagaré de fojas cuatro, haciéndose uso con tal finalidad de la acción cambiaria pertinente; que la vencimiento de un título valor la diligencia de protesto tiene por objeto autenticar en forma indubitable

el hecho de habersele presentado al deudor para los efectos del pago y el cumplimiento de esta obligación; que producida esta situación; que además precisa en ese momento los derechos y obligaciones de los firmantes, el tenedor no tiene más opciones que hacer valer individual o acumulativamente las acciones cambiarias, o en su caso, la causal o la de enriquecimiento ilícito; que la renovación de un pagaré en virtud de la cláusula suscrita en el respectivo título es posible hacerla después del vencimiento y antes de que se transcurra el plazo de prescripción, mas no cuando ha sido protestado, porque entonces ya no hay plazo que prorrogar, sino acciones que ejercitar y para cuya conservación, precisamente se ha formalizado el protesto; que el pagaré de fojas cuatro fue protestado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochentidós, renovado con fecha veinte de enero de mil novecientos ochentitrés y vuelto a protestar con fecha veintiocho de enero del mismo año; que finalmente la recuperación de la acción documental no se obtiene mediante un nuevo protesto sino por el reconocimiento judicial y siempre que la demanda se notifique antes del vencimiento del plazo respectivo; y estando a lo dispuesto en los artículos décimo, décimo séptimo, cincuentinueve, ciento veinticuatro, ciento treintitrés, ciento noventa y seis y doscientos dos de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas ciento cuarentiocho, su fecha seis de abril de mil novecientos ochentinueve, que confirmando la apelada de fojas ciento treinticinco, fechada el dieciocho de agosto de mil novecientos ochentiocho, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene; reformando la de vista y revocando la apelada; declararon IMPROCEDENTE dicha demanda; sin costas.

(2) Exp. N° 15987-96. Lima. El art. 63 de la Ley N° 16587, establece las diferentes formas de vencimiento en las que puedan ser giradas una letra de cambio. Por ende, las cámbiales giradas “al vencimiento” adoptan una forma no prevista en la ley.

Lima, veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis.- AUTOS y VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que, se desprende del tenor de la demanda que antecede presentada por Confecciones Monina Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que de los fundamentos de hecho, la empresa recurrente expresa que va a interponer proceso de ejecución de la obligación pendiente de pago; SEGUNDO: a que, la Ley de Títulos Valores 16587 establece que la

letra de cambio deberá ser girada: a) a la vista, b) a cierto plazo desde la vista; c) a cierto plazo desde la fecha de emisión, d) a fecha fija – artículo 63; TERCERO: que los títulos valores que se anexan no contienen las formalidades establecidas en el artículo antes acotado, pues han sido giradas al “vencimiento” el mismo que no se encuentra previsto en la ley, consecuentemente el proceso de ejecución que se pretende plantear en el futuro proceso va a ser denegado, por carecer los títulos valores de las formalidades exigidas por la ley de la materia; en tal virtud estando a lo glosado; se declara IMPROCEDENTE la Medida cautelar fuera del proceso solicitado.

Esta ejecutoria tiene estrecha conexión con los arts. 1, 63 y 64 de la ley 16587 y 1.1., 49, 119.1 g), 119.2. y 121.1 y 121.4. de esta NLTV 27287 y explica los criterios que tenía el magistrado con arreglo a la anterior ley, los que habrán de ser modificados, evidentemente, con esta nueva norma legal.

(3) Exp. N° 2169-97 Huánuco. “... Las cláusulas renovatorias pueden ser realizadas en dos modalidades, primero la renovación llamada facultativa, mediante la cual, en el mismo título y a la fecha de la suscripción del mismo, se autoriza al tenedor a practicar las renovaciones correspondientes en forma unilateral y segundo, la renovación denominada cláusula convencional, en virtud de la cual, los sujetos de la relación cambiaria en cada renovación que se practique, ésta tiene que ser expresamente autorizada y suscrita por aquéllos, y además, puesto de manifiesto en el título valor en la cláusula respectiva o en hoja adherida a él...”

Lima, veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa vista en audiencia pública el veintiocho de setiembre del año en curso emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Federick Randolo Rivera Berrospi en representación de don Apolinario Simón Aquino contra la resolución de fojas ciento veinticinco, su fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la sentencia apelada de fojas setenta y cinco, su fecha treintinueve de julio del mismo año, declara infundada la contradicción formulada por la ejecutada a fojas treinta y dos; fundada la demanda de fojas doce, en consecuencia dispone llevar adelante la ejecución de la

suma de cuarenticinco mil dólares americanos, más intereses compensatorios y moratorios pactados y gastos del protesto, con costas y costos. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha veintidós de enero de mil novecientos noventiocho ha estimado procedente el recurso por la causal referida a la inaplicación del Artículo doscientos dos de la Ley de Títulos Valores en el que se sostiene que este artículo exige que las renovaciones consten en cláusula suscrita en el mismo título con las firmas del acreedor y deudor, lo que no ha ocurrido en autos. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que de conformidad con el Artículo doscientos dos de la Ley de Títulos Valores si el pagaré fuere renovado en virtud de cláusula suscrita en el respectivo título, después de vencido y antes de haber prescrito, el plazo de prescripción volverá a ser computado desde la fecha del nuevo vencimiento. Segundo.- Que dicha norma prevé la figura de la renovación mediante la cual, las partes de la relación cambiaria, acuerdan renovar la obligación objeto del documento cartular conservando por tanto éste la función constitutiva que le es propia así como los principios que le gobiernan como son la abstracción, la literalidad, la autonomía y la incorporación. Tercero.- Que asimismo, las cláusulas renovatorias pueden ser realizadas en dos modalidades, primero la renovación llamada facultativa, mediante la cual, en el mismo título y a la fecha de la suscripción del mismo, se autoriza al tenedor a practicar las renovaciones correspondientes en forma unilateral y segundo, la renovación denominada cláusula convencional, en virtud de la cual, los sujetos de la relación cambiaria en cada renovación que se practique, ésta tiene que ser expresamente autorizada y suscrita por aquéllos, y además, puesto de manifiesto en el título valor en la cláusula respectiva o en hoja adherida a él, en concordancia con el Artículo segundo de la ley cartular. Cuarto.- Que los pagarés que son materia de ejecución están sujetos a la renovación facultativa con la salvedad de que en ambos documentos se expresa que el fiador, que no ha sido emplazado en la presente acción por voluntad de la accionante, acepta las prórrogas y/o renovaciones que se conceda a los ejecutados, aun cuando, no estén autorizadas por ellos y sin que sea necesario que se les comunique. Quinto.- Que en virtud del Artículo segundo de la Ley de Títulos Valores el texto del documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones indicados en el título valor; pues bien, aparece que por la función constitutiva que cumplen

los pagarés puestos a cobro surge que las renovaciones pueden efectuarse aun cuando no estén autorizados por los ejecutados e incluso sin que tales prórrogas y/o renovaciones sean comunicadas a los deudores principales y al fiador, en consecuencia resulta evidente que la ejecutante estaba facultada para practicar las renovaciones que cuestiona el impugnante. Sexto.- Que por otro lado, los pagarés sub litis son en sí una unidad material y jurídica toda vez que el contenido de la declaración cartular no puede ser fraccionada, por consiguiente, si bien, los ejecutados no aparecen firmando los documentos cartulares submateria, toda vez que el acuerdo sobre la renovación de los mismos ha sido señalado en la parte final, referente a la participación del fiador, también lo es que, en virtud del propio principio de literalidad y el de incorporación, las renovaciones serán practicadas, tal como se indica en el anverso de los títulos, aun cuando no estén autorizados por los ejecutados. Sétimo.- Que siendo así la norma sub exámine resulta inaplicable al caso de autos por lo que cabe desestimar el recurso en virtud del Artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil. 4. SENTENCIA: Estando a los considerando que preceden declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por don Federick Randolo Rivera Berrospi en representación de don Apolinario Simón Aquino, en consecuencia NO CASAR la sentencia de fojas ciento veinticinco, su fecha seis de octubre de mil novecientos noventisiete.

(4) Exp. Nº 1361-95. Lima. "... Si la cláusula (de renovación) fuere anterior al vencimiento, se produce incertidumbre en cuanto a este hecho, contrariándose el principio de la certeza en referencia a la oportunidad en que la obligación cambiaria debe ser exigible; teniendo el documento en tal caso, dos vencimientos, el originario y el renovado anticipadamente..."

Lima, cinco de diciembre de mil novecientos noventaicinco.- VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Mansilla Novella; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo doscientos dos de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete determina que "si la letra suscrita en el respectivo título, después de vencido y antes de haber prescrito, el plazo de prescripción volverá a ser computado desde la fecha del nuevo vencimiento"; SEGUNDO: Que siendo esto así, dicha norma, la misma que se encuentra ubicada dentro de las "Disposiciones Finales" de la Ley antes referida, trata sobre la

prescripción en caso de renovación; TERCERO: Que si bien es cierto, el citado dispositivo establece que la renovación debe haber sido insertada después de vencido el título; también lo es, que el propio dispositivo determina que la cláusula de renovación sea suscrita por el obligado; CUARTO: Que si la cláusula fuere anterior al vencimiento, se produce incertidumbre en cuanto a este hecho, contrariándose el principio de la certeza en referencia a la oportunidad en que la obligación cambiaria debe ser exigible; teniendo el documento en tal caso, dos vencimientos, el originario y el renovado anticipadamente; QUINTO: Que para los casos antes señalados, el artículo doscientos dos de la Ley antes acotada, en su parte final, dispone que el plazo de prescripción deberá ser computado después de la fecha del nuevo vencimiento, siempre que no hubiere vencido el plazo de prescripción; SEXTO: Que en el caso de autos, del pagaré corriente a fojas dos, aparece que la emitente y su fiador aceptan las prórrogas totales o parciales que se anotan en el documento, aun cuando no estén suscritas por ellos; razón por la cual, en el caso sub-litis, los ejecutados no pueden contradecir sus actos propios; SÉPTIMO: Que igualmente, del propio pagaré parece haberse renovado hasta el día dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, razón por la cual el protesto insertado a fojas dos vuelta, se ha practicado dentro del plazo legal; OCTAVO: Que siendo esto así, el pagaré en cuestión reúne los requisitos contemplados por el artículo ciento noventa y nueve de la Ley número dieciséis mil quinientos ochenta y siete: NOVENO: Que de otro lado, los ejecutados no han probado de modo alguno los argumentos esgrimidos al formular su contradicción, la cual estuvo basada en la defensa previa propuesta, la cual fue declarada improcedente en la audiencia de fojas sesenta y siete a sesenta y ocho; ni menos aún, han probado haber efectuado pago alguno a cuenta de la deuda reclamada; y DECIMO: Estando a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y ocho, ciento noventa y seis, ciento noventa y siete, seiscientos noventa y tres, inciso primero y trescientos sesenta y cuatro del Código Procesal Civil. REVOCARON la sentencia apelada corriente a fojas setenta y seis a setenta y ocho, de fecha trece de junio último, que declara improcedente la demanda de fojas diez, por carecer el título con que se aparejó la misma de mérito ejecutivo dejándose a salvo el derecho del accionante par que lo haga valer conforme a ley, con costas; REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la contradicción formulada por los ejecutados a fojas veintiocho y treinta y ocho; y FUNDADA la demanda interpuesta de fojas diez a catorce; y, en

consecuencia, que los ejecutados Conservera del Sur Sociedad Anónima y don Manuel Jorge Hernán Martoral Defeudis cumplan con abonar solidariamente a la ejecutante Banco Internacional del Perú la suma de ciento treinticuatro mil dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de su pago, más los intereses legales y gastos del protesto, con costas y costos.

(5) Exp. N° 1333-98. Lima.“... La renovación del pagaré equivale a la prórroga del plazo del crédito y es una concesión del acreedor, y la renovación otorgada por el acreedor, en virtud de la cláusula suscrita en el mismo título, está expresamente autorizada por el artículo doscientos dos de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 16587), debiendo producirse después de vencido el plazo inicial para el pago y antes de su prescripción...”

Lima, tres de julio de mil novecientos noventiocho.- VISTOS: interviniendo como vocal ponente la doctora Cabello Arce; por sus fundamentos, y CONSIDERANDO: ADEMÁS: PRIMERO: que viene en apelación ante este Colegiado la resolución que rechaza el pedido de nulidad formulado por la demandante respecto al escrito de contestación de la demanda del ejecutado, la resolución que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por el demandado, la resolución que rechaza la prueba pericial también ofrecida por el demandado y finalmente la sentencia recaída en auto; SEGUNDO: que respecto a la nulidad formulada por la parte demandante resulta de aplicación al caso el Principio de Convalidación consagrado por el artículo ciento setentuno del Código Procesal Civil, en tanto el propio demandado se presenta al proceso posteriormente ratificando todos los extremos del escrito de contestación de demanda suscrito únicamente por su abogado, cuestionado por la ejecutante, TERCERO: que la renovación del pagaré equivale a la prórroga del plazo del crédito y es una concesión del acreedor, y la renovación otorgada por el acreedor, en virtud de la cláusula suscrita en el mismo título, está expresamente autorizada por el artículo doscientos dos de la Ley de Títulos Valores, debiendo producirse después de vencido el plazo inicial para el pago y antes de su prescripción, como en efecto ha sucedido en el caso de autos: CONFIRMARON el auto de fojas treintinueve su fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete que declara inadmisibile la nulidad propuesta por el demandante, el auto de fojas setentidós su fecha cinco de marzo de mil novecientos

noventiocho que declara infundada la excepción propuesta por el demandado, el auto de fojas ochenta su fecha tres de abril de mil novecientos noventiocho que deniega la pericia grafotécnica y CONFIRMARON la sentencia de fojas noventa su fecha doce de mayo de mil novecientos noventiocho que declara infundada la contradicción, funda la demanda y ordena que el ejecutado pague a la ejecutante la suma de ochentiocho mil ochocientos setenta y dos punto veintiún dólares; con lo demás que contiene.

(6) Exp. N° CAS 2050-T-96 Lima. "... El Pagaré puede ser renovado después de vencido y antes de que prescriba, en ningún caso si ha sido protestado por falta de pago, pues entonces ya no existe plazo por prorrogar y sólo cabe las acciones derivadas del protesto, y (...) las renovaciones posteriores al protesto y las renovaciones prematuras le quitan mérito ejecutivo..."

Lima, veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Vista la Causa número dos mil cincuenta y noventa y seis; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Juan Carlos Hurtado Miller mediante escrito de fojas ciento sesentinueve, contra la resolución de vista de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de fojas ciento dos, fechada el siete de junio del mismo año, declara infundada la contradicción formulada por CIMEX del Perú Sociedad Anónima, don Juan Carlos Hurtado Miller y doña Leonor de Asín de Hurtado y fundada la demanda; en consecuencia, ordena se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados cumplan con pagar en forma individual o solidaria la suma puesta a cobro, más intereses legales, gastos de protestos, costas y costos del proceso; FUNDAMENTO DEL RECURSO.- El recurrente aduce en su recurso la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, porque la sentencia de vista no ha resuelto sobre la caducidad del Título Valor puesto al cobro, y así mismo, que se ha inaplicado el Artículo ciento noventa y seis de la Ley de Títulos Valores; que son causales previstas en los incisos segundo y tercero del

Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; CONSIDERANDO: Primero.- que, concedido el Recurso de Casación por resolución de fojas ciento setenta por resolución de fecha siete de agosto último declaró procedente sólo en cuanto a la causal del inciso segundo del Artículo trescientos ochentiséis del Código Adjetivo, por lo que, es preciso determinar si se ha producido dicha infracción; Segundo.- que, el recurrente señala que se ha inaplicado el Artículo ciento noventiséis de la citada Ley de Títulos Valores, el que establece la caducidad de las acciones cambiarias, directa y de regreso, si no se hubiera obtenido el protesto oportunamente, por cuanto el Banco Internacional del Perú pretende que, en su calidad de avalista, pague el importe de un Pagaré que caducó, porque habiendo vencido el día nueve de febrero de mil novecientos novecicinco, fue renovado unilateralmente el día veinte de ese mismo mes, después de expirado el término para el protesto; Tercero.- que, conforme a la mejor Doctrina, el Pagaré es una promesa escrita, pura y simple, de pagar cierta cantidad de dinero a la orden de determinada persona, a cierto plazo, de donde resulta su carácter unilateral y abstracto, porque la promesa del suscriptor queda desvinculada de la causa y limita en los términos literales del título, de tal modo que sólo puede oponerse al pago, por las razones enumeradas taxativamente en el Artículo veinte de la acotada Ley; Cuarto.- que, el suscriptor de un Pagaré nunca es obligado en vía de regreso, y contra él y su avalista sólo se puede ejercer la acción directa, regida por las reglas concernientes a la acción cambiaria correspondiente a una letra, como establece el Artículo ciento treintiuno de la misma norma; Quinto.- que, la renovación de un pagaré equivale a la prórroga del plazo del crédito y es una concesión del acreedor, y la renovación otorgada por el acreedor, en virtud de cláusula suscrita en el mismo título, está expresamente autorizada por el Artículo doscientos dos de la Ley de Títulos Valores, debiendo producirse, después de vencido el plazo para el pago y antes de su prescripción; Sexto.- que, de acuerdo a dicho dispositivo, el título debe contener cláusula autoritativa, y la renovación, como anota el profesor Montoya Manfredi, en sus comentarios a la Ley de Títulos Valores, página seiscientos quince de la Quinta Edición, debe insertarse después de vencido el título y no antes, pues si la cláusula fuere anterior al vencimiento, se produciría incertidumbre en cuanto a este hecho, contrariándose el Principio de la Certeza en referencia a la oportunidad en que la obligación cambiaria debe ser exigible; Séptimo.- que, la Corte Suprema, en

reiteradas Ejecutorias, ha sancionado esta operación cambiaria, producida en las condiciones señaladas por el Artículo doscientos dos, ya citado, habiendo establecido que el Pagaré puede ser renovado después de vencido y antes de que prescriba, en ningún caso si ha sido protestado por falta de pago, pues entonces ya no existe plazo por prorrogar y sólo cabe las acciones derivadas del protesto, y que las renovaciones posteriores al protesto y las renovaciones prematuras le quitan mérito ejecutivo, (ver la colección de Ejecutorias publicadas en Acciones Judiciales de Elio Pimentel Benites. Lima, mil novecientos noventidós y las glosadas por Pedro Flores Polo en su Código de Comercio, página cuatrocientos noventinueve); Octavo.- que, la Ejecutoria Suprema de fecha veintitrés de julio de mil novecientos setentitrés, citada por Montoya Manfredi y publicada en la Revista de Jurisprudencia Peruana número trescientos cincuentiséis (obra citada, página seiscientos dieciséis), no contiene una doctrina contraria, pues se refiere al caso de un Pagaré protestado, como se lee de su texto completo, y que por lo tanto no podía renovarse; Noveno.- que, por analogía, la reaceptación de una Letra de Cambio, prevista en el Artículo ochenticuatro de la Ley de Títulos Valores, es posible por acuerdo entre el tenedor y el aceptante, lo que es reconocido por la Doctrina, ya que el contrato de cambio nace por acuerdo entre el tomador y librador, de modo que es a estas personas a quienes incumbe establecer todas las condiciones esenciales de la Letra de Cambio, entre ellas la fecha o el plazo para el pago (ver Arturo Davis, La Letra de Cambio, tomo II Santiago, mil novecientos treinticinco, página cuarentitrés) y ha sido sancionado por la Jurisprudencia Nacional (ver La Letra de Cambio ante los Tribunales Peruanos por Jorge Eugenio Castañeda, San Marcos, mil novecientos cuarentitrés, página veintitrés); Décimo.- que, en el caso del Pagaré, la hipótesis del Artículo doscientos dos bajo comentario, existe la autorización anticipada del suscriptor, de tal modo que igualmente hay un acuerdo en la renovación, tanto más si el plazo, conforme al Artículo ciento setentinove del Código Civil se presume establecido en beneficio del deudor: Décimo Primero.- que, en consecuencia, el Artículo ciento noventiséis de la Ley de Títulos Valores, es pertinente al momento del vencimiento fatal del Título Valor, del vencimiento que no se prorroga, y la tesis sostenida por el recurrente, de que la renovación debe extenderse después de vencido el Pagaré y antes de que transcurra el término para el protesto, no encuentra sustento en la interpretación sistemática de ambas normas;

Décimo Segundo.- que, el Pagaré de fojas seis, se suscribió con vencimiento el día nueve de febrero de mil novecientos noventaicinco, fue renovado el día veinte del mismo mes, y a su nuevo vencimiento ha sido protestado, por falta de pago, oportunamente y con arreglo a Ley, por lo que tiene mérito ejecutivo y no se da la inaplicación del Artículo ciento noventa y seis reclamado; Décimo Tercero.- que la novísima Ley General del Sistema Financiero, número veintiséis mil setecientos dos, publicada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en su Artículo ciento sesenta y ocho faculta a los intermediarios financieros a renovar los Títulos Valores que se encuentren en su poder y que representen obligaciones a su favor, a su vencimiento y después de él, siempre que el obligado haya otorgado su consentimiento escrito por anticipado y no hayan prescrito las acciones, lo que viene a confirmar la interpretación anterior; estando a las conclusiones que anteceden y no siendo pertinente al caso de autos la norma de derecho material que se denuncia como inaplicada, declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Juan Hurtado Miller a fojas ciento sesentinueve contra la resolución de vista de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis; CONDENARON al recurrente al pago de las costas y costos originados de la tramitación del recurso, así como al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal.

3.18.2. CLAUSULA DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA

Artículo 50º.- Pacto de pago en moneda extranjera

50.1. En los títulos valores que contengan obligación de pagar una suma en moneda extranjera, podrá acordarse que el pago se efectúe necesariamente en dicha moneda.

50.2. Esta cláusula no es necesario que conste en los títulos valores cuyo pago, según la ley, debe hacerse en la misma moneda extranjera.

50.3. A falta de esta cláusula, en los títulos valores expresados en moneda extranjera, será de aplicación las disposiciones que contiene el Artículo 68º.

En materia sustantiva, la posibilidad de pago en moneda extranjera está regulada en el art. 1237 del C.C. que a la letra dice:

“Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes especiales. Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del vencimiento de la obligación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en contrario en lo referido a la moneda de pago y el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en moneda nacional se haga al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación, o al que rija el día del pago.”

Al respecto, **URIBE RESTREPO**⁷² opina que la estipulación en moneda extranjera efectuada dentro de una operación interna, denota una desconfianza en la moneda nacional como medida de valor. De ahí que, en estos casos, la ley permita al deudor ejercer la llamada facultad de sustitución, en virtud de la cual puede liberarse entregando a su acreedor el equivalente en moneda nacional. Esta es la llamada deuda valutaria impropia, en oposición a la deuda valutaria propia, en la cual el acreedor tiene derecho a exigir el pago en moneda extranjera.

En el art. 1237 precitado, señalan **OSTERLING y CASTILLO**⁷³ es la moneda extranjera la que está *in obligatione* y por tanto, la que debe ser restituida. Esta restitución, como regla general, se efectúa a exclusivo criterio del deudor, en la misma moneda extranjera estipulada o en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del vencimiento de la obligación, salvo, en este último caso, que el deudor retrase el pago, en cuya eventualidad el acreedor podría elegir entre el tipo de cambio del día y lugar de tal vencimiento o el que rige el día del pago.

A través de la cláusula de pago en moneda extranjera, el título valor expresado en dicha unidad monetaria, se pagará necesariamente en esa moneda; conforme lo establecido en el art. 1237 del C.C. Además, el pago del título valor en moneda extranjera cuando sea girado por una persona no domiciliada en el país, o

⁷² URIBE RESTREPO, citado por OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Tomo V, Página 180.

⁷³ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Página 181.

cuando sea cancelable en el exterior, se efectuará en la misma moneda, salvo pacto en contrario.

Para la doctrina italiana, la moneda en que debe ser efectuado el pago de una letra, por ejemplo, es la moneda nacional. Sin embargo, es posible que el título valor contenga la obligación de pagar en moneda extranjera. En aplicación a ello, el título valor puede ser pagado a elección del deudor (obligación facultativa), en moneda nacional según su valor en el día del vencimiento (el denominado principio de conversión), en lugar de pagarse en moneda extranjera, siempre que el deudor no esté en mora.

Si está en mora, el acreedor tiene la elección entre pedir el pago en moneda italiana, según el valor de la moneda en el día del vencimiento, o en el día del pago.

El valor de la moneda extranjera se determina por los usos del lugar de pago: el valor de la moneda extranjera se determina sobre la base del curso del cambio oficial, pero el librador puede establecer que la suma a pagar se calcule según un curso especial, que él debe indicar en la letra.

El art. 50 bajo comentario establece que aquellos títulos valores que contengan obligación de pagar en moneda extranjera, podrá acordarse el pago necesariamente en esa moneda. Asimismo, esta cláusula no es necesaria en los casos de títulos valores cuyo pago debe hacerse en moneda extranjera.

Culmina la norma, remitiéndonos al art. 68 de esta ley, la cual se aplica a aquellos casos en los que los títulos valores prescindan de esta cláusula pero que estén expresados en moneda extranjera. El pago de un título valor expresado en moneda extranjera, podrá verificarse ya sea en la misma moneda o en moneda nacional. En este caso, el pago debe hacerse según su equivalencia al tipo de cambio de venta de la respectiva moneda que la autoridad competente publique en el diario oficial el día del vencimiento o, en su defecto, de la publicación inmediata anterior.

Si el pago en moneda nacional, se hace en fecha posterior al vencimiento, el tipo de cambio de venta será elegido por el tenedor del

título valor, entre aquél que corresponda a la publicación hecha el día del pago o a la que se hizo en la fecha del vencimiento. A falta de publicación del tipo de cambio de la moneda consignada en el título valor, las partes acordarán tal equivalencia y, a falta de tal acuerdo, el tipo de cambio será el que fije el BCR.

Los títulos valores expresados en moneda extranjera serán pagados en la misma moneda extranjera, en los siguientes casos:

- Cuando el lugar de pago señalado en el título valor está ubicado en el extranjero, aun cuando el pago se efectúe dentro de la República.
- Cuando ello se haya pactado de modo expreso, conforme al art. 50.
- En los casos previstos por ley.

3.18.3. CLAUSULA SOBRE PAGO DE INTERESES Y REAJUSTES

Artículo 51.- Pacto de intereses compensatorios y moratorios y reajustes

51.1. Cualquiera que sea la naturaleza del título valor que contenga una obligación de pago dinerario, podrá acordarse las tasas de interés compensatoria y moratoria y/o reajustes y comisiones permitidas por la ley, que regirán durante el período de mora. En su defecto, durante dicho período será aplicable el interés legal.

51.2. Si la ley o la naturaleza del título valor lo permiten, en aquéllos que representen pago de sumas de dinero, podrá acordarse intereses compensatorios, reajustes u otra clase de contraprestaciones que admita la ley, que regirán durante el período comprendido entre su emisión y su vencimiento. Si ello no consta del texto del título y en los casos que la ley no admita tal acuerdo, el título valor tendrá al día de su vencimiento su valor nominal, sin que proceda el pago de intereses, reajustes u otras contraprestaciones hasta dicho día.

Se considera compensatorio el interés, cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Será moratorio, cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago (art. 1242 del C.C.)

El interés compensatorio tiene como propósito restablecer el equilibrio patrimonial, impidiendo el enriquecimiento indebido a favor de una parte e imponiendo, a quien aprovecha el dinero o cualquier otro bien, una retribución adecuada para su uso. Por ello se ha dicho que los intereses compensatorios cumplen con la función económica de retribuir el uso de un capital ajeno⁷⁴.

El interés convencional compensatorio proporciona al acreedor un lucro, un beneficio o ganancia y una compensación por el uso de un capital. El interés moratorio, en cambio, repara los daños y perjuicios que el retraso culpable o doloso en el pago pudiese causar. Los intereses moratorios son, entonces, aquellos que cumplen la función económica de reparar el retardo en la ejecución de una obligación.

El art. 1243 del C.C., señala que la tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio, es fijada por el BCR. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor. La tasa de interés legal será fijada de igual manera, por el BCR.

El artículo 1248 del C.C., se ocupa de los intereses en obligaciones consistentes o representadas en títulos valores. Dicha norma prevé la cuantía o monto de los intereses que el deudor se encuentra obligado a pagar por causa de mora, cuando la obligación consta en un título valor. En caso de que el deudor retarde culpable o dolosamente el pago de una obligación, la misma que está representada por un título valor, deberá devengarse un interés con la calidad de moratorio, cuyo monto será igual a la renta que genere dicho título valor o, a falta de ella, a la tasa del interés legal.

El precepto señala además, el valor sobre el cual han de aplicarse los intereses moratorios, siempre que su cuantía sea la tasa legal. Así tenemos que dicho valor deberá determinarse de acuerdo con la cotización en Bolsa que presenten los títulos valores en los que consta la obligación principal, de la que la deuda de intereses es obligación accesoria.

⁷⁴ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Tomo V, Página 308.

No obstante lo expresado, cuando la obligación consta en títulos valores no cotizados en Bolsa, los intereses deberán aplicarse sobre el valor que dichos títulos tengan en la plaza al día siguiente del vencimiento de la obligación⁷⁵.

El primer inciso del artículo bajo comentario permite que las partes acuerden las tasas de interés compensatorio y moratorio y/o reajustes y comisiones que regirán durante el período de mora. Sin embargo, la tasa de interés que se acuerde entre partes no podrá exceder el límite máximo fijado por el BCR. Si las partes no fijaran convencionalmente las tasas de interés a aplicarse durante el periodo de mora, se considerará el interés legal, que también es establecido por el BCR.

En aquellos títulos valores que representen pago de sumas de dinero, podrá acordarse intereses compensatorios, reajustes u otra clase de contraprestaciones que admita la ley, que regirán durante el periodo comprendido entre su emisión y su vencimiento.

Esta norma, se aplicará a los títulos valores crediticios, siempre y cuando la ley o la naturaleza del título valor lo permitan (es el caso de la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etc.) lo que significa que quedan excluidos los títulos valores representativos de mercaderías o bienes (como el warrant, certificado de depósito) y los que representan derechos (como las acciones).

El periodo de vigencia de los intereses, es decir, entre la emisión y vencimiento del título no se aplica al caso del cheque, pues el art. 181 señala que los intereses moratorios y compensatorios acordados sólo se generarán desde el día siguiente a la fecha de su protesto o de la constancia de su rechazo total o parcial, aplicable al monto no pagado. En defecto de tal acuerdo, el tenedor del cheque no pagado tendrá derecho a los intereses legales.

En los casos en que la ley no admita el acuerdo referido al establecimiento de tasas de interés y otros, o si permitiéndolo la ley, no consta en el título valor; éste tendrá al día de su vencimiento su valor nominal (es decir, el monto consignado en el título), sin que proceda el pago de intereses, reajustes u otras contraprestaciones.

⁷⁵ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Tomo V, Página 230.

La Tasa Activa en Moneda Nacional que sirve como parámetro para establecer los intereses compensatorio y moratorio se publica diariamente en el Diario Oficial “El Peruano” y otros de mayor circulación.

Así, la tasa máxima de interés convencional compensatorio, en términos anuales se aplica en los siguientes casos:

- Cuando se trata de créditos con un plazo no mayor de 360 días, se aplica la tasa de mercado promedio ponderado en moneda nacional: **TAMN**
- Si se trata de créditos con un plazo de 361 a 719 días, se aplica la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional más 1: **TAMN + 1**
- En el caso de créditos con un plazo de 720 o más días, es igual a la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional más 2: **TAMN + 2**

Para operaciones en moneda extranjera, la tasa máxima efectiva de interés convencional compensatorio, en términos anuales, es igual a la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda extranjera: **TAMEX**.

Tratándose del interés convencional moratorio, se ha establecido una tasa referencial de periodicidad anual, efectiva y diferenciada según el tipo de moneda sobre la cual deberá calcularse.

En moneda nacional. La tasa efectiva de interés convencional moratorio, en términos anuales, tratándose de operaciones sujetas al sistema de reajuste de deudas o no, es equivalente al 15% de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional, esto es el 15% **TAMN**.

En moneda extranjera. La tasa efectiva máxima de interés convencional moratorio, en términos anuales, es igual al 20% de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda extranjera, esto es, el 20% **TAMEX**.

La forma para calcular los intereses es la que sigue a continuación⁷⁶:

C= s/. 4000.00

Fecha de inicio de la deuda= 17 de Abril

Fecha del día de pago de la deuda= 09 de Mayo

1. Se toma el factor acumulado **TAMN** del día del inicio de la deuda (17.04.= 125, 35227)
2. Se toma el factor acumulado **TAMN** del día de pago (09-04= 135, 45328)
3. Luego se aplica la fórmula:

$$\frac{F1}{F0} - 1$$

Reemplazando términos:

$$\frac{135,45328}{125,35227} - 1$$

$$= 0.0805$$

Interés: 4000 x 0.0805 = s/. 320

Por otro lado, la Tasa de Interés Legal también se publica diariamente en el Diario Oficial y otros de circulación nacional. Hasta el día 14 de Abril del 2000, la tasa de interés legal en moneda nacional, en términos anuales, era del 11,04%. En la misma fecha pero tratándose de moneda extranjera, la tasa de interés legal en términos anuales, es del 5, 21%.

⁷⁶ CASTRO GALLO, Mario. *Deuda Comercial. Su cobranza*. Tercera Edición, Lima, 1998, Página 415.

3.18.4. CLÁUSULA DE LIBERACIÓN DEL PROTESTO

Artículo 52º.- Cláusula Sin Protesto

Salvo disposición expresa distinta de la ley, en los títulos valores sujetos a protesto, podrá incluirse la cláusula "Sin Protesto" u otra equivalente, en el acto de su emisión o aceptación, lo que libera al tenedor de dicha formalidad para ejercitar las acciones derivadas del título valor, de acuerdo y con los efectos señalados en el Artículo 81º.

En la ALTV su art. 47 señalaba que tratándose de títulos valores sujetos a protesto, la cláusula sin protesto u otra equivalente, se tendría por no puesta. Por el contrario, la ley actual sí permite la inclusión de tal cláusula en títulos valores sujetos a protesto, pero en el acto de su emisión o aceptación. Como se sabe, no todos los títulos valores están sujetos a protesto, existen títulos valores que en forma alternativa pueden ser sometidos a una formalidad sustitutoria.

TITULOS VALORES SUJETOS A PROTESTO	TITULOS VALORES SUJETOS A FORMALIDAD SUSTITUTORIA	TITULOS VALORES NO SUJETOS A PROTESTO
Letra de cambio (art. 147) y Pagaré (art. 162).	Letra de cambio (art. 81, 82) Pagaré (art. 162) Factura Conformada (Art. 166.2) Cheque (Art. 213) Warrant (art. 233.2). Título de Crédito Hipotecario Negociable (art. 243)	Certificado Bancario en Moneda Extranjera (art. 222) Certificado Bancario en Moneda Nacional (art. 223) Conocimiento de Embarque (art. 249.2) Carta de Porte (art. 254.2) Valores mobiliarios (arts. 255. 6 y 7)

Podrá incluirse la cláusula "Sin protesto" en bs títulos valores sujetos a protesto y en aquellos que además de éste, también contemplan la posibilidad de sujetarse a una formalidad sustitutoria.

El vigente artículo 52, establece que la inclusión de la cláusula sin protesto u otra equivalente, en el acto de la emisión o aceptación del título, libera al tenedor de éste de dicha formalidad para ejercitar las acciones derivadas del título valor, de acuerdo con los efectos señalados en el art. 81. Como vemos, sólo se, mencionan dos etapas de la vida del título valor: la emisión y la presentación. Si dicha cláusula se incorpora al título desde el momento de su emisión, quien la incluirá será el girador, librador o emitente. Si su inclusión ocurre en el momento de su aceptación, será el aceptante quien la inserte, facilitándole al tomador o beneficiario del título valor el ejercicio de las acciones derivadas de éste.

De insertarse la cláusula que libera del protesto al título valor deberá tomarse en cuenta las disposiciones del art. 81 de la presente ley, que refiriéndose a la acción cambiaria, establece que ésta se ejercitará por el sólo mérito de haber vencido el plazo señalado en el título valor. Sin embargo, esto no impide que el tenedor opte por su protesto, en cuyo caso los gastos respectivos serán de su cuenta. “Salvo disposición expresa distinta de la ley ...” significa que habrán situaciones en que no será procedente la inclusión de la cláusula sin protesto en el título valor porque así lo prohíbe esta misma Ley 27287 o cualquier otra ley, naturalmente. Una de esas situaciones es precisamente la contemplada en los arts. 147.4 y 81.3 de esta Ley 27287 los cuales establecen que la cláusula sin protesto no resulta aplicable al protesto por falta de aceptación de la Letra de Cambio; pues, el protesto por falta de aceptación deberá llevarse a cabo, aun cuando ésta contenga dicha cláusula, con la finalidad de que se pueda iniciar acción de regreso contra el girador. Es adecuado precisar que el supuesto del art. 228 de la LdB N° 26702, es parecido pero no igual. En efecto, por el saldo deudor en cuenta corriente la empresa del SFN gira una letra de cambio a la vista, la que no requiriendo ser aceptada, si no fuere pagada, se protesta por esto último, es decir, por su falta de pago, dejando expedita la acción ejecutiva. Acá no hay protesto por falta de aceptación.

La ley argentina estatuye expresamente la posibilidad en las letras de cambio y los pagarés la cláusula "sin protesto", con el objeto de dispensar al portador de levantar protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer las acciones cambiarias de regreso. Tal regla, produjo un acalorado debate doctrinal que tuvo su reflejo en

encontradas resoluciones jurisprudenciales respecto de dos cuestiones: (1) Si la cláusula dispensadora del protesto, para producir efectos cambiarios, debía aparecer especialmente refrendada por una firma distinta de la correspondiente al acto cambiario a que deba lugar o si ello era necesario solamente cuando la cláusula estuviera inserta en el título en forma manuscrita o con un sello, fuera del texto impreso de la letra o pagaré y (2) Si ante el texto expreso se podía considerar que el título que incluyera la cláusula dispensadora, sin levantar protesto, era un título hábil que dejaba abierta la vía ejecutiva, sin necesidad de previo reconocimiento de firma por parte del deudor cambiario, demandado. El profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO** tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ambas cuestiones y la ley 19899 puso fin a la polémica consagrando legalmente la solución que él proponía respecto de ambas cuestiones, al disponer "el librador, el endosante o el avalista pueden por medio de la cláusula "sin protesto" dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción de regreso. Cuando la cláusula integre el texto impreso de la letra de cambio, será suficiente la firma de ésta por el librador; cuando se la inserte manuscrita o por otro medio, se requerirá que la cláusula sea especialmente firmada, sin perjuicio de la firma de creación de la letra de cambio. En las condiciones indicadas precedentemente, la letra de cambio es el título ejecutivo hábil, sin necesidad de protesto en los términos del Art. 60. Si la cláusula hubiera sido inserta por el librador, produce sus efectos con relación a todos los firmantes; si hubiese sido inserta por cualquier otro firmante, produce sus efectos respecto de éste. Si no obstante la cláusula insertada por el librador, el portador formalizare el protesto, los gastos quedan a su cargo.

El panorama actual de la cláusula "sin protesto" para la doctrina y legislación argentinas, según el profesor **GOMEZ LEO**, es como sigue:

1. Rige exclusivamente respecto de las acciones de regreso por falta de aceptación, total o parcial, o de pago, evitando su caducidad;
2. Aunque corrientemente se utiliza la expresión "sin protesto", surte efectos, como cláusula especial que es, cualquiera otra equivalente;

3. Cuando la introduce el librador, produce plenos efectos respecto de todos los obligados de regreso;
4. Si la cláusula integra el texto del acto cambiario al cual da lugar, no necesita ser refrendada especialmente por otra firma. Si aparece agregada, es necesario que quien la introduce la firma especialmente;
5. El título que incluye la cláusula "sin protesto", es título ejecutivo hábil para accionar de regreso;
6. El portador sin perjuicio de la cláusula, puede levantar protesto por falta de aceptación o de pago, pero los gastos de la diligencia están a su cargo;
7. Puesto que la acción directa no requiere protesto, para ser ejercida por la vía ejecutiva es irrelevante que el título tenga dispensa de protesto, especialmente cuando se trata de pagarés directos. Esos papeles de comercio, sin necesidad de previo reconocimiento de firma y, obviamente, sin necesidad de protesto, cumplen con la premisa exigida por la ley procesal;
8. El fallo respecto de la inaplicabilidad sobre mora automática, a los papeles de comercio, no es acertado, pues del armónico juego de las normas específicas, cambiarias y comerciales, surge que los intereses compensatorios de la cambial se transforman, a partir de su vencimiento, automáticamente en moratorios.

3.18.5. CLÁUSULA DE PAGO CON CARGO EN CUENTA BANCARIA

Artículo 53º.- Pago con cargo en cuenta

53.1. En los títulos valores que contengan obligaciones de pago dinerario, podrá acordarse que dicho pago se cumplirá mediante cargo en cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional, señalando el nombre de la empresa y, en su caso, el número o código de la cuenta.

53.2. La empresa del Sistema Financiero Nacional designada deberá contar con autorización previa del titular de la cuenta para atender el pago, sea con fondos constituidos previamente o con créditos que conceda al titular de la cuenta designada.

El presente artículo contiene una disposición no contemplada en la legislación anterior: la posibilidad de cumplir con el pago de obligaciones dinerarias mediante el cargo en cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional, debiéndose señalar el nombre de la empresa y, en su caso, el número o código de la cuenta. No se establece diferencia alguna en cuanto a la clase de cuenta que permite realizar este tipo de operación; de ahí que se puede afirmar que el pago bajo esta modalidad puede realizarse tanto con cuentas de ahorros, cuentas corrientes, cuentas a plazos u otras.

Se impone una obligación a la empresa del Sistema Financiero designada para efectuar el pago: la obtención de una autorización previa, clara, inobjetable, del titular de la cuenta, para realizar el débito. Los fondos con los cuales se atenderá el pago, pueden haber sido constituidos o depositados previamente o tener su origen en créditos bancarios que se conceda al titular de la cuenta designada.

En la vida moderna, el mantenimiento de las cuentas bancarias -y corrientes en particular- sirven para efectuar cargos por numerosos y diferentes conceptos, llámense éstos universidades y colegios de los hijos, fluido eléctrico de la casa o domicilio, agua y alcantarillado, contribuciones prediales, club social, teléfono y celulares, tele cable o cable mágico, suscripción de revistas, por supuesto tarjetas de crédito y otros consumos tan diversos que casi no es posible detallar, porque además depende de la economía y en todo caso forma de vida de cada cual. Lo que queremos precisar es que en las cuentas corrientes no sólo se debitan o cargan importes de cheques y gastos de mantenimiento, sino numerosos otros rubros, tales como los precitados. En este orden de ideas, porque no extender y pautar las prácticas comerciales de efectuar consumos con pago al crédito representados por letras de cambio, por ejemplo, cuyos importes, probablemente mensuales y escalonados, se pudieran debitar en la cuenta corriente bancaria. Así la letra de cambio, el pagaré, la factura conformada, el título de crédito hipotecario negociable y otros, podrían funcionar muy eficientemente, sin pérdidas de tiempo. Y así se hizo. Para este caso, es correcto hacer dos precisiones: una, que en lugar del domicilio del girado, si se trata de letra de cambio, se debe anotar el número de la cuenta bancaria y naturalmente el nombre del banco; y, dos, que si este título es rechazado por no tener la cuenta corriente

provisión de fondos, dicho rechazo produce los efectos del protesto, porque viene a ser la formalidad que lo sustituye.

3.18.6. CLÁUSULA DE VENTA EXTRAJUDICIAL

Artículo 54º.- Venta extrajudicial

En los títulos valores afectados en garantía, salvo disposición distinta de la ley, puede acordarse prescindir de su ejecución judicial y que su venta se realice en forma directa o extrajudicial, conforme a los acuerdos adoptados al efecto, según las disposiciones aplicables a la ejecución extrajudicial de la garantía prendaria.

El presente artículo prescribe la venta extrajudicial o directa de títulos valores afectados en garantía. Esta deberá realizarse conforme los acuerdos adoptados al efecto. La venta directa o extrajudicial no podrá realizarse si media disposición distinta de la ley en la que no se pueda prescindir de la ejecución judicial.

Al respecto, serán de aplicación las disposiciones sobre ejecución extrajudicial de la garantía prendaria, contenidas en el Código Civil.

Así, el art. 1069 del C.C. precisa que si vence el plazo de la obligación y ésta no se cumple, el acreedor puede proceder a la venta del bien en la forma pactada al constituirse la obligación. A falta de pacto, se tramita como proceso de ejecución de garantías. El deudor sólo podrá contradecir sustentándose en prueba documental que acredite indubitablemente el pago.

Para **Max ARIAS SCHREIBER PEZET**⁷⁷, la norma excluye la posibilidad de que el acreedor prendario se adjudique el bien, dado que es común en la normatividad comparada el admitir que cuando el crédito garantizado vence y no es satisfecho, el acreedor tiene derecho de proceder a la ejecución del crédito sobre el que versa la garantía, el mismo que deberá tramitarse mediante el procedimiento de ejecución de garantías.

⁷⁷ ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Op. cit., Tomo VI, Página 97.

La facultad de solicitar la realización del objeto favorece fundamentalmente al acreedor de la obligación principal, sujeto de la relación jurídica inmediatamente interesado en ella. La venta del objeto prendado es una de las formas de extinguir la prenda; en este caso, en opinión de **BORDA**⁷⁸ los derechos del acreedor se transfieren del bien al precio obtenido.

Sin embargo, suele suceder que existan otros sujetos igualmente interesados, como son los acreedores del acreedor prendario, que en defecto del mismo, intervengan en su representación, mediante el ejercicio de la acción subrogatoria, solicitando la venta del bien para posteriormente dirigir sus créditos contra el precio. Esta facultad está reconocida por el inc. 4 del art. 1219 del C.C.

Cabe agregar que aquella cláusula que faculta al acreedor, en caso de vencer la deuda y no pagarla el deudor, para quedarse con el objeto que constituye la garantía de la obligación, está prohibida. En doctrina se le conoce como pacto comisorio y está proscrita por todas las legislaciones. El C.C. peruano en su art. 1066, establece que aunque no se pague la deuda, el acreedor no puede apropiarse del bien prendado por la cantidad prestada. Se sanciona con nulidad el pacto en contrario. Sobre el particular, sin embargo, pueden remitirse al Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 14 de Mayo del 2003. Conste, por último, que si bien es posible acordar la venta de los títulos valores, extrajudicialmente, si hubiese pacto expreso en ese sentido, no parece que éste sea el caso específico de las letras de cambio; más probable es que lo sea, para los bonos, certificados de suscripción preferente, acciones de sociedades anónimas y otros valores mobiliarios, eventualmente dejados en garantía

⁷⁸ BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales. Tomo II, Cuarta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, Página 397.

3.18.7. CLÁUSULA DE SOMETIMIENTO A LEYES Y TRIBUNALES

Artículo 55º.- Sometimiento a leyes y tribunales

Salvo disposición legal en contrario, para el ejercicio de las acciones derivadas del título valor podrá acordarse el sometimiento a la competencia de determinado distrito judicial del país, así como a la jurisdicción arbitral; o a leyes y/o tribunales de otro país.

El art. 55 señala que para el ejercicio de las acciones derivadas del título valor se puede acordar el sometimiento a la competencia de determinado distrito judicial del país, así como a la jurisdicción arbitral; o a leyes y/o tribunales de otro país, salvo que la ley disponga lo contrario.

La excepción con que se inicia el presente artículo, es decir, salvo disposición legal en contrario, que no permita o impida optar por un medio alternativo de solución de conflictos, se incorpora en expresa referencia al Decreto Ley 17537 que crea el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Dicha norma, en su art. 11, señala que en los casos en que el Estado sea demandado, dicha demanda sólo podrá interponerse ante los Jueces de la Capital de la República, cumpliéndose con los requisitos exigidos por las leyes vigentes y agotada que sea la vía administrativa, en los casos que corresponda. Las demandas que no cumplan con estos requisitos serán rechazadas de plano y devueltas al interesado, bajo responsabilidad del Juez.

La cláusula arbitral está tomando mucha importancia en el marco de la contratación mercantil. El arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, en la mayoría de los casos, es mucho más eficiente que el Poder Judicial. Si las partes recurren al arbitraje ante el incumplimiento del contrato, resulta lógico pensar que también se les permita optar por la jurisdicción arbitral cuando decidan iniciar alguna acción cambiaria o causal.

Así por ejemplo, el art. 48 de la LGS establece que no procede interponer las acciones judiciales contempladas en esta ley o en las de aplicación supletoria a ésta cuando exista convenio arbitral obligatorio contenido en el pacto social o en el estatuto que someta a esta jurisdicción resolver las discrepancias que se susciten. Esta

norma es de aplicación, a la sociedad, a los socios o administradores aún cuando al momento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo y a los terceros que al contratar con la sociedad se sometan a la cláusula arbitral. El estatuto también puede contemplar el uso de mecanismos de conciliación extrajudicial con arreglo a la ley de la materia.

La Ley General de Arbitraje (Ley 26572) señala en su art. 1 que pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse; excepto:

1. Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de incapaces sin la previa autorización judicial.
2. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución, en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso.
3. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.
4. Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, o de personas o entidades de derecho público.

Por último la Ley de Conciliación N° 26872, regula en el art. 5 la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto.

3.19. GARANTÍAS PERSONALES (AVAL Y FIANZA) Y GARANTÍAS REALES EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 56º.- Garantías Personales y Reales

56.1. El cumplimiento de las obligaciones que representan los títulos valores puede estar garantizado total o parcialmente por cualquier garantía personal y/o real u otras formas de aseguramiento que permita la ley, inclusive por fideicomisos de garantía.

56.2. Para que dichas garantías surtan efecto en favor de cualquier tenedor, debe dejarse constancia de ello en el mismo título o registro respectivo.

56.3. Si no se señala a la persona garantizada, se presume que la garantía opera en respaldo del obligado principal.

56.4. A falta de mención expresa del monto o límite de la garantía, se entiende que garantiza todas las obligaciones y el importe total que representa el título valor.

56.5. En la constitución y ejecución de garantías de valores mobiliarios y de valores con representación por anotación en cuenta, se observarán además las disposiciones especiales que señalen las leyes de la materia.

Con el art. 56, la nueva ley inicia el tratamiento de las garantías, sean éstas reales y/o personales, que pueden recaer sobre los títulos valores. Se destaca que tales garantías pueden asegurar el cumplimiento de las obligaciones representadas en los títulos valores, ya sea de forma total o parcial; recalándose que además de las garantías personales y/o reales, la ley permite otras formas de aseguramiento, como por ejemplo la del fideicomiso.

Como se sabe, las garantías son los medios de reforzar el derecho del acreedor en la hipótesis que el deudor no cumpla con la prestación por él debida; tienen por objeto conceder seguridad al acreedor de que su crédito será cancelado o pagado.

Garantizar supone asegurar el cumplimiento de una obligación, de lo que se desprende que: 1) no es indispensable, pues hay muchas obligaciones que no son respaldadas por una garantía específica; y, 2) se constituye en un derecho accesorio a uno principal. Lo principal

es la obligación y la garantía sólo tiene existencia para asegurar el cumplimiento de ésta⁷⁹.

Se conocen hasta tres clases de garantías, a saber:

- Los Privilegios. Aquellas preferencias legales para ser pagadas antes de las demás en razón de la naturaleza de sus créditos. Así por ejemplo, el art. 24 del TUO de la LRP prescribe que el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente: 1) Los créditos que tengan como origen el pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, los créditos por aportes impagos al SPP o a los regímenes previsionales administrados por la ONP, así como los intereses y gastos, en el caso de insolventes personas naturales; 2) Los créditos alimentarios, incluyendo intereses devengados y gastos, en el caso de insolventes personas naturales (sic); 3) Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del insolvente, siempre que la garantía o la medida cautelar correspondiente haya sido constituida, trabada o ejecutada con anterioridad a la fecha de declaración de insolvencia del deudor. También están comprendidos en el presente orden de preferencia los créditos garantizados por cualquier otro tipo de derecho que grave el patrimonio del deudor y que reúna las condiciones previstas en el párrafo anterior, siempre que cumpla las formalidades de la legislación correspondiente; 4) Los créditos de origen tributario del estado, incluidos los de ESSALUD, sean éstos tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos, de acuerdo a los establecido en el CT o en la legislación correspondiente; y 5) Los demás créditos.
- Las Personales. Por medio de las cuales, una persona es la que se obliga a pagar la obligación de su garantizado en caso de incumplimiento de éste. Por ejemplo, la fianza, el aval, la solidaridad pasiva, la cláusula penal.

⁷⁹

Las obligaciones que no tienen garantía específica no están desamparadas, pues todo el patrimonio del deudor es “prenda” del acreedor, salvo los bienes inembargables.

- Las Reales. Por medio de las cuales se asegura una obligación afectando un bien determinado a su cumplimiento. Por ejemplo, la prenda, el anticresis, la hipoteca, el derecho de retención.

El inciso primero del artículo bajo comentario señala que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un título valor, pueden estar garantizadas en forma total o parcial, por:

- Cualquier garantía real o personal.
- Cualquier otra forma de aseguramiento permitido por ley, incluso por fideicomisos de garantía (sobre el particular, ver comentario al art. 13 LTV).

Especifiquemos cuáles son las diferencias resaltantes entre las garantías personales y las reales:

DERECHOS DE GARANTIA PERSONAL	DERECHOS DE GARANTIA REAL
Es un sujeto quien asegura el cumplimiento de la obligación.	Existe un objeto.
No existe el derecho de perseguir los bienes del garante, por cuanto el derecho de garantía no está concretado en ningún bien específico.	Otorga el derecho de persecución sobre el bien dado en garantía.
Todo el patrimonio del garante responde por la deuda de su garantizado.	Recae sólo sobre un bien o varios bienes determinados.
Existe el beneficio de división y de excusión (derecho de fragmentar la obligación en caso de pluralidad de fiadores y/o facultad de solicitar que se entienda la acción de cobro primero contra el deudor).	No existen tales beneficios, porque es un derecho indivisible y grava la totalidad del bien o bienes y porque dicho (s) bien (bienes) ha(n) sido expresamente afectado(s).

Ampliando la disposición del art. 12 de la ALTV, el inciso segundo del artículo que ahora nos ocupa, impone la obligación de anotar o inscribir la constitución de tales garantías en el mismo título valor o en el registro respectivo, pues si así no se hiciere, no podrán surtir los efectos pretendidos en favor de cualquier tenedor.

La ALTV se refería a “embargo y cualquier afectación sobre el derecho indicado en el título o sobre las mercancías por él representadas...”; ahora se amplía a “cualquier garantía personal y/o real u otras formas de aseguramiento que permita la ley, inclusive por fideicomisos de garantía.”

La nueva ley dispone que “...debe dejarse constancia de ello en el mismo título o registro respectivo” y sólo así surtirán efectos. Ello abarca tanto a los títulos materializados y a los desmaterializados. La ALTV sólo hacía referencia a los primeros, pues expresaba que “no surten efecto si no se anota en el mismo documento.”

El tercer y cuarto inciso contienen una presunción *iure et de iure*, en el sentido de que si falta mención específica o expresa sobre: a) la persona garantizada, se presume que la garantía opera en respaldo del obligado principal; y, b) el monto o límite de la garantía, se entiende que ésta está garantizando todas las obligaciones contenidas en el título valor y por el importe total que éste representa.

Dichas disposiciones resultan concordantes con el art. 1108 del CC que establece que la escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador, consignará, además de las circunstancias propias de la constitución de hipoteca, las relativas al número y valor de los títulos que se emitan y que garanticen la hipoteca; la serie o series a que correspondan; la fecha o fechas de la emisión; el plazo y forma en que deben ser amortizados; la designación de un fideicomisario; y las demás que sirvan para determinar las condiciones de dichos títulos.

El quinto y último inciso es novedoso, establece que para constituir y ejecutar garantías de valores mobiliarios y valores desmaterializados, deberá observarse las disposiciones especiales que señalen las leyes de la materia; refiriéndose a la LdeB y a la LMV.

La LdeB, en su art. 167 señala que la fianza solidaria o con renuncia al beneficio de excusión que conste de un título valor, confiere mérito ejecutivo contra su suscriptor, en los mismos términos que la ley de la materia señala respecto de los avalistas.

La LMV refiere en su art. 90 que en la emisión, además de las garantías contempladas en la LGS, podrá constituirse carta fianza bancaria, depósito bancario, certificado bancario en moneda extranjera depositado en una institución financiera del país, póliza de caución de empresas de seguros y otras que se establezcan mediante disposiciones de carácter general. Para la inscripción o registro de estas garantías no es necesario individualizar a los obligacionistas y basta que se consigne el nombre del representante de éstos. El custodio o depositario de las garantías, en su caso, no podrá tener vinculación con el emisor.

EL AVAL

Artículo 57º.- Aval

Con excepción del obligado principal, el aval puede ser otorgado por cualquiera de los que intervienen en el título valor o por un tercero. En el caso de ser uno de los intervinientes, éste debe señalar en modo expreso su adicional condición de avalista.

El aval es una garantía personal cuyo tratamiento legislativo varía dependiendo del sistema jurídico de que se trate. Así por ejemplo, Chile, Paraguay y República Dominicana, regulan al aval como una especie de fianza sujeta a condición o plazo en la que el avalista puede oponer a la acción del acreedor cambiario el beneficio de excusión. El sistema jurídico inglés, regula al aval como un endoso; y, el sistema germano-italiano, seguido por algunos países de América Latina, considera al aval como una garantía típica y exclusiva de los títulos valores.

En realidad, en esta última posición debemos ubicar al sistema peruano, pero con la aclaración de que no es la única garantía aplicable a los títulos valores; por lo menos a partir de la dación de esta NLTV.

PEÑA NOSSA⁸⁰, expresa que el Aval, importa la constitución de una garantía objetiva, autónoma, típica cambiaria y abstracta.

⁸⁰ PEÑA NOSSA, Lisandro. Op. cit., Página 58 y sgtes.

- Objetiva. Porque con ella se pretende, única y exclusivamente, asegurar el pago de la obligación cambiaria, vinculando a una persona de reconocida solvencia económica para brindar confianza a los adquirentes en la circulación del título. Se asegura el pago frente a cualquier tenedor; inclusive en la circunstancia de resultar nula la obligación de la persona avalada, no por esto el avalista se exime de la obligación de pagar el título.
- Autónoma. Las otras garantías se hacen exigibles solo en caso de incumplimiento de la obligación principal. En el aval ocurre cosa distinta, por cuanto la obligación del avalista es principal o se encuentra en el mismo grado respecto de su pago como las de los obligados principal o de regreso, de tal suerte que el tenedor de un título valor avalado puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de los signatarios.
- Típica cambiaria. Solo se puede concebir el aval en relación con títulos valores, sea que se trate de títulos de contenido crediticio, de tradición o representativos de mercaderías.
- Abstracto. Porque se independiza de la causa que le dio origen o sea de la relación jurídica subyacente, básica o fundamental.

Existe un desconocimiento del origen de la palabra aval, y ello, lógicamente, ha dado lugar a la aparición de múltiples teorías que los autores han ido desarrollando, con mayor o menor acierto, según los casos.

“Los autores se apoyan en dos vías etimológicamente concretas, vías que se complementan ya que intentan ambas buscar el origen en la singularidad del aval. Por una parte los que, siguiendo primigeniamente a **SAVARY**, opinan que significa *a valoir* o ‘hacer valer’, y entre los que se encuentran **ESPEJO DE HINOJOSA, BLANCO CONSTANS, ESTASEN, HUGUET**, etc. o que proviene de la palabra latina *Vallare*, que significa reforzar, según opinión de **LANGLE**. Por otra parte, aquellos que dan a la palabra un sentido de emplazamiento y colocación, haciéndola derivar del término *valle*, que quiere decir debajo, guiados por el lugar donde se colocaba la firma

del avalista, justamente debajo de la de su avalado. Son de esta opinión la mayoría de autores alemanes e italianos que siguiendo a **SUPINO**, creen que deriva de *avallo* (debajo). Esta teoría ha sido seguida por **COROMINAS** en su Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, que admite la misma etimología.”⁸¹.

Por su parte, **POSSE ARBOLEDA**⁸² afirma que en el aval, un tercero (pues quien lo suscribe no es parte en la relación cambiaria, ni como girador, ni como aceptante, ni como endosante) garantiza el pago del título valor. Se trata de una garantía de pago.

Si bien el artículo que ahora nos ocupa tiene como fuente al art. 85 de la ALTV, aquél nos trae novedades. Veamos:

La ALTV se refería a que la garantía mediante aval sólo podía otorgarse por cualquiera de los que intervienen en la letra de cambio. Ahora, se dispone que el aval puede otorgarse para garantizar cualquiera de los títulos valores regulados en la ley o los creados conforme a lo previsto en los arts. 3 y 276.

En cuanto a la excepción de quienes no pueden otorgar esta garantía, la ALTV decía “aceptante”; la NLTV, en cambio, dice “obligado principal”, precisión muy conveniente pues el aceptante es a la letra de cambio lo que el obligado principal (emite, art. 158.1 inc. g) es al pagaré y al cheque, igual, su emite (art. 174 inc. g), y a su turno, quienes correspondan en los demás títulos valores.

Presentamos a continuación un cuadro comparativo entre la figura del aval y endoso (propia también de los títulos valores).

AVAL	ENDOSO
El aval puede ser otorgado por cualquier interviniente en el título valor o por un extraño a éste.	El endoso siempre procede de una persona que ha detentado el título valor.

⁸¹ AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xavier. *El aval cambiario*. Editorial Civitas S.A., Madrid, 1990, Página 21.

⁸² POSSE ARBOLEDA, León. Op. cit., Páginas 45 a 50.

El aval puede garantizar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación.	Se endosa un título valor por el total de la obligación cambiaria. No existe endoso parcial.
El avalista es obligado por acción cambiaria directa, si avala al obligado principal o por acción cambiaria en vía de regreso, si garantiza el pago de un endosante.	El endosante es siempre un obligado por acción cambiaria en vía de regreso.
El aval siempre constituye una garantía de pago del título valor.	El endoso transfiere generalmente la propiedad del título valor, sin perjuicio de la solidaridad.

Ignacio A. ESCUTTI (h.) refiere que el aval es un acto cambiario de garantía que como tal tiene los caracteres de todo acto cartular, esto es, goza de las características de unilateralidad, literalidad, autonomía, abstracción e independencia, presenta, sin embargo, una característica diferencial respecto de las demás declaraciones cambiarias, pues es una obligación formalmente accesoria de la obligación del avalado, porque apunta a asegurar el pago de una obligación primigeniamente ajena. **Héctor ALEGRIA** define el aval como "el acto unilateral no recepticio de garantía, otorgado por escrito en el título o fuera de él (el artículo 33 de la Ley Argentina sobre letras de cambio y pagarés refiere que el aval puede constar en la misma letra o su prolongación o en documento separado, debiendo en este caso indicar el lugar donde ha sido otorgado), en conexión con una obligación cartular formalmente válida, que constituye, al otorgante en responsable cambiario del pago".

El primer y tercer párrafo del artículo 46 de la Ley Chilena establecen que "el aval es un acto escrito y firmado en la letra de cambio, en una hoja de prolongación adherida a ésta, o en un documento separado, por el cual el girador, un endosante o un tercero garantiza, en todo o en parte, el pago de ella. Otorgado en documento separado debe, además de la firma del avalista, expresar que el acto

es un aval e identificar claramente la letra a la cual concierne. Los derechos que emanan de un aval otorgado en instrumento separado no se transfieren por endoso". Como se aprecia, existen dos diferencias en esta ley chilena, con el aval extendido en documento separado, en la Ley Argentina: (1) que en la ley chilena no se exige indicar el lugar donde ha sido otorgado y (2) que para la ley chilena, los derechos que emanan de un aval en instrumento separado, no se transfieren por endoso; en cambio, en la ley argentina, sí. Veamos la autorizada opinión del profesor **Héctor ALEGRIA**, el cual se pronuncia a favor de este instituto como título circulatorio cambiario vinculado, dando las siguientes razones:

- a. Es un título cambiario, porque es una declaración cartular susceptible de circular que otorga a su portador un derecho autónomo;
- b. Que el aval sea separado no quiere decir que deje de ser aval. Por el contrario, si tuviera otras características jurídicas, no sería una aval, sino que daría origen a otra institución; y
- c. Por que el tenedor sólo puede accionar si se encuentra en poder del documento separado (necesidad), pero a condición y a consecuencia de estar legitimado según el título cambiario en el que consta la obligación avalada (vinculación).

A pesar de las dificultades que puede plantear el tópico, no puede desvirtuarse una clara disposición legal que expresamente consagra el aval por documento separado. La única exigencia adicional que establece la ley está referida a la necesidad de indicar el lugar donde ha sido otorgado el acto cambiario. Sostener interpretaciones contrarias importa desvirtuar las claras palabras de la ley (*ubi lex voluit, dixit: "cuando la ley quiere, lo dice"*), y mal puede sostenerse: (1) que un texto legal carezca de valor por contrariar principios cambiarios, cuando estos deben inducirse de las normas vigentes, y (2) que el otorgante no tenga vínculo directo con los intervinientes en la circulación y que la garantía no pueda transmitirse mediante un endoso (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*). Todo ello sin perjuicio de que cualquiera de los portadores solamente pueda demandar al avalista acompañando al título valor el aval otorgado por documento separado.

Artículo 58º.- Formalidades

58.1. El aval debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor avalado o en hoja adherida a él, observando en este último caso las formalidades que la presente Ley establece.

58.2. El aval se expresa con la cláusula "aval" o "por aval", la indicación de la persona avalada; y el nombre, el número del documento oficial de identidad, domicilio y firma del avalista.

58.3. Podrá prescindirse de la cláusula "aval" o "por aval", cuando esta garantía conste en el anverso del documento.

58.4. Si no se señala a la persona avalada, se entiende otorgado en favor del obligado principal; o, de ser el caso, del girador.

58.5. A falta de indicación del domicilio del avalista, se presume que domicilia para todos los fines de ley respecto al ejercicio de las acciones derivadas del título valor, en el mismo domicilio de su avalado o, en su caso, en el lugar de pago.

58.6. Si no se señala el monto avalado, se presume que es por el importe total del título valor.

El presente artículo contempla las formalidades que deben observarse para constituir aval. A diferencia del art. 86 de la ley anterior, el primer inciso del actual art. 58, precisa que esta garantía debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor avalado o en hoja adherida a él. La ALTV sólo decía que aquel debía constar en "la letra de cambio o en hoja adherida a ella". Ahora bien, debe apreciarse que al decir que "debía constar en la letra de cambio" estaba, respetando el principio de literalidad, refiriendo que se podía incluir en el anverso o reverso: la letra de cambio es toda ella. Pero como no se hacía tal puntual indicación y más bien, la segunda oración del mismo artículo hacía una cita al "anverso", esto llevaba a estimar, en lectura apresurada, que sólo podía constar en este lado del título valor, concepto o juicio erróneo, como estamos demostrando. Para mayor claridad entonces, en vez de aludir al título como totalidad, se ha preferido hacer referencia precisa a un lado y otro, es decir, al anverso y al reverso o dorso. En donde sí debemos señalar que el legislador anterior equivocó su expresión, es en la tercera oración de este mismo art. 86 en tanto indica que para que la letra de cambio quede avalada por el girador o el girado no aceptante, éstos deben firmar por segunda vez. Dispénsese, pero el girado no aceptante no ha firmado nada y por tanto el girador sí firma por

segunda vez, pero no el girado no aceptante. Error en la redacción. No debió citar que "éstos" debían firmar por segunda vez.

Sobre este punto, **Xavier AÑOVEROS**⁸³ destaca que el aval es una declaración cambiaria cartular, que debe contenerse en el propio título, o en un suplemento, el lugar del aval es el propio cuerpo del título.

El segundo inciso refiere que la forma de expresión del aval es por medio de la cláusula "por aval" o "aval", eliminando la posibilidad del uso de expresiones "equivalentes" que sí estaban permitidas por la ley anterior.

Asimismo, 1) debe indicarse el nombre de la persona avalada; y, 2) el número del documento oficial de identidad, el domicilio y la firma del avalista.

La ALTV sólo exigía la firma del avalista y la mención de la persona del avalado.

La NLTV determina que podrá prescindirse de la cláusula "por aval" o "aval" si esta garantía consta en el anverso del documento. De ello se deduce que la sola firma puesta en el anverso de la letra de cambio se reputa o considera aval.

El cuarto inciso incorpora algunas diferencias con respecto al art. 87 de la ALTV. Señala que si no se designa a la persona avalada, deberá entenderse que el aval ha sido otorgado a favor del obligado principal, o, de ser el caso, del girador. La anterior ley decía: "El aval debe mencionar la persona del avalado. A falta de esta indicación se considera otorgado para garantizar al aceptante; y si la letra no ha sido aceptada, para garantizar al girador." Como se aprecia, la ley es reiterativa en el sentido de regular el aval sólo para letras de cambio.

Sobre el tema, señala **MONTOYA MANFREDI**⁸⁴, que la indicación de la persona avalada, se exige para impedir que la firma

⁸³ AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xavier. Op. cit., Páginas 83 a 86.

⁸⁴ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 264.

del avalista en el anverso se confunda con la de un co-librador o un co-aceptante.

Las disposiciones del quinto y sexto inciso son absolutamente nuevas y muy convenientes. Se regulan dos presunciones legales: 1) si no se indica el domicilio del avalista, se considerará domiciliado - para todos los efectos de ley respecto al ejercicio de las acciones derivadas del título valor- en el mismo domicilio de su avalado, o en su caso, en el lugar de pago; y 2) si no se señala el monto avalado, se presume que es por el importe total del título valor.

El artículo 33 de la Ley Argentina sobre el régimen de la letra de cambio y el pagaré dispone que "el aval puede constar en la misma letra o su prolongación o en documento separado, debiendo en este caso indicar el lugar donde ha sido otorgado. El aval puede expresarse por medio de las palabras "por aval" o de cualquier otra expresión equivalente, debiendo ser firmado por el avalista. Se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra de cambio, salvo que esa firma fuese la del girado (error de la Ley; debió decir "librador". Ver página 414 de la obra *Títulos de Crédito* de **Ignacio A. ESCUTTI** y página 704 de obra *Nuevo Manual de Derecho Cambiario*, de **Osvaldo R. GÓMEZ LEO**) o la del aceptante. El aval debe indicar por cuál de los obligados de otorga. A falta de esta indicación se considera otorgado por el librador". En primer lugar, hemos referido que se trata de un lamentable error tipográfico porque como se sabe el girado lo es tal en la medida que no ha firmado la letra de cambio; cuando la suscribe deja de ser girado y pasa a ser aceptante. En la letra de cambio quien inexcusablemente firma es el librador y puede firmarla o no el girando quien en su caso se convierte en aceptante. En segundo lugar, Argentina marca distancia con la mayoría de legislaciones revisadas al permitir el otorgamiento de aval en documento separado con la exigencia de que en este caso se debe indicar el lugar donde ha sido extendido. No dejamos de reconocer las eventuales ventajas que en su momento, cuando las comunicaciones y el transporte eran muy distintos a los de la época moderna, pudo haber tenido. Sinceramente, con el impresionante avance de la tecnología al año 2000, preferimos quedarnos guardando respeto a los clásicos principios de literalidad, legitimación, incorporación y formalidad de los y en los títulos valores de los institutos que conciernen a los títulos valores.

Héctor CAMARA, sin desconocer su importancia práctica, ha manifestado que ha sido un desacierto legal mantener el aval en documento separado, por las siguientes dos razones: Una, por contrariar los principios básicos del derecho cambiario, afectando la literalidad, la completividad y la función legitimadora del título; el derecho de garantía no queda incorporado al documento circulando con él; y Dos, puede generar dificultades en su ejecución. Dicho maestro señala que el aval por documento separado no goza de igual eficacia que el que aparezca en la cambial, pues resulta ser una garantía *in personam* y no *in rem*, que no transmite de pleno derecho mediante el endoso. Por su parte, **Horacio FARGOSI**, siguiendo a una autorizada doctrina francesa sostiene que en el aval por documento separado, el otorgante no está obligado sino frente al beneficiario, y no existe vínculo directo entre aquél y los demás sujetos cambiarios.

Artículo 59º.- Responsabilidad del aval

59.1. El avalista queda obligado de igual modo que aquél por quien prestó el aval; y, su responsabilidad subsiste, aunque la obligación causal del título valor avalado fuere nula; excepto si se trata de defecto de forma de dicho título.

59.2. El avalista no puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su avalado.

59.3. El avalista puede asumir la obligación señalada en el primer párrafo en forma indefinida, en cuyo caso no será necesaria su intervención en las renovaciones que acuerde su avalado y el tenedor del título. En este caso, su aval deberá constar en modo expreso en el título mediante la cláusula "Aval Indefinido" o "Aval Permanente".

59.4. La cláusula señalada en el párrafo anterior, no es necesaria en los títulos valores que contengan la cláusula de prórroga a que se refiere el Artículo 49º.

Los dos primeros incisos tienen como fuente al art. 85 de la ley anterior. De ello se desprende que el avalista queda obligado en los mismos términos que su avalado. Con esta disposición se determina la naturaleza jurídica y los alcances de la figura del aval, así como la situación en la que el tenedor del título valor ostenta respecto de aquél. La responsabilidad del avalista persiste, aun cuando la obligación avalada sea nula por cualquier causa que no sea un vicio

de forma, es decir, carencia o defectuosa anotación de cualesquiera de los requisitos formales esenciales que disponga la Ley.

Es decir que si se avalara a un incapaz, la obligación del avalista no desaparece. Solamente podrá devenir nulo el aval si faltara algún requisito extrínseco formal esencial en el título valor, que le quitara el carácter de tal, con arreglo al segundo párrafo del art. 1 de esta ley N° 27287.

La obligación del avalado es idéntica a la del obligado que avala; contrae una obligación solidaria con los demás firmantes del título valor. El avalista no puede exigir ser ejecutado después de su avalado o de otro obligado cambiario; el acreedor puede dirigirse directamente contra él, incluso, con antelación al avalado.

El aval supone que se está garantizando una obligación contraída aunque resulte ser inválida o nula, como cuando se avala a algunos de los sujetos a que se refieren los arts. 43 y 44 del CC.

El avalista asume una obligación solidaria con los otros firmantes del título valor frente al tenedor de éste, incorporándose en la relación cambiaria en el lugar y grado del respectivo avalado. La obligación que asume el avalista es sucesiva, no es un co-obligado aunque su obligación sea idéntica a la del avalado.

De ahí que **Xavier AÑOVEROS**⁸⁵ determina como características del aval a las siguientes:

- La accesoriedad. Pues tiene que existir una obligación principal para que pueda existir el aval, es decir, que la obligación del avalista presupone siempre la del otro obligado cambiario por quién salió garante. La garantía que presta el avalista cambiario es distinta de la del fiador cuya accesoriedad tiene un carácter diferente, ya que la accesoriedad es consecuencia lógica de su naturaleza cautelar. El aval no garantiza *in genere* el pago del título valor, sino que coloca al avalista detrás de una persona determinada de las que resultan obligadas.

⁸⁵ AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xavier. Op. cit., Páginas 47 a 61.

- La autonomía. La misma que se fundamenta en que su estructura y sobre todo sus efectos son distintos a los de cualquier otra garantía personal: 1) Se responde de igual manera que el avalado; 2) La responsabilidad del avalista es típica y objetiva y para nada le afecta la obligación causal subyacente, como tampoco es trascendente para el acreedor cambiario por virtud de qué negocios o relaciones se pactó el aval entre el avalado y avalista; 3) La nulidad de la obligación del avalado no invalida el aval salvo supuestos de vicios de forma.
- La subsidiariedad. Dado que la obligación del avalista de pagar el título sólo le alcanza en el caso de que no lo haya efectuado el avalado una vez llegado el vencimiento. El avalista asume una obligación nueva, independiente, que como tal supone un débito y una responsabilidad; él es deudor y al propio tiempo responsable del pago al que se obliga, pero su responsabilidad es subsidiaria, por cuanto tan pronto cumpla el acreedor cambiario ante el que el avalado tiene responsabilidad, cesa la que independientemente ha asumido el avalista.
- La solidaridad. Pues el alcance de esta responsabilidad es de igual grado y extensión que la del avalado, es decir el avalista se obliga al pago del título, de no hacerlo el deudor principal, desde el momento mismo en que se alcanza la fecha del vencimiento, una vez cumplidas las formalidades inexcusables en sustancia.
- La reintegrabilidad. Ello significa que el avalista que pago y cumple la obligación por su avalado, tiene derecho a reintegrar mediante el ejercicio de la acción cambiaria correspondiente.

Veamos las distinciones entre la actual y la derogada ley.

Respecto a la subsistencia de la responsabilidad del aval, la ALTV disponía que ésta se mantiene “aunque la obligación garantizada fuere nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma”. En cambio, la nueva ley –con mayor precisión- señala que

dicha responsabilidad subsiste “aunque la obligación causal del título valor avalado fuere nula; excepto si se trata de defecto de forma de dicho título” (inciso primero de este artículo).

En cuanto a los medios de defensa que puede hacer valer el garante, la anterior ley decía que el “avalista no puede oponer al portador de la letra de cambio las excepciones personales de su avalado”. Como se conoce, ésta NLTV amplía la categoría jurídica de las garantías a todos los títulos valores y por ello, en el nuevo texto, se formulan dos interesantes precisiones: a) en vez de portador, vocablo confuso, se le dice, tenedor y; b) en vez de letra de cambio, se dice título valor (inciso segundo de este artículo).

Los incisos tercero y cuarto son novedosos. El avalista puede asumir las obligaciones en forma indefinida, para lo cual no será necesaria su participación en las renovaciones que acuerde el avalado y el tenedor del título. Para ello deberá insertarse la cláusula “Aval Indefinido” o “Aval Permanente”.

La inclusión de esta cláusula se posibilita, además, con la disposición contenida en el art. 48 ya comentado, y según el cual se pueden insertar en los títulos valores las cláusulas especiales reguladas en la Sección Tercera del Libro Primero, así como otras contenidas en la LTV. La cláusula “Aval Indefinido” o “Aval Permanente” es una de ellas.

En ese orden de ideas, el art. 59 que ahora nos ocupa señala que la inclusión de esta cláusula se puede restringir cuando el título valor contiene la cláusula de prórroga (ver comentarios al art. 49).

El aval presenta los siguientes caracteres cartulares:

- a. Unilateralidad. Basta la sola declaración de voluntad, que, como tal, es irrevocable y no recepticia, excepto lo dispuesto por esta Ley en el artículo 49.5. El tenedor tiene un derecho originario.
- b. Literalidad. La naturaleza, calidad y contenido de los derechos y obligaciones surgen exclusivamente de su tenor escrito.

- c. Incondicionalidad. El aval es un acto cambiario y, por lo tanto, puro y simple, y no puede estar sujeto a condición alguna.
- d. Abstracción. El aval está desvinculado de la relación causal que origina la creación del título valor.
- e. Autonomía. El avalista no puede oponer al tenedor excepciones emergentes de situaciones personales con los anteriores tenedores del título.
- f. Independencia. Si bien es un acto cambiario, sustancialmente independiente de la obligación avalada, y de la que dio origen al título valor, tiene una indisoluble conexión con ellas: la invalidez formal o ausencia de requisitos formales del título valor determina la ineficacia del aval.

Para **GOMEZ LEO** el aval es un acto jurídico cambiario, unilateral y completo, que se comporta como negocio abstracto y mediante el cual se garantiza objetivamente el pago de la letra. Constituye para el avalista una obligación sustancialmente autónoma, pero formalmente accesoria de la obligación avalada, que opera como una garantía adicional.

Como todos los actos cambiarios, tiene su fuente en una declaración unilateral. Se origina en la sola manifestación de quien extiende el aval mediante su firma y cuenta con las características que informan a estos actos: es no recepticio, incondicionado e irrevocable. Es completo, pues si bien la ley admite el aval parcial (Art. 58.6 de esta NLTV) la afirmación de su completividad se refiere a que como acto cambiario se basta a sí mismo, dada su naturaleza esencialmente cartular y cambiaria. En otras palabras, para determinar su contenido, alcances y eficacia, no es posible remitirse a otros documentos. Se comporta como negocio abstracto, porque jurídicamente se ha desvinculado de la causa o relación fundamental por la cual se lo extendió. La obligación del avalista es objetiva pues se refiere a garantizar el pago de la letra de cambio y no a la persona del avalado y ni siquiera a la obligación avalada, de allí que si la obligación del avalado resulta nula por algún defecto o vicio sustancial o subjetivo, la obligación del avalista persiste válida y exigible (Arts. 59.1 y 59.2 de esta NLTV). El aval de lugar a una obligación autónoma, en cuanto a la validez de la misma no depende de la validez sustancial de la

obligación garantizada; tampoco la ilicitud de la causa de tal obligación se comunica a la obligación del avalista, por cuanto la ilicitud guarda atinencia, precisamente, a la sustancia, y no a la forma de la obligación cambiaria, de lo cual se sigue que los posibles vicios que invalidan las demás obligaciones contenidas en la letra de cambio no afectan la eficacia y exigibilidad de la obligación del avalista. La obligación del avalista se sustenta en la existencia de otra obligación que sea formalmente válida; por ello, no sería válido un aval dado en favor de un sujeto que endosó la letra parcialmente; o el dado en favor de quien libró un documento pagadero en cuotas, que no es, como vimos, una letra de cambio; o aquel con el que se pretendió avalar una aceptación dada por instrumento por separado que como aceptación no tiene efectos cambiarios.

Algunas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia de la República y de otros Tribunales nos clarificarán la temática del aval, delimitando sus características. Veamos.

Exp. N° 681-89 Lima. El aval no constituye una fianza sui generis, sino una garantía cambiaria por excelencia, apartándose de los otros tipos de garantías tan es así, que la obligación autónoma y abstracta del avalista se encuentra consagrada en el art. 85 de la Ley 16587 al expresar que la responsabilidad del avalista subsiste aunque la obligación garantizada fuera nula.

Lima, nueve de setiembre de mil novecientos noventiuno.- VISTOS; con los acompañados; con lo expuesto por el señor Fiscal; y CONSIDERANDO: que consta de autos como del expediente que se tiene a la vista, que mediante contratos de compra-venta de fecha cuatro de mayo de mil novecientos setentinueve, modificados por acuerdos del diecinueve de noviembre del mismo año, la compañía Pesquerías Españolas de Bacalao PEBSA, vendió a Pesqueras Orión Sociedad Anónima el Barco "CERNELLO" y a Sur Pacífico Pesquera Sociedad Anónima, el Barco "BRINCADOR" por el precio de cinco millones ochocientos mil dólares cada uno de ello; que dicha adquisición se hizo mediante financiación otorgada por el Banco de la Nación, aceptando los comprobantes a la entidad financiera dos pagarés por igual suma, con intervención de los accionantes y la Compañía pesquerías Españolas de Bacalao, PERSA, como avalista, los primeros hasta por la suma de doscientos cincuenta mil dólares;

que ante el incumplimiento de estas obligaciones de crédito, el Banco de la Nación promovió una acción ejecutiva contra las mencionadas empresas y sus avalistas, obteniendo sentencia favorable, actualmente en ejecución, como aparece del aludido expediente acompañado; que uno de los efectos de la sentencia, sin duda el más importante, es que la cuestión litigiosa definitivamente declarada o resuelta no sólo no podrá ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ninguno otro, aunque cuando para ello se cambie el nombre de la acción, por la santidad de la cosa juzgada; que con fecha posterior a la sentencia ejecutiva en referencia, según resulta del documento que en reproducción fotográfica obra a fojas cincuenta, esto es, el diecinueve de febrero de mil novecientos ochentidós, la Compañía Pesquerías Españolas de Bacalao Sociedad Anónima celebró con el Banco de la Nación un contrato de promesa recíproca de compraventa bajo ciertas condiciones que deberían producirse y/o cumplirse para dar por perfeccionado dicho contrato; que entre estas condiciones para concluir con la venta de las aludidas embarcaciones por parte del Banco a su anterior propietario, se consideró la obligación de PEBSA para instrumentar un aval o fianza de un Banco de primer orden, lo que debería tener lugar dentro de los noventa días siguientes a la suscripción el glosado contrato; que como es obvio tratándose de una condición especial a la presentación de la misma necesariamente tenía que suceder la aceptación por parte del Banco vendedor, puesto que no podía ser de otra manera; sin embargo, el aval o fianza no sólo no se instrumentó en razón que a la carta de fojas sesenta y cinco no se le puede atribuir tal categoría sino porque tampoco medió la aceptación por parte del vendedor en este caso del Banco de la Nación, a menos que se piense que la garantía debería ser impuesta; que de acuerdo con el criterio legal que informa el artículo mil trescientos cuarenticuatro del Código Civil de mil novecientos treintiséis, aplicable al caso, no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones; que si el mencionado contrato no concluyó por las razones expresadas, los demandantes no pueden acogerse al ítem H de la cláusula tercera del instrumento de fojas cincuenta, para pretender vía extinción de aval dejar sin efecto una ejecutoria suprema expedida con intervención de quienes ahora indirectamente pretende desconocerla; que finalmente, el aval, no constituye una fianza sui sui sino una garantía cambiaria por excelencia, apartándose fundamentalmente de los otros tipos de garantías tan es así, que la obligación autónoma y abstracta del

avalista se encuentra consagrada en el artículo ochenticinco de la Ley número dieciséis mil quinientos ochentisiete, al expresar que la responsabilidad del avalista subsiste aunque la obligación garantizada fuera nula, por cualquier causa salvo vicio de forma; que en consecuencia, la demanda sobre extinción de aval carece de sustento fáctico y legal para ser amparada; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuentitrés su fecha dos de diciembre de mil novecientos ochentiocho, que confirmando la apelada de fojas trescientos cincuenta y nueve, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene; reformando la de vista y revocando la apelada; declararon IMPROCEDENTE dicha demanda; sin costas.

Artículo 60º.- Subrogación del aval

60.1. El avalista que cumple con la obligación garantizada adquiere los derechos resultantes del título valor contra el avalado y los obligados en favor de éste en virtud del título valor, y se subroga en todas las garantías y derechos que otorgue dicho título.

60.2. El avalista que cumpla con el pago el día del vencimiento o antes que el título fuese protestado, de lo que se dejará constancia en el mismo título, no requerirá de la formalidad prevista en el segundo párrafo del Artículo 70º para ejercitar los derechos cambiarios que le corresponda.

La subrogación consiste en la sustitución jurídica en cuya virtud, una persona viene a ocupar respectivamente el lugar de otra, de tal suerte que en adelante estén sujetas a las mismas condiciones en que se encontraba la persona sustituida. El pago con subrogación tiene lugar cuando a un tercero se le transmiten todos los derechos del acreedor. La subrogación es convencional o legal. La subrogación convencional puede ser consentida, sea por el acreedor sin intervención del deudor, sea por el deudor sin el concurso de la voluntad del acreedor⁸⁶.

⁸⁶ COLMO, Alfredo. *De las obligaciones en general*. Tercera edición, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1944, Página 444.

Alvaro PEREZ VIVES⁸⁷ nos dice que la subrogación es la sustitución del primitivo acreedor por otro, que ocupa su lugar, sin que haya novación. Luego, el nuevo acreedor recibe el crédito tal y como se hallaba al momento de la subrogación, con todos sus privilegios, prendas e hipotecas, pero también con las excepciones que contra el acreedor pudiera oponer el deudor, entre ellas la de prescripción. En otras palabras: si el crédito estaba prescrito y el fiador paga, haya o no dado aviso al deudor, el pago lo habría sido respecto de una obligación, y por consiguiente, el deudor no estaría obligado al reembolso y el fiador no habría podido subrogarse en la acción del acreedor, puesto que ella estaba extinguida.

Dentro de las ventajas atribuibles a la subrogación se encuentra la posibilidad de que el deudor principal que es el avalado pueda liberarse de un acreedor incómodo (tenedor del título valor), sustituyéndolo por otro más tolerante (el aval que paga y se subroga). Beneficia al acreedor porque encuentra quien le pague lo que se le debe. No perjudica a los otros acreedores que el deudor pueda tener, por lo mismo que los derechos de aquellos permanecen inalterados.

El Código Civil, en el art. 1260 señala que la subrogación opera de pleno derecho a favor de:

1. De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros.
2. De quien por tener legítimo interés cumple la obligación.
3. Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es preferente.

El art. 1261 del mismo cuerpo sustantivo señala cuándo tiene lugar la subrogación convencional, a saber:

1. Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus derechos
2. Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa o tácita del deudor

⁸⁷ PEREZ VIVES, Alvaro. *Garantías Civiles (Hipoteca, Prenda, Fianza)*. Editorial Temis, Bogotá, 1984, Página 444.

3. Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y subroga al mutuante en los derechos del acreedor, siempre que el contrato de mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal propósito en dicho contrato y expresando su procedencia al tiempo de efectuar el pago.

Asimismo, la subrogación puede operar de modo parcial y si los bienes del deudor no alcanzasen para pagar la parte restante que corresponda al acreedor y la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la porción que respectivamente se les debiera; así lo dispone el art. 1264 del CC.

El efecto principal de la subrogación es la sustitución del subrogado, adquiriendo por ello, todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado (art. 1262 CC).

Las mismas reglas establecidas en el Código Civil para el caso de la subrogación, como forma atípica de extinguir obligaciones, también operan para el avalista que cumple con la obligación garantizada. El avalista adquiere los derechos resultantes del título valor contra el avalado y los obligados, subrogándose en todas las garantías y derechos que otorga dicho documento. En este sentido, el avalista adquiere derechos resultantes del título valor, es decir, derechos cambiarios contra el propio avalado. El avalista de un obligado de regreso adquiere derechos frente al girado aceptante, como obligado principal, y a su eventual avalista, y también frente a los otros obligados de regreso que preceden en la relación cambiaria a su avalado.

Finalmente, el inciso segundo del artículo bajo comentario no estaba en la anterior ley. Mediante él, se dispone que el avalista que paga el día del vencimiento o antes que el título fuese protestado, no requerirá de protesto o formalidad sustitutoria a que se refiere el inciso segundo del art. 70, para ejercitar los derechos cambiarios que le corresponda; pero dicho pago debe dejarse constancia en el mismo título. En efecto, en la ley anterior, el título valor que no era pagado por el obligado principal debía protestarse inevitablemente; luego, el aval podía cancelar el adeudo o cumplir, lamentablemente con retraso

la prestación debida, y recién entonces subrogarse o sustituirse al acreedor satisfecho para ejecutar al avalado. Porqué tener que aceptar y convenir en todo este engorroso mecanismo. Porqué no regular y prever la situación de un avalista cabalmente cumplidor de sus promesas de asegurar el cumplimiento oportuno de una obligación cambiaria de parte de su avalado y en este orden de ideas establecer que en este caso, dicho avalista paga en su oportunidad, solicita que en el título se deje expresa constancia de quién es la persona que ha cumplido con la obligación, y la fecha, y no requerir el protesto del título valor para ejecutar al avalado. La tenencia del documento legitima al aval y si a ello agregamos el respeto al principio de literalidad, en tanto y en cuanto en el título valor se ha dejado constancia de quién es la persona que ha pagado, para qué más formalidad y rigores. La exigibilidad debe proceder sin más. Así lo ha establecido esta nueva ley.

LA FIANZA

Artículo 61º.- Responsabilidad del fiador

61.1. Salvo que en modo expreso se haya señalado lo contrario, la fianza que conste en el mismo título valor o en el respectivo registro tiene carácter de solidaria y el fiador no goza del beneficio de excusión, aun cuando no se haya dejado constancia de ello en el título o en el respectivo registro del valor con representación por anotación en cuenta.

61.2. El fiador queda sujeto a la acción cambiaria, del mismo modo durante el mismo plazo y en los mismos términos que contra su afianzado.

61.3. El fiador puede oponer al tenedor del título valor, los medios de defensa personales de su afianzado.

La fianza es una garantía personal constituida por un tercero en refuerzo de cualquier tipo de obligaciones. De esta forma, el patrimonio de una persona distinta del deudor va a respaldar también la operación u operaciones de crédito que contraiga éste. Es una garantía de uso frecuente en la actividad mercantil y generalmente

bancaria, en la cual se precisa de un estudio del fiador, similar a la del cliente, en cuanto a la composición de su patrimonio y a los compromisos que lo gravan. El fiador se obliga frente al acreedor de responder por la deuda de otro. Su obligación es accesoria de la principal que garantiza su existencia.

La fianza no hace desaparecer la obligación primaria de cumplir que está a cargo del deudor principal, sino que implica un refuerzo que se da al acreedor de que esa obligación primaria será cumplida, autorizando la “agresión” al patrimonio del fiador si así no ocurriera.

“La fianza es una garantía personal accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple.”⁸⁸

Cuando en doctrina se alude a la naturaleza jurídica de la fianza, la referencia inmediata es respecto a su carácter accesorio y personal. En tal sentido, reiteramos, es una garantía personal porque el fiador responde por la deuda ante el incumplimiento del deudor. Es accesoria porque accede a una obligación principal, que es la garantizada por ella.

En la fianza el acreedor tiene el derecho subsidiario de persecución sobre la totalidad de los bienes que integran el patrimonio del fiador, mientras que en la garantía real carece de este derecho, debiendo limitar su persecución a la cosa objeto del gravamen.

De otro lado, la fianza cambiaria se caracteriza por ser solidaria, es decir, el fiador no puede oponer el beneficio de excusión, salvo disposición expresa en contrario. El art. 61 establece una presunción de solidaridad. Esta regla crea una marcada diferencia con la regulación de la fianza solidaria civilista. Los arts 1879 y 1880 del CC señalan que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de los bienes del deudor; y para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste lo requiera para el pago y acreditar la existencia de bienes del deudor realizables dentro del territorio de la

⁸⁸ PEREZ VIVES, Alvaro. Op. cit., Página 396.

República, que sean suficientes para cubrir el importe de la obligación. El profesor **CABANELLAS** nos refiere como BENEFICIO DE EXCUSION lo siguiente: "Expresión moderna para referirse al derecho que asiste al fiador o garante para pedir que el acreedor se dirija en primer término contra los bienes del deudor principal, cuyo embargo y venta judicial debe pedir antes de proceder contra el que dio caución en el negocio jurídico. Se funda en que el carácter accesorio de la garantía debe conservarse en la fase ejecutiva; y no servirse de ella sino 'accesoriamente', ante la imposibilidad de cumplimiento del deudor y de resarcimiento del acreedor con el patrimonio del principal obligado".

Pero el art. 1883 del C.C., señala que "La excusión no tiene lugar: 1. Cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella. 2. Cuando se ha obligado solidariamente con el deudor. 3. En caso de quiebra del deudor.

Entonces, quede claro que en materia de títulos valores la fianza toma distancia del concepto civilista, pues la fianza se presumirá siempre solidaria, salvo, obvio, que de modo expreso se haya señalado lo contrario en el mismo título valor; pero sí está cerca al concepto civilista en el sentido de que por ser solidaria no tiene beneficio de excusión. Cuidado. No deberá llamar la atención el instituto: solidaridad con beneficio de excusión. En efecto, ello existe perfectamente en una ley mercantil hermana de la ley de títulos valores: la Ley General de Sociedades. Verificar el caso de los socios de una sociedad colectiva que responden personal, solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales, pero con beneficio de excusión; símil es el caso de socios de la sociedad civil ordinaria, aunque es verdad que en este último caso la ley alude a una responsabilidad personal pero en "forma subsidiaria", con beneficio de excusión. Ver sobre el particular los arts. 48 de la ALGS, y 273, 295 y 303-8 de la NLGS.

El segundo inciso establece que el fiador queda sujeto a la acción cambiaria de la misma forma, durante el mismo plazo y en los mismos términos que el afianzado. En tal sentido, el fiador tendrá derecho a oponer al acreedor todas las defensas y excepciones que el deudor tuviere contra él, e inclusive contra la voluntad de éste y aún

cuando hubiere renunciado a la prescripción u otra causa de liberación.

El CC en su art. 1873, señala con relación a la extensión de la obligación del fiador, que éste sólo quedará obligado por aquello a que expresamente se hubiese comprometido, no pudiendo exceder de lo que debe el deudor. Sin embargo, es válido que el fiador se obligue de un modo más eficaz que el deudor.

Por otro lado, la LdeB en su art. 167, señala que la fianza solidaria o con renuncia al beneficio de excusión que conste de un título valor confiere mérito ejecutivo contra su suscriptor, en los mismos términos que la ley de la materia señala respecto de los avalistas.

Clásicamente, la doctrina supo encontrar algunas diferencias entre aval y fianza, que por supuesto, con la presente ley, algunas de ellas han sido superadas. Entre aquellas podemos citar:

- a. La obligación del avalista fue siempre directa, independiente y solidaria; la del fiador fue siempre accesoria y pudo o no ser solidaria;
- b. El avalista no puede valerse de las excepciones personales del avalado; su obligación es independiente y el derecho de tercero es autónomo; el fiador podía valerse y puede ahora también, valerse, de todas las defensas personales del deudor garantizado, aún en contra de la voluntad de éste;
- c. La nulidad de la obligación avalada que no provenga de vicios de forma, no afecta al aval; por el contrario, afecta a la fianza, haciéndola nula o anulable; y
- d. Para accionar contra el avalista no se requiere excusión ni interpelación judicial previa al avalado; en la fianza civil no solidaria existe el derecho de excusión previa del deudor principal.

El profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** hace una clásica comparación y nos dice que:

1. El aval, que cuenta con naturaleza típicamente cambiaria, es siempre comercial; la fianza, sigue la naturaleza civil o comercial de la obligación principal;
2. El aval, como todos los actos cambiarios, surge de una declaración unilateral de voluntad; la fianza surge, normalmente, de un contrato que se perfecciona en virtud al consentimiento de las partes y debe probársela por escrito.
3. El aval es una garantía objetiva, ya que compromete al pago, aún ante el vicio o inexistencia sustancial de la obligación avalada; la fianza puede ser considerada una garantía subjetiva en tanto para su eficacia es necesaria la validez sustancial de la obligación principal;
4. El aval, como acto cambiario es autónomo e independiente; la fianza permite al fiador valerse de todas las defensas y excepciones del deudor afianzado;
5. La nulidad de la obligación avalada no libera al avalista de sus responsabilidades cambiarias; la nulidad de la obligación afianzada acarrea la nulidad de la fianza;
6. La responsabilidad del avalista, en tanto solidario, puede ser efectivizada directamente, sin necesidad de excusión, preaviso ni advertencia; en la fianza civil, es necesaria la excusión previa de los bienes del deudor afianzado;
7. En el aval, el avalista no goza del derecho de división ni de excusión; en la fianza civil, no solidaria, el fiador tiene el derecho de división y de excusión;
8. El avalista, en caso de pagar, tiene acción cambiaria fundada en el título, ejerciendo un derecho literal y autónomo, informado del principio de abstracción, en tanto es portador legitimado del título; el fiador que paga se subroga en los derechos pero su potestad de repetición de lo pagado puede verse enervada si dejó de oponer las excepciones personales que tenía el deudor principal, o no puso en su conocimiento el requerimiento del acreedor;
9. En determinadas circunstancias, la ley presume que una firma puesta en el anverso, sin identificar, y si no pertenece ni al girador ni al aceptante, es un aval concedido en favor del girador; la fianza no se presume; y
10. El aval no puede estar sujeto a condición; la fianza puede contenerla, ya que no existe prohibición legal al respecto".

Las glosadas, han sido las notas típicas de diferencia clásica entre el aval cambiario y la fianza civil o comercial regulada por los Arts. 1868 a 1905 del Código Civil, concordante con el Art. 2112 del mismo cuerpo legal. Debido a su uso frecuente tanto en las relaciones mercantiles como bancarias y financieras, la fianza ha sido adoptada como pariente natural y típica de la familia cambiaria. En este orden de ideas, siempre la fianza en título valor será solidaria y por ende el fiador no gozará del beneficio de excusión, salvo que en modo expreso se haya señalado lo contrario. Este concepto toma distancia pues de la fianza típicamente civil. En tanto el fiador queda sujeto a la acción cambiaria, del mismo modo, durante el mismo plazo y en los mismos términos que contra su afianzado, su semejanza y aún identidad con el aval, se torna evidente. Toma distancia la fianza del aval cuando en el Art. 61.3 la ley permite al fiador oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su afianzado y esto último trae varias consecuencias jurídicas pues tiene estrecha conexión, como se puede advertir con los puntos 3, 4 y 5 y eventualmente 8 y 10, precitados.

Artículo 62º.- Normas aplicables a la fianza

Son de aplicación a la fianza de que trata el Artículo 61º, en cuanto no resulten incompatibles con su naturaleza y con lo señalado en dicho artículo, las disposiciones referentes al aval.

El presente artículo refiere que el régimen legal de la fianza cambiaria está conformado por las disposiciones que contiene el art. 61 y, además, las normas relativas al aval siempre que no resulten incompatibles con ésta. Por ejemplo, no podríamos aplicar a la fianza la disposición que prohíbe al aval oponer los medios de defensa personales de su avalado, porque el art. 61 se pronuncia en sentido contrario. En cambio, sí se debe aplicar a la fianza la disposición que establece que el aval se expresa con la cláusula “por aval” o “aval”, y en este orden de ideas, debemos precisar que en el título valor debe anotarse “fianza por....” o simplemente “fianza”.

La presunción de que a falta de indicación del domicilio del avalista se entenderá para todos los fines de ley respecto al ejercicio de las acciones derivadas del título valor, que éste domicilia en el

mismo lugar que su avalado o en el lugar del pago, debe también aplicarse a la fianza.

LAS GARANTIAS PERSONALES EN LA NUEVA LEY DE TITULOS VALORES

FIANZA	AVAL
La fianza puede ser otorgada por cualquiera de los intervinientes, e incluso por un tercero, excepto por el obligado principal.	El aval puede ser otorgado por cualquiera de los intervinientes en el título valor o por un tercero. Sólo el obligado principal no puede otorgar aval.
La fianza puede constar en el mismo título valor o en el registro respectivo, dependiendo si éste es materializado o desmaterializado.	El aval debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor o en hoja adherida a él.
La ley no ha señalado cláusulas especiales para la fianza.	El aval se expresa con las cláusulas “por aval” o “aval”, la indicación de la persona avalada; el nombre, número del documento oficial de identidad, domicilio y firma del avalista.
Si no se señala la persona afianzada, se presume que la garantía opera en respaldo del obligado principal.	Si no se señala la persona avalada, se entenderá otorgado a favor del obligado principal o del girador.
La fianza tiene carácter de solidaria y el fiador no goza del beneficio de excusión aun cuando se haya dejado constancia de ello en el título valor o en el registro respectivo, salvo que en modo expreso se haya señalado lo contrario.	El avalista queda obligado de igual modo que el avalado, subsistiendo su responsabilidad aunque la obligación causal del título valor fuere nula; excepto si se trata de un defecto de forma del documento.

El fiador puede oponer al tenedor del título valor, los medios de defensa personales de su afianzado.	El avalista no puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su avalado.
El fiador queda sujeto a la acción cambiaria, del mismo modo, durante el mismo plazo y en los mismos términos que su afianzado.	El avalista puede asumir la obligación en forma indefinida, debiendo constar en modo expreso en el título mediante la cláusula “aval indefinido” o “aval permanente”.
El fiador que paga el título valor queda subrogado en los derechos que el tenedor tiene contra el afianzado.	El avalista que cumple con la obligación garantizada, adquiere los derechos resultantes del título valor contra el avalado y los obligados a favor de éste en virtud del título valor, y se subroga en todas las garantías y derechos que otorgue dicho título.

LAS GARANTIAS REALES

Artículo 63º.- Garantías reales

63.1. Además de las formalidades y requisitos que las respectivas disposiciones legales señalen para la constitución de garantías reales que respalden títulos valores, cuando dichas garantías aseguren el cumplimiento de las obligaciones frente a cualquier tenedor, debe señalarse en el mismo título o en el respectivo registro, la existencia de tales garantías y, en su caso, las referencias de su inscripción registral.

63.2. En ese caso, las transferencias del título no requieren del asentimiento del obligado ni, de ser el caso, del constituyente de la

garantía, para que ésta tenga plena eficacia frente a cualquier tenedor del título valor.

El presente artículo, al igual que las disposiciones sobre fianza cambiaria, también es novedoso. En él se señalan las formalidades adicionales que deben cumplirse al momento de constituir garantías reales sobre títulos valores. Se establece que si tales garantías aseguran el cumplimiento de obligaciones frente a cualquier tenedor, deberán señalarse en el mismo título o en el respectivo registro la existencia de tales garantías y, en su caso, las referencias de su inscripción registral.

Similar disposición contiene el art. 1108 del CC, cuando establece que la escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos valores a la orden o al portador, debe consignar:

- Las circunstancias propias de la constitución de hipoteca.
- El número y valor de los títulos valores que se emitan y garanticen la hipoteca.
- La serie o series a que correspondan.
- La fecha o fechas de emisión.
- El plazo y forma en que deben ser amortizados.
- La designación de un fideicomisario, y las demás que sirvan para determinar las condiciones de dichos títulos.

La ley establece que de registrarse la constitución de las garantías sobre el título valor en el registro respectivo o en el mismo título, las transferencias de éste no requerirán del asentimiento del obligado ni del constituyente de la garantía, para que tenga plena eficacia frente a cualquier tenedor.

Tal disposición se asemeja y concuerda a los principios registrales de publicidad, por el cual se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; y de legitimación, por el cual el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez.

La conjugación de ambos principios garantizan que la transferencia de un título valor hecha en favor de cualquier tenedor surtirá plenamente todos sus efectos, pues se presume que éste

conoce de la existencia de las garantías que recaen sobre el título valor. En consecuencia, no será necesario que el obligado o el constituyente de la garantía participen en la transferencia del título valor, dando su asentimiento o no a ésta, para que el negocio jurídico surta efecto.

3.20. EL PROTESTO DE LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 70º - Títulos valores sujetos a protesto

70.1. Salvo disposición distinta de la presente Ley, en caso de incumplimiento de las obligaciones que representa el título valor, debe dejarse constancia de ello mediante el protesto o, en su caso, debe observarse la formalidad sustitutoria que se establece, la que surtirá los mismos efectos del protesto.

70.2. En los títulos valores sujetos a protesto, el protesto o la formalidad sustitutoria que deben ser obtenidos dentro de los plazos previstos al efecto, constituye formalidad necesaria para el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas.

El protesto es una institución propia de los títulos valores cuya finalidad es acreditar la falta de aceptación o el incumplimiento en el pago por parte del obligado cambiario.

Para **Bernardo TRUJILLO CALLE**⁸⁹, el protesto es la declaración legal de un hecho. Se apoya fundamentalmente en la autenticidad, no importa que no sea solemne, que también puede serlo. Pero debe ser auténtico en la forma como la ley quiere que él sea: ante notario.

Lisandro PEÑA NOSSA⁹⁰, por su parte, expresa que el protesto es un acto solemne y excepcional que sirve para acreditar la falta de aceptación o de pago por parte del girado o aceptante. Es un acto solemne, porque requiere la intervención de un notario y por excepción por intermedio de un banco. Es un acto excepcional, porque opera cuando se inserta la cláusula con protesto, dependiendo del tipo de legislación que lo impone como facultativo u obligatorio.

⁸⁹ TRUJILLO CALLE, Bernardo. *De los Títulos Valores*. Tomo I, Octava edición, Editorial Temis, Bogotá, 1996, Página 220.

⁹⁰ PEÑA NOSSA, Lisandro. *Op.cit.*, Página 124.

“El uso del protesto es muy antiguo, se menciona que se han encontrado actas de protesto que datan del siglo XVI y según Don Eduardo Pallares, el más antiguo que se conoce fue hecho en Italia en 1531. La Biblioteca de Chartres, publicó uno correspondiente a dicho año relativo a una letra girada desde Ginebra a Seuta, a 30 días de plazo.

En el Derecho Común no se requiere establecer en forma auténtica el incumplimiento de una obligación, basta la afirmación del acreedor de que un crédito no le ha sido pagado, para que el deudor esté obligado a probar lo contrario. Respecto de la letra de cambio, fueron primero los usos mercantiles y más tarde las leyes, los que establecieron los requisitos del acto que prueba en forma auténtica la desatención del pago por parte del obligado, tal vez ello se deba a que la letra de cambio circula en países diferentes, lo que hace necesario identificar el incumplimiento de la obligación cambiaria. Además después del protesto conforme al Derecho Canónico, podían cobrarse intereses moratorios, los que no estaban prohibidos como los intereses ordinarios.

En nuestro derecho, la responsabilidad de los obligados indirectos en vía de regreso está subordinada a la falta total o parcial de aceptación o de pago de la letra, por lo que se requiere la existencia de una prueba de tal eficacia jurídica que demuestre –como dice la ley- de manera auténtica dicho incumplimiento. El protesto constituye esta prueba.”⁹¹

La finalidad del protesto es dejar constancia fehaciente e indubitable de la falta de aceptación o pago del título valor y dejar expedita la acción cambiaria contra los obligados.

En ese orden de ideas, **Bernardo TRUJILLO**⁹² señala que la finalidad del protesto es permitir el ejercicio de las acciones cambiarias por parte del tenedor del título valor (aspecto recogido por la presente ley en el art. 91, literal a), además de comprobar de manera fehaciente que quien debía pagar o aceptar no lo hizo a pesar

⁹¹ ASTUDILLO URSUA, Pedro. Op. cit., Páginas 260 y 261.

⁹² TRUJILLO, Bernardo. Op. cit., Página 222.

de la diligencia desplegada por el tenedor o para recoger su protesta, al paso de obtener una eventual reserva de los derechos de éste.

El protesto como ya expresamos, se caracteriza por constituir un medio de prueba, en razón de que sirve para demostrar que el último tenedor ha hecho la presentación para la aceptación o el pago, sin que el título valor haya sido aceptado o pagado. Sirve, además, para dar mayor seguridad al último tenedor del título valor, al ampliar el número de personas contra las cuales se puede dirigir en acción cambiaria, pues vincula a los endosantes y al girador. En ese sentido, cumple también una función conservativa de las acciones cambiarias contra todos los obligados; y una función procesal, para integrar la acción que emana del título impago.

Recogiendo las posiciones doctrinales, podemos señalar las siguientes clases de protesto⁹³:

- Protestos necesarios, los que deben levantarse tratándose de falta de aceptación y de falta de pago, porque su omisión priva al título valor de la acción cambiaria ejecutiva, o lo perjudica, vale decir, se pierde el derecho de reembolso de los endosantes o del librador, que pudiese probar que tenía hecha provisión de fondos al librado, al tiempo del vencimiento.
- Protestos voluntarios, los de mayor seguridad, por causa de quiebra, de garantía y de títulos avalados.

Por su objeto, la NLTV distingue las siguientes clases de protestos:

- Protesto por falta de aceptación, el cual debe verificarse dentro de los plazos fijados para ello (art. 147.1) es decir, hasta los ocho días posteriores al vencimiento de dicho plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación a su aceptación (art. 72.1 literal a).

⁹³ ASTUDILLO URSUA, Pedro. Op. cit., Páginas 262 y 263; BRAVO MELGAR, Sydney Alex. Op. cit., Páginas 89 y 90.

- Protesto por falta de pago de suma dineraria, el cual debe realizarse dentro de los quince días posteriores a su vencimiento, con excepción del cheque y de otros títulos valores con vencimiento a la vista (art. 72.1 literal b). Por ejemplo, letra de cambio: art. 121 literal b); pagaré: art. 160 literal b); factura conformada: art. 166.1 literal b).

El protesto se levanta contra el girado o contra el aceptante, según se trate de títulos valores no aceptados o no pagados; procede en todo caso, contra la parte directamente obligada. Puede exigirlo el tenedor, entendido en una acepción amplia; tomador o beneficiario o representante, endosatario a quien se hubiera transferido la propiedad del título por un endoso especial o en blanco, el depositario, el acreedor prendario, etc.

Según advierte **Pedro FLORES POLO**⁹⁴, la importancia del protesto radica en que:

- Permite consolidar el mérito ejecutivo de los títulos valores y dejar expedita la acción cambiaria que de ellos deriva.
- Sirve como elemento disuasivo para evitar incumplimientos, especialmente de aquellos no comerciantes o que acceden a créditos de consumo.
- Sirve como indicador u orientador para el otorgamiento de créditos.
- Se constituye en un elemento que tiende a consolidar la transparencia del mercado crediticio.

El inciso primero del artículo bajo comento, expresa que ante el incumplimiento de las obligaciones que representa el título valor, debe dejarse constancia de ello mediante el protesto o formalidad sustitutoria, que surtirá los mismos efectos que el primero.

Sin embargo, adviértase que el tenor del inciso se inicia con una salvedad: “Salvo disposición distinta de la presente Ley (...)”. Esta expresión se aplica al caso de títulos valores regulados en la presente ley, que para el inicio de acciones cambiarias no requieren de

⁹⁴ FLORES POLO, Pedro. *El protesto, las Cámaras de Comercio y el Anteproyecto de la Nueva Ley de Títulos Valores*. Estudios sobre Títulos Valores, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1999, Página 32.

protesto, tales son los casos de: Certificado Bancario de Moneda Extranjera (art. 220.1), Certificado Bancario de Moneda Nacional (art. 223), Conocimiento de Embarque (art. 249.2), Carta de Porte (art. 254.2), Valores Mobiliarios (art. 255.6).

De otro lado, cuando la ley hace referencia a la formalidad sustitutoria del protesto, ésta no es más que una constancia que revela el incumplimiento y que lo hace una empresa del sistema financiero nacional, al momento de verificar el pago con cargo en cuenta.

El segundo inciso señala que la obtención del protesto o de la formalidad sustitutoria, constituye un requisito necesario para el ejercicio de las acciones cambiarias, siempre y cuando se hayan realizado teniendo en cuenta los plazos señalados en el artículo 72; el cual se detallará y analizará en el comentario correspondiente.

Para el profesor **Osvaldo R. GOMEZ LEO** y para la doctrina y legislación argentina, "el protesto es un acto auténtico, formal, solemne, unitario e insustituible, impuesto por la ley al tenedor, como carga sustancial, con la doble finalidad de comprobar situaciones cambiarias insatisfechas y fijar la actividad desarrollada por el portador para cumplir la regulación progresiva establecida por la ley cambiaria. Se trata de un acto auténtico, o sea público, en tanto el notario que procede a levantarlo deja constancia de los hechos pasados en su presencia, dando fe de ellos (en Argentina se establecieron normas alternativas al protesto postal bancario por falta de reglamentación de los Arts. 68 a 73 de su ley cambiaria). Las formalidades legales del protesto son exigidas bajo pena de nulidad con el objeto de suministrar adecuada tutela a los valores esenciales de certeza y seguridad que informan la circulación y efectivización del crédito cambiario. Tales exigencias instrumentales hacen del protesto un acto solemne. El protesto es unitario porque debe hacérselo es un solo acto; es decir, en ese acto hay que plantearle todos los requerimientos al deudor y debe contener todas las respuestas. El protesto deviene insustituible, en tanto no se lo puede reemplazar por ningún otro acto. Este carácter insustituible es de viejo cuño, pues ya la ordenanza francesa de 1673 proclamaba que el protesto no podía ser sustituido por ningún otro acto, documento o testigo. El principio general mencionado sólo cede cuando, expresamente, la ley

(dispensa legal) o la voluntad (dispensa voluntaria) del girador o de algún endosante, mediante la cláusula "sin protesto", releva al tenedor de tener que levantar protesto.

El riguroso sistema cambiario determina la necesidad del protesto no como una obligación sino como una carga sustancial, en cuanto imperativo del propio interés del tenedor del título. No se puede decir que el tenedor esté obligado a levantar protesto pues no existe, jurídicamente, un sujeto pretensor que pueda exigir tal conducta, sino que ese tenedor puede o no efectuar el protesto; pero la ley condiciona a la realización del protesto el ejercicio de las acciones de regreso. En otras palabras, para la ley argentina, la no realización de tal diligencia notarial produce la caducidad de las acciones cambiarias de regreso. Se dice entonces que la letra está perjudicada.

La ley argentina regula dos clases de protesto: el protesto notarial y el protesto por notificación postal a cargo de un banco, también designado "protesto postal bancario".

La ausencia de reglamentación no ha permitido la vigencia real del protesto postal bancario. Si bien se han oído algunas opiniones en su apoyo, autorizada doctrina lo ha criticado. Se ha dicho que se trata de una institución que no ha funcionado ni siquiera en los países europeos que cuentan con un servicio de correos mucho más eficiente que el argentino y tienen además, un territorio reducido, que no conspira contra la rapidez y seguridad de los envíos postales.

Se transcribe a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales relativas al protesto. Veamos:

(1) Exp. 505-96 Lima. "...Los títulos valores, entre ellos la letra de cambio, están investidos de los principios jurídicos de incorporación del derecho subjetivo en el documento, literalidad, legitimación activa y pasiva, y la buena fe del tenedor como condición de legitimación..."
Lima, diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Umpire Nogales; Que, de la lectura y análisis de los actuados, escuchado el informe oral; y CONSIDERANDO: A que: PRIMERO: Los títulos valores, entre ellos la letra de cambio, están investidos de los principios jurídicos de

incorporación del derecho subjetivo en el documento, literalidad, legitimación activa y pasiva, y la buena fe del tenedor como condición de legitimación; SEGUNDO: La letra de cambio conforme lo establecen los artículos sesentiuno y sesentidós deben cumplir requisitos especiales bajo sanción de tenerla por perjudicada; TERCERO: Las formas de giro establecidas en el artículo sesentitrés de la Ley diecisiete mil quinientos ochentisiete, son: a tantos días de la fecha de emisión, a la vista, a tantos días de la vista y a fecha fija; CUARTO: La letra de cambio de fojas dos, está girada a ochenta días de la vista, teniendo como fecha referencial la fecha de emisión: diez de noviembre de mil novecientos noventicuatro, se establece el vencimiento el veintiocho de enero de mil novecientos noventicinco, por lo que el protesto debe diligenciarse dentro del octavo día computable desde el día siguiente del vencimiento, conforme lo estipula el artículo de la ley de la materia, lo que no concuerda con la fecha en la que realmente se produjo el protesto: veintidós de mayo de mil novecientos noventicinco; QUINTO: Si tomamos como referencia la fecha de vencimiento indicado en el contexto de la letra: treinta de enero de mil novecientos noventicinco, el protesto debió diligenciarse a más tardar el siete de febrero de mil novecientos noventicinco, y no el veintidós de mayo de mil novecientos noventicinco como está precisado en el reverso de la letra de cambio, lo que resulta que el término para el protesto se ha excedido en demasía; SEXTO: El inciso octavo del artículo sesentiuno de la precitada ley, precisa que no basta consignar la firma del girador o librador, sino que debe indicarse el nombre, lo que no consta en el documento en examen, por lo que REVOCARON la resolución obrante a fojas cuarentisiete a cuarentinueve, de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicinco, que declara fundada la demanda y adelante su ejecución hasta que el demandado abone la suma puesta a cobro; con lo demás que contiene; REFORMÁNDOLA; declararon improcedente la demanda.

(2) Exp. 1787-95 Lima. "... De acuerdo a los principios de literalidad y legitimación la relación cartular no ha sido afectada por el protesto falsificado, subsistiendo la obligación como consecuencia de la relación causal, lo que sí es insoslayable es que el título valor ha sido perjudicado por el protesto falso cuyos efectos lo inhabilitan para el proceso ejecutivo, enteramente formal..."

Lima, siete de mayo de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Umpire Nogales; Que, de la lectura y análisis de las piezas procesales que conforman el expediente; por sus propios fundamentos; y CONSIDERANDO; además; A que: Conforme aparece del texto del anverso de la letra de cambio, de acuerdo a los principios de literalidad y legitimación la relación cartular no ha sido afectada por el protesto falsificado, subsistiendo la obligación como consecuencia de la relación causal, lo que sí es insoslayable es que el título valor ha sido perjudicado por el protesto falso cuyos efectos lo inhabilitan para el proceso ejecutivo, enteramente formal, por lo que: CONFIRMARON la resolución apelada obrante a fojas ochenticuatro a ochentis y seis, de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que declara fundada la contradicción propuesta por don José Urbano Arias, denegándose la ejecución materia de la demanda; con lo demás que contiene.

Artículo 71º.- Obligación de protestar

71.1. En los títulos valores sujetos a protesto, ni la incapacidad o la insolvencia decretada, o la muerte del obligado principal dispensan de la obligación de formalizar el protesto; salvo que se haya liberado de ello según el Artículo 81º.

71.2. Aun cuando se haya liberado del protesto conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el tenedor podrá obtener el protesto, siendo en este caso de su cuenta los gastos respectivos.

71.3. Si ha muerto la persona a quien el título debe ser presentado, el protesto que se realice contra ésta surtirá plenos efectos legales, inclusive contra sus herederos.

71.4. El protesto realizado contra el obligado principal o, en su caso, contra el girado no aceptante de la Letra de Cambio libera de la obligación de hacerlo contra los demás obligados. Es facultativo hacerlo contra dichos obligados solidarios y/o garantes.

El protesto, en aquellos títulos valores sujetos a éste, deberá realizarse aun cuando el obligado principal haya muerto, sea o devenga en incapaz, o se haya decretado su insolvencia.

La única excepción que reconoce la ley a la obligación de protestar es mediante la cláusula de “No protestar” o “Sin protesto”, la

cual para que surta el efecto liberador, deberá constar en el texto del título valor.

Por su parte la ALTV, regulaba esta obligación de la siguiente manera: “La incapacidad de la persona a quien el título debe presentarse no dispensa de la obligación de formalizar el protesto contra ella. Si ha muerto la persona a quien el título debe presentarse, el protesto será formalizado de todos modos, entendiéndose que el requerimiento ha sido hecho a sus sucesores.” (art. 48).

Cuáles son las diferencias en una y otra regulación:

- Ambas leyes tienen en cuenta a la incapacidad y a la muerte del obligado principal.
- La nueva ley, en cambio, introduce el supuesto de la insolvencia decretada.

Aun cuando se haya estipulado la cláusula “sin protesto”, el tenedor podrá obtener el protesto, pero será de su cuenta los gastos que ello ocasione. Dicha disposición, resulta concordante con el segundo inciso del art. 81 que señala que la cláusula de “no protesto” no impide que el tenedor opte por su protesto, en cuyo caso los gastos respectivos serán de su cuenta.

Como hemos expresado, el protesto no se dispensa ni por razones de incapacidad, insolvencia declarada o muerte del obligado principal. Es más, de ocurrir esto último, el protesto surtirá plenos efectos legales contra sus herederos.

La transmisión de dicha obligación a los herederos del obligado principal, constituye consecuencia del principio de transmisibilidad de las obligaciones, regulado en los arts. 660 y 1218 del CC.

Como afirma **Ulises MONTOYA MANFREDI**⁹⁵, el protesto tiene carácter de inexcusable aun en casos de incapacidad o muerte del obligado principal. Tratándose de este último caso, la ley lo entiende cumplido contra los herederos del obligado. Es en virtud de esta norma que los herederos no están obligados a manifestar dentro del

⁹⁵ MONTOYA MANFREDI, Ulises. Op. cit., Página 180.

término en el cual debe hacerse el protesto, si aceptan o rechazan la obligación cartular, ni si aceptan o rechazan la herencia, ni a efectuar declaración de voluntad en uno u otro sentido.

El último inciso traduce el efecto liberatorio del protesto en beneficio de los obligados solidarios o no principales y/o garantes del título valor, siempre que se haya realizado contra el obligado directo o el girado no aceptante de la letra de cambio.

Para el caso de la letra de cambio, procede el protesto por su falta de aceptación, siendo posible dirigirlo contra el girado no aceptante en cuyo caso, el co-obligado principal, el girador, asume su verdadero carácter. No olvidemos que con arreglo al art. 123 de esta NLTV, el girador responde por la aceptación y el pago; también se hallaba en el art. 67 de la ALTV. El art. 10 de la ley argentina indica que "El librador es garante de la aceptación y del pago. Él puede liberarse de la garantía de aceptación. Toda cláusula por la cual se libera de la garantía de pago se considera no escrita". También el numeral 10 de la ley chilena precisa cosa igual: "El librador garantiza la aceptación y el pago de la letra de cambio. Puede eximirse de la responsabilidad de la aceptación; pero toda cláusula por la cual se exima o limite su responsabilidad por el pago se tendrá por no escrita".

La ley cambiaria argentina, comenta **GOMEZ LEO**, incurriendo en un exagerado casuismo, determina que ante la incapacidad de las personas a quienes la letra debe ser presentada para la aceptación o el pago, el portador no queda relevado de cumplir esa carga y levantar el pertinente protesto, pues además debe dejar constancia de la mencionada circunstancia en el acta respectiva. Al contrario, se concede la dispensa de levantar protesto si el girado ha sido declarado en concurso o quiebra o si el librador de una letra no aceptable es quien se halla en esa situación. En tal caso, un testimonio de la sentencia de apertura del concurso basta para que queden expeditas las acciones regresivas. Si la persona a quien la letra debe ser presentada hubiera muerto, el protesto tendrá que ser levantado igualmente a su nombre. Se concluye, consagrando el principio dogmático sostenido en doctrina para los casos considerados, al disponer: "si no estuviese ninguna de estas personas, la diligencia se tendrá por cumplida dejándose constancia

en el acta", es decir que una vez cumplida formalmente la intimación de aceptar o de pagar, aunque de hecho ello no se efectivise por ausencia de quienes deben ser intimados, levantado el protesto en esas condiciones, será útil a los fines cambiarios y con todos los efectos jurídicos del caso.

La doctrina reconoce, por último, al denominado "protesto al viento". Este es el modo idóneo, desde el punto de vista cambiario sustancial, de dejar establecida, por acta notarial, la imposibilidad de realizar la intimación de aceptar o pagar la letra, a la vez que acredita la diligencia desarrollada por el portador legitimado para cumplir la carga sustancial que la ley cambiaria le impone a fin de que quede expedita la acción regresiva. En realidad, no se efectúa un verdadero requerimiento, ni hay una respuesta a éste, pero la ley los considera realizados. La necesidad de esta ficción es innegable, pues en su defecto, y teniendo en cuenta que la deuda es pagable en el domicilio del deudor, éste podría impedir o, al menos, dificultar la diligencia con sólo negarse a participar del requerimiento, lo cual obstaría a la procedencia de los recursos o acciones cambiarias. Los casos más comunes de "protesto al viento" se dan en las letras que si bien consignan el lugar de pago en sentido geográfico, no especifican el domicilio, calle y número, en que se deben efectuar los requerimientos de la aceptación y del pago, y el pertinente protesto en caso de que sean rehusados.

Se presentan a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia:

(1) Exp. N° 1101-96. Lima. La letra de cambio debidamente protestada por falta de pago, acredita la obligación de pago de los demandados con el ejecutante.

Lima, dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; resulta de autos que por escrito de fojas cuatro a fojas ocho, don Víctor José Salas Torreblanca, interpone demanda sobre Obligación de dar suma de dinero, en proceso ejecutivo, contra la Sucesión José Antonio Lishner de Albertis y don Carlos Lishner de Albertis, a fin de que cumplan con pagarle la suma de trece mil dólares americanos, importe de la letra de cambio que debidamente protestada se adjunta como recaudo; expone que es tenedor de la letra de cambio con la

que promueve la presente acción por el monto demandado, la misma que tiene por fecha de vencimiento el primero de julio del presente año, vencido el plazo pago de la cambial procedió a requerirlo sin que hasta la fecha haya cumplido con cancelarla, asimismo hace presente que al momento de requerirle verbalmente el pago de la obligación los familiares del demandado le manifestaron de que el mismo había fallecido el diecinueve de mayo del año en curso, razón por la cual la presente acción se dirige contra quienes pudiesen resultar sus herederos legales y ante el incumplimiento de pago pese a los requerimientos se vio obligado a plantear la presente demanda; invoca como fundamento de derecho lo dispuesto por el inciso primero del artículo mil doscientos diecinueve, seiscientos sesenta, seiscientos sesentiuno y mil doscientos dieciocho del Código Civil; artículo uno, diez, ciento veintidós, ciento veinticinco inciso primero, segundo y tercero de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete “Ley de Títulos Valores” y artículos cuatrocientos diez, cuatrocientos once, seiscientos noventitrés inciso primero y seiscientos noventicuatro inciso segundo del Código Procesal Civil; expedido y notificado el auto de pago, los ejecutados en modo alguno han formulado contradicción a la ejecución dentro del plazo establecido por ley, por lo que el proceso se encuentra expedito para sentenciar; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: que, la acción ejecutiva compete al ejecutante que presenta título que apareja ejecución; SEGUNDO: que, con la letra de cambio de fojas dos debidamente protestada por falta de pago se acredita la obligación de pago de los demandados con el ejecutante; TERCERO: que, los ejecutados no obstante haber sido emplazados válidamente no han formulado contradicción a la ejecución dentro del plazo señalado por ley, consecuentemente subsiste los motivos que sirvieron de base para expedir el mandato judicial de fojas nueve; CUARTO: por estas consideraciones y estando a lo dispuesto por los artículos seiscientos noventitrés inciso primero, seiscientos noventicuatro inciso primero, seiscientos noventiséis, seiscientos noventisiete y siguientes del Código Procesal Civil, artículo mil doscientos diecinueve inciso primero del Código Civil y haciéndose justicia a nombre de la Nación; FALLO: declarando FUNDADA la demanda de fojas cuatro a ocho, en consecuencia ORDENO que continúe la ejecución hasta que la sucesión José Antonio Lishner de Albertis y Carlos Lishner de Albertis cumplan con pagar al ejecutante la suma de trece mil dólares americanos o su equivalente en moneda

nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago; más intereses, costas y costos.

Artículo 72º.- Plazos para el trámite del protesto

72.1. El protesto debe realizarse dentro de los siguientes plazos:

- a) Si se trata de protesto por falta de aceptación, dentro del plazo de presentación de la Letra de Cambio para ese efecto e, inclusive, hasta los ocho (8) días posteriores al vencimiento de dicho plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación a su aceptación;*
- b) Si se trata de protesto por falta de pago de la suma dineraria que representa, dentro de los quince (15) días posteriores a su vencimiento, con excepción del Cheque y de otros títulos valores con vencimiento a la vista;*
- c) Si se trata de protesto por falta de pago de títulos valores pagaderos a la vista, distintos al cheque, desde el día siguiente de su emisión, durante el lapso de su presentación al pago e, inclusive, hasta los ocho (8) días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación al pago;*
- d) Si se trata de protesto por falta de pago del Cheque, dentro del plazo de presentación previsto en el Artículo 207º;*
- e) En los demás títulos valores sujetos a protesto, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que debió cumplirse la respectiva obligación.*

72.2. En los casos previstos en los incisos b) y e), el tenedor debe hacer entrega del título valor al fedatario, dentro de los primeros ocho (8) días de los quince (15) previstos en ellos. En los casos previstos en los incisos a), c) y d), tal entrega del título al fedatario deberá hacerse dentro de los plazos allí establecidos para su aceptación o pago, respectivamente.

72.3. Una vez recibido el título valor objeto de protesto, el fedatario realizará la notificación señalada en el Artículo 77º dentro de los plazos señalados en el presente Artículo.

El presente artículo precisa los plazos dentro de los cuales debe protestarse un título valor. La determinación y cumplimiento del plazo

son importantes, pues de él depende la posibilidad de que el título valor quede expedito para ejercitar las acciones cambiarias que derivan de éste.

Veamos, a través de un cuadro, las diferencias y/o semejanzas entre la ley anterior y la actual respecto a este punto:

ALTV	NLTV
- Al referirse al protesto por falta de aceptación de la Letra, señalaba que éste debía realizarse dentro del plazo de presentación de la letra para ese efecto (Art. 49 inc. 1).	- Considera, además, la posibilidad de protestar la Letra hasta los ocho días posteriores al vencimiento de dicho plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación a su aceptación (Art. 72.1 a).
- En referencia al protesto por falta de pago de la Letra, establecía que tanto ésta como el Pagaré o el Vale a la Orden, podían protestarse dentro de los ocho días posteriores al vencimiento (Art. 49. inc. 2).	- Para el caso de títulos valores que representan sumas de dinero (Letra de Cambio, art. 119, lit. c; Pagaré, art. 158, lit. c); Certificado Bancario en Moneda Extranjera, art. 218, lit. b); Certificado Bancario en Moneda Nacional, art. 223), con excepción del cheque y otros títulos valores con vencimiento a la vista, el protesto podrá realizarse dentro de los quince días posteriores al vencimiento del título valor (Art. 72.1 b).
- Protesto por falta de pago del cheque: Dentro del plazo de	- Protesto por falta de pago del cheque: Dentro del plazo de

presentación del título valor, 30 o 60 días, según hubiese sido emitido en el Perú o en el Extranjero (Arts. 49 inc.3; 165; 170).	presentación para su pago, 30 días (Arts. 72.1 b; 207). Se ha suprimido el plazo de 60 días para el caso de cheques emitidos en el extranjero.
	<ul style="list-style-type: none"> - Protesto por falta de pago de títulos valores a la vista (distintos al cheque): Desde el día siguiente de su emisión, durante el lapso de su presentación al pago, hasta los ocho días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título como término para su presentación al pago. - Es válido también el protesto realizado inclusive el mismo día de su presentación al pago (Art. 72.1 c).
<ul style="list-style-type: none"> - En los demás títulos valores: Dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que debió cumplirse la respectiva obligación (Art. 49 inc. 4). 	<ul style="list-style-type: none"> - En los demás títulos valores sujetos a protesto: Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que debió cumplirse la respectiva obligación (Art. 72.1 e).

El inciso segundo se ocupa de la obligación que tiene a su cargo el tenedor de entregar el título valor al fedatario.

Para los casos de títulos valores protestados por falta de pago de suma dineraria y de otros títulos valores sujetos a protesto, dicha entrega deberá efectuarse dentro de los ocho (8) primeros días de los quince (15) previstos para ellos.

En los casos de protesto por falta de aceptación del título valor, por falta de pago de títulos valores pagaderos a la vista, distintos al cheque, y por falta de pago del cheque; la entrega del título valor al fedatario deberá verificarse dentro de los plazos señalados en los literales a), c) y d) del inciso primero de este artículo.

Finalmente, el artículo bajo comentario señala que una vez que el fedatario haya recibido el título valor protestado, deberá realizar una notificación dirigida al domicilio designado para el pago del título valor, o en defecto de ésta, al lugar señalado en esta Ley.

Al respecto, el art. 78.4 concede plenos efectos a la notificación realizada en el lugar señalado en el título valor como lugar de pago; salvo que éste no exista. En tal caso se cursará otra notificación a la Cámara de Comercio del lugar o se dejará constancia de su imposibilidad, con lo que se tendrá por cumplido el protesto.

Transcribimos a continuación algunas ejecutorias de la Corte Suprema y otros Tribunales que expresan los criterios imperantes con relación al protesto, su eficacia, invalidez, nulidad y otros. Veamos.

(1) Exp. N° 362-95 Callao. La letra de cambio a la vista vence el día de la presentación al girado para su pago.

El protesto por falta de pago debe levantarse dentro de los ocho días posteriores al vencimiento.

Es ineficaz como título valor, la letra de cambio presentada al girado para su pago, el mismo día que se realizó el protesto.

Lima, veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-
VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: que la cambial de fojas dos con la que se recauda la acción ejecutiva es una letra de cambio a la vista que de conformidad con el artículo ochenta y nueve de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete sobre Títulos Valores, la letra de cambio a la vista vence el día de la presentación al girado para su pago; que la representación al pago deberá ser hecha dentro del plazo de un año desde su emisión; que el inciso segundo del artículo cuarenta y nueve de la mencionada Ley de Títulos Valores establece que si se trata de protesto por falta de pago de letra, pagaré o vale a la orden debe levantarse dentro de los ocho días posteriores al vencimiento; que la letra de cambio de fojas dos fue presentada al

girado para su pago el nueve de junio de mil novecientos noventidós y ese mismo día se realizó el protesto, hecho que determina su ineficacia como título valor por la inobservancia de normas expresas dentro del marco de un procedimiento eminentemente formal; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas trescientos dieciséis, su fecha diez de marzo del año actual, que revocando la apelada de fojas doscientos neventiuno de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, declara fundadas las oposiciones de fojas ciento veintitrés y doscientos cincuentiséis y fundada la demanda ejecutiva de fojas seis; reformando la primera, CONFIRMARON la segunda que declara improcedente la mencionada demanda ejecutiva y fundada la oposición.

(2) Exp. N° 2478-95. Callao. El protesto de la letra de cambio por falta de pago debe levantarse dentro de los ocho días posteriores al vencimiento. Por ende, pierde mérito ejecutivo la letra a la vista, cuyo protesto se efectuó el mismo día de su presentación para el pago, esto es el día de su vencimiento.

Callao, catorce de setiembre de mil novecientos noventicinco.- AUTOS y VISTOS; y atendiendo; PRIMERO: que, la parte demandante, ha dado cumplimiento a los requisitos postulatorios de admisibilidad, procedencia y competencia, contemplados en los artículos 424, 425, 693 inciso 3, 694, 695 y 696 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: que, la obligación contenida en el título ejecutivo con que se recauda la demanda es cierta, expresa y exigible, y siendo una de dar suma de dinero, es además, líquida, contiene los requisitos formales que a su naturaleza corresponden, por tratarse de una letra de cambio a la vista que contiene la obligación de dar suma de dinero con sujeción a lo dispuesto por los artículos 688, 689 del Código acotado; y con arreglo a lo dispuesto por los artículos 1, 17, 49, 63, 122, 125, 198 y 199 de la Ley 16587; artículos 298 al 309 del Decreto Legislativo 770, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros; TERCERO: estando a lo dispuesto por el artículo 697 del Código Procesal Civil, téngase por ADMITIDA la demanda en la vía procedimental EJECUTIVA, ordenándose que el representante de la ejecutada Creaciones Mirial Sociedad de Responsabilidad Limitada cumpla con abonar a la entidad bancaria demandante la suma de veintinueve mil setecientos treintidós nuevos soles con cuarentiocho céntimos, incluyendo intereses y gastos demandados, dentro del

quinto día, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. CUARTO: téngase por reservado el derecho de ampliación de la cuantía de la pretensión. QUINTO: téngase por delegados las facultades de representación judicial a favor del abogado Evelio Cassina Ramón.

Callao, veintinueve de agosto de mil noventa y seis.- VISTOS; resulta de autos, PRIMERO: que mediante escrito presentado de fojas treintiuno a treintisiete, el Banco de la Nación interpone en vía procedimental ejecutiva demanda de obligación de dar suma de dinero contra Creaciones Mirial S.R.L a fin de que ésta cumpla con pagarle la suma de veintinueve mil setecientos treintidós nuevos soles con cuarentiocho céntimos más intereses devengados y por devengarse hasta su cancelación efectiva, más gastos, costas y costos del proceso; SEGUNDO: que la demandante expone como fundamento de hecho que la obligación de dar suma de dinero proviene del saldo deudor de la cuenta corriente en moneda nacional número doscientos cero – cero cuarentitrés mil doscientos cuarenticinco que mantenía la demandada con el ex Banco Regional Sur Medio y Callao – SURMEBAN- (hoy Banco de la Nación) y que se cerró de conformidad con el artículo 580 al 583 del Código de Comercio sustituidos por el artículo 303 al 309 del Decreto Legislativo 770; TERCERO: que, como consecuencia del cierre de la cuenta corriente aludida, ocurrida el treinta de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se estableció el saldo deudor a dicha fecha ascendente al monto de veintiséis mil setecientos cincuentidós nuevos soles con noventidós céntimos por capital, el mismo que se puso en conocimiento de la correntista mediante carta notarial del trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y recepcionada el veintiocho de octubre del mismo año, CUARTO: que, no habiendo formulado la demandada observación alguna contra dicho saldo deudor ni habiéndose cumplido con el pago dentro del plazo de ley, el Banco remitió la segunda carta notarial EF/noventidós punto cuatro mil ciento veinte N ciento diecinueve-noventicinco del seis de enero de mil novecientos noventa y cinco y recepcionada por el deudor el trece de enero de mil novecientos noventa y cinco procediendo a girar una letra de cambio a la vista por la suma de veintinueve mil setecientos treintidós nuevos soles punto cuarentiocho que incluye además la suma de veintiséis mil setecientos cincuentidós punto noventidós céntimos señalado anteriormente los intereses corridos desde el día siguiente del cierre, esto es desde el

primero de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y hasta el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro fecha de vencimiento de dicha cambial y al no ser pagada dicha letra por el deudor a su presentación, ésta fue protestada por falta de pago como es de verse al dorso de dicho título valor, QUINTO: que, expedido el mandato de ejecución mediante resolución de fojas treinta y ocho y corrido el traslado conferido se apersona a la instancia la demandada mediante escrito que corre de fojas sesenta y cuatro a sesenta y seis, formulando contradicción por los fundamentos que expresa, argumentando que resulta inexigible el cumplimiento de la obligación y alegando que la referida mantuvo relaciones comerciales con la ex SURMEBAN, siendo la última operación comercial en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro quedando un saldo pendiente de pago consistente en una letra de cambio aceptada por la suma de cinco mil ciento cuarenta nuevos soles, la cual debió ser protestada oportunamente y, por otro lado debió interponerse la demanda dentro de los seis meses del protesto por lo que habiéndose vencido dicho término se han extinguido las acciones derivadas de la letra de cambio; SEXTO: que, corrido traslado de la contradicción, esta se absuelve en forma extemporánea por lo que prosiguiendo el trámite el Juzgado cita a las partes a audiencia única, la misma que se realiza en los términos que aparece de fojas ciento uno a ciento tres, ciento cinco a ciento seis y ciento siete a ciento nueve quedando la causa expedita para dictar sentencia, por lo que la señora juez recientemente avocada al conocimiento de la causa procede a expedirla y CONSIDERANDO: PRIMERO: que los argumentos de la contradicción están basados en primer lugar en una obligación distinta a la demandada pues mientras que la demandada se refiere a una letra girada contra el cliente por el saldo deudor de la cuenta corriente en moneda nacional número doscientos- cero cero cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco que mantenía el demandado en SURMEBAN con arreglo a lo dispuesto por el artículo 303 del Decreto Legislativo número setecientos setenta sin embargo la demandada se refiere en su contradicción a fojas sesenta y cinco a otra letra de cambio aceptada por la demandada por una suma de cinco mil ciento cuarenta la cual no es materia de la causa; SEGUNDO: que, por otro lado, el ordenamiento procesal vigente no establece plazo de seis meses contados a partir del protesto para la interposición de la demanda ejecutiva por lo que tampoco resulta amparable la contradicción en tal extremo; TERCERO: que, la demandada no ha desconocido en el

proceso la obligación puesta a cobro: CUARTO: que, la obligación de dar suma de dinero a cargo de la demandada resulta exigible por haberse cumplido lo expresamente establecido en el artículo 303 del Decreto Legislativo 770, debiendo ampararse la demanda también en cuanto a la obligación de pagar intereses, gastos de protesto, acreditado con el recibo de fojas veintinueve, así como costas y costos por cuyas consideraciones de conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil y demás normas citadas el Primer Juzgado Especializado en lo Civil del Callao; FALLA: declarando FUNDADA la demanda ejecutiva de fojas treintiuno a treintisiete e INFUNDADA la contradicción formulada de fojas sesenticuatro a sesetiséis, consecuentemente, ordénese llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada Creaciones Mirial S.R.L. Ltda. cumpla con pagar a la ejecutante Banco de la Nación la suma de veintinueve mil setecientos treintidós nuevos soles con cuarentiocho céntimos, importe a que se contrae la cambial de fojas veintiséis, más intereses legales devengados y por devengar hasta su cancelación, gastos de protesto de la referida letra de cambio, costas y costos.

Callao, veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; con el acompañamiento y CONSIDERANDO: PRIMERO: que la letra de cambio glosada a fojas veintiséis ha sido girada conforme lo prescribe el artículo trescientos tres del Decreto Legislativo setecientos setenta, esto es, letra de cambio a la vista; SEGUNDO: que, estando a carta de fojas veintiocho y la certificación de fojas veintiocho vuelta, ha sido presentada para su pago el trece de enero de mil novecientos noventa y seis y de la constancia de protesto puesta al dorso de la cambial, el protesto se ha verificado el mismo día de su presentación al referido pago, esto es, el mismo día de su vencimiento; TERCERO: que el artículo cuarentinueve inciso tercero de la Ley de Títulos Valores dispone que el protesto de la letra de pago debe levantarse dentro de los ocho días posteriores al vencimiento, por lo que al haberse protestado antes del plazo, la letra perdió su mérito ejecutivo, consecuentemente la acción ejecutiva deviene en improcedente, dejando a salvo el derecho del tenedor de solicitar el pago en otra vía; REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento quince a ciento dieciocho, resolución número nueve, su fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis que declara fundada la demanda e infundada la contradicción de fojas sesenticuatro a sesetiséis, REFORMÁNDOLA la declararon

IMPROCEDENTE la demanda y sin objeto pronunciarse sobre la contradicción, con costas y costos.

Artículo 73º .- Lugar de protesto

73.1. El protesto debe hacerse en el lugar designado para su presentación al pago, según la naturaleza del título, aún cuando la persona contra quien se realiza no esté presente, haya variado de domicilio real o devenido en incapaz, en insolvencia, o hubiere fallecido.

73.2. Si el título valor no contuviere indicación de domicilio para el pago ni pueda determinarse éste según las reglas al respecto señaladas en el Artículo 66º, o cuando esta indicación fuere inexistente, el protesto se hará mediante notificación cursada a la cámara de comercio provincial correspondiente al lugar de pago o, de no poder determinarse éste, del lugar de su emisión. De no existir cámara de comercio en dichos lugares, el fedatario que intervenga dejará constancia de ello y en su mérito se prescindirá de dicha notificación, sin que por ello se afecte la calidad de título valor protestado que tendrá el documento.

73.3. En el caso de títulos valores cuyo pago debe verificarse mediante cargo en cuenta de una empresa del Sistema Financiero Nacional al efecto señalado en el mismo documento conforme al Artículo 53º, el protesto se podrá realizar, en forma facultativa, ya sea mediante notificación cursada por el fedatario a la empresa designada o conforme a lo previsto en el Artículo 82º.

La regla contenida en el art. 73 establece que el protesto debe hacerse en el lugar designado para su presentación al pago, según la naturaleza del título. En tal sentido, el protesto -por falta de aceptación o de pago- deberá verificarse en el lugar expresamente determinado en el título para exigir la aceptación o el pago.

MONTOYA MANFREDI⁹⁶ señala que el protesto debe realizarse en lugares determinados. Si no se efectúa en el lugar señalado por la ley, el protesto no surte efectos legales.

⁹⁶ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 152.

De producirse el protesto en el lugar designado en el título valor para su presentación al pago, surte efectos aun cuando la persona contra quien se realiza no esté presente, haya variado de domicilio real o devenido en incapaz, en insolvencia o incluso, hubiese fallecido.

Tanto la incapacidad como el fallecimiento y la insolvencia, no son óbice para que deje de llevarse a cabo el protesto.

Como opina **Remigio PINO CARPIO**⁹⁷, si hubiera de suspenderse el protesto por esos motivos o por ausencia de quien debe ser requerido para la aceptación o pago del título valor, se le daría un medio muy fácil para que lo eluda, ya que con sólo ausentarse evitaría que la diligencia tenga lugar en tiempo oportuno.

Si el título valor no contiene indicación alguna sobre el domicilio en el cual se deberá efectuar el pago ni pueda determinarse éste según las reglas que señala el art. 66, es decir, considerando el domicilio que figure junto al nombre de quien resulte ser el obligado principal del título; o en su defecto, en el domicilio real del obligado principal; o el domicilio del indicado para el pago por intervención; o cuando la dirección fuere inexistente; si a pesar de todo ello no se puede determinar el domicilio en cuestión, el protesto se hará de la siguiente manera:

- Mediante notificación cursada a la cámara de comercio provincial correspondiente al lugar de pago o, de no poder determinarse éste, del lugar de su emisión.
- Prescindiéndose de la referida notificación, por no existir cámara de comercio en el lugar de pago ni en el lugar de emisión, el fedatario que intervenga dejará constancia de ello, sin que dicha prescindencia a la notificación, afecte la calidad de título valor protestado que tendrá el documento.

La doctrina apunta que éste es un caso de “protesto al viento”, para el cual se dispone que las diligencias de protesto por falta de

⁹⁷ PINO CARPIO, Remigio. *Ley de Títulos Valores*. Segunda edición, Cultural Cuzco, Lima, 1984, Página 108.

pago se tendrán por cumplidas dejándose constancia de ello en el registro notarial, según lo dispone el art. 78,1 de esta NLTV.

Tratándose de títulos valores cuyo pago debe verificarse mediante cargo en cuenta de una empresa del Sistema Financiero Nacional, el protesto se podrá realizar en forma facultativa, ya sea mediante notificación cursada por el fedatario a la referida empresa; o a través de una constancia que ésta deje en el mismo título. El art. 50 de la ALTV, fuente del actual art 73, sólo señalaba que el protesto debía hacerse en el lugar de presentación para el pago, según la naturaleza del título. Como se aprecia, la norma actual es mucho más detallista en su regulación en cuanto al lugar del protesto.

Veamos a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia:

Exp. N° 1127-91 Junín. La diligencia de protesto debe verificarse en el lugar de pago señalado en la cambial.

Lima, veinticinco de marzo de mil novecientos noventitrés.- VISTOS; Y, CONSIDERANDO: que no obstante haberse señalado en la cambial de fojas dos como lugar de pago La Merced, Jirón Tarma número ciento cincuentitrés; la diligencia de protesto se verificó en el distrito de San Ramón, esto es, contra lo expresamente previsto en el artículo noventa y siete de la Ley de Títulos Valores; que así mismo cabe agregar que la demandada tampoco ha sido emplazada y notificada con las garantías previstas por el artículo ciento treintinueve del Código de Procedimientos Civiles; que por lo expuesto y no reuniendo el recaudo los requisitos que la ley exige; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas veintiséis, su fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno, que confirmando la apelada de fojas once, su fecha veintisiete de febrero del mismo año, declara fundada la demanda de fojas cuatro; reformando la primera y revocando la segunda, declararon IMPROCEDENTE dicha demanda.

(2) Exp. N° 1083-95 Lima. "... Tal diligencia (protesto) (...) se ha llevado a cabo en domicilio distinto al que figura como el del obligado al pago, por lo que (...) carece de eficacia jurídica, lo que a su vez determina la inviabilidad de la acción cambiaria, dejando incólumes la acción causal y, en su caso la de enriquecimiento indebido..."

Lima, dieciocho de setiembre de mil novecientos noventicinco.- VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente el doctor Tineo Cabrera; oídos los informes orales; y CONSIDERANDO: Primero.- Que la acción contenida en la demanda de fojas dieciséis, es una de naturaleza cambiaria, hecha valer en un proceso abreviado, pues se basa en la propia letra de cambio, prescindiéndose de la relación subyacente que motivó su emisión; Segundo.- Que para el ejercicio de tal acción, entre otros requisitos formales, es indispensable el protesto por falta de pago, según las previsiones contenidas en el inciso segundo del artículo ciento veinticuatro de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete de Títulos Valores; Tercero.- Que si bien, en el caso de la letra de cambio de fojas uno puesta a cobro, se ha levantado el protesto con fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventidós por el Notario de Lima Doctor Manuel Reátegui T., tal diligencia, conforme consta del acta en protesto de fojas ciento trece, apreciada según los términos del artículo trescientos setenticuatro del Código Procesal Civil, se ha llevado a cabo en domicilio distinto al que figura como el del obligado al pago, por lo que conforme a lo prescrito por los artículos sesentiséis y noventisiete de la precitada Ley de Títulos Valores, carece de eficacia jurídica, lo que a su vez determina la inviabilidad de la acción cambiaria, dejando incólumes la acción causal y, en su caso la de enriquecimiento indebido; Cuarto.- Que el fallo se ha pronunciado sobre la falsedad de la obligación demandada, declarándola infundada, como si semejante alegación hubiera sido propuesta reconventionalmente, que no lo ha sido, por lo que dicho pronunciamiento resulta nulo, con arreglo a lo prescrito por el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil; y Quinto.- Que es evidente que el actor ha tenido razones atendibles para litigar, por lo que con arreglo a lo prescrito por el artículo cuatrocientos doce del Código adjetivo, debe exonerársele del pago de costas y costos del proceso; REVOCARON la sentencia apelada de fojas ochenticinco, su fecha dos de junio pasado que declarando fundada la demanda dispone que el demandado pague al actor la suma puesta a cobro o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha de pago, más intereses legales, costas y costos; REFORMÁNDOLA: DECLARARON IMPROCEDENTE la aludida demanda; sin costas; declararon asimismo INSUBSISTENTE la parte del fallo que desestima la falsedad de la obligación demandada.

Artículo 74º.- Trámite del protesto

74.1. El protesto será efectuado mediante notificación dirigida al obligado principal:

- a) Por Notario o secretarios;*
- b) Por Juez de Paz del distrito correspondiente al lugar de pago, sólo en caso de no haber Notario en la plaza.*

74.2. Los secretarios señalados en el inciso a) serán designados por el Notario. Tal designación, así como el cese deben ser comunicados por el Notario al Colegio de Notarios al que pertenece, para su anotación en el registro correspondiente que al efecto mantenga dicho Colegio. La responsabilidad por los actos del secretario corresponde al Notario que lo designó.

74.3. En los casos de títulos valores pagaderos con cargo en una cuenta que se mantenga en empresas del Sistema Financiero Nacional, conforme a lo previsto en el Artículo 53º, las constancias señalando la causa de la falta de pago que ellas están obligadas a dejar en el mismo título a simple petición del tenedor, surte todos los efectos del protesto. Sin embargo, es facultad del tenedor optar por el protesto mediante fedatario, conforme a lo señalado en el último párrafo del Artículo 73º.

La ALTV, art. 51, solo señalaba que el protesto sería diligenciado en un solo acto, por el notario o su secretario, o el juez de paz del distrito, si no hubiere notario. Ahora, se indica que el protesto se efectuará mediante notificación dirigida al obligado principal; se habla de “secretarios” (no en singular como la ALTV); y se indica que el Juez de Paz del Distrito será el correspondiente al lugar de pago.

El segundo inciso es novedoso. Establece que la designación de los secretarios que se encargarán de efectuar las notificaciones de protesto, correrá a cargo del Notario, debiendo comunicarla al Colegio de Notarios, el cual la anotará en su registro. Asimismo, dispone que la responsabilidad por los actos que realice el secretario corresponde al Notario que lo designó.

Por el contrario, la ALTV establecía que la Corte Superior de Justicia, a propuesta del Notario y bajo su responsabilidad, era la

encargada de designar a los secretarios notariales con autorización para diligenciar protestos (Art. 52).

Tratándose de títulos valores pagaderos mediante cargo en una cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional, la constancia que ellas dejen en el mismo título valor de la falta de pago -es decir, el cumplimiento de la formalidad sustitutoria- surte los mismos efectos que el protesto. Sin embargo, el tenedor puede optar en forma facultativa por realizar el protesto mediante fedatario.

Artículo 75º.- Día del protesto

75.1. La notificación relativa al protesto del título valor deberá cumplirse sólo de lunes a viernes, siempre que sea día hábil, dentro del plazo señalado en el Artículo 72º.

75.2. Si el último día del plazo dentro del cual debe efectuarse la entrega del título al fedatario o verificarse la notificación del protesto fuere día feriado, sábado o domingo; o, en el caso de título valor pagadero con cargo en cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional, dicho último día fuese no laborable en la empresa designada, el término queda prorrogado hasta el primer día hábil o, en su caso, día laborable siguiente, siempre que se trate de los días señalados en el párrafo anterior. Los días intermedios feriados, sábado o domingo y, en su caso no laborables, se consideran para el cómputo del plazo.

Del primer inciso se deduce que con excepción de los días sábados y domingos, todos los demás son adecuados para hacer el protesto siempre que sea día hábil. Asimismo, la ley exige que la notificación relativa al protesto se diligencie dentro de los plazos que señala el art. 72 ya sea que se trate de protesto por falta de aceptación o por falta de pago del título valor.

El segundo inciso se ocupa de la especial situación en que se encontraría el tenedor del título valor que decida realizar el protesto o entregar dicho documento al fedatario, el último día del plazo y éste fuera día feriado, sábado o domingo. En tal situación, el tenedor no podrá protestar el título valor en ninguno de esos días, debiendo realizarlo el primer día hábil o día laborable siguiente.

Para el caso de títulos valores pagaderos con cargo en una cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional, el protesto deberá realizarse en el primer día hábil o día laborable siguiente, si el día correspondiente para efectuarlo fuere sábado, domingo o feriado.

Se establece también que los días intermedios feriados, sábado o domingo y no laborables, se consideran para el cómputo del plazo. La explicación de porqué se computen los días inhábiles intermedios, radica en que la obligación de protestar por falta de pago debe cumplirse dentro de los quince días posteriores al vencimiento del título valor, con excepción del cheque, lo que significa que puede protestarse el documento en cualquier día dentro de los quince días; no haciendo falta, por tanto, que se excluya ningún día inhábil.

En suma, la notificación relativa al protesto se debe cumplir sólo de lunes a viernes, siempre que sea día hábil. Dicha estipulación es más flexible y precisa que la de la anterior ley, pues ésta establecía que los actos relativos al protesto debían efectuarse en día hábil y antes de las diecinueve horas (art. 53 de la ALTV).

Artículo 76º.- Prórrogas del plazo

76.1. Cuando la presentación de un título valor o la formalización del protesto se hicieran imposibles por mandato de disposición legal, los plazos quedan prorrogados hasta el límite que señale la norma pertinente.

76.2. Por hecho fortuito y causas de fuerza mayor, la Superintendencia, mediante disposición motivada, podrá prorrogar el plazo para protestar, cuando se traten de títulos valores en poder de las empresas sujetas a su control.

El presente artículo regula los supuestos de prórroga para la presentación del título valor o formalización del protesto:

- Cuando tales actos se vuelven imposibles por mandato de disposición legal.
- Por hecho fortuito y causas de fuerza mayor.

El primer caso, se puede presentar cuando acontecen determinados hechos que impiden la realización de una o más actividades. Por ejemplo cuando debido a una huelga, se paralizan los servicios bancarios siendo imposible exigir el cumplimiento de las obligaciones ni efectuar el pago correspondiente. Ante este evento, la ley ha optado por prorrogar el plazo hasta el límite que señale la norma pertinente.

El segundo supuesto contempla la ocurrencia de hechos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan cumplir con los plazos para la presentación del título valor o la formalización del protesto.

Hecho o caso fortuito, es aquel proviene de la naturaleza y que es ajeno a la voluntad humana (por ejemplo, una inundación). Para que un acontecimiento pueda considerarse un hecho fortuito, debe reunir las siguientes características:

- Que sea independiente de la voluntad humana, dando lugar a un acontecimiento inesperado, extraordinario e imprevisible.
- Que fuere imposible prever el suceso que motive el caso fortuito; y que, en el caso de poderse prever, no haya habido medio de evitarlo.
- Que, a consecuencia del mismo, el deudor se encuentre en la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones.
- No tener participación en los hechos, ni en la agravación del daño o perjuicio que haya resultado para el acreedor.

La fuerza mayor, proviene de un hecho de tercero ajeno a las fuerzas naturales y no imputable tampoco al deudor, que impide hacer lo que se debía o era posible y lícito.

Ambos conceptos coinciden con lo previsto en el art. 1315 del CC, que señala que caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

La doctrina nacional señala que una ley o disposición gubernamental son por sí mismas, una caso de fuerza mayor, cualesquiera sea su motivación, pues ambas normas deben ser cumplidas, aun cuando la motivación sea un caso fortuito. Tanto el

caso fortuito como la fuerza mayor, implican situaciones que eximen de responsabilidad, por ello en el caso de una suspensión de labores o huelga, el plazo se prorroga de hecho, impidiendo que se pudiera efectuar el cumplimiento de la obligación más allá del término señalado.

Por otro lado, el CPC regula también el caso de la suspensión del proceso civil debido a la ocurrencia de algún hecho imprevisto o que siendo previsible es inevitable. Producida la suspensión del proceso, se corta el plazo o se difiere el término para realizar un acto procesal, produciendo la ineficacia de la fracción del plazo o difiriendo el término transcurrido.

La novedad, respecto a la anterior ley, está en el inciso segundo de este art. 76. En él se precisa que la Superintendencia podrá prorrogar el plazo para protestar un título valor, por hecho fortuito y causas de fuerza mayor. Ello no estaba regulado por el art. 54 de la ALTV.

A los efectos de poder establecer las diferencias entre la formalidad del protesto en la ley anterior versus la formalidad en la nueva, a continuación se transcriben algunas ejecutorias de nuestros tribunales:

(1) Exp. Nº 1069-98 Lima. "...Del acta de protesto (...) fluye que la persona con quien se entendió la diligencia no se identificó; (...) la identificación personal en su acto que depende exclusivamente de la voluntad, razón por la que no se puede atribuir al funcionario público incumplimiento de la formalidad, si requerida una persona para que se identifique se niega a hacerlo..."

Lima, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS: Interviniendo como Vocal ponente la Doctora Cabello Arce; por sus fundamentos y considerando además: PRIMERO: que del acta de protesto que aparece de fojas cuarentiséis fluye que la persona con quien se entendió la diligencia no se identificó; SEGUNDO: que la identificación personal es un acto que depende exclusivamente de la voluntad, razón por la que no se puede atribuir al funcionario público incumplimiento de la formalidad, si requerida una persona para que se identifique se niega a hacerlo; TERCERO: que la parte apelante ni en

su escrito de contradicción ni en el de apelación ha negado la existencia de la deuda puesta a cobro: CONFIRMARON la sentencia apelada inserta en el acta de la audiencia de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia, que corre a fojas doscientos cuarenta su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que declara infundada la contradicción, de máximo Aurelio Bejar Carpio, doña Enma Rosa Pachas Vásquez de Bejar, improcedente la contradicción formulada por don Manuel Eduardo Flores Urbina y Rosa Julia Bejar Carpio y, fundada la demanda ejecutiva de fojas doce a dieciocho; en consecuencia ordena que se lleve adelante la ejecución hasta que la empresa Molino la Chalaca Sociedad Anónima con Manuel Eduardo Flores Urbina, Rosa Julia Bejar, Máximo Aurelio Bejar Carpio y Enma Rosa Pachas de Bejar cumplan en forma indistinta o solidaria con el pago de la suma total en dólares americanos de ochenta mil setecientos dieciocho con treinticuatro sobre cien, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de pago; y veintinueve mil novecientos ochentisiete y seis sobre cien nuevos soles; con lo demás que contiene.

(2) Exp. N° 46776-97 Lima. "... El notario o los secretarios notariales no tiene facultades policiales para obligar a las personas con quien se entiende la diligencia (de protesto) a identificarse..."

Lima, seis de julio de mil novecientos noventa y ocho.- VISTOS; Interviniendo como Vocal ponente el Señor Ferreira Vildozola; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO ADEMÁS: Primero.- Que el hecho de no constar el nombre del obligado en el acta de protesto no invalida la diligencia, puesta que es suficiente la constatación de haberse entendido con una persona que no quiso identificarse; Segundo.- Que el notario o los secretarios notariales no tienen facultades policiales para obligar a las personas con quien se entiende la diligencia a identificarse, por lo que la razón del acta de fojas dieciséis es suficiente; Tercero.- Que no habiéndose cancelado el importe del título valor recaudo de la acción ejecutiva: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas sesenticinco, su fecha veintiocho de abril del año en curso, que declara infundada la contradicción y fundada la demanda y, en consecuencia, mandaron se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados paguen a la ejecutante la suma de doce mil quinientos dólares americanos o su

equivalente en moneda nacional al tipo de cambio al día del pago; con lo demás que contiene.

Artículo 77°.- Requisitos formales de la notificación del protesto

77.1. La notificación del protesto que el fedatario curse al domicilio designado para su pago o, en su defecto, al lugar señalado en esta Ley, contendrá la siguiente información:

- a) El número correlativo que le corresponde;*
- b) Lugar y fecha de la notificación;*
- c) Nombre del obligado contra quien se realiza el protesto;*
- d) Domicilio donde se dirige la notificación;*
- e) Indicación de la denominación del título valor sujeto a protesto, fecha de emisión, fecha de vencimiento en su caso, importe o derecho que representa y cualquier otro elemento necesario para su identificación. Podrá optarse en su lugar, por enviar una copia fotostática u obtenida por cualquier otro medio similar, del título valor objeto de protesto;*
- f) Nombre del solicitante;*
- g) Nombre y dirección del fedatario que realiza la notificación;*
- h) Firma del Fedatario; o, de ser el caso, del secretario notarial.*

77.2. Esta notificación cursada dentro del plazo previsto en el Artículo 72° deberá ser entregada personalmente o enviada por el fedatario utilizando medios fehacientes que aseguren tal notificación, en el domicilio señalado en el título como lugar de pago o, de ser el caso, en el lugar correspondiente según el Artículo 73°.

Según la anterior ley, el protesto se hacía constar en un acta que el notario o juez de paz extendía en un registro especial para protestos; ahora el protesto se efectúa mediante notificación dirigida al obligado principal efectuada por el notario o sus secretarios y/o por juez de paz, de ser el caso.

Según advierte **Pedro FLORES POLO**⁹⁸, una de las razones que llevaron al legislador a cambiar el contexto anterior, fue la

⁹⁸ FLORES POLO, Pedro. Op. cit., Página 35.

imposibilidad de que los notarios realicen diariamente todos los protestos que tienen registrados. Con la nueva ley, se asigna al fedatario (que puede ser el Notario, sus secretarios o el Juez de Paz) la obligación de remitir a la Cámara de Comercio Provincial del lugar del protesto, por medios físicos, telématicos u otros, una relación de todos los protestos realizados por ellos en el lapso de un mes. A su vez, las Cámaras de Comercio provinciales que reciban tal información, deberán transmitirla a la Cámara de Comercio de Lima, la cual mantendrá un Registro Nacional de Protestos y Moras.

Los articulados relativos al Registro de Protestos, pertinentes a la Ley del Notariado N° 26002 y que concordaban con la ALTV, prescribían lo siguiente:

Artículo 37°.- Forman el protocolo notarial los siguientes registros:

- a) De escrituras públicas;
- b) De testamentos;
- c) De actas de protesto;
- d) De actas de transferencia de bienes muebles registrables; y,
- e) Otros que la ley determine.

Artículo 75°.- En este registro se extenderán las actas de protesto de títulos valores, cumpliéndose las formalidades señaladas en las leyes sobre la materia.

Artículo 76°.- Son también de observancia para el registro de actas de protesto, las normas que preceden en este título, en cuanto sean pertinentes.

Artículo 77°.- Se podrán llevar registros por separado para títulos valores distintos, para hacer posible su uso en formularios impresos.

Conforme a la Quinta Disposición Modificatoria de esta NLTV, los artículos 75, 76 y 77 antes citados, tienen ahora la siguiente redacción:

Artículo 75.- En este registro se anotarán los protestos de títulos valores, asignando una numeración correlativa a cada título, según el

orden de presentación por parte de los interesados para los fines de su protesto, observando las formalidades señaladas en la ley de la materia.

Igualmente, en este mismo sentido se anotarán los pagos parciales, negación de firmas en los títulos valores protestados u otras manifestaciones que deseen dejar constancia las personas a quienes se dirija la notificación del protesto, en el curso del día de dicha notificación y hasta el día hábil siguiente.

Artículo 76.- El registro puede constar en libros, o en medios electrónicos o similares que aseguren la oportunidad de sus anotaciones, observando las normas precedentes al presente Título en cuanto resulten pertinentes.

Artículo 77.- Se podrán llevar registros separados para títulos valores sujetos a protesto por falta de aceptación, por falta de pago y otras obligaciones, expidiendo certificaciones a favor de quienes lo soliciten.

La información que debe contener la notificación del protesto que el fedatario curse al obligado principal en su domicilio, es la siguiente:

- a) El número correlativo que le corresponde. Se entiende que cada notificación deberá llevar signado un número y dicha enumeración deberá ser sucesiva tomando en cuenta aquél que fue el último, de modo que se mantenga un orden cronológico.
- b) Lugar y fecha de la notificación. No hay hecho que no se realice en un lugar y en uno de los días del año. La indicación del lugar es importante a efectos de acreditar si se cumplió con lo dispuesto por los arts. 72 y 73, ya sea que se trate de protesto por falta de aceptación o por falta de pago. La fecha, comprende el año, mes y día del protesto. Este dato permitirá apreciar si la notificación del protesto se efectuó en la oportunidad que señala la ley.
- c) Nombre del obligado contra quien se realiza el protesto. El nombre de la persona contra quien se dirige la notificación, es

otro dato igualmente importante. Tal persona no es otra que el girado (si el protesto es por falta de aceptación) o el aceptante (si el protesto es por falta de pago) y el girador si el protesto es de pagaré y así sucesivamente.

- d) Domicilio donde se dirige la notificación. Este requisito no se consideraba en el art. 55 de la ley anterior. De no ubicarse la dirección o domicilio, se aplicarán las reglas contenidas en el art. 73.
- e) Indicación de la denominación del título valor sujeto a protesto, fecha de emisión, fecha de vencimiento en su caso, importe o derecho que representa y cualquier otro elemento necesario para su identificación. Podrá optarse en su lugar, por enviar una copia fotostática, u obtenida por cualquier otro medio similar, del título valor objeto de protesto. En virtud de este requisito, deberá señalarse si el título valor sujeto a protesto es un cheque, una letra de cambio, etc; así como incluir además, su fecha de emisión y fecha de vencimiento, lo cual dependerá de si el título valor vence a la vista, a fecha fija, a cierto plazo desde su aceptación o a cierto plazo desde su giro. En cuanto al importe o derecho que representa, deberá indicarse si se trata de un título valor que representa derechos crediticios o mercaderías. La misma ley admite la posibilidad de enviar una copia fotostática del título valor objeto de protesto.
- f) Nombre del solicitante. La indicación del nombre del solicitante, tiene la importancia de identificar al tenedor del título valor.
- g) Nombre y dirección del Fedatario que realiza la notificación. Ello se requiere ya que es el Notario quien asume la responsabilidad no sólo por sus actos propios, sino también por los del secretario que designó. La misma regla se aplica a los Jueces de Paz.
- h) Firma del fedatario; o de ser el caso, del secretario notarial. Se explica esta exigencia porque el funcionario del protesto es el que da fe de la realización del acto.

El segundo inciso establece que la notificación que se haya cursado observando los plazos del art. 72, debe ser entregada personalmente o enviada por el fedatario utilizando medios fehacientes que pueden ser físicos, telemáticos u otros idóneos que aseguren tal notificación. Asimismo, deberá realizarse en el domicilio señalado en el título valor como lugar de pago o de ser el caso, en el lugar que corresponda según el art. 73.

REQUISITOS FORMALES DE LA NOTIFICACIÓN DEL PROTESTO

Art. 55 de la ALTV	Art. 77 de la NLTV
<ul style="list-style-type: none"> - Lugar, fecha y hora de la diligencia. - Nombre del solicitante. - Nombre de la persona contra quien se dirige el protesto. - Nombre de la persona con quien se entienda, y su respuesta o los motivos de la falta de ésta. - Transcripción del título. - Firma del notario o del juez de paz o del secretario notarial que efectúe la diligencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - El número correlativo que le corresponda. - Lugar y fecha de la notificación. - Nombre del solicitante. - Nombre del obligado contra quien se realiza el protesto. - Indicación de la denominación del título valor sujeto a protesto, fecha de emisión, fecha de vencimiento, importe o derecho que representa y cualquier otro elemento necesario para su identificación. - Nombre y dirección del fedatario que realiza la notificación. Firma del fedatario, o de ser el caso, del secretario notarial. - Domicilio donde se dirige la notificación. - La notificación debe ser entregada personalmente o enviada por el fedatario a través de medios idóneos.

Artículo 78º.- Constancia de protesto

78.1. El Fedatario, mantendrá las constancias de las notificaciones que curse, conforme al Artículo 77º, en actas o

registros, que podrán constar en libros, hojas sueltas u otros medios mecánicos o electrónicos; así como de los pagos o aceptaciones parciales, negación de firma u obligaciones que señalen las personas contra quienes se realice el protesto. Si el emplazado no se apersona al local de la Notaría o del Juzgado a cumplir la obligación requerida durante el día de la notificación y el siguiente día hábil, el fedatario procederá a dejar constancia de ello y dar por cumplido con el protesto, dejando constancia en el mismo título valor, mediante la cláusula "Documento Protestado", con indicación de la fecha en que se cursó la notificación, refrendada con su firma.

78.2. Si el protesto fuese por falta de pago dinerario, el fedatario admitirá la suma que le entregue el obligado al pago hasta el día hábil siguiente al de la notificación, más los intereses y gastos respectivos, observando las formalidades correspondientes en el caso de verificarse pagos parciales.

78.3. El título valor que contenga la constancia señalada en el primer párrafo, que será devuelto al interesado al día subsiguiente al de la notificación, con la indicación, de ser el caso, del pago parcial que se hubiera hecho, es título suficiente para ejercitar las acciones cambiarias, sin que sea necesario acompañar constancia alguna.

78.4. Si en el domicilio al que se remite la notificación del protesto se rechazara ésta o por cualquier causa no fuese posible entregar la misma al destinatario, se dejará constancia de ello en el acta o registro señalado en el primer párrafo; surtiendo plenos efectos dicha notificación hecha en el lugar señalado para su pago y no afectando ello la validez del protesto que se tendrá hecho en dicho lugar; salvo que no exista, en cuyo caso se cursará otra notificación a la Cámara de Comercio respectiva o se dejará constancia de su imposibilidad, conforme al Artículo 73°, con lo que se tendrá por cumplido con el protesto.

78.5. El fedatario podrá expedir a quien lo solicite, las constancias o certificaciones de haber cumplido con las notificaciones de que trata el Artículo 77°, conforme conste en el acta o registro señalado en el primer párrafo del presente artículo; así como de la fecha en la que se recibió el título valor para su protesto y de las constancias a que se refiere el primer párrafo del presente Artículo.

El primer inciso del artículo que ahora nos ocupa regula dos situaciones de importancia que no fueron consideradas por la Ley anterior. La primera, es la obligación que recae sobre el fedatario de

anotar y mantener tanto las constancias de notificación, como las de los pagos o aceptaciones parciales, negaciones de firmas, etc. en actas o registros, que podrán llevarse en libros, hojas sueltas u otros medios idóneos.

La segunda, es la sanción que se le aplica al emplazado que no cumple con su obligación. En efecto, el fedatario dará por protestado un título valor que no haya sido aceptado durante el día de la notificación o el siguiente día hábil. De este acto se dejará constancia en el título valor con la cláusula “Documento Protestado”.

Tratándose de protesto por falta de pago dinerario, la presente ley introduce una modificación respecto de la anterior en torno al plazo que se concede al emplazado para que cumpla con su obligación.

La ALTV, en su art. 56, señalaba que el funcionario admitirá la suma que, en el intervalo, entregase el obligado en pago de la letra y los gastos respectivos. Ahora, se considera que dicho pago podrá efectuarse hasta el día hábil siguiente al de la notificación, más los intereses y gastos respectivos; debiendo observar las formalidades correspondientes en el caso de verificarse pagos parciales.

El tercer inciso faculta la utilización del proceso ejecutivo a los títulos valores protestados. Cabe agregar, que el pago parcial del título valor no enerva el ejercicio de las acciones cambiarias que deriven de dicho título valor.

Esta disposición concuerda con los arts. 18.1 y 91 el cual establece en su primer inciso que salvo disposición distinta de la presente Ley, para ejercitar las acciones cambiarias, constituye requisito obligatorio: a) En los títulos valores sujetos a protesto, haberse verificado el mismo; b) En los títulos valores que sean objeto de formalidad que sustituya al protesto, haber logrado la constancia de la falta de cumplimiento de la obligación (...). No obstante lo expuesto, cabe precisar que con arreglo al art. 18.2 el tenedor podrá ejercitar las acciones derivadas del título valor en proceso distinto al ejecutivo, observando la ley procesal.

Si en el domicilio al cual se remite la notificación del protesto, ésta fuera rechazada o fuera imposible entregarla al destinatario, el

fedatario deberá dejar constancia en el acta o registro para que la notificación surta plenos efectos y se entienda como efectuada en el lugar señalado para su pago.

Si el domicilio señalado no existiera, cursará otra notificación a la Cámara de Comercio del lugar o se dejará constancia de su imposibilidad, con lo que se tendrá por cumplido el protesto.

Por último, se señala que el fedatario puede, previa solicitud, extender constancias o certificaciones de haber cumplido con las notificaciones así como de la fecha en la que se recibió el título valor para su protesto y de las constancias.

Para la ALTV, la constancia del acto de protesto era el sello que llevaba la anotación “Documento Protestado”, con indicación de la fecha y la firma del funcionario que interviene (art. 56). Para la NLTV, la constancia del protesto es la inserción de la cláusula “Documento Protestado”, con indicación de la fecha en que se cursó la notificación, refrendada con la firma del fedatario. Se elimina la obligación del funcionario interviniente de retener el título valor hasta las diecinueve horas y se regula los efectos de la notificación del protesto en caso que ésta fuera rechazada o no fuera posible entregarla al destinatario.

Artículo 79º.- Responsabilidad de los fedatarios

El fedatario responde de los daños y perjuicios que se originen por el incumplimiento de la notificación a que se refiere el Artículo 77º y del incumplimiento de las disposiciones legales relativas al protesto que sean de su cargo.

Al igual que lo hizo el art. 57 de la ALTV, el presente artículo asigna al fedatario responsabilidad por el incumplimiento de la notificación del protesto. Fedatario, es tanto el Notario como el Juez de Paz. Consideramos que el secretario notarial no lo es, porque si bien participa en el trámite de la notificación del protesto en función a la designación efectuada por el Notario, es este último quien asume la responsabilidad por los actos del primero.

Para **Ulises MONTOYA MANFREDI**⁹⁹, el secretario notarial debería ser un responsable subsidiario, de tal suerte que el perjudicado con su accionar pueda exigir de cualquiera de los responsables, Notario y secretario, la indemnización por daños y perjuicios correspondientes. Sobre el particular, nos remitimos al art. 74.2 *in fine* el cual dispone: “...La responsabilidad por los actos del secretario corresponde al Notario que lo designó”.

Convendría determinar si la naturaleza de la responsabilidad que asumen los fedatarios por dicho incumplimiento, es uno contractual o extracontractual.

Consideramos que estamos frente a un caso de responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de una obligación que el fedatario adquiere desde el momento que, quien solicita el protesto, paga un derecho para la realización del mismo.

En ese sentido, resulta aplicable lo dispuesto en el art. 1321 del CC, que obliga a quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve a indemnizar por daños y perjuicios.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.

Remigio PINO CARPIO¹⁰⁰, refiriéndose a la acción de daños y perjuicios, expresa que ésta prosperará si es que se indica cuál ha sido la disposición incumplida por el funcionario que ha formalizado el protesto; en segundo lugar, manifestar cuál es el daño o perjuicio sufrido; si éstos se han producido como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento de la disposición violada u omitida; en tercer lugar, fijar el monto de los daños y perjuicios; y en cuarto lugar, probar en todos sus extremos los hechos invocados y propuestos.

⁹⁹ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 167.

¹⁰⁰ PINO CARPIO, Remigio. Op. cit., Página 123.

Artículo 80º.- Asunción de gastos y daños y perjuicios

Los gastos, daños y perjuicios para el tenedor a que diere lugar el protesto, serán de cargo del obligado principal, salvo los gastos que correspondan al protesto de título valor con la cláusula señalada en el primer párrafo del Artículo 81º. En el caso de protesto por falta de aceptación de la Letra de Cambio, serán de cargo de su girador.

La ALTV, al regular el tema de la asunción de gastos, daños y perjuicios a que diere lugar el protesto, establecía que la indemnización estaba representada por el importe del interés legal (Arts. 56 y 126 inc. 2).

La nueva ley es más precisa y en una sola norma establece que los gastos, daños y perjuicios serán de cargo del obligado principal, con excepción de los gastos que correspondan al protesto de título valor que contenga la cláusula “sin protesto”, art. 81, pues en este caso, será el tenedor el que corra con los mismos, art. 83 de esta NLTV.

También, será el tenedor quien asuma todos los gastos que la formalización del protesto acarree, si el título valor se perjudica por su culpa; o si se ha procedido a su formalización en forma extemporánea.

Para el caso del protesto por falta de aceptación de una letra de cambio, será el girador quien corra con todos los gastos, pues es éste el obligado principal y contra quien procede ejercitar la acción cambiaria de regreso.

FORMALIDAD SUSTITUTORIA AL PROTESTO

Artículo 81º.- Pacto de no protesto

81.1. Tratándose de títulos valores sujetos a protesto, es válida la cláusula "Sin Protesto" u otra equivalente que se incluya en el texto del título valor conforme al Artículo 52º, que libere al tenedor de la obligación de protestar el documento. En estos casos, la acción

cambiaría se ejercitará por el sólo mérito de haber vencido el plazo señalado en el título valor.

81.2. La cláusula de que trata el párrafo anterior no impide que el tenedor opte por su protesto, en cuyo caso los gastos respectivos serán de su cuenta.

81.3. La cláusula a que se refiere el primer párrafo no rige para el protesto por falta de aceptación de la Letra de Cambio, el que debe llevarse a cabo aun cuando se haya liberado del protesto.

Las formalidades sustitutorias del protesto están constituidas por:

- La inclusión de la cláusula “Sin Protesto” u otra equivalente, en el título valor (ver comentario al art. 52).
- La constancia que por falta de pago deja una empresa del Sistema Financiero Nacional en un título valor, (para el caso de los títulos valores pagaderos con cargo en cuenta, art. 82).

La disposición del art. 81, difiere de la del art. 47 de la ley anterior, pues éste contenía como regla general que tratándose de títulos valores sujetos a protesto, la cláusula sin protesto u otra equivalente que releve de la obligación de protestar, se tenía por no puesta.

Ahora, sí es posible incluir la cláusula de no protesto en cualquier título valor, la que surte plenos efectos. La única excepción que contempla la ley es para el caso de falta de aceptación de la letra de cambio, la cual necesariamente deberá ser protestada; en tal situación, la inclusión de dicha cláusula no rige o no surte efecto alguno, es ineficaz. Nos estamos refiriendo a la Letra de Cambio en que intervienen tres sujetos distintos, es decir, un girador que ordena a un girado pagar a un tercero llamado tomador, una determinada cantidad de dinero en un vencimiento dado. Dicho tomador le presenta el título valor al girado y si éste no acepta, deberá protestarle el título por su falta de aceptación, como requisito necesario para venir en acción de regreso contra el girador quien con arreglo al art. 123 de esta NLTV era quien respondía por dicha aceptación y consecuente pago. El otro caso, es el de las letras de cambio que se giran con arreglo al art. 228 último párrafo de la LdB, por saldos deudores de cuenta corriente bancaria.

Pues bien, el efecto principal de la referida cláusula sin protesto, es la liberación del tenedor del título valor a efectuar el protesto, facultándolo a ejercitar la acción cambiaria por el sólo mérito de haber vencido el plazo señalado en el título valor.

La cláusula sin protesto no prohíbe al tenedor a optar por el protesto del título valor. Sin embargo, todos los costos que éste acarree correrán por su cuenta.

En el caso de ausencia de aceptación de la letra de cambio, ésta deberá protestarse aun cuando haya un pacto en sentido contrario. Similar disposición encontramos en el art. 147.4 de la presente ley, que establece que la cláusula sin protesto no resulta aplicable al protesto por falta de aceptación de la Letra de Cambio.

El fundamento de esta disposición radica en que una vez protestada la letra de cambio contra el aceptante, el tenedor podrá iniciar la acción cambiaria de regreso contra el girador y lograr así la satisfacción de su crédito. De permitirse la inclusión de la cláusula de no protesto, se estaría restando la posibilidad para el tomador del título valor de exigir el cumplimiento de la obligación pendiente a cargo del girador.

Conforme lo anotáramos en líneas precedentes, los títulos valores sujetos a protesto o a formalidad sustitutoria son: Letra de Cambio (art. 156.2); Pagaré (art. 162); Factura conformada (art. 166.2); Cheque (art. 213); Warrant (art. 233.2) y Título de Crédito Hipotecario Negociable (art. 243.1).

Se presentan a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia.

(1) Exp. N° 1127-96 Lima. Los bancos están facultados por ley a emitir una letra de cambio a la vista por el saldo deudor de una cuenta corriente.

Lima, veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; resulta de autos; que, por escrito de fojas catorce a veinte, el Banco Santander Perú debidamente representado por el Doctor Marco Javier Chávez Romero, interpone demanda de Obligación de

dar suma de dinero en la vía ejecutiva, contra el señor José Gerardo Aliaga Arteaga, para que cumpla con pagarle la suma de cincuenticuatro mil quinientos noventidós nuevos soles con noventa céntimos de nuevo sol; importe de la letra de cambio a la vista cuyo valor corresponde al saldo deudor de la cuenta corriente en moneda nacional del demandado; cambial que fue girada a cargo del emplazado; y que debidamente protestada por falta de pago se adjunta como recaudo; haciendo extensiva su solicitud a los intereses legales, gastos notariales, costas y costos del presente proceso; amparan su demanda en lo dispuesto por los artículos 17, 49 inciso 1º, 56º, 61º, 58º y 125º de la ley dieciséis mil quinientos ochentisiete (Ley de Título Valores); los artículos 303 y 307 de la Ley General de Instituciones Bancarias y Financieras y de Seguros (Decreto Legislativo Setecientos setenta) y los artículos I y IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil; y artículos 695 inciso 1º y 696 del mismo texto legal; admitida la demanda por resolución número uno su fecha trece de setiembre último, transcurrido el término de Ley sin que el ejecutado contradiga la demanda pese haber sido notificado con arreglo a ley; y de conformidad con lo establecido por el artículo 701 del Código Procesal Civil; el proceso queda expedito para dictarse sentencia; y; CONSIDERANDO: PRIMERO: que la letra de cambio anexada a la demanda reúne los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete; SEGUNDO: que, no habiendo el ejecutado formulado contradicción al mandato ejecutivo contenido en la resolución número uno su fecha trece de setiembre último, dentro del término establecido por el artículo 700 del Código Procesal Civil, subsiste el mérito de la cambial anexada a la demanda obrante a fojas once; TERCERO: por estas consideraciones y estando además a lo normado por el artículo 694 inciso 1º y 701º segundo párrafo del código adjetivo; FALLO: declarando FUNDADA la demanda de fojas catorce a veinte y en consecuencia ORDENO se lleve adelante la ejecución y que el demandado José Gerardo Aliaga Arteaga cumpla con pagar al ejecutante la suma de cincuenticuatro mil quinientos noventidós nuevos soles con noventa céntimos de nuevo sol; incluyendo los intereses legales, gastos notariales, costas y costos de proceso.

Artículo 82º.- Protesto de títulos valores pagaderos con cargo en cuenta

82.1. En el Cheque y en otros títulos valores sujetos a protesto, cuyo pago deba verificarse con cargo en una cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional según cláusula que conste en el título conforme al Artículo 53°, surtirán todos los efectos del protesto, la constancia que deje la empresa respectiva en el mismo título, según el párrafo final del Artículo 74°, siendo de aplicación en lo pertinente las disposiciones que contiene el Artículo 213°.

82.2. Igual mención y con los mismos efectos podrá hacerse, directamente o a través de la empresa del Sistema Financiero Nacional que lo presente a cobro con la que la empresa designada para su pago mantenga acuerdos de truncamiento, cuando se presenten a cobro los títulos señalados en el párrafo anterior a través de una cámara de compensación o sistema similar o alternativo a que se refiere el Artículo 215°.

82.3. Dicha comprobación, deberá ser puesta dentro del plazo correspondiente al respectivo título para su protesto que señala el Artículo 72°; la que acredita por sí sola la falta de pago y deja expedito el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas

82.4. La empresa del Sistema Financiero Nacional que deje constancia que la causa que motiva la falta de pago es la insuficiencia de fondos queda facultada a realizar su pago parcial, en cuyo caso el tenedor está obligado a recibirlo.

El presente artículo regula las formalidades sustitutorias del protesto en títulos valores pagaderos con cargo en cuenta.

Precisa la norma que surtirán los mismos efectos que el protesto, la constancia de incumplimiento que la empresa del sistema Financiero Nacional deje en el título valor presentado para su pago, a simple petición del tenedor.

Esta disposición es aplicable a aquellos títulos valores sujetos a protesto y que lleven inserto la cláusula pago con cargo en cuenta. Tal es el caso del Cheque, para el cual, la ley señala en el art. 213 que el protesto por falta de pago, puede sustituirse por la comprobación puesta por el banco girado, dado que ésta acredita por sí sola el rechazo del título valor. Dichas comprobaciones, pueden efectuarse a solicitud del interesado, desde la primera presentación del Cheque y

en la oportunidad que decida su tenedor, durante el plazo legal de su presentación para su pago.

El segundo inciso se refiere a los acuerdos o pactos de truncamiento entre empresas del sistema financiero nacional. Dichos acuerdos tienen la finalidad de:

- Establecer procedimientos especiales o sustitutorios del endoso en procuración, en materia de cheques.
- Acordar delegaciones o mandatos para dejar constancia del rechazo de pago de los cheques, las que surtirán los mismos efectos que el protesto; es decir, la constancia expedida en ese sentido constituye una formalidad sustitutoria.

Tal constancia o comprobación del rechazo de pago del cheque, resultado de un pacto de truncamiento entre empresas del SFN, surte los mismos efectos que el protesto, aun cuando se presenten a cobro a través de una cámara de compensación o sistema similar o alternativo.

La comprobación o constancia del rechazo de pago, deberá efectuarse dentro del plazo correspondiente al respectivo título para su protesto. Por ejemplo, en el caso del cheque, deberá realizarse dentro del plazo para su presentación para el pago, es decir, dentro de los 30 días; sea que dicho título valor haya sido emitido dentro o fuera del país.

Si se trata de títulos valores pagaderos a la vista, la comprobación podrá efectuarse desde el día siguiente de la emisión del documento, durante el lapso de su presentación al pago (v.gr. en una letra de cambio con vencimiento a la vista, la presentación al pago puede efectuarse en cualquier momento, a libre decisión de su tenedor, desde el día mismo de su giro inclusive, y durante el plazo que al efecto se hubiere señalado en el documento. A falta de dicha indicación, la presentación para su pago deberá hacerse dentro de un plazo no mayor a un año, desde la fecha de su giro) e inclusive hasta los 8 días posteriores al vencimiento del plazo legal o del señalado en el mismo título valor.

Dicha comprobación o constancia de falta de pago deja expedito el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas.

Por último, se establece que la empresa del SFN que deje la constancia de falta de fondos en el título valor, estará obligado a realizar el pago parcial por la suma que hubiere en cuenta y el tenedor del documento no podrá rehusar dicho pago (Ver comentarios al art. 65).

Artículo 83º.- Protesto notarial voluntario

Las disposiciones del presente Título, no impiden que el tenedor opte bajo su costo por el protesto conforme al Título anterior.

La norma reconoce el derecho que tiene el tenedor del título valor a protestarlo, estableciendo que podrá efectuarlo siguiendo el trámite notarial pertinente y las disposiciones que contiene la ley para el caso de protesto por falta de pago o de aceptación.

La opción de protestar notarialmente un título valor que incluye la cláusula de no protesto, conlleva que dicho tenedor asuma los correspondientes costos.

EL PROTESTO POR FALTA DE ACEPTACIÓN

Artículo 147.- Protesto por falta de aceptación

147.1 El protesto por falta de aceptación procede cuando se ha presentado infructuosamente la Letra de Cambio para la aceptación, dentro de los plazos fijados para ello conforme al Título Tercero de la presente Sección.

147.2 El protesto por falta de aceptación total dispensa de la presentación para el pago y del protesto por falta de pago, asumiendo el girador la calidad de obligado principal, contra quien y demás obligados procede ejercitar la acción cambiaria derivada de la Letra de Cambio por el solo mérito del protesto por falta de aceptación. La falta de pago de estas Letras de Cambio se comunicará a la Cámara de Comercio, conforme al primer párrafo del Artículo 87.

147.3 La obligación de información y registro de que trata el artículo 85 deberá ser cumplida en los protestos por falta de aceptación de Letra de Cambio, consignando el nombre del girador y registrándose en forma independiente del registro de protestos por falta de pago.

147.4 La cláusula sin protesto a que se refiere al artículo 81 no resulta aplicable al protesto pro falta de aceptación de la Letra de Cambio. El protesto por falta de aceptación deberá llevarse a cabo aun en la Letra de Cambio que contenga dicha cláusula.

Como sabemos, el protesto es el acto mediante el cual se deja constancia del incumplimiento de alguna obligación que contiene un título valor sujeto a este trámite. El rechazo a constituirse como obligado principal de la letra de cambio que haga el girado, constituye un incumplimiento que puede imputarse al girado, por corresponder a él la responsabilidad y seguridad de que la letra de cambio sería aceptada por la persona que él designó para ese efecto. Si no ocurre así, debe ser el girador quien asuma como obligado principal el pago que él mismo dispuso mediante la creación y libramiento de la cambial. Por ello, el hecho que un girado rechace aceptar la cambial, no debe constituir una referencia negativa para éste, sino en todo caso para el girador, quien posiblemente en forma inconsulta o sin cumplir las contraprestaciones causales que tenga acordadas con el girado procedió a emitirla a su cargo. Cabe obviamente que se trate más bien de un incumplimiento del girado, quien sin causa se niega a aceptarla. Por ello, ante esta situación indefinida, se dispone en ese artículo que el registro como información en la Cámara de Comercio se haga sólo del girador y en forma separada de los protestos por falta de pago. Así, la información que se proporciones al público interesado, será completa y distinta al incumplimiento de su pago. De no ser pagada esta cambial por su girados, basta que ello sea comunicada a la Cámara de Comercio respectiva, mediante el mismo régimen de los títulos valores no sujetos a protesto por falta de pago; pero no es necesario que se obtenga el protesto por falta de pago del girador.

Para demostrar que el girado ha rechazado aceptar la letra de cambio y sobre esa base y sustento ejercitar las acciones cambiarias contra los otros obligados de la cambial, así como para probar

fehacientemente que no se trata de una negligencia del tenedor, en no presentar la cambial al girado para su aceptación, es necesario recurrir al protesto respectivo (por falta de aceptación), acto que no admite prescindirse o pacto que lo libere.

Este protesto, como ya lo dijéramos anteriormente, sólo es posible hacerlo en el caso de letras de cambio, que hayan sido giradas a cargo de tercero. Ningún otro título valor, ni las letras de cambio giradas a cargo del mismo girador, son materia de este protesto.

Una vez protestada una letra de cambio por falta de aceptación, no es necesario que se presente al pago contra el girado; pues quien se niega a asumir la calidad de obligado principal, menos la pagará. Tampoco procede entonces protestarla por falta de pago y sólo en mérito a la constancia del rechazo de su aceptación procede ejercitar las acciones cambiarias en forma inmediata. La acción directa contra el girador que se convierte en obligado principal y la acción de regreso contra los demás obligados del título, sin tener que esperar el vencimiento de la cambial.

Como ya hemos señalado, no es posible pactar o liberar del protesto por falta de aceptación de una letra de cambio, como si lo es en el caso del protesto por falta de pago. En el caso de haberse incluido cláusula liberatoria de protesto, ésta no alcanza al protesto por falta de aceptación. Aun en el caso de haberse señalado en el documento y de modo expreso que no está sujeto a protesto por falta de aceptación, tal cláusula se tiene por no puesta y el protesto por esta causal debe lograrse. Y es que se sumamente sencillo demostrar que hay mora en el pago de la letra de cambio u otro título valor, con el mero hecho de encontrarse el título valor en poder del tenedor en fecha posterior a su vencimiento; pues de haber sido cumplido el pago, el título o está ya en poder de quien lo pagó o tiene la anotación de tal pago y de su respectiva cancelación o ha sido destruida, conforme se señala en el art. 17 de esta ley. En el caso de la aceptación, no se cuenta con elementos como los anteriores que sirvan para demostrar que el girado lo rechazó su aceptación, por lo que se exige recurrir siempre a este procedimiento notarial o judicial, que fehacientemente demostrarán que hubo tal rechazo, a pesar de haberse presentado la letra de cambio conforme a su texto y plazos

consignados para es propósito. Por ello, conforme lo señala el art. 81.3 el pacto de liberación de protesto, sólo opera para el protesto por falta de pago y no para el protesto por falta de aceptación.

3.21. LA ACEPTACIÓN Y EL PAGO POR INTERVENCIÓN EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 149.- Aceptación y pago por intervención

149.1 Cualquier obligado en vía de regreso puede indicar en la Letra de Cambio el nombre de una persona para que la acepte o pague por intervención. Asimismo, cualquier persona puede aceptar o pagar una Letra de Cambio por intervención.

149.2 El interviniente puede ser un tercero, el mismo girado, el girador o cualquier otra persona ya obligada en virtud de la Letra de Cambio, con excepción del aceptante.

149.3 El que interviene en la aceptación o pago de una Letra de Cambio debe dar aviso de su intervención, dentro del plazo de 4 (cuatro) días hábiles, a la persona por cuenta de quien ha intervenido. En caso contrario, es responsable del perjuicio que haya causado con su inobservancia, sin que la reparación puede exceder del monto del título valor.

La intervención es una forma de lograr que la letra de cambio sea aceptada o pagada gracias a la participación (intervención) de tercera persona, distinta al designado en el documento para cumplir esas obligaciones, quien conviene en asumirlas.

Por tanto, tal intervención de tercero puede responder o (i) a una designación que haya sido hecha en el mismo documento por cualquiera de los participantes en el título valor (cualquier obligado en vía de regreso), con la finalidad de evitar que se produzca un incumplimiento, al sustituir el interventor o interviniente designado a quien lo estuviere en primer lugar; o (ii) a un acto unilateral y voluntario del tercero, quien conviene en asumir la calidad de obligado principal, evitando que el incumplimiento se produzca.

En el primer caso estamos ante una “intervención documentaria” o “intervención requerida”, por lo que la letra de cambio debe ser presentada al interviniente designado para los fines de su aceptación o pago; mientras que en el segundo caso se trata de una “intervención espontánea” o “de honor”, en la que sin estar designado como tal en el documento, cualquier persona distinta al obligado a pagar interviene sea para aceptar o para pagar, evitando por ejemplo que la letra de cambio sea protestada o ejecutada judicialmente.

Con la sola excepción del aceptante, la persona que acepte o pague por intervención, puede ser cualquier persona, tercero extraño a la relación cambiaria o aun una cualquiera de las personas que ya hubieran participado en la cambial, tal sería el caso del librador, el girado no aceptante, los endosantes, garantes.

Quien interviene, siempre lo hace por cuenta de alguien. Por tanto, es necesario informarle de ello, para lo cual se establece el plazo de 4 días hábiles, asumiendo en caso contrario los perjuicios que su silencio genere al afectado, con el límite del monto de la cambial. Es obvio que para evitar ello, debe recurrirse a una forma cierta de aviso que demuestre en modo fehaciente el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 150.- Aceptación por intervención

150.1 La aceptación por intervención debe efectuarse antes del vencimiento de la Letra de Cambio. En caso de que no se acepte la Letra de Cambio, el tenedor puede ejercitar las acciones cambiarias respectivas, pudiendo hacerlo aun antes de su vencimiento.

150.2 Cuando en la Letra de Cambio se ha indicado una persona para que la acepte o la pague por intervención en el mismo lugar designado para su pago, el tenedor no podrá antes del vencimiento ejercitar el regreso contra quien puso la indicación y contra los firmantes sucesivos, salvo que habiendo presentado la Letra de Cambio a la persona indicada para la intervención, ésta hubiere rehusado la aceptación y se haya formalizado el protesto por falta de aceptación.

150.3 En los demás casos de intervención, el tenedor puede rehusar que se realice la aceptación por intervención. Si la admite, pierde el derecho de ejercitar el regreso antes del vencimiento, contra la persona por quien se ha dado la aceptación y contra los obligados posteriores.

La intervención para aceptar la letra de cambio, debe hacerse antes de su vencimiento; pues sólo de ese modo se logra{ia conservar la acción cambiaria, dado que una vez vencido el plazo y no obtenido la aceptación ni el protesto por esta causa, se perjudicaría el documento.

Si la cambial no fuese aceptada, sea por el girado o el interventor designado en el mismo título o por tercera persona, logrado su respectivo protesto procederá ejercitar las acciones cambiarias pertinentes, conforme señala el art. 148, aun antes de su vencimiento.

En el caso de cambial en la que se hubiera designado el nombre de quien debe participar como interventor, es decir, en el caso de interventor indicatario o documentario, existe la obligación de presentar la letra de cambio a esa persona para su aceptación o pago, en la medida que la cambial deba aceptarse o pagarse por intervención en el mismo lugar designado para su pago por el girado. Contrario sensu, tal presentación y obtención de la constancia de su rechazo no será obligatoria si el lugar de pago de la cambial es uno distinto al lugar donde debe ser presentada para su aceptación o pago por intervención.

La falta de presentación de la cambial para su aceptación o pago por intervención en el mismo lugar designado para su pago y consiguiente obtención del protesto respectivo, impedirá que el tenedor ejercite la acción cambiaria contra la persona que haya designado el indicatario y contra los firmantes sucesivos a aquél. Esta norma no es pues más que la aplicación del principio de literalidad que rige a los títulos valores, dado que en el mismo documento se ha señalado la persona que intervendrá para aceptar y pagar, por lo que es lógico que la cambial deba ser presentada a dicha persona designada en el mismo documento y si ésta la rechaza, debe lograrse el protesto pertinente.

Cuando se trata de una intervención de persona no designada en el mismo documento, sino de un interventor espontáneo o “de honor”, el tenedor bien puede rechazar el ofrecimiento de aceptar por intervención que haga un tercero y preferir protestar la cambial por dicha causal, con la potestad de ejercitar las acciones cambiarias aun antes del vencimiento del título. En cambio, si admite que una tercera persona, no designada para el efecto en el documento, intervenga para aceptar la cambial, perderá ese derecho de ejercitar las acciones cambiarias antes del vencimiento de la letra de cambio, toda vez que ésta se encuentra aceptada y por tanto, debe pagarse en la fecha señalada como vencimiento.

Artículo 151.- Determinación de la aceptación por intervención

151.1 La aceptación por intervención debe constar en la Letra de Cambio mediante cláusula expresa, nombre, número del documento de identidad oficial y firma del interviniente.

151.2 Debe indicarse por cuenta de quién se otorga la aceptación. A falta de tal indicación, la aceptación se considera dada en favor del girador.

La formalidad exigida para la aceptación por parte del interviniente, debe ser la misma que para la aceptación por el girado, debiendo precisarse que se trata de un interviniente y no del girado para una adecuada información de quienes participen en la cambial.

La responsabilidad por la aceptación corresponde al girador y a cada uno de los endosantes conforme lo señalan los arts. 123, 126 y 11. Todos ellos asumen responsabilidad por la aceptación y pago del título. Por ello, será importante que la persona que interviene para aceptar, señale por cuenta de quién lo hace, en modo tal que su responsabilidad se limite al mismo grado de dicha persona por quien interviene. Si no lo hace, debe presumirse que la intervención se hace a favor del girador, liberando así a la totalidad de los participantes en dicha cambial y responsables por su aceptación.

Artículo 152.- Efectos de la aceptación por intervención

152.1 El aceptante por intervención responde ante el tenedor, así como ante los endosantes posteriores a la persona por cuenta de quién ha intervenido, en igual forma que ésta.

152.2 A pesar de la aceptación por intervención, la persona en cuyo favor se hubiera hecho y las que garanticen a ésta pueden exigir del tenedor, mediante el reembolso de la cantidad indicada en el Artículo 92, la entrega de la Letra de Cambio protestada o con la constancia de la formalidad sustitutoria, si hubiere lugar.

Quien interviene para aceptar, lo hace por cuenta de alguien que ya participó en la cambial. Como sabemos, el primero que lo hace es el girador, quien ha designado a una persona como encargada de aceptarla (girado), pero éste puede rechazarla, en cuyo caso y a modo de subsanar tal rechazo, puede intervenir una tercera persona ya designada o no en el documento para ese efecto.

Por su lado, como también cada uno de los endosantes de una letra de cambio no aceptada, asumen responsabilidad por la aceptación de la cambial, bien puede una tercera persona liberar al endosante de dicha responsabilidad que éste tiene respecto a quienes han participado en la cambial después que él (pues los que lo hicieron antes más bien asumen la misma obligación en su favor), señalando que la acepta por cuenta de dicho endosante. En ese caso, tal aceptante por intervención no responde por el pago de la letra de cambio frente al universo de personas que hubieran intervenido en la cambial, como ocurre cuando la aceptación lo hace el girado, sino sólo frente al último tenedor (quien siempre será posterior al endosante por cuenta de quien acepta) y frente a los endosantes que hubieran participado en el documento después que el endosante en cuyo favor se acepta la cambial.

Obviamente, dicho aceptante que pague la cambial a aquéllos, podrá ejercitar los mismos derechos que tiene el endosante por quien intervino.

En el supuesto que el aceptante por intervención no cumpliera con la obligación de pago, debe procederse al protesto o modalidad sustitutoria, de ser el caso; constituyendo ello un requisito para ejercer las acciones cambiarias respecto a dicho endosante liberado con la

aceptación y/o sus garantes, o contra los obligados solidarios con aquél, salvo que se trate de cambial con cláusula que la libere del protesto; devolviendo la cambial en situación que haga posible repetir y ejercitar las acciones de regreso o ulterior regreso. El tenedor pues debe preocuparse en mantener y conservar la legalidad del título para ejercer las acciones derivadas del a cambial.

Artículo 153.- Procedencia del pago por intervención

153.1 El pago por intervención procede siempre que el tenedor pueda ejercitar la acción de regreso al vencimiento de la Letra de Cambio; y, también antes de este vencimiento:

- a) si ha habido negativa total o parcial de la aceptación;*
- b) si el girado, aceptante o no, ha sido declarado insolvente o hubiere resultado ineficaz una medida cautelar u orden de embargo sobre sus bienes; y*
- c) si el girador de una Letra de Cambio que no requiere de aceptación se encontrase en cualquiera de las situaciones previstas en el inciso anterior.*

153.2 El pago comprende toda la cantidad por la que esté obligada la persona por la cual se ha hecho la intervención y debe efectuarse, a más tardar, el día siguiente del último establecido para formalizar el protesto por falta de pago para poder subrogarse en la acción cambiaria.

El pago por intervención es el pago de la letra de cambio que realiza un tercero distinto a su aceptante, ya sea por haber sido sindicado para ese efecto o sin estar mencionado en el documento, dando así cumplimiento a la obligación contenida en la cambial y liberando de dicha obligación a la persona por quien se paga por intervención, subrogándose el interviniente en todos los derechos que emerjan de la cambial, frente a quienes hayan participado antes que la persona por quien se hace tal pago por intervención.

Para que dicho pago proceda al vencimiento de la cambial, el tenedor a quien se verifica tal pago debe estar en aptitud de ejercitar las acciones derivadas del título valor; esto es, debe tratarse de una cambial no perjudicada.

Para el pago por intervención antes del vencimiento de la letra de cambio, deben darse cualquiera de las circunstancias en las que procede exigir el pago anticipado de la cambial, las mismas que se mencionan en este numeral y en el art. 148.1

Si quien efectúa el pago por intervención pretende subrogarse en las acciones derivadas de la cambial, debe cumplir dos requisitos además de verificar dicho pago. Debe pagar el monto total al que está obligado la persona por quien interviene y verificar tal pago a más tardar al día siguiente del último día previsto para formalizar el protesto, el que como sabemos puede ser hasta el décimo quinto día siguiente al vencimiento, plazo para que el fedatario cumpla con los trámites de formalización del protesto. De este modo, es importante dejar constancia y demostrar con fecha cierta de tal pago que se verifica.

En este caso se tiene una situación singular y excepcional, en la que a pesar de haber sido protestada la cambial, lo que puede lograrse inclusive desde el día siguiente a su vencimiento, quien paga por intervención dicha letra de cambio protestada, puede ejercitar las acciones derivadas de ella que correspondan como consecuencia de la subrogación.

Aun cuando el primer párrafo (153.1.) hace mención a la “acción de regreso”, estimamos que debe entenderse que se trata de la acción derivada de la cambial. Por otro lado, al haberse previsto en el segundo párrafo (153.2.) un plazo sólo en función al protesto; y, considerando que pueden haber cambiales con cláusula que las libere de dicho trámite, consideramos que el plazo debe entenderse que comprende los 15 días calendario desde el vencimiento de la letra de cambio.

Artículo 154.- Presentación de la Letra de Cambio para pago por intervención

154.1 Si en la Letra de Cambio se hubiere indicado, para pagar en caso de necesidad, personas que tengan su domicilio en el mismo lugar de pago, el tenedor debe presentar el documento a todas ellas y formalizar, si procediere, el protesto por falta de

pago a más tardar hasta el día siguiente del último permitido para ese acto.

154.2 Si estando obligado a ello no se produce el protesto, la persona que hubiere indicado un pagador para caso de necesidad, o aquella por cuya cuenta se hubiere aceptado la Letra de Cambio según el artículo 153, así como los endosantes posteriores, quedarán libres de obligación, salvo que reconozcan judicialmente el documento.

Hay casos en los cuales se deja señalado en la misma cambial el nombre de la persona que la pagará si el aceptante no lo hiciera, esto es, el nombre de la persona que intervendrá en el pago por necesidad, quien puede estar o no domiciliado en el mismo lugar de pago. De tener el domicilio en el mismo lugar, el protesto al que esté obligado el tenedor, no sólo debe lograr contra el aceptante, sino también contra la persona designada a pagarla.

Siendo el lugar de protesto de la cambial el lugar designado para su pago y habiéndose señalado el mismo lugar como domicilio del aceptante y de la persona sustituta que la pagará en caso de necesidad, carece de sentido ampliar el plazo para su protesto, como lo hacía la norma anterior, manteniéndose sólo la obligación de lograr el protesto contra ambas personas.

La falta de protesto (por falta de pago), genera las mismas consecuencias que en cualquier otra cambial que no fuere protestada existiendo la obligación de hacerlo según lo previsto por el art. 70 y siguientes, con posibilidad de recuperar la acción cambiaria contra quienes en proceso judicial se lograra el reconocimiento en su contenido y firmas conforme señala el art. 91.2. En los casos de cambiales que no requieran ser protestadas, obviamente esta formalidad no afectará el ejercicio de las acciones cambiarias, tal sería el caso de la letra de cambio que consigne nombre de persona que en el mismo lugar de pago podrá pagarla en caso de necesidad y que tenga la cláusula “sin protesto” u otra equivalente.

Artículo 155.- Efectos del rechazo de pago por intervención

El tenedor que rehúsa el pago por intervención pierde la acción cambiaria contra aquéllos que hubiesen quedado liberados con dicho pago.

El tenedor tiene la facultad de admitir o no el pago ofrecido en vía de intervención. No está obligado a recibir. En cambio, está obligado a admitir el pago cuando es efectuado por el aceptante, aun cuando tal pago resulte ser parcial y hasta diminuto. Sin embargo, el rechazo del pago total o parcial que le hubiera sido ofrecido por el interviniente, liberará de la obligación de pago en la misma proporción del pago rechazado a todas aquellas personas que con dicho pago por intervención hubieran quedado liberadas, por lo que el tenedor que no admitió dicho pago por intervención podrá ejercitar las acciones cambiarias en forma limitada y sólo respecto a las personas que no hubieren quedado liberadas con la recepción de dicho pago y/o contra las que deben asumir el pago mayor al parcialmente ofrecido por el tercero interviniente.

Artículo 156.- Formalidades del pago por intervención

156.1 El pago por intervención debe constar en la misma Letra de Cambio y, en su caso, en la constancia del protesto, con la indicación del nombre de la persona que hace el pago y por cuenta de quien o en favor de quien se efectúa dicho pago. A falta de esta última indicación, el pago se considera hecho por cuenta del obligado principal.

156.2 La Letra de Cambio, con la constancia del protesto o formalidad sustitutoria, en su caso, deben entregarse a la persona que paga por intervención.

El pago por intervención, que no es una práctica común y más bien se da en forma excepcional, debe constar en el mismo documento, a fin de identificar a la persona que lo verifica. Para poder determinar a la persona por quien se hace dicho pago, también debe señalarse a ella, lo que servirá para determinar a las personas que quedan liberadas como consecuencia de dicho pago y las que siguen sujetas a las obligaciones que la cambial contiene.

Si la cambial pagada en vía de intervención fuere objeto de protesto, deberá además dejarse constancia del pago que realiza el tercero interviniente.

La indicación de la persona por quién se realiza el pago por intervención no es un requisito esencial, por lo que puede prescindirse de ello, reputándose en ese caso que el pago se hace por cuenta del obligado principal.

Quien paga por intervención el monto total de la cambial, tiene derecho de exigir que se le haga entrega del documento, con la constancia señalada en este artículo. En mérito a la tenencia de la cambial pagada podrá ejercitar las acciones cambiarias respectivas.

Artículo 157.- Efectos del pago por intervención

157.1 El que paga por intervención adquiere los derechos cambiarios inherentes a la Letra de Cambio, contra la persona por cuenta de quien ha pagado y contra los obligados respecto de ella; pero no puede endosarla nuevamente, salvo para los fines de su cobranza.

157.2 Los endosantes posteriores al firmante por cuenta de quien se hizo el pago por intervención quedan liberados de la acción cambiaria.

157.3 Si varias personas ofrecen pagar por intervención, debe ser preferida aquella que libera el mayor número de obligados. El interviniente que, con conocimiento de causa, contraviniera esta regla pierde el regreso contra aquellos que hubieran quedado liberados de haber intervenido un tercero en su lugar.

Quien paga en vía de intervención, cumple con la obligación de pago que contiene la cambial, por lo que libera a los obligados a pagarla, según se trate de la persona por quién hace tal pago por intervención. Si la intervención lo hace por el aceptante, los obligados solidarios y sus garantes quedarán liberados en su totalidad; pero si el pago por intervención lo hace por cuenta de un endosante, dicho pago beneficiará solamente a quienes hubieren participado en la cambial, después que el endosante por quien se hace el pago por intervención.

Quien paga por intervención se subroga en los derechos del tenedor a quien verifica el pago, pero no como ocurre con el endosatario respecto a la totalidad de los obligados respecto a dicho tenedor, sino solamente frente a la persona por quien hace tal pago y contra las personas que tengan obligación cambiaria respecto a dicha persona, quedando liberados quienes hubieren participado después de él.

Quien paga en vía de intervención, no es un endosatario. El pago que hace lo verifica como sustituto o en reemplazo de quien debía hacerlo, por lo que el único derecho que tiene es recuperar el monto pagado de quienes según las reglas ante sindicadas resulten responsables respecto de él. Por ello, está impedido de endosar la cambial, salvo que se trate del endoso en procuración.

Puede ocurrir que hayan varias personas que simultáneamente se ofrezcan hacer el pago de la letra de cambio en vía de intervención. En tal caso, el tenedor debe preferir recibir dicho pago de quien con el pago libere al mayor número de personas. Así, en el primer lugar de preferencia estará quien ofrece pagar por cuenta del obligado principal. Del mismo modo, se preferirá recibir tal pago del endosante más antiguo respecto a quien ofrezca hacer por cuenta del más reciente. La inobservancia de esta regla no afecta al tenedor que recibe el pago, pues éste quedará satisfecho plenamente, sino que ello afectará a quien verifica dicho pago a sabiendas que hay otra persona que ofrece también hacerlo liberando a mayor número de participantes. De insistir en tal pago a pesar de ello, perderá el derecho de ejercitar las acciones cambiarias derivadas del título contra quienes hubieran quedado liberados de haberse preferido que dicho pago por intervención lo haga la otra persona. Para ello, sin embargo, debe demostrarse que hubo tal alternativa y paralelo ofrecimiento de pago más beneficioso.

3.22. LAS ACCIONES CAMBIARIAS EN LA LETRA DE CAMBIO

Artículo 148.- Letra de Cambio parcialmente aceptada

148.1 Antes del vencimiento de la Letra de Cambio, el tenedor puede ejercitar las acciones cambiarias que correspondan si ha habido

negativa, total o parcial de la aceptación, por la parte no aceptada; o, el girado aceptante o no hubiese sido declarado insolvente o resultado ineficaz una medida cautelar u orden de embargo sobre sus bienes. Esta última regla será aplicable al girador de una Letra de Cambio a su propio cargo.

148.2 En caso de ejercitarse la acción cambiaria después de la aceptación parcial, el que paga la cantidad por la cual la Letra de Cambio no fue aceptada puede exigir que se deje constancia de dicho pago en el mismo título y además que se le expida el respectivo recibo.

148.3 El tenedor, a costo del interesado, está obligado a entregarle copias legalizadas de la Letra de Cambio con la constancia del protesto por falta de aceptación respectiva, para permitirle el ejercicio de las acciones cambiarias que le correspondan, en los mismos términos señalados en el último párrafo del artículo 65.

En el caso de letras de cambio no aceptadas por el girado, total o parcialmente, el tenedor tiene la facultad de exigir su pago al girador (obligado principal), y/o a los demás obligados solidarios, quienes tienen la responsabilidad de su aceptación y pago. Por ello, el tenedor no tiene que esperar el vencimiento de la letra de cambio protestada por falta de aceptación para cobrarla en la parte no aceptada.

En el caso de aceptación parcial, la situación se complica; pues este derecho que tiene el tenedor, de ejercitar las acciones cambiarias antes del vencimiento de la cambial, se limita a la parte no aceptada; pues por la parte aceptada si existe un obligado principal distinto al girador, quien de este modo habría quedado liberado parcialmente de su responsabilidad por la aceptación. Si el aceptante de una parte del título cumple con su obligación de pagar dicho monto parcial, se produce otra situación compleja; pues según el art. 17 debería hacerse entrega del título al girado que la está pagando; pero ello ocasionaría que el tenedor quede desposeído del título que lo requiere para ejercitar sus derechos por la parte no aceptada. Esta situación se soluciona, señalado que en tal caso, no hay obligación de hacer entrega de la cambial parcialmente pagada por el girado que no la aceptó en su totalidad, debiendo anotarse en el mismo título, como si

se tratase de cualquier pago parcial, el monto pagado y además el tenedor deberá expedirle a dicho girado el recibo de pago respectivo.

En el mismo supuesto de la letra de cambio parcialmente aceptada, como quiera que el tenedor puede optar por ejercitar las acciones cambiarias antes del plazo de vencimiento por el monto no aceptado, no será necesario que entregue en devolución la cambial a las personas contra quienes dirija su acción de cobranza y logre su pago; pues el documento lo requiere para presentarlo a cobro al aceptante que se obligó sólo por una parte. La solución en estos casos es que el tenedor haga entrega a las personas que cumplieron con el pago de la parte no aceptada, de una copia legalizada de la letra de cambio, con la constancia del protesto por falta de aceptación. Dicha copia certificada de la letra de cambio servirá a los obligados solidarios a ejercitar las acciones de ulterior regreso que correspondan, aplicándose la misma regla que para los pagos parciales prevé el art. 65. Así, el tenedor mantendrá el original de la cambial hasta su vencimiento, procediendo a protestarla por falta de pago –salvo que contenga cláusula que lo libere– en el caso que el aceptante parcial no cumple con hacerlo; ejercitar en mérito al protesto por falta de aceptación las acciones cambiarias respectivas, proveyendo de copia certificada de la cambial a quien realice el pago, asumiendo este último el costo de esa copia. En este caso de letra de cambio parcialmente aceptada y no pagada, se tendría una cambial con dos protestos: una por falta de aceptación y otra por falta de pago, en el supuesto que el girado que la aceptó parcialmente no cumpla su obligación al vencimiento de la cambial y no se hubiera pactado la liberación del protesto. También en estos casos se tendrían dos obligados principales, cada quién por la parte del monto de la cambial que les corresponda: el girador por la parte no aceptada y el girado por la parte que haya aceptado.

El mismo derecho de exigir el pago antelado por la preclusión del plazo de la cambial se produce, cuando el girado aceptante o no, hubiese sido declarado insolvente por la autoridad competente (Comisión de Reestructuración Patrimonial); o hubieran resultado ineficaces las medidas cautelares o embargos dictados contra los bienes del girado.

Bajo la misma lógica, en las letras de cambio giradas a cargo del mismo girador, ante los mismos eventos señalados respecto al girado, igualmente precluye el plazo señalado en la cambial y el tenedor tiene la potestad de exigir su pago inmediato.

Las acciones cambiarias en la letra de cambio reguladas por este artículo 148° tienen evidente y obvia concordancia con las acciones cambiarias derivadas de los títulos valores a que se refieren, en el Libro Primero, los arts. 90 a 94, por cuyo motivo, haremos algunas reflexiones sobre el tema. Comencemos analizando el art. 90.

Artículo 90°.- Acción directa, de regreso y de ulterior regreso

90.1. Los títulos valores confieren a su tenedor la acción cambiaria directa, que puede ejercitarse contra el obligado principal y/o sus garantes.

90.2. El mismo tenedor está facultado a ejercer conjunta o sucesivamente a la acción directa, la acción cambiaria de regreso, contra los endosantes, garantes de éstos y demás obligados del título, distintos al obligado principal y/o garantes de éste.

90.3. Quien ha cumplido con el pago de un título valor en vía de regreso, puede repetir dicho pago contra los demás obligados que hayan intervenido en el título valor antes que él, ejercitando la acción de ulterior regreso. La misma acción corresponde a quien pague en esta vía, contra los obligados anteriores a él.

90.4. Si el pago previsto en el párrafo anterior es parcial, para el ejercicio de la correspondiente acción cambiaria, se observará lo establecido en el último párrafo del Artículo 65°.

La acción cambiaria nace del título, y como bien afirma **ZEGARRA**¹⁰¹, es consecuencia de la obligación que contrae cada uno de los que en ella ponen su firma, sea como girador, endosante, avalista o aceptante, comprendiéndose en este carácter, no sólo el girado que aceptó, sino también, en su caso, al interviniente en la aceptación y al indicatario que aceptó la letra en cumplimiento de la indicación hecha en el momento.

¹⁰¹ ZEGARRA GUZMAN, Oscar. *Manual de Acciones Cambiarias*. Publicaciones de la Universidad de Lima, 1992, Páginas 17 a 22.

Las acciones cambiarias toman nombres y características diferentes de acuerdo a la persona contra la cual va dirigida.

Hay pues al respecto tres clases de acciones cambiarias que pueden ser usadas de acuerdo al caso determinado: acción directa, acción de regreso y acción de ulterior regreso o reembolso cambiario.

El primer inciso del presente artículo establece que la acción cambiaria directa puede ejercitarse contra el obligado principal y/o sus garantes. Como vemos, la ley no señala quién es el sujeto activo de la acción directa, refiriéndose solamente a los sujetos pasivos. Pero si consideramos la opinión de **ZEGARRA**¹⁰², podemos señalar que el sujeto activo de la acción directa es el tenedor legítimo del título valor, a quien se le debe hacer efectivo el pago a la sola presentación del documento.

La cuestión estaría en determinar cuándo un simple poseedor puede probar que es el legítimo tenedor del documento. Al respecto, el art. 45.1 de esta NLTV precisa que el poseedor de un título valor transmisible por endoso, es considerado como tenedor legítimo, si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos.

Respecto a los sujetos pasivos, la ley anterior señalaba al aceptante y sus avalistas. La actual, como vimos, considera al obligado principal y sus garantes. Obligado principal, no sólo es el aceptante sino también el girador; el cual, naturalmente, puede tener garantes. Garantes, como bien sabemos, son los avalistas y los fiadores, pues con ambos institutos se asegura y respalda el cumplimiento de la prestación contenida en el título valor.

La acción cambiaria de regreso, es aquella que corresponde al tenedor legítimo del título valor y además a cada uno de los obligados que haya tenido que efectuar el pago a un tenedor posterior. La acción de regreso se ejercita contra cualquier obligado que puede ser el aceptante o sus avalistas. La responsabilidad del endosante deriva del hecho de que por el endoso asume la posición de un girador.

¹⁰² ZEGARRA GUZMÁN, Oscar. Op. cit., Página 24.

La doctrina española, se refiere a la acción de regreso como el derecho que incumbe al tenedor de una letra de cambio para reclamar el pago del importe de la misma al librador o, en caso de haberlos, a los endosantes anteriores a dicho tenedor, así como a los avalistas de todos ellos. Se denomina “pago por vía de regreso”, toda vez que el tenedor reclama a las personas que le precedieron en la firma de la letra; es decir, el tenedor reclama siguiendo un orden inverso o de regreso en el sentido cronológico.

Ahora bien, la acción de regreso puede ejercerse contra cualquiera, algunos o todos los firmantes anteriores, excluido el aceptante y su avalista, sin tener que observar un orden determinado cuando reclama a uno o varios de dichos obligados.

Al igual que en toda acción cambiaria, en la de regreso todos los obligados al pago lo están con carácter solidario.

En suma, la acción de regreso faculta al tenedor del título valor a dirigirse contra los endosantes, garantes de éstos y demás obligados del título, distintos al obligado principal y/o garantes de éste. Generalmente el obligado principal es el aceptante o girado, pero existen algunas situaciones en las que deja de serlo, pasando a obtener tal calidad el girador. Tal es el caso del protesto por falta de aceptación de una letra de cambio, la cual al no ser aceptada convierte a su girador en sujeto pasivo de la acción cambiaria de regreso, ello sin perjuicio de que el tenedor pueda dirigirse contra los demás obligados del título valor.

Cuándo o en qué oportunidad se puede iniciar la acción de regreso?. Según anotaba la ALTV, se podía accionar antes o después del vencimiento del título valor, pero siempre que se cumpliera con determinados requisitos. La nueva ley señala que la acción de regreso se podrá ejercer en forma conjunta o sucesiva a la acción directa. Sin embargo, tratándose de la Letra de Cambio parcialmente aceptada, el art. 148 establece que el tenedor podrá ejercitar las acciones cambiarias que correspondan, antes del vencimiento del título valor. Esta norma concuerda con los arts. 122 c) y 153.1 b).

Para **ZEGARRA**¹⁰³ la acción cambiaria de ulterior regreso o reembolso, implica la posibilidad que otorga la ley a quien pagó el título valor en la oportunidad en que fue exigido, de solicitar el reembolso del pago que efectuó a cualquiera de los obligados de regreso.

La acción de ulterior regreso, protege cambiariamente a quien siendo endosante pagó el título valor cuando éste le fue presentado por el tenedor, es decir, que quien se convierte en el nuevo tenedor del documento, puede hacer uso de la vía ejecutiva correspondiente para reembolsarse los pagos que se vio obligado a realizar, como consecuencia de su condición de obligado de regreso.

Si el pago efectuado es parcial, para el ejercicio de la acción cambiaria, deberá el tenedor del título valor entregarle a quien efectuó tal pago y a costa de éste, la copia certificada notarial o judicial del título valor con la constancia de haber sido parcialmente pagado. Tal copia certificada, tiene mérito ejecutivo.

No es infrecuente el caso de personas que no logran entender porqué las ejecutan y les cobran una letra de cambio que ellos las recibieron por endoso en pago y cumplieron también con endosarlas, con la misma función, en pago, deshaciéndose por tanto, según estiman, de todo derecho de cobrar pero también de toda obligación de pagar, respectivamente. En primer lugar, ignoran la característica cambiaria que torna a todo firmante e interviniente en un título valor en co-responsable solidario y obvio, sin beneficio de excusión y además, sin poder excepcionar los medios de defensa personales de sus anteriores endosatarios o endosantes; pero, en segundo lugar, que en tanto responsables en vía de regreso, tienen derecho de subrogación o sustitución al acreedor posterior para repetir y exigir contra los anteriores intervinientes en la misma forma y modo, la obligación a ellas exigida, posibilitándoles reclamar la suma por ellos pagada con más los nuevos intereses y gastos de cobranza debidamente documentados.

¹⁰³ ZEGARRA GUZMAN, Oscar. Op. cit., Página 120.

El profesor **GOMEZ LEO** dice que la acción cambiaria es aquella que se fundamenta, exclusiva y excluyentemente, en un papel de comercio, en tanto título de crédito abstracto, formal y completo, que es, además, un documento constitutivo y dispositivo del derecho de crédito en el representado. La acción cambiaria puede ser directa o de regreso. Es directa contra el aceptante y su avalista; de regreso contra todo otro obligado en el título. Ambas pueden ser ejercidas al mismo tiempo. La acción de regreso puede ser: simple o por falta de pago; anticipado y de reembolso o ulterior regreso.

Está habilitado para ejercer la acción cambiaria directa, es decir, tiene legitimación activa, en principio, el beneficiario de la letra de cambio. Si ella fue endosada y transmitida, será el portador legitimado, es decir, el beneficiario del último endoso, aún cuando éste sea "en procuración" o "en prenda". Estos son portadores legitimados en sentido estricto. Puede deducirla, además, cualquier obligado cambiario que haya atendido el pago de la cambial, v.gr. endosante, librador y sus respectivos avalistas. Se considera incluido al avalista del aceptante y al sujeto que pagó la letra por intervención, sujetos a los cuales se designa como portadores legitimados en sentido amplio.

La acción cambiaria directa tiene como sujeto pasivo sólo al aceptante y a su avalista quien a tenor del Art. 34 de la ley argentina y 59.1 de la ley peruana, está obligado en los mismos términos y de modo independiente de su avalado. De ello se sigue que si el avalista paga, tiene acción directa para reembolsarse lo pagado del aceptante, y sólo cuando éste pague se extinguirán todos los derechos cambiarios derivados del título. Por otra parte, debe quedar claro que en letra no aceptada o no aceptable no hay acción cambiaria directa. En cambio, en el pagaré siempre la hay, pues en este papel de comercio el sujeto pasivo es el librador o suscriptor del título.

En la acción cambiaria de regreso anticipado, es legitimado activo el beneficiario de la letra o el portador legitimado si aquella circuló. Se debe considerar incluidos al endosatario "en procuración" y al endosatario "en prenda". Los sujetos pasivos de la acción cambiaria de regreso anticipada, son en principio los endosantes, el librador y sus respectivos avalistas, siempre que no haya incluido en las correspondientes acciones cambiarias, una cláusula especial

relevándose de la garantía de aceptación, según comenta acertadamente el profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO**.

Artículo 91º.- Requisitos para ejercitar las acciones cambiarias en la Letra de Cambio

91.1. Salvo disposición distinta de la presente Ley, para ejercitar las acciones cambiarias señaladas en el Artículo 90º, constituye requisito obligatorio:

- a) En los títulos valores sujetos a protesto, haberse verificado el mismo;*
- b) En los títulos valores que sean objeto de formalidad que sustituya al protesto, haber logrado la constancia de la falta de cumplimiento de la obligación conforme al Artículo 82º; o, de ser el caso, el protesto conforme al Artículo 73º y 83º;*
- c) En los títulos valores no sujetos a protesto, la tenencia del título cuyo plazo esté vencido o resulte exigible la obligación según texto del documento o, en su caso, de la constancia de la que trata el último párrafo del Artículo 18º. Además, en estos casos se requiere haber cursado información a la Cámara de Comercio respectiva del incumplimiento, salvo que ello se cumpla conforme al último párrafo del Artículo 87º.*

91.2. La falta de los requisitos señalados en los incisos a) y b) anteriores podrá subsanarse si dentro de los plazos de prescripción de la respectiva acción cambiaria señalados en el Artículo 96º, el tenedor logra obtener, en forma expresa o ficta, el reconocimiento judicial en su contenido y firma del título valor, por parte del o de los obligados respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción cambiaria.

91.3. Los títulos valores a los que se refiere el inciso a) que lleven la cláusula de que trata el Artículo 52º, se ejercitará la acción cambiaria por el sólo mérito de la cláusula "sin protesto" y cumplir lo señalado en el inciso c) anterior.

El primer inciso contiene los requisitos obligatorios sin los cuales no se podrá ejercer las acciones cambiarias. Cuando el legislador incorpora la frase "salvo disposición distinta de la presente ley", se entiende que existen situaciones en las que la misma ley, obvio,

posibilita el cumplimiento de requisitos distintos o alternativos para que proceda el ejercicio de la acción cambiaria. Uno de esos casos lo encontramos en el art. 235, el cual prescribe que en el caso del warrant que no represente además el crédito garantizado, la acción cambiaria procederá siempre que:

- a) Se hubiese solicitado la venta de los bienes dentro de los treinta días siguientes del protesto o de la constancia de la formalidad sustitutoria; o, en los casos de haberse incluido una cláusula que libera del protesto, desde la fecha de vencimiento del crédito;
- b) Se ejercite dicha acción cambiaria dentro de los treinta días siguientes de la fecha de la venta de la mercadería; y,
- c) El primer endosante no haya endosado el título liberándose de responsabilidad.

Entre los requisitos obligatorios, se indica que para que la acción cambiaria se pueda ejercer contra títulos valores sujetos a protesto, éste debe haberse verificado; tal es el caso de la Letra de Cambio (art. 147); el Pagaré (art. 161); la Factura Conformada (art. 168); el Cheque (art. 213); el Warrant (art. 233); y el Título de Crédito Hipotecario Negociable (art. 243), entre otros. Pero justamente en estos títulos valores, es decir, en los "sujetos a protesto" es posible pactar el "sin protesto", conforme lo prevé el art. 81.1., de modo tal que si existiese dicha cláusula en el título con arreglo al art. 52, no se precisará pues de tal protesto notarial o judicial.

En los títulos valores sujetos a la formalidad sustitutoria al protesto, se debe obtener la constancia del incumplimiento de la obligación que será emitida por la respectiva empresa del Sistema Financiero Nacional a la cual el tenedor presentó el título valor para su cobro. Dicha constancia o comprobación deberá colocarse en el documento observando los plazos para el protesto que señala el art. 72. Asimismo, el tenedor podrá optar por el protesto notarial voluntario del título valor. Como se recuerda, aquél es el caso de cheques y otros títulos valores cuyo pago debe verificarse con cargo en cuenta bancaria (art. 53), según cláusula que conste en el mismo documento cuya constancia la coloca la empresa respectiva u otra con la cual la empresa designada mantenga acuerdo de truncamiento a que se refieren los arts. 26.1, 26.3 y 215 de esta NLTV.

En los títulos valores no sujetos a protesto, es decir, los valores mobiliarios, los certificados bancarios de moneda nacional y extranjera, conocimiento de embarque y la carta de porte; se exige la tenencia del título valor cuyo plazo esté vencido o resulte exigible la obligación. Tratándose de valores representados por anotación en cuenta se exigirá la constancia de titularidad que expide la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, la cual goza de mérito ejecutivo (art. 255.7). Se requiere, además, la comunicación a la Cámara de Comercio respectiva, salvo que una vez iniciada la acción cambiaria sea el Juez o Tribunal Arbitral quien curse copia de la demanda a la Cámara de Comercio Provincial que corresponda.

El segundo inciso establece que el incumplimiento de los requisitos en los títulos valores sujetos a protesto o a formalidad sustitutoria, son subsanables, siempre que dentro de los plazos de prescripción de la respectiva acción cambiaria, el tenedor logre el reconocimiento judicial expreso o ficto, por parte de los obligados, del contenido y firma del título valor.

En el parágrafo 91.2, el legislador sólo debió aludir al reconocimiento judicial de la "firma" obrante en el título valor, por parte del o de los obligados respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción cambiaria, o naturalmente la de sus representantes, y no la del denominado "reconocimiento judicial en su contenido y firma del título valor". La distinguida profesora de Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dra. **Eugenia S. ARIANO DEHO**, acaba de lograr una impresionante victoria en una casación que la Corte Suprema de Justicia de la República le ha venido en dar la razón. Por su total claridad, me limito a transcribir esta resolución del 13 de junio del 2000 notificada el día 28, dejando expresa constancia que los artículos 5, 7, 10, 17, 59, 71, 72, 196, 197, 198 y 199 de la Ley 16587, se encuentran ahora incluidos, con los evidentes ajustes, mejoras y completamientos, en los artículos 8, 6.3., 11, 18, 90, 91, 127, 128 y 96 de esta ley 27287, cuya inaplicación fue sustento en el recurso interpuesto.

"Lima, trece de junio del dos mil.- La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública de la fecha, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por don "XX" contra la

sentencia emitida por la Sala Superior a fojas doscientos doce, su fecha diez de setiembre de mil novecientos noventinueve, que revocando la Resolución apelada número uno emitida por el juzgado a fojas ochentiséis, su fecha veintiocho de enero del mismo año admite la demanda en la vía del proceso ejecutivo; la misma que reformándola, deniega la ejecución y declara insubsistente lo actuado con posterioridad. **2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:** Esta Sala, por Ejecutoria Suprema de fecha nueve de diciembre del año próximo pasado, ha estimado procedente el recurso interpuesto por la causal contenida en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, referido a la inaplicación de los artículos cinco, siete, diez, diecisiete, cincuentinueve, setentiuno, setentidós, ciento noventiséis, ciento noventisiete, cincuentinueve, setentiuno, setentidós, ciento noventiséis, ciento noventisiete, ciento noventiocho y ciento noventinueve de la Ley de Títulos Valores. **3. CONSIDERANDO: Primero.-** Que la resolución impugnada se ha expedido bajo el sustento de que por haberse reconocido en el presente caso la firma del librador, más no el contenido del mismo, la letra de cambio carece de mérito ejecutivo y no se encuentra dentro de los alcances del artículo seiscientos noventitrés del Código Procesal Civil. **Segundo.-** Que la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete en su artículo ciento noventiséis concordado con los artículos cincuentinueve y ciento setenta del mismo cuerpo legal permite recuperar la acción cambiaria directa del título valor mediante el "reconocimiento" del mismo en prueba anticipada; lo cual además ha sido recogido por el Código Procesal Civil en el artículo seiscientos noventitrés inciso tercero, cuando expresa que se puede promover proceso ejecutivo en mérito a documento privado reconocido, el cual, conforme al artículo doscientos cincuenta del acotado, puede efectuarse por representante. **Tercero.-** Que aparece del acta de Actuación y Declaración Judicial practicada en la Prueba Anticipada corriente a fojas cinco y siguientes de los presente autos, que el apoderado de la emplazada, "YY" reconoció la firma del señor "ZZ" en la letra de cambio aceptada por "JJ S.A.", a favor del recurrente por la suma de \$\$ dólares americanos. **Cuarto.-** Que siendo así y estando a la prescripción contenida en los artículos setentiuno, quinto, décimo y sétimo de la ley de la materia, que señala que es con la suscripción y/o aceptación del título valor con la que nace la obligación cambiaria, en concordancia con el numeral setentidós de la acotada norma que prescribe que debe constar la aceptación y firma del girado en el

título-valor; se concluye que el "reconocimiento" del mismo debe limitarse al acto unilateral de aceptación, es decir a la firma de la letra de cambio. **Quinto.-** Que las denuncias referidas a los numerales ciento noventiocho y ciento noventinueve de la Ley de la materia resultan impertinentes para la solución del caso, al referirse aquella a los plazos de extinción de las acciones derivadas de los títulos valores en general y de la letra de cambio concretamente. **Sexto.-** Que por las consideraciones expuestas, se concluye que al expedirse la impugnada se ha incurrido en error in-iudicando; sin embargo y dada la naturaleza del auto revocado (que admitió a trámite el mandato ejecutivo), esta Sala no puede pronunciarse conforme lo prevé el artículo trescientos noventiséis de la norma procesal, por cuanto sus efectos deben referirse a que la Sala Superior resuelva el fondo de la cuestión controvertida en virtud de lo alegado por ambas partes tanto al formular la demanda como la contradicción. **4. SENTENCIA:** Por tales consideraciones, y con la facultad que concede el artículo trescientos noventiséis del mismo cuerpo legal: declararon **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por "XX" y, en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fojas doscientos doce su fecha diez de setiembre de mil novecientos noventinueve; **MANDARON** que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expida nuevo fallo pronunciándose sobre la resolución apelada; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad".

La inserción de la cláusula "sin protesto" en títulos valores sujetos a protesto, constituye mérito suficiente para iniciar las acciones cambiarias, siempre que se haya cumplido con las demás formalidades y exigencias de ley.

El CPC establece que una vez presentada la demanda en la vía ejecutiva, el juez calificará el título ejecutivo, verificando la concurrencia de los requisitos formales del mismo. De considerarlo admisible, dará trámite a la demanda expidiendo mandato ejecutivo debidamente fundamentado, el que contendrá una orden de pago de lo adeudado, incluyendo intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada (art. 697 CPC).

La novedad de esta norma se centra en la precisión hecha respecto a los requisitos para ejercer las acciones cambiarias tratándose de títulos valores no sujetos a protesto.

Respecto a los efectos procesales, en Argentina se produjo un gran debate doctrinal, pues los autores y los fallos polemizaban acerca de la ejecutividad de la cambial, tanto cuando ella incluyera la cláusula "si protesto" como cuando se ejerciera la acción directa contra el aceptante de la letra o el emisor del pagaré (1) En relación con la primera cuestión, parte de la doctrina, atendiendo a una interpretación literal de la expresión "debidamente protestadas" que aparece en el texto de la ley argentina y que no reconoce antecedentes en la ley italiana, sostuvo que la letra que llevara la cláusula "sin protesto" y no fuera protestada no resultaba título ejecutivo hábil, ya que se entendía que la cláusula, si bien tenía operatividad en el aspecto sustancial o de fondo, no alcanzaba al aspecto procesal, pues en este terreno el título, al ser letra no protestada, no era título ejecutivo. Frente a esta posición el profesor **GOMEZ LEO** sostuvo oportunamente que si la letra contaba con la cláusula "sin protesto" era un título ejecutivo idóneo, sin necesidad de cumplir con el acto notarial. Con la sanción de la ley 19899 se puso fin a la polémica. Tal norma dispone que la letra de cambio o pagaré que incluya en su texto la cláusula "sin protesto" o una equivalente, es un título ejecutivo hábil, sin necesidad de que sea protestada. Sin embargo quedó vigente la otra cuestión: si la acción cambiaria directa cuenta con ejecutividad sustancial, concedida por la ley o, al contrario, para que el título tenga ejecutividad debe ser protestado en caso de no incluir la cláusula dispensatoria correspondiente. Parte de la doctrina consideraba que si la letra o el pagaré no incluía la cláusula "sin protesto" y no era protestada, si bien concedía la acción cambiaria directa, no constituía un título que trajera aparejada la ejecución, y era necesaria la preparación de la vía ejecutiva, previo reconocimiento de la firma por parte del deudor. Frente a ello, el profesor **GOMEZ LEO** consideró que conforme al derecho cambiario sustancial, hay dos clases de acciones cambiarias: directa y de regreso. En tanto que para la primera no se requiere protesto, para la segunda sólo se necesita tal acto notarial cuando no media dispensa legal. Es decir que la ejecución de una letra o pagaré únicamente requiere protesto cuando la acción cambiaria que se ejerce es de regreso y no hay dispensa, legal o voluntaria, de tal formalidad; en

todos los demás casos el protesto es innecesario. Y si el título, por sí sólo, trae aparejada la ejecución, no se concibe la exigencia del previo reconocimiento de la firma, requisito que la ley procesal, en forma expresa y explícita, establece únicamente para el caso contrario.

Todo esto terminó con el fallo plenario dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la capital federal el cual declaró la ejecutividad sustancial de la acción directa, considerando que cuando se demanda el cobro contra el suscriptor del pagaré o el aceptante de una letra de cambio, corresponde despachar la ejecución cambiaria, sin necesidad de que se haya protestado el título, aunque éste no influya la cláusula "sin protesto" ni de preparación de la vía ejecutiva mediante el previo reconocimiento de la firma del deudor, La norma contenido en el Art. 60 que dispone que la letras debidamente protestadas son títulos ejecutivos hábiles, ha quedado limitada en su operatividad al supuesto de ejercicio de la acción de regreso cuando el título no incluye dispensa del protesto

Se transcribe a continuación algunas ejecutorias de nuestros tribunales de justicia. Veamos

(1) Exp. N° CAS 1684-96 Cono Norte. Lima. "... Es la acción sustantiva, esto es la acción cambiaria, contenida en el título valor la que se puede ejercitar luego del reconocimiento de un documento perjudicado, que por ende puede revivir la acción procesal ejecutiva, e incluso puede ser ejercitada en vía de conocimiento o abreviado tal como autoriza el segundo párrafo del Artículo diecisiete de la Ley de Título Valores (Ley Nro. 16587); por consiguiente, la acción que deriva del documento cartular reconocido judicialmente queda sujeto a las reglas propias de esa clase de documentos."

Lima, cinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- La sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública el cuatro de mayo del año en curso, emite la siguiente sentencia; con el acompañado. 1.MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación por Fábrica Peruana Eternit, Sociedad Anónima contra la resolución de fojas ciento sesentidós, su fecha once de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que revocando la sentencia apelada de fojas ciento doce, su fecha treinta de abril del mismo año, declara infundada la demanda

de fojas treinticinco en todas sus partes, exonerando a la parte demandante del pago de costas y costos del proceso por tener motivos atendibles para litigar. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y siete ha estimado procedente las causales de interpretación errónea del Artículo mil doscientos setenta y siete del Código Civil, sobre el consentimiento en la novación; y la de inaplicación de las normas contenidas en los artículos primero, segundo, cincuenta y nueve, sesenta y uno, ciento veintidós y ciento veintitrés de la Ley de Títulos Valores. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, por razones expositivas y de orden lógico jurídico es atendible hacer un examen previamente de las normas cuya inaplicación es materia del recurso, para culminar posteriormente con el análisis de la primera causal. Segundo.- Que, la cuestión fundamental en la causal de inaplicación de normas de la Ley de Títulos Valores radica en verificar los efectos de la recuperación de la acción documental provenientes del reconocimiento de un título valor no protestado oportunamente, lo que hace el obligado principal mediante el procedimiento de prueba anticipada. Tercero.- Que, en efecto, el Artículo cincuenta y nueve de la Ley de Títulos Valores regula el reconocimiento judicial del título perjudicado, precisando que si el protesto no hubiera sido obtenido dentro de los respectivos términos legales, el tenedor podrá recuperar la acción documental solamente contra el obligado principal y su avalista, si éstos reconocieran el título en diligencia preparatoria, ahora prueba anticipada, y fueren notificados con la respectiva demanda antes del plazo prescriptorio correspondiente; sin embargo, no se recuperan las acciones contra los demás obligados subsidiarios. Cuarto.- Que, señala Ulises Montoya Manfredi, comentando la norma antes acotada, que el documento quedaba en la condición de un documento privado que contenía una obligación de deber, el cual mediante el reconocimiento, adquiría nuevamente mérito ejecutivo; y sólo permite se recupere la acción cambiaria directa contra el obligado principal y sus avalistas; agregando el citado jurista que las acciones que pueden derivar del título valor reconocido quedan sujetas a las reglas propias de esta clase de documentos (Comentarios a la Ley Títulos Valores, Editorial San Marcos Lima mil novecientos noventa y siete, pág. Doscientos nueve y doscientos diez). Quinto.- Que, en este sentido, cabe señalar que es la acción sustantiva, esto es la acción cambiaria, contenida en el título valor la que se puede ejercitar luego del reconocimiento de un documento perjudicado, que por ende puede revivir la acción procesal

ejecutiva, e incluso puede ser ejercitada en vía de conocimiento o abreviado tal como autoriza el segundo párrafo del Artículo diecisiete de la Ley de Títulos Valores; por consiguiente, la acción que deriva del documento cartular reconocido judicialmente queda sujeto a las reglas propias de esa clase de documentos. Sexto.- Que, en el caso que nos ocupa, la recurrente ha iniciado la presente acción invocando el Artículo cincuentinueve de la Ley de Títulos Valores, por lo que es menester concluir que es la acción cambiaria la que se ha iniciado en vía procedimental de conocimiento, en consecuencia, siendo una letra de cambio el documento puesto a cobro, le eran aplicables las normas que contienen los principios jurídicos de los títulos valores, los mismos que son, el principio de incorporación, literalidad, abstracción y autonomía cambiaria, y que están regulados en los Artículos primero y segundo de la ley cartular; por otro lado, también era objeto de examen los Artículos sesentiuno, noventicuatro, ciento veintidós y ciento veintitrés de la acotada ley, que están referidos a las formalidades de la letra de cambio y al ejercicio de las acciones cambiarias. Sétimo.- Que, la recurrida no ha examinado las normas acotadas, por el contrario, ha orientado el sentido de la resolución a verificar el origen o la causa de la obligación como si se tratara de una acción causal, en el cual el título valor anexado sólo es un medio de prueba más, lo cual es incorrecto en la medida que la acción documental de la letra puesto a cobro ha recuperado su mérito ejecutivo, ergo los principios que les son propios; por lo que dicha acción podía ejercitarse, tal como se dijo, en cualquiera de las vías que elija el tenedor del documento. Octavo.- Que, en nuestro derecho cartular la abstracción de la letra de cambio ejercitada mediante una acción cambiaria sólo puede quebrantarse, esto es, desligarse de su rigor formal, mediante las excepciones personales previstas en el penúltimo párrafo del artículo veinte de la tantas veces citada Ley de Títulos Valores con las condiciones previstas en dicho numeral, los que por cierto, no han sido planteadas por la demandada, en consecuencia, el examen referido al consentimiento del acreedor para que se constituya la novación carece de objeto desde que dicho análisis alude a la fuente o historia del negocio jurídico subyacente a la emisión del título, lo que no se condice con los principios cambiarios, salvo que, como ya se dijo, la demandada oponga a la accionante, las excepciones fundadas en sus relaciones personales, Noveno.- Que, siendo así, carece de objeto examinar la interpretación errónea del Artículo mil doscientos setentisiete del Código Civil toda

vez que dicha norma no es aplicable al caso de autos en correspondencia a los fundamentos que preceden en la presente resolución. Décimo.- Que, asimismo, la resolución apelada de fojas ciento sesentidós, que declara fundada la demanda, no examina el rigor formal del título valor puesto a cobro, sino que, se ocupa de merituar las pruebas referidas a la relación sustancial y no a la relación cambiaria, por lo que dicha resolución infringe las mismas normas que se acusan a la recurrida, por lo que, los efectos casatorios también deben alcanzarle. Décimo Primero.- Que, por tanto, la recurrida ha inaplicado los Artículos primero, segundo, cincuentinueve, sesentiuno, noventicuatro, ciento veintidós y ciento veintitrés de la Ley de Títulos Valores, toda vez que la cambial de fojas nueve sí reúne las formalidades que como instrumento de pago se requieren para el cumplimiento de la obligación con motivo de la acción incoada en el presente proceso. Décimo Segundo.- Que, de conformidad con el inciso primero del Artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil cabe amparar el recurso. 4. SENTENCIA: Que estando a las consideraciones que preceden, declararon FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Fábrica Peruana Eternit, Sociedad Anónima, en consecuencia, CASAR la sentencia de vista de fojas ciento sesentidós, su fecha once de setiembre de mil novecientos noventiséis; y actuando en sede de instancia: por los considerandos expuestos y los pertinentes de la resolución de primera instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento doce, su fecha treinta de abril de mil novecientos noventiséis que declara FUNDADA la demanda de fojas treinticinco en todos sus extremos; con lo demás que contiene.

Artículo 92º .- Pagos que pueden reclamarse

92.1. El tenedor puede reclamar del obligado contra quien ejerce la acción cambiaria:

- a) El importe y/o los derechos patrimoniales representados por el título valor a la fecha de su vencimiento;
- b) *Los intereses compensatorios más moratorios que se hubieren pactado según el texto del título valor o del respectivo registro; o, en su defecto, los intereses legales a partir de su vencimiento;*

- c) *Los gastos de protesto o de la formalidad sustitutoria en su caso y otros originados por la cobranza frustrada, incluidos los costos y costas judiciales o arbitrales, debidamente sustentados, de haberlos.*

92.2. Quien reclama en vía de ulterior regreso, exigirá el reembolso del total de la suma pagada, más los intereses correspondientes a dicha suma desde el día en que verificó el pago y los gastos a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, en su caso.

El presente artículo se ocupa de los pagos que pueden reclamarse como consecuencia del ejercicio de una acción cambiaria. Será el tenedor del título valor el sujeto facultado a exigir a aquel contra quien dirige su acción, el pago de:

a) El importe y/o los derechos patrimoniales representados por el título valor a la fecha de su vencimiento. La ley anterior en su art. 125, hacía referencia sólo al importe de la letra aceptada o no pagada y no a los derechos patrimoniales. Resulta importante que la nueva ley si los considere, pues los títulos valores no sólo representan derechos crediticios sino también otros derechos. Tal es el caso del Warrant y el Certificado de Depósito, los cuales desde su primer endoso representan además de la primera prenda a favor de su tenedor sobre los bienes descritos en el título, el crédito garantizado por el mismo. El Título de Crédito Hipotecario Negociable, constituye desde su primer endoso, un título valor que representa la hipoteca y el crédito consignado, a favor de su tenedor. El Conocimiento de Embarque y la Carta de Porte, confieren a su tenedor legítimo acción ejecutiva para reclamar la entrega de las mercaderías transportadas.

Tratándose del importe que el tenedor puede reclamar, debe entenderse que se alude a la suma dineraria que el título valor representa.

b) Los intereses compensatorios más moratorios que se hubieran pactado según el texto del título valor o del respectivo registro; o en su defecto, los intereses legales a partir de su vencimiento. En este punto, el texto de la actual ley difiere de la anterior que sólo consideraba materia de reclamo, los intereses legales a partir del vencimiento del título valor.

Resulta acertado que el legislador haya considerado a los intereses compensatorios y moratorios como materia de reclamo por parte del tenedor de un título valor, dado que éstos se fijan en forma convencional entre las partes; por lo tanto, es razonable que en primer lugar, se respete la voluntad común, la cual emerge del texto mismo del título valor en ese sentido; o del respectivo registro, es decir, tanto de la matrícula de acciones u obligaciones o del registro contable electrónico, si se trata de valores desmaterializados. Es en defecto o a falta de ésta, que recién podrá aplicarse el interés legal que fija el BCR.

En cuanto al punto de partida para el cómputo de los intereses, la ley señala que es la fecha de vencimiento del título valor.

c) Los gastos de protesto o de la formalidad sustitutoria en su caso y otros originados por la cobranza frustrada, incluido los costos y costas judiciales o arbitrales, debidamente sustentados, de haberlos.

Los gastos de protesto, son las sumas pagadas al notario para que efectúe la notificación al obligado principal, que se alude en el art. 77 de esta ley. Los gastos de la formalidad sustitutoria, son aquellos que derivan de la obtención de la constancia o comprobación de la falta de pago de un título valor, por parte de una empresa del SFN.

Los gastos originados por la cobranza frustrada serían aquellos que el tenedor ha debido efectuar para intentar obtener el pago del título valor, tales como cartas notariales y otros avisos dados, requerimientos, movilidades y comisiones de cobranza a personal de recuperación de créditos y otros similares.

Se incluyen también los costos y costas judiciales o arbitrales.

Al respecto, el art. 52 de la LGA, señala que los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre los gastos del arbitraje, teniendo presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio. Los gastos incluyen las retribuciones de los árbitros y de los abogados de las partes; las retribuciones del secretario que se hubiera nombrado, si éste no fuese árbitro; los gastos de protocolización del laudo, cuando

se hubiera pactado; y, en su caso, la retribución a la institución arbitral.

Adicionalmente, los árbitros deberán determinar el monto de la multa, cuando ello corresponda. Si el convenio no contiene pacto alguno sobre gastos, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre su condena o exoneración, teniendo en consideración el resultado o sentido del mismo.

Si no hubiera condena, cada parte cubrirá sus gastos y los que sean comunes en iguales proporciones, entendiéndose como comunes los honorarios de los árbitros, la del secretario, si éste no fuera árbitro, y la de la institución arbitral.

El segundo inciso, cuyo antecedente es el art. 126 de la ALTV, faculta a aquél que reclama en vía de ulterior regreso, a exigir el reembolso del total de la suma pagada por él, más los intereses que correspondan a dicha suma desde el día en que se verificó el pago así como los gastos a que nos referimos en el párrafo anterior.

En principio, los obligados a reembolsar los pagos señalados, son aquellos que antecedieron en la tenencia del título valor al que efectuó el pago, es decir, los anteriores endosantes, el girador, los avalistas.

Los pagos materia de reembolso son:

- La suma total pagada, es decir aquella indicada en el título valor; salvo el caso de pago parcial, en que sólo podrá reclamarse la suma insatisfecha.
- Los intereses que corresponda, los cuales devengarán a partir del día en que se efectúa el pago.
- Otros gastos, que son los derivados del protesto o formalidad sustitutoria, los costos y costas judiciales o arbitrales.

Artículo 93º.- Improcedencia de la acción cambiaria entre sí

Las personas que ocupen la misma posición e igual responsabilidad en un título valor, responderán solidariamente frente

al tenedor y no procederá la acción cambiaria entre ellas y sus relaciones quedan sujetas a las disposiciones propias del derecho común.

Lo dispuesto en el presente artículo, resulta de estrecha vinculación con la disposición contenida en el art. 11. Ambos se refieren a la solidaridad cambiaria desde dos puntos de vista: el de las relaciones de los obligados frente al tenedor del título valor y el de las relaciones entre estos obligados entre sí.

Como afirma **MONTOYA MANFREDI**¹⁰⁴, la solidaridad cambiaria (que permite al tenedor del título valor al que no se le ha pagado, reclamar el pago íntegro del girador o de los endosantes), se asimila a la solidaridad de deudores del derecho común, establecida en el art. 1186 del CC, que permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, sin que las reclamaciones entabladas contra uno sean obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras la deuda no resulte cobrada por completo.

GARRIGUES¹⁰⁵ es de opinión que el hecho de que el tenedor del título valor pueda dirigirse contra el librador o contra cualquiera de los endosantes, reclamando el íntegro de la obligación, no significa, en el fondo, que existe una verdadera solidaridad. El tenedor puede dirigirse contra éstos, no porque existe una deuda solidaria, sino porque es acreedor de varias deudas, tantas como firmas haya en la letra. No se trataría, de concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación, sino de concurrencia de varias obligaciones en un solo título. De este modo, para el citado autor, los firmantes del título valor no se obligan solidariamente al pago de ella, sino que garantizan solidariamente ese pago.

Sin embargo, el art. 11 establece en forma expresa que los intervinientes en el título valor: emitente, girador, aceptante, endosante, o garante; quedan obligados solidariamente frente al tenedor; salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario. Por lo

¹⁰⁴ MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit. Página 377.

¹⁰⁵ GARRIGUES, Joaquín. Citado por MONTOYA MANFREDI, Ulises. *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Op. cit., Página 378.

tanto, queda claro que el criterio del legislador peruano ha sido optar por la solidaridad cambiaria.

En tal sentido, se establece que los sujetos que ocupen la misma posición e igual responsabilidad en el título valor son responsables solidarios frente al tenedor, contra los cuales puede ejercitar las acciones cambiarias individual o conjuntamente.

Asimismo, se establece:

- Que entre dichos obligados, no procede el ejercicio de acciones cambiarias.
- Que las relaciones internas entre tales obligados, quedan sometidas a las disposiciones propias del derecho común. Ello significa, que cobran vigencia las reglas de las obligaciones solidarias, es decir, que sólo quedan obligados por su parte, pero no por el todo. El codeudor solidario que paga la deuda no puede repetir de los otros codeudores más de la porción que le corresponde a cada uno de ellos.

Artículo 94º.- Acción alternativa

94.1. Si las calidades del tenedor y del obligado principal del título valor correspondieren respectivamente al acreedor y al deudor de la relación causal, de la que se derivó la emisión de dicho título valor, el tenedor podrá promover a su elección y alternativamente, la acción cambiaria derivada del mismo o la respectiva acción causal.

94.2. Igual derecho asistirá al endosatario respecto a su inmediato endosante, siempre que el endoso fuere absoluto y derivase de una relación causal, en la que uno y otro tuvieran las calidades de acreedor y deudor, respectivamente.

94.3. Subsiste la acción causal correspondiente a la relación jurídica que dio origen a la emisión y/o transmisión del título valor no pagado a su vencimiento, a menos que se pruebe que hubo novación.

94.4. Si el tenedor opta por ejercitar la acción cambiaria, de acuerdo al Artículo 18º podrá recurrir a cualquiera de las vías procesales que admita la ley procesal.

El presente artículo, al igual que su antecedente, el art. 18 de la ley anterior, hace referencia a la doble situación jurídica que emerge del título valor; es decir, la relación causal que originó su emisión, y las obligaciones cartulares propias del documento cambiario.

Dicha disposición concierne propiamente a los títulos valores crediticios, como la letra de cambio o pagaré, en los que la relación causal no se revela del tenor del documento. Tratándose de los llamados títulos de tradición, o sea, aquellos títulos valores que representan mercaderías, la acción emergente del título valor aparece vinculada a la relación causal, es decir, al contrato que originó la emisión del documento.

El primer inciso establece que si coinciden las calidades de tenedor y acreedor y obligado principal y deudor de la relación causal; el tenedor puede promover en forma alternativa la acción cambiaria que derive del título valor y la acción causal. Para ello, como afirma nuestra doctrina, es necesario que el documento no haya sido endosado, o no haya entrado en circulación, porque si esto ha ocurrido el endosatario no podrá promover alternativamente las acciones derivadas del título. De lo expresado resulta que, ni el primer endosatario respecto al obligado principal, ni los endosarios sucesivos, respecto de los endosantes mediatos, pueden promover alternativamente la acción cambiaria y causal.

El segundo inciso concede acción alternativa al endosatario respecto a su inmediato endosante, bajo dos condiciones:

- que en ellos coincida las calidades de deudor y acreedor, en una relación causal
- que el endoso efectuado sea absoluto y derive de una relación causal.

Asimismo, se establece que subsiste la relación causal a menos que se pruebe que hubo novación. La ley no acepta en forma expresa que exista novación entre acreedor y deudor de la relación causal, si éstos son tenedor y obligado principal del título valor, tampoco entre endosatario y su inmediato endosante; salvo que en ambas situaciones se demuestre que existió *animus novandi*.

En opinión de **OSTERLING y CASTILLO**¹⁰⁶, la novación es el medio extintivo de obligaciones que opera mediante la sustitución de una obligación por otra. El art. 1277 del CC, establece que por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva.

Del texto de la norma y de acuerdo con la explicación de los autores citados, los requisitos para que se pueda configurar la novación, son:

- Preexistencia de una obligación válida
- Creación de una nueva obligación
- *Animus novandi* o voluntad de novar

Por otro lado, el art. 1279 del CC refiere también aquellos casos en los cuales no se produce novación, y ellos son:

- La emisión de títulos valores
- La renovación de títulos valores
- La modificación de un plazo
- La modificación del lugar del pago
- Cualquier otro cambio accesorio a la obligación.

Disposición que concuerda con el inciso tercero del art. 94 de la presente ley, en el que se establece que sólo si se prueba que hubo novación, no subsistirá la acción causal que dio origen a la emisión y/o transmisión del título valor no pagado.

Si el tenedor opta por ejercitar la acción cambiaria en una vía distinta a la ejecutiva, podrá recurrir a cualquiera de las vías procesales que regula el CPC; es decir, a la vía de conocimiento, abreviada o sumarísimo.

Con ocasión al tema de que trata este artículo 94, es decir a la distinción entre la relación causal y la relación cambiaria y sus

¹⁰⁶ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., Tomo VIII, Páginas 244 y sgtes.

derivaciones para los casos de incumplimiento, la acción o pretensión causal y la acción o pretensión cambiaria, es pertinente recordar que aprovechando las características de abstracción, autonomía y literalidad de los títulos valores, numerosas veces se dan en nuestro medio, así como en el de otros países, lo que aquí en Perú denominamos "letra de cambio de favor" que en pocas palabras significa representar y hacer uso de una cambial, para conseguir financiamiento, sin que en la realidad haya existido en la relación primitiva o fundamental, negocio jurídico o transacción mercantil de tipo alguno. En épocas de crisis económica como la que afronta nuestro país ahora, es incuestionable que el número de letras de cambio de favor se acrecienta en forma notable, destacando los casos de la entrega de estos títulos entre las sociedades correspondientes a los grupos empresariales, o conglomerados económicos, es decir entre las cuales existe vinculación económica o dirección unificada: las que andan mejor en el medio prestan su firma como aceptantes de letras de cambio o emisores de pagarés y entregan estos títulos a determinadas entidades del grupo económico familiar para que éstos, comerciantes o banqueros consigan o hagan entrega a los beneficiarios finales del correspondiente financiamiento o capital de trabajo para operar en condiciones mínimamente posibles. En Argentina, explica el profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO**, le denominan "letra de complacencia" y explica que ella es "la cambial que libra o acepta una persona llamada complaciente, facilitando con ese acto el hecho de que otra persona pueda negociar el título sin que haya entre ellas un verdadero negocio ni la intención real de obligarse cambiariamente. El libramiento de estas letras, designadas también "de favor" o "de camaradería", se ve favorecido por el carácter abstracto del papel de comercio, que queda, como sabemos, desvinculado jurídicamente de la relación fundamental por la cual se lo libró o aceptó. La finalidad práctica de estas letras es lograr su fácil negociación procurando la obtención de crédito. Generalmente, el complaciente en la letra es el aceptante, pero no hay inconveniente en que lo sea el librador, un endosante y aún un avalista; lo esencial es la autenticidad de la firma que se adiciona a la ya existente como una garantía más, posibilitando la negociación o el descuento del documento. En todos los casos, se podrá hacer valer entre las partes la excepción de simulación, aunque, como se comprende, frente al tercero de buena fe ello es irrelevante. La letra de complacencia

cumple, respecto de este último, todos los efectos cambiarios que puede producir como papel de comercio (título valor)".

Para la doctrina y legislación argentina, el profesor **Oswaldo R. GOMEZ LEO** explica, genéricamente, se puede decir que las acciones extracambiarias son aquellas que surgen de las relaciones de derecho común que motivaron el libramiento o transmisión de la cambial, mediante las cuales el portador del título se procura el cobro de determinadas sumas que han quedado insatisfechas. Conforme a lo expuesto, cita que son acciones extracambiarias, las siguientes:

1. La acción causal (Arts. 94.1; 94.2 y 94.3 de esta NLTV);
2. La acción de enriquecimiento (sin causa) (Art. 20 de esta NLTV);
3. La acción de contribución que tiene un coobligado cambiario que debido al principio de unidad del monto de la letra, atiende su totalidad. Efectuado el pago, puede accionar respecto de su coobligado para requerirle la parte proporcional que le corresponde atender según las relaciones extracambiarias por las cuales se coobligaron cambiariamente en la letra, sea como libradores, endosantes, avalistas o aceptantes. El Art. 59 de la ley argentina y 93 de esta NLTV disponen que esta acción es regida por el derecho común, de lo cual se sigue que a su respecto el título valor (la letra de cambio) es sólo un documento probatorio, como el contrato por negocio jurídico que le sirvió de base. El plazo de prescripción será el que le corresponda conforme a la naturaleza de los derechos sobre los cuales verse la relación extracambiaria que vincula a los coobligados;
4. La acción de daños y perjuicios que tiene el obligado cambiario contra quien, debiendo enviarle el aviso por falta de aceptación o pago, no lo hizo y de tal inobservancia, resultó algún perjuicio.
5. La acción que tiene el sujeto por quien se aceptó por intervención la letra, contra el interviniente que lo hizo en su nombre y no le hizo aviso oportuno;
6. La acción que tiene el poseedor de una letra cancelada (anulada) si oportunamente no formuló oposición contra el sujeto que obtuvo la cancelación (anulación) de la letra robada, extraviada o perdida;

7. Las distintas acciones que tienden a restablecer el equilibrio de las relaciones extracambiarias entre los integrantes de los nexos cambiarios. Por ejemplo, la acción que tiene el girado que pagó la letra contra el girador que omitió remitirle la correspondiente provisión; aquella de que goza el girador para resarcirse del perjuicio que le produjo la no atención de la letra por parte del girado, si éste se había comprometido a hacerlo o ya había recibido la provisión correspondiente; o la que tiene el girador de una letra por cuenta y orden de un tercero contra éste, si la letra girada no es atendida por el girado que se le señaló, y debido a ello ese girador por cuenta tuvo que atender el pago de la letra rechazada con fondos propios; o la acción que tiene el interviniente que espontáneamente pagó la cambial contra el sujeto por quién pagó.

Este artículo 94 regula la opción que tiene el tenedor para interponer su demanda sustentada en la relación causal de la que se derivó la emisión o transferencia del título valor. **GOMEZ LEO** refiere que "la acción causal es la acción extracambiaria que puede promover el portador legitimado de una letra de cambio (un título valor) contra el firmante inmediato anterior que lo garantiza (solidariamente) en el nexo cambiario, siempre que la letra (el título valor) no esté perjudicada (o) y tenga establecida y vigente, con dicho sujeto, la relación jurídica de derecho común por la cual se la giró. Si bien hemos referido la explicación a la acción causal entre girador y beneficiario, ello se puede entender entre cualesquiera de los sujetos vinculados en forma análoga a la descrita, de donde corresponde agregar a lo dicho: "que la letra tenga establecida y vigente la relación jurídica de derecho común por la cual se la giró o transmitió". El mismo profesor argentino sostiene que está habilitado para ejercer la acción causal el beneficiario o el portador legitimado de la letra, si ella circuló, y también aquél que habiéndola pagado la tiene en su poder. En tanto legitimado pasivo, puede ser demandado mediante la acción causal todo firmante de la cambial que esté vinculado con el portador legitimado por una relación obligacional de derecho común, que motivó el libramiento o la transmisión de la letra y no fue novada expresamente. Se considera que el concepto dado abarca las siguientes relaciones: (1) Entre el portador legitimado y el último endosante; (2) Entre el endosatario y su endosante; (3) Entre el

avalista y el avalado, aunque el primero no podrá accionar contra el endosante de su avalado, pues a él no lo une ninguna relación causal; (4) Del tomador contra el librador; (5) Del librador contra el aceptante. Conviene señalar aquí que el endosatario de un endoso con la cláusula "sin garantía" puede accionar contra su endosante, pues tal cláusula lo releva de responsabilidades cambiarias, pero no de la que podría surgir de la relación fundamental. Lo propio ocurre en el caso de que se incluya la cláusula "en prenda" o "en garantía", pues si la relación fundamental no se extinguió procede la acción causal; pero no procede si el endoso es "en procuración", porque el endosatario es mandatario (representante) y no acreedor de su endosante.

Se transcribe a continuación algunas ejecutorias de la Corte Suprema que precisa conceptos en torno a la relación causal como opción alternativa y sus diferentes circunstancias. Veamos.

(1) Exp. Nº 553-91 Lima. Habiéndose dado en pago un título valor perjudicado por culpa del acreedor, la obligación primitiva se extingue y el actor sólo puede ejercitar las acciones que se deriven de ese título perjudicado.

Lima, trece de diciembre de mil novecientos noventiuno.- VISTOS; con el acompañado; por sus fundamentos de la sentencia de primera instancia; y CONSIDERANDO: además; que se debe tener en cuenta la correcta interpretación del artículo mil doscientos treintitrés del Código Civil, ubicado sistemáticamente en el título de pago, como una de las formas de extinción de las obligaciones; que en la interpretación adecuada determina por norma de orden público que el pago con títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago extinguen la obligación primitiva cuando se realicen o cuando por culpa del acreedor, se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario; que en el caso de autos, como lo precisa la propia demanda de fojas uno, en su primer otrosí el pagaré tres mil cuatrocientos cincuenta que representaba el pago del crédito mutuado, puesto a cobro en la presente acción causal descontando los pagos a cuenta, se ha perjudicado por exclusiva responsabilidad de su propietario y tenedor, la demandante; que en consecuencia, en el caso de autos no se puede presentar la alternativa que el artículo dieciocho de la Ley dieciséis mil quinientos ochentisiete precisa, dado que al estar notoriamente prescrita la acción cambiaria, no puede haber alternativa

para el acreedor; que, finalmente habiéndose dado en pago un título valor perjudicado por culpa del acreedor, la obligación primitiva se extingue y el actor sólo puede ejercitar las acciones que se deriven de ese título perjudicado; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas ciento dieciocho, su fecha ocho de febrero del presente año, que revocando la apelada de fojas setentidós, fechada el catorce de mayo de mil novecientos noventa, declara fundada la demanda; con lo demás que contiene; reformando la de vista, confirmaron la de primera instancia, que declara infundada la demanda; sin costas.

(2) Exp. N° 183-90 Lima. La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguen la obligación primitiva, cuando hubiesen sido pagado o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario, tal como lo dispone el art. 1233 del C.C.

Lima, ocho de abril de mil novecientos noventiuno.- VISTOS; por sus fundamentos de la sentencia de Primera instancia; y CONSIDERANDO: además; que la entrega de Títulos Valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguen la obligación primitiva, cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del deudor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario tal como lo dispone el artículo mil doscientos treintitrés del Código Civil; que el cheque de fojas veinte, girado por la demandada a la orden de la demandante y a cargo del Banco Popular del Perú por la cantidad de cuatrocientos treinta y siete mil intis, contiene un mandato de pago que no fue atendido por la institución bancaria girada, no existiendo en el caso de autos el pacto en contrario a que se refiere el precitado artículo mil doscientos treintitrés del Código Civil, pues del recibo de fojas diecinueve no impugnado por la demandada, aparece que el referido cheque fue entregado únicamente prosolvendo, al expresarse que la letra de cambio que se pretendía cancelar sería devuelta en el momento en que se hiciera efectivo el cheque mencionado, considerándose desde entonces, efectuado el pago; declararon HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas ciento treinta y siete, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve en cuanto revocando la apelada de fojas ciento tres, fechada el siete de octubre de mil novecientos ochentiocho dispone que los demandados paguen a la demandante únicamente la cantidad de

cuatrocientos treinta y siete mil quinientos intis, más intereses legales a liquidarse desde el vencimiento de la obligación, diez de noviembre de mil novecientos ochentiséis; reformando la de vista en ese extremo confirmaron la de primera instancia que ordena que los demandados abonen a la actora la suma de veinticinco mil dólares o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio al día de pago, más intereses legales y costas; declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que dicha resolución de vista contiene.

(3) Exp. N° 1501-95. Lima. Cuando se sustenta la demanda en una acción causal debe indicarse el origen de la misma, es decir el acto jurídico que propició la deuda y no sustentarla en el título valor ya vencido al haberse extinguido las acciones cambiarias.

Lince, veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; resulta de autos; que, por escrito de fojas once J.C. Automotriz Sociedad Anónima, debidamente representado por don Salvador Peceros Pérez, conforme a la copia del testimonio de poder debidamente legalizado obrantes a fojas tres a ocho, interpone demanda en la vía de proceso abreviado a don Jaime Chipana Lazo, para que le pague la suma de mil ciento cuatro dólares americanos importe de la letra que obra en autos más los intereses devengados y gastos; ampara su demanda en el hecho que los títulos valores que se recaudan fueron aceptados por el demandado, quien no cumplió con pagar a su vencimiento, pese a los requerimientos efectuados al demandado, por lo que han interpuesto la presente acción; ampara su demanda en el inciso primero del artículo mil doscientos diecinueve del Código Civil; y artículo ciento veinticinco de la Ley de Títulos Valores, inciso séptimo del artículo cuatrocientos ochentiséis, cuatrocientos ochentiocho y cuatrocientos ochentinueve del Código Procesal Civil; calificada y admitida la demanda, ésta no ha sido absuelta, por lo que declaró rebelde mediante resolución número dos, del trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y se fijó fecha de audiencia de saneamiento procesal y conciliación, el mismo que se llevó a cabo a fojas veintiuno con la sola asistencia del apoderado, y por la naturaleza de ser abreviado el día veintiséis de febrero último se llevó a cabo la audiencia de la actuación de los medios probatorios, de igual modo con la sola asistencia del apoderado de la demandante, por lo que la misma a quedado expedita para dictar la presente sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que, la letra de cambio

recaudada la misma que obra fojas diez, tiene consignada como fecha de vencimiento el treinta de setiembre de mil novecientos noventidós, en tanto la demanda interpuesta ha sido efectuada al día veintitrés de octubre de mil novecientos noventicinco; SEGUNDO: que, como es de advertirse de las fechas indicadas en el primer punto, es decir del vencimiento de la letra de cambio a la fecha de interposición de la demanda, han expirado más de tres años, por lo que en los casos como en el presente, las acciones derivadas de la letra de cambio se extinguen a los tres años, la acción directa contra el aceptante, siendo esto así y estando a lo establecido por el artículo ciento noventinueve de la Ley de Títulos Valores (Ley 16587), la demanda debe declararse improcedente, por estas consideraciones y el artículo glosado; FALLO: declarando IMPROCEDENTE la demanda interpuesta; sin costos y costas.

Lima, treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis.- VISTOS; por sus propios fundamentos; y, CONSIDERANDO: además; PRIMERO: que cuando se sustenta la demanda en una acción causal debe indicarse el origen de la misma, es decir, el acto jurídico que propició la deuda. Y, no sustentar la incoada en el título valor de fojas diez que ya está vencido; por tales razones; SE CONFIRMA la sentencia apelada de fojas veinticuatro, su fecha veintinueve de febrero del año en curso, que declara improcedente la demanda; con lo demás que contiene y es materia del grado; y devuélvase al Juzgado de origen.

CAPITULO IV

LA PRÁCTICAMENTE ÚNICA FORMA DE GIRO UTILIZADA EN LA LETRA DE CAMBIO: A LA ORDEN DEL PROPIO GIRADOR Y A CARGO DE TERCERA PERSONA: ART. 122 INCS. A) Y B) DE LA LEY 27287.

Quisiera señalar en el presente capítulo, finalmente, que en nuestro país, prácticamente, no existen las Letras de Cambio giradas a la orden de tercera persona, salvo, en muy contadas situaciones en las cuales el girador es a la vez girado y aceptante. Claro, en este supuesto, Juan emite la letra de cambio (girador) y él mismo la acepta (girado) en cuyo caso la ley establece que ni siquiera necesita volverla a firmar en tanto este último, y anotado como *tomador* a Pedro, se la deja a éste en su Oficina. Si no es en esta hipótesis, que es rarísima, las letras de cambio son “siempre” giradas a favor o a la orden de un *tomador o beneficiario* que siempre es el mismo que el girador de la cambial.

En otras palabras, en nuestra patria, solamente usamos la letra de cambio con dos sujetos, y no con tres, que es el supuesto legislativo, en donde, el girador responde (siempre) por la aceptación y el pago, según lo prevé el art. 123 de la Ley 27287.

En el Perú, el girador siempre es el tomador; hay una confusión de sujetos girador-tomador, y por tanto, hay también una confusión de sujetos obligado original (girador) y tomador o beneficiario, prevaleciendo este último, el de calidad de beneficiario o acreedor, en tanto y en cuanto la letra de cambio sea aceptada por el girado, porque en este supuesto, que es el de la inmensa mayoría de casos, el girado-aceptante se convierte en obligado principal y directo, pasando el girador a ser obligado subsidiario, solidario, pero subsidiario.

Conste entonces, que en nuestro país usamos la letra de cambio como si fuera pagaré, con dos sujetos, nomás que el girador en tanto tomador es el acreedor (en el pagaré el emitente es el deudor) y el girado es el deudor (en el pagaré no hay girado; el otro sujeto es el beneficiario o persona en cuyo favor se emite el título vsalor).

Y nos debemos preguntar, por qué ocurrió esto. Respuesta sencilla y tan elemental, como folklórica, como decir, que lo que ocurría es que en las bodegas, bazares, tiendas y librerías de todos los lugares de la República, se encuentran letras de cambio porque éstas eran solicitadas por los minoristas, en cambio, ninguna imprenta se atrevía a emitir pagarés cuyo texto era ignorado. En otras palabras, alguien trajo en alguna ocasión una letra de cambio la mandó imprimir y la gente la comenzó a utilizar con frecuencia, incluso para préstamos y operaciones domésticas, y su uso se extendió. Los pagarés solamente lo utilizaban los Bancos. Los comerciantes se acostumbraron a llenar las letras de cambio y a endosarlas a los Bancos para obtener descuentos y líneas de crédito con la garantía de las cobranzas que constaban de las operaciones a crédito que celebraban. Esta ha sido la realidad.

CONCLUSIONES

1. La Letra de Cambio, al igual que el Pagaré, *incorpora* el derecho patrimonial consistente en la obligación de dar una suma determinada de dinero, o una cantidad determinable de éste, conforme a los sistemas de actualización o reajuste de capital legalmente admitidos. Hay otros títulos valores que no incorporan, sino que sólo *representan*, derechos patrimoniales, tal el caso, por ejemplo, del certificado de depósito, conocimiento de embarque y carta de porte.
2. La Letra de Cambio es un Valor en Título, léase, Título Valor, valor materializado. Hay otros Valores Negociables que se representan electrónicamente, como anotaciones en cuenta y registro, también denominados por la doctrina, valores desmaterializados. No vemos, por ahora, cómo pueda representarse una Letra de Cambio en forma desmaterializada.
3. La Letra de Cambio es el modelo o paradigma de los Valores Negociables en general y de los Títulos Valores en particular. Según los arts. 162, 171, 216 y 245.1., entre otros, al Pagaré, a la Factura Conformada, al Cheque y al Título de Crédito Hipotecario Negociable le son aplicables, en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones referidas a la letra de cambio.
4. En caso de diferencia en el importe en la Letra de Cambio, prevalece la suma menor, sin perjuicio que el interesado pueda hacer valer sus mayores derechos por la vía causal. Si la diferencia radica en la indicación de la unidad monetaria, prevalece la cantidad indicada en moneda nacional y si ninguna de las citadas corresponde a la moneda de curso legal de nuestro país, la letra de cambio no surte efectos cambiarios, vale decir, no surte efectos legales. En el debate de la Comisión Redactora quedó claro que correspondería la cantidad expresada con signo monetario de nuestro país, siempre que el

importe fuere menor, lo que al momento de expresarlo por escrito, no se anotó así, pasando inadvertido por nosotros, el error cometido. Igual, pasó desapercibido en la Comisión Revisora.

5. Toda persona que firme una Letra de Cambio debe consignar su nombre y el número de su Documento Oficial de Identidad. El error en la consignación del número del Documento Oficial de Identidad no afecta la validez del título valor. En las Letras de Cambio emitidas por las Empresas del Sistema Financiero Nacional por saldos sobregirados en cuenta corriente a que se refiere el art. 228 de la Ley de Bancos 26702, es evidente que no siendo firmadas éstas por los girados, la ausencia de esta indicación, la del número del Documento Oficial de Identidad, trate de DNI o RUC, no invalida dicha Letra de Cambio. Apréciase que inclusive no se protestan por falta de aceptación, sino de pago, a pesar de no haber sido, en efecto, propiamente aceptadas; siendo en ellas, inválida la cláusula “sin protesto”.
6. Aquel que por cualquier concepto y como representante firma una Letra de Cambio sin estar facultado para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiere obrado a nombre propio y obviamente, si la paga, adquiere los derechos del supuesto representado.
7. La Letra de Cambio surte todos sus efectos contra las personas capaces que la hubieran firmado, aun cuando existan otras firmas inválidas o nulas por cualquier causa.
8. En la Letra de Cambio que hubiese habido alteración de alguno de sus datos, los firmantes posteriores se obligan según los términos del texto alterado y los anteriores conforme al texto original.
9. Para ejercitar cualquier derecho o acción derivada de una Letra de Cambio aceptada en forma incompleta, ésta deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados. En caso contrario, el obligado puede contradecir acompañando necesariamente el documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante. Quien acepte una letra de

cambio incompleta tiene el derecho de exigir le sea entregada una copia de la misma y no puede ser impedido de agregar en el documento una cláusula que limite su transferencia, tal como “No Negociable”. La Ley 27311 de Protección al Consumidor y Circulares de la SBS, para el caso de los Bancos, han completado la normativa para las situaciones de emisión o aceptación de Títulos Valores emitidos incompletos. Si una Letra de Cambio incompleta al momento de la aceptación hubiere sido llenada contraviniendo los acuerdos adoptados, la inobservancia de dichos acuerdos no puede ser opuesta a terceros de buena fe que no hayan participado o conocido de dichos acuerdos.

10. Salvo cláusula o disposición legal expresa en contrario, los que giren, acepten, endosen o garanticen (avalen o afiancen) una Letra de Cambio quedan obligados solidariamente frente al tenedor. El mismo derecho corresponde a todo obligado de una Letra de Cambio que la haya pagado, contra los obligados anteriores a él.
11. Para exigir el derecho incorporado que en la Letra de Cambio se expresa, ella debe ser presentada por quien según las reglas de su circulación resulte ser su tenedor legítimo, el que además tiene la obligación de identificarse. El deudor de buena fe que cumpla con el pago, queda liberado, aunque dicho tenedor no hubiese resultado ser el titular del derecho. El tenedor de la Letra de Cambio queda obligado a devolverla a quien cumpla totalmente con el pago. En los casos de Letras de Cambio cuyo último tenedor sea un Banco, una vez que ésta sea pagada totalmente, podrá ser sustituida por microformas, destruyéndose la Letra de Cambio cancelada. En este caso, el Banco entrega al obligado la constancia del pago total y mantiene la reproducción por el plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha de vencimiento de la citada Cambial.
12. Las acciones cambiarias derivadas de la Letra de Cambio pueden contradecirse fundándose:
 - en el contenido literal o en los defectos de forma legal de ella,
 - en la falsedad de la firma que se le atribuye,

- en la falta de capacidad o representación del propio aceptante demandado, en el momento en que firmó la Letra de Cambio,
- en la falta de protesto, o el protesto defectuoso, o de la formalidad sustitutoria, en los casos de Letras de Cambio sujetas a ello,
- en que la Letra de Cambio incompleta al aceptarse ha sido llenada en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante,
- en la falta de cumplimiento de algún requisito señalado por la ley para el ejercicio de la acción cambiaria, y, también,
- en las defensas que se deriven de sus relaciones personales, a cuyo efecto deberá proponerlas.

El demandado no puede ejercer los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con los otros obligados de la Letra de Cambio, ni contra quienes no mantenga relación causal vinculada a la Letra de Cambio, a menos que al adquirirla el demandante hubiese obrado a sabiendas del daño de aquél.

13. Extinguida la acción cambiaria derivada de la Letra de Cambio, sin tener acción causal contra el aceptante, el girador y los otros obligados, el tenedor puede accionar contra los que se hubieren *enriquecido sin causa* en detrimento suyo.
14. Puede deducirse la nulidad de la Letra de Cambio obtenida por el tenedor en representación o pago de préstamos con intereses usurarios sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. En caso de que la Letra de Cambio que contenga tales intereses hubiere sido transferida, la nulidad precitada que no surja de su texto no podrá invocarse contra el tenedor de buena fe que la haya adquirido observando las normas que rigen su circulación.
15. La Letra de Cambio es un título valor a la orden girada a favor de persona determinada. Se trasmite por endoso y

consiguiente entrega del título. De conformidad con lo dispuesto en el art. 125.1., aunque no esté expresamente girada “a la orden”, igual es transmisible por endoso.

16. El endoso es la forma típica de transmisión de la Letra de Cambio. Sus requisitos se encuentran en el art. 34.1., y el nombre, el número del D.O.I y la firma del endosante son requisitos esenciales, por lo que, su inobservancia conlleva la ineficacia del endoso. Esta nueva Ley agrega el endoso en fideicomiso a los conocidos endosos, en garantía, en cobranza y en prenda.

17. En la Letra de Cambio es perfectamente posible insertar las siete Cláusulas Especiales previstas en la Ley, sin perjuicio de otras libremente pactadas, siempre que en forma expresa no las impida la ley. Para tener validez deben estar impresas en el documento o refrendadas especialmente con firma del obligado que las admite, en el caso de haber sido incluidas en forma manuscrita, con sellos o cualquier otro medio. Las cláusulas son:

- Prórroga automática;
- Pago en moneda extranjera;
- Pago de intereses y reajustes;
- Liberación del “protesto”;
- Pago con débito en cuenta bancaria;
- Venta extrajudicial; y
- Sometimiento a determinadas leyes o tribunales.

18. El cumplimiento de la obligación que representa la Letra de Cambio puede estar respaldada por cualquiera de las garantías personales, llámese Aval o Fianza, o Garantía Real. El avalista responde de igual modo que aquél por quien prestó el aval y su responsabilidad subsiste aunque la obligación causal del título valor avalado fuere nula; excepto si se trata de defecto de forma de dicho título valor. El avalista no puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su avalado. El avalista que cumple con la obligación garantizada se subroga en

todos los derechos resultantes del título valor. La Fianza que conste en el título valor tiene carácter de solidaria. El Fiador sí puede oponer al tenedor del Título Valor los medios de defensa personales de su afianzado.

19. La obligación contenida en la Letra de Cambio debe ser cumplida el día del vencimiento. El tenedor no puede ser compelido a recibir su importe en fecha anterior. Quien cumple con la obligación antes de la fecha establecida lo hace por su cuenta y riesgo y responde por la validez del pago. El tenedor no puede rehusar un pago parcial. Quien lo hace puede exigir recibo y anotación del pago parcial en la misma Letra de Cambio.
20. La Letra de Cambio debe ser presentada para su pago en el lugar designado al efecto en el documento, aun cuando el obligado hubiere cambiado de domicilio, salvo que éste haya comunicado notarialmente al último tenedor su variación, antes del vencimiento, y siempre dentro de la misma ciudad.
21. Salvo que se haya liberado del “protesto” con arreglo al artículo 81°, ni la incapacidad, ni la insolvencia decretada (con el D. Leg. 845 ésta era la denominación; con la Nueva Ley General del Sistema Concursal 27809, se dice “deudor en procedimiento concursal”, o “deudor concursado”), ni la muerte del obligado principal, dispensan de la obligación de formalizar el protesto. En caso de fallecimiento, el protesto surte plenos efectos legales contra sus herederos. Aun en caso de “liberación del protesto”, el tenedor puede llevarlo a cabo, siendo de su cuenta los gastos respectivos. El protesto realizado contra el aceptante de la Letra de Cambio (por falta de pago) o en su caso, contra el girado no aceptante (por falta de aceptación), libera de la obligación de hacerlo contra los demás obligados cambiarios. El protesto debe hacerse en el domicilio señalado para el pago; si la Letra de Cambio no contuviera indicación del domicilio para el pago, el protesto se realiza mediante notificación a la Cámara de Comercio Provincial. En el caso de Letras de Cambio pagaderas con débito en cuenta bancaria, el protesto es facultativo. El protesto se realiza mediante notificación dirigida al obligado principal. Existe toda una regulación de la publicidad de los

incumplimientos, tanto de protestos y moras, de formalidades sustitutorias al protesto y del incumplimiento en el pago de Letras de Cambio no sujetas a protesto.

22. Las acciones cambiarias derivadas de la letra de Cambio lo son, la Directa, la de Regreso y la de Ulterior Regreso. Si las calidades de tenedor y obligado principal de la Letra de Cambio correspondieran respectivamente al acreedor y al deudor de la relación causal de la que derivó su emisión, dicho tenedor podrá promover, alternativamente y a su elección, la acción cambiaria o la acción causal. Igual derecho asiste al endosatario respecto a su inmediato endosante, siempre que el endoso fuere en propiedad y derivase de una relación causal en la que uno y otro tuvieran las calidades de acreedor y deudor, respectivamente.
23. Si bien los incisos d), e) y f) del art. 119 de la Ley aluden a tres sujetos en la Letra de Cambio, Girado, Tomador y Girador, respectivamente, en la práctica mercantil peruana, la fusión o confusión de sujetos girador-tomador ocurre a diario, comportándose entonces la Letra de Cambio, en nuestro país, en primer lugar, como promesa de pago y no como orden de pago, toda vez que no hay un girador que ordena a un girado que pague a un tercero que se llama tomador, sino que simplemente un girado acepta y promete pagar a un tomador-girador una cantidad determinada o determinable de dinero en oportunidad o vencimiento previsto. La Letra de Cambio aparece así como un Pagaré.
24. No tiene sentido en los casos previstos en el acápite anterior la norma del artículo 123: “El girador responde (siempre) por la aceptación y el pago. Toda cláusula liberatoria de dicha responsabilidad se considera no puesta”. En la práctica, el girador no responde por nada porque no hay un tomador distinto frente al que tuviere aquél que responder. El tomador es el mismo girador. El único que responde es el girado cuando acepta la Letra de Cambio.
25. Uno de los más significativos cambios producidos en la filosofía de la Ley 27287 se expresa en el art. 119.2 el cual precisa que los requisitos formales de la Letra de Cambio

pueden constar en el orden, lugar, forma, modo y/o recuadros especiales que libremente determine el girador o, en su caso, los obligados que intervengan. Esto cambia la fisonomía y la lectura que deberán dar los magistrados a los títulos valores en general y a la Letra de Cambio en particular: formalidad, sí; pero no extrema rigidez ni formalismo a ultranza, peor un, en desmedro de la racionalidad.

26. Promulgada la Ley 27287 nos reunimos algunos miembros de la Comisión Redactora con comerciantes y empresarios, en la Cámara de Comercio de Lima, para diseñar, juntos, un formato estandarizado de Letra de Cambio, para ordenarnos, para beneficio de todos. Así, aceptamos la inserción de tres recuadros que contienen información no exigida por la Ley: (1) Número (de la Letra de Cambio). La Ley no lo precisa, pero los comerciantes lo utilizan, y con cierta frecuencia. Es más, el adquirente o consumidor se lo solicita, porque quiere estar atento para saber que ya está pagando la 2/12, o la 5/12, o la 11/12, es decir, que al principio, recién paga la segunda de largas doce; pero después ya está en la quinta de doce y al final, ya está en once de doce. (2) Referencia del Girador. El adquirente quiere saber, y también el vendedor, si esa letra que cancela o que deja de pagar o cobrar corresponde al código 01 (seguida del número de la factura, boleta o guía) que puede ser ferretería; o al código 02, que puede ser materiales de construcción; o al código 03 que puede ser mayólicas y sanitarios. Adviértase que por su naturaleza, la Letra de Cambio es abstracta, es decir, no expresa la causa o motivo de la obligación causal; sin embargo, se aceptó tal indicación como mera referencia que corresponde a usos y costumbres frecuentes en el ámbito mercantil. (3) El D.C., o Dígito de Control, que es el número o código de cada Banco, para que las computadores o sistemas electrónicos de los bancos los lean con mayor facilidad; para la parte operativa o agrupación de Letras de Cambio que vayan con cargo o débito en cuenta bancaria.
27. La Ley, ahora, permite que en el caso de Letras de Cambio giradas a la orden del mismo girador, el nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago,

pueda sustituirse por la cláusula de “mi mismo” u otra equivalente. Esto estaba proscrito por la Ley 16587 y la jurisprudencia uniforme se había pronunciado por la imposibilidad de sustituirla con expresiones “mi mismo”, “nosotros mismos” o equivalentes. En efecto, el inc. 4 del art. 61 de la Ley 16587 indicaba que en la Letra de Cambio debía anotarse el nombre de la persona a quien o a la orden de quien debía hacerse el pago. Con este texto y sin norma permisiva que posibilitara la sustitución, era imposible que por vía jurisprudencial ello fuere autorizada, máxime si se tenía el esquema de “formalidades sacramentales y rigurosas en los títulos valores”. Era pronunciarse contra norma expresa de la ley. Ahora pues, hay un cambio.

28. En cuanto a las formas de vencimiento de la Letra de Cambio, se ha realizado una modificación interesante: en vez de denominar “a cierto plazo desde la vista” ahora se llama “a cierto plazo desde la aceptación”. El comerciante o ciudadano medio de nuestra patria para nada entendía ni entiende el “a cierto plazo desde la vista” y no sabía que en dicha forma de vencimiento debía anotar la fecha de la “vista” para, a partir de allí, hacer el cómputo o cálculo para arribar a la fecha de vencimiento, propiamente dicha. Ahora hay mas claridad; “a cierto plazo desde la aceptación”. Tengo que anotar entonces, debajo de mi firma de aceptación, la fecha en que ocurre este acto, para poder hacer el cómputo pertinente, pues sino, no habrá modo de saber cuando vencerá la Letra de Cambio. Esta fecha de aceptación puede ser incluida por el mismo aceptante o por el tenedor, pero antes de la presentación de la Letra de Cambio al protesto, o al juzgado, pues de otro modo la inserción sería ineficaz por extemporánea. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 121.1 c), 134.1 y 142.2 para que la Letra de Cambio a cierto plazo desde la aceptación sea exigible, debe ser presentada al girado para su aceptación, dentro del plazo de un año desde que fue girada, y en este caso, la aceptación sin fecha se considera otorgada el último día del plazo para presentarla a la aceptación. La jurisprudencia ha castigado severamente las aceptaciones sin fecha en los casos de vencimientos “a cierto plazo desde la vista” (antes), y “a cierto plazo desde la aceptación” (ahora).

29. De conformidad con lo previsto en el art. 121.4 la indicación de la fecha del vencimiento puede contar ya sea en recuadros y en forma completa o abreviada. Incluso, la indicación de cláusulas como “a la fecha antes indicada”, “al vencimiento” u otras equivalentes, que se limiten a reiterar la fecha de vencimiento consignada en el título valor, no la invalida.
30. De acuerdo al art. 141.1., 141.2., y 141.3 la Letra de Cambio a la vista vence el día de su presentación al girado para su pago y antes de su presentación a este efecto, puede o no estar aceptada. De modo tal que ahora, una cosa es la presentación para la aceptación y otra, la presentación para el pago. Si no cuenta con aceptación, la aceptación y el pago se harán simultáneamente, pero también puede exigirse su aceptación antes de su presentación para el pago. De no estar aceptada, en su caso, procederá su protesto por falta de aceptación total o parcial, salvo que por ley especial no sea necesaria su aceptación. En efecto, el art. 228 de la Ley 26702, Ley de Bancos, posibilita el protesto por falta de pago de Letras de Cambio no aceptadas giradas como consecuencia de sobregiros en cuenta corriente no cubiertos, a pesar del envío de carta notarial con quince días de antelación, comunicación ésta, cuya indicación de saldo deudor no ha sido debidamente “observado” por el cliente.
31. La hipótesis prevista en el art. 147.2 es remota, y lo es, porque alude a la hipótesis de Letra de Cambio con intervención de tres sujetos, personas distintas. En efecto, informa que el protesto por falta de aceptación total dispensa de la presentación para el pago (obvio, si no ha aceptado, menos irá a pagar) y del protesto por falta de pago, asumiendo el girador la calidad de obligado principal (en realidad, nunca perdió dicha calidad: el art. 123, norma imperativa, así lo ordena) contra quien y demás obligados procede ejercitar la acción cambiaria derivada de la letra de Cambio por el solo mérito del protesto por falta de aceptación.

32. Un aspecto que ha sido destacado por los procesalistas, en esta ley 27287, es el relativo al pago parcial en la Letra de Cambio, en cuanto a que, quien lo realiza, por ejemplo, un avalista, tiene derecho a solicitar una constancia de ello, en cuyo mérito podrá, quien hizo tal pago parcial, ejercitar las acciones cambiarias que le correspondan, toda vez que la copia (legalizada) certificada notarial o judicial de la Letra de Cambio con la constancia precitada, tiene mérito ejecutivo. Ver sobre el particular los arts. 65.4 y 148.3.
33. Encontremos un error, dentro de los varios que indudablemente hay, pues desde este trabajo reclamo una Ley de Ajustes a la 27287 a tres años de su vigencia (La Ley 27287 entró en vigencia el 17 de Octubre del 2000; fue promulgada y publicada el 19 de Junio del 2000 y debía entrar en vigencia a los 120 días desde la publicación). En efecto, se trata de los art. 91.2 y 154.2 respecto a los requisitos para ejercitar las acciones cambiarias en la Letra de Cambio. En efecto, si la Letra de Cambio estuviere sujeta a protesto y éste no se verifica dentro del término, tal situación puede subsanarse si el tenedor logra obtener, en forma expresa o ficta, el reconocimiento judicial en su contenido y firma. Estoy absolutamente conforme con la ejecutoria de la Corte Suprema inserta en este trabajo, pronunciada con anterioridad a la vigencia de esta ley 27287, en el sentido de que es suficiente el reconocimiento de firma. Ahora, no es infrecuente que los comerciante y ciudadanos de nuestro país acudan a los Juzgados a reconocer sus firmas, mas no el contenido de los títulos valores, con lo cual traban la ejecución de la Letra de Cambio, vía la acción cambiaria. Habrá que corregir este extremo, aunque dicho sea de paso, esto se viene resolviendo con la cláusula “esta Letra de Cambio no requiere ser protestada por falta de pago en el caso de incumplimiento oportuno de la obligación que ella incorpora”.
34. Finalmente, en cuanto al uso de la Letra de Cambio por parte del sector informal de nuestra economía, no podemos afirmar que con ella se representen las obligaciones dinerarias de unos, los deudores-acceptantes, respecto a otros, los giradores-tomadores y endosatarios posteriores o tenedores finales, por cuanto de la obra consultada se advierte que, en

general, ellos permanecen al margen del sistema jurídico imperante. Ahora bien, hay un segmento de comerciantes que concurre a la aceptación y endoso de letras de cambio, pero definitivamente es minoritario. En su mayoría, ellos han creado su propio derecho, el Derecho de los informales y se rigen por sus normas consuetudinarias, tanto en materia contractual, empresarial, como de responsabilidad extracontractual. El problema no sólo es de la ineptitud del Derecho Común para articular nuevos mecanismos que se tornen compatibles con la nueva realidad, aceptando el sistema legal al sector informal de la economía, sino tiene que ver, sin duda y también, con problemas étnicos, culturales, sociales e históricos-políticos.

BIBLIOGRAFÍA

ALMOGUERA GOMEZ, Angel. La Titulización Crediticia (Un estudio interdisciplinario). Editorial Civitas S.A., Madrid, 1995, 616 Páginas.

AMBROSINI VALDEZ, David Antonio. Introducción a la Banca. Universidad del Pacífico, Biblioteca Universitaria, Lima, 1992, 455 Páginas.

AÑOVEROS TRIAS DE BES, Xavier. El aval cambiario. Estudios de Derecho Mercantil. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1990, 142 Páginas.

ARAYA, Celestino R. Títulos Circulatorios. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, 398 Páginas.

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis. Tomos II, IV

ARTEAGA ELGUEDAS, Walter. Las letras hipotecarias. Universidad de San Martín de Porres – Facultad de Derecho, Lima, 1994, 55 Páginas.

ASTUDILLO URSUA, Pedro. Los títulos de crédito. Parte general. Tercera edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1992, 270 Páginas.

AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. La prenda civil. En: Derechos Reales. Materiales de enseñanza para el estudio del Libro V del Código Civil en la Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda edición corregida y aumentada, Lima, 1990.

BACCARO CASTAÑEIRA, Pablo E. Títulos de Crédito. Letra de cambio – Pagaré – Factura Conformada. Mera ediciones, Tucumán, 1980, 343 Páginas.

BARBIERI, Pablo C. Manual de Títulos Circulatorios. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, 361 Páginas.

BARBIERI, Pablo C. Factura de Crédito: Reforma a la Ley de Cheques. Ley 24.760. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, 169 Páginas.

BASURTO A., Rolando. Manual del funcionario de crédito. Muruhuay, Lima, 1982, 372 Páginas.

BAZAN, Ana Carolina y BENITEZ, María Elena. Ejecutorias Civil, Procesal Civil, Comercial, Constitucional. Tomo 5, Cultural Cuzco S.A., Editores, Lima, 1997, 525 Páginas.

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Derecho Comercial y Reestructuración Empresarial. Editorial Alternativa, Lima, 1994, 527 Páginas.

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios a la Ley General de Sociedades. Segunda edición, Gaceta Jurídica, 2000.

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios al Reglamento del Registro de Sociedades. Gaceta Jurídica, 2001. 517 páginas.

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y CASTELLARES AGUILAR, Rolando. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. Segunda Edición actualizada. Gaceta Jurídica. 2002. 926 páginas.

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo y PALMA NAVEA, José Enrique. Comentarios a la Nueva Ley General del Sistema Concursal. Gaceta Jurídica. 2003. 734 páginas.

BERGEL, Salvador y otros. Acciones y excepciones cambiarias. Tomos I y II, Editorial De-palma, Buenos Aires, 1992.

BERGEL, Salvador D. Factura de crédito. Editorial Rubinzal, Buenos Aires, 1997, 442 Páginas.

BONFANTI, Mario Alberto y otro. De los Títulos de crédito. Segunda edición, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1990, 934 Páginas.

BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales. Tomo II, Cuarta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, Página 397.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979.

CASTAÑEDA, Jorge. El problema de la no reivindicabilidad del poseedor de buena fe en los títulos valores o títulos de crédito. En: Revista de jurisprudencia peruana, N° 227, Lima, 1962, Páginas 1425 a 1438.

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Cualquier acreedor cambiario puede testar los endosos en los títulos valores. En: Revista del Foro, N° 2, Lima, 1981, Páginas 51 a 56.

COLMO, Alfredo. De las obligaciones en general. Tercera edición, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1944.

DE LA FLOR MATOS, Manuel. Fideicomiso. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999.

DE SOTO, HERNANDO. El Otro Sendero. La Revolución Informal. Editorial El Barranco. Noviembre 1986. 317 páginas.

DE SOTO, Hernando. El Misterio del Capital. Empresa Editora El Comercio S.A. Noviembre 2000. 287 páginas

ESCUTI, Ignacio A. Títulos de Crédito. Tercera edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, 448 Páginas.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Driskill S.A., Buenos Aires, 1986.

FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Temas de Derecho Financiero, Bancario y Bursátil. Editorial San Marcos, Lima, 1998, 306 Páginas.

FLORES POLO, Pedro. Estudio Jurídico de la Ley de Títulos-Valores. Segunda edición, Justo Valenzuela Ediciones, Lima, 1988, 403 Páginas.

FLORES POLO, Pedro. El Protesto, las Cámaras de Comercio y el Anteproyecto de la Nueva Ley de Títulos Valores. Estudios sobre Títulos Valores, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1999, Página 32.

FREYRE VILLAVICENCIO, Herbert. Manual de la letra de cambio. SESATOR, Lima, 1979, 343 Páginas.

GOMEZ LEO, Osvaldo R. Manual de Derecho Cambiario. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, 572 Páginas.

GUILLIEN, Raymond y VINCENT, Jean. Diccionario Jurídico. Editorial Temis S.A., Bogotá, 1986, 420 Páginas.

HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Derecho de Obligaciones. Tomo III, Espasa Calpe, Madrid, 1988.

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. El embargo y otras Medidas Cautelares. Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 1998.

HOLDEN, Milnes J. Banker and customer. Law and Practice of banking. Second edition, London: Pitman.

INSTITUTE OF BANKERS. Questions on banking practice. London, GB, 1978, 349 Páginas.

INTAL. Proyecto de Ley Uniforme de Títulos Valores para América Latina. Buenos Aires, INTAL, 1967.

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ejecutorias Supremas en Derecho Mercantil. 1990-1995. Cultural Cuzco S.A., Editores, Lima, 1996, 310 Páginas.

LEON, Fernando A. Letra de cambio y Pagaré. Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1989, 430 Páginas.

LIBRO HOMENAJE AL MAESTRO ULISES MONTTOYA MANFREDI. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima, 1989. 770 páginas.

MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. La letra de cambio en la nueva ley peruana (Estudio de Derecho Comparado). Editorial Universo, Lima, 1968, 242 Páginas.

McLOUGHLIM, James LI M. Introduction to negotiable instruments. London: Butterworths, 1975, 202 Páginas.

MONTOYA MANFREDI, Ulises. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. Cuarta edición, corregida y aumentada, Editorial Desarrollo S.A., Lima, 1987, 535 Páginas.

MONTOYA MANFREDI, Ulises. Derecho Comercial. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. Novena edición aumentada y actualizada por Ulises Montoya Alberti y Humberto Montoya Alberti, Tomo II, Editorial GRIJLEY, Lima, 1998, 616 Páginas.

MUÑOZ, Luis. Títulos valores crediticios: letra de cambio, pagaré y cheques. TEA Editores, Buenos Aires, 1973, 834 Páginas.

OSORIO RUIZ, Zaida. Jurisprudencia Comercial. Gaceta Jurídica, Lima, 2000, 526 Páginas.

OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones. Primera, Segunda y Tercera Parte. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Biblioteca Para leer el Código Civil, Lima, 1994-1999.

PAOLANTONIO, Martín E. Títulos Negociables. Derecho Cambiario. Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 1996, 148 Páginas.

PAVONE LA ROSA, Antonio. La Letra de cambio. Traducción y referencia de Osvaldo J. Mafia, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1988, 791 Páginas.

PEÑA CASTRILLON, Gilberto. La letra de cambio, teoría y práctica en América Latina. Biblioteca Felaban-Intal, Gráfica Fepar, Bogotá 1977, 243 Páginas.

PEÑA NOSSA, Lisandro. Curso de Títulos Valores. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1992, 358 Páginas.

PEREZ FONTANA, Sagunto F. Títulos-Valores: Obligaciones Cartulares. Cultural Cuzco, Lima, 1990, 219 Páginas.

PEREZ VIVES, Alvaro. Garantías Civiles (Hipoteca, Prenda, Fianza). Editorial Temis, Bogotá, 1984.

PIMENTEL BENITES, Elio. Acciones judiciales derivadas de títulos valores. Volúmenes I y II, Marsol Editores, Trujillo, 1986.

PINO CARPIO, Remigio. Ley de Títulos Valores. Segunda edición, Cultural Cuzco S.A., Lima, 1984, 415 Páginas.

POSSE ARBOLEDA, León. Notas sobre títulos valores en el nuevo Código de Comercio. Tercera edición, Editorial Temis, Bogotá, 1980, 358 Páginas.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Derecho Comercial. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, México, Editorial Porrúa, 1994.

REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Exposición de Motivos y Comentarios al Código Civil Peruano de 1984. Tomo VI, OKURA Editores, Lima, 1985, Página 776.

RUBIO CORREA, Marcial. La extinción de acciones y derechos en el Código Civil. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Biblioteca Para leer el Código Civil, Lima, 1989.

SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. Derecho Procesal Civil. Tomo IV, Tercera edición, Colección de Derecho Procesal Peruano, Lima, Editorial San Marcos, 1987, 208 Páginas.

SOLIS ESPINOZA, Jorge Alfredo. Temas sobre Derecho Cartular. Títulos Valores. Doctrina y Legislación. IDEMSA, Arequipa, 1995, 319 Páginas.

TRUJILLO CALLE, Bernardo. Las Facturas Cambiarias. En: Revista Estudios de Derecho, N° 83, Antioquia, 1973, Páginas 93 a 99.

TRUJILLO CALLE, Bernardo. De Los Títulos Valores. Octava edición, Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, 1996.

URIA, Rodrigo. *Derecho Mercantil*. Editoras Jurídicas Marcial Pons. Décimo segunda edición, Madrid, 1995.

VIDAL RAMÍREZ, Fernando. *La Bolsa de Valores, Un ensayo de Derecho Bursátil*. Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima, 1988, 494 Páginas.

WAYAR, Ernesto Clemente. *El pago por consignación*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983.

WAYAR, Ernesto Clemente. *Derecho Civil. Obligaciones*, Tomo I. Depalma ediciones, Buenos Aires, 1990.

ZEGARRA GUZMÁN, Oscar. *Manual de Acciones Cambiarias*. Publicación de la Universidad de Lima, 1992, 132 Páginas.